



Romané Valeska Landaeta Sepúlveda

La represión política en Chile 1974-1977.

Un estudio sobre la memoria histórica del horror.

**Tesis doctoral dirigida por el Doctor Pedro Martínez Lillo
Doctorado de Historia Contemporánea
Universidad Autónoma de Madrid
2012**

*A María Elena y Miguel,
Mis queridos padres*

INDICE

	Página
Relación de abreviaturas.....	1
Introducción.....	3
I.- Historia del Tiempo presente, un estado de la cuestión.....	18
1.1- Historia, memoria y olvido.....	34
1.2.- Usos y tipologías de la memoria.....	47
1.3.- La Historia del Tiempo presente en América Latina: El caso de Chile.....	74
1.4.- Fuentes para el estudio de la represión en la Historia del Tiempo Presente.....	94
1.4.1.- Los archivos en las transiciones a las democracias.....	99
II.- Transiciones políticas a la democracia. Análisis en perspectiva histórica.....	113
2.1.- El caso de España, un espejo para América Latina.....	128
2.2.- Transiciones políticas y las Comisiones de Verdad en América Latina.....	143
III.- El difícil camino hacia la democracia en Chile: Debates, reflexiones y políticas de la memoria.....	153
3.1.- Fuentes para investigar las violaciones de derechos humanos en Chile.....	164
3.2.- La aceleración del proceso: El período de la agitación nacional...	190
3.3.- Los debates sobre la transición política en Chile	222
3.4.- Los gobiernos de la transición en Chile y las políticas de la memoria.....	232
3.5.- Patricio Aylwin Azócar: “Justicia en la medida de lo posible”.....	236
3.5.1.- Principales reacciones frente al Informe Nacional de Verdad y Reconciliación.....	251
3.6.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Chile tiene una oportunidad histórica”...	258

3.7.- Ricardo Lagos Escobar: “El destino ha querido que sea el primer presidente del siglo XXI”.....	270
3.7.1.- Reacciones frente al Informe Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.....	278
IV.- Fuentes para el estudio de la memoria histórica del horror en Chile.....	289
4.1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación.....	289
4.1.1.- Metodología de trabajo utilizada por la CNVR.....	300
4.2.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.....	352
4.2.2.- Metodología y fuentes que utilizó la Comisión Valech....	357
4.2.3.- Conceptualización sobre la tortura y reclusión política.....	364
4.2.4.- Características de la tortura y prisión política durante la dictadura militar en Chile.....	378
4.3.- Resultados entregados por las Comisiones Rettig y Valech.....	403
V.- Recintos secretos de detención, tortura y muerte en Santiago.....	414
5.1.- Aproximaciones a la práctica de la Tortura.....	416
5.2.- Los recintos secretos de detención en Santiago	446
5.2.1.- Londres N° 38.....	455
5.2.2.- La Venda Sexy.....	470
5.2.3.- José Domingo Cañas N° 1367.....	476
5.2.4.- Villa Grimaldi.....	482
5.3.- Las huellas de la tortura.....	492
Conclusiones.....	495
Fuentes y bibliografía.....	502
Anexos.....	538

Relación de abreviaturas

AI	: Amnistía Internacional
AFDD	: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
AGA	: Academia de Guerra Aérea.
AHILA	: Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos.
APRODEH	: Asociación Pro Derechos Humanos
BIM	: Brigada de Inteligencia Militar.
BIR	: Brigada de Inteligencia Regional.
BOE	: Boletín Oficial del Estado.
CAS	: Comando Antisubversivo.
CC	: Comando Conjunto.
CCDDHH	: Comisión Chilena de Derechos Humanos.
IC	: Izquierda Cristiana.
CEAS	: Comisión Episcopal de Acción Social
CEH	: Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
CEL	: Comité por las Elecciones Libres.
CEP	: Centro de Estudios Públicos.
CERMA	: <i>Centre de Recherches des Mondes Américains</i>
CIDH	: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CINTRAS	: Centro de Salud Mental y Derechos Humanos.
CNDH	: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
CNI	: Central Nacional de Informaciones.
CLACSO	: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CNPYPT	: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
CNRR	: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
CNVR	: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
CSN	: Consejo de Seguridad Nacional.
CVR	: Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú
CODEPU	: Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo.
CONADEP	: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
COPACHI	: Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
COVEMA	: Comando de Vengadores de Mártires.
CTC	: Confederación de Trabajadores del Cobre.
DC	: Democracia Cristiana.
DICAR	: Dirección de Inteligencia de Carabineros.
DICOEX	: Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior.
DICOMCAR	: Dirección de Comunicaciones de Carabineros
DD	: Detenido desaparecido.
DIFA	: Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
DIM	: División de Inteligencia Metropolitana.
DINA	: Dirección de Inteligencia Militar
DINE	: Dirección de Inteligencia del Ejército.
DIRE	: División de Inteligencia Regional.
DOPS	: Departamento da Orden Política e Social
FF. AA.	: Fuerzas Armadas.
FACH	: Fuerza Aérea de Chile.
FASIC	: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
FLACSO	: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
FTR	: Frente de Trabajadores Revolucionarios.
HaD	: Historia a Debate

FER	: Frente de Estudiantes Revolucionarios.
ILAS	: Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos.
IHTP	: Instituto de Historia del Tiempo Presente.
JJCC	: Juventudes Comunistas
MAPU	: Movimiento de Acción Popular Unitaria
MDP	: Movimiento Democrático Popular.
MIR	: Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
NN	: Sin nombre.
OIT	: Organización Internacional del Trabajo.
ONU	: Organización de Naciones Unidas
PIDEE	: Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia.
PPD	: Partido por la Democracia.
PR	: Partido Radical.
PRAIS	: Programa de Reparación y Atención Integral de Salud.
PROMESI	: Corporación de Protección, Orientación y Rehabilitación del Menor.
PCCH	: Partido Comunista de Chile.
PDC	: Partido Demócrata Cristiano.
PPD	: Partido Por la Democracia.
PRODEN	: Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional.
PSCH	: Partido Socialista de Chile.
SENAME	: Servicio Nacional del Menor.
SICAR	: Servicio de Inteligencia de Carabineros.
SIDE	: Secretaría de Inteligencia del Estado.
SIFA	: Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile.
SIN	: Servicio de Inteligencia Naval
SIRE	: Servicio de Inteligencia Regional.
TRICEL	: Tribunal Calificador de Elecciones.
UAH	: Universidad Alberto Hurtado.
UAM	: Universidad Autónoma de Madrid.
UCA	: Universidad de Cádiz.
UCM	: Universidad Complutense de Madrid.
UDI	: Unión Democrática Independiente.
UDP	: Universidad Diego Portales.
UFT	: Universidad Finis Terrae.
UAH	: Universidad Alberto Hurtado.
UMCE	: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
UP	: Unidad Popular.
URNG	: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Introducción

Esta investigación se inscribe en el análisis de sociedades que han experimentado situaciones traumáticas, debido a la violencia ejercida por el Estado, donde se han cometido violaciones de derechos humanos. Estas problemáticas las situamos en la segunda mitad del siglo XX en América Latina en general, centrándonos en el caso de Chile de forma particular. El marco temporal se sitúa en el período de la dictadura militar, que se instaura a partir del golpe de Estado en Chile que encabezó el general Pinochet el 11 de septiembre de 1973, cuyo objetivo fue derrocar el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973), instaurando una dictadura militar que se extendió hasta el 11 de marzo de 1990, cuando asumió como presidente, elegido democráticamente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994). Precizando nuestro análisis entre 1974 y 1977, años de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA)¹, principal organismo coercitivo del régimen, y que de acuerdo a los datos entregados por la *Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (1990), y la *Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura* (2004), se implementó un tipo de represión que se caracterizó por la selección de las víctimas, los métodos de tortura y la implementación en todo el país de recintos secretos de detención.

Los soportes teóricos sobre los que se sustenta esta investigación están dados por tres ejes bien definidos, cuyo análisis transversal permite examinar las problemáticas que al igual que en el resto de América Latina, es posible advertir en el caso de Chile. El primero de ellos, está relacionado con el análisis de la historia del tiempo presente, y que a través de la memoria histórica como

¹ El *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, señala que este organismo creado mediante el Decreto Ley nº 521, que Crea la Dirección de Inteligencia Nacional, del 14 de junio de 1974. Diario Oficial del 18 de junio de 1974. Sin embargo, advierte que sus comienzos se remontan a noviembre de 1973, e incluso a una fecha anterior. En 1977 esta organización fue disuelta a través del Decreto Ley nº 1.876, deroga Decreto Ley nº 574 de 1974, que creó la Dirección de Inteligencia Militar, del 12 de agosto de 1977. Diario Oficial del 13 de agosto de 1977. Y a través del Decreto Ley nº 1.878 crea la Central Nacional de Informaciones, del 12 de agosto de 1977. Diario Oficial del 13 de agosto de 1977. Conocida por sus iniciales, la CNI fue disuelta mediante el Decreto Ley nº 18.943, que disuelve organismo que indica, Ministerio de Defensa Nacional, del 13 de febrero de 1990. Diario Oficial del 22 de febrero de 1990. Véase en anexo nº 1, documento de creación de la DINA.

fueron, permite acceder al examen del pasado del que somos coetáneos, apreciando las diversas formas y narraciones que adquiere en la región. Un segundo eje, viene dado por el análisis de las transiciones políticas a escala general donde es posible examinar los procesos de toma de decisiones en el actual sistema globalizado, y en el que se aprecian los mecanismos que adoptaron los diferentes gobiernos de la transición en Chile, para promover y mantener los equilibrios los ámbitos políticos y sociales heredados de la sistemática violación de derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Y un tercer eje, es el que está relacionado con el examen de la represión política que se aplicó en Chile a través del análisis de los testimonios que se publicaron en los Informes de verdad que se elaboraron una vez retornada la democracia, ingresando por tanto, al tema de los derechos humanos, que abarca un gran campo de reflexión, y que es fundamental en la implementación y profundización de los procesos de democratización en las diversas regiones del mundo, y donde América Latina no ha estado ajena. Estos ejes como veremos en los capítulos de esta investigación, no son lineales, sino que se interceptan permitiendo realizar un análisis transversal de sociedades de postdictadura, prestando especial atención al caso de Chile, donde como otras, debió adoptar diferentes mecanismos para intentar resolver las problemáticas asociadas a su pasado represivo.

La justificación que sustenta esta investigación, está orientada por el interés de realizar un análisis que desde la historia del tiempo presente permitiera ir de lo general a lo particular, para ello, analizamos por un lado, las posibilidades de reflexión que ofrece esta perspectiva de análisis, identificando sus tensiones y debates. Por otro, examinamos la transición política chilena, que como otras, ha debido enfrentar un tema difícil y complejo de abordar, y que está relacionado con las herencias dejadas por la dictadura militar que fracturó a una sociedad completa. Es dentro de este proceso político en que indagamos sobre cómo se elabora la narración respecto a la situación de violencia y terror que se instaló en Chile durante los diecisiete años de dictadura, y que permitió que se realizaran las más graves violaciones a los derechos humanos, y que fueron cometidas en todo el territorio nacional.

El punto de partida del problema de investigación, está relacionado con aquellas sociedades que tuvieron experiencias traumáticas producto de la implantación de dictaduras militares a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que se extendieron en diferentes regiones, entre ellas, en gran parte de América Latina, enmarcados en el contexto internacional de guerra fría. Sin embargo, y luego de experimentar la violencia de Estado, las sociedades de postdictadura, a través de sus gobiernos transicionales, debieron afrontar y responder ante las herencias dejadas por aquellas dictaduras, y que tuvieron como característica central, la masiva violación de derechos humanos. Por tanto, una de las tareas prioritarias de los gobiernos democráticos, fue el restablecimiento de la democracia y sus instituciones generando las condiciones para la existencia de un real Estado de derecho, implementando a su vez una red político-estatal que promoviera el respeto absoluto de los derechos humanos. Este tema adquiere gran relevancia en las dinámicas sociales del tiempo presente que se suscitan, donde los aspectos históricos, antropológicos, culturales e internacionales, condicionan y determinan las formas en que las sociedades a través de sus diferentes políticas y gobiernos han resuelto estos temas.

En consecuencia, nuestro interés está orientado en indagar sobre las formas en que la sociedad chilena ha enfrentado ese legado represivo, a través de la narración y elaboración por parte del conjunto de la sociedad de este pasado traumático. Para ello tomamos como eje de análisis la perspectiva que ofrece la Historia del Tiempo Presente, ya que a través de su enfoque metodológico, así como de las reflexiones y debates que propone, permite examinar un pasado del que somos coetáneos, observando dentro de la región Latinoamericana cómo sus sociedades elaboran una narración de las de las dictaduras militares, fijando nuestra atención en el caso de Chile. Este aspecto, las preocupaciones de esta investigación están centradas en el análisis sobre la forma que gran parte de esta sociedad civil ha elaborado una memoria histórica sobre ese complicado pasado. Para ello, indagamos en los testimonios de víctimas, familiares y amigos, que se publicaron tanto en el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (1990), como en

el *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura* (2004), en donde por primera vez y manera oficial, el Estado de Chile hizo un público reconocimiento a las diversas formas en que durante la dictadura militar fueron violados los derechos humanos en Chile, constituyéndose en una fuente de gran importancia para el análisis de la Historia del Tiempo Presente en este país. Por tanto, el interés de esta investigación se centra en indagar cómo en estos Informes se describe, nombra y visibiliza la represión que experimentó la sociedad chilena durante el período de la dictadura militar, específicamente a través de los recintos clandestinos de detención, que se instalaron en todo el país, prestando especial atención en aquellos que se localizaron en Santiago, y que ambas Comisiones denominaron como «emblemáticos». Estos recintos fueron: la casa de calle Londres nº 38, Villa Grimaldi, la casa de calle José Domingo Cañas nº 1367, y la casa de calle Irán nº 3037. Según los Informes señalados, estos recintos de detención presentaron características similares, en cuanto al tipo de víctima y métodos de tortura, así como también que todos se localizaron en la ciudad de Santiago, cerca del Palacio de Gobierno, y en barrios residenciales, y todos estaban todos dependían de una fracción de inteligencia específica de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, conocida como la Brigada de Inteligencia Metropolitana BIM.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, subrayó que entre 1973 y 1990, existieron en todo el territorio nacional lugares de detención «públicos» y «secretos». Sin embargo, no entregó un número específico de ellos, debido a que su objetivo fue el de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, entendiéndolas como aquellas “situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio”². El Informe recopiló cientos de antecedentes de víctimas, gracias al testimonio de familiares y amigos de las víctimas. A su vez, la Comisión de Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), reunió valiosa

²Chile, Decreto Supremo nº 355, que Crea la Comisión de Verdad y Reconciliación y otorga otros beneficios a favor de personas que señala, Ministerio del Interior, del 31 de enero de 1992. Diario Oficial del 08 de febrero de 1992.

información proveniente de diferentes medios de comunicación, así como también generó una inestimable matriz de información con datos extraídos de instituciones públicas, en las que se recuperaron actas de nacimiento y defunción de las víctimas, registros de ingreso en hospitales, centros policiales, tanatorios, cementerios, y todos aquellos lugares que dieran alguna pista sobre las personas que habían sido detenidas, y que hasta se momento se encontraban desaparecidas, o bien, que permitieran constatar de manera fehaciente, las causas de su muerte.

En el caso de la *Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (CNVR), en los escasos seis meses de funcionamiento, recopiló abundante información que permitió reconocer a más de 2.000 personas como víctimas de violaciones de derechos humanos³, así como también identificar los recintos de detención que existieron en el país, informando sobre el período de funcionamiento y sus características generales. Sin embargo, fue en el 2004 cuando se creó la *Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura* (CNPPYT), que como su antecesora contó un período similar para desarrollar su investigación, tiempo en el que logró visibilizar con mayor detalle los recintos de detención que se instalaron en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esto fue posible debido a que su objetivo fue determinar, “quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio”⁴, visibilizando que tanto la prisión política como la tortura, se constituyeron una práctica institucional en todo el país. En este contexto, la Comisión señaló que existieron alrededor de 1.132 recintos utilizados como lugares de detención en las trece regiones del país, singularizando “802 recintos, como aquellos que registraban un mayor número de detenidos o un uso más prolongado en el

³ La *Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, estableció la recepción de 3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como casos calificados. Véase Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, tomo1, Santiago, Reedición, 1996 (1ª ed. 1991), p.27.

⁴ Chile, Decreto Supremo nº 1.040, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la Verdad acerca de las violaciones de Derechos Humanos en Chile, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, 26 de septiembre de 2003. Véase en anexo

tiempo”⁵. Además informó la recepción de 35.865 testimonios de personas residentes en Chile y el extranjero. De ellas alrededor de 28 mil fueron aceptados como válidos y 7 mil no cumplieron los requisitos para ser aceptados por la Comisión, sin embargo, tuvieron la posibilidad de que su situación fuera reconsiderada por la Comisión⁶.

Nuestro propósito es examinar desde la histórica, las complejidades a las que asisten las sociedades de postdictadura, centrando nuestro análisis en el caso de Chile, debido entre otros, a las características de su proceso transicional, entre las que sobresale, la activa presencia del General Augusto Pinochet Ugarte, durante los primeros gobiernos de la transición política, y que fue efectiva hasta su detención en Londres en 1998. Otro elemento que identifica este proceso político, está relacionado con el gran esfuerzo que significó la implementación de comisiones de verdad, que permitió el reconocimiento oficial tanto de las víctimas, como de los métodos y lugares utilizados en la implementación de la violencia de Estado.

En consecuencia, es a través de los testimonios contenidos en ambos Informes, que podemos acceder al estudio de la experiencia vivida por las víctimas y sobrevivientes en su paso por los centros de detención, tortura y en muchos casos de muerte, ingresando a una dimensión mayor del análisis, esto es, a la narración que realizaron no sólo las víctimas, sino también los familiares y amigos, respecto de la práctica de reclusión experimentada durante los años de la dictadura militar. Es aquí donde tanto el *Informe Rettig* como el *Informe Valech* se tornan fundamentales, ya que ambos informes, respaldado por el Estado de Chile, el mismo que bajo la dirección de la Junta militar violó de forma sistemática los derechos humanos, una vez retornada la democracia, permitió conocer la magnitud de la violencia ejercida y los padecimientos de las víctimas y sobrevivientes, accediendo no sólo al conocimiento de los archivos

⁵ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Síntesis del Informe, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*, op. cit., p. 14.

⁶ Lagos Escobar, Mensaje presidencial, *Nunca más vivirlo, nunca más negarlo*, Santiago, *La Nación*, 28 de noviembre de 2004. Disponible en, <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041128/pags/20041128210542.html>. [Consultado en noviembre de 2011].

del mal⁷, sino también a la dimensión de lo que significó el sufrimiento que experimentaron cientos de personas. Por tanto, nuestro problema de estudio es analizar la memoria histórica que se construye durante los gobiernos de la transición política de Chile, donde la visibilización de las víctimas por parte del Estado, es fundamental para conocer ese pasado, ya que a través de sus testimonios, es posible identificar los recintos de detención y tortura, dentro de los que se encuentran los que son materia de esta investigación, nos referimos a Londres nº 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas nº1367, y la casa de calle Irán nº 3067.

En definitiva, esta investigación plantea tres grandes desafíos. Por un lado, intenta constatar las diversas formas en que es posible historizar el pasado reciente de una sociedad que tiene altas cotas de complejidad, de otro, analizar los mecanismos a través de los cuales los gobiernos democráticos hicieron frente a los legados del pasado represivo, y por último, examinar la memoria histórica que la sociedad chilena logró elaborar sobre su pasado represivo. Estas cuestiones permiten por tanto, identificar las interpretaciones sobre un mismo hecho, esto es, la violencia política en Chile, y particularmente, aquellas que tienen relación con los centros de detención, identificando dentro de ellos, los elementos que permiten ser re-significados como lugares de memoria, examinando en último término, la heterogeneidad de los debates, tensiones, y acuerdos presentes en la sociedad chilena, en torno al uso, reappropriación y destino de los que fueron centros de tortura en Chile.

Por consiguiente, nuestra hipótesis de trabajo se sustenta fundamentalmente en el análisis de la memoria histórica que realiza la sociedad chilena, frente a estos complejos acontecimientos. Este es un ejercicio que se realiza desde el presente sobre este pasado mediato, y que adquiere la mayor importancia, ya que corresponde a una narración que proviene sobre todo de parte de las víctimas y sobrevivientes a los

⁷ Arendt, H., *Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal*, Barcelona, Lumen, 2001.

padecimientos sufridos en su experiencia de reclusión. En consecuencia, nuestra preocupación investigativa está centrada en uno de los aspectos más importantes de la dictadura militar en Chile (1973-1990), esto es, en el reconocimiento de los recintos secretos de detención y tortura, que estuvieron bajo la administración de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA.

El marco temporal en que buscamos dar respuesta a estas interrogantes, está situado entre los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), marco social y político en el que se organiza la investigación. Consideramos que es durante este período donde se realizan importantes esfuerzos por parte del Estado, para intentar dar respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Hecho que se evidencia a la luz del impacto que tuvieron los informes elaborados por ambas comisiones. Asimismo, es interesante analizar la emergencia del pasado, que emerge en la memoria del Chile Contemporáneo, y que es posible advertir en los años en que se centra esta investigación, siguiendo a Alexander Wilde, se advierte una «irrupción de memoria» durante este período transicional, debido a que ese pasado se hizo mucho más presente, debido a algunos acontecimientos que al parecer permitieron un incipiente debate dentro de la maltratada sociedad civil. Temas, y noticias antes prohibidos o bien silenciados, como aquellas referidas al descubrimiento de fosas comunes, junto a la publicación de los Informes de Verdad, respaldados por el Estado, reconocieron de forma pública las violencias cometidas por el régimen militar, así como el testimonio de cientos de personas, lo que sumado al arresto de Pinochet en Londres en 1998, permitieron observar una aceleración del procesos transicional en Chile.

En lo que respecta a la metodología, esta investigación aborda desde el punto de vista teórico, la perspectiva que ofrece la Historia del Tiempo presente, que nos permite entre otras posibilidades abordar el estudio de la memoria como fuente para el análisis histórico. Si bien, nos situamos desde la disciplina de la historia, incorporamos las contribuciones de otras áreas de conocimiento como la filosofía, la antropología, el derecho y psicología, que

han permitido adquirir una visión mucho más compleja y profunda de la sociedad en estudio, enriqueciendo con creces esta investigación, abordando las tensiones y problemáticas vinculadas a las formas en que la sociedad chilena en el período de transición política, ha hecho frente a su pasado dictatorial.

En este contexto nuestro interés está dado en visibilizar los testimonios de las víctimas, los sobrevivientes, sus familiares y amigos, todos los que en el intento de narrar tanto la difícil experiencia de reclusión, así como las infatigables búsquedas de sus seres queridos, o más aún, el hecho de haber sido testigo de la captura de sus familiares y amigos, describen, relatan y otorgan pistas sobre ese pasado detenido en un tiempo que fracturó la tradición democrática de Chile, lesionando de manera profunda la vida de miles de personas, fractura por tanto, que tiene relación con una experiencia traumática de la sociedad chilena en su conjunto. Es en este ámbito que la narración testimonial, se transforma una fuente de análisis de incalculable valor, ya que es interesante apreciar cómo a través de estas narraciones y testimonios, se retrata esta experiencia, y la forma en que son representados y significados por parte de la sociedad. Se trata por tanto de ver los testimonios dentro del contexto de la transición política chilena, sobre todo a través de aquellos que fueron publicados por los Informes de Verdad, en los que es posible advertir el relato que realizan de la experiencia de reclusión, y que en la mayoría de los casos revisados existe de forma paralela, una descripción de los lugares de detención en los que estuvieron recluidos. Es a través de los testimonios publicados fundamentalmente en los Informes señalados, donde nos acercamos a la experiencia vivida por las víctimas y sobrevivientes. En esta investigación hemos revisado 403 casos de víctimas de violación de derechos humanos, que corresponden a los cuatro recintos secretos de detención en estudio, y que han sido publicados en los Informes citados, así como en Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y organismos de derechos humanos, junto organizaciones de víctimas y sobrevivientes que estuvieron detenidos en estos recintos, y que se han realizado diferentes acciones para rescatar la memoria histórica de lugares, como el Parque por la

Paz Villa Grimaldi (ex cuartel Terranova), Londres nº 38. Espacio de Memorias (ex cuartel Yucatán), Fundación 1367. Casa de la Memoria de José Domingo Cañas (ex cuartel Ollagüe). Quedando pendiente emprendimientos de memoria que lleven a visibilizar el centro de tortura de la Venda Sexy, sobre todo, debido al tipo de tortura que se aplicó en las personas que estaban privadas de libertad, provocando la muerte registrada de una de las víctimas.

Consideramos que en la comprensión de estos pasados, la contribución de la mirada arqueológica permite obtener una perspectiva panorámica de las situaciones de detención política, al tiempo que es posible reconocer las formas en que se va delineando la arquitectura del horror vivido en Chile, cuyas capas de sedimentos a través de las que se materializaron estos padecimientos, fueron la reclusión, tortura, muerte y desaparición, los que unidos al miedo, impotencia, dolor, indefensión, frío, hambre, abyección y tristeza, por sólo mencionar algunos de ellos. En definitiva, es indudable que los problemas asociados a la narración y elaboración desde el presente de este tipo de pasados, no son fáciles, debido a las heridas psicosociales que comporta, otorgando mayor complejidad a los procesos transicionales. Desde esta óptica nuestro interés está centrado en indagar en las formas en que se elaboró durante los gobiernos de la transición política la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el pasado dictatorial. Es decir, cómo las sociedades que han experimentado situaciones traumáticas producto de las violencias de Estado - en nuestro caso, nos preguntábamos por Chile-, organizan y articulan esos pasados, constatando por tanto, que esta una de las tareas prioritarias de los gobiernos transicionales, es decir, cómo hacer frente a estos legados de violaciones de derechos humanos.

En cuanto a las fuentes utilizadas, destaca el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, y los archivos custodiados por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Igualmente, el *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*. Los dos informes fueron elaborados en un clima político complejo, el primero porque aún estaba cerca el andamiaje dictatorial, es decir, la impronta

de la dictadura estaba aún «fresca», y el segundo, ya que se confeccionó bajo los legados dejados por la dictadura militar, identificando una línea de continuidad en la investigación que realizaron ambos informes.

Hemos recopilado información del Fondo Documental del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago de Chile, en el que se consultaron diversos ficheros sobre tortura, recintos de detención y detenidos desaparecidos. Así como diferente material de prensa, entre los que destacan las revistas *Apsi*, *Análisis* y *Hoy*. Asimismo se revisó documentación sobre las acciones de la Vicaría de la Solidaridad en materia de derechos humanos, en lo que se refiere a las denuncias en organismos internacionales, sobre la violación de derechos humanos ocurridas en Chile. También se consultó los informes periódicos de organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, Amnistía Internacional (AI), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se revisó de forma completa la publicación *¿Dónde Están?*, elaborada por la Vicaría de la Solidaridad, de siete tomos. Asimismo, se consultaron los ficheros de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), y la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas (FASIC). En este contexto, pude visitar la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes de forma muy desinteresada me relataron las diversas acciones que durante tantos años han realizado para saber dónde están sus seres queridos. Se consultó en la Biblioteca Nacional de Chile, en la sección de Hemeroteca, publicaciones periódicas referidas al período en estudio, así como también se consultaron los catálogos de las bibliotecas de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad Alberto Hurtado.

La investigación está organizada en cinco apartados con sus respectivos apartados, y que van desde cuestiones más teóricas y metodológicas, pasando por el análisis y debates sobre las transiciones hasta el análisis de cuestiones más particulares que permiten adentrarnos a la comprensión de la memoria histórica del horror. En el capítulo primero, examinamos la historia del tiempo presente, sus debates, tensiones y metodología de trabajo. Ingresar de forma

particular en los debates más teóricos y filosóficos sobre la memoria, la historia y el olvido, para conocer las formas en que es posible pensar las problemáticas que aborda esta investigación. Es por ello, que realizamos un exhaustivo análisis del estado de la cuestión sobre los debates que desde la historia, se han realizado en Europa, fundamentalmente en España y Francia, y aquellos que se han instalado en América Latina, sobre todo a raíz de investigaciones vinculadas a las dictaduras militares. En este aspecto, indagamos sobre el tiempo presente en la región identificando elementos comunes y analizamos el caso de Chile. Por otra parte, examinamos las fuentes para analizar la historia del tiempo presente, prestando especial importancia a los archivos que las sociedades de postdictadura han elaborado, y que han desempeñado un importante rol como evidencias de las dictaduras militares.

En el segundo capítulo, nos adentramos al análisis de las transiciones políticas desde una perspectiva histórica, para conocer las formas en que las sociedades de postdictadura enfrentan, resuelven y pactan qué hacer con las herencias dejadas por las dictaduras militares. En este ámbito, consideramos la transición de España, como un espejo del que América Latina tomó como ejemplar. Para ello, examinamos los diferentes enfoques que propone la historiografía española, examinando sus debates y tensiones, advirtiendo en este caso, las profundas huellas dejadas por una dictadura de 40 años, y una lamentable Guerra Civil. Temas que aún hoy, provocan cierta incomodidad en una parte importante de la sociedad española.

Asimismo, analizamos las transiciones políticas en América Latina, identificando elementos comunes, advirtiendo la complejidad de estos procesos. Destacamos la importancia que han tenido en la región la creación de Comisiones de Verdad, sus objetivos se relacionaron con la búsqueda de la verdad y justicia, intentando conocer lo sucedido durante las dictaduras militares, si bien han tenido resultados diferentes, lo que se destaca en cada caso, es la voluntad política del Estado de instalar determinadas políticas de memoria.

En el tercer capítulo, examinamos el tránsito hacia la democracia en Chile, para ello analizamos las fuentes que los historiadores disponemos para historizar estos pasados recientes, cuya característica fue la sistemática violación de derechos humanos. A través de diferentes momentos dentro del proceso histórico chileno, intentamos acercarnos a los mecanismos mediante los cuales se pactó el tránsito de la dictadura a la democracia. Al mismo tiempo, nos adentramos en el interesante debate sobre la transición política en Chile. Posteriormente, analizamos los esfuerzos políticos de los gobiernos democráticos que elaboraron las Comisiones de Verdad, examinando las políticas de memoria que se enmarcaron dentro de la investigación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

En el capítulo cuarto, analizamos las posibilidades de estudiar la memoria histórica del horror en Chile. Para alcanzar este objetivo, examinamos los informes de verdad, y la metodología que utilizaron para acercarse al conocimiento de la verdad sobre las más graves violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, centro sus objetivos en los detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte. Por su parte, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, tuvo como mandato determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presentaron, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para alcanzar este objetivo, la Comisión investigó sobre la forma de tortura, y sus consecuencias, realizando un cuadro de análisis en que fue posible conocer los diversos mecanismos de represión política y tortura que se aplicaron a los prisioneros políticos, por parte de los agentes del Estado. El capítulo quinto recorre la geografía del horror instaurada durante la dictadura militar, identificando los recintos de secretos de detención, tortura y muerte en Santiago, a través del análisis de aquellos que ambos informes identificaron como emblemáticos. En cada uno de ellos, se describe gracias a

los testimonios analizados los padecimientos sufridos por parte de las víctimas, así como la descripción de los sitios de tortura. En este desafío, ingresamos las huellas indelebles que dejaron en las víctimas los apremios sufridos. Apartados que siguen están compuestos de las conclusiones de la investigación, las fuentes y referencias bibliográficas y los anexos. Cada uno de estos capítulos y apartados buscan dar coherencia a un tema complejo de abordar, por cuanto convergen las víctimas, testigos y victimarios que se insertan en un tiempo determinado que es la dictadura militar chilena. Esta investigación pretende contribuir a la comprensión del pasado reciente de Chile, al mismo tiempo que permita impulsar investigaciones que traten estos temas, que en sí mismo son muy difíciles, ya que se necesitan herramientas teóricas y metodológicas provenientes de otras disciplinas, lo que nos lleva también a trabajar en colaboración con otros enfoques científicos.

En el transcurso de esta investigación accedí a diversas instancias académicas que me permitieron conocer otros temas, acceder a nuevas bibliografías, y observar cómo se trataban los temas de la memoria historia, y los debates referidos a la historia del tiempo presente. Para ello tuve la posibilidad de asistir a cursos dictados por profesores como Joan Garcés en la y Francisco Sevillano. Gracias a una estancia de investigación otorgada por el Servicio de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollé parte mi investigación en el *Centre de Recherches des Mondes Américains*, CERMA-MACIPOL en L'École des Hautes Études en Sciences Sociales en Francia, bajo la tutoría de la Dra. Frédérique Langué. Accediendo al conocimiento de los debates teóricos y metodológicos que incluye el estudio de Historia del Tiempo Presente en este país, identificando los diferentes énfasis en las investigaciones que se han estado realizando en el último tiempo. También asistí a seminarios dictados por destacados historiadores, que han sido referentes en mi formación académica como Roger Chartier, Arlette Farge, Serge Gruzinski, y Georges Vigarello, autores de referencia en mis investigaciones anteriores de Máster en Estudios de Género y Máster en Historia Contemporánea.

En el transcurso de esta investigación son muchos a quienes debo agradecer, en primer lugar al Dr. Pedro Martínez Lillo, quien me ha acompañado y guiado desde el inicio de mis estudios en el Doctorado de Historia Contemporánea, y que a través de sus reflexiones y sugerencias, siempre han sido luces en los momentos más difíciles del trabajo. Mi especial agradecimiento al Dr. Álvaro Soto, por su solidaridad y confianza en las tareas encomendadas, y con quién compartí interesantes debates orientados en la elaboración de esta investigación. Mi gratitud a la planta académica y administrativa del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, por la cordialidad y buena disposición para ayudarme en lo que fuera necesario. A mis amigos y maestros Dra. Diana Veneros R-T., Dr. Aldo Yávar M., quienes desde mis inicios como estudiante, en la Universidad de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, me han brindado su total apoyo y confianza en las diferentes etapas de mi vida universitaria. Mi especial agradecimiento a los funcionarios de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad por la colaboración en esta investigación.

Mis más sinceros agradecimientos a quienes me han brindado su apoyo y amistad en momentos en que parece todo más difícil, Beatriz Galán, María del Carmen Cánovas, Graciela Brebbia, Macarena Isla, Marcelo Casis, María José García, Karin Pereira, Eduardo Carreño, Lynda Avendaño, Cecilia y Tato. Mi especial agradecimiento para mi fiel amigo Juan Radic Vega, por compartir el trabajo cotidiano.

Gracias a la Beca otorgada por el Programa Alban, Programa de becas de Alto nivel de la Unión Europea para América Latina n° E06D100736CL, sin el cual no habría iniciado mis estudios posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, y a la Beca del Gobierno de Chile, por colaborar en el proceso final de esta investigación.

I.- Historia del Tiempo presente, un estado de la cuestión.

Las prácticas cometidas por las violencias de Estado han dejado en sus poblaciones huellas profundas que difícilmente puede contener el piadoso olvido. En una mirada panorámica en diversas regiones del mundo, estas experiencias traumáticas acontecidas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, han generado un pasado mediano complejo tanto por sus devastadoras consecuencias como por la incomodidad que provoca su narración, instalando en algunos casos, discursos históricos que los favorecen, o bien que cuestionan, llegando incluso a negar los hechos ocurridos⁸.

Son estos y otros problemas los que llevan a replantear dentro de la comunidad histórica los objetivos, métodos y archivos con que usualmente trabajamos. Es en medio de estas complejidades que desde nuestro oficio, se observa un profundo debate orientado a tratar los temas vinculados a los pasados recientes. Si bien el Instituto de Historia del Tiempo Presente (IHTP)⁹, lleva más de tres décadas de investigación, todavía se observa cierta incomodidad e incluso molestia al abordar estas proximidades temporales, más aun, si contienen hechos de violencia política, observando que “la corporación de los historiadores, con sus reglas, sus cánones y sus métodos de trabajo, permanecía fiel a las enseñanzas de los maestros del siglo anterior”¹⁰. Por ello la creación en 1978 del IHTP ha sido tan importante, ya que:

“se trataba, a la vez, de incitar a la investigación histórica francesa a enfrentarse a lo muy contemporáneo y de afirmar la legitimidad científica de este fragmento o rama del pasado, demostrando a

⁸ Un ejemplo clásico son los historiadores negacionistas del Holocausto judío como David Irving en Gran Bretaña, David Duke y Arthur Butz en los Estados Unidos, Robert Faurisson en Francia, Ernst Zündel en Canadá. Vidal- Naquet, P., *Los asesinos de la memoria*, México D. F., Siglo Veintiuno Editores, 1994.

⁹ El Centro Nacional de Investigación Científica se fundó en París en 1978, el Instituto de Historia del Tiempo Presente. Véase <<http://www.ihtp.cnrs.fr/>>.

¹⁰ Bédarida, F., “Definición, método y práctica de la Historia del tiempo presente”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Madrid, UCM, 1998, nº 20, p. 19.

ciertos miembros de la profesión, más o menos escépticos, que el reto era realmente hacer historia y no periodismo”¹¹.

Considerando estas complejidades, “¿cómo podría y, en consecuencia, cómo debería el historiador acercarse a las realidades sociales presentes?”¹², puesto que los problemas y preguntas están en constante replanteamiento. Esta es una de las cuestiones que comporta una mayor dificultad, esto es, ¿cómo definimos el presente?, referido expresamente a la noción de tiempo histórico, ya que tanto Bédarida como otros historiadores, entre ellos, Aróstegui, coinciden en la necesidad de detenernos en la precisión de estos temas, puesto que “en sentido estricto no se puede hacer historia del presente, porque basta con hablar de ello para que se esté ya en el pasado. Es obligado, pues, alargar este dato instantáneo del presente que se escurre bajo nuestra mirada a fin de darle sentido y contenido”¹³. Bédarida propone una definición del presente como, “el lugar de la temporalidad extendida que contiene la memoria de las cosas pasadas y la expectativa de las cosas por venir: «el presente del pasado es la memoria; el presente del presente es la visión; el presente del futuro es la expectativa»”¹⁴. Y que Reinhart Koselleck identifica como lo que media entre,

“el intercambio entre el espacio de experiencia y el horizonte de espera que se lleva a cabo en el horizonte vivo de una cultura. Dicho presente no puede reducirse a un punto en la línea del tiempo, a un mero corte entre un antes y un después. Sólo puede definirse de ese modo un instante cualquiera, no el presente vivo”¹⁵.

¹¹ *Ibíd.*, p. 20.

¹² Aróstegui, J., “Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración necesaria”, en Díaz Barrado, M. (coord.), *Historia del tiempo presente. Teoría y Metodología. Seminario de Historia del Tiempo Presente*, Extremadura, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura, 1998, 31.

¹³ Bédarida, F., *op. cit.*, p. 21.

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*, Madrid, Arrecife-UAM, 1999, p. 22.

Coincidimos con estos autores en que el problema del movimiento pendular del presente, no es en estricto rigor la demarcación que puede existir hacia atrás, sino que la dificultad está hacia adelante, ya que las fronteras no son claras, siendo más bien un terreno movedizo. Por ello Bédarida insiste en llamar “tiempo presente, el tiempo de la experiencia vivida”¹⁶. En ello concuerda también la historiadora Anne Pérotin-Dumon, cuando expone que “es poner el acento en la relación de contemporaneidad que la proximidad del pasado introduce entre el historiador o la historiadora y su objeto: es «historizar la experiencia propia», se escribe «la historia del mundo en que vivimos»”¹⁷.

En esta misma línea, otra de las inquietudes que se aprecian al considerar este enfoque historiográfico, es el que se relaciona con la noción de acontecimiento. Los autores citados concuerdan en la importancia que adquiere en esta forma de historizar los pasados, como lo plantea Trebitsch, “Feliz o trágico, colectivo o individual, público o privado, un acontecimiento es, pues, lo que se distingue de la trama normal de los trabajos y los días”¹⁸. Y es que el tema del acontecimiento también adquiere relevancia, superando el enfoque de la escuela historicista de finales del siglo XIX, que concebía al hecho histórico como un dato, reduciendo el trabajo histórico a criticar los documentos y a darles un orden secuencial, que identificara la causa y el efecto. Y también el de la escuela de Annales, donde la preocupación se centró más en la larga duración.

“A partir de los años 1970-1980, la puesta de nuevo en cuestión de los grandes sistemas explicativos y de las modelizaciones duras ha favorecido, entre otros «retornos», el «retorno del acontecimiento», pero un acontecimiento de naturaleza distinta al

¹⁶ Bédarida, F., op. cit., p. 22. Ver Aróstegui, J., *La Historia vivida. Sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza Editorial, 2004.

¹⁷ Pérotin-Dumon, A., “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago UAH, 2007, p. 17, disponible en, <http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php>. [Consultado en octubre de 2011].

¹⁸ Trebitsch, M., “El acontecimiento, clave para el análisis del tiempo presente”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 20, Madrid, UCM, 1998, p. 30.

de la historia «acontecimental» descalificado por la larga duración braudelina, después de que unas primeras iniciativas manifestasen precisamente la tentativa de reconciliar estructuras y acontecimientos”¹⁹.

Importante en este aspecto, es la propuesta que realiza Koselleck, quien explica que “los acontecimientos no pueden ser más que narrados y las estructuras descritas”²⁰. Argumentando que la cronología natural constituye el «horizonte de sentido» del acontecimiento: “Es preciso mínimamente un antes y un después para constituir la unidad de sentido que hace de cada cosa que sucede un acontecimiento”²¹. Desde esta óptica este autor considera, que las estructuras son fenómenos anclados en la temporalidad, que necesitan determinaciones funcionales. Identificando en ellas discontinuidades, en donde el acontecimiento se puede entender como “una estructura diacrónica, con secuencias y escenarios susceptibles de ser tipologizados y comparados: no es la singularidad el carácter repetitivo eventual lo que caracteriza un acontecimiento, sino el valor y el espesor de sus enunciados estructurales posibles”²².

Otra de las consideraciones posibles, es la elaborada por Paul Ricoeur, quien en su reflexión sobre el acontecimiento, expone que “para la hermenéutica, entre el tiempo cósmico y el tiempo íntimo de la experiencia se desprende un «tercer tiempo», el tiempo narrado por el historiador, el único que fundamenta el acontecer histórico”²³. Colocando en una situación de suma importancia el oficio de historiadores, y en ellos destacando la validez del acontecimiento histórico, integrando los diversos conceptos de éste acuñados por las diferentes escuelas historiográficas, fundamentalmente la escuela positivista, que lo consideraba como puramente descriptivo, y luego la escuela historicista que le otorgaba ese sentido globalizante, tan característico. Por el

¹⁹ Ibíd., p. 32.

²⁰ Ibíd.

²¹ Ibíd.

²² Ibíd.

²³ Ibíd., pp. 32-33.

contrario, Ricoeur reemplaza esa idea, por la de “un acontecimiento sobre significativo”, en el que “no existe en estado bruto, sino que es siempre el resultado de una narración, de un discurso, de una representación, de una construcción narrativa constitutiva de una identidad fundamentadora”²⁴. El autor explica que desde este punto de vista, se desplazan las diferencias entre memoria e historia, puesto que el eje articulador “es la narración, la de los testigos, o los historiadores, la que pone en orden el sentido del acontecimiento”²⁵. Trebitsch enfatiza que la experiencia temporal en Ricoeur no existe en tanto que es contada, narrada:

“(…) el acontecimiento es deconstruido y reconstruido por la operación histórica. Con él no es la psicología la que retorna sino el análisis de los personajes, de los roles, de los «actuales», no es la historia política la que regresa sino el análisis del poder, de la decisión, del conflicto, no regresa la singularidad, sino la introducción, por ejemplo, en torno a la noción de crisis, de la probabilidad, la complejidad”²⁶.

Trebitsch expone que tanto las aportaciones de la semántica de la historia como de la hermenéutica, -a su juicio- han reabierto un acercamiento «estructural» al acontecimiento, y también «una historia social de los acontecimientos históricos». Argumenta que esto se produce al manejar el desplazamiento desde las estructuras o el relato al análisis de la acción, puesto que encuentra “el refuerzo de la sociología de la acción, que propone una aproximación constructivista según la cual el acontecimiento aparece como producto de un juego de interacciones entre una pluralidad de actores y agentes”²⁷. Enfrentando a los historiadores a dos ámbitos, el primero de ellos, debió al énfasis que se coloca en la acción y que cuestiona las relaciones entre pasado, presente y futuro. Trebitsch argumenta que desde este punto de vista,

²⁴ Ibíd., p. 33.

²⁵ Trebitsch, M., “El acontecimiento, clave para el análisis del tiempo presente”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 20, op. cit., p. 33.

²⁶ Ibíd.

²⁷ Ibíd.

es pertinente pensar en la propuesta de Bernard Lepetit, que introduce un modelo temporal en que el presente de la acción es el tiempo de la historia, y donde el rol del historiador es analizar el proceso histórico como un “presente en deslizamiento”²⁸. En segundo lugar encontraríamos la idea desarrollada por Carlo Ginzburg y Georges Duby en cuanto a que desde esta perspectiva:

“el acontecimiento no es conocido más que por sus huellas. Dicho de otra forma, esa es la propuesta también de Koselleck cuando se refiere al espacio de experiencia, y que la función del historiador es, como ha escrito Pierre Nora, analizar no los acontecimientos mismos sino su construcción en el tiempo, no el pasado sino su reutilización”²⁹.

Estas cuestiones cobran vital importancia para nuestra investigación, a propósito de las fechas «in-felices» y las conmemoraciones, que cada año se realizan en diversas regiones del mundo. Estas preocupaciones se sitúan, de un lado, por la inquietud que ofrecen las cercanías de los hechos, la proximidad de los relatos y aquella «subjetividad» de la cual la clásica disciplina obligaba a tomar distancia, exigiendo investigaciones donde la asepsia y rigurosidad científica decimonónica eran una condición *sine qua non* en las elaboraciones teóricas y metodológicas. Por consiguiente, también es necesario considerar lo que respecta al campo de lo generacional, como lo ha expuesto Julio Aróstegui, ya que como exponen la mayoría de los historiadores preocupados de estos temas, existen pasados que exceden el propio acontecimiento, y no por casualidad, se inscriben en narraciones y pasados que de alguna manera se tornan emblemáticos.

“el presente histórico está constituido por aquellas generaciones de se solapan sucesivamente generando una cadena de transmisión de acontecimientos que son reconocidos como “su”

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., p. 34.

pasado aun cuando no todos los hayan experimentado directamente”³⁰.

Puesto que la principal característica de este campo de estudio, radica en que es “historia viva no historia reciente, ni inmediata, por mucho que tenga estas características o connotaciones. Por mucho que se acerca a nuestro propio tiempo”³¹. Esta temporalidad, recibe por tanto variados sinónimos que dan cuenta –al parecer- de que lo que se observa, analiza y preocupa tiene que ver con ese tiempo del que en la mayor parte somos coetáneos. Así entonces, encontramos a ese presente como sinónimo de:

“Tiempo de lo contingente, de lo incierto, del cambio de época, de la ruptura histórica; pero también es tiempo de la perplejidad y del asombro. Esta dimensión temporal es pensada por la mayoría de los historiadores con parámetros móviles a la hora de delimitar una historia del presente y se produce en la simultaneidad entre historia vivida e historia contada”³².

Esta quizás sea la mayor sospecha frente a esta forma de historización, ya que si bien aprovecha el interés de estudio que suscita el siglo XX sobre todo a partir de la segunda mitad, la comunidad de historiadores interesados en estos temas, enfatiza que ésta no comienza en 1945, sino que este enfoque es más bien dinámico. Advirtiendo sobre la necesidad de considerar las cuestiones referidas a la noción de tiempo histórico, y dentro de ella, la importancia que adquiere la relación pasado-presente. En esta óptica la Historia del Tiempo Presente tiene una connotación más profunda en cuanto a

³⁰ Mudrovic, M. I., “*Algunas consideraciones epistemológicas para una "Historia del Presente"*, en *Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea* nº 1, Madrid, 1998-2000, disponible en, <<http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/013/art013.htm>>. [Consultado en noviembre de 2010].

³¹ Bédarida, F., op. cit., p. 34.

³² Iuorno, G., “A propósito de la Historia reciente: ¿Es la interdisciplinaridad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales”, en López M., Figueroa, C., y Rajland, B. (ed.), *Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina*, Santiago, Arcis, CLACSO, 2010, p. 40. La historiadora agrega que “el primer Congreso Internacional de Historiografía *Historia a Debate* celebrado en Santiago de Compostela (Galicia, España) dio el puntapié a una serie de encuentros entre profesionales de la historia que desafiaron a la historia profesional, a sus teorías, métodos y prácticas”. Ibíd, p. 41.

su campo investigativo, esto es porque trata «nuestro tiempo», como lo denomina Aróstegui, insistiendo en que es,

“un intento de *historiar la experiencia propia*, como lo fue la *historia contemporánea* hace algo más de siglo y medio. [...] El *tiempo presente* obliga a inevitables reacomodaciones y ampliaciones del también tradicional oficio del historiador. Es decir, tiene claras implicaciones metodológicas”³³.

En este aspecto, la historiadora Graciela Luorno, plantea que tanto la renovación teórica y metodológica de la disciplina, luego de la anunciada crisis de paradigmas, se puede rastrear en los congresos académicos de *Historia a Debate*, ya que según su apreciación,

“(...) estos encuentros posibilitaron la cristalización de un movimiento académico en red que tuvo su origen en 1993. Una década después, en el 2003, el referente y coordinador de la red Historia a Debate HaD abrir –el historiador gallego Carlos Barros- acuña el concepto de *Historia Inmediata*, a partir de los aportes realizados a la red por el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño”³⁴.

Agrega que la elección de este nombre, se debe a que originalmente lo que se pretendía, era examinar desde la propia academia y en forma colectiva, lo que “le sucedía inmediatamente, coetáneamente a los historiadores que intercambiaban sus pareceres”. Y ya en el 2004, en el III Congreso Internacional de Historia a Debate “lo inmediato –la nueva especialidad- ocupó por primera vez un lugar importante en las discusiones, con enriquecedoras aportaciones historiográficas sobre tema”³⁵. Lo que expone Luorno, da cuenta de los sinónimos que adquiere el presente, de la misma forma como lo han

³³ Bédarida, F., op. cit., p. 36.

³⁴ Luorno, G., “A propósito de la Historia reciente: ¿Es la interdisciplinaridad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales”, op. cit., p. 41.

³⁵ Ibíd.

manifestado Aróstegui y Cuesta, entre otros historiadores españoles, los que señalan que “el estudio de la historia presente implica considerar el factor de cambio cultural y político, habida cuenta que es la historia de la cultura de nuestro tiempo”³⁶. Esta multitud de equivalencias respecto al concepto, también da cuenta de que el debate historiográfico no está cerrado, muy por el contrario, cada cierto tiempo, se advierte una emergencia de estas cuestiones, centradas sobre todo en el recuerdo, o re-elaboración ciertos acontecimientos, o fechas episódicas. Nuestro interés, es poner de manifiesto los debates a lo que nos enfrentamos al tratar esos temas, dando cuenta una vez más de la complejidad a la que se asiste al abordar estos pasados mediatos. Asimismo, la multiplicidad de posibilidades de análisis que ofrece la perspectiva de la historia del tiempo presente –y sus múltiples sinonimias- como lo hemos puesto de manifiesto en estas páginas, da cuenta de «un tiempo inacabado», y sobre él es donde se instalan las diversas problemáticas, que dan cuenta tanto de ámbito teórico como metodológico, y desde diversas áreas del conocimiento.

“ es preciso afirmar que la historia del presente habrá de ser ante todo una historia de la cultura de nuestro tiempo [...] Las líneas sustanciales de la historia de nuestro presente, que transcurre en el tránsito entre los siglos XX y XXI son, en realidad, bastante nítidas en algunas dimensiones [...] la historia actual tiene su génesis en el conjunto de acontecimientos que, en Europa y fuera de ella, se produjeron en el tránsito de los años ochenta á y a comienzos de los años noventa del siglo XX, verdaderamente la “bisagra” entre dos épocas”³⁷.

Siguiendo esta argumentación, otro problema al que se ven enfrentados los investigadores, es “la complejidad de evaluar y discriminar cuáles son los hechos verdaderamente históricos cuando nosotros formamos parte del proceso mismo y cuando los efectos de esos hechos aún son imperceptibles

³⁶ Ibid., p. 42.

³⁷ Aróstegui, J., Saborido, J., *El tiempo presente. Un mundo globalmente desordenado*, Buenos Aires, Eudeba, 2005, pp. 9-11.

por ser procesos inacabados”³⁸. Así también es la complejidad que rodea al tema de las fuentes, más aún, mucho más complejo es lo referido a la idea de archivo; en efecto, la clásica es la frase, “la historia se hace con documentos escritos, sin duda, cuando estos existen”³⁹. De ahí que el gran interés de los investigadores fuera el indagar en aquellos archivos llamados «oficiales», que otorgaban -dentro de estas premisas- mayor legitimidad y por tanto *seriedad* al objeto de estudio. Al acercarnos a las problemáticas y debates en torno a la Historia del Tiempo Presente, coincidimos en que una de las principales objeciones después de la “noción de <distanciamiento> (*recul*), que parecía como el signo y garantía indispensable de la objetividad”⁴⁰, según expone el historiador François Bédarida, es el relacionado con las fuentes;

“El problema de la accesibilidad a los documentos es esencial. Como es sabido, la tendencia general hoy en la mayor parte de los países es hacia el recorte de los plazos de apertura de los fondos recientes, de los archivos públicos”⁴¹.

Estas problemáticas nos llevan a un desafío mayor, por cuanto asistimos a una abundancia de fuentes. Sin duda éste es un importante tema, que toca directamente a aquellos países, que luego de tener regímenes dictatoriales, se ven enfrentados al debate sobre la apertura de los archivos. En este aspecto, Latinoamérica resulta emblemática, a propósito de las llamadas Comisiones de Verdad, y que junto a las organizaciones no gubernamentales acopiaron gran cantidad de información sobre sus pasados represivos. Los casos de “Argentina (1984) y Chile (1990) establecieron oficialmente comisiones que emitieron informes sobre la represión. En Bolivia (1982-1983), Uruguay (1985) y Paraguay (1992) la tarea recayó en comisiones parlamentarias”⁴².

³⁸ Iuorno, G., “A propósito de la Historia reciente: ¿Es la interdisciplinaridad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales?”, op. cit., p. 42.

³⁹ Febvre, L., *Combates por la Historia*, Barcelona, Ariel, 1982, p. 72.

⁴⁰ Bédarida, F., op. cit., p. 23.

⁴¹ Ibíd., p. 24.

⁴² Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *Las políticas hacia el pasado. (...)*, op. cit., p. 32.

Las reflexiones elaboradas al alero de estas y otras premisas, tienen una problemática fundamental, y es que la “historia del tiempo presente debe analizar e interpretar un tiempo del cual no conoce ni el resultado concreto ni el final”⁴³. Es desde estas interrogantes donde instalamos nuestras preocupaciones mayores, por ello, la imperiosa necesidad de indagar en los debates asociados a la Historia del Tiempo Presente, prestando especial atención a las tensiones sobre cómo historizar aquellos pasados recientes que tienen como característica, la violencia de Estado. En esta perspectiva coincidimos en que;

“La historización del presente equivale, de otra parte, a una *historización del desarrollo*. (...) [Que] significa un abandono de la idea de que los procesos en curso no pueden ser historiados de acuerdo con la vieja convención de que sólo aquellas realidades sociales de las que existe una perspectiva temporal que permite captarlas en sus detalles y consecuencias finales pueden ser objetos de la Historia”⁴⁴.

En este aspecto lo que nos interesa analizar, es cómo las sociedades Latinoamericanas en general y chilena en particular han construido relatos sobre estos pasados recientes en el período de la transición política⁴⁵, observando el posicionamiento que la comunidad civil adquiere frente a estos asuntos. Estas consideraciones tienen como telón de fondo, el hacer frente a pasados que encuentran sus «puntos nodales» -como los denomina Julio Aróstegui- en las herencias dejadas por las dictaduras, legados ya sea en los ámbitos jurídicos, sociales y culturales que están ligados a violaciones de derechos humanos, y que constituyen temas pendientes en la región. Puesto

⁴³ Ibíd.

⁴⁴ Aróstegui, J., “Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración necesaria”, op. cit., p. 42.

⁴⁵ Ver De Mussy, L., y Yávar, A., *Seminario. Transiciones políticas Comparadas: España y Chile. Temas, fuentes y Metodología, Cuadernos de trabajo*, Santiago, Universidad Finis Terrae- UMCE, 2008. Salazar, G., “Historiografía chilena siglo XXI: transformación, responsabilidad, proyección”, en De Mussy, L. (Ed.), *Balance Historiográfico Chileno. El orden del discurso y el giro crítico actual*, Santiago Ediciones Finis Terrae, 2007, p. 103. Figueroa, M. y Vicuña, M. (coord.), *El Chile del bicentenario*, Santiago, ediciones UDP, 2008.

de que como lo expresaba Marc Bloch, “por mucho que el pasado no determine totalmente el presente, sin aquel, este permanece ininteligible”⁴⁶. Y este respecto podemos sumar el hecho de que “el regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente sin que por ello signifique el monopolio academicista. Como lo expone Graciela Luorno “La historia controvertida y de controversias actuales se asienta en una historia plural con conciencia de que existen diversos relatos posibles y plausibles de las mismas acciones y los mismos acontecimientos”⁴⁷.

Fundamentalmente atraídos por estas tensiones, es que desde la historia se ha ingresado al estudio de este tipo de problemáticas, lo que ha generado innumerables retos metodológicos, ya que estas tensiones tienen la particularidad de tener una cercanía no sólo temporal sino también generacional. Este desafío requiere la necesidad de incorporar nuevas herramientas de análisis, así como enfoques provenientes de otras áreas del conocimiento, lo que permite realizar exploraciones interdisciplinarias, que acrecientan nuestro conocimiento sobre estos «complejos» pasados⁴⁸.

“(…) la historia de lo “presente” es una historia en buena parte distinta de las ya conocidas, pero también es claro que es “historia” y no otra cosa, aunque sus relaciones con otras investigaciones sociales deban ser más estrechas todavía que en otros sectores historiográficos. Hacer del presente una historia plena, *historizar* el presente, requiere repensar la historiografía con rigor, lejos de convencionalismos”⁴⁹.

⁴⁶ Bloch, M., *La extraña derrota*, Barcelona, Crítica, 2002 (1ª edición 1944), pp. 150-151.

⁴⁷ Luorno, G., “A propósito de la Historia reciente: ¿Es la interdisciplinariedad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales”, op. cit., p. 43.

⁴⁸ Carreras, J., y Forcardell, C. (eds.), *Usos públicos de la historia*, Madrid, Marcial Pons Pressas Universitarias de Zaragoza, 2003. En este interesante trabajo se analizan las distintas modalidades que adquiere desde ópticas y geográficas diferentes el uso de la historia en la difusión del pasado mediato. Aunque debemos advertir que no aborda el concepto de la complejidad. Para este y otros temas orientados a las tensiones en torno a la historia del tiempo presente, ver el excelente trabajo de Figallo, B. y García de Ceretto, J., *La historia del tiempo presente. Historia y epistemología en territorios complejos*, Rosario, FFYL, UCA, 2010.

⁴⁹ Aróstegui, J., “Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración necesaria”, op. cit., p. 41.

Advertimos por tanto, un llamado a los historiadores de hacernos cargo del estudio de estos problemas dejados antes a otros especialistas. Si bien existen riesgos, es una tarea que deben realizar también los historiados, como y que siguiendo a Hobsbawm, se puede argumentar desde las categorías históricas cuya identidad la definen con un comienzo y fin, pero esta cuestión – referida a la finitud, al proceso que queremos analizar esté concluido- no implica que no podamos analizar el presente, por supuesto, con ciertos límites y problemas como es el de reconocer el alcance o la importancia de determinados acontecimientos concretos, que pueden llegar a ser importantes desde el punto de vista del análisis histórico⁵⁰. Cuestión que es considerada también por historiadores de diversas regiones, como es el caso del historiador chileno Gabriel Salazar, que se dedica al estudio de los sectores populares en Chile, suscribe estas preocupaciones incentivando también a los nuevos historiadores a preocuparse de su tiempo, subrayando que:

“La mayoría de los historiadores tradicionalistas desconocen, de hecho, el rango histórico del presente, al punto de que niegan la calidad de «historiador» a los investigadores que se aventuran en él, a los que llaman, algo despectivamente, «sociólogos»⁵¹.

Problemática que entre otros historiadores, también advierte Josefina Cuesta, y que a través de sus múltiples investigaciones, insiste en la necesidad de investigar en esta historia vivida, profundizando y ampliando su campo de estudio:

“El impacto de los medios de comunicación en la sociedad de masas de esta segunda mitad de siglo XX y la ampliación de la Historia hasta nuestros días ha llevado a periodistas e historiadores a confluir sobre un mismo campo de trabajo: el tiempo en el que viven. Un terreno propio y habitual para el

⁵⁰ Hobsbawm, E., *Sobre la historia*, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 230-241.

⁵¹ Salazar, G., “Historiografía chilena siglo XXI: transformación, responsabilidad, proyección”, op. cit., p. 104.

profesional de las comunicación y, hasta hace poco, menos transitado por el especialista de la Historia”⁵².

En esta línea, nuestra investigación tiene como acontecimiento, o «punto nodal», el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ya que es a partir de este hecho en que analizamos *la «memoria histórica»* que se elabora durante los gobiernos de la transición política en Chile, identificando en ellos “los puntos nodales que definen cada situación histórica coyuntural (...)”⁵³, los que resultan ser dinámicos, puesto que presentan varias posibilidades de análisis desde los que se puede estudiar la sociedad chilena de la postdictadura. Esta es una de las interrogantes que nos han acompañado en el transcurso de la investigación, esto es, la elaboración que realizan las sociedades que han estado expuestas a pasados traumáticos.

En este caso, nuestro objeto de estudio tiene que ver con aquellas proximidades temporales en las que se impusieron dictaduras militares en América Latina, y más específicamente, con el análisis de las formas de representación que la sociedad chilena realiza de ese pasado y que tiene cotas de traumático. Desde esta perspectiva, nuestra investigación se sitúa a partir del golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas y de orden en Chile el 11 de septiembre de 1973, y que estuvo al mando del país durante diecisiete años, dejando graves daños en esta sociedad. Es a partir de este hecho desde donde inscribimos nuestra investigación, insistiendo en que “la cuestión del acontecimiento es casi constitutivo de toda elaboración teórica sobre la historia del tiempo presente (...)”⁵⁴.

No cabe duda que este es un debate abierto, y que adquiere renovado interés a propósito de fechas emblemáticas como los aniversarios patrios,

⁵² Cuesta Bustillo, J., “Historia del presente y periodismo”, en Díaz Barrado, M. P., *Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología*, Extremadura, Universidad de Extremadura, 1998, p. 131.

⁵³ Aróstegui, J., “Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración necesaria”, op. cit., p. 41.

⁵⁴ Trebitsch, M., “El acontecimiento, clave para el análisis del tiempo presente”, op.cit., 29.

bicentenarios, y otras «infelices»⁵⁵, referidos por ejemplo a la bomba atómica o el Holocausto, que se inscriben en la línea de las «conmemoraciones». Estas problemáticas nos llevan a considerar como elementos claves en este tipo de análisis, las relaciones entre historia y memoria, así como pasado y presente.

“El Presente como Historia es, pues, algo más que el producto de una conceptualización objetivista, de una reflexión desde lo filosófico a lo metodológico, es también el producto observable de las caracterizaciones sociales y psicosociales que cabe hacer en las gentes de hoy”⁵⁶.

Por esta razón resulta de suma importancia indagar sobre estos temas, que sin duda son difíciles de abordar, porque tratan sobre «nuestro tiempo» y del cual somos «testigos», pero también porque están vinculados a fracturas que han experimentado algunas sociedades, y donde los gobiernos transicionales han tomado diversas formas de abordar estos pasados. Estas preocupaciones desde y hacia nuestro quehacer disciplinario traspasan las geografías, observando las similitudes y diferencias que se pueden advertir al analizar sociedades que han tenido dictaduras militares, puesto que como señala Alexandra Barahona;

“(…) una de las cuestiones políticas y éticas más importantes con que se enfrentan las sociedades durante la transición de un gobierno autoritario o totalitario a otro democrático es cómo hacer frente al legado de un pasado represivo. Éste es a menudo el problema con un mayor potencial para desestabilizar el proceso de transición”⁵⁷.

Advertimos que en estos casos, la necesidad de consensos y acuerdos de la sociedad en su conjunto, presenta grandes paradojas. En el caso de

⁵⁵ Jelin, E. (comp.), *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in-felices”*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

⁵⁶ Aróstegui, J., op. cit., p. 39.

⁵⁷ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 29.

Chile, el golpe de Estado, si bien tuvo objetivos definidos desde el principio, no es menos cierto que éstos se fueron complejizando en el transcurso de los años que duró la dictadura militar (1973-1990). Para llevar a cabo sus acciones, requirió la instalación de «herramientas» simbólicas y materiales que permitieron concretar las acciones de impunidad que el propio Estado amparó. Entre ellas se encuentran los lugares específicos de acción, reclusión y detención, junto con las prácticas de tortura y violencia sistemática llevadas a cabo por organismos del Estado de Chile en cada uno de los clandestinos centros de detención y tortura que existieron en todo el país.

Estos temas que están vinculados a sociedades que padecen de un pasado traumático, han sido abordados con diferentes énfasis desde la filosofía por Michel De Certeau, y sus reflexiones respecto de aquello que se puede «nombrar»⁵⁸, junto a las aportaciones de Hannah Arendt sobre las «herramientas» necesarias para ejecutar la violencia⁵⁹. Los enfoques venidos de la sociología a través de las investigaciones de Elizabeth Jelin, y sus reflexiones sobre «los lugares, las fechas in-felices, las marcas y los emprendedores de memoria»⁶⁰, que sumados a las investigaciones históricas, entre ellas las de Pierre Nora, son fundamentales para este tipo de estudio, ya que propone el análisis de los «lugares de memoria», no sólo como aquello tangible, sino como repositorio también de lo inmaterial y simbólico⁶¹, elementos que nos otorgan un panorama de reflexión teórico-metodológico que permite identificar la matriz conceptual desde la que podemos desplazar nuestros análisis sobre este tipo de pasados.

⁵⁸ De Certeau, M., *La escritura de la Historia*, México D. F., Universidad Iberoamericana, México, 1999.

⁵⁹ Arendt, H., *Sobre la Violencia*, Madrid, Alianza Editorial, 2008 (1ª impresión 1969).

⁶⁰ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, Colección *Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002. Jelin, E. (Comp.), *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas "in-felices"*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002. Jelin, E., y Da Silva, L. (comps.), *Los archivos de la Represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002. Jelin E., y Langland, V. (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2003. Jelin, E., y Longoni, A. (comps.), *Escrituras, Imágenes y escenarios ante la represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2005.

⁶¹ Nora, P., "La aventura de *Les lieux de mémoire*", en *Memoria e Historia, Ayer* nº 32, Cuesta Bustillo, (ed.), Madrid, Marcial Pons, 1992, p.19. Ver del mismo autor, *Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux*. In P. Nora (Éd.), *Les lieux du mémoire*, Paris, Gallimard, 1984.

La experiencia del estudio sobre los ex centros de tortura y muerte tiene sin duda su análisis emblemático a propósito de Auswichtz, seguido luego, por otras lamentables experiencias, como los casos de la España Franquista, la Guerra de Argelia, y Ruanda⁶², por sólo citar aquellos que nos parecen más simbólicos, sin desmerecer los otros conflictos, que aunque en menor escala, tienen el mismo impacto, esto es, la violación sistemática de derechos humanos, como fue el caso de las dictaduras en América Latina. Es en esta región donde emplazamos nuestras preocupaciones presentes, debido a las características particulares que adquiere la violencia de Estado sobre todo en el Cono sur de América, tanto en tiempo como en forma, así como por los mecanismos a través de los cuales se implementó legalmente la vigencia de dichos sistemas de gobierno, junto a las formas de ejecución y sistematización que fue adquiriendo este tipo de violencia.

1.1- Historia, memoria y olvido.

Las cercanías a los temas de memoria e historia, han presentado desde sus orígenes, encuentros y lejanías que bien vale analizar. Las tensiones han sido variadas y desde diversos escenarios, en donde la historia como disciplina ha podido encontrar en el transcurso del siglo XX varios «espejos» sobre los cuales contemplarse y replantear la óptica desde donde analiza su objeto de estudio. Sabido es que las etapas de *Annales* provocaron giros analíticos que permitieron el análisis de otras áreas de estudios, y entre ellos la incorporación de nuevos actores y geografías culturales. Desde esta perspectiva, es que podemos explorar las múltiples posibilidades que ofrece la historia para la comprensión de nuestros pasados, aproximándonos en esta línea a lo expuesto por Joseph Fontana⁶³, esto es, comprender la historia como transformación social, puesto que si las sociedades conocen su pasado,

⁶² Para profundizar en estos temas, ver Garcés, J., *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1996. Traverso, E., *La historia desgarrada ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales*, Barcelona, Herder, 2000.

⁶³ Fontana, J. (ed.), *Historia y proyecto social*, Barcelona, Crítica, 2004.

pueden elaborar un relato que favorezca aprendizajes que eviten por ejemplo, situaciones de violencia social.

En este sentido, y siguiendo a Marc Bloch⁶⁴, el hombre respira la dimensión del tiempo, y es aquí, en esta elaboración del pasado donde revelamos nuestro presente, puesto que somos el rostro de aquel pasado, sea de forma individual o colectiva. Por tanto, cómo es que elaboramos, ese pasado, es decir, cómo retenemos esos recuerdos, cómo construimos nuestra memoria, cómo la re-significamos. En este primer tránsito hacia un debate más profundo, consideramos fundamental, interrogarnos sobre qué entendemos por memoria⁶⁵, las posibilidades de análisis, los nexos con el recuerdo⁶⁶, y por cierto, la relación con la historia. Aún cuando en sus raíces latinas estos dos conceptos tienen ciertas coincidencias, puesto que si bien ambas tocan un espacio de intimidad, la una tiende a socializar a la otra. Cuando recordamos «pasamos dos veces por el corazón», dice poéticamente la alusión latina, sin embargo, aquel ejercicio cognoscitivo que nos moviliza, en la mayoría de los casos nos vincula a un *otro*, a una alteridad que puede estar vinculado al espacio que habitamos -la cama de piedra, lo llamaba Marc Bloch-, o más aún, a la sociedad a la que pertenecemos, y que en nuestro caso, nos interesa la relación que existe entre memoria y recuerdo, en la sociedad chilena dentro del proceso de re-elaboración del pasado dictatorial, considerando en ello, las políticas del olvido que se han puesto en marcha durante los gobiernos transicionales.

Estos temas si bien resultan apasionantes, no es menos cierto que han sido otros las disciplinas que se han acercado a su estudio, las investigaciones realizadas en torno a la relación del recuerdo han sido profusas, y las aportaciones desde la sociología con trabajos de Norbert Elías y Marcel

⁶⁴ Bloch, M., *Apología para la historia o el oficio del historiador*, México, FCE, 2001.

⁶⁵ La Real Academia Española propone varias acepciones para este concepto, una de ellas, es la define a la memoria como “*la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado*”. Real Academia de la Lengua española, *Diccionario de la Real Academia de la Lengua española*, Madrid, 1970, p. 556.

⁶⁶ Del latín *recordári*, que significa “traer a la memoria algo”, en Real Academia de la Lengua española, *Ibíd.*, p. 1123.

Mauss⁶⁷, son un precedente insoslayable para ingresar al estudio de estos temas. Tal vez, podríamos decir que desde la historia George Duby y Michelle Perrot⁶⁸, al indagar en aquello de «lo privado», se acercan a estos temas, a través de las prácticas cotidianas, pero de forma tangencial, puesto que la preocupación de esta investigación era otra. Sin duda, la complejidad al momento de abordar los temas sobre historia, memoria y olvido es una constante, donde el desafío de indagación se transforma en un aliciente en esta investigación, por cuanto buceamos en las fronteras de aquello que resulta «difícil» de narrar, de nombrar, ya que está referido al estudio de los efectos dejados por la violencia política, ejercida por el Estado de Chile, a través del análisis de casos publicados en los informes elaborados durante las transiciones a la democracia en Chile.

Esta aproximación sobre las relaciones entre historia, memoria y olvido, considerando a la primera como un “acontecimiento humano en el tiempo”⁶⁹, y por tanto, conteniendo en sí a la memoria, puesto que ésta se relaciona con otros, es decir, aquella alteridad que se plasma en las diferencias y similitudes que cada sociedad experimenta en el tránsito de su propio reconocimiento. Historia y memoria corresponden a conceptos que nos acompañan cotidianamente, pero que tienden a visibilizarse, a ocupar un mayor espacio dentro de nuestros discursos, a propósito de aquellos quiebres o fracturas que han interrumpido el normal desarrollo de las sociedades y que nos afectan ya que en la mayoría de los casos, somos coetáneos a aquellos sucesos. Por tanto, desde esta perspectiva, lo que nos interesa, es indagar en las narrativas⁷⁰, que desde la historia se producen para tratar la memoria, esto es, cuáles son aquellos elementos de los que se nutre para alcanzar un conocimiento más profundo de aquellos pasados mediatos. Ya que de un lado tenemos la re-visitación de los viejos archivos con aquellas nuevas preguntas

⁶⁷ Elias, N., *El proceso de la civilización investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, F. C. E., 1989, p. 112. Mauss, M., *Sociología y Antropología*, Madrid, Tecnos 2ªed., 1991, (1ª ed. 1979), p. 70.

⁶⁸ Duby, G., Perrot, M., *Historia de la vida privada*, vol.5, *De la Primera Guerra Mundial a nuestros días*, Madrid, Taurus 1993.

⁶⁹ Bloch, M., *Apología para la historia o el oficio del historiador*, op. cit., p. 58.

⁷⁰ White, H., *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*, México, F.C.E., 1992.

que proponen las actuales tendencias historiográficas, y de otro, el trabajo que ofrece la diversidad de fuentes, así como la irrupción de nuevas identidades que llevan a repensar tanto los procesos sociales como los espacios de acción, instalando análisis multiculturales que sin duda provocan debates en torno a la forma de construcción y apropiación de la historia. Tal vez por ello las relaciones entre historia y memoria sean tan atractivas y a la vez, complejas de analizar, puesto que la historia del tiempo presente, considera a la memoria como una fuente para el análisis de estos procesos, debido sobre todo a la cercanía de los hechos, coexistiendo, fuentes, testigos y huellas, todos los que resultan ser muy próximos, al trabajo de historiadoras e historiadores.

Es en este contexto que observamos una mayor profusión de los temas vinculados a la memoria, puesto que es en el pasado siglo donde alcanza una mayor socialización, debido a la impronta de las revoluciones y guerras. Siglo definido como corto y vertiginoso⁷¹, cuya característica fundamental es la catástrofe humana, representada por la violencia⁷². De ahí que el concepto de memoria, tenga una mayor asociación con las situaciones traumáticas, ya que la impronta vivida ha sido mayoritariamente de guerras, genocidios, dictaduras, destrucción masiva del medioambiente, etc., y no es que antes no haya ocurrido⁷³, sino que al examinar la historia del tiempo presente, debemos considerar que cualquier argumentación “a favor o en contra de su utilidad para la historiografía ha de tener no sólo la memoria traumática, sino también la memoria y la historiografía normativa”⁷⁴, ya que no asistimos a una ruptura con el pasado, sino una aceleración de los procesos históricos. Es en esta línea que seguimos a Elizabeth Jelin, quien expone que trabajar sobre la memoria no sería una inquietud aislada de un contexto político y cultural específico, sino

⁷¹Hobsbawn, E., *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1994.

⁷²Aún cuando escapa a nuestra investigación, existe una amplia gama de trabajos que analizan desde diferentes horizontes el concepto de la violencia, entre algunos, podemos citar: Arendt, H., *Sobre la Violencia*, México D. F., Cuadernos de Joaquín Moritz, 1970. Aróstegui, J., (coord.), *Violencia y Política en España*. Dossier de Ayer nº 13, Madrid, Marcial Pons, 1994. Todorov, T., *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX*, Barcelona, Península, 2002. Cruz, R., *Culturas políticas de la violencia*, Madrid, Siete Mares, 2005.

⁷³Todorov, T., *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Paidós, 2005, p. 28-29. El autor señala un ejemplo a propósito de los enfrentamientos de los diferentes grupos indígenas.

⁷⁴Spiegel, G., “*Memoria e Historia: Tiempo litúrgico y Tiempo histórico*”, en Cabrera, M. A., Mc Mahon, M. (coord.), *La situación de la Historia: Ensayos de Historiografía*, La Laguna (Tenerife), Universidad de la Laguna, 2002, p. 56.

más bien, que aún cuando intentemos reflexiones de carácter general, tendemos a hacerlo desde un lugar particular, en nuestro caso, de “la preocupación por las huellas de las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur de América Latina entre los años sesenta y la década de los ochenta, y lo elaborado en los procesos postdictatoriales en los años noventa”⁷⁵. Ese es el horizonte desde donde instalamos nuestro análisis.

Es evidente que la memoria y los recuerdos construyen nuestro pasado, adquiriendo la forma de segmentos o capas que se depositan en nuestro imaginario tornándose dinámicos, puesto que no recordamos siempre de la misma manera, de ahí tal vez que lo que retenemos de las experiencias vividas y narradas tiendan a variar, porque se tiñen de las prácticas acuñadas a lo largo de nuestra vida, re-significando episodios que antes posiblemente no tenían mayor trascendencia, y por el contrario, silenciando otros. Esta representación adquiere mayor connotación con el acto de habla, puesto que es “en el lenguaje, el destino de todos los términos que realmente tienen vida”⁷⁶. Y si quisiéramos darle consistencia a estos enunciados, baste sólo indicar a los sobrevivientes de los campos de concentración en Europa y las víctimas de tortura y prisión política, para los casos de América Latina. Si como hemos enunciado, la tragedia se ha hecho evidente en el pasado siglo, sobre todo por la proximidad del relato y la impronta de su narrativa, es en este escenario, paisaje de la historia⁷⁷, donde la memoria, como objeto de la historia y por tanto fuente, se ha materializado por excelencia. De allí que nos interese analizar cómo ha sido leída, examinando la significación que adquiere para comprender las proximidades históricas.

Por otra parte, es importante considerar que el olvido es el reverso indiscutible de la memoria. Historiográficamente ha sido abordado de forma tangencial, sobre todo a través del tratamiento de los archivos, cuando se les

⁷⁵ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, Colección *Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 4.

⁷⁶ Bloch, M., *Apología para la historia o el oficio del historiador*, op. cit., p. 53.

⁷⁷ Lewis, G. J., *El paisaje de la Historia: cómo los historiadores representan el pasado*, Barcelona, Anagrama, 2004.

ha interrogado con nuevas preguntas, que si bien dan cuenta de la inclusión de una mayor gama de categorías de análisis, permiten a la vez diagnosticar las ausencias, vacíos y huecos existentes sobre los pasados. Si bien existen una amplia gama de tipos y formas de olvidos, nos centraremos en aquellos olvidos colectivos, aunque sin duda, está imbuido de olvidos individuales –demás está decir ampliamente investigaciones por la psicología- pero que exceden nuestras posibilidades de investigación. Por tanto, cuando nos referimos aquí al tratamiento del olvido, lo pensamos en una forma colectiva, proyectándonos en aquellas sociedades que han experimentado las violencias de Estado.

Entre las investigaciones ya clásicas que pusieron sobre la mesa estas y otras sospechas frente a aquellas fisuras u omisiones que presentaban las investigaciones históricas, destacamos los realizados por Arlette Farge, cuyos trabajos abordan una temporalidad que si bien aparta de nuestras preocupaciones, esto es, la sociedad francesa del siglo XVIII, logra situar la contemporaneidad de los hechos a través de ciertas tensiones que dan cuenta de la dinámica histórica. Farge, identifica las identidades de los márgenes, visibilizando en los archivos judiciales del período, a las mujeres en los espacios públicos. Desde las diversas áreas del conocimiento, se han desarrollado importantes reflexiones vinculadas al olvido, diagnosticando sus matices y resistencias, las que van desde aquellos que se instalan de forma institucional, y que considera dentro de sus espacios de acción, sólo aquellos vinculados a la polis y cuyas categorías se encuentren ligadas a la conformación del Estado- Nación, siguiendo la idea de Benedict Anderson de comunidades imaginadas. Indagando en aquellas narraciones que construyen los estados nación, donde se evidencian olvidos, silencios y huecos institucionalizados en pos de una «memoria patria» como lo denominaba Steve Stern.

Sin duda, entre los valiosos estudios que abordan este complejo tema, se sitúan aquellos que prestan atención –a propósito de las catástrofes humanas cometidas sobre todo en el siglo XX- a aquellos temas vinculados a las violencias de Estado, siendo el caso más emblemático, los ocasionados a

propósito del Holocausto judío. Considerando estas premisas, podemos indagar en algunas reflexiones que consideramos fundamentales para analizar ese «reverso» de la memoria, y que constituyen una parte fundamental del quehacer historiográfico, puesto que tras las preguntas sobre qué recordamos y cómo recordamos, incluimos interrogantes paralelas, esto es, qué olvidamos, cómo olvidamos y por qué olvidamos, más aún, de qué deberíamos acordarnos y qué o quiénes pueden autorizar a olvidar. Sin duda estos son cuestionamientos que no tienen –y nos atrevemos a precisar- ni tendrán una respuesta unívoca, por cuanto todo proceso social es complejo, único e irrepetible.

“Estrictamente, los pueblos y grupos sólo pueden olvidar el presente, no el pasado. En otros términos, los individuos que componen al grupo pueden olvidar acontecimientos que se produjeron durante su propia existencia; no podrían olvidar un pasado que ha sido anterior a ellos (...) un pueblo jamás puede “olvidar” lo que antes no recibió”⁷⁸.

La complejidad del análisis se advierte cuando ingresamos a estos estadios de la reflexión, esto es, que las generaciones, sólo pueden recordar aquello que han vivido, de lo que han sido parte. La gran mayoría de los autores consultados en esta investigación advierten que cuando se dice que un pueblo «recuerda», en el fondo lo que se está planteando es que un tipo de pasado fue transmitido de manera activa a las generaciones contemporáneas, a través de lo que Yosef H. Yerushalmi ha denominado «canales y receptáculos de la memoria» y que Pierre Nora llama «los lugares de memoria», y que es resignificado otorgándole un sentido propio. A los responsables de este trabajo de memoria, es lo que Elizabeth Jelin, ha denominado «empreendedores de memoria». Si bien, en páginas anteriores hemos intentado dar cuenta de los alcances que han tenido los postulados Maurice Halbwachs sobre la memoria colectiva, consideramos de gran

⁷⁸ Yerushalmi, Y. H., “Reflexiones sobre el olvido”, en Yerushalmi, Y. (et. al.), *Usos del Olvido*, op. cit., 17.

importancia también indagar sobre su reverso, esto es, sobre el olvido, pero aquél instalado en una sociedad, es decir, sobre el olvido colectivo, y que Yerushalmi identifica de la siguiente manera:

“Lo que llamamos olvido en el sentido colectivo aparece cuando ciertos grupos humanos no logran -voluntaria o pasivamente, por rechazo, indiferencia, indolencia, o bien a causa de una catástrofe histórica que interrumpió el curso de los días y las cosas- transmitir a la posteridad lo que aprendieron del pasado”⁷⁹.

Este autor, expone además que un pueblo «olvida» cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo, así lo que Yerushalmi denomina «ruptura con la transmisión» se puede producir de forma abrupta, o bien, al término de un proceso de erosión que ha abarcado varias generaciones.

“La experiencia humana incorpora vivencias propias, pero también las de otros que le han sido transmitidas. El pasado, entonces, puede condensarse o expandirse, según cómo esas experiencias pasadas sean incorporadas”⁸⁰.

Esta es una cuestión de una gran complejidad, porque de lo que se trata es de indagar en aquellas grietas, fracturas y huellas dejadas por la memoria. Tránsito en el Elizabeth Jelin, observa tres ejes de análisis, el primero es el que se refiere a quién es el que rememora y olvida, sabemos desde ya el gran debate vinculado a que si el individuo o la sociedad. Un segundo eje se refiere a los contenidos, es decir, vinculado a qué se recuerda y qué se olvida. Y un tercer eje referido al cómo y cuándo se recuerda y olvida. En este aspecto la autora advierte que esta última pregunta, surge debido a la ansiedad y angustia que genera la posibilidad del olvido. Plantea que tanto en el plano individual como social, las preocupaciones frente al olvido son similares. Subraya que en

⁷⁹ Ibíd., p.18.

⁸⁰ Jelin, E., “La memoria en el mundo contemporáneo”, en *Los trabajos de la memoria*, op. cit., p. 13.

el mundo occidental contemporáneo, el olvido es temido, ya que su presencia amenaza la identidad. Si bien tanto las capacidades de recordar y olvidar son singulares, no es menos cierto que no ocurren en individuos aislados, sino insertos en redes de relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas.

Concretamente el tema del olvido adquiere mayor relevancia cuando trata de aquello que genera rupturas frente a la vida cotidiana, o lo que algunos han llamado «memoria habitual», generando lo que algunos han llamado «memorias narrativas». Puesto que lo de que se trata no es mirar la memoria y el olvido desde perspectivas puramente cognitivas, esto es, de medir cuánto y qué se recuerda o se olvida, sino de ver los cómo y cuándo y relacionarlos con los factores tanto individuales de quién recuerda como con aquellos que son parte de una sociedad y que representan un tiempo histórico determinado, y que en palabras de Ricoeur corresponde a “la memoria como presente del pasado”⁸¹.

Por tanto, y en cuanto a lo que se refiere al olvido, corresponden a aquellas rupturas las que también nos interesan. En nuestro caso, y en un ámbito colectivo, aquellas asociadas a las violencias de Estado. Y en ello seguimos la idea de Elizabeth Jelin y otros analistas, quienes instalan su preocupación “por las huellas de las dictaduras que gobernaron el Cono Sur de América Latina entre los años sesenta y la década de los ochenta, y lo elaborado en los procesos postdictatoriales en los años noventa”⁸².

En este aspecto, -como lo expresa Jelin- son los acontecimientos traumáticos los que conllevan grietas en la capacidad narrativa, generando huecos en la memoria, y que corresponderían a aquello inasequible, y que no permite dar un sentido al acontecimiento pasado, aquello que imposibilita incorporarlo narrativamente, pero que a su vez coexiste “su presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo que indica la presencia de lo traumático. En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío. Es la presencia de

⁸¹ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado*, op. cit., p. 16.

⁸² Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*., op. cit., p. 4.

esa ausencia, la representación de algo que estaba y ya no está, borrada, silenciada o negada”⁸³. Y es que es en aquellas memorias narrativas donde se pueden encontrar o construir los sentidos del pasado, así como las “heridas de la memoria, más que las memorias heridas”⁸⁴.

“En todo esto, el olvido y el silencio ocupan un lugar central. Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria total imposible. Esto implica un primer tipo de olvido «necesario» para la sobrevivencia y el funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y comunidades. Pero no hay un único tipo de olvido, sino una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan olvidos y silencios, con diversos «usos» y sentidos”⁸⁵.

Nuevamente seguimos aquí a Paul Ricoeur, quien identifica dos niveles de profundidad respecto al olvido. “En el nivel más profundo, éste se refiere a la memoria como inscripción, retención o conservación del recuerdo. En el nivel manifiesto, se refiere a la memoria como función de la evocación o de la rememoración”⁸⁶. El primer olvido, profundo e inexorable, se podría llamar también «definitivo», y que “responde a la borradura de hechos y procesos del pasado, producidos en el propio devenir histórico”. Ahora bien, Jelin, explica que existe dentro de este marco de análisis, aquellos pasados que parecían olvidados de forma definitiva, pero que vuelven a aparecer cobrando vigencia debido a “cambios en los marcos culturales y sociales que impulsan a revisar y dar nuevo sentido a huellas y restos, a los que no se les había dado significado durante décadas o siglos”⁸⁷.

“Las borraduras y olvidos pueden también ser producto de una voluntad o política de olvido y silencio por parte de actores que

⁸³ Ibíd., p. 28.

⁸⁴ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado*. Citado por Jelin, E., p. 28.

⁸⁵ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*., op. cit., p. 29.

⁸⁶ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado*., op. cit., p. 53.

⁸⁷ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*., op. cit., p. 29.

elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros, impidiendo así recuperaciones de memorias en el futuro – recordemos la célebre frase de Himmler en el juicio de Núremberg, cuando declaró que la «solución final» fue una «página gloriosa de nuestra historia, que no ha sido jamás escrita, y que jamás lo será». En casos así, hay un acto político voluntario de destrucción de pruebas y huellas, con el fin de promover olvidos selectivos a partir de la eliminación de pruebas documentales”⁸⁸.

Este es un tema de gran alcance, ya que toda política de conservación y de memoria, al seleccionar huellas para preservar, conservar o rememorar, tiene implícita una voluntad de olvido. Varios son los autores que nos recuerdan a este respecto la responsabilidad de los historiadores e investigadores, cuando eligen qué contar, qué representar o qué escribir en un relato⁸⁹. De lo anterior, podemos deducir que lo que efectivamente deja el pasado son «huellas» ya sea simbólicas, materiales, psíquicas, todas las que necesitan ser evocadas y ubicadas en un marco que les otorgue sentido.

En este aspecto Paul Ricoeur, expone que nos encontramos frente a un segundo tipo de olvido, “que no consiste en la pérdida de las huellas o en la destrucción o disolución de los restos del pasado, sino en la aparición de impedimentos para acceder a nuestros recuerdos”⁹⁰. Desafío que en palabras de Ricoeur, se trata de “atravesar el muro que nos separa de esas huellas”⁹¹. El problema que subyace no es la falta de huellas sobre ese pasado, sino más bien, los dispositivos de represión instalados desde diversos escenarios, que evitan llegar a ese tipo de huellas y por tanto de elaboración de esas memorias.

⁸⁸ *Ibíd.*

⁸⁹ A este respecto es conocido el fructífero debate que ha existido entre la comunidad de historiadores españoles, sobre el tema de la memoria y la responsabilidad de los historiadores que se advierte en la bibliografía consultada en esta investigación. Véase Cuesta Bustillo, J. (ed.), *Memoria e Historia, Ayer nº 32*, Madrid, Marcial Pons, 1998. Carreras J. J. y Forcadell C., *Usos Públicos de la Historia*, Madrid, Marcial Pons, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

⁹⁰ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado.*, op. cit., p. 105

⁹¹ *Ibíd.*

Lo contrario a ello, es lo que Andreas Huyssen entre otros, denominan como “obsesión de la memoria”⁹².

Ricoeur identifica un tercer tipo de olvido, que denomina «evasivo», y que es aquel que se elude para evitar el sufrimiento, en un intento de no recordar aquello que puede herir. Este “se da especialmente en períodos históricos posteriores a grandes catástrofes sociales, masacres y genocidios, que generan entre quienes han sufrido la voluntad de no querer saber, de evadirse de los recuerdos para poder seguir viviendo”⁹³. En este aspecto, ese olvido que Paul Ricoeur entiende como no querer recordar aquello que puede herir, este olvido «evasivo», se puede transformar de acuerdo a su argumentación en un olvido «activo», situación que tiene lugar sobre todo en “el plano de la historia y de las grandes catástrofes históricas, en épocas de grandes pérdidas o de grandes masacres, como sucedió en Europa, por ejemplo, en tiempos de la Shoah”⁹⁴. Desde esta óptica, lo contrapuesto del olvido sería el silencio, existiendo en esta óptica silencios impuestos por temor a la represión de diversos tipos de regímenes de corte dictatorial.

“Los silencios durante la España franquista, la Unión Soviética stalinista o las dictaduras latinoamericanas se quebraron con el cambio de régimen. En estos casos, sobreviven recuerdos dolorosos que «esperan el momento propicio para ser expresados»⁹⁵.

Tanto Ricoeur, como Pollak y Jelin, coinciden en afirmar que estos silencios vinculados a esta tipología de memorias, también se da en torno a grupos sociales, no solo en lo referido al Estado, así como también en un ámbito más individual, donde la evidencia es concluyente. Este tema adquiere

⁹² Este tema es desarrollado en mayor profundidad en el primer capítulo de su libro. “Pretéritos presentes: Medios, política, amnesia”, en Huyssen, A., *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, México D. F., F.C.E., 2002.

⁹³ Semprún, J., *La escritura o la vida*, Barcelona, Tusquets, 1997. Citado por Jelin, E., *Los trabajos de la Memoria*., op. cit., p. 31.

⁹⁴ Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado*., op. cit., p. 105.

⁹⁵ Pollak, M., “Memória, esquecimento, silêncio”, en *Estudios históricos*, vol. 2, nº 3, 1989, p. 5. Citado por Jelin, E., *Los trabajos de la Memoria*., op. cit., p. 31.

gran relevancia, cuando se indaga en situaciones traumáticas, todas las que producen en las personas ese quiebre de la «memoria habitual», que mencionábamos en páginas anteriores. Específicamente, en situaciones de violencia de Estado, son fundamentales los estudios realizados a este respecto, frente al Holocausto, y los sobrevivientes de la Shoah. Michael Pollak, ha profundizado en el análisis de varios tipos, centrando sus investigaciones sobre las experiencias humanas frente a situaciones límite, las que producen identidades quebradas, fragmentadas, heridas, transformando las miradas y posibilidades de comprensión de fenómenos tan complejos como la experiencia concentracionaria durante el Holocausto⁹⁶.

Así también se encuentra la decisión de guardar silencio, de no querer narrar ni transmitir nada, de esconder, almacenar los vestigios y rastros en zonas recónditas, para cuidar a los otros, como una forma de no querer transmitir sufrimientos. Esta es una de las características que observamos al analizar los testimonios publicados de sobrevivientes de la violencia política en Chile, hecho que se constata al firmar con seudónimos. Pero “hay otra lógica en el silencio. Para relatar sufrimientos, es necesario encontrar el otro lado la voluntad de escuchar”⁹⁷. En relación a esta afirmación, observamos que efectivamente, existen ocasiones, como las transiciones políticas, que el afán de reconstruir lo vivido, se torna paradójico, ya que aparecen las disputas de la memoria, donde se vehicula a su vez, los horrores de ese pasado. Por último, se encontraría el olvido liberador, que libera de la carga del pasado para así poder mirar al futuro. Siguiendo a Ricoeur, Jelin explicita que,

“es el olvido «necesario» en la vida individual. Para las comunidades y grupos, el origen este planteamiento está en Nietzsche, al condenar la fiebre histórica y al reclamar un olvido que permita vivir, que permita ver las cosas sin la carga pesada de la historia”⁹⁸.

⁹⁶ Pollak, M., *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*, La Plata, Ediciones al margen, 2006.

⁹⁷ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria.*, op. cit., p. 31.

⁹⁸ *Ibíd.*, p. 32.

En este punto del análisis, nos encontramos con los problemas de los abusos de la memoria que se pueden presentar al mismo tiempo que los olvidos. Ricoeur sugiere que estas cuestiones se deben impedir a través adecuadas políticas de gestión del pasado, aunque bien es cierto, nunca está exento de caer en la manipulación de ese pasado. Problemática que está relacionada con lo expuesto por Andreas Huyssen y que se refiere a la fiebre memorialista, la que según su análisis, “sirvió para inventar nacionales en Europa, para legitimar Estados-nación imperiales y para brindar cohesión cultural a las sociedades en pleno conflicto tras la revolución industrial y la expansión colonial”⁹⁹.

1.2.- Usos y tipologías de la memoria

Las investigaciones en torno a los usos y alcances del concepto de memoria, han sido abundantes, encontrándose entre las fundacionales y más importantes, las realizadas por el sociólogo Maurice Halbwachs¹⁰⁰, -discípulo de Émile Durkheim- que muere en uno de los tantos campos de concentración de la primera mitad del pasado siglo. Halbwachs “funda con *Les cadres sociaux de la mémoire*, (...) la sociología de la memoria”¹⁰¹, en este estudio elabora una diferenciación entre la memoria individual y memoria colectiva, entendiendo a ésta última como una acción de reconstrucción que realiza el conjunto humano con las motivaciones afectivas y racionales que el grupo comparte en el presente. Desde esta perspectiva, la función de la memoria es que “no revive el pasado, sino que lo reconstruye”¹⁰², entendiéndola como “(...) una corriente continua de pensamiento, de una continuidad tal que no tiene nada de artificial, porque ella no retiene nada del pasado que no esté viviente o sea capaz de vivir en la consciencia del grupo que la mantiene”¹⁰³.

⁹⁹ Huyssen, A., *En busca del futuro perdido*, op. cit., p. 26.

¹⁰⁰ Halbwachs, M., en 1944 fue detenido junto a su hijo por la Gestapo, para luego ser enviado a Buchenwald donde murió en 1945.

¹⁰¹ Carreras Ares, J. J., “¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir Historia?”, en Sabio A., Forcadell C. (coord.), *Las Escalas del pasado: IV Congreso de Historia Local de Aragón*, Barbastro, Instituto de Estudios Altoaragonés/ UNED, 2005, p. 18.

¹⁰² Halbwachs, M., *Los Marcos Sociales de la Memoria*, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 403.

¹⁰³ Halbwachs, M., *La Memoria Colectiva*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, p. 54.

Explica que nuestros recuerdos tienen cierta sintonía con la historia de la que somos parte, y que además están relacionados con recuerdos comunes adscritos al grupo, por tanto, tienen una relación de alteridad. Siguiendo a Marie-Claire Lavabre, consideramos que la propuesta de Halbwachs articula tres tesis.

“El pasado no se conserva, sino que es reconstruido a partir del presente. Después, dado que el individuo aislado es una ficción, la memoria del pasado no es posible sino en razón de los marcos sociales de la memoria, o a la inversa, la memoria individual no es real sino en tanto que partícipe de la memoria colectiva. Por último, existe una función social de la memoria. El pasado, mitificado, es utilizado para justificar las presentaciones sociales del presente. En otros términos, la memoria es *efecto del presente*, como lo es del pasado”¹⁰⁴.

Análogamente, inferimos que aquellas condiciones mediante las cuales recordamos, se inscriben en fronteras comunes “que condicionan la memoria de los individuos, a través de procesos de intercomunicación, de dominio y a través del mismo lenguaje”¹⁰⁵. Enfatizando en aquello que en su momento subrayó Marc Bloch, referido a “no olvidar que cuando se habla de memoria colectiva se está hablando, en definitiva, de hechos de comunicación entre individuos”¹⁰⁶. De igual modo, resulta interesante analizar los procesos de socialización de los recuerdos a través por ejemplo, del ámbito pedagógico, donde se intenta re-presentar cierto pasado y silenciar otros, y en el que “guardar silencio es en sí mismo un acto de comunicación”¹⁰⁷. O bien, cuando analizamos testimonios de víctimas de procesos de violencia, donde estas

¹⁰⁴ Lavabre, M.C., “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos”, en Aróstegui J., Godicheau, F. (eds.), *Guerra Civil. Mito y memoria*, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velásquez, 2006, p. 46.

¹⁰⁵ Carreras Ares, J. J., “¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir Historia?”, op. cit., p. 19.

¹⁰⁶ Bloch, M., “Mémorie collective, tradition et coutume. A propos d’un livre récent”, *Revue de Synthèse Historique*, XL, nº 118-120, 1925. Citado en Lavabre, M.C., “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos”, op. cit., p. 47.

¹⁰⁷ Burke, P., *Hablar y Callar: Funciones sociales del lenguaje a través de la historia*, Barcelona, Gedisa, 1996, p. 155.

formas de comunicación, nos indican otras formas de abordar, o más aún representar ese pasado. Halbwachs propone que el recuerdo puede ser caracterizado como un proceso de reconstrucción imaginativa, en el que se integran imágenes específicas formuladas en el presente, en particulares contextos identificados con el pasado. “Las imágenes recordadas no son evocaciones de un pasado real sino re-presentaciones de él. Y la forma que esta representación adquiere, depende del contexto social que la re-significa”¹⁰⁸. Para Halbwachs, el recuerdo no se conserva: se reconstruye a partir del presente. Es por ello que insiste en que;

“Las exigencias presentes de la sociedad reglan la posibilidad de acordarse o no de un acontecimiento, al mismo tiempo que imponen la deformación del pasado. La memoria se inscribe en una materialidad, un espacio y lugares específicos donde se reconocen los grupos activos en la sociedad. Desde este punto de vista, la memoria es necesariamente plural, multiforme y se inscribe en la multiplicidad de tiempos sociales y espacios diferenciados de los cuales se apropian los grupos”¹⁰⁹.

Tema no menos complejo, por cuanto advertimos un entramado epistémico puesto que se considera al recuerdo como huella o vestigio del pasado. En esta línea Peter Burke señala que;

“Fue Marc Bloch quién señaló los peligros de tomar términos de la psicología individual y simplemente añadirles el adjetivo “colectivo” (...). Pese a esta crítica, Bloch adoptó la expresión de *mèmoire collective* y analizó las costumbres campesinas en estos términos interdisciplinarios, observando, por ejemplo, la

¹⁰⁸ Mudrovic, M. I., *Historia, narración y memoria: Los debates actuales en filosofía de la historia*, Madrid, AKAL, 2005, p.116.

¹⁰⁹ Lavabre, M. C., “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007, p.9, disponible en, <http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php. 2007>. [Consultado en diciembre de 2010].

importancia de los abuelos en la transmisión de las tradiciones (...)"¹¹⁰.

La socióloga Marie-Clarie Lavabre, explica en uno de sus artículos las diferencias existentes en la forma en cómo elaboran sus reflexiones sobre la memoria, Bloch y Halbwachs, profundizando en los argumentos que el historiador argumentaba sobre los postulados del autor de los marcos sociales de la memoria, exponiendo que;

“el finalismo y antropofornismo de sus fórmulas, lo invitaba a reflexionar acerca de los mecanismos concretos que autorizan la memoria colectiva, las modalidades necesarias para la transmisión del pasado, la relación de los individuos con el grupo y las consecuencias «prácticas y políticas» de la existencia de la memoria colectiva”¹¹¹.

Aunque el pionero trabajo de Halbwachs, recibió en su momento críticas, no es menos cierto que el combate institucional para fundar la sociología de la memoria, desde cualquier punto de vista hoy podemos darlo por superado, en este aspecto Marie Claire Lavabre, argumenta que las pugnas disciplinarias vinculadas a sus objetos de estudio -particularmente en lo que se refiere a la historia y la sociología- serían caducas, cuestión que se ve influida porque “la toma en consideración de la «memoria», es decir, de las representaciones del acontecimiento y del sentido retroactivo del acontecimiento, constituye, sin duda, un punto de vista epistemológico innovador en historia”¹¹². No obstante, Lavabre explicita que han sido los historiadores los que han tratado con mayor amplitud la cuestión de la memoria. Ello porque -de acuerdo a su análisis- han estado más atentos a los discursos públicos sobre el pasado y de otro, puesto que la reflexión sobre la memoria se ha encontrado demasiado centrada en la dualidad historia versus memoria.

¹¹⁰Burke, P., *Formas de Historia Cultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 67.

¹¹¹ Lavabre, M. C., “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”, op. cit., p. 10.

¹¹² Lavabre, M. C., “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos”, op. cit., p. 31. La autora nos remite al texto de Ricoeur, P., *Histoire, mémoire, oubli*, Paris, Seuil, 2000.

El trabajo fundacional de Pierre Nora, al que hacen referencia gran parte de las investigaciones que afrontan estas problemáticas, sigue la huella de Maurice Halbwachs, ya que aborda la relación entre la memoria y su marco espacial, presentando desde esta perspectiva una visión de la construcción histórica que le preocupaba a Nora en ese momento, esto es, la historia de Francia. Sin embargo, antes de la publicación de *Les lieux de mémoire*, Pierre Nora elaboró en un artículo de la colección «La Nueva Historia», dirigida por Jacques Le Goff, una excelente definición del concepto de memoria, artículo que según Marie-Claire Lavabre abre el “momento-memoria”¹¹³, ya que anuncia el proyecto posterior, esto es «los lugares de memoria», no sin antes exponer las complejidades del propio término, a su juicio señaló:

“Hablar de memoria colectiva plantea el mismo tipo de dificultades y pone en juego similares problemas que hace treinta años la palabra «mentalidades». La expresión es por demás vaga y ambigua, pero su utilización estratégica puede ser fecunda para la renovación historiográfica”¹¹⁴.

En este texto sin duda pionero, Nora elaboró también una definición preliminar sobre estos temas, argumentando que: “En una primera aproximación, la memoria colectiva es el recuerdo o conjunto de recuerdos, conscientes o no, de una experiencia vivida y/o mitificada por una colectividad viviente, de cuya identidad el pasado forma parte integrante”¹¹⁵. Enfatizó sobre la necesidad de tomar a la memoria como objetivo de estudio de la historia, esto es que, “el análisis de las memorias colectivas puede y debe transformarse en la punta de lanza de una historia que se defina como contemporánea”¹¹⁶. Siguiendo a este historiador, Marie- Claire Lavabre señala que “este «divorcio liberador y decisivo» entre historia y memoria permite definir la memoria como algo diferente de la historia, y la historia misma como

¹¹³ Ibíd., p. 39.

¹¹⁴ Ibíd., p. 40. La autora se refiere al texto de Nora, P. “Mémorie collective”, en Le Goff, J. (dir.), *La nouvelle histoire. Les encyclopédies du savoir moderne*, Paris, RETZ, 1978.

¹¹⁵ Ibíd.

¹¹⁶ Ibíd.

algo diferente de la memoria”¹¹⁷. Y esta es una de las grandes cuestiones que más tarde generará innumerables debates y reflexiones, entre las más profundas encontramos las elaboradas por los historiadores españoles, entre los que destacan, Julio Aróstegui y Josefina Cuesta.

En consecuencia, las aportaciones tanto de Halbwachs como de Nora, “ponen de relieve que la memoria individual no es sino una instancia social de recordar”¹¹⁸. Insistiendo Nora, en que la memoria colectiva es “lo que queda del pasado en lo vivido de los grupos, o eso que los grupos hacen del pasado”¹¹⁹, enfatizando además que “la memoria es un problema histórico reciente, nuestro problema”¹²⁰, en ello también coinciden Aróstegui y Cuesta, colocando de manifiesto no sólo la relación dinámica entre historia y memoria, sino también la complejidad que abarcan estos temas, de los cuales muchas veces, somos coetáneos. Por ello destacamos la utilidad del concepto para el análisis histórico, ya que permite examinar las múltiples formas en que el pasado se registra y recuerda. Y que en palabras de Nora podemos centrar nuestras preocupaciones, “no en el recuerdo, sino la economía general y la administración del pasado en el presente”¹²¹. En este aspecto Lavabre explica que lo que la memoria histórica designa no es lo vivido, ni la experiencia, ni los recuerdos, ya que esto puede ser lo propio de la memoria colectiva, sino más bien, el proceso por el cual los conflictos y los intereses del presente operan sobre la historia. Plantea además que se denominará memoria histórica a los usos del pasado y de la historia, tal como se la apropian grupos sociales, partidos, iglesias, naciones o Estados.

Estas preocupaciones se suman a la de otros analistas, quienes insisten en elaborar mayores precisiones cuando se aborda como un todo la «memoria colectiva», puesto que de un lado, reflejan las complejas equivalencias entre

¹¹⁷ Ibíd.

¹¹⁸ Mudrovcic, M. I., op. cit., p. 115.

¹¹⁹ Le Goff, J., *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona, Paidós, 1991, p. 178.

¹²⁰ Cuesta, J., *Historia del presente*, Madrid, Eudema Historia, 1993, p. 41.

¹²¹ Nora, P., *Les Lieux de mémoire*, III, *Les France*, 3, Paris, Gallimard, 1992, p. 25. Citado por Lavabre, M. C., “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos”, op. cit., p. 41.

memoria individual y colectiva, y de otro, puesto que resulta innegable la influencia que ejerce sobre los individuos, la sociedad y cultura a la que pertenecen. Desde la filosofía Paul Ricoeur, propuso encontrar un lugar común entre memoria individual y colectiva, argumentando que los sitios de proximidad podían provenir de otras veredas, vinculadas sobre todo a qué se recuerda, cómo se recuerda y quién o quiénes recuerdan. Esta explicación, tiene cierta concordancia con la idea de «elasticidad» que más tarde formulará desde la historia, Josefina Cuesta.

“Esta zona es esa de la relación con los próximos, sobre quienes tenemos derecho de atribuir una memoria de un género distinto. Los próximos, esas personas que cuentan para nosotros y por quienes contamos, están situadas en una gama de variaciones de distancias en la relación entre sí y los otros. Variación de distancia, pero también variación en las modalidades de atribución activas y pasivas de juegos de distanciamiento y de aproximación que hacen de la proximidad una relación dinámica que no se detiene en su movimiento”¹²².

Desde esta perspectiva Ricoeur, plantea que la memoria personal se caracteriza por tres rasgos, el primero porque es radicalmente singular, el segundo puesto que está relacionado con el vínculo original de la conciencia con el pasado, el que reside en la memoria, y por último, debido a que “se encuentra vinculada a la sensación de orientarse a lo largo del tiempo, del pasado al futuro”¹²³. Siguiendo esta línea de reflexión, seríamos el reflejo de nuestro pasado, en que el presente es la manifestación de aquello sucedido. En este aspecto, resulta interesante considerar las conceptualizaciones desarrolladas por Reinhart Koselleck, sobre «conciencia histórica», a la que atribuye la imagen de huellas sedimentadas, en las que se instalan nuestros deseos, miedos y proyectos. Por tanto, “sólo existiría el espacio de experiencia

¹²²Ricoeur, P., *La Memoria, la Historia y el Olvido*, Madrid, Trotta, 2003, pp. 161-162.

¹²³Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*, Madrid, Arrecife-UAM, 1999, p. 17.

cuando éste se opone a un horizonte de espera”¹²⁴. Y la dialéctica entre ambos polos, aseguraría la dinámica de la conciencia histórica. Desde esta perspectiva, lo que entendemos por «tiempo histórico» es aquel “intercambio entre el espacio de experiencia y el horizonte de espera que se lleve a cabo en el presente vivo de una cultura”¹²⁵.

La magnitud de este debate alcanza profundas reflexiones, más aún si toca cuestiones asociadas a enfoques epistemológicos existentes entre historia y memoria, los que plantean aproximaciones hacia formas en que éstos se materializan y toman consistencia como argumento teórico, sobre todo en la operación historiográfica. Dentro de estos debates, las reflexiones de Maurice Halbwachs y Pierre Nora aportan importantes luces para indagar desde otros flancos la historia del tiempo presente, puesto que develan –entre otras– aquella idea de identidad hegemónica junto a la de-construcción de las grandes narraciones, consecuencia de la crisis de referentes esgrimidos al alero del metarrelato moderno. En este aspecto Gérard Namer nos remite a los diferentes compartimentos que elabora Halbwachs para el estudio de las memorias, esto es;

“La memoria y los diferentes conceptos que encierra -memoria individual, memoria social, memoria colectiva, memoria popular, culta, memoria religiosa y musical, marcos sociales de la memoria y corrientes de memoria y sus relaciones con el espacio y tiempo según la concepción sociológica de Halbwachs”¹²⁶.

Coincidiendo con lo que plantea Josefina Cuesta, estas distintas tipologías y conceptos de memoria “nos ponen en la pista de la existencia de una multiplicidad de memorias en una sociedad dada (...)”¹²⁷. Concentración de memorias que plantea notables problemas epistemológicos y metodológicos a

¹²⁴ Ibíd., p. 22.

¹²⁵ Ibíd.

¹²⁶ Cuesta, J., “*Memoria e historia. Un estado de la cuestión*”, en *Memoria e Historia, Ayer* n° 32, op. cit., p. 206.

¹²⁷ Cuesta, J., *Historia del presente*, op. cit., p. 45.

la hora del análisis de la memoria y de la estructuración, articulación y jerarquización de todas ellas, en un momento dado.

“La memoria se puebla de «estructuras interactivas» a las que se denomina *esquemas*. Estos esquemas se abstraen de la experiencia de forma que constituyen modelos del mundo exterior, que sirven a su vez «para procesar» toda nueva información. La memoria no es, pues, una reproducción del mundo exterior, sino un aparato para reinterpretarlo”¹²⁸.

Julio Aróstegui, argumenta que la memoria no se limita a la posibilidad de recordar y de traer «al presente el pasado», sino que también tiene la capacidad de seleccionar. Problemática que no es ajena a la de las relaciones entre la memoria y el poder, como lo menciona entre otros, Josefina Cuesta. Asimismo, Paul Ricoeur comienza su estudio sobre la fenomenología de la memoria a partir de dos preguntas “¿de qué hay recuerdo?, ¿de quién es la memoria”¹²⁹. Interrogantes que sin duda cruzan y en algunos casos exceden nuestro estudio, puesto que se ingresa a lo que la socióloga argentina Elizabeth Jelin, denomina las «disputas sobre la memoria». Pero aún más, porque también tiene relación con los usos de las memorias, y con los silencios y olvidos. “El silencio y el olvido tienen «usos», ejercen un papel en el mantenimiento de las vivencias y ocupan un lugar de relevante importancia en la reproducción social y en la plasmación del discurso histórico”¹³⁰. En esta misma línea Nora, propone estudiar la memoria como “un lugar de encrucijada entre las políticas públicas, cultura y tradición que consolidan un espacio de y para la memoria y para la transmisión del recuerdo”¹³¹. La instalación de estos debates y tensiones, permiten indagar en aquellos pasados elaborados por las distintas sociedades, explorando otras geografías del conocimiento, antes

¹²⁸ Sierra Diez, B., “¿Cómo está representada la experiencia de la memoria? En psicología cognitiva de la memoria”, en *Revista Anthropos*, nº 189-190, Barcelona, Anthropos, 2000, p. 126. Citado por Aróstegui, J., *La historia vivida. Sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 158.

¹²⁹ Ricoeur, P., *La memoria, la historia y el olvido*, op. cit., p. 19.

¹³⁰ Aróstegui, J., *La historia vivida.*, op. cit., p. 159.

¹³¹ Cuesta Bustillo, J., “*Memoria e historia. Un estado de la cuestión*”, en *Revista Ayer* nº 32, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 209.

insospechadas, colocando de manifiesto -y desde otro ámbito-, las reflexiones de Eric Hobsbawm sobre la «invención de tradición», en que tanto lugares, símbolos y palabras, así como los gestos y por cierto el silencio¹³², entendido como un acto político, dan cuenta de las formas de historicidad.

En consecuencia, qué es lo colectivo e individual de la memoria, qué elementos hacen que transiten de una esfera a otra. Es aquí dónde lo que propuesto por Halbwachs se hace necesario, porque esa instancia social de recordar permite que nuestra relación con el pasado -próximo o lejano- requiera de esos marcos sociales en los que según este autor nos movemos. Ahora bien, existe dentro de este entramado que problematiza el tema referido a la memoria, lo que refiere a que cuando hablamos de memoria, a qué nos referimos específicamente. Dentro de los análisis realizados, adscribimos a aquellos que se elaboran desde la óptica de las ciencias sociales y humanidades, que coinciden que en general, tema que suscita mayor preocupación es el que se refiere a las memorias traumáticas. Si bien en un pequeño texto Cuesta Bustillo da cuenta de los diferentes tipos de memoria, siguiendo por cierto, la ruta diseñada por Halbwachs, advertimos que este tipo de memoria es el que ha despertado mayor interés dentro de la comunidad científica. Este hecho tiene mucha relación con la perspectiva de análisis en la que se inscribe esta investigación, esto es, la historia del tiempo presente, que tiene entre sus premisas el uso de la memoria como fuente para el análisis histórico.

Como lo planteado varios autores, «vivimos el tiempo de la memoria», junto al «tiempo del testigo», como lo han denominado ya varios analistas, y que unido a la pregunta ¿por qué y para qué recordar?, se evidencian como la matriz que corona el final del siglo XX, donde la impronta de los *Nunca Más*, es uno de los anhelos en que coinciden las sociedades del siglo XXI. “Uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años es el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la

¹³² Véase Le Bretón, D., *El silencio, aproximaciones*, Madrid, Sequitur, 2009. (*Du silence*, París, Métailié, 1997). Burke, P., *Hablar y callar funciones sociales del lenguaje a través de la historia*, op. cit.

política de las sociedades occidentales”¹³³. Julio Aróstegui, explica estas preocupaciones, referidas a la memoria histórica, las que de acuerdo a su análisis, se vienen masificando sobre todo a partir de 1990, y que desde diversos escenarios tanto del quehacer político como cultural, se observa un reclamo de grupos sociales por preservar la memoria, en especial aquello que se refiere a “la memoria del dolor, de las guerras, de las injusticias, la represión y los genocidios”¹³⁴. Estas inquietudes se extienden también hacia la forma en cómo se aborda la problemática del estudio de la memoria, donde a su juicio, se observa por un lado una cierta saturación de memoria, y por otro, la necesidad de convertirla en un objeto historiográfico, cuya característica también es la de ser definidora de pautas culturales¹³⁵.

Como lo expone Cuesta, “la memoria emerge como objeto mismo de la historia, objeto nuevo y pujante”¹³⁶, y con Nora, afirmamos que “la memoria es un problema histórico reciente, nuestro problema”¹³⁷, como hemos subrayado en páginas anteriores. Ahora bien, este progresivo incremento de las diversas investigaciones y reflexiones referidos este tema, ha permitido la aceptación de este término no sólo por la historiografía, sino también se ha incorporado en la vida cotidiana, aunque ello no signifique que exista una delimitación precisa del concepto. Pese a ello observamos un importante avance en el campo historiográfico, que se traduce no sólo en la cantidad de la producción intelectual, sino en la calidad de ésta. Sin renunciar tanto al desafío como complejidad que tiene el estudio de estas problemáticas, creemos necesario ingresar en las mixturas que éstas comportan, sobre todo, porque nuestro trabajo se sitúa en una tríada que media entre el tiempo, la memoria y la historia, lo que sin duda hace mucho más difícil nuestra empresa, pero también la sitúa como necesaria, más aún, cuando analizamos «nuestro tiempo».

¹³³ Aróstegui, J., *La historia vivida*, op. cit., p. 161.

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ *Ibíd.*

¹³⁶ Cuesta Bustillo, J., *Historia del presente*, op. cit., p. 41.

¹³⁷ *Ibíd.*

En esta senda, Cuesta explica que para Henry Rousso la memoria es la presencia del pasado, o en otros términos “una reconstrucción psíquica e intelectual que comporta, de hecho, una representación selectiva del pasado”¹³⁸. Proponer una clasificación –en este caso de la memoria-, sin duda es azaroso, sin embargo, varios analistas han realizado con mayor o menor exactitud, tipificaciones que nos permiten de alguna manera, realizar análisis más precisos cuando ingresamos a los temas de memorias. Cuesta explica en su texto *Historia del presente*: “La clasificación inicial de M. Halbwachs ha sido completada, en muchos casos, con experiencias posteriores de historiadores como R. Frank, M.C. Lavabre, G. Namer o H. Rousso, entre otros”¹³⁹. Si bien existen otras divisiones del concepto, a propósito de su mayor difusión, coincidimos con la historiadora en que resultan mucho más operativos los conceptos de “memoria individual, memoria colectiva, memoria oficial, memoria pública, memoria popular, memoria culta, y memoria social o difusa. Algunas obras introducirán algún otro como memoria común, memoria manipulada, borrada o recobrada”¹⁴⁰. En este aspecto recordamos las ya clásicas palabras de Maturana, cuando declara que:

“Los seres humanos somos seres sociales: vivimos nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de otros. Esto, en general, lo admitimos sin reservas. Al mismo tiempo los seres humanos somos individuos: vivimos nuestro ser cotidiano como un continuo devenir de experiencias individuales intransferibles. Esto lo admitimos como algo ineludible. Ser social y ser individual parecen condiciones contradictorias de existencia”¹⁴¹.

Así también lo expone Paul Ricoeur, al referirse a aquella dualidad que algunas veces se tiñe de opacidad, por cuanto es muy compleja la diferenciación:

¹³⁸ Ibíd., p. 41.

¹³⁹ Ibíd., p. 42.

¹⁴⁰ Ibíd.

¹⁴¹ Maturana, H., “Biología del fenómeno social”, en *La realidad: ¿objetiva o construida? Fundamentos biológicos de la realidad*, Barcelona, Anthropos, 1997.

“«Nunca estamos solos» -uno recuerda solo con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares-. Esos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas, que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales”¹⁴².

Esta afirmación que viene desde otros horizontes del conocimiento, sin duda tiene mucha relación con lo que hemos estado planteando, y que en palabras de Halbwachs, podríamos referirnos como esa instancia social de recordar, frente a experiencias que si bien han sido personales, tienen un marco común que tiende a unificarlas, y en algunos casos a homogeneizarlas, como lo expone Cuesta.

“La sociedad, como origen de la memoria individual, se expresa en la presencia del otro como catalizador, estímulo y refuerzo o contraste de nuestro recuerdo. El otro suscita o completa nuestra memoria con sus preguntas, y ésta se legitima, debilita o refuerza en confrontación con el. Los demás pueden proporcionarnos, junto a la común experiencia de un pasado, la experiencia de una certidumbre personal y social en el presente. La memoria individual es social no sólo en la experiencia intersubjetiva, en la que se produce la experiencia y se rememora el recuerdo, lo es también por su carácter intelectual. Los conceptos en los que se formula y deposita son nociones comunes a diversos individuos, propias de una sociedad y pertenecientes a un determinado momento histórico; se enraizan en la sociedad”¹⁴³.

¹⁴² Ricoeur, P., *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*, Madrid, Arrecife-UAM, 1999., citado por Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, op. cit., pp.20-21.

¹⁴³ Cuesta Bustillo, J., *Historia del presente*, op. cit., pp. 42-43. Respecto al tema del estudio de la otredad, véase Vega León, E. (ed.), *Los rostros del otro. Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad*, Barcelona, Anthropos, 2009.

Como hemos subrayado en páginas anteriores, este debate se advierte desde los orígenes del estudio de la memoria, es así que tanto Halbwachs como Namer desarrollan una clara diferenciación entre memoria social y memoria colectiva, afirmando que:

“Su diferencia radica en que aquella corresponde a toda la sociedad, en general, y se define por un carácter genérico, difuso, casi inaprensible, mientras que por memoria colectiva se entiende la correspondiente a un grupo determinado”¹⁴⁴.

De la misma forma, Josefina Cuesta, recopila los diferentes tipos de memoria, ejercicio que nos ayuda para comprender este entramado de memorias. La historiadora, propone tres grandes diferenciaciones para el estudio de la memoria. La primera es la «memoria social», y que de acuerdo a su análisis se puede entender como “el conjunto de nociones o saber vago que reposa en el entorno y en el medio social. Como la individual, se caracteriza por su escasa definición y conceptualización”¹⁴⁵. Y que según estas directrices, “este tipo de memoria se sitúa fuera de los grupos y de sus respectivas memorias y, aunque actúa como marco, origen y consecuencias de éstas, no propicia ninguna homogeneidad de grupo”¹⁴⁶. La segunda es la «memoria popular», Cuesta expone que tiene de común con la memoria social su carácter interindividual, pero que a su vez, no pertenece a un grupo establecido, y por tanto no es «colectiva». La historiadora enuncia que este tipo de memoria se distingue “por su carácter más concreto y definido, y que a través de ella, se transmitirían y organizarían, los ritmos de trabajo, las costumbres y tradiciones, y ciertos hábitos sociales”¹⁴⁷. Y en contraposición a este tipo de memoria encontramos la «memoria culta», también denominada por Cuesta como «memoria especializada», y que según su análisis sería aquella “recogida y

¹⁴⁴ Cuesta Bustillo, J., *Historia del Presente*, op. cit., p. 42.

¹⁴⁵ *Ibíd.*, p. 43.

¹⁴⁶ *Ibíd.*

¹⁴⁷ *Ibíd.*, p. 44. De forma análoga, el análisis que proponemos, tiene relación con los clásicos estudios provenientes de la sociología. Véase Mauss, M., *Sociología y antropología*, Madrid, Tecnos 2ª ed., 1991, (1ª ed. 1979). Elias N., *El proceso de la civilización investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, F. C. E., 1989. Bourdieu, P., *La distinción criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1988.

transmitida por los historiadores cuya acción sería, de ordinario, desmitificadora y deletérea. Aunque no por ello deja de ejercer su influjo en la memoria colectiva, en la que provoca una cierta adaptación”¹⁴⁸. Por último, encontramos la «memoria oficial», que según la autora podemos identificar como “la de las instancias del Estado –o de organismos oficiales- [que] intenta la glorificación, mitificación o, en otros casos, la ocultación para elaborar, propagar y mantener una identidad y una memoria «nacionales»”¹⁴⁹.

Esta diferenciación general propuesta por Josefina Cuesta, nos permite tener ciertos presupuestos sobre las formas de memoria que se observan cuando ingresamos a este tipo de estudios. Considerando en ello lo que entenderemos por memoria histórica, esto es, “no como la memoria culta de los historiadores, sino la apropiación oficial y selectiva de los recuerdos históricos del grupo”¹⁵⁰, tema que ha generado una abundante literatura y debates. Y que en palabras de Julio Aróstegui se puede entender cómo “(...) una especificación temporal de la memoria colectiva. Sería externa al individuo, objetiva y socializada”¹⁵¹. Sin embargo, coincidimos con Cuesta al exponer que si bien las diferentes definiciones de memoria, tienen elementos comunes, y que en una mirada rápida se puede apreciar que ésta es ilimitada, a poco andar se advierte lo contrario, esto es, su finitud, debido entre otros, a su carácter selectivo.

“Se formula en el lenguaje y a través de los esquemas mentales de cada época y grupo, (...). Es selectiva en la medida en que nunca es total ni omnicomprendensiva, y aquí radica su delimitación respecto a los hechos y su importancia”¹⁵².

¹⁴⁸ Cuesta, J., *Historia del Presente*, op. cit., p. 44.

¹⁴⁹ *Ibíd.*

¹⁵⁰ *Ibíd.*

¹⁵¹ Aróstegui, J., *La historia vivida.*, op. cit., p. 159.

¹⁵² Cuesta Bustillo, J., *Historia del Presente*, op. cit., 45. La historiadora señala además que, “una historia de la memoria lleva aparejada, inseparablemente unida, una historia del olvido”, p. 45. Para profundizar sobre estos temas véase Yerushalmi, Y. (et. al.), *Usos del Olvido*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998.

A su vez, también tiende a ser acumulativa, en la medida “en que cada experiencia humana se organiza en el eje de temporalidad y de la sucesión, lo que permite hablar de sedimentación y de una multiplicidad de memorias en reestructuración constante”¹⁵³. Afirmación que descansa en los análisis propuestos por Koselleck, referidos al horizonte de espera. Observamos por tanto, que la diversidad que caracteriza a las memorias es compleja, hecho del que dan cuenta muchos de los autores ya citados, por cuanto;

“plantea notables problemas epistemológicos y metodológicos a la hora del análisis de la memoria y de la estructuración, articulación y jerarquización de todas ellas, en un momento dado. Problemática que no es ajena a las de las relaciones entre la memoria y el poder”¹⁵⁴.

Cuestión que pone de manifiesto que tanto la memoria individual y colectiva, así como la memoria histórica, son construcciones en que la dimensión social no es meramente un contexto sino una causa, más aun comprendiendo que, “la memoria es una dimensión más de las relaciones sociales que precisa siempre una contextualización, contrastación y, sobre todo, objetivación”¹⁵⁵. Ahora bien, cuando nos adentramos en la búsqueda de una tipología de la memoria, constatamos aún más la complejidad del debate, por cuanto no evidenciamos una definición acabada de cada diferenciación, advirtiendo entonces, tal y como lo han señalado los innumerables autores estudiados, que –en cierta medida- es un concepto aún en construcción. Julio Aróstegui, entre otros historiadores, señala que según la función y el uso de la memoria se puede considerar como “factor de concienciación histórico-social y cultural, [ya que] que existen decisivas diferencias entre las memorias sociales justamente en relación con la experiencia”¹⁵⁶, elaborando también una diferenciación sobre los tipos de memoria:

¹⁵³ Ibíd.

¹⁵⁴ Ibíd.

¹⁵⁵ Aróstegui, J., *La historia vivida.*, op. cit., p. 160.

¹⁵⁶ Ibíd.

“Existen una memoria *directa*, llamada también, a veces, *espontánea*, frente a otra *adquirida o transmitida*, o, lo que es lo mismo, una memoria ligada a la experiencia vital, propia y directa, del individuo o el grupo, la memoria *viva*, y otra que es producto de la transmisión de otras memorias, de la memoria de los predecesores, la memoria *heredada*. Hay, en fin, una memoria *institucional* (...), cuyos contenidos son clave para la práctica y la reproducción social”¹⁵⁷.

Estos cruces de memorias resultan fundamentales para el análisis de la memoria histórica, puesto que siguen la línea argumentativa planteada por Maurice Halbwachs y descrita a su vez por Gérard Namer. Ahora bien, estos diferentes compartimentos, o formas de organizar, de dividir los diferentes tipos de memorias, dan cuenta de la dificultad metodológica que mencionábamos antes, pero también exponen un interés por objetivarla y de esta forma historizarla. En este contexto, es importante advertir que dentro de los análisis y estudios realizados a este respecto, la memoria, es fundamental para el desarrollo de la experiencia, tema que ha sido mucho más desarrollado desde la filosofía, y que excede nuestra investigación, sin embargo es importante al menos señalar que es a través de la experiencia desde donde conocemos el mundo, y en este acto de conocer, también tiene relación con nuestra propia forma de concebir el mundo, es decir, de cómo lo interpretamos y representamos¹⁵⁸. A este respecto, Aróstegui explica que tanto los grupos humanos como los individuos,

“atraviesan una trayectoria vital y social cuyo «registro» queda depositado o, mejor, activado, como «experiencia». La trayectoria temporal es rememorada y reactualizada por la memoria, de modo que la experiencia es un bagaje siempre presente a través del recuerdo y de la reordenación de las vivencias”¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Ibíd.

¹⁵⁸ Chartier, R., *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1992, pp.45-63.

¹⁵⁹ Aróstegui, J., *La historia vivida.*, op. cit., p. 178.

Estos argumentos nos llevan a reconsiderar una vez más, a la memoria como fuente para el estudio de la historia del tiempo presente, aquella que Aróstegui denomina «historia vivida». Si bien, subrayamos que aunque no es la única fuente para el estudio de estos pasados, ésta adquiere mayor connotación por cuanto –como hemos explicitado anteriormente- en la mayoría de los casos se está casi en presencia de los hechos, es decir, muchas de las veces, somos coetáneos de ellos. Y en esta perspectiva, el desafío desde las diferentes disciplinas preocupadas por estos temas, y más precisamente, por la historia, plantea importantes retos, tanto epistémicos como metodológicos, por ello la importancia de objetivar la memoria. En este contexto, Josefina Cuesta, explica que una de las características de la memoria como concepto, es su «plasticidad», pero al mismo tiempo, nos advierte sobre los riesgos de asociar concepciones que en cierta medida tienden a estar en sintonía, cuya opacidad presentan de manera difusa los elementos que estructuralmente la disocian, así como evidencian la constante tensión que se aprecia al indagar en las espesuras que ofrece la memoria como marco conceptual, reconociendo su diversidad en lo que se ha llamado “géneros de memorias”¹⁶⁰, observando que:

“La sociología de la memoria ha alcanzado un notable conocimiento de la memoria familiar mediante la aplicación de las más diversas variables de análisis: los tipos de memorias y sus lógicas organizativas, la finalidad que sostienen y la jerarquización que se origina entre ellas en el interior de la propia familia, su extensión temporal en el pasado, sus actitudes respecto a éste y los soportes en los que se apoyan, más las diferencias de género y edad, la diversidad del medio social y de actividad profesional de sus miembros”¹⁶¹.

Josefina Cuesta expone que la historiografía ha centrado su análisis de la memoria histórica en “tres grandes conjuntos: clase, pueblo y nación”¹⁶², insistiendo además en lo inabordable que resulta abarcar en un todo la

¹⁶⁰ Ibíd., p. 210.

¹⁶¹ Ibíd.

¹⁶² Ibíd.

memoria de una sociedad. Por ello tal vez la pertinencia metodológica de situar en compartimentos de «libre tránsito» las diferentes memorias, con el objetivo de que sean fácilmente aplicables para el análisis de los procesos históricos, considerando las debilidades que como fuente presenta la memoria, evidenciando los problemas latentes de cada sociedad. En este contexto, Cuesta argumenta que tanto la expansión de las fuentes como la emergencia de identidades antes ignoradas, ha permitido la irrupción de nuevas preguntas y enfoques sin duda dotan de mayores posibilidades de reflexión al estudio de la memoria.

Los enfoques y análisis que se realizan sobre estos temas tienen diversos énfasis y formas de comprenderlas, es decir, diferentes horizontes desde los cuales se pueden examinar estos pasados y las formas en cómo se han construido las narraciones sobre ellos, examinando los distintos mecanismos a través de los cuales se gestionan las memorias.

“(…) la historia, no cabe duda al seleccionar datos, crea una determinada memoria. Siempre social, y, por ende, siempre política. En nuestro caso, el compromiso ético con la finalidad del saber histórico lo exponemos sin cortapisas: crear memoria colectiva para la justicia. Para ello es decisivo que la historia muestre las razones de aquellos que no son esos «nosotros» encastillados en una cultura, una nación, una religión o un Estado, que nos enseñe el registro no sólo de las hazañas de los *nuestros*, sino sobre todo el sufrimiento de quienes padecieron a esos *nuestros*”¹⁶³.

Esta es una de las preocupaciones que desde la Historia y la filosofía, así como de las ciencias sociales se manifiesta de forma notoria, por cuanto, muchos de los analistas estudiados, coinciden en el compromiso ético que adquiere el investigar este tipo de problemáticas vinculados a la historia del

¹⁶³ Pérez Garzón, J. (et. al.), *La Gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder*, Barcelona, Crítica, 2000, p. 10.

tiempo presente, pero más aún, ligados a aquellos pasados cercanos, mediatos, de los cuales muchas veces somos coetáneos y cuyo «pasado pareciera que no pasa». Cuestión muy sintomática cuando los hechos que constituyen esos pasados, tienen una impronta traumática producto de violencias, sobre todo de aquellas ejercidas por el Estado.

Son estos temas los que han suscitado mayor interés en el último tiempo dentro de la comunidad académica pero también dentro de la sociedad civil. Comprobamos una vez más la vigencia de las tradiciones clásicas de la sociología, concretamente, aquellas referidas a los postulados de Maurice Halbwachs, puesto que hay un punto clave en su pensamiento, y esta es la noción de marco o cuadro social. “Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores”¹⁶⁴. Reconociendo que las memorias se construyen y cobran sentido en esos cuadros sociales, así como también que esta elaboración se inscribe en una representación del tiempo y espacio, que a su vez son culturalmente variables e históricamente construidas¹⁶⁵. Existiendo una intrínseca relación entre memoria e identidad, por cuanto “las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestras historias”¹⁶⁶.

Sin duda la vigencia de los planteamientos de Halbwachs, Namer, Nora, Ricoeur, tienen absoluta vigencia en el análisis de la historia del tiempo presente, más aún cuando se trata de examinar sociedades que han experimentado situaciones límite, producto de las violencias de Estado. Sus propuestas teóricas y metodológicas han traspasado las fronteras geográficas y culturales. Es así como la socióloga argentina Elizabeth Jelin, propone a partir de estas clásicas investigaciones, encontrar algunas herramientas para pensar

¹⁶⁴ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, op. cit., p. 20.

¹⁶⁵ *Ibíd.*, p. 23.

¹⁶⁶ Gillis, J. (ed.), *Commemorations: The Politics of National Identity*, New Jersey, Princeton University Press, 1994, p. 5. Citado por Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, op. cit., p. 25.

y analizar las presencias y sentidos del pasado, centrándose en tres ejes fundamentales:

“Primero, entender las memorias como procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. Segundo, reconocer, a las memorias como objeto de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder. Tercero, «historizar» las memorias, o sea, reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacio de luchas políticas e ideológicas”¹⁶⁷.

Esta investigación, publicada en diez volúmenes bajo el nombre de *Memorias de la Represión*, buscó promover los estudios sobre las memorias de la represión política en el Cono Sur de América Latina. El primer texto de esta colección titulado *Los trabajos de la memoria*, explora los alcances de los usos de las memorias. La autora explica que “referirse entonces a que la memoria implica «trabajo» es incorporarla al quehacer que genera y transforma el mundo social”¹⁶⁸. Sus aportaciones son fundamentales para nuestro análisis puesto que analiza las complejidades de la memoria, pero dentro de una situación traumática, incorporándola dentro de la temporalidad de violencia política ocurrida durante las dictaduras militares de América Latina. Sin embargo, bebe –insistimos- de los clásicos postulados analizados en nuestra investigación. La novedad de esta brillante investigación radica en incorporar en los análisis teóricos, siguiendo la experiencia europea, el pasado vinculado a las dictaduras militares en América Latina. Sin duda su enfoque de análisis y metodología no ha estado exento de algunas críticas, observan con cierta prudencia sus reflexiones sobre los trabajos de la memoria, las marcas y los emprendedores de memoria. Cuando Jelin se pregunta el segundo capítulo de

¹⁶⁷ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, op. cit., p. 2.

¹⁶⁸ *Ibíd.*, p. 14.

su libro “¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?”, pone en evidencia dentro de las tipologías de memorias, dos tipos fundamentales, la primera, siguiendo a Norbert Elias y Marcel Mauss, señala:

“La vida cotidiana está constituida fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos. El pasado del aprendizaje y el presente de la memoria se convierten en hábito y tradición. No hay nada «memorable» en el ejercicio cotidiano de estas memorias”¹⁶⁹.

A este tipo de comportamientos aprendidos los denomina «memoria habitual». Y por otro lado, argumenta que las rupturas de esas rutinas esperadas involucran al sujeto de manera diferente, en que compiten afectos y sentimientos que pueden llevar no sólo a una reflexión sino también a la búsqueda de sentido.

“(…) es este compromiso afectivo lo que transforma esos momentos y los hace «memorables». La memoria es otra, se transforma. El acontecimiento o el momento, cobra entonces una vigencia asociada a emociones y afectos, que impulsan la búsqueda de sentido. El acontecimiento rememorado o «memorable» será expresado en forma de narrativa convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato comunicable (...)”¹⁷⁰.

Esta es una «memoria narrativa», y para Jelin tiene dos elementos centrales, primero, puesto que el pasado cobra sentido en su conexión con el presente en el acto de rememorar, pero también en el acto de olvidar. Segundo en que la pregunta por el pasado es un proceso subjetivo. Por tanto “el acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en el

¹⁶⁹ Ibíd., p. 26.

¹⁷⁰ Ibíd., p. 27.

presente, por un deseo o sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla”¹⁷¹. Dentro de su investigación, Elizabeth Jelin advierte que son estas memorias las que le interesan por cuanto dentro de ellas “están las que pueden encontrar o construir los sentidos del pasado y las «heridas de la memoria» más que las «memorias heridas», que tantas dificultades tienen en constituir su sentido y armar su narrativa”¹⁷².

Coincidente con este análisis, es lo propuesto por Steve Stern en sus investigaciones. El lúcido trabajo de este historiador norteamericano dedicado a investigar la historia de América Latina, centra parte de sus reflexiones en el análisis de lo que denomina «memoria emblemática». Para desarrollar esta idea, se centra en el caso de Chile y lo que significó el golpe militar de 1973. Elabora una conceptualización y teorización sobre lo que significa y es la memoria emblemática, identificando sus criterios y procesos sociales a través de los cuales se construye. Argumenta que se debe conceptualizar cuáles son los «nudos», entendiendo por éstos a los grupos humanos, hechos y fechas y sitios o restos físicos, y que convocan múltiples tipos de memorias –y también de olvidos-, argumentando que:

“(…) la historia de la memoria y el olvido colectivo es un proceso de deseo y de lucha para construir las memorias emblemáticas, culturalmente y políticamente influyentes y hasta hegemónicas. Es una lucha para crear ciertos tipos de puentes entre la experiencia y el recuerdo personal y suelto por un lado, y la experiencia y el recuerdo emblemático colectivamente significativo por otro lado”¹⁷³.

Stern manifiesta que la «memoria emblemática», no es sólo una memoria, una cosa concreta y sustantiva, de un solo contenido. Más bien, es

¹⁷¹ Ibíd.

¹⁷² Ibíd., p. 29.

¹⁷³ Stern, S., “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como procesos histórico (Chile, 1973-1998), en Garcés M., *et. al.* (comps.), *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 2000, p. 13.

una especie de marco, una forma de organizar las memorias concretas y sus sentidos. Para su explicación toma como ejemplo el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, que como acontecimiento marca un antes y un después en la historia de este país, analizando las diversas memorias que se generan frente a este hecho. Subraya que la memoria emblemática es por tanto, un marco y no un contenido concreto, que también crea una forma de organizar el sentido de los recuerdos, de la contra-memoria y el debate.

“Da un sentido interpretativo y un criterio de selección a las memorias personales, vividas y medio sueltas, pero no es una sola memoria, homogénea y sustantiva. Los contenidos específicos y los matices no son idénticos ni de una persona a otra, ni de un momento histórico a otro. La memoria emblemática es una gran carpa en que hay un “show” que va incorporando y dando sentido y organizando *varias* memorias, articulándolas al sentido mayor. Este sentido mayor va definiendo cuáles son las memorias sueltas que hay que recordar, dándoles la bienvenida a la carpa y su show, y cuáles son las cosas en cuyo caso mejor es olvidarlas o empujarlas hacia los márgenes”¹⁷⁴.

En la investigación histórica que Steve Stern ha desarrollado durante varios años, y que tiene como centro del análisis el caso de Chile, donde examinó:

“las principales memorias emblemáticas que han ido construyendo los chilenos a partir de 1973, cuando trataron de definir cómo recordar el significado del once y cómo recordar la dimensión más controvertida del gobierno militar: la violencia política masiva que se ejercía desde el Estado”¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Ibíd., p. 14.

¹⁷⁵ Ibíd., p. 15.

Además, identificó cuatro memorias emblemáticas principales sobre los temas del golpe de Estado en Chile y la violación de derechos humanos, siendo estos: La memoria como salvación, como ruptura lacerante y no resuelta, como prueba de la consecuencia ética y democrática, y por último, la memoria como el olvido o caja cerrada, que a juicio del Stern, se trataría “de un olvido lleno y cargado de memoria. [Y que] define lo útil del olvido y define las cosas que más vale olvidar. Define, también, los peligros y los conflictos insuperables que hay que recordar”¹⁷⁶. Al mismo tiempo, el autor explicita que al tratar estos temas referidos a las memorias emblemáticas, es preciso tener ciertas precauciones con el fin de evitar caer en algunos errores de orden conceptual, insistiendo en que los procedimientos a través de los cuáles se fraguan las memorias son complejos.

Argumenta en su investigación, que si bien, este tipo de memorias son invenciones humanas, pero no por ello, son invenciones arbitrarias. Sugiere que para evitar estos equívocos, es necesario precisar en “los criterios y procesos que van definiendo algunas aproximaciones a la memoria como emblemáticas e influyentes, como formas de pensar la experiencia que encuentra un «eco» en la sociedad y la cultura”¹⁷⁷. Y como proceso dinámico, se puede observar, siguiendo a Stern, que van naciendo nuevos nudos que convocan a la memoria, llenándolas de nuevos contenidos, realizando una acción dialéctica que donde se encuentran la memoria y el futuro en un presente en camino, un presente que busca sentido.

En la misma línea Pedro Milos analiza también para el caso de Chile, la memoria y sus significados, entendiéndola como práctica social que elabora recuerdos a partir de vivencias individuales o colectivas. Analiza también las diversas memorias que existen y que rodean un acontecimiento capital. Advierte, como lo expone también Elizabeth Jelin, que existen memorias en conflicto, que coexisten con políticas que inducen el olvido. Milos elabora una

¹⁷⁶ Stern, S., “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como procesos histórico (Chile, 1973-1998), op. cit., p.17.

¹⁷⁷ *Ibíd.*, p. 18.

sistematización conceptual sobre la memoria, donde identifica desde aquellas que ubican a la memoria como,

“la expresión de realidades sociales y culturales determinadas, hasta aquellas que la conciben como representaciones culturales de orden simbólico, se trata en general de conceptualizaciones que ponen el acento en la memoria como significación. Significaciones que son muy diversas y que comprometen distintas dimensiones: lo individual y lo colectivo, lo objetivo y lo subjetivo, lo pasado y lo presente, lo explícito y lo implícito”¹⁷⁸.

Lo interesante es constatar que la gran mayoría de las especificaciones sobre los diversos tipos de memoria, vertebran de una u otra manera los postulados propuestos por Maurice Halbwachs sobre la memoria, puesto que “enfatisa en los aspectos sociales de su producción y, por tanto de su recuperación y de su interpretación”¹⁷⁹. Reconoce además el peso de la realidad social en la gestación de la memoria, hecho que permite la existencia de múltiples memorias, cuestión en la que coinciden gran parte de los autores consultados. Elizabeth Jelin, da cuenta en sus investigaciones sobre estos temas, las tensiones existentes entre la memoria y el olvido, pero también advertimos entre los propios géneros de memoria, los construyen en escenarios de confrontación, identificándose lo que Jelin denomina, «las disputas por las memorias».

Si como hemos dicho, las sociedades recuerdan y olvidan debido al poder que ostentan ciertas posiciones políticas, las que determinan desde el ámbito institucional, qué recordar y qué olvidar. A este respecto Enzo Traverso nos indica que las sociedades recuerdan de manera intensa o de manera suave. Expone por tanto, que “hay memorias fuertes y memorias débiles. Donde el Holocausto, pasó a ser de una memoria débil a una memoria

¹⁷⁸ Milos, P., “La memoria y sus significados”, en Garcés M., *et. al.* (comps.), *Memoria para un nuevo siglo*, op. cit., p. 39.

¹⁷⁹ *Ibíd.*, p. 48.

fuerte”¹⁸⁰. Los historiadores Carlos Figueroa y Nicolás Iñigo, exponen que en el tema de las violaciones de derechos humanos en el Cono Sur de América, “son parte de una «memoria fuerte». Mientras que el más grande genocidio en el continente americano, el que se observó en Guatemala, es parte de una «memoria débil»”¹⁸¹. Argumentando que esto se debe a que ese tipo de memoria traumática, se encuentre más presente en la sociedad civil de Argentina, Chile y Uruguay, que en la de la sociedad guatemalteca. Estos autores, agregan además que;

“si fuera cierto, que la Historia Reciente es hija del dolor, y si esto se expresara en que en el Cono Sur, sean las dictaduras militares y terroristas «el punto de ruptura que ha promovido los estudios del pasado cercano», la ausencia de esta memoria o su expresión como «memoria débil», explicaría el tema de la historia reciente en Guatemala”¹⁸².

Pero a su vez enfatizan en esta línea que la «memoria de la infamia» – como ellos la denominan- puede observar omisiones debido a la autocensura que la evidencian como una «memoria mutilada». Por último, advierten sobre la necesidad que una «Historia Reciente», como ellos también la denominan, debe rescatar del olvido la «memoria de la infamia», sino también las otras memorias, ya que son fuente para el estudio de estas sociedades.

¹⁸⁰ Figueroa I. C., Iñigo C. N., “Reflexiones para una definición de Historia Reciente”, en López M., Figueroa, C., y Rajland, B. (ed.), *Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina*, Santiago, Arcis- CLACSO, 2010, p. 20.

¹⁸¹ *Ibíd.*, p. 20. Ambos historiadores argumentan que, “Pese a las 45 mil desapariciones forzadas y 150 mil ejecuciones extrajudiciales que se observaron en dicho país entre 1960 y 1996 (ODHA, 1998; CEH, 1999), no es el caso guatemalteco el que surge como ejemplo de dictaduras militares y terroristas cuando se habla del tema en ámbitos académicos y mediáticos. Tampoco es Ríos Montt, sino que son Pinochet y Videla los paradigmas más mencionados en lo que se refiere a dictadores genocidas.”

¹⁸² *Ibíd.*, pp. 20 -21.

1.3.- La Historia del Tiempo presente en América Latina: El caso de Chile.

La historiografía sobre el Tiempo Presente en los países de América Latina también ha debido hacer frente a pasados difíciles, sobre todo debido a la impronta que las dictaduras militares y la violencia política ejercida sobre sus sociedades. Sin embargo, al indagar sobre investigaciones que aborden estas problemáticas, encontramos que la gran proliferación de ellas, se concentran en la región a partir de la década de los noventa, cuando ya casi la totalidad de América Latina experimenta procesos transicionales, lo que implica—no en todos los casos— un paulatino cambio hacia sociedades más democráticas, y que en materia de sociedad civil, se puede evidenciar el retroceso de la censura, el retorno de los exiliados, y la por otro lado, la incorporación en materia de educación de aquellos temas de educación para la paz, así como la emergencia de intelectuales, investigadores y académicos que poco a poco comienzan a publicar sus trabajos, proveyendo a sus países de una abundante bibliografía sobre estos temas¹⁸³.

Como hemos argumentado, asistimos a un nuevo campo de estudio, referido en su mayoría a aquel tiempo del que somos coetáneos, Historia del tiempo Presente, llamado también por algunos historiadores como «historia reciente», sin embargo, la cuestión central es que se trata del análisis de la propia contemporaneidad. “Aunque siempre hubo historiadores que se ocuparon de describir y analizar procesos históricos de su tiempo, lo novedoso está en que solo en los últimos años «se constituye un campo de estudios con problemáticas propias»”¹⁸⁴. Y que siguiendo la característica de este enfoque de estudio, analizan aquellos procesos históricos inacabados, en desarrollo, identificando que la coetaneidad entre el pasado y el presente no se limita sólo

¹⁸³ Entre algunos de los historiadores latinoamericanos que desarrollan investigaciones en esta área, podemos citar a: Paz, J. J., y Cepeda, M., *Removiendo el presente Latinoamericanismo e Historia en Ecuador*, Quito, PUCE-THE, Abya Yala, 2007. Así también, los trabajos publicados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, con sede en Buenos Aires, Argentina, desde 1967, que ha logrado reunir a prestigiosos investigadores contribuyendo a repensar, desde una perspectiva crítica y plural, la problemática integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Consultar <<http://www.clacso.org.ar>>.

¹⁸⁴ Figueroa I. C., Iñigo C. N., “Reflexiones para una definición de Historia Reciente”, op. cit., p. 13.

a los años recientes. Por ello, como hemos explicado en nuestras primeras páginas, el campo de esta perspectiva de análisis, se encuentra interceptada por procesos sociales traumáticos, cuyas experiencias se pueden observar en las sociedades latinoamericanas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero con mayor énfasis en las tres últimas décadas.

“En América Latina la gran cantidad de memorias de los últimos treinta y cuarenta años, lleva las huellas del terror, de las violaciones de los derechos humanos, de la destrucción y muerte sembradas por los regímenes militares del período. Las reflexiones alrededor de ellas plantean a los historiadores viejas y nuevas preguntas”¹⁸⁵.

Coincidimos con muchos historiadores latinoamericanos que el debate sobre la historiografía en la región, es un debate en construcción, sin embargo, observamos que las argumentaciones que dan cuenta de su validez y necesidad para la comprensión de los actuales procesos sociales, sigue en la mayoría de los casos, el guión de los debates europeos, esto es, sobre la pregunta de la validez de las fuentes, la objetividad de los análisis, la cercanía de los hechos, por sólo citar algunas de las problemáticas a las que se han visto enfrentada la comunidad de historiadores. En esta línea la historiadora argentina Graciela Luorno plantea que,

“La tesis de los historiadores que explican fenómenos sociales del pasado remoto, expresamente documentados, no son menos discutibles que los análisis de quien se aventura sobre el pasado inmediato. En este último, las fuentes de estudio no se agotan y las conclusiones son provisorias, dado que aún no se pueden analizar las consecuencias, los efectos o las influencias de los hechos concretos en el cuerpo social”¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Stabili, M., “Los desafíos de la memoria al quehacer historiográfico”, en Stabili, M. (coord.), *Entre Historias y memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina*, Madrid, Iberoamericana, 2007, p.7.

¹⁸⁶ Luorno, G., op. cit., p. 38.

Análogamente se evidencian problemas e interrogantes frente a estos pasados mediatos, que provocan ciertas incomodidades, sobre todo cuando se trata de hurgar en aquellos acontecimientos históricos, que están relacionados con «ayeres» que tienen como característica contar con hechos traumáticos de gran impacto y profundas secuelas para las sociedad que los experimentan, los que sin lugar a dudas, terminan influyendo tanto en los temas de investigación como en las formas de abordarlos, puesto que son muchos las cuestiones quedan pendientes, y que son necesarios despejar para lograr la inteligibilidad de la región latinoamericana.

“Entonces, el tema de investigación se vuelve incómodo porque acaso los victimarios viven y temen que la justicia los alcance. Porque para estos perpetradores no solamente la justicia es temida, sino también la memoria y la verdad. Pero memoria y verdad no solamente persiguen a los perpetradores, sino también a la sociedad en su conjunto. O sea que la Historia Reciente tiene dificultades epistemológicas reales por la cercanía de lo analizado, pero también dificultades políticas porque los intereses que afectan sus interpretaciones todavía están vigentes”¹⁸⁷.

Los autores consultados en nuestra investigación, dan cuenta de una problemática, que no pasa desapercibida cuando ingresamos al estudio de la Historia del Tiempo Presente. Esto es, que pareciera ser que esta perspectiva de análisis sólo se preocupa de aquellas cuestiones referidas a situaciones traumáticas, y que al mismo tiempo la interrogante sobre ¿qué tiene de novedoso el momento histórico del que se ocupa, la Historia del Tiempo Presente, o como algunos llaman «historia reciente». El historiador argentino, Nicolás Iñigo, se pregunta al respecto.

“¿Se ha producido un cambio de fisonomía y, en algún sentido o medida, de naturaleza que justifique plantear que nos encontramos en un nuevo período histórico? ¿Cuáles son los hechos fundacionales de

¹⁸⁷ Figueroa I. C., Iñigo C. N., op. cit., p. 16.

un período que podría ser calificado como “Historia Reciente”? ¿A partir de qué momento podríamos hablar de acontecimientos que pueden ser ubicados en el campo de la Historia Reciente?”. Y ante la aseveración de algunos historiadores de subrayar que este tipo de historia es hija del dolor, exponen que en esta línea, el hecho fundacional de la Historia Reciente podría ser un hecho traumático”¹⁸⁸.

En la elaboración de una posible respuesta a estas complejas interrogantes, las historiadoras Marina Franco y Florencia Levin, plantean que “La Gran Guerra, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las dictaduras militares y terroristas en América Latina (y no solamente en el Cono Sur) serían parteaguas para impulsar la reflexión sobre la Historia Reciente”¹⁸⁹. En su investigación exponen que aún no hay un acuerdo entre los historiadores frente al establecimiento de una cronología propia de la llamada Historia Reciente, sea en el plano mundial como nacional. Agregan, sin embargo, que buscar una cronología, no es el camino más adecuado para definir las particularidades de este tipo de perspectiva histórica, más aún, constatando que su especificidad, radicaría “en una historia sustentada en diversas formas de coetaneidad entre pasado y presente (supervivencia de protagonistas y participantes, memoria social viva, contemporaneidad entre el historiador y el pasado que le ocupa)”¹⁹⁰, aceptando por tanto, que estos criterios se encuentran vinculados a acontecimientos históricos traumáticos. A este respecto, podemos considerar que esta vía reduce el objeto de investigación, ya que se presta mayor atención a fenómenos parciales más que a un período histórico como totalidad.

El historiador Nicolás Iñigo propone diversas perspectivas de pensar la Historia Reciente. Una de ellas, es en el campo cultural, a través del posmodernismo “el cual parte del agotamiento de los paradigmas heredados de

¹⁸⁸ *Ibíd.*, pp. 23-24.

¹⁸⁹ Franco, M., Levin, F. (comps.), *Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007, p.15.

¹⁹⁰ Franco, M., Levin F. (comps.), “El pasado cercano en clave historiográfica”, en Franco, M., y Levin, F. (comps.), *Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007, pp. 33-34.

la ilustración merced a los monstruosos acontecimientos ocurridos en el siglo XX, entre ellos, Auschwitz e Hiroshima”¹⁹¹. Y el que propone el fin de una época y el comienzo de otro ciclo que se afincaría en el ámbito de la abstracción cultural, y cuya periodización tendría un enfoque más universal.

También se puede pensar este tiempo, a través de reflexiones que proponen teorías acerca de que “en las décadas de 1960/70 se inicia un nuevo período, una nueva fase”¹⁹², vinculada a los cambios que experimenta la sociedad, que pasa de ser un sistema integrador y portadora de sentidos, a una sociedad que se descompone, evidenciando la decadencia del Estado nacional, y la emergencia de nuevos conflictos sociales. Pero también es característica de esta década la revolución tecnológica de la información y por cierto la reestructuración del capitalismo la característica. Siguiendo la propuesta explicativa de la propuesta de Iñigo, autores como Touraine, Castells, y Negri¹⁹³, desarrollan y argumentan con mayor exactitud estas ideas, que nosotros nos limitamos a enunciar. Otras perspectivas teóricas y políticas, fijan sus reflexiones sobre el cambio cualitativo de la sociedad contemporánea a través de los cambios que han experimentado en el ámbito económico, vinculados a las transformaciones del capital. Por último, Iñigo, afirma que existen propuestas iniciales de la Historia Reciente en los ámbitos nacionales, los que sin embargo no están exentos de dificultades, ejemplificando con algunos casos:

“El derrocamiento de Perón en 1955, el Cordobazo en 1969, o el golpe de Estado de marzo de 1976 serían para algunos los acontecimientos que han sido como el inicio de la Historia Reciente en Argentina. En México, el movimiento estudiantil popular de 1968 y su trágico fin con la matanza de Tlatelolco,

¹⁹¹ Figueroa I. C., Iñigo C. N., op. cit., p. 24.

¹⁹² Ibíd.

¹⁹³ Véase Castells, M., *La era de la información. Economía y Sociedad y Cultura*, vol. 2. *El poder de la identidad*, México, Siglo XXI, 2003. Touraine, A., *Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy*, Buenos Aires, Paidós, 2006. Negri, A., *Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio*, Buenos Aires, Paidós, 2004.

constituyen para muchos el principio del largo fin del régimen surgido de la revolución mexicana”¹⁹⁴.

Sin embargo, apreciamos que a la luz de las evidencias históricas examinadas, la historia del tiempo presente en los países de América Latina, y más aún en el Cono Sur, al momento de fijar hitos, se torna complejo, por cuanto, como lo expone Julio Aróstegui, los historiadores nos enfrentamos con procesos abiertos, vigentes, inacabados y en desarrollo, lo que sin duda suponen una mayor dificultad, al mismo tiempo que nos enfrentamos a renovadas exigencias metodológicas. Esto no quiere decir, que no se puedan identificar hitos que den cuenta de nuevos procesos sociales, sin embargo, existe una constante en estos pasados recientes, que tiene relación con las rupturas catastróficas de los pasados nacionales cuya memoria sigue viva, y es que es un pasado difícil, y que historiográficamente podemos encontrar en diversas regiones, entendiéndolo como un «pasado vivo», en palabras de la historiadora Anne Pérotin-Dumon:

“El pasado “vivo” de una sociedad, como se entiende en este trabajo, es el que forma parte de los recuerdos de muchos y que su carácter dramático convierte en un problema moral duradero para la conciencia nacional. Se trata de hechos violentos y moralmente graves que sembraron discordia y provocaron sufrimientos. Hechos que se presentan como una gran ruptura en la vida del país. Ese pasado no sólo vive en los recuerdos íntimos y en la memoria de círculos restringidos sino que es parte del recuerdo social e irrumpe periódicamente en la actualidad”¹⁹⁵.

Las experiencias traumáticas de la segunda mitad del siglo XX a las que ha asistido gran parte de esta región, otorgan características particulares al momento de investigarlos, debido a que “la gestión del pasado reciente por la sociedad civil y los estados, plantea una situación insólita para los historiadores

¹⁹⁴ Figueroa I. C., Iñigo C. N., op. cit., pp. 25-26.

¹⁹⁵ Pérotin-Dumon, A., “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, op. cit., p. 3.

e historiadoras, quienes, en general son prácticamente los únicos interesados en el tema del pasado”¹⁹⁶. Es lo que también ha enfatizado la historiadora María Stabili quien expone a este respecto que;

“Los análisis en el campo de la historia resultan todavía incipientes e inciertos, a diferencia de lo que se verifica en la investigación periodística y en los estudios sociales que progresan de manera más segura y rápida, con resultados a veces notables que los historiadores no pueden desconocer y que ofrecen una multiplicidad de elementos que permite una buena reconstrucción de lo pasó”¹⁹⁷.

Anne Pérotin-Dumon expone que es este pasado violento y vivo que ha experimentado no sólo América Latina, el que es llamado también como “la memoria”. Y Elizabeth Jelin, agrega a este respecto que existirían múltiples memorias, que muchas de las veces se encuentran en disputa, como las memorias oficiales y las de los márgenes. Por tanto encontramos luchas y conflictos, entendiéndolas no como planas, sino con porosidades y huecos. Jelin afirma que “La discusión sobre la memoria raras veces puede ser hecha desde afuera, sin comprometer a quien lo hace, sin incorporar la subjetividad del investigador, su propia experiencia, sus creencias y emociones. Incorpora también sus compromisos políticos y cívicos”¹⁹⁸.

La preocupación de la comunidad histórica sobre estos pasados recientes ha alcanzando cada vez mayor profusión, ejemplo de ello es la magnífica publicación en línea publicada bajo la dirección de la historiadora Anne Pérotin-Dumon, que en un gran esfuerzo aglutinó a diversos especialistas tanto de las humanidades como de las ciencias sociales, para «Historizar el pasado vivo en América Latina», publicación que según las palabras de la historiadora, “invitan a explorar, sin parcialidades, una serie de cuestiones

¹⁹⁶ Ibíd., p. 5.

¹⁹⁷ Stabili, M., op. cit., p. 12.

¹⁹⁸ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, op. cit., p. 3.

sobre la memoria, la verdad y la historia”¹⁹⁹, interrogándose por tanto sobre la necesidad de historizar el pasado vivo, o más aún, examinar los aspectos que diferencian el trabajo sobre el pasado reciente y el pasado remoto.

“Historizar el pasado vivo tiene como campo primordial de interés América Latina, donde una decena de países atravesaron un período de gran violencia política en la segunda mitad del siglo XX. La meta de la publicación es, en primer lugar, alentar en el continente el estudio histórico de las rupturas catastróficas del pasado nacional cuya memoria sigue viva”²⁰⁰.

En los casos de América Latina, y más aún del Cono Sur, observamos los esfuerzos de carácter interdisciplinario que se han llevado a cabo para tratar estos pasados difíciles. Si bien la adversidad frente al uso de fuentes y archivos para realizar estas investigaciones ha sido la tónica general, tanto en los regímenes dictatoriales, como en los procesos transicionales, permiten observar la dificultad que aún existe para indagar sobre este tipo de pasados, ya que se advierten los diversos tipos de violencia política que se aplicó en estas sociedades.

El golpe de estado llevado a cabo el 24 de marzo de 1976 en Argentina, instaurando una dictadura hasta el 10 de diciembre de 1983, llevó a cabo el «Proceso de Reorganización Nacional», asumiendo el poder una Junta Militar y designando como presidente de facto al Teniente General Jorge Rafael Videla. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de

¹⁹⁹ La historiadora Anne Pérotin-Dumon, señala en la portada de la publicación: “Treinta y cuatro estudios acerca de la reconstitución de los acontecimientos recientes que forman parte de los recuerdos de muchos, por historiadores que son sus contemporáneos, cuando el carácter dramático de esos sucesos los convierte en un problema moral duradero para la conciencia nacional. El “pasado vivo” de la violencia política en la Argentina, Chile y Perú interpretado por historiadores y otros especialistas, con una dimensión comparativa sobre Brasil, Guatemala, Alemania, España, Francia, Irlanda del Norte, Polonia, los Estados Unidos y Japón. Disponible en, <<http://www.historizarelpasadovivo.cl/>>. [Consultado en septiembre de 2010].

²⁰⁰ Pérotin-Dumon, A., “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, op. cit., p. 4.

someter a la población mediante el terror de Estado, imponiendo el «orden». Este fue sin duda un período muy violento, y en el que estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer, mientras otro tanto debió salir al exilio²⁰¹. Los matices que a este respecto presenta América Latina, son sin duda, muy ricos en análisis y complejos en sus procesos. Tal es el caso del Perú, donde se observan ciclos de violencia, asociados a golpes militares y conflictos armados internos, sobre todo a partir de 1980²⁰². El historiador peruano Nelson Manrique atribuye estos levantamientos armados cinco variables:

“Una crisis de representación, una crisis económica, una crisis de modernización “bloqueada”, la crisis constante del estado republicano desde sus inicios y el legado irresuelto de una colonialidad fracturada. Las tres primeras pueden describirse como causas inmediatas de la violencia, mientras las otras dos tienen raíces más profundas en el pasado peruano”²⁰³.

A juicio del historiador Peter Klaren, la historiografía peruana aborda el tema de la violencia política, identificando sus matices y el papel desempeñado por grupos armados²⁰⁴. Aún cuando este no es el tema que convoca nuestra

²⁰¹ El sociólogo Emilio Crenzel, señala que la CONADEP registró en 1984, 8.960 casos de desaparición forzada de personas. Sin embargo, los organismos de derechos humanos, postulan la existencia de 30 mil desaparecidos. Véase “Políticas de la memoria. La historia del Informe Nunca Más”, en *Papeles del CEIC* # 61, septiembre 2010, p.4. disponible en, <<http://www.identidadcolectiva.es/pdf/61.pdf>>. [Consultado en diciembre de 2010].

²⁰² Consideramos esta fecha debido al campo cronológico que abordó la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), creada por Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, y complementado a través del Decreto Supremo N° 101-2001-PCM, cuyo propósito “es el de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a firmar la paz y la concordia entre los peruanos”. Disponible en, <<http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio19.php>>. [Consultado en octubre de 2010].

²⁰³ Klaren, F. P., “El tiempo del miedo (1980-2000), la violencia moderna y la larga duración en la historia peruana”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), op. cit., p. 4. El autor se refiere al texto de Manrique, N., *El tiempo del miedo: la violencia política en el Perú, 1980-1996*, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002.

²⁰⁴ Nos referimos a las investigaciones de historiadores como Manuel Burga, *Nacimiento de una utopía: muerte y resurrección de los incas*, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1988. Véase Alberto Flores Galindo, *Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes*, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1987. La historiografía anglosajona también ha indagado sobre estos temas en

investigación, consideramos necesario al menos mencionar que cuando ingresamos al estudio de este tipo de violencias, observamos una gran gama de tonos, formas y modos de acción en que se representa, y que en algunos casos puede venir directamente desde las elites del poder de turno –adquirido ya sea por golpes de estado o bien mediante otras fórmulas que dan cuenta de su impunidad- o de grupos que han decidido tomar las armas para llevar a cabo sus propuestas de cambio social, constituyéndose en los diversos matices que adquiere la violencia, esto es, física, simbólica y psíquica, a través de los mecanismos y herramientas que se tienen para implementarla.

La heterogeneidad de las experiencias político-sociales a las que asiste América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, dan cuenta de la diversidad que abarcan las problemáticas vinculadas al análisis de las violencias de estado, las que traspasaron sus propias fronteras²⁰⁵. Si bien, todos los casos poseen sus propias singularidades y fracturas, es inevitable, al menos, mencionar el caso de Paraguay, ya que presenta una de las dictaduras más extensas de la región 1954-1989. Sin duda esta es una marejada dictatorial que experimentó la región, que dejó profundas fracturas, se extendió por Brasil cuya dictadura se desarrolló entre 1964 y 1984, asimismo, «Bolivia se encontró bajo la tiranía del general Hugo Banzer desde 1971 hasta 1982, así también es reemplazada la democracia parlamentaria de Uruguay, por una dictadura militar que se prolongó desde 1973 hasta 1985. Ello sin contar con los casos antes mencionados de Argentina, Perú y por supuesto Chile, eje central de nuestra investigación.

el Perú, véase también el interesante trabajo de Steve J. Stern (comp.), *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1999. (*Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995*, Duke University Press, 1995).

²⁰⁵ Ejemplo de estas acciones “transnacionales”, fue la Operación Cóndor, nombre que se le asignó a un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en la década de los años 1970, y que se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado con la cooperación de los Estados Unidos. Véase Gaudichaud, F., *Operación Cóndor notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur*, Madrid, Sepha, 2005.

Ingresar al estudio de la perspectiva de la historia del tiempo presente requiere por tanto considerar a la memoria como fuente de estudio, y en ella las múltiples posibilidades que otorga para indagar en sociedades con pasados «difíciles». Los autores analizados, concuerdan en que al ingresar al estudio de este tipo de pasados “también se inspira en un mandato ampliamente difundido en muchas sociedades latinoamericanas: “verdad y memoria”, a las que a menudo se agrega “justicia”. Se exige “verdad”, se promete rescatar la memoria de las víctimas”²⁰⁶. Anne Pérotin-Dumon expone que se asocia la idea de verdad y memoria al pasado reciente en la región, entendiéndose a veces como relacional, a este respecto la historiadora argumenta que esta situación obedece a las circunstancias políticas en las que se comenzó a utilizar:

“La represión ejercida por el Estado y la lucha moral por los derechos humanos, es decir, por la integridad física y la dignidad de las personas. La represión estuvo acompañada de su ocultamiento sistemático y prolongado, por lo que la lucha moral por los derechos humanos fue simultáneamente una lucha contra la negación de que hubiesen sido violados. La fuerza que tiene hoy la consigna “verdad y memoria” en muchos países de América Latina proviene de esta historia”²⁰⁷.

En definitiva, advertimos que el tiempo presente no sólo en América Latina es un tiempo difícil de estudiar, de nombrar y de representar, por cuanto existen en la mayoría de estas sociedades, cuestiones vinculadas a los derechos humanos que continúan pendientes, y por tanto, son temas inscritos en la cultura de muchos países que han experimentado la violencia política, y por tanto plantean un nuevo desafío historiográfico, ya que explicar este tipo de violencia ocurrida, lleva a la necesidad de resituarla en el tiempo. Porque no olvidemos que al tratar la historia del tiempo presente, también es importante la relación de proximidad que existe entre el historiador y su objeto de estudio,

²⁰⁶ Pérotin-Dumon, A., op. cit., p. 8.

²⁰⁷ *Ibíd.*, pp. 8-9

como ya lo ha planteado Michel Trebitsch o Julio Aróstegui, se historiza la experiencia, o más aún, la historia del mundo en que vivimos.

Cómo identificamos este pasado «difícil», o ese pasado cercano, en el caso de Chile, cómo se expresa, representa, y se narra ese tiempo presente en esta sociedad. En definitiva, son innumerables las interrogantes que se adosan al momento de indagar sobre la historia reciente de este país, por cuanto el acontecimiento preponderante que se considera como la matriz que caracteriza esta época para una o varias generaciones, es la dictadura militar (1973-1990). Si bien el ejercicio metodológico de la historia del tiempo reciente reclama realizar el ejercicio intelectual de alejarse del objeto de estudio, ello comporta a su vez, -en palabras del historiador Mario Garcés-, “tratar de comprender «por qué pasaron las cosas como pasaron», sopesando la información de que disponemos hoy en día, en lugar de especular sobre la manera cómo habríamos debido hacer las cosas de otro modo”²⁰⁸. Y por el contrario, “cuando se trabaja sobre el pasado «pasado» es preciso, por el contrario, esforzarse por recrear mentalmente condiciones de empatía con referencia a una vida a la cual no nos vincula nada vivo”²⁰⁹.

Desde una panorámica general, si observamos la producción de publicaciones que dan cuenta de este pasado mediato, advertimos dos cuestiones que nos parecen centrales, de un lado, la importancia que tuvo el periodismo de investigación frente a la denuncia y difusión de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile. Fueron publicaciones en su mayoría periódicas, realizadas con mucho esfuerzo y compromiso, las que de manera paradójica, lograron sortear las múltiples dificultades impuestas por el régimen militar y que sin embargo, no consiguieron mantenerse durante el período de la transición a la democracia. Pero, de otro lado, apreciamos la emergencia de editoriales que en el exilio

²⁰⁸ Ibid., p. 19.

²⁰⁹ Henry, R., “L’histoire du temps présent, vingt ans après”, en *Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent*, 75, junio 2000, pp. 23-40. Citado por Pérotin-Dumon, A., “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, op. cit., p.19.

publican investigaciones, ensayos y textos que tenían una circulación que en su mayoría se reducía a los círculos académicos y universitarios.

En este contexto, es interesante prestar atención a aquellas publicaciones que nacieron bajo un clima de gran censura. Sin duda, la desinformación de la opinión pública, es una de las características de los regímenes dictatoriales, y en nuestro caso, la dictadura del general Pinochet, desde sus inicios, dejó claramente estipulado a través de los cuarenta y un Bandos de la Junta Militar que se publicaron el día 26 de septiembre de 1973 en el periódico *La Prensa* de Santiago. Específicamente, el Bando nº 12 estaba dirigido a la prensa:

“Se advierte a la prensa, radio y canales de televisión que cualquiera información dada al público y no confirmada por la Junta de Gobierno Militar, determinará la inmediata intervención de la respectiva Empresa, por la Fuerzas Armadas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que la Junta determine en su oportunidad”²¹⁰.

Es significativo observar la importancia que ejerció la censura como soporte de desinformación dentro de la sociedad chilena, y la gran trascendencia que tuvieron las publicaciones –revistas, reportajes, folletos, periódicos- y editoriales que lograron subsistir y mantenerse vigentes para denunciar lo que estaba sucediendo en Chile, ya que como señala el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación:

“Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden fue establecer el control absoluto de los medios de comunicación, los que fueron o clausurados y desarticulados o sometidos a una estricta censura”²¹¹.

²¹⁰ Loveman, B., Lira, E., *Arquitectura política y seguridad interior del Estado, 1811-1990. Fuentes para la Historia de la República*, Vol. XIX, Santiago, DIBAM-LOM, 2006, p. 323.

²¹¹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, vol.1, Santiago, Reedición, 1996 [1ª edición 1991], p. 444.

Pese a ello, existieron algunas publicaciones que en medio de la compleja censura, lograron dentro de las posibilidades existentes, informar a la población. Este fue el caso de *APSI* -Agencia Publicitaria de Servicios Informativos-, una de las primeras revistas de oposición a la dictadura militar chilena, y que estuvo en circulación entre 1976 y 1995. En sus diecinueve años logró publicar 511 números que estuvieron en circulación en todo el país, en ellas, se realizaron análisis político, entrevistas, y reportajes con gran documentación, caracterizándose sobre todo, por la irreverencia con que presentaban la situación que vivía el país. Así también *Revista Hoy*, que luego de conseguir el difícil permiso de las autoridades y el financiamiento necesario, estuvo disponible en el mercado entre 1977 y 1998²¹². Publicaciones de igual importancia fueron *Revista Análisis* (1977-1993), fundada por Juan Pablo Cárdenas, quién señala que los objetivos de esta publicación fueron fundamentalmente:

“Descubrir los despropósitos de la dictadura y trabajar a favor de la movilización social amplia para derrocarla. Fuimos los primeros que nos abrimos a los personajes del exilio, los primeros que entrevistamos a las personas de la clandestinidad, y que dimos tribuna a los pobladores”²¹³.

Otras publicaciones de igual relevancia fueron *Revista Cauce* (1983-1989), el primer número apareció el 18 de noviembre de 1983. Una investigación periodística sobre esta publicación plantea que el meticuloso trabajo realizado por el grupo pequeño grupo de periodistas, había desarrollado este trabajo de forma muy discreta, la primera edición “fue repartida y vendida

²¹² La génesis de *Revista Hoy*, se encuentra en 1976, cuando *Revista Ercilla* fue vendida a un grupo de empresarios, tiempo después el director Emilio Filippi presentó su renuncia, lo siguen en esta decisión los periodistas que allí trabajaban. Así nació *Revista Hoy*, que estuvo vigente desde 1977 hasta 1998, con 1.108 ediciones. Véase Morabec P., Spiniak. D., *Revista Hoy: 1.108 ediciones con historia*, Santiago, Copygraph, 2001.

²¹³ Premio Nacional de Periodismo 2005, fundador de *Revista Análisis*, actualmente profesor de Periodismo en la Universidad de Chile y Director de *Radio Universidad de Chile*. Entrevista a “Juan Pablo Cárdenas: La historia de “Análisis” y el libro que viene”, en *La Nación*, Santiago, 10/04/2005. Disponible en, <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050409/pags/20050409191146.html>. [Consultado en enero de 2011].

en el Parque O'Higgins, el mismo día en que fue autorizada la primera concentración opositora después del 11 de septiembre de 1973”²¹⁴. La editorial que inauguraba los seis años de Cauce daba cuenta de su propuesta y posición política:

“Se funda la Revista Cauce

Nace un órgano de expresión pública de pensamiento. Es nuestro propósito de servir de cauce abierto a la propagación de conocimientos, opiniones e interpretaciones de un acontecer que a todos nos interesa.

No somos Neutros ni indiferentes. Proclamamos nuestra adhesión a los valores de la cultura originada en Atenas (...).

Tenemos fe en la perfectibilidad humana y especialmente de la parte que nos concierne directamente, nuestra Patria. Esta fe es la causa primordial de la participación de todos y cada uno de los comprometidos en la aventura de fundar, sostener y difundir Cauce”²¹⁵.

El semanario Fortín Mapocho (1947-1991), fundado como la publicación oficial del Club Deportivo formado por trabajadores de la Vega Central de Santiago. Este periódico en sus cuarenta y cuatro años de vida, debió sortear múltiples dificultades tanto de amedrentamientos y persecuciones a los periodistas que desarrollaban su trabajo, como de la continúa censura y restricciones de todo tipo, cuya legitimidad se amparaba en los bandos de la junta militar y decretos de ley emanados por la junta militar. Pese a ello,

“entre 1984 y abril de 1987, el Fortín Mapocho fue un semanario que aparecía todos los lunes. Fue un espacio que le dio cabida a la pluralidad de corrientes opositoras al régimen militar, de tal

²¹⁴ Segovia, E., *La historia secreta de "Cauce": gloria, pasión y muerte de una revista de oposición*, Santiago, Pehuén, 1990.

²¹⁵ “Un cauce abierto”, Editorial de *Revista Cauce*, Santiago, 18 de noviembre de 1983, p. 4.

manera de aunar las voces de denuncia contra los atropellos a los derechos humanos que ocurrían en Chile”²¹⁶.

Sin lugar a dudas este periódico se transformó en el medio de comunicación más representativo de la oposición a la dictadura, a través de los diversos reportajes de investigación, pero sobre todo, dado sus orígenes, tuvo como característica central, “su vocación para reconocer e identificarse con los temas que acongojaban a los sectores populares”²¹⁷. Destacamos también, la revista *La Bicicleta* (1978-1988) que con otro prisma, se orientó en la promoción del movimiento artístico- cultural universitario, en tiempos en que la censura invadía a esta sociedad. Por otra parte, el periódico *La Época* (1987-1997), y en el que es importante reconocer el periodismo de investigación, reconociendo además “su fortaleza intelectual y su disposición al debate para orientar la reconstrucción de la democracia. Sin embargo, adherimos a las inquietudes de investigadores vinculados a estos temas, los que se interrogan sobre las causas que llevaron a que publicaciones que resistieron e hicieron frente a la dictadura en la década de los ochenta, no lograron sobrevivir en la democracia.

En este contexto, observamos que paralelamente durante los primeros años de la transición chilena, y pese al sistemático cierre de aquellas publicaciones periódicas, se advierte la emergencia de editoriales y publicaciones emblemáticas que también denunciaron los problemas que estaba padeciendo Chile. Identificamos aquellas que se inscriben en un primer

²¹⁶ Es interesante agregar que el Proyecto *Rescate y difusión del archivo fotográfico del periódico “Fortín Mapocho”*, que comenzó en 2007 con el apoyo de Fondart y Dibam. Su objetivo fue la descripción, conservación, digitalización y difusión de 12.000 imágenes pertenecientes a su gran archivo fotográfico de más de 30.000 negativos. Este proyecto tuvo dos etapas entre 2007-2008 donde se elaboró un diagnóstico general del archivo, realizando la conservación y digitalización de 8.000 fotografías, siguiendo los estándares establecidos por la DIBAM. Desde 2009 y 2010, se aumentó a 12.000 el número de fotografías digitalizadas al incorporar 3.000 nuevas provenientes de la sección de negativos. Se han realizado exposiciones fotográficas dando a conocer el gran trabajo que realizado por los fotógrafos de este importante semanario. Disponible en, <<http://archivofortinmapocho.cl>>.

²¹⁷ Vera, R., “Los medios escritos contra la dictadura. Se rompe el silencio”, en *Archivo Chile*. Centro de Estudios “Miguel Henríquez”, CEME, Santiago, 31 de diciembre de 2006. Disponible en, <http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/muertepin8/muertepin8_0033.pdf>. [Consultado en febrero de 2011].

momento, más en la línea de lo testimonial. Son algunos sobrevivientes, en su mayoría en el exilio, quiénes se atrevieron a narrar su experiencia de reclusión y tortura, permitiendo obtener un conocimiento *a priori* de lo que estaba pasando en el país. Testimonios, que en su mayoría fueron publicados fuera de Chile, como el libro *Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile*²¹⁸. Corresponden a los primeros relatos, que de manera pública, narraron el dolor padecido producto de la tortura y prisión política sufridos en los primeros meses de la dictadura militar. De gran importancia fueron también, las primeras investigaciones periodísticas que se publicaron dentro del país, como fue el caso de *Los Hornos de Lonquén* en 1978, que alcanzó un gran impacto internacional²¹⁹, ya que logró denunciar públicamente un hecho que hasta ese momento era conocido de forma clandestina. Es decir, que en Chile se estaba asesinando a mujeres y hombres, simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular.

Sin embargo, historiográficamente la emergencia de las investigaciones sobre el «pasado vivo», aparecen con mayor profusión a partir de la década de los noventa. El historiador Alexander Wilde, expone una de las características de la vuelta a la democracia en Chile, es la gran abundancia de publicaciones, que tienen como tema central la dictadura y el gobierno de la Unidad Popular. Es así como editoriales nacionales, que con gran esfuerzo, lograron sacar a la luz pública, muchos de los textos que circulaban como borradores en universidades y centros de investigación, posicionándose luego, como

²¹⁸ Valdés, H., *Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile*, Barcelona, Ariel, 1974.

²¹⁹ Un ejemplo emblemático fue el caso conocido como los *Hornos de Lonquén, descubiertos el 29 de noviembre de 1978*. Este fue el primer hallazgo de cadáveres de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Se trataba de quince hombres de entre 17 y 51 años, que habían sido detenidos por la policía en octubre de 1973. Sus restos estaban en unos hornos cal, ubicados en Lonquén, un pueblo cercano a Santiago. Ante esta noticia la Iglesia procedió a difundir el hecho para efectuar la investigación de rigor. El nombre de las víctimas es: Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Disponible en <<http://www.lonquenonline.cl/patrimonios/hornos-de-lonquen/>>; <http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/lonquen/ddhlonquen0003.pdf>. [Consultado en junio de 2010].

referentes de lectura dentro de los círculos de académicos y de estudiantes, sensibilizados con la indagación e información sobre el pasado reciente²²⁰.

“Al aproximarse el vigésimo quinto aniversario del golpe militar, la que había sido una corriente continua de publicaciones, se convirtió en un torrente de memorias personales y políticas, ensayos extensos, periodismo político, y estudios académicos que evocaban la dividida memoria histórica del país”²²¹.

Este hecho se vuelve mucho más evidente a propósito de la detención de Pinochet en Londres en 1998, y donde se aprecia una mayor profusión de publicaciones. Dentro de ellas, el *Manifiesto de historiadores*, a cargo de Sergio Grez y Gabriel Salazar, sentó un precedente puesto que, “[...] refutaba la historia oficial elaborada durante la dictadura y recordaba las condiciones en que los demás historiadores habían tenido que trabajar durante diecisiete

²²⁰Véase Moulian, T., *Anatomía de un mito*, Santiago, LOM-ARCIS, 1997. Moulian, T., *Conversación ininterrumpida con Allende*, Santiago, LOM, 1998. Parra, M. A., *La mala memoria*, Santiago, Planeta- Andros, 1997. Parra, M. A., *Carta abierta a Pinochet*, Santiago, Planeta-Andros, 1998. Carmona, E. (ed.), *Morir es la noticia*, Santiago, Carmona, 1997. González Pino, M., y Fontaine Talavera, A. (eds.), *¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973?*, Santiago, LOM, 1997. Zerán, F., *Desacatos al desencanto*, Santiago, LOM, 1997. Carvallo, A. Salazar, M., Sepúlveda, O., *La historia oculta del régimen militar*, Santiago, Grijalbo, 3ª ed., 1997 [1ª ed. 1989]. Cavallo, A., *La historia oculta de la transición*, Santiago, Grijalbo-Universitaria, 1998. Jocelyn- Holt L. A., *El Chile perplejo*, Santiago, Planeta, 1998. Vidal, H., *Política cultural de la memoria histórica*, Santiago, Mosquito, 1997. Tironi, E., *El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet*, Santiago, Dolmen, 1998. Tótoro, Taulis, D., *La cofradía blindada: Chile civil y Chile militar. Trauma y conflicto*, Santiago, Planeta, 1998. Garretón, M. A., (et. al.), *Por la fuerza sin la razón*, Santiago, LOM, 1998. Arriagada, G., *Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet*, Santiago, Sudamericana chilena, 1998. Aylwin Azócar, A., *El reencuentro de los demócratas*, Santiago, Ediciones B; Barcelona, Grupo-Zeta, 1998. Subercaseaux, E., *Gabriel Valdés: señales de historia*, Santiago, Aguilar, 1998. Viera-Gallo, J. A., *11 de septiembre: testimonio, recuerdos y una reflexión actual*, Santiago, Chile América, CESOC, 1998. Maira, L., *Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 1998. Rojas Sánchez, G., *Chile escoge la libertad*, Santiago, Zig- Zag, 1998. Orellana Benado, M., *Allende alma en pena: una mirada libre*, Santiago, Demens&Sapiens, 1998. Uribe, A., *Carta abierta a Patricio Aylwin*, Santiago, Planeta, 1998. Cuevas, J. A., *Diario de la ciudad ardiente*, Santiago, LOM, 1998. Soto, H. (ed.), *Voces de muerte, 2 vol.*, Santiago, LOM, 1998. Verdugo, P., *Interferencia secreta: 11 de septiembre de 1973*, Santiago, Sudamericana, 1998. Rojas, B. P. (et. al.), *Tarda pero llega: Pinochet ante la justicia española*, Santiago, LOM, 1998.

²²¹ Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 3. Disponible en, < <http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/wilde.pdf>>. [Consultado en septiembre de 2011].

años”²²². En 1999, se publicó en el *Journal of Latin American Studies*, un artículo de Alexander Wilde, “*Interruptions of Memory*”, y *Memoria para un nuevo siglo*, editado por Mario Garcés y Julio Pinto, y que a juicio de la historiadora Anne Pérotin-Dumon, inauguran “los estudios sobre la presencia del pasado en la política chilena y la historia reciente del país”²²³.

Con posterioridad, otras investigaciones han llegado a ocupar vacíos historiográficos, como el trabajo de María Angélica Illanes, *La batalla por la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000*. Y que según la historiadora, se trata de una batalla cultural, necesaria para acometer la demolición de la parálisis traumática que provocó en Chile la represión que el país sufrió con la dictadura militar. Otras investigaciones han abordado casos puntuales en los que se ejerció violencia de Estado, este el caso del trabajo plasmado en el libro, *El Golpe en la Legua. Los caminos de la historia y la memoria*, de Mario Garcés y Sebastián Leiva. Esta investigación considera como eje fundamental de la investigación, la historia oral de personas que vivieron y fueron víctimas de la experiencia represiva en esta localidad de Santiago. Por consiguiente, asistimos a una apertura historiográfica en que se incorporan otros factores que permiten optimizar el análisis de estos complejos pasados, considerando en ello lo expuesto por Peter Winn:

“Los historiadores saben desde hace tiempo que las construcciones del pasado tienen un contenido político tan controvertido como actual. El tema es una cuestión central de la historiografía, la historia de la historia. Cada generación reescribe nuestra comprensión del pasado a la luz de sus preocupaciones y perspectivas, planteando nuevas interrogantes y dando forma a nuevas historias”²²⁴.

²²² Pérotin-Dumon, A., “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, op. cit., p. 6.

²²³ *Ibíd.*

²²⁴ Winn, P., “El pasado está presente Historia y memoria en el Chile contemporáneo”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p.3. Disponible en, <http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php>. [Consultado en septiembre de 2011].

Volvemos por tanto al punto de partida de nuestro apartado, esto es, la complejidad que suscita el análisis de estas proximidades temporales. A este respecto, Hugo Fazio manifiesta que para comprender la Historia del Tiempo presente, es necesaria una reflexión que considere dos aspectos aparentemente inconexos pero que en la práctica están fuertemente relacionados:

“De una parte, significa volver una vez más sobre el sentido que se le ha asignado a la historia como disciplina, porque la inclusión de la contemporaneidad en su campo de experiencia trastoca los cimientos sobre los cuales se ha afirmado este tipo de saber. De la otra, cualquier intento de explicar la naturaleza del tiempo presente trasciende los marcos de este campo disciplinario, puesto que sugiere reflexionar sobre el conjunto de las grandes transformaciones que han sacudido al mundo actual a lo largo de las últimas décadas”²²⁵.

Desde una panorámica general, resulta fundamental lo expuesto por Hugo Fazio, puesto que es necesario observar al continente en su conjunto para comprender los mecanismos a través de los cuales el terrorismo de Estado se instaló en gran parte de la región, identificando las prácticas y narraciones que en los procesos transicionales se elaboraron sobre esos hechos. Este es el gran desafío al cual se ven interpeladas aquellas sociedades que deben hacer frente al legado del pasado represivo, ya que “no está cerrado, sino que es parte central del escenario político presente”²²⁶, ello porque entre otras cosas, los procesos democratizadores son complejos.

Así también, cuando adscribimos al análisis de este tipo de realidades afincadas en pasados recientes, y que han vivido procesos traumáticos de

²²⁵ Fazio Vengoa, H., “La historia del tiempo presente y la modernidad mundo”, en *Historia Crítica*, nº 34, Bogotá, Universidad de Los Andes, julio-diciembre 2007, p. 286. Disponible en, < <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/811/81103415.pdf>>. [Consultado en enero 2012].

²²⁶ Jelin, E. (comp.), *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in-felices”*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 7.

violencia política producto de dictaduras militares, resaltan diferentes especialistas que ayudan en el proceso de democratización, más allá del propio cuerpo político. Entre ellos, los historiadores que trabajan sobre historia del tiempo presente, se les convoca no con poca frecuencia, a formar parte de comisiones de verdad, procesos judiciales, establecimientos de promoción de la memoria, entre otros. En todas estas situaciones, es importante “promover el avance del conocimiento mediante los métodos probados de la ciencia histórica, para sacar a la luz la verdad sobre el pasado difícil y proporcionar una lectura de éste que ayude a la gente a afrontarlo”²²⁷.

1.4.- Fuentes para el estudio de la represión en la Historia del Tiempo Presente.

Las formas en que accedemos al conocimiento del pasado reciente son diversas, debido sobre todo a la gran cantidad de fuentes de que disponemos los historiadores para examinar los pasados cercanos. Sin embargo, ello también comporta una dificultad, porque nos vemos enfrentados a una avalancha de fuentes, sobre todo si consideramos el acceso digital y conexiones globales. Sin embargo, es importante no sucumbir ante el torbellino que implican las nuevas tecnologías, olvidando los viejos papeles y legajos contenidos en innumerables archivos, ya que ninguno de ellos son entidades neutras o estáticas. En consecuencia, dependerá del método de investigación utilizado, y de la rigurosidad con que sean sometidas las fuentes seleccionadas por más diversas que sean, así como también de los enfoques utilizados para analizar esos pasados.

“«Dudar», preguntar sobre los archivos como instituciones con tensiones, jerarquías y luchas, es restituirles carácter histórico y cultural, viéndolos en su carácter de espacios complejos que

²²⁷ Pérotin-Dumon, A., “Historia reciente y responsabilidad social. Introducción”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), op. cit., p. 6.

deben ser aprehendidos como objetos de reflexión a partir de problemas y puntos de vista analíticos”²²⁸.

En este contexto, las fuentes que disponemos para el estudio de la historia del tiempo presente, se caracterizan por su heterogeneidad, pero también por la singularidad de su contenido. En el caso que nos ocupa en esta investigación, nuestra preocupación está centrada sobre todo, en los archivos e informes que se elaboraron durante los gobiernos democráticos, y que tuvieron como objetivo conocer los hechos sucedidos durante las dictaduras militares.

En una mirada panorámica para la región latinoamericana, es posible advertir tres grandes conjuntos de archivos: En un primer grupo, encontramos los archivos de las instituciones represivas, custodiados en algunos casos con la continuidad institucional de la transición, como los archivos del *Departamento da Orden Política e Social (DOPS)* localizado en el *Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro*, en Brasil. En este rango también caben aquellos que se encontraron más tardíamente y que por supuesto, estaban ocultos, como fue el caso del Archivo del Terror de Paraguay, que entre otros reveló un plan regional de secuestro de prisioneros. También es posible incluir el archivo de la policía de Buenos Aires en Argentina, que si bien no es muy extenso, tiene gran significado debido a que es uno de los pocos encontrados en este país. Entendiendo como archivos de la represión:

“Al conjunto de objetos secuestrados a las víctimas o producidos por las fuerzas de seguridad (policías, servicios de inteligencia, fuerzas armadas) en acciones represivas (allanamientos, persecución, secuestros, tortura, desaparición, asesinatos, etc.) perpetradas durante las últimas dictaduras militares en los países del Cono Sur”²²⁹.

²²⁸ Da Silva Catela, L., “El mundo de los archivos”, en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 197.

²²⁹ *Ibíd.*, p. 210. La autora señala que en algunos casos, se incluyen en esta clasificación a los archivos que han producido las instituciones de derechos humanos, como resultado de las acciones de denuncia y búsqueda de datos vinculado a los hechos de la represión política.

La antropóloga Ludmila da Silva, argumenta que los archivos de la represión, con las características y singularidades propias de cada caso, resultan «paradigmáticos» en el ámbito de los archivos. Ello debido a que conciernen a una parte importante de las sociedades en que fueron rescatados, es decir, al Estado y sus agentes, a las víctimas, a sus familiares y amigos, a las organizaciones de derechos humanos, y a la comunidad en general, debido a que devela una información muchas veces conocida, pero que a través de esta documentación se logran constatar los hechos ocurridos. Por otro lado, y de forma paralela se encuentran aquellos archivos elaborados mayormente durante los procesos de transición política:

“Los acervos acumulados en base a listados y denuncias de casos, no necesariamente con material documental, como lo recogido por la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) en Chile, o la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina. En general, estos listados se apoyaron en denuncias recogidas por las organizaciones de derechos humanos, como los listados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Argentina, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, o Clamor en Brasil”²³⁰.

Y por último, en un tercer grupo, se hallan aquellos repositorios que contienen diferente documentación dispersa y fragmentada, que se traducen en rastros y huellas de la experiencia dictatorial. Elementos que dan cuenta de otro ámbito que comporta el archivo, que corresponden a huellas y vestigios de la cotidianidad de un período, que se puede apreciar a través de los medios de comunicación, visibilizando a su vez, las propias resistencias y luchas de los grupos de derechos humanos. “Acervos que se extienden en el tiempo al período postdictatorial, especialmente con iniciativas que incorporan dentro de sus objetivos «la memoria» y la transmisión de mensajes a la posteridad”²³¹.

²³⁰ Jelin, E., “Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión”, en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.) *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. 7.

²³¹ *Ibíd.*

Estas precisiones son relevantes, sobre todo, si consideramos que los regímenes dictatoriales procedieron de forma paralela con diferentes mecanismos. Por un lado, se advierte la burocracia en sus procedimientos, cuestión que colocaba en evidencia los encadenamientos en los mandos, así como las diferentes áreas de competencias entre las instituciones, en nuestro caso, las Fuerzas Armadas de Chile (compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Esta burocracia generó documentación, es decir, registros y archivos que fueron sistematizados y organizados dentro de cada una de estas instituciones. Aunque muchos fueron destruidos en los momentos finales de las dictaduras, existieron algunos casos en que estos archivos se lograron mantener, no sin dificultades y adoptando –como veremos en páginas posteriores- decisiones político-administrativas que permiten visualizar el profundo debate que emerge sobre este tipo de archivos. Por otro lado, estos regímenes también actuaron en forma clandestina, en donde también existieron registros, informes y archivos de las víctimas. La evidencia fehaciente en nuestra investigación, está dado por los centros clandestinos de detención y tortura que se instalaron a partir del 11 de septiembre de 1973, en todo Chile. Dentro de ellos, encontramos los centros de estudio de esta investigación, donde Londres 38 se sitúa de acuerdo a los informes Rettig y Valech, como uno de los primeros centros clandestinos de tortura y desaparición del país, tema que desarrollaremos en el capítulo siguiente. Clandestina también fue la tortura, y todos los padecimientos que comportó su práctica, así como también las confesiones que se firmaron bajo tortura.

En consecuencia, el acceso a la documentación contenida en los archivos de la represión, permite de un lado acceder a un tipo de fuentes que durante muchos años fue escondida y negada, posibilitando la escribir la historia de esos períodos represivos. Por otra parte, permite reconstruir las memorias denominadas por Michael Pollack, como «lastimadas» tanto por la experiencia de la tortura, como por la clandestinidad y la violencia²³². En

²³² Pollak, M., *L'expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l'identité sociale*, Paris, Métailié, 1990. Citado por Da Silva Catela, L., "El mundo de los archivos", op. cit., p. 203.

definitiva, podemos subrayar cuatro componentes esenciales, y que de acuerdo a la argumentación planteada por Da Silva, están relacionados con la existencia, organización, preservación y difusión. En primer lugar, este tipo de documentación es relevante en el presente, debido a que se pueden utilizar para realizar acciones totalmente opuestas al objetivo para el que fueron creados, es decir, para incriminar. Sirviendo para compensar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos a las que fueron sometidas durante las dictaduras militares.

“Para las víctimas, estos documentos funcionan como llaves para la memoria, ya que permiten la reconstrucción de un fragmento de sus vidas y muchas veces recomponen las identidades quebradas por la situación extrema que vivieron durante los años de la represión política”²³³.

En segundo lugar, este tipo de archivos y su contenido, permiten visibilizar y atribuir responsabilidades a quiénes torturaron, mataron, secuestraron, desaparecieron, así como a aquellos que dieron e implementaron políticas represivas, y como lo enunciábamos antes, transformándose en muchos casos en pruebas para procesos judiciales. En tercer lugar, “estos documentos son fuentes para la investigación histórica de lo ocurrido. Por último, estos fondos documentales generan acciones pedagógicas sobre la intolerancia, la tortura, el totalitarismo político, etc.”²³⁴. y que para González Quintana estos fondos documentales representan:

“[El] patrimonio de todo un Pueblo, se deben preservar de la forma más íntegra posible. En su conjunto y por extensión, son patrimonio de toda la Humanidad en cuanto pueden fortalecer su

²³³ Da Silva Catela, L., “El mundo de los archivos”, op. cit., p. 213.

²³⁴ *Ibíd.*, p. 214.

memoria sobre los peligros de la intolerancia, el racismo y los totalitarismos políticos”²³⁵.

1.4.1.- Los archivos en las transiciones a las democracias

Por consiguiente, es importante destacar que los archivos creados y recopilados durante gobiernos democráticos, tienen su contraparte en este tipo de archivos elaborados por los propios organismos represores. “La imagen de los archivos de los servicios de seguridad del estado en los regímenes represivos son una muestra gráfica en sí misma de la dimensión de su trascendencia”²³⁶. Como argumenta Antonio González Quintana, este tipo de archivos junto a la documentación que albergan, y cuya existencia es posible encontrar en diferentes regiones del mundo, son una prueba irrefutable de las actuaciones coercitivas en que incurrieron estos organismos.

“Tales archivos, que fueron absolutamente necesarios para el ejercicio de las actividades represivas, se convierten en el nuevo régimen político, con la llegada de las libertades y a la luz del referente común que ofrece la Declaración Universal de Derechos Humanos, en un instrumento social insustituible para conformar las nuevas relaciones sociales”²³⁷.

Sin duda estas cuestiones plantean una importante reflexión vinculada sobre todo a la gestión de este tipo de documentación, y donde se advierte el protagonismo que alcanzan archiveros e instituciones que los albergan, así como la política de conservación, restauración y protección por la deciden optar los gobiernos democráticos. A pesar que este debate se aleja de nuestro objetivo de investigación, al menos nos interesa enunciarlo, toda vez que el

²³⁵ González Quintana, A., “Archives of the security services of former repressive regimes”, Janus, nº 2, 1998, pp.7-23. Citado por Da Silva Catela, L., “El mundo de los archivos”, op. cit. 215.

²³⁶ González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, Salamanca, Consejo Internacional de Archivos - UNESCO, 1995, p. 7.

²³⁷ González Quintana, A., *Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos*, París, Consejo Internacional de Archivos ICA, 2009, p. 30.

tratamiento sobre este tipo de pasados, plantea diversas interrogantes que abordan tanto los clásicos métodos de investigación histórica, como la importancia que adquiere este tipo de fuentes, y donde el rol que desempeñan quienes los custodian alcanza gran relevancia, ya que en cierta medida dependerá de las políticas de conservación y acceso que determinen las instituciones, el que se pueda contar con estas fuente para las futuras investigaciones científicas. En este aspecto coincidimos con Antonio González Quintana, quien señala:

“Los archivos influyen decisivamente en la vida de los pueblos y de las personas. Ningún ejemplo ilustra de mejor manera esta afirmación que el de los documentos al servicio de la represión. La imagen de los archivos de los servicios de seguridad del estado en los regímenes represivos es una muestra gráfica en sí misma de la dimensión de su trascendencia”²³⁸.

En consecuencia, es importante considerar a los archivos, ya no como aquel lugar de las cosas pasadas, y por tanto, que no son susceptibles de afectar nuestro presente. Desde una perspectiva general, para las investigaciones que abordan el estudio de la historia del tiempo presente, resulta fundamental comprender los archivos desde dos grandes ámbitos. El primero, aquel que concibe al archivo como “un ordenamiento de registros que pueden ser utilizados o llamados a proporcionar datos para actividades del presente. Los registros pueden ser del pasado, pero se trata de un pasado que está en el presente, que puede ser usado en el presente”²³⁹. Esta idea sitúa a los archivos en una orientación más práctica, donde su uso no sólo alcanza un objetivo administrativo o económico, sino también de comunidad, representación e identidad, donde “la búsqueda de raíces genealógicas de parentesco o la afirmación de anclajes territoriales de grupos «originarios» o indígenas, son sólo algunos ejemplos”²⁴⁰. El segundo ámbito, está relacionado

²³⁸ Ibíd., p. 31.

²³⁹ Jelin, E., “Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión”, op. cit., p. 1.

²⁴⁰ Ibíd.

en comprender al archivo “«para la historia». [Es decir], ese registro que quedará guardado, a la espera de alguien –historiador profesional principalmente, pero también aficionado- hurgue en él para contar una historia o armar una narrativa con sentido de ese pasado que ya no es”²⁴¹. Es decir, como la materia prima para el trabajo del historiador, ya que estas fuentes contribuyen a historizar los hechos ocurridos en una sociedad determinada. Entre estas dos formas de entender los archivos, es decir, como documentos del presente, y como repositorio para la historia, es posible advertir, a juicio de la socióloga Elizabeth Jelin, la responsabilidad que cabe a las instituciones y organismos gubernamentales respecto a su destino y conservación.

“(…) tienen en sus manos la decisión de qué guardar y qué destruir, basándose en consideraciones de lo que es «importante» o tiene «valor» o en la intención de no dejar rastros «comprometedores» ligados a algo que no se quiere que la posteridad se entere, que se quiere borrar de la memoria del futuro o de la historia”²⁴².

Decisiones que finalmente responden a necesidades que están relacionadas con el tipo de sociedad que se pretende construir, y donde se incluye aquello que es significativo para su proyecto político. Asimismo, plantea el debate sobre el contenido y trascendencia de determinados archivos. A su vez, es posible advertir interrogantes que se suscitan en sentido inverso, esto es, que quienes deciden, no quieran dejar vestigios que puedan comprometer a unos y otros en un futuro cercano, o sencillamente, que se tiene la clara intención de que desaparezca de la narración histórica que determinada sociedad elabora. Todas estas cuestiones, nos permiten percibir un profundo debate respecto al futuro de determinados archivos. Cuestión que como hemos indicado escapa a nuestros objetivos, sin embargo, plantea importantes reflexiones, sobre todo cuando se accede a archivos que por su naturaleza contienen información que es relevante para acompañar procesos judiciales

²⁴¹ Ibid., p. 2.

²⁴² Ibid.

que se encuentran abiertos o bien que permiten iniciar otros. Instancias donde emergen interrogantes que están relacionadas con la tutela de los archivos, dominio y propiedad. Problemáticas que nos sitúan en otro tipo de debate y del que sólo enunciamos, debido a la magnitud, profundidad y repercusiones que suscitan, toda vez que alcanza esferas que no sólo están vinculadas al ámbito del conocimiento, sino también que se relacionan con la construcción histórica de una sociedad.

“Hay otro tema relacionado con los archivos, aún más controvertido: ¿de quién es el archivo? ¿Qué objetos o documentos son propiedad colectiva y cuáles son privados? ¿Qué es la propiedad colectiva? ¿Es el Estado? Y finalmente ¿Quién tiene acceso a los documentos? ¿Con qué restricciones? ¿Quién tiene el poder de decisión?”²⁴³.

Estas son sólo algunas de las dificultades que irrumpen cuando se decide institucionalmente elaborar y custodiar determinados archivos. Las tensiones que se advierten tanto en su organización como en la publicación, señalan la importancia que adquieren en la construcción de la memoria de una sociedad. “No hay duda de que la dimensión histórica es enormemente importante, pero la repercusión social que tienen estos archivos les viene conferida por convertirse en servicios públicos de primera magnitud”²⁴⁴. Por esta razón, la decisión de qué incluir y qué destruir es fundamental, ya que debido a estas características, se transforman en materia prima para la construcción de identidades, permitiendo elaborar la memoria de determinados pasados. En definitiva, “los «Archivos Nacionales» han pasado de ser espacios de afirmación del Estado-nación, a lugares que definen el patrimonio y la identidad nacional”²⁴⁵. En efecto, la importancia que han adquirido los archivos

²⁴³ Ibíd.

²⁴⁴ González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, op. cit., p. 6.

²⁴⁵ Pomian, K., “Les archives. Du Trésor des Chartes au Caran”, en Nora P. (ed.), *Les lieux de Mémoire, vol. III*, Paris, Gallimard, 1997. Citado por Jelin, E., “Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la

sobre el pasado reciente, en las actuales democracias ha sido fundamental para reconstruir la memoria histórica silenciada durante los regímenes dictatoriales. Por otro lado, este tipo de problemáticas, permiten visibilizar la gran responsabilidad de los profesionales vinculados al tratamiento y mantención de fondos documentales. Esto se debe a que también han debido enfrentarse a fuentes que por su contenido, plantean interrogantes y retos que responden a las especificidades propias de su profesión. En algunos casos, se han buscado alianzas que permitieran a los archiveros afrontar estos desafíos a través de la implementación de nuevos métodos archivísticos. En aquellos países con procesos similares, acabados o más avanzados, han desarrollado procedimientos para el tratamiento de este tipo de fuentes, con el fin de preservar de manera eficiente los archivos²⁴⁶.

En este debate, seguimos las reflexiones elaboradas en la publicación titulada “Los Archivos de la Seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos”, realizada por Unesco y el Consejo Internacional de Archivos, y que fue resumida por Antonio González Quintana²⁴⁷. En este texto se aborda con gran exhaustividad este tipo de problemáticas, visibilizando un profundo debate que gira en torno al uso, preservación y conservación de los archivos de organismos represores. Una de las primeras cuestiones que argumentan los especialistas, es que la columna vertebral del debate sobre los archivos de las desaparecidas instituciones de la seguridad del Estado, en países que han llevado a cabo procesos transicionales, está relacionado con la decisión de preservar o destruir estos archivos. En el trabajo que citamos, González Quintana señala que existen experiencias de países en los que se han conservado los archivos de los organismos represores. Este es el caso de Alemania, que luego de la caída del Muro de Berlín y posterior reunificación,

represión”, en Jelin E., Da Silva Catela L.(comps.), *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. 6.

²⁴⁶ González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, op. cit., p. 8.

²⁴⁷ El Grupo de Expertos establecido por la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos, está compuesto por: Antonio González Quintana (director), Alejandro González Poblete, Vladimir Koslov, Narissa Ramdhani, Eliana Rezende Furtado de Mendoça, Mary Ronan, Dagmar Unverhau, Lazlo Varga. Disponible en, <<http://www.foroporlamemoria.es/pl.php?id=12>>.[Consultado en enero 2011].

conservaron íntegramente los archivos de la *Stasi*²⁴⁸, gracias a la demanda de la sociedad civil y a la voluntad de los nuevos gobiernos democráticos por preservar esta valiosa documentación. En otro extremo, encontramos experiencias en donde no ha quedado testimonio escrito de la represión cometida. Si bien en varias regiones del mundo, es posible encontrar estos vacíos documentales, en América Latina el caso de Chile es representativo:

“No se tiene conocimiento de la existencia de documento alguno de las principales instituciones represivas de la Dictadura Militar, cuyo principal exponente lo constituyen la DINA [Dirección Nacional de Inteligencia Militar] y su heredera, la CNI [Central Nacional de Informaciones]. Así, al iniciar su proceso de transición, la necesidad manifestada de conocer la verdad sobre la violencia política, las desapariciones y asesinatos del régimen de Pinochet, se ha encontrado con el tremendo obstáculo de carecer de soportes documentales”²⁴⁹.

Por otra parte, se encuentran aquellas trayectorias en que luego de haber utilizado la documentación con objetivos administrativos, es decir, acceder a posibles compensaciones y requerimiento de responsabilidades durante los años de dictadura, posteriormente fueron destruidos de forma institucional. Un caso que señala el estudio que referenciamos, es el de Grecia:

²⁴⁸ El *Ministerium für Staatssicherheit* (Ministerio para la Seguridad del Estado) es conocido a nivel coloquial como la *Stasi*. Creada el 08 de febrero de 1950, funcionó como un implacable servicio secreto tanto fuera como dentro de la extinta República Democrática Alemana (RDA). Para sus fundadores, la *Stasi* debía ser "el escudo y la espada del Partido Comunista". Su sede se ubicó en Berlín Oriental. Véase, Bormann, G., "El acceso y la desclasificación de documentos: los archivos de la *Stasi* (Alemania)", en *Actas del Congreso internacional de Archivos y derechos humanos: El acceso y la desclasificación de documentos*, Sarrià de Ter, Ayuntamiento de Sarrià de Ter, 2008.

²⁴⁹ González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, op. cit., p. 7. Otros casos que cita el autor corresponden a la República de Sudáfrica, y al gobierno de Rodesia en lo que más tarde se denominará República de Zimbabue, junto al caso de España, en lo que respecta a "los fondos documentales de paradero desconocido (si es que no ha sido destruido) del SD de Presidencia del Gobierno al mando del coronel San Martín que operó como servicio de inteligencia en los últimos años del régimen dictatorial".

“[Que] destruyó, siguiendo una supuesta línea ética acordada por el nuevo poder legislativo, que juzgó como no deseable la constancia en registros y archivos públicos de las referencias sobre personas vinculadas a actividades o actitudes consideradas ilegales en el régimen anterior. Si bien pudieron realizar la depuración de responsabilidades o compensar a las víctimas, se han quedado sin memoria histórica escrita de la represión”²⁵⁰.

Para el caso de España, González Quintana señala que existió la posibilidad de “destrucción de los expedientes que reflejaban en los archivos policiales los antecedentes políticos, sindicales o ideológicos de personas consideradas desafectas por el régimen de Franco”²⁵¹. Finalmente la alternativa de destruir totalmente estos archivos, no prosperó en el parlamento español, aun cuando se dictaminó anular otros registros;

“la decisión fue la de proceder a la anulación en los registros informáticos de la policía los datos de actividades político-sociales existentes desde el régimen anterior y, a la vez, transferir al Archivo Histórico Nacional todos los expedientes conservados en el archivo de la Policía de naturaleza política. Para ello, el Ministerio del Interior, responsable del Archivo Central de la Policía y el Ministerio de Cultura, responsable del Archivo Histórico Nacional, suscribieron el preceptivo convenio. De este modo se ha conservado un conjunto documental insustituible para estudiar los movimientos sociales de oposición al régimen franquista durante más de cuarenta años”²⁵².

Cuando nos referimos al tema de los archivos y al rol que desempeñan durante los procesos de transición a la democracia, colaboran en una de las principales tareas que tienen estos gobiernos, y que está relacionado con la

²⁵⁰ González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, op. cit., p. 8.

²⁵¹ *Ibíd.*

²⁵² *Ibíd.*

demanda social de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los regímenes represivos. Demanda de verdad como lo denomina *Human Rights Watch*, que puede ir o no acompañada de la demanda social de “justicia”, como lo señalan también Jelin y Méndez²⁵³. En efecto, podemos observar en América Latina, que a partir de fines de la década de los 80’, que en varios países de la región, se comenzaron a elaborar Comisiones de Verdad como formas legales e institucionales que permitieran saber lo ocurrido durante los diferentes períodos represivos. El derecho a la verdad, se fue transformando en un imperativo, que si bien se exigió desde el momento mismo de las primeras violaciones a los derechos humanos, las luchas contra la impunidad también se fueron expandiendo en gran parte de la región. Esta situación, permitió a su vez que el Derecho Internacional, se desarrollara y expandiera con mayor eficacia y prontitud en esta materia, sobre todo, debido a la creación de nuevas reglas y procedimientos que permitían abordar los casos de violencia política. Asimismo, desde el inicio de la instauración de regímenes dictatoriales, organismos internacionales como Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por citar sólo algunos de ellos, en sus informes anuales, expusieron tempranamente su preocupación sobre los hechos que estaban ocurriendo en los algunos países de la región, elaborando a su vez recomendaciones, que en la mayoría de las veces no fueron respetadas. En este aspecto, y respecto al derecho de saber la verdad sobre los hechos ocurridos por parte de los familiares de las víctimas, en 1985 señalaba que:

“Toda sociedad tiene el derecho inalienable de saber la verdad de lo ocurrido, así como los motivos y las circunstancias en las cuales esos crímenes aborrecibles fueron cometidos, a fin de evitar una reiteración de estos hechos en el futuro. Al mismo

²⁵³ Méndez, J., “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad”, op. cit., p. 12. Véase *Truth and Partial Justice in Argentina: an Unpate*, Nueva York, Americas Watch, 1991. Disponible en, <<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/argen914full.pdf>>. [Consultado en diciembre 2011].

tiempo, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo sucedido a sus parientes más cercanos”²⁵⁴.

Estas recomendaciones fueron un gran respaldo para la creación de las Comisiones de Verdad, que se realizaron unos años más tarde. En algunos casos, su establecimiento fue parte central en los programas de algunos de los gobiernos transicionales. Sin embargo, un asunto de igual importancia en la búsqueda de la verdad, fueron los archivos que se elaboraron en democracia, así como aquellos que resistieron al período de represión política. En general se observa, para gran parte de la región, la existencia de importantes archivos que están relacionados con estos pasados, en los que se observan diferencias en cuanto a su origen.

“Si entre los archivos recientes sólo se toman en cuenta los directamente relacionados con el pasado violento –violaciones, víctimas y perpetradores-, pueden distinguirse cuatro categorías: 1) órganos estatales de represión; 2) organismos de víctimas y familiares y de defensa de los derechos humanos; 3) comisiones investigadoras “de la verdad” y tribunales de justicia –que operan a partir del cese de la violencia-, y 4) colecciones particulares constituidas alrededor de personas o temas que operan durante el período de violencia o con posterioridad a los hechos”²⁵⁵.

En el caso de algunos países de América Latina, es posible identificar importantes esfuerzos, aunque también se advierte en algunos casos, no sólo la demora en la creación de estos archivos, sino también la dificultad en cuanto a qué incluir y que no. El aprendizaje sobre cómo fueron abordados estos temas en otras regiones, así como el tratamiento que recibieron desde las

²⁵⁴ *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, Informe anual 1985-1986, p. 205. Citado por Méndez, J. E., “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad”, op. cit., p. 7. Disponible en, < <http://www.cidh.oas.org/annualrep/85.86span/Indice.htm>>. [Consultado en diciembre de 2011].

²⁵⁵ Pérotin-Dumon, A., “Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú. Introducción”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 4.

distintas disciplinas, otorgan luces al momento de analizar la importancia y complejidad que comporta este tipo de problemáticas, ya que permiten reflexionar, entre otros, sobre la historia del tiempo presente de estas sociedades. Desde esta óptica, las diversas formas que alcanza el concepto de archivo cuando se asocia “al problema de las memorias de la represión desde ángulos, espacios y temporalidades inéditas”²⁵⁶, adquieren gran relevancia, por cuanto permiten acceder al pasado a través de las huellas rescatadas y contenidas en archivos e informes de la verdad. A su vez, la creación de este tipo de archivos e informes sobre la represión política, representó un gran problema para los responsables de las violencias cometidas, ya que se transformaron en evidencias que comprobaron en ocasiones, las implicaciones en violaciones de derechos humanos. En definitiva, se intenta olvidar ese pasado represivo, negando la existencia de fuentes y archivos, pero que a luz de las evidencias encontradas, resulta un trabajo difícil el continuar negando los hechos históricos que se constatan con diferentes fuentes. “Leer el archivo es una cosa; encontrar el modo de retenerlo es otra muy distinta”²⁵⁷.

En este contexto, se advierte una amplitud y contemporaneidad en la forma de abordar los archivos, entendiéndolos “como el ordenamiento de registros que pueden ser utilizados o llamados a proporcionar datos para actividades del presente”²⁵⁸, alcanzando gran relevancia cuando están relacionados con temas de violencia política y derechos humanos. Otra cuestión importante respecto a los archivos, en cuanto a su rescate y conservación, es que su preservación contribuye tanto a mantener como transmitir, “«la» memoria colectiva, asociación que se relaciona tanto con una lucha contra el olvido y la impunidad, como con el derecho al patrimonio cultural”²⁵⁹. En este contexto, cuando nos aproximamos a este tipo de

²⁵⁶Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. x.

²⁵⁷Farge, A., *La atracción del Archivo*, Valencia, Alfons el Magnànim, 1991, (*Le goût de l'archive*, Paris, Seuil, 1989), p. 17.

²⁵⁸Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. 1.

²⁵⁹Cruz, M. A., “Silencios, contingencias y desafíos: El archivo de la vicaría de la solidaridad en Chile”, en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. 138.

archivos, observamos la directa relación entre archivo y memoria colectiva. A la vez que están interceptados por diversos conflictos políticos y sociales que están vinculados con las disputas políticas, y en las que influyen “la presión de los actores sociales, las políticas de la memoria, la valoración social de los archivos y particularmente su institucionalidad, que viene a regular el acceso, uso, mantenimiento y propiedad de los documentos”²⁶⁰. En definitiva, como lo subraya Da Silva, un archivo es el espacio, protege la producción, organización y conservación de diversos objetos, así como también implica un conjunto de fondos documentales de diversa índole, con encargados que no sólo los producen, sino que también clasifican y los custodian. Existiendo por tanto, una “relación acervos-espacio físico-agentes”, que caracterizará el tipo de archivo, así como sus usos y fines²⁶¹.

La creación de archivos de verdad en América Latina, no ha estado exenta de conflictos, los que permiten advertir la vigencia de las herencias dejadas por las dictaduras militares. Aun así, los esfuerzos realizados por los gobiernos transicionales, de dar respuesta a la demanda social de verdad y justicia, se han traducido sobre todo, en la creación de archivos e informes que han permitido conocer en forma pública y oficial, los hechos cometidos durante las dictaduras militares. Uno de ellos, es el Archivo Nacional de Memoria (ANM) en Argentina, creado en el 2003 cuyo objetivo fue:

“Obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar información, testimonios y documentos sobre la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometido el Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”²⁶².

²⁶⁰ *Ibíd.*

²⁶¹ Da Silva Catela, L., “El mundo de los archivos”, op. cit., p. 198.

²⁶² Creado el 16 de diciembre de 2003, a través del Decreto n° 1259/3. “El contenido de este archivo, está constituido por el fondo documental de la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación desde 1940 hasta 1983; los archivos CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y SDH (Secretaría de Derechos Humanos); la documentación relacionada con las leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, entre otros fondos”. Disponible en, <<http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html>>. [Consultado en diciembre 2011].

Propósito que también buscaba conservar viva la historia contemporánea, proporcionando “un instrumento para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante las violaciones a los derechos humanos [...] fomentar el estudio de la lucha contra la impunidad [...] para que puedan ser consultados por la ciudadanía con un interés legítimo”²⁶³. El historiador argentino, Federico Lorenz señala que no están “claros los criterios de accesibilidad a dichas fuentes, o lo que se entiende por «interés legítimo»”²⁶⁴. La dificultad respecto al acceso a estos archivos se presenta también en otros casos, a pesar de ello, es importante reconocer, que gran parte del cuerpo documental que contiene el Archivo Nacional de la Memoria, es el Archivo de la CONADEP, el que contiene:

“(…) los antecedentes relativos a casos examinados y actas de dicha comisión (Comisión Sábato). Esta base en permanente ampliación y revisión, elevó los casi ocho mil trescientos legajos sobre desapariciones recopilados en 1984 a cerca de doce mil quinientos en 2003”²⁶⁵.

Otros archivos de gran importancia en este país, son: el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), que es conservado por la Comisión Provincial por la Memoria. Otro acervo documental es Memoria Abierta, que “reúne, preserva, organiza y difunde el acervo documental de organizaciones de Derechos Humanos y de otros archivos personales e institucionales vinculados al terrorismo de Estado [1976-1983]”²⁶⁶. Su principal objetivo es la transmisión de la memoria, facilitando el acceso a la documentación. Para ello, privilegian las alianzas con diversas organizaciones sociales. El trabajo que desarrollan está centrado en la

²⁶³ Ibid.

²⁶⁴ Lorenz, G. F., “Archivos de la represión y memoria en la República Argentina”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), op. cit., p. 3.

²⁶⁵ Ibid., p. 4.

²⁶⁶ Entre las organizaciones de derechos humanos que componen esta organización se encuentran: Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asociación Buena Memoria; Centro de Estudios Legales y Sociales; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Servicio Paz y Justicia. Disponible en, <http://www.memoriaabierta.org.ar/como_trabajamos.php>. [Consultado en noviembre 2011].

catalogación y preservación de los archivos. De gran interés también, es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI), y que está dedicado “a la preservación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de las izquierdas desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de un espacio independiente, plural y de gestión colectiva”²⁶⁷. También se encuentra el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, institución de carácter gubernamental cuenta con “un centro documental, una biblioteca especializada, con más de 3.500 volúmenes y publicaciones periódicas (...)”²⁶⁸.

En consecuencia, se precia de forma panorámica en América Latina, un importante avance en cuanto a la apertura de los diversos archivos de la represión política de estos países, lo que significa un paso en el conocimiento y estudio de estos pasados difíciles, entre otros casos que hemos enunciado se encuentran, “los archivos de la policía de Río de Janeiro (1964-1985) en Brasil, y los de la policía del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1985) en Paraguay. (...) el descubrimiento hecho público en 2005 de los archivos de la Policía Nacional de Guatemala (...)”²⁶⁹. Experiencias similares encontramos también en Perú. En 1985, las más de sesenta agrupaciones de derechos humanos establecidas en gran parte del país, se concentraron en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para denunciar los apremios y vejaciones sufridas en Perú entre 1980-2000. Debido a la insistencia y valentía de los familiares y víctimas pertenecientes a dichas organizaciones, se creó en el 04 de junio de 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo objetivo fue esclarecer los hechos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. Para realizar su investigación la CVR recurrió a los archivos públicos y privados que habían recopilado información sobre el período represivo en

²⁶⁷ Disponible en, <<http://www.cedinci.org/>>.[Consultado en noviembre de 2011].

²⁶⁸ Además existe el *Museo de la Memoria de Rosario*, que es una de las instituciones pioneras en América latina en el tratamiento del tema de las memorias de pasados represivos, y que se ha transformado en un referente en la región. Disponible en, <<http://www.museodelamemoria.gob.ar/>>.[Consultado en noviembre de 2011].

²⁶⁹ Pérotin-Dumon, A., “Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú. Introducción”, en *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., pp.1-5.

estudio. Dentro de éstas últimas, se encontraban los archivos de las organizaciones de derechos humanos. “El 9 de octubre de 2001 la CVR firmó un convenio de cooperación con la CNDH: ésta le entregaría toda la información en su poder que tuviera relación con los hechos que la CVR tenía el encargo de esclarecer (...)”²⁷⁰. Entre de los fondos documentales que existentes en el Perú, podemos mencionar: la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza (Paz y Esperanza); Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Estas y otras experiencias tanto de archivos como de centros de catalogación y difusión, dan cuenta del avance que se ha producido respecto a las fuentes para el estudio del tiempo presente en América Latina. Pero también, señalan las diversas dificultades que han debido enfrentar las organizaciones de derechos humanos, tanto para que los gobiernos decidan crear comisiones de verdad, como para alcanzar el reconocimiento, y conservación de sus archivos, a través de la catalogación y sistematización de la información. Sin duda, no ha sido un camino fácil, por ello es importante reconocer la perseverancia de las víctimas, familiares, y organizaciones de derechos humanos, que han reclamado con insistencia a los gobiernos democráticos, el derecho a la verdad. Sin duda gran parte de esta investigación se nutre del acopio documental que han realizado los diversos organismos e instituciones de derechos humanos.

²⁷⁰ Borja Santa Cruz, R. E., “Los archivos de los derechos humanos en el Perú”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 3.

II.- Transiciones políticas a la democracia. Análisis en perspectiva histórica.

Las investigaciones que se refieren a las sociedades que han experimentado la violencia política, remite como espacio histórico de análisis a los procesos de cambio político, esto es, al estudio de las transiciones, ya que no existen casos de recuperación de memoria histórica sobre estos pasados en dictadura, puesto que ello significaría una contradicción en cuanto a la naturaleza de su concepto. Asimismo, las consecuencias que han dejado esas situaciones traumáticas, se advierten con mayor claridad en los procesos democráticos. En consecuencia, si nuestro propósito es examinar las formas en que se narra y reflexiona sobre ese pasado vinculado a la violencia política cometida por el Estado, resulta fundamental conocer los mecanismos a través de los cuales estas sociedades transitaron hacia la democracia, y más aún, la forma en que irrumpieron las memorias de esos pasados violentos, y cuáles fueron los tipos de memorias que emergieron.

El estudio de las transiciones políticas, ha generado en las últimas décadas importantes investigaciones que otorgan luces al problema de las sociedades que han tenido regímenes autoritarios y pasados dictatoriales. Las experiencias analizadas de forma panorámica, dan cuenta de la complejidad de los procesos, las tensiones y debates que se suscitan por parte del conjunto de la población sobre dos cuestiones centrales, de un lado, qué hacer con ese pasado «difícil» que abarca una gran cantidad de parcelas de la sociedad, y de otro, cómo organizar la futura democracia. Es decir, cómo las sociedades que han experimentado la represión política por parte de sus Estados, establecen los criterios de lo que debe contener el Estado de Derecho.

El estudio de las transiciones políticas, se han extendido con mayor fuerza en áreas de la ciencia política y sociología, observándose de forma pausada en el campo de la historia. Todos estos análisis con sus diferentes enfoques y aportaciones, han permitido complejizar aún más estos estudios, superando aquellos debates cuya preocupación central estaba orientada más

en la precisión del concepto que en el examen de los procesos. A pesar de ello, se advierte una correspondencia en la comunidad científica al entender a las transiciones políticas, como “el intervalo entre un régimen político y otro”²⁷¹, considerando para ello, la diversidad y particularidad de cada realidad histórica. A eso respecto Álvaro Soto señala:

“Lo realmente importante para los investigadores es describir y analizar cómo durante las transiciones, y debido a su naturaleza política, convivieron al mismo tiempo actitudes e instituciones autoritarias con otras democráticas; cómo se procedió a desmontar el Estado con Derecho para poder así construir el Estado de Derecho”²⁷².

Las interrogantes planteadas, permiten observar la necesidad de centrar los análisis más en el proceso que en el dato, identificando los elementos de cambio y permanencia, que contribuyen a que las experiencias transicionales tengan mecanismos propios que las diferencian. Siguiendo con las preguntas planteadas por Soto Carmona, podemos sumar aquellas que matizan aún más el panorama transicional.

“Cómo se fueron despejando las *incertidumbres* que suponían una amenaza de regresión autoritaria; cómo la sociedad civil, adquiriría un papel protagonista, en numerosas ocasiones por encima de las propias elites y dirigentes políticos, condicionando el proceso político a través de la movilización y/o el voto; cómo se desarrolló la cultura cívica; cómo las fuerzas armadas fueron perdiendo autonomía y en ocasiones impulsaron la transición; o

²⁷¹ O’ Donnell, G., y Schmitter, P., *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. IV, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 19.

²⁷² Soto Carmona, A., “La transición a la democracia en el sur de Europa. La historia como instrumento para su comparación”, en *Revista de Estudios Internacionales*, nº 162, Santiago, Universidad de Chile, abril, 2009, p. 11.

cómo se hizo frente a las responsabilidades habidas por las violaciones de derechos humanos”²⁷³.

Los mecanismos que utilizaron las sociedades para afrontar este tipo de problemáticas fueron diversos, respondiendo en muchos casos a las realidades históricas, sociales y culturales de que eran herederas. De la misma forma, se advierte la emergencia de demandas tanto de la sociedad civil como de algunas instituciones vinculadas a temas de derechos humanos, que durante los años de represión acogieron a cientos de personas, resguardando la vida de los perseguidos y procurando la libertad de los detenidos. Aunque no se debe olvidar “que parte de la transición se produce en un marco político donde el peso de la «situación» autoritaria es elevado”²⁷⁴, lo que se traduce en el miedo justificado hacia la policía y los militares. Sin embargo, la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos, así como la exigencia de justicia frente a los delitos cometidos, se transformaron en los mayores petitorios reclamados por parte de las fracturadas sociedades. En consecuencia, la forma en que se resolvieron los problemas que ocasionaron los regímenes dictatoriales, tuvieron algunas similitudes que se aprecian con mayor profusión en los casos del Cono sur de América.

“Las sociedades en transición afrontan los legados de represión por medio de amnistías, juicios o purgas, establecimiento de Comisiones de Verdad, compensación financiera y gestos simbólicos como la construcción de monumentos o la proclamación de días conmemorativos”²⁷⁵.

En el estudio editado por Alexandra Barahona, Paloma Aguilar y Carmen González, señalan que las políticas de verdad y justicia que se desarrollan en cada país, dependen del tipo de transición que construyen. Indican que cuanto más vencida y disminuida llega la elite del antiguo régimen a la transición, existen mayores posibilidades para incorporar este tipo de políticas. Los

²⁷³ *Ibíd.*, pp. 11-12.

²⁷⁴ *Ibíd.*, p. 12.

²⁷⁵ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *op. cit.*, p. 29.

procesos transicionales son mucho más complejos que un simple cambio de gobierno o un proceso de liberalización, ya que inciden cuestiones que están relacionadas con acuerdos y disputas entre las elites políticas que provienen del período autoritario y la oposición a este. En este capítulo de nuestra investigación, se describen diferentes tipos de transiciones políticas que otorgan claridad al análisis de la región Latinoamericana en general, y en la comprensión del proceso experimentado Chile de forma particular.

De acuerdo al ámbito de acción, es posible encontrar transiciones por ruptura, que pueden tener lugar después de una intervención extranjera y dar una victoria total a las fuerzas ocupantes. En este caso corresponde lo sucedido en Europa y Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, como señala el estudio citado, esta ruptura también se puede dar luego de una guerra revolucionaria o civil, que conduce a la derrota militar de las fuerzas dictatoriales. Esta es la situación de países de América Central como Nicaragua en 1979. Y de América del Sur, como en Bolivia que luego del régimen de García Meza, “ofrece un ejemplo de ruptura y caída tras la movilización masiva y un golpe militar contra la facción de las Fuerzas Armadas que apoyaba a ese gobierno”²⁷⁶.

Otra forma de transición por ruptura, “tiene lugar cuando el régimen cae debido a un desgaste gradual de la legitimidad interna y de la pérdida de control del poder y/o de recursos ideológicos clave”²⁷⁷. Esto puede ocurrir luego de la derrota en una guerra exterior, como sucedió en el caso de Argentina en 1983, luego de la guerra de las Malvinas, o bien en la fracaso de Grecia en la guerra de Chipre en 1975. Este quiebre, también puede ser provocado por una acción revolucionaria protagonizada por fuerzas militares. Las autoras antes citadas, colocan como ejemplo, el caso de Portugal, luego de la prolongada participación en las guerras coloniales de Mozambique, Angola y Guinea Bissau. De igual forma, este tipo de crisis, se puede evidenciar cuando se desencadena el hundimiento económico, ideológico, así como el derrumbe de

²⁷⁶ *Ibíd.*, pp. 41-42.

²⁷⁷ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *op. cit.*, p. 42.

los referentes internacionales como fue en Europa del Este y Rusia. Exponen además que en “el caso único de Alemania Oriental, el derrumbe fue acompañado por la unificación de Alemania Occidental, lo que cambió por completo el contexto y la naturaleza de las políticas para saldar cuentas con el pasado”²⁷⁸.

En otro extremo, se sitúan las transiciones negociadas, también denominadas pactadas, que se orientaron más a las reformas que a la ruptura. “En estos casos, las autoridades de los regímenes represores salientes, suelen conservar tal magnitud de poder que la nueva elite democratizadora tiene que coexistir y negociar constantemente el cambio con la vieja guardia”²⁷⁹. Aquí se encuentran los casos de España, gran parte de los países de América Latina y Central y Suráfrica. En este tipo de transiciones existe una idea de “equilibrio de poder”, como lo denominan las autoras, pero que en los ámbitos de acción, sobre todo en lo referido a los derechos humanos, es muy limitado. A este respecto, señalan por ejemplo, que en casos como los referidos a las transiciones ocurridas en Europa del Este, resultan especiales debido a que “tuvieron lugar en un contexto de crisis ideológica, cambio social y económico, que privaron a la elite comunista de los recursos de poder preexistentes”²⁸⁰, debido al profundo cambio que experimentaron estas sociedades.

Barahona, Aguilar y González, sostienen que en estos procesos, un elemento central que permite observar cómo se desarrollan los procesos transicionales, está relacionado en cómo se articulan los diversos grupos políticos dentro de la sociedad. Es decir, los grupos reformistas surgidos del antiguo régimen, el sector moderado de oposición, aquellos grupos exaltados que pertenecen tanto a la élite autoritaria como los radicales localizados en la oposición.

“La negociación entre estos grupos políticos y su fuerza relativa en los procesos de transición constituyen una variable

²⁷⁸ Ibíd.

²⁷⁹ Ibíd.

²⁸⁰ Ibíd., p. 43.

fundamental para el entendimiento de cuándo y cómo se crean Comisiones de Verdad y se adoptan medidas de justicia retrospectiva, como purgas y enjuiciamientos”²⁸¹.

Agregan que existen otros elementos que condicionan la búsqueda de la verdad y justicia en estos procesos, además de las propias limitaciones y oportunidades que puedan existir. Entre ellos, es posible identificar las actitudes y creencias de los nuevos dirigentes y partidos políticos, así como las leyes y los marcos institucionales. Así también influye la naturaleza del liderazgo, sobre todo en países con sistemas presidencialistas, y las características de las fuerzas de oposición al régimen dictatorial, puesto que esto también repercute en las estrategias para enfrentarse con el pasado y el tipo de políticas adoptadas.

“Los legados de la dictadura condicionan la posición de los actores durante la transición. Si uno de los legados es la debilidad, o incluso ausencia, de fuerzas de oposición, ello puede significar que partidos autoritarios obtengan el poder tras el hundimiento del antiguo régimen”²⁸².

En consecuencia cada proceso tiene su propio ideario, identificando una diversidad de experiencias nacionales. En este caso, las transiciones políticas, junto a la implementación de formas democráticas de conducción de estatal, también deben abordar otros temas como la recuperación de espacios democráticos y plurales, fomentar la reflexión sobre su pasado cercano, es decir, la interpretación histórica de los hechos, facilitar la información vinculada a los sucesos ocurridos, generando una mayor comprensión en la sociedad civil sobre el pasado represivo. A ello se suman, las posibles soluciones que puedan responder a las demandas de verdad y justicia, y que en cierto modo, entran en tensión cuando se utilizan en afirmaciones referidas al pasado de

²⁸¹ *Ibíd.*, p. 44.

²⁸² *Ibíd.*, p. 46.

una sociedad, donde se hace necesario considerar que ninguna versión única de la verdad puede excluir a las demás posibles.

“En Chile, por ejemplo, rivalizan al menos dos explicaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet (algo que ya nadie niega). Ambas pueden satisfacer las normas habituales de verificación de diversos criterios de verdad, pero reparten responsabilidades en direcciones contrapuestas y, por tanto, tienen implicancias enfrentadas sobre el ámbito de la «justicia»”²⁸³.

Por consiguiente, la llamada «justicia transicional» centra sus políticas públicas en un tiempo delimitado y con objetivos definidos, como “el reconocimiento oficial de los abusos o del sufrimiento de las víctimas. Estos dos procedimientos que son a la vez discursivos y catárticos”²⁸⁴. Algunos autores señalan que esto permite realizar un ejercicio terapéutico en la sociedad, permitiendo la manifestación de los traumas sociales, ofreciendo un cierto grado de seguridad en el futuro, ampliando las áreas de la justicia punitiva. Es decir, exigiendo el castigo a los culpables, y reclamando la compensación para las víctimas. No obstante, este tipo de medidas no son fáciles, debido al gran entramado de debates, tensiones y actores políticos implicados, y que influyen en el tipo de políticas adoptadas por los Estados para abordar estos temas. En algunos casos se llega incluso a considerar que, no es “oportuno castigar a los que cometieron injusticias hace mucho tiempo, y en un contexto muy diferente”²⁸⁵, situación que se torna mucho más difícil por la falta de pruebas o bien, porque los supuestos victimarios han fallecido. Un caso emblemático es lo sucedido en España, por cuanto uno de los grandes pactos dentro la elaboración de su proceso transicional, fue el acuerdo de silencio respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas durante los

²⁸³ Whitehead, L., “Prefacio. Sobre la Verdad y la Justicia”, en Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 26.

²⁸⁴ *Ibíd.*

²⁸⁵ *Ibíd.*, p. 27.

cuarenta años de la dictadura franquista, debido al recuerdo de la Guerra Civil²⁸⁶.

“Pero, como ocurre con los nombres de los caídos en un monumento que conmemora una guerra, el reconocimiento público de los que sufrieron les otorga a ellos y a sus familias un *status* que es su compensación. Si las «desapariciones» son la marca del desprecio autoritario por la vida humana, tal reaparición es un afirmación de democracia y una garantía para las generaciones futuras”²⁸⁷.

La decisión adoptada por parte del Estado de dar a conocer de forma pública, tanto los delitos cometidos como sus responsables, pone de manifiesto el interés por defender y construir una sociedad con mayor justicia. Por consiguiente, se observa que son las jóvenes democracias quienes deben hacer frente a sus pasados represivos, tomando decisiones que pueden ir desde el establecimiento de «silencios comunicativos», o bien del respaldo a peticiones generadas por parte de la sociedad, para sacar de cargos públicos a responsables y cómplices de los regímenes dictatoriales. Estas acciones producen que en determinados casos, la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos, lleve a mejorar la confianza en la justicia. Aunque con independencia de la decisión que se tome, usualmente tienden a quedar pendientes ciertas demandas.

²⁸⁶ Aunque la institucionalización del consenso, fue la consecuencia más destacada de la transición española, no es menos cierto, que la memoria histórica sobre estos pasados, genera tensión en la sociedad, sobre todo, porque aún está pendiente el reconocimiento oficial de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Si bien se observan esfuerzos políticos que han intentado abordar este problema, lo cierto es que ha debido correr bastante tinta antes de llegar a acuerdos que permitieran aprobar una Ley de Memoria Histórica en España, que en alguna medida logre aborde las demandas de verdad y justicia. En 2005, a través de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se creó el Centro de Documental de la Memoria Histórica. Posteriormente, se declaró el 2006, como “el Año de la Memoria Histórica”, gracias a la Ley 24/2006, de 7 de julio de 2006. Y un año más tarde, se aprobaría la Ley de Memoria Histórica, a través de la ley 52/2007, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, en BOE nº 310, jueves 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-53416. Disponible en, <<http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf>>. [Consultado en diciembre de 2011].

²⁸⁷ Whitehead, L., “Prefacio. Sobre la Verdad y la Justicia”, op. cit., p. 26.

En consecuencia, la eventual solución depende fundamentalmente de la voluntad política con que se quiera responder, cuestión que resulta esencial para evitar que este tipo de asuntos queden pendientes y dificulten el futuro de las recuperadas democracias. Un caso representativo de este tipo de problemas que han quedado irresueltos es el de Francia, respecto a su responsabilidad frente a la guerra de Argelia. Debido a que este tema no quedó completamente cerrado, cada cierto tiempo reaparecen las cuestiones pendientes, visibilizando las brutalidades cometidas que aparentemente estaban olvidadas, incluso cuarenta años después. Estos asuntos nos llevan a reflexionar, respecto a la importancia del pasado tanto en las sociedades como en las personas, puesto que no se puede evadir, ni menos aún negar, ya que se manifiesta de diversas formas, evidenciando las huellas y deudas de esa situación traumática, no importando el tiempo transcurrido. Es decir, en el momento en que esos pasados «irrumpen», es cuando mayores posibilidades existen de volver la mirada atrás y reflexionar sobre ellos. En el caso de las sociedades, estos «brotes» de memoria, generan tensiones frente a la eficacia de la justicia y la propia política, debido a que en el ejercicio de introspección que realiza la sociedad, lo que se busca, es intentar comprender, entre otros, los elementos que llevaron a que se desatara la violencia política.

La diferenciación sobre los tipos de transiciones que se han realizado tanto desde las ciencias sociales como de la historia, permite apreciar por un lado, los diversos matices que existen en cada una de estas experiencias, en los que influyen tanto su trayectoria política como las características socioculturales. Por otra parte, se observa que aun cuando presentan diferencias en sus procesos, poseen elementos comunes, entre los que se pueden mencionar la experiencia de violencia, junto a la forma en que abordaron las transiciones y sus legados represivos. Asimismo, en algunas de estas sociedades, es posible detectar cierto interés por parte del Estado, y de determinadas entidades gubernamentales de buscar mecanismos que permitieran algún grado de reconciliación con ese pasado. Entre ellos, se

encuentran los esfuerzos de las diversas “comisiones de investigación, purgas, juicios y amnistías”²⁸⁸.

Del mismo modo, se percibe una amplia gama de iniciativas que emergieron desde la sociedad civil y que también intentaron hacer frente a ese pasado. Aunque de forma paralela, también es posible identificar cierto grado de pasividad en la sociedad civil, situación que se manifiesta en la negación de los hechos, estableciendo responsabilidades de forma equitativa, sobre todo frente al tema de las víctimas. Lo que lleva a restarle importancia a la violencia ejercida, más aun, rehusándose a hacer memoria. Sin embargo, es posible constatar que a pesar de ello, existió una gran movilización social promovida sobre todo por organizaciones no gubernamentales, vinculadas a la defensa de los derechos humanos, entre las que destacaron las iglesias, así como algunos partidos políticos, y diversas organizaciones sociales, entre las que destacan las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, y la Vicaría de la Solidaridad en Chile²⁸⁹. Estas organizaciones realizaron muchas veces de forma clandestina, acciones de denuncia sobre los hechos que estaban ocurriendo, y que podemos identificar con las acciones que en el ámbito académico se denominaron «políticas de la memoria», ya que tienen directa relación con la forma en que las sociedades representan y narran sus pasados²⁹⁰.

²⁸⁸ Ibíd., p. 30.

²⁸⁹ Su origen se encuentra en el Comité Cooperación para la Paz, creado por el Cardenal de la Iglesia Católica, y Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Henríquez, el 9 de octubre de 1973. Fue un organismo ecuménico que reunió a diferentes credos. Su misión se orientó a “prestar asistencia legal y social a las víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se produjeron a raíz del Golpe Militar del 11 de Septiembre de ese mismo año”. Fue disuelta por mandato del general Pinochet, el 11 de noviembre de 1975. Sin embargo, el 25 de julio de 1975, Monseñor Silva Henríquez, crea la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Disponible en <<http://www.archivovicaria.cl/>>. [Consultado en octubre de 2011].

²⁹⁰ Algunas de ellas fueron, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que comienza a funcionar a fines de 1974, completar datos. La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), se creó el 01 de abril de 1975, y asumió la defensa de los derechos humanos de las personas más vulneradas y oprimidas durante la dictadura militar, <www.fasic.cl>. La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), fundada el 8 de noviembre del año 1980. Su objetivo fue dar asistencia de las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad, <www.codepu.cl>. El Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), creado en 1985, otorga atención médico-psicológica a personas que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en especial sobrevivientes de tortura, <www.cintras.org>. El Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), creado en 1988 por un grupo de profesionales (psicólogos y psiquiatra) quienes, desde el año 1978 se

Este tipo de prácticas, tuvieron una importante repercusión no sólo en el conjunto de la sociedad, sino también en la propia forma en cómo se articuló la política en las jóvenes democracias, ya que es durante los procesos transicionales donde se desarrollan las mayores iniciativas tendientes a promover los trabajos de memoria. En este contexto, coincidimos con la socióloga Elizabeth Jelin, respecto a que el ejercicio de memoria, comporta un aspecto más íntimo que tiene que ver con las experiencias particulares de cada caso, sea a nivel personal o grupal. Por tanto, el desafío se debe trasladar a lo colectivo, esto es, permitir que sea la sociedad en su conjunto quien desarrolle estas labores. Para lograr este objetivo, es necesario que el Estado proporcione herramientas, mediante una política estatal que fomente la recuperación de la memoria, para lograr una sociedad más justa y equitativa, donde la gobernanza junto a la cohesión social, sean los objetivos a alcanzar.

Los análisis que se han realizado sobre los procesos democratizadores y las transiciones políticas, presentan una abundante literatura. Entre ellos, uno de los estudios de mayor difusión, y más emblemático dentro de este tipo de investigaciones es el realizado por Samuel Huntington, quien analiza la expansión de la democracia contemporánea como producto de «olas» de democratización, seguidas de «contraolas» autoritarias. Sitúa la primera de ellas, entre 1828 y 1926, con la instauración de las democracias liberales en Estados Unidos e Inglaterra, para luego extenderse por el resto de Europa. Posteriormente, según su análisis, habría seguido una contraola, entre los años 1922 y 1942, cuyo hito fue la marcha de Mussolini sobre Roma, y que correspondió al fascismo del período llamado de entreguerras. La segunda ola, se habría iniciado con la victoria de los aliados sobre las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. A este proceso, le siguió una segunda «contraola» entre 1958 y 1975 caracterizada por el militarismo, las revoluciones, y contrarrevoluciones golpistas, que afectaron sobre todo a la región de América Latina. En último lugar, y siguiendo con el planteamiento de Huntington, habría

desempeñaban en el ámbito de la salud mental y los derechos humanos, brindando atención psicoterapéutica a personas que habían sufrido represión política, es decir, a familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, presos políticos, víctimas de tortura, exiliados, <www.ilas.org>.

existido una tercera «ola» democratizadora, caracterizada por la expansión de los procesos transicionales, iniciada “de manera poco convincente e involuntaria, veinticinco minutos después de la medianoche, del martes 25 de abril de 1974, en Lisboa, Portugal”²⁹¹, abarcando el sur de Europa, América Latina, y luego Europa del Este. “Para Huntington el cambio de más de treinta países desde el autoritarismo a la democracia constituyó el más importante desarrollo global”²⁹². Aun cuando esta periodización presenta una gran aceptación dentro de la comunidad científica, existen algunas precisiones realizadas por especialistas en estos temas, provenientes tanto de la historia como de las ciencias sociales. Si bien exceden el propósito de este capítulo, nos interesa al menos enunciarlos, ya que otorgan mayor complejidad a los diversos enfoques utilizados en la organización de esta cronología.

Para Enrique Gil Calvo, esta «ola» se habría «quebrado» con las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989, y el conflicto en los Balcanes. Por otra parte, Juan Carlos Jiménez señala que:

“El problema del concepto de «tercera ola» es que incluye procesos tan diferentes que, más allá de ciertas generalizaciones demasiado vagas, difícilmente puede generar un modelo explicativo válido que sirva como guía de democratización”²⁹³.

Sin embargo, admite que la propuesta de Huntington permite adentrarse en dos elementos que a su juicio son relevantes en los procesos de democratización. El primero, tiene relación con la idea de que estos procesos no se dan de manera individual en una región, sino que usualmente tienen sincronías, que alcanzan gran relevancia debido a las propias características de los países, “en los que existen factores de interdependencia explícitos, ya sea de tipo geoestratégico, económico, social, político, o de carácter implícito,

²⁹¹ Huntington, S., *La tercera ola la democratización a finales del siglo XX*, Barcelona, Paidós, 1994.

²⁹² Jiménez, J. C., *España y Portugal en transición. Los caminos a la democracia en la Península Ibérica*, Madrid, Sílex, 2009, p. 13.

²⁹³ *Ibíd.*

entendiendo por tales elementos de tipo cultural o de mentalidades”²⁹⁴. El segundo elemento relevante en el análisis que propone, está relacionado con la idea de democracia, “concebida como un proceso histórico de desarrollo político que lleva de la autocracia a una democracia de tipo y en esencia liberal”²⁹⁵, sobre la base de un marco político respetuoso de los derechos fundamentales. Subraya que si bien, la democracia admite diversas fórmulas, la importancia radica en que se produce cuando el gobierno se basa en un principio de legitimidad.

Por su parte, Álvaro Soto coincide en este punto con el esquema de análisis diseñado por Huntington. Subrayando que, luego de la tercera ola de democratización, y el fin de las tres dictaduras situadas en el sur de Europa, se inició un extenso periodo que se caracterizó por los siguientes elementos:

“1º) Un considerable incremento de las democracias en el mundo; 2º) La utilización de la negociación entre los partidarios del viejo sistema autoritario y los demócratas como medio para lograr el cambio político, sin apenas utilizar la violencia; 3º) El reducido número de rupturas; 4º) Las escasas regresiones autoritarias. Por otra parte, hay que destacar que los regímenes recién nacidos evolucionaron de manera distinta: la democracia alcanzó a países con muy bajo nivel de desarrollo y todas las regiones del mundo tendieron a la democratización, excepto el Oriente Medio, debido a la resistencia de los países árabes”²⁹⁶.

Alexandra Barahona, sostiene que una de las características del siglo XX, fue la búsqueda de la justicia política, cuestión que se observa con mayor profusión en los procesos de transición a la democracia. Señala a su vez, que el rasgo distintivo de la pasada centuria fue el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, junto a la “invención de nuevas formas de respuesta legal [es] y

²⁹⁴ Ibíd., p. 13.

²⁹⁵ Ibíd., pp. 13-14.

²⁹⁶ Soto Carmona, A., “La transición a la democracia en el sur de Europa. La historia como instrumento para su comparación”, op. cit., p. 9.

distintivas a dichos acontecimientos”²⁹⁷, y donde los juicios de Nüremberg (1945–1946) sentaron las bases de la jurisprudencia en materia de crímenes contra la humanidad. En este contexto, Barahona analiza los grandes ciclos de institucionalización de la democracia representativa, coincidiendo con las etapas señaladas por Huntington. Si bien examina los procesos transicionales en las diferentes regiones, su atención se focaliza en las políticas de reparación adoptadas por los diferentes Estados. Señala que en el transcurso del siglo XX en Europa, han existido «tres olas de verdad y justicia», que coexisten con las etapas de democratización desarrolladas en la región. Es decir, para una misma parcela de tiempo, y frente a las experiencias de regímenes dictatoriales, se observan dos análisis que resultan fundamentales. De un lado, el desarrollado por Samuel Huntington, que se refiere a las olas democratizadoras, y de otro, el de Alexandra Barahona que examina las políticas de verdad y justicia. Ambos exponen sus análisis y reflexiones en una misma de espacio temporal, esto es el siglo XX.

Dentro de las etapas de verdad y justicia, que se desarrollan, la primera de ellas la podemos situar luego de la Segunda Guerra Mundial, y que corresponde a la segunda ola democratizadora en el esquema de Huntington. Esta fase es considerada como predecesora de las “modernas iniciativas de justicia en la transición”²⁹⁸, cuyo centro fue el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, junto a los juicios nacionales, que se efectuaron tanto en Alemania como en países que habían sido invadidos. Es decir, este primer momento dentro de este tipo de políticas, tuvo como propósito, tomar medidas luego de los gravísimos daños dejados por la guerra, y la implantación de sistemas totalitarios.

La segunda etapa de políticas de verdad y justicia durante el proceso de transición, tuvo lugar en el sur de Europa, en Grecia, Portugal y España. Se aprecia que cada país promovió diferentes políticas para oponerse a las

²⁹⁷ Minow, M., *Between Vengeance and Forgiveness, Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998, p. 1. Citado por Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 31.

²⁹⁸ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 31.

cúpulas de represión y autoritarismo del pasado. En el caso de Grecia, se realizaron entre 1974 y 1975, juicios que “sentenciaron a 24 de los más de 100 hombres que habían dirigido el golpe de 1967”²⁹⁹. Asimismo, un alto número de funcionarios fueron depuestos de sus actividades, y se abrieron cientos de procesos por tortura, aunque se dictaron pocas sentencias. La revolución de los claveles en Portugal (1974), que puso fin a una de las dictaduras más extensas de Europa, (1926-1974). Esta experiencia significó que en los primeros años del proceso de transición se realizaran amplias purgas, quedando momentáneamente el poder político en manos de las fuerzas revolucionarias de izquierda y militares radicales. Como en otros casos que se desarrollarían más tarde, se destituyeron de sus cargos a los dirigentes de la antigua administración de la dictadura de António de Oliveira Salazar³⁰⁰. En el caso de España, se “optó en 1977 por la amnistía y por un «olvido» casi institucionalizado por lo que respecta a la Guerra Civil y a la dictadura de Franco”³⁰¹. Como lo expone Paloma Aguilar, el miedo a esta memoria traumática llevó a que se optara durante la transición por la política del consenso.

“El miedo a una vuelta a la violencia política y la culpa compartida por los abusos cometidos durante la Guerra Civil, llevaron a la elite de la transición y a la mayor parte de la sociedad civil a aceptar e incluso a preferir una amnistía general”³⁰².

Lo que se advierte en este caso, es que más allá de examinar las causas que desencadenaron el conflicto, así como identificar los responsables de las atrocidades cometidas, y los elementos que llevaron al clima de extrema violencia como fue la Guerra Civil y la dictadura franquista. Al parecer, lo que generó mayor preocupación fue evitar repetir esas experiencias, es decir,

²⁹⁹ *Ibíd.*, p. 32.

³⁰⁰ De Sousa Dias, Susana, 48, Lisboa, Betacan Digital. PAL., 2009. Un excelente documental, su nombre hace referencia a los años de la dictadura en Portugal. A través de fotografías de archivo de prisioneros políticos, aborda la experiencia de reclusión de las víctimas, resaltando la utilidad de la imagen y el testimonio como fuente histórica.

³⁰¹ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 32.

³⁰² *Ibíd.*, p. 48.

luchar por la consecución de un *nunca más*, lo que también implicó pactos, renunciaciones, cesiones y compromisos por parte de la sociedad española en su conjunto.

Por último, una tercera etapa que se advierte en las políticas de verdad y justicia, es la que se inició en América Latina a mediados de la década de 1980, para luego extenderse por Europa del Este, llegando a África y Asia en el período de 1990. Es durante los procesos de transición política en el Cono Sur, cuando se realizan las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en los regímenes anteriores, y que más tarde se extendieron por América Central a través de procesos de paz. Es interesante apreciar dentro de esta región las tensiones y conflictos que suscitan este tipo de investigaciones, que a diferencia del caso español, la cercanía de los hechos generó un gran desafío en estas heterogéneas sociedades.

2.1.- El caso de España, un espejo para América Latina

La experiencia en el proceso de transición política de España fue tomada como ejemplo por varios países de América Latina, entre ellos Chile. En este contexto, es interesante advertir los numerosos estudios existentes sobre la transición española, y al mismo tiempo, constatar las similitudes y diferencias que representaron los procesos transiciones a una y otra orilla del Atlántico. Si bien en España no existieron juicios y purgar a los responsables de la dictadura de Franco, en América Latina, su experiencia de diálogo y pactos fue tomada como un importante referente, como un espejo que permitía observar los aciertos de aquel proceso y también sus omisiones.

Las numerosas investigaciones referidas tanto a la transición política, como a la Guerra Civil, y la dictadura franquista en España, ponen de manifiesto la existencia de un fructífero debate, que no se agota en la forma en cómo se gestionó y organizó la joven democracia, sino más bien, que lleva a reflexionar sobre la memoria histórica de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, y cómo se reflejan en el proceso democrático. Algunos autores señalan

que el estudio de la transición política española, historiográficamente ha tomado un nuevo impulso, posibilitando una relectura crítica del pasado, así como la emergencia de revisionismos, que de acuerdo a Juan Carlos Jiménez se orientan en dos esferas de reflexión:

“La primera, es que la transición generó una zona oscura de extraordinaria amnesia colectiva que no ha permitido condenar suficientemente la dictadura ni a quienes tuvieron responsabilidades políticas en ella. Esta es la justificación de la llamada memoria histórica. Y la segunda, es que el consenso fue una especie de estrategia impuesta que impidió a la izquierda una verdadera ruptura con el pasado, obligándola a la edificación de una democracia que debió aceptar las restricciones impuestas por los grupos de presión provenientes del franquismo”³⁰³.

Jiménez señala que estas interpretaciones, más allá de responder a una reideologización de algunos sectores, no deja de expresar un intento de someter a una necesaria crítica, que es fundamental para la historia de España, ya que tradicionalmente ha sido analizada de forma unívoca y con un claro énfasis lineal. Puntualiza que estos temas no se pueden estudiar de manera aislada, sino más bien, en un contexto tanto regional como internacional. Sostiene en términos generales, que las transiciones no son procesos abiertos de forma permanente, sino que tienen fecha de término. En este aspecto Juan Carlos Jiménez señala, que “el proceso de transición se caracteriza por tener una base fuertemente procedimental”³⁰⁴, que si bien es interno y que se genera de forma independiente y autónoma, se puede extender a otras sociedades en las que existen relaciones de interdependencia compleja³⁰⁵. En este contexto, es posible apreciar el proceso transicional en su esencia como:

³⁰³ Jiménez, J. C., op. cit., p. 9.

³⁰⁴ *Ibíd.*, p. 14.

³⁰⁵ *Ibíd.*, p. 15. El autor señala que el concepto de interdependencia viene de las aportaciones de Keohane, R. y Nye, J., *Poder e interdependencia. La política mundial en transición*, Buenos Aires, GEL, 1988.

“El período de desaparición del régimen autoritario y de creación de las reglas e instituciones que garantizan la elección libre del gobierno, fijación de las normas para su control y el establecimiento de los procedimientos básicos para su ejercicio”³⁰⁶.

Por su parte, José María Marín, indica que la transición española se debe interpretar fundamentalmente como un proceso y que conlleva un cambio social. Desde esta perspectiva, argumenta que aun cuando la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, fue un gran acontecimiento de trascendencia histórica, no “constituye una fecha clave en el comienzo de la transición”, ya que el proceso de cambio social es fundamental para comprender los mecanismos a través de los cuales se efectuaron las políticas de la transición, hecho que adquiere especial relevancia en los últimos años del franquismo.

“Por lo tanto, la transición hacia la democracia no fue en absoluto un caso sorprendente, sino el resultado lógico de un camino emprendido años atrás y que culminaría en diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución, y marzo de 1979, con la celebración de las primeras elecciones generales, celebradas en un sistema democrático ya normalizado”³⁰⁷.

Coincide con el planteamiento de otros historiadores, al indicar que si bien estas fechas son discutibles, el término de la transición española en 1982, “cuando el PSOE alcanza el poder y comienzan a despejarse los temores de un golpe militar que acabe con el todavía frágil sistema democrático”³⁰⁸. Marín Arce, subraya que las transiciones no se pueden analizar como una simple sucesión de acontecimientos que parecen predeterminados, sino como un

³⁰⁶ Ibid.

³⁰⁷ Marín Arce, J. M., “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Bilbao, UPV- EHU, 2005, pp. 85-86.

³⁰⁸ Ibid., p. 86.

proceso que además de tener un cambio institucional definido, es la tierra fértil de posibles cambios, en los que están implicadas amplias esferas de la sociedad.

Crítica a su vez la historiografía española de corte conservador, en la que existe una interpretación, a su juicio, bastante extendida, de aquellos que consideraban que la transición española se había efectuado en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil, y con poca presión «desde abajo». De acuerdo a esta tesis, esta situación habría concedido un amplio margen de acción en las élites políticas, permitiendo a los sectores reformistas procedentes fundamentalmente del franquismo aparecer como los protagonistas del cambio político³⁰⁹. Marín Arce, explica que formulaciones de este tipo, evidencian tanto la falta de rigor científico como la ausencia de fuentes que justifiquen estas teorías. Afortunadamente, y gracias a la gran cantidad de investigaciones, muchas de estas interpretaciones han sido superadas, debido a la apertura de archivos administrativos, así como de los sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Esto ha otorgado un análisis mucho más acucioso del período, incorporando nuevas variables y visibilizando la heterogeneidad de los actores políticos. En consecuencia, los nuevos estudios, han profundizado mucho más en los análisis del proceso y al mismo tiempo, han revelado las acciones de sectores sociales antes no considerados en los estudios referidos a este período³¹⁰. José Marín señala los nuevos enfoques de las investigaciones, otorgan otras interpretaciones del proceso histórico en España, en el que se observa que:

“Concede mayor relevancia a los movimientos sociales y que resalta cómo la movilización política y social va a ser importante en la manera en que se va a desarrollar la transición y, sobre

³⁰⁹ Ibíd.

³¹⁰ Además de las investigaciones referenciadas en este texto, véase Soto Carmona, A., *¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Pardo, J., *Las damas del franquismo*, Madrid, Temas de Hoy, 2000. Souto Galván, B., *Libertad de creencias e intolerancia en el franquismo*, Madrid, Marcial Pons, 2008. Rodríguez Mateos, A., *Un franquismo de cine la imagen política del régimen en el noticiario NO-DO 1943-1949*, Madrid, Rialp, 2008. Robles Piquer, C., *Memoria de cuatro Españas República, guerra, franquismo y democracia*, Madrid, Planeta, 2011.

todo, en los ritmos en que se producirá el proceso democratizador”³¹¹.

En esta perspectiva de análisis se sitúa la contribución de Álvaro Soto, quien elabora una excelente definición para comprender las transiciones políticas, argumentando que, “son procesos de naturaleza política en los que se manifiesta un conflicto de intereses, que suele ser resuelto por acuerdos entre las elites políticas, provenientes del régimen autoritario, y la oposición al mismo”. Por tanto, lo que prima en esta etapa, son acuerdos y pactos entre unos y otros, donde lo que se observa, es la implantación de un sistema democrático sin ruptura con el pasado.

“En el caso español, existió dicho acuerdo, forzado por la *sociedad civil* (porque la *sociedad civil* obligó a que se realizase, por lo que la actitud de las elites políticas estuvo condicionada por dicha presión). La *sociedad civil* hasta las elecciones de 1977, fue la auténtica protagonista del proceso”³¹².

Los «miedos acumulados», como señala Soto Carmona, presentes en la sociedad española, debido tanto al recuerdo de la Guerra Civil y la actitud del Ejército, como a la crisis económica y los grupos terroristas, contribuyeron a moderar en cierta manera el proceso político. Desde esta perspectiva, Álvaro Soto, argumenta que la transición en España, que se inicia con la muerte de Franco, no tuvo un diseño previo. De ahí que, esta sea una de las razones que permiten observar importantes “dosis de improvisación, que generaron *incertidumbres*, finalmente resueltas en 1982”³¹³. Expone que en el caso español, se puede dar por concluido el proceso transicional, cuando se “despejaron las más decisivas *incertidumbres* sobre el sistema político recién establecido”³¹⁴. A partir del triunfo de Felipe González (1982-1996), el

³¹¹ Marín Arce, J. M., “Algunas claves interpretativas de la transición española”, op. cit., p.86.

³¹² Soto Carmona, A., *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 31.

³¹³ *Ibíd.*, p. 33.

³¹⁴ *Ibíd.*

problema se centraría en profundizar en la calidad de la democracia adquirida. Para ello era fundamental resolver las dificultades provenientes de la crisis económica. Otras tareas por resolver tenían que ver con estrechar aún más los lazos con el resto de Europa, consolidar el Estado Autonómico, profundizar en la lucha antiterrorista y sobre todo, fortalecer el Estado de Bienestar. Estos asuntos permiten observar que la transición política no fue modélica, puesto que estuvo sometida a mucha violencia, y por tanto, no estuvo programada, sino más bien se fue haciendo paso a paso. Álvaro Soto subraya, que cuando se analiza este proceso, el alcance que adquieren las incertidumbres pendientes llega a ser tanto o más importante que la determinación jurídica adoptada por el sistema político. Sin embargo, “no debe darse por finalizada la transición cuando fue aprobada la Constitución de 1978; eso sería una visión formal de los procesos históricos”³¹⁵. Agrega, que a pesar de haber sido aprobada la nueva Carta Fundamental, continuaban existiendo en la sociedad temas pendientes que influían en el proceso político que se estaba llevando a cabo, y que incluso podían haber puesto en duda su continuación.

Las incertidumbres a las que se refiere Soto Carmona, fueron “la organización territorial del Estado, el involucionismo militar y la debilidad del sistema de partidos”³¹⁶. De esas inseguridades, la que se observa con mayor énfasis dado su impacto tanto en la propia clase política, como en la sociedad civil, es el relacionado con los militares y los afanes golpistas, ya que “estuvieron presentes en la vida de los de los españoles desde los primeros momentos de la transición”³¹⁷. Esta situación provocó en la sociedad española, la emergencia de un miedo que aunque latente, se manifestaba a propósito de los hechos ocurridos.

“El golpe de Estado fracasado el 23 de febrero de 1981 se convirtió en una operación al margen de la legalidad y supuso un ataque frontal a la convivencia democrática. Con posterioridad,

³¹⁵ Ibíd.

³¹⁶ Ibíd., p. 34.

³¹⁷ Soto Carmona, A., *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 34.

estaba programado un nuevo intento de golpe de Estado el 27 de octubre de 1982, un día antes de las elecciones generales, pero fue detectado a tiempo y desmantelado por unos servicios de información en proceso de renovación”³¹⁸.

Estos análisis nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de los procesos transicionales. Puesto que, si bien no son fáciles, adquieren dinámicas propias, que responden a sus procesos históricos, otorgándoles una identidad particular. Es decir, que aun cuando se identifiquen como parte de procesos regionales, tienen elementos distintivos. Para el caso español, se pueden identificar como distintivos de este período, la crisis económica, que a juicio de Soto Carmona fue constante. La existencia de una gran movilización social y conflictividad laboral, que fueron muy intensas sobre todo entre los años 1976 y 1979, y que junto a la violencia política, estuvo presente durante todo el proceso. Subraya además que “no debemos olvidar que entre 1976 y 1982 hubo 360 atentados terroristas que produjeron 458 víctimas mortales”³¹⁹, hecho que pone en evidencia el difícil camino hacia la democracia de este país.

Nos ha interesado detenernos brevemente en la transición española, por los rasgos comunes que presenta con América Latina, entre ellos, la experiencia de la violencia producto de la instauración de una dictadura militar. Pero también porque la España democrática, al momento de elaborar su política exterior, se planteó como objetivo, colaborar con América Latina en su proceso democrático, otorgando la ayuda necesaria “a través de la propia experiencia española, en su esfuerzo de concordia y superación de un pasado marcado por la división y la confrontación”³²⁰. No obstante, en ambas regiones las nuevas instituciones democráticas necesitaron legitimarse, debido a que la libertad política permitió la reanudación del ejercicio de los derechos civiles. Antes bien, nuestro objetivo no es forzar comparaciones, sino que plantear elementos en los que podríamos encontrar algunas coincidencias en procesos de naturaleza histórica diferentes.

³¹⁸ *Ibíd.*, p. 35.

³¹⁹ *Ibíd.*, p. 39.

³²⁰ Martínez Lillo, P. A., *Chile y España. Diálogos y encuentros*, Santiago, Aguilar, 2002, p. 28.

De acuerdo a lo propuesto por Carlos Waisman, para las experiencias transicionales en los casos de España y América Latina, señala que en el ámbito político estas regiones compartieron tres tareas fundamentales. La primera relacionada con el desmantelamiento del aparato institucional anterior, lo que implicó a su vez superar dos fases. Por una parte, alcanzar acuerdos básicos, conocidos como «pactos» políticos, entre “las fuerzas políticas principales acerca del proceso de transición mismo y las características de las nuevas instituciones”³²¹. Y por otra, significó poner marcha nuevamente el aparato estatal, lo que implicó a su vez, la “redacción y actualización de constituciones y la promulgación de nuevas leyes”³²². Una segunda tarea tuvo relación con la reconsideración del legado del pasado autoritario. Esto significó mucho más que la elaboración de leyes y la reescritura de la producción histórica de los hechos pasados, ya que debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, la investigación y eventual búsqueda de la justicia, se transformaron en uno de los temas prioritarios.

“En España y en algunos países latinoamericanos, los regímenes preexistentes habían sido altamente coercitivos y cometieron graves violaciones de derechos humanos. El tratamiento de este incómodo pasado, especialmente la conveniencia de su investigación y eventual adjudicación por la justicia, se convirtió en un tema prioritario de la agenda política de la transición”³²³.

De manera equivalente, se aprecia que las jóvenes democracias, debieron mostrarse competentes para resolver problemas en los ámbitos de políticas económicas y sociales. Esto nos lleva reflexionar que los procesos transicionales no sólo fueron políticos, sino que también estuvieron orientados a la liberalización de las economías.

³²¹ Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Bilbao, UPV- EHU, 2005, p.10.

³²² *Ibíd.*

³²³ *Ibíd.*, p. 10.

“Esto significó el dismantelamiento de economías autárquicas preexistentes (cuyas instituciones habían sido bastante similares en las dos regiones en los años 50 y 60) a través de la privatización, desregulación y apertura al comercio y la inversión. En algunos casos, por ejemplo España y Chile, esta transformación había tomado forma antes del cambio político y continuó durante el mismo. En otros, tales como Argentina o Brasil, la liberalización económica intensa tuvo lugar a partir de la transición política”³²⁴.

Waisman expone que el desarrollo de las materias en economía y política, eventualmente se opusieron entre sí, debido a que el restablecimiento de mecanismos de mercado en economías anteriormente semi-cerradas, generó tensiones. Si bien estas medidas resultaron exitosas para algunos sectores de la sociedad, lo cierto es que la privatización de las empresas públicas implicó masivos despidos de trabajadores, con el consiguiente aumento de las tasas de desocupados, acrecentando los niveles de indigencia. Asimismo, la desregulación y supuesta apertura económica ocasionó la expulsión de empresas del mercado, generando cordones de pobreza. En este contexto, lo que se observa es que varios países de la región de América Latina, presenciaron la implantación de programas económicos neoliberales que combinaban políticas monetaristas de estabilización con cambios radicales en las formas de organización económica y social. “Esas experiencias, realizadas al amparo de regímenes severamente autoritarios, han marcado la historia reciente de esos países dejándolos sumidos en una crisis económica sin precedentes en medio siglo”³²⁵. Dentro de la región el caso de Chile, adquiere una gran relevancia.

“El modelo impuesto en el terreno económico constituye el caso más extremo de aplicación más extremo de la ortodoxia monetarista y librecambista de la Escuela de Chicago. Además,

³²⁴ Ibíd.

³²⁵ Vergara, P., *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, Santiago, FLACSO, 1985, p. 11.

en Chile las concepciones neoliberales se materializaron no sólo en el ámbito económico, sino que se expandieron también hacia las demás esferas de la vida social, convirtiéndose en el soporte ideológico de una propuesta global de refundación de la sociedad chilena”³²⁶.

En este caso, las reformas económicas que realizaron el grupo de tecnócratas partidarios del régimen militar, conocidos como los *Chicago boys*, permitieron implementar partir de 1974 el sistema neoliberal, que entre sus fundamentos concebía la vida política, social y cultural, como subordinados a las reglas del mercado³²⁷. Esto fue facilitado debido a las circunstancias que vivía el país, ya que cuando se efectuaron estas políticas económicas, no se tuvo en cuenta las demandas de los trabajadores y de los sindicatos, debido que estaban fuertemente controlados, así como tampoco se contó con las críticas de los sectores de oposición, ya que estaban totalmente desmantelados. En consecuencia, la situación política que vivía Chile, permitió que estas medidas se implementaran con absoluta libertad y poder.

Por otra parte, una tercera característica común en los procesos transicionales entre España y América Latina, que sugiere el estudio complicado por Carlos Waisman, está relacionado con el ámbito cultural. Ello porque la reconsideración del pasado, y la legitimación de las instituciones democráticas, también implicaron la promoción de reformas que fueron desde los programas educativos hasta la implementación de actividades culturales, que promovieran el pluralismo, debate y tolerancia. Sin embargo, se observa que la reconstrucción de una cultura democrática, no es fácil, ya que en ocasiones se ve obstaculizada por los legados dejados por los regímenes autoritarios, que han permanecido durante largo tiempo, pero también por la

³²⁶ Ibíd.

³²⁷ Entre las investigaciones sobre las políticas económicas del sistema neoliberal en Chile y sus efectos, véase Sunkel, O., *América Latina y la crisis económica internacional ocho tesis y una propuesta*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985. Sunkel, O., *Democratización y política económica en perspectiva comparada*, Santiago, FLACSO, 1993. Cariola, C., Sunkel, O., *Un siglo de Historia económica de Chile 1830-1990*, Santiago, FLACSO, 1991. Ortega Martínez, L., *Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión 1850-1880*, Santiago, DIBAM-LOM, 2005.

existencia de aquellas “tradiciones culturales que exaltan el monismo, la aquiescencia acrítica a dogmas religiosos y políticos y la intolerancia”³²⁸. De la misma manera se advierte, una cierta continuidad respecto a aquellos temas que se refieren a los pasados represivos que han quedado pendientes, y que cada cierto tiempo emergen. Estas situaciones ponen de manifiesto que a pesar de los esfuerzos que las sociedades democráticas realizan para superar esos pasados difíciles, se aprecian ciertos atisbos que permanecen en las actuales sociedades democráticas. Para el caso español, Josefina Cuesta señala que aún es posible observar las huellas de la dictadura de Franco, en diversos ámbitos de la sociedad.

“No han desaparecido nombres de calles, que lo recuerdan, ni hábitos de la población que son herederos de un largo período dictatorial, ni interpretaciones de la historia que sólo repiten los argumentos que fueron machacosamente impuestos en la escuela y en los manuales del franquismo. Lagunas democráticas o débiles tejidos sociales o de socialidad democrática pagan tributo a cuarenta años de imposición organizativa y celebrativa”³²⁹.

En definitiva, otro de los grandes retos pendientes en este tipo de sociedades, es la reapropiación de la cultura democrática. Aunque es posible observar residuos que recuerdan el pasado dictatorial, en muchos casos, ha sido la propia sociedad civil quien ha respondido cuestionando la legitimidad de los resabios del pasado autoritario, así como también, aquellas acciones que van en contra de la recuperación de la memoria histórica³³⁰. Cuesta señala que

³²⁸ Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), op. cit., p. 11.

³²⁹ Cuesta Bustillo, J., *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España Siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 15.

³³⁰ Por diferentes razones, el tema de la memoria histórica cada cierto tiempo se manifiesta con gran fuerza, poniendo de manifiesto que el pasado traumático de España tanto de la Guerra Civil como de la dictadura de Franco, vuelve a estar presente. En mayo del 2011, saltó a luz pública una controversia a propósito del tratamiento que la Real Academia de la Historia, daba a Franco, donde se le denominaba de "autoritario pero no totalitario", cuestión que generó una encendida reacción entre los historiadores. Ver “Franco, ese (no tan mal) hombre”, en *El País*, 30 de mayo de 2011. Soto Carmona, A., Martínez Lillo, P., “La naturaleza del franquismo”, en *El País*, 08 de junio de 2011.

las sociedades que han tenido transiciones pactadas, teniendo como resultado democracias vigiladas, tienen el desafío de reapropiarse colectivamente, de “las representaciones de los tiempos, de los espacios, de las celebraciones y conmemoraciones, de la sociabilidad y de la propia historia y de las relaciones sociales, secuestradas antaño por el poder dictatorial”³³¹. Lo que sin duda requiere una negociación con aquellos sectores de la sociedad que aun en democracia, mantienen ciertas simpatías por los regímenes dictatoriales.

Si como expone Waisman, los procesos transicionales a una y otra orilla del Atlántico, presentan rasgos comunes referidos a las políticas implementadas una vez reiniciado el proceso democrático, también es cierto, que existen importantes diferencias en estas experiencias. Seguimos en este aspecto, los contrastes descritos por Carlos Waisman, quien señala cuatro grandes temas en que se observan las particularidades de los procesos entre América Latina y España. El primero está relacionado con la naturaleza del régimen preexistente, ya que para el caso de España.

“La dictadura franquista fue el resultado de una guerra civil sangrienta; constituyó uno de los regímenes de más larga duración en el siglo, gobernó sobre la base de la coerción masiva durante su primer período, estuvo altamente institucionalizado, estuvo dominado por una ideología compleja, no sólo anticomunista sino también antiliberal, y tuvo el respaldo sustancial dentro de la sociedad”³³².

A diferencia del caso latinoamericano, donde Waisman señala que:

“Los regímenes latinoamericanos, por el contrario, llegaron al poder como consecuencia de conflictos internos mucho menos violentos, fueron menos coercitivos en términos relativos, tuvieron grados menores de institucionalización y a lo sumo mentalidades

³³¹ Cuesta Bustillo, J., *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX*, op. cit., p. 17.

³³² Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), op. cit., p. 11.

anticomunistas difusas, y su apoyo, aun si significativo en algunos casos, tendía a ser de tipo contingente e instrumental”³³³.

Frente a esta segunda afirmación, planteamos nuestras inquietudes, puesto que si bien, la experiencia de la Guerra Civil, sin duda es una tragedia, que provocó un gran trauma en la sociedad. A su vez, corresponde señalar que los golpes de estado que asolaron a la región latinoamericana, también dejaron profundas secuelas en estas sociedades. Así también la violencia y coerción se puede advertir en los argumentos que los dictadores esgrimieron para aprobar ante la sociedad civil, la toma del poder. En el caso de Chile, entre las razones que se dieron para validar el golpe de Estado, se encuentran aquellas que manifiestan la intromisión de ideas extranjeras, vinculadas al comunismo soviético y a la Revolución Cubana (1959), lo que demuestra la importancia del contexto internacional en las experiencias particulares de la región. El Acta de Constitución de la Junta de Gobierno en Chile, del 11 de septiembre de 1973, así lo manifestaba:

“3º.- Que Chile se encuentra en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo”³³⁴.

Una segunda diferencia que expone Waisman, tiene relación con la forma en que España y América Latina, ajustaron cuentas con el pasado. Y donde el tema fondo fue la sanción a las violaciones de derechos humanos.

“En el caso de España, estas violaciones habían tenido lugar varias décadas atrás, la mayoría de los perpetradores y sus víctimas estaban muertos y el inventario colectivo había sido

³³³ Ibíd., p.12.

³³⁴ Chile, *Acta de Constitución de la Junta de Gobierno*, Junta de Gobierno de la República de Chile, del 11 de septiembre de 1973. En *100 Primeros Decretos Leyes dictados por la Junta de Gobierno de la República de Chile*, Santiago, Jurídica, 1973, pp. 6-8. Véase anexo nº 2.

elaborado a menudo en forma silenciosa, durante una generación”³³⁵.

En América Latina en cambio, víctimas y victimarios estaban vivos, más aun, algunos de ellos se reencontraban en espacios públicos, dando cuenta de la vigencia y cercanía de los hechos³³⁶. Por otra parte, las interpretaciones del pasado reciente, se efectuaron en los inicios de la democratización, elaborando políticas de verdad y justicia que permitieran conocer de forma fehaciente lo sucedido. En consecuencia, el reclamo de justicia fue uno de los temas más importantes de los primeros años de la transición. Si bien sus resultados fueron diferentes, en algunos casos, se nombraron comisiones de verdad y en otros, existió un olvido deliberado; en unos se iniciaron procesos judiciales, así como en otros se aprobaron las amnistías. Pese a ello, coincidimos con Waisman, en que “la revisión del pasado, el clamor por la verdad y la adjudicación por el sistema legal, aún forman partes del debate público”³³⁷.

Una tercera gran diferencia, tiene que ver con la naturaleza del estado nación, y que a saber por la abundante bibliografía que aborda estos temas, para España es fundamental, cuestión que no se observa en la región latinoamericana. En este caso, se observa un giro en la concepción del estado nación, pasando de una idea unitaria de nación a una más pluralista, “que reconocía las diferencias culturales así como las identidades colectivas regionales”³³⁸. También experimentó un cambio en la naturaleza del estado, pasando de uno altamente centralizado a otro que reconocía la autonomía de las regiones.

³³⁵ Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), op. cit., p.12.

³³⁶ El Documental *Cruel Separación*, Sara Boston, Chile, Reino Unido, Fuse, Films, 2006. Reúne el testimonio de cuatro mujeres con un pasado común: todas fueron detenidas y torturadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y sus parejas murieron víctimas de la represión del régimen militar. En él Ángela Jeria, madre de la Michelle Bachelet Jeria, presidenta de Chile entre 2006 y 2010, relata el encuentro en el ascensor del edificio donde ambos vivían, con el que había sido su torturador en Villa Grimaldi.

³³⁷ Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), op. cit., p. 12.

³³⁸ Ibíd., p. 12.

“La centralidad de la cuestión nacional y la existencia de fuertes nacionalismos regionales en algunas partes de España (Euskadi, Cataluña) no tiene correlatos en América Latina, en la que el considerable pluralismo cultural que existe en algunas sociedades no ha generado, hasta ahora, identidades nacionales significativas o movimientos secesionistas. La estrategia violenta seguida por la ETA, por ejemplo, no tiene paralelos en esta región”³³⁹.

Una última diferencia que describe Waisman, tiene relación con el contexto internacional. En el caso de España, la transición se realizó la fase final de la Guerra Fría, y en este contexto, debido a su situación geográfica, fue considerado como un punto estratégico. En cambio, la transición en América Latina se desarrolló cuando los regímenes comunistas se encontraban en una profunda crisis, lo que llevó a que sus jóvenes democracias se desarrollaran cuando el imperio soviético estaba disuelto. Waisman subraya que “debido a estas diferencias, las potencias occidentales cooperaron mucho más activamente con la transición española que con las latinoamericanas”³⁴⁰.

En conclusión, nuestro interés de incorporar este tipo de reflexiones, es presentar una panorámica general de un debate que aún permanece abierto, en sociedades como la española, cuyo proceso transicional ha sido tomado como ejemplo para las sociedades de Latinoamérica. Los debates expuestos, muestran de un lado la complejidad de la reflexión y de otro, los muchos temas que aún permanecen abiertos, y que cada cierto tiempo reaparecen en los medios de comunicación, alcanzando otras esferas sociales, y que dan cuenta de las pulsiones que evidencian la permanencia de un pasado cuyas heridas aún no han sanado.

³³⁹ Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comps.), op. cit., p. 14.

³⁴⁰ *Ibíd.*, p. 12.

2.2.- Transiciones políticas y la Comisiones de Verdad en América Latina

En el caso de América Latina, se observa que los procesos de transiciones políticas se enmarcan en un ciclo, en el que convertiría a la democracia electoral en la norma de la región, y no en su excepción. En efecto, podemos situar el inicio de estos procesos a partir de las elecciones de 1978 en Ecuador, cuando se restituye el gobierno democrático, convirtiéndose en la primera experiencia en el continente, en que los militares dejan del poder. Luego continuarían Perú en 1980, Bolivia en 1982, Argentina en 1983, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay en 1989, y Chile en 1990. Y en cuyos procesos se originaron las llamadas Comisiones de Verdad.

“Argentina (1984) y Chile (1990) establecieron oficialmente comisiones que emitieron informes sobre la represión. En Bolivia (1982-1983), Uruguay (1985) y Paraguay (1992) la tarea recayó en comisiones parlamentarias. También organizaciones no gubernamentales (ONGs) emprendieron investigaciones en Brasil (1979-1985), así como en Paraguay (1984-1990) y Bolivia (1990-1993); cada una de ellas elaboró informes no oficiales sobre la violencia política”³⁴¹.

En Argentina, la derrota experimentada en el conflicto de las Malvinas, también implicó para la transición política un momento interesante, por cuanto, si bien la salida de los militares fue inminente, ésta se caracterizó por el abatimiento producto de la derrota militar. Esta situación posibilitó de alguna manera, que las primeras políticas de verdad y justicia tuvieran la fuerza e importancia suscitada en los primeros años del proceso transicional. Luego de ser elegido presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), en la primera semana de su legislatura, realizó la derogación de la Ley de Autoamnistía sancionada por las Fuerzas Armadas. Junto a ello se implementaron un conjunto de medidas que incluyeron:

³⁴¹ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 33.

“El Juicio a las Juntas militares que habían gobernado el país entre 1976 y 1982, así como a los líderes de las organizaciones político-militares que habían actuado en Argentina hasta mediados de los años setenta; la reforma del Código de Justicia Militar, que planteaba la posibilidad de que el personal militar involucrado en la violación de derechos humanos fuese juzgado por Tribunales civiles y la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de investigar los delitos cometidos entre 1976 y 1983”³⁴².

A través del Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983, la CONADEP, tuvo como objetivo recopilar información de los diferentes delitos de violación de derechos humanos, entre los que se contaba la desaparición de personas entre 1976 y 1983, a través de los testimonios de los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. La información recabada se publicó en el *Informe Nunca más*, conocido también como *Informe Sábado*. En él se estimó en 8.960 el número de personas en situación de desaparición forzada, además, se identificaron 340 centros clandestinos de detención, y se proporcionó una nómina provisoria de 1300 personas que fueron vistas en alguno de estos centros, antes de desaparecer en forma definitiva. Al mismo tiempo se publicó una nómina de personas - civiles y militares- que cooperaron en la represión³⁴³. Esta publicación expuso de manera fehaciente, la existencia de un plan sistemático de represión y que se basaba fundamentalmente en la desaparición de personas.

“El plan incluía distintas etapas, a cargo de diferentes grupos: detención y desaparición (ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia

³⁴² Águila, G., Luciani, L., “Argentina: Crímenes de Estado y Memoria”, en García, A. (ed.), *Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, Catarata, 2009, pp. 144-145.

³⁴³ *Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984. Paloma Aguilar señala que, “para 1999, se habían documentado 3.000 casos nuevos y algunas organizaciones de derechos humanos hablan de un total aproximado de 30.000”, en Aguilar, P., *Políticas de la Memoria y Memorias de la Política*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 434.

daban cuenta del caso), tortura, detención en un campo clandestino, muerte y eliminación de cadáveres; también incluía aspectos colaterales, como el saqueo de los bienes de las víctimas o la privación de identidad de niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres”³⁴⁴.

En consecuencia, la importante documentación que recopiló la Comisión se transformó en la principal prueba para llevar adelante el juicio contra los militares. Así también, el trabajo realizado por la CONADEP, se transformó en “modelo y ejemplo inaugural de las Comisiones de Verdad que se establecieron en varios países latinoamericanos y fuera del continente”³⁴⁵. Se observa en este caso, que las acciones realizadas en los primeros años de la transición en Argentina, destinadas a resolver el problema de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura, presentan a este país como un caso emblemático en el contexto latinoamericano, debido tanto a la creación de la Comisión de Verdad como al juicio a las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista legal, explica el destacado jurista argentino Juan Méndez, que:

“Los llamados “juicios por la verdad”, tal como llegó a conocerlos, fueron una innovación en la justicia argentina y posiblemente en el resto de las Américas. Difieren de los juicios penales ordinarios en cuanto la acción judicial se limita de manera expresa a una tarea de investigación y documentación, sin que exista la posibilidad de procesamiento o castigo. Estos juicios se basan en el derecho (tanto de los familiares como de la sociedad en su conjunto) a

³⁴⁴ Romero, L. A., “La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., pp.95-96. Disponible en, <http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php>. [Consultado en marzo de 2011].

³⁴⁵ Águila, G., Luciani, L., op. cit., p. 145. Respecto del «Juicio a las Juntas Militares», véase Acuña, C., “Lo que el Juicio nos dejó”, en *Revista Puentes*, nº 2, La Plata, 2000. Cañón, H., “Un antes y un después”, en *Revista Puentes*, nº 3, La Plata, 2001.

conocer la verdad, así como el derecho de los familiares de las víctimas a hacer el duelo por sus muertos y enterrarlos”³⁴⁶.

El juicio de las Juntas militares se efectuó entre abril y diciembre de 1985. Fue conocido como el «Juicio del Siglo» y afectó a nueve de los líderes de las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Se trataron 281 casos, de los 709 originalmente ofrecidos por el fiscal, y declararon más de 800 personas. “El juicio fue oral y público, congruente con el planteamiento del Gobierno de otorgarle carácter ‘pedagógico’, y estuvieron presentes todos los medios de comunicación”³⁴⁷. Las historiadoras Gabriela Águila y Laura Luciani, señalan que la única experiencia anterior en esta materia, era el Juicio de Nüremberg.

“La diferencia fundamental respecto del caso argentino es que el Juicio de Nüremberg, realizado al terminar la Segunda Guerra Mundial contra los criminales de guerra nazis, fue llevado a cabo por las Fuerzas Aliadas y no por el propio Estado alemán”³⁴⁸.

Este Juicio tuvo un impacto a gran escala. En el ámbito social, permitió conocer nuevos elementos para explicar el pasado mediato, pero sobre todo, estableció como prioridad condenar los crímenes de lesa humanidad. Evidentemente también repercutió dentro de las Fuerzas Armadas, quienes respondieron con amenazas de todo tipo. En el plano político, y de acuerdo a lo dictaminado por la Corte de Justicia, quedó la posibilidad de abrir nuevas medidas penales para militares de rangos inferiores. Sin embargo, en la década de los noventa, se llevarían a cabo los llamados «perdones presidenciales», donde quedaron en libertad muchos de los inculcados, así como otros tantos que habían sido juzgados por tribunales menores producto

³⁴⁶ Méndez E. J., “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 14. Disponible en, <http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php>. [Consultado en marzo de 2011].

³⁴⁷ Águila, G., Luciani, L., “Argentina: Crímenes de Estado y Memoria”, op. cit., p. 145.

³⁴⁸ *Ibíd.*, p. 167.

de acusaciones particulares. Pese a ello, para el historiador argentino Luis Alberto Romero, la importancia de este juicio radica en que estableció “judicialmente que la dictadura constituyó un estado criminal, [y] se convirtió en un hito: juzgar y castigar a los culpables principales constituyó un hecho excepcional, en América Latina y en el mundo”³⁴⁹. Así también, el título *Nunca Más*, se extendió a otras demandas vinculadas a los derechos humanos. Por consiguiente, el caso de Argentina, es el reflejo fehaciente de un proceso que se extendió por toda América Latina, alcanzando América Central y el Caribe, aunque en esta región en particular, la justicia política ha tenido menos oportunidades, aunque se evidencian esfuerzos como en los casos de Honduras, Nicaragua y el Salvador, pero debido a la complejidad de su situación política esto ha sido mucho más difícil.

En consecuencia, qué hacer con el legado de violaciones de derechos humanos, es un problema generó importantes debates dentro de las jóvenes democracias, puesto que en muchos casos, lo que se esperaba era una ruptura total con el régimen anterior. No obstante, debían dirimir en un contexto social y político altamente complejo, ya que por un lado se debía considerar las legítimas demandas de verdad y justicia, y por otro, dar estabilidad al nuevo gobierno. Lo que observamos en estas experiencias, es que desde ciertos sectores de la sociedad, se impugnaba la búsqueda de verdad y justicia, argumentando que estas acciones llevarían a desestabilizar la paz y el frágil orden alcanzado. Sobre todo porque el recuerdo de la violencia que había experimentado la sociedad era latente.

“De vez en cuando se planteaba que la “reconciliación” exigía silenciar el pasado. Aunque en un principio los activistas por los derechos humanos se resistieron al uso de la palabra “reconciliación” por ese mismo motivo, con el tiempo pudieron persuadir a sectores más amplios de la sociedad de que la

³⁴⁹ Romero, L. A., “La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión”, op. cit., p. 115.

verdadera reconciliación sólo puede fundarse en un proceso que no ignore ni oculte el pasado”³⁵⁰.

Si bien la experiencia Argentina sentó un precedente, también se observan otros esfuerzos por parte de las autoridades democráticas de realizar juicios. Es el caso de Bolivia, que entre 1986 y 1993, inició juicios de forma oficial. Sin embargo, se logró dictaminar fallos sólo a los máximos líderes del cruento período de García Meza (1981-1982). “Tras un proceso que llevó siete años, García Meza fue por fin encarcelado en 1995 junto con todos los ministros de la época, once agentes paramilitares y el antiguo jefe de las Fuerzas Aéreas”. Estos casos, representan un gran esfuerzo por parte de los gobiernos democráticos de sancionar legalmente y por primera vez en América Latina a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Si bien, gran parte de las condenas -como era de esperar-, no se llegaron a cumplir, si se observa un esfuerzo estatal por hacer justicia. En otros casos, en los que no existieron procesos judiciales oficiales, se iniciaron demandas a los responsables de forma individual, y a través de organismos de derechos humanos. En algunos de ellos se realizaron condenas, como es el caso de Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay³⁵¹. Sin embargo, la impunidad sobre gran parte de los represores, se manifestó a través de leyes de amnistía que eliminaron o bien, restringieron la esfera de acusaciones. Los casos de Brasil

³⁵⁰ Méndez E. J., “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad”, op. cit., p. 11.

³⁵¹ En el caso de Argentina, el llamado «Juicio a las Juntas Militares», se realizó en 1985, la sentencia acusatoria, “confirmaba la noción de un plan sistemático de exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los testigos y descalificaba los argumentos de la defensa. Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato. En <http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documentos_historicos.php>. [Consultado en enero 2011]. En el caso de Chile no existieron juicios masivos, hasta septiembre 1996, se habían procesado 15 funcionarios del Ejército y Carabineros de Chile. Véase El *Centro de Derechos Humanos (CDH)*, Universidad de Chile, dedicado al desarrollo de actividades de docencia e investigación para la capacitación de funcionarios públicos en América, provenientes de diversos sectores del aparato estatal. Disponible en, <<http://www.estadodederechocdh.uchile.cl/>>. [Consultado en septiembre de 2011]. *Observatorio de Derechos Humanos*, Universidad Diego Portales que estudia causas judiciales iniciadas o reiniciadas desde 1998 por violaciones de derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990. Disponible en, <<http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos/>>. [Consultado en septiembre de 2011].

(1979), Chile (1978) y Uruguay (1989) son representativos de estas cuestiones³⁵².

En América Central los procesos relacionados a la justicia política, no tuvieron tantas oportunidades de concretarse, debido a la complejidad de sus conflictos internos, en los que se cruzan cuestiones de tipo étnicas, con aquellas vinculadas a la guerrilla y grupos paramilitares. Lo que se observa, es que los esfuerzos se han centrado más indagar sobre lo sucedido a las víctimas, que en juzgar a los responsables. Uno de estos casos es el de Guatemala cuyo proceso de transición democrática fue el resultado de extensas negociaciones de paz supervisados por Naciones Unidas.

El conflicto en Guatemala de más de tres décadas, tenía a su población sumida en el miedo, la muerte y la desaparición de personas. El historiador guatemalteco Arturo Taracena, señala que la creación de la Comisión de Verdad, fue el propósito de “uno de los acuerdos firmados entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entre 1994 y 1996”³⁵³, sin embargo, recién en 1997 logró crearse la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH)³⁵⁴, como resultado del Acuerdo de Oslo, el 23 de junio de 1994. Su objetivo fue “esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca,

³⁵² Nos referimos a la leyes de Amnistía que se aplicaron en Brasil, Chile y Uruguay, estas fueron: Brasil, Decreto *Ley n° 6.683* del 22 de agosto de 1979; Chile, Decreto *Ley n° 2.191*, que concede amnistía general, bajo las circunstancias que indica, por los delitos que señala, del 18 de abril de 1978. Diario Oficial del 19 de abril de 1978. República Oriental del Uruguay, *Ley n° 15.737*, que aprueba la Ley de Amnistía, del 08 de marzo de 1985.

³⁵³ Taracena Arriola, A., “La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 3. Disponible en,

<<http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/taracena.pdf>>. [Consultado febrero de 2011].

³⁵⁴ El «Acuerdo de Oslo, 23 de junio de 1994», firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Guerrilla, con el auspicio de la ONU. La Comisión estuvo por un asesor extranjero y dos guatemaltecos, quienes tuvieron inmunidad judicial y de detención mientras se realizaban las investigaciones. El equipo técnico estuvo conformado por 250 profesionales nacionales y extranjeros, quienes trabajaron en oficinas descentralizadas y luego en la capital para el Informe final. Ver Simon, J. M., “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, verdad y justicia en Guatemala. Disponible en, <<http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex106/BMD10606.pdf>>. [Consultado en enero de 2011].

vinculados con el enfrentamiento armado”³⁵⁵. Como otras comisiones, no tuvo atribuciones judiciales, sino que se centró en dar a conocer “la historia de lo acontecido durante más de tres décadas de guerra fratricida”³⁵⁶. Dentro de los ciento cincuenta y dos puntos que conformaron sus conclusiones, se identificaron las raíces históricas de la violencia, se publicó el número de desaparecidos y muertos que llegó a 200.000 personas. Así también se identificó el genocidio contra el pueblo maya. Y las responsabilidades que recayeron tanto al estado como a la guerrilla.

Entre las recomendaciones que realizó la Comisión, estaban los cambios legales e institucionales, así como una depuración militar, junto a la investigación judicial. Se sugirió también realizar exhumaciones de cadáveres, y otorgar una reparación a las víctimas. A pesar de estos hechos que demuestran una vez más la crudeza de una realidad muchas veces silenciada, se observa que tanto las demandas como la institucionalización de verdad y justicia, no fueron fáciles. En este caso, si bien la intervención de la ONU permitió que se creara la Comisión, no pudo impedir, que en 1996 se promulgara la Ley de Reconciliación Nacional³⁵⁷, que excluyó los crímenes contra la humanidad y el genocidio, entre otros. Esta situación llevó a que Amnistía Internacional, en 1999 expusiera públicamente sus reservas frente a esta ley indicando que dejaba “abiertas varias puertas a la impunidad”³⁵⁸.

³⁵⁵ Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala, Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones*, Capítulo IV, Guatemala, UNOPS, junio 1999, p. 11.

³⁵⁶ *Ibíd.*

³⁵⁷ Guatemala, Decreto Ley nº 145, que crea la *Ley de Reconciliación Nacional*, del 27 de diciembre de 1996, de 27 de diciembre de 1996. Disponible en, <<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0148.pdf?view=1>>. [Consultado en noviembre de 2011].

³⁵⁸ El texto completo publicado por Amnistía Internacional, indicaba que: “La Ley de Reconciliación Nacional no excluyó expresamente de la amnistía las ejecuciones extrajudiciales ni otras modalidades de crímenes de lesa humanidad, como la práctica a gran escala o sistemática del desplazamiento forzado de población y la detención arbitraria prolongada. Además, aunque se excluyó también de la amnistía los delitos imprescriptibles de acuerdo a tratados internacionales ratificados por Guatemala, lo cierto es que Guatemala no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad. De esta manera la Ley de Reconciliación Nacional dejó abiertas varias puertas a la impunidad”, en Amnistía Internacional, *Guatemala / España: Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala no pueden quedar impunes*, Comunicado de Prensa, 02 de diciembre de 1999. Disponible en, <http://www.es.amnesty.org/com/1999/com_02dic99.htm>. [Consultado en noviembre de 2011].

A pesar de la existencia de trabas y en algunos retrocesos en los procesos de búsqueda de la verdad y la justicia, debido a que las sanciones judiciales a los responsables de los crímenes, no se cumplen totalmente, ya sea porque se rebajan las condenas, o bien se amnistían, generando malestar en la sociedad civil. Lo cierto es que las Comisiones de Verdad, adquieren un carácter fundacional. En este contexto, Arturo Aracena que fue parte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), explicaba que:

“Cabe ubicar esta iniciativa entre los intentos oficiales por enfrentar el conocimiento del pasado en el istmo, en los últimos cincuenta años y la aplicación de medidas de justicia y reparación, con el fin declarado de contribuir a la reconciliación nacional y a la transición democrática”³⁵⁹.

Como hemos analizado, las transiciones políticas son complejas, ya que responden a la heterogeneidad de sus procesos históricos. Pese a ello, observamos que existen elementos comunes como la experiencia de la violencia y la búsqueda de la verdad y justicia. Sin embargo, en América Central, observamos elementos que permiten identificar algunas de esas diferencias en estos procesos. Por un lado, la injerencia y el rol de los actores internacionales que influyeron de manera efectiva en estos procesos. En este caso, la Organización de Naciones Unidas (ONU), que también colaboró en la experiencia transicional de El Salvador. En definitiva, la importancia de las organizaciones internacionales fue fundamental en la promoción de las acciones de verdad y justicia, como hemos observado en el caso de Guatemala. Por otro lado, se advierte que el tipo de negociación política, tanto para revelar la verdad, como para la elección de gobiernos democráticos, no fue simultánea, sino fue el resultado final de conflictos armados, cuestión que no ocurrió en los países del Cono Sur. Estos elementos de análisis, ponen de manifiesto que las diferencias entre las formas y resultados de las políticas de

³⁵⁹ Taracena Arriola, A., “La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala”, op. cit., p. 3.

verdad y justicia adoptadas en los diversos países, tienen directa relación con el contexto social y político en el que se desarrollan.

III.- El difícil camino hacia la democracia en Chile: Debates y reflexiones

Si bien el objetivo de esta investigación, no es el estudio de la transición política en Chile, nos ha interesado indagar dentro del espacio temporal que abarcó este período, los mecanismos a través de los cuales los gobiernos transicionales adoptaron políticas de la memoria, es decir, cómo la sociedad chilena logró articular una salida hacia un tipo de democracia, en este caso, «pactada». La pertinencia de abordar de forma general estos procesos políticos, se relaciona en el hecho de que es en las transiciones de gobiernos autoritarios a otros democráticos, donde es posible implementar políticas de memoria. Esto se debe porque en principio puede existir voluntad política para enfrentar los temas pendientes en materia de derechos humanos, o bien, por la demanda social que se produce hacia el Estado, en ambos casos, se requiere adoptar un compromiso de búsqueda de verdad y justicia para las víctimas, así como en la denuncia de pública de la violencia ejercida sobre la sociedad civil. Como hemos comentado, nuestro interés está centrado en examinar la instalación de la arquitectura del terror en Santiago, en el período en que funcionó la DINA, a través del análisis de los relatos que las víctimas elaboraron, y que se referían a los principales centros de tortura que estuvieron a cargo de esta policía secreta, publicados en los informes de verdad que se realizaron durante los gobiernos democráticos, permitiendo examinar el espacio que ocupa la memoria de la represión política en la transición chilena.

En consecuencia, en este apartado abordamos de forma general la transición política en Chile, ya que su trayectoria es fundamental para comprender el tratamiento que adquirió el legado que dejó la dictadura militar en este país. Por esta razón, nos detendremos en aquellos acontecimientos que resultan ser puntos de inflexión, dentro de las políticas de la memoria implementadas por los gobiernos transicionales. Entendiendo por ello, las dificultades, tensiones y pactos que se debieron efectuar para su implementación. De ahí que nos interese analizar, de forma general los mecanismos a través de los cuales que se gestó este proceso, considerando los problemas que implicó el tipo de opción adoptada por los diversos sectores

políticos, para terminar con el régimen militar. Nuestro interés está relacionado en indagar en aquellos marcos políticos, sobre los que se fraguó la democracia en Chile, identificando los hechos vinculados a la latencia constante, de las herencias y huellas dejadas por los crímenes de lesa humanidad cometidas durante la dictadura.

Desde la perspectiva del examen que se realiza a los diferentes procesos transicionales, se advierte además de los componentes políticos propios de estos cambios, otros, que también condicionan la búsqueda de verdad y justicia, y aunque en primera instancia parecen difusos, en la larga duración se logran percibir sus influencias. Nos referimos al peso de las tradiciones y costumbres. El teórico social Jon Elster, indica que “las políticas no sólo dependen de las limitaciones sino también de las creencias y valores”³⁶⁰, así también Alexandra Barahona señala, que de otra forma no se podría entender el caso chileno.

“Este país experimentó la «transición por extracción» *par excellence* y los «enclaves autoritarios» abundan, pero es también el país que, en la actualidad tiene el mayor número de oficiales de alta graduación en prisión por violaciones de derechos humanos”³⁶¹.

En los casos de países como Chile, con un fuerte sistema presidencialista, unido a las creencias políticas e incluso a la adhesión de ideas cristianas de reconciliación o perdón, se constituyen en elementos que influyen tanto en el diseño como en los objetivos empleados en este tipo de políticas. En este caso, en relación al primer gobernante de la transición política en Chile, Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), perteneciente al partido de centro derecha, la Democracia Cristiana (DC), que en su momento fue partidaria del golpe de estado de 1973, se observa que:

³⁶⁰ Elster, Jon, “Coming to Terms with the Past, A Framework for the Study of Justice in the Transition to Democracy”, en *Archives Européennes de Sociologie*, 39 (1), pp. 7- 48. Citado por Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 44.

³⁶¹ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 45.

“La relación del Presidente con una Iglesia católica activista y con un movimiento por los derechos humanos estrechamente vinculado con su partido, condujo a iniciativas para ocuparse del pasado, pero también a una política que hacía hincapié en la reconciliación por encima del castigo”³⁶².

A estos elementos, también contribuye la naturaleza del liderazgo, y donde las lealtades personales como las creencias políticas influyen, según algunos analistas en la forma en cómo se gestionan este tipo de procesos. Sin embargo, consideramos que en el análisis del proceso transicional en Chile, se deben incorporar otros elementos de análisis, que permiten conocer los mecanismos a través de los que se fue elaborando el sistema de impunidad que rodeó el régimen militar. En este contexto, la Carta Fundamental de 1980, trazó la trayectoria de lo que fue el ideario de la transición y la democracia protegida, que se instaló de forma gradual entre 1973 y 1990.

Luego del derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973), los golpistas encabezados por Augusto Pinochet, conformaron una Junta de Gobierno, el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Conformó la Junta militar Pinochet Ugarte, hasta entonces General de Ejército y Comandante en Jefe del Ejército. José Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Leigh Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros. El Acta de constitución de la Junta de Gobierno, estipuló en el Decreto de Ley nº 1, que:

“Declaran que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la

³⁶² Ibíd.,

actual situación del país lo permitan para el mejor cumplimiento de los postulados que ella propone”³⁶³.

Asimismo, en noviembre de 1973, la Junta militar, asumió en su totalidad los poderes constitucionales del Ejecutivo y Legislativo, quedando el poder judicial con las mismas atribuciones que le otorgaba la Constitución vigente de 1925. De la misma forma, dentro de las primeras medidas adoptadas, estuvo la disolución del Congreso Nacional³⁶⁴, junto a la proscripción de todo aquello vinculado al gobierno de la Unidad Popular (UP), y en el que se incluían bienes muebles e inmuebles, así como el llamado a receso para todos aquellos partidos vinculados al gobierno recién depuesto³⁶⁵. Se cerraron los registros electorales, con la excusa de que durante las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Unidad Popular había intervenido los registros electorales, ya que había aumentado su representación en el Parlamento, razón por la que se ordenó la destrucción de los padrones electorales. Así también se intervinieron las Universidades, colocando rectores designados, en su mayoría militares³⁶⁶. Por otra parte, la actividad sindical fue duramente reprimida, y comenzó a ser regulada por normas transitorias, ya que también fue disuelto el Tribunal Constitucional. Estas medidas jurídicas se podían aplicar debido a la legislación existente “sobre regímenes de excepción, Seguridad Interior del Estado, de los Códigos penales y militares, de las leyes que regulaban los abusos de publicidad y de la legislación sobre el terrorismo y control de armas y otras”³⁶⁷. En consecuencia, con la vida democrática suspendida, la forma en que la Junta Militar llevó a cabo su labor represiva, fue a través de decretos-leyes³⁶⁸, lo que significó que de forma transitoria se realizaron normas

³⁶³ Chile, *Acta de Constitución de la Junta de Gobierno*, Junta de Gobierno de la República de Chile, del 11 de septiembre de 1973, op. cit.

³⁶⁴ Chile, Decreto Ley n° 27, que disuelve el Congreso Nacional, Ministerio del Interior, del 11 de septiembre de 1973. Diario Oficial del 24 de septiembre de 1973.

³⁶⁵ Chile, Decreto Ley n° 77, que declara ilícitos y disueltos los partidos políticos que señala, Ministerio del Interior del 08 de octubre de 1973. Diario Oficial del 13 de octubre de 1973.

³⁶⁶ Chile, *Decreto Ley n° 50*, que Designa Rectores- Delegados en Universidades del país, Ministerio de Educación Pública, del 01 de octubre de 1973. Diario Oficial del 02 de octubre de 1973.

³⁶⁷ Loveman, B., Lira, E., *Arquitectura política y seguridad interior del Estado 1811-1990*, op. cit., p. 319.

³⁶⁸ El Decreto-Ley, es una norma inicialmente provisional, puesto que se trata de una emanación normativa del gobierno regulando materia que ha de ordenarse mediante ley, pero

legislativas, hasta que estuviera vigente la nueva Constitución, puesto que de acuerdo a lo expresado por la Junta, esto correspondía a lo dispuesto en la Carta Fundamental de 1925 en vigor.

En este contexto, el cientista político Carlos Huneeus, indica que la idea de crear una nueva Constitución se observa desde los primeros días en que los militares se hicieron con el poder. Subraya la necesidad que tenía la Junta, por encontrar una vía «legal» a la forma «ilegal» de hacerse con la dirección del país. Señala que esta situación se aprecia de forma fehaciente en el mes de septiembre de 1973, cuando se constituye una comisión de juristas a la que se le encomienda la tarea de redactar un anteproyecto constitucional.

“El interés por preparar una nueva Carta Fundamental se aprecia en la primera sesión de la Junta: “se encuentra en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, trabajo que está dirigido por el Profesor Universitario Dn. Jaime Guzmán”³⁶⁹.

Huneeus señala que el decreto que creaba esta comisión, tenía como objetivo central proveer de un profundo cambio a nivel institucional, cuestión que requería de una nueva Constitución, argumentos que estaban presentes en la disposición que daba origen y naturaleza a este organismo. Por consiguiente, el 12 de noviembre de 1973, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto Supremo nº 1.064, del 25 de octubre del mismo año, que instauraba oficialmente una Comisión Constituyente, cuya designación tenía como objetivo estudiar, elaborar, y proponer el anteproyecto de una nueva constitución política del Estado³⁷⁰. Sin embargo, en 1975, esta entidad optó por establecer

que, por razones de urgencia, aprueba el poder ejecutivo, sin menoscabo de su posterior debate y aprobación por el parlamento. Ribó Durán, L., *Diccionario de Derecho*, vol. 2, Barcelona, Bosch, 2005.

³⁶⁹ *Actas de la Honorable Junta de Gobierno (AHJG)*, Sesión nº1, 13 de septiembre de 1973. Citado por Huneeus, C., *El Régimen de Pinochet*, Santiago, Sudamericana, 2002, (1ª ed. 2001), p. 259.

³⁷⁰ La «Comisión Ortúzar», estuvo compuesta por Enrique Ortúzar Escobar, Sergio Díez Urzúa, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca, Alicia Romo.

«actas constitucionales», documentos jurídicos que tenían como propósito, transformarse en capítulos de una futura constitución. Este cambio dentro de la política del régimen, en este aspecto, Carlos Huneeus sostiene:

“Esta nueva política fue planteada por el general Pinochet en el mensaje presidencial del 11 de septiembre de 1975, en el anunció la «nueva institucionalidad». El Acta Constitucional nº 1 crearía un «Consejo de Estado», cuya función sería asesorar a la Junta de Gobierno. El Acta Institucional nº 2 sentaba las «Bases esenciales de la institucionalidad chilena», la nº 3 estaba dedicada a «Los derechos y deberes constitucionales», y la nº 4 hacía referencia a los «Regímenes de emergencia»³⁷¹.

Estos planteamientos fueron relevantes dentro de la política del régimen, ya que a través de ellos, el Consejo de Estado, cumplía las funciones de Cuerpo Consultor del Presidente de la República, cargo que desde el 11 de septiembre de 1973 adquirió Augusto Pinochet Ugarte. Por consiguiente, dentro de los objetivos de las actas constitucionales, estaba definir la institucionalidad de Chile, derechos y deberes constitucionales, así como los regímenes de emergencia. En consecuencia, la finalidad era que estos cuerpos jurídicos se fueran desarrollando para establecer una estructura definitiva que diera forma a la nueva Constitución. Carlos Huneeus señala, que el trabajo de la Comisión fue paulatino debido a que la Junta de Gobierno no precisó los criterios centrales que correspondían a su actividad, puntualizando que “los uniformados, no tenían interés en que ésta terminara pronto su trabajo, porque habría significado su inmediata aplicación y, con ello, su vuelta a los cuarteles”³⁷².

³⁷¹ Huneeus, C., *El Régimen de Pinochet*, Santiago, Sudamericana, 2000, p. 233.

³⁷² *Ibíd.*, pp. 231-232. El autor señala que la «Comisión Ortúzar» elaboró la redacción de unos artículos titulados “Bases de la Institucionalidad”, y “Nacionalidad y ciudadanía”, ambos aprobados en 1974. Así como, “Derechos y deberes constitucionales”, que habría quedado inconcluso debido a que la Comisión se le asignó la tarea de modificar la Constitución de 1925, para permitir una profunda reforma de carácter administrativa.

“El «Discurso de Chacarillas» -cuyas ideas fueron preparadas por Jaime Guzmán encargándose el general Sergio Covarrubias de convencer a Pinochet para aceptarlas-, es pronunciado el 9 de julio de 1977 con el objeto de precisar por vez primera plazos más que metas”³⁷³. El texto reconoció por primera vez y forma pública, que no se volvería al sistema democrático anterior, sino que “se establecería un régimen distinto –*la democracia protegida y autoritaria*- más bien cercano a un régimen de gobierno de orientación corporativista”³⁷⁴. En este discurso, se puso de manifiesto que serían los militares, los garantes de la institucionalidad, aún cuando en la trayectoria diseñada por el régimen se incorporaran civiles, insistiendo que:

“Nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo”³⁷⁵.

El texto de Chacarillas, es fundamental para comprender lo que más tarde fue la transición chilena, debido a que estableció tanto los plazos para el propio régimen, como un itinerario bastante definido, cuyo objetivo era fundar un orden institucional que contemplaba tres etapas, y que se instalarían de manera paulatina, estos eran; “la de recuperación, la de transición y la de

³⁷³ Timmermann, F., *El factor Pinochet. Dispositivos de poder- legitimación- elites. Chile, 1973-1980*, Santiago, Universidad Católica Silva Henríquez, 2005, p. 170. Esta fecha recuerda el enfrentamiento ocurrido entre las fuerzas militares de Chile y Perú, en el contexto la Guerra del Pacífico (1879-1884). Conocida como *La Batalla de la Concepción* (9 y 10 de julio de 1882), nombre del pueblo peruano ubicado a 22 kms. de la ciudad de Huancayo en el departamento de Junín, en la zona de los Andes centrales del Perú. En este enfrentamiento murieron los 77 soldados chilenos, que correspondía a la 4ª compañía del Batallón 6º de Línea Chacabuco, que estaba al mando del Teniente Ignacio Carrera Pinto y los subtenientes Arturo Pérez Canto y Luís Cruz Martínez.

³⁷⁴ Huneeus, C., op. cit., p. 234.

³⁷⁵ “Discurso de Chacarillas”, 09 de julio 1977, en Huneeus, C., op. cit., p. 234. Este discurso se realiza en los mismos días en que “eran torturados en el “Palacio de la Risa”, así llamada la Villa Grimaldi, miles de chilenas y chilenos. Se las violaba, aterrorizaba, y luego se las iba a tirar al mar, como a Marta Ugarte una de las primeras que en esos mismos días apareció flotando en las playas de Longotoma”, en Bengoa, J., “Los Chacarilla- boys o de la amnesia chilena”. Disponible en, <<http://movimientonuestraamerica.wordpress.com/2011/07/21/los-chacarilla-boys-de-la-amnesia-chilena>>. [Consultado en noviembre de 2011].

normalidad o consolidación”³⁷⁶. Asimismo, el texto explicaba en qué consistía cada una de estas fases, indicado que las diferencias entre ellas correspondían, de un lado, al nivel de actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a la sociedad civil, y de otro, a los instrumentos jurídicos-institucionales que en cada etapa se pusieran en marcha.

Huneeus también señala que las intenciones de este discurso, no eran precisamente la recuperación de la democracia existente antes de 1973, o más aún, su renovación. Por el contrario, lo que se pretendía era “establecer un orden político distinto, una democracia limitada, sin base en la soberanía popular, sin respeto en el principio de separación de poderes y con una tutela militar sobre la autoridad política”³⁷⁷. Esta definición de principios del régimen, permitieron a la Comisión Constituyente llamada también «Comisión Ortúzar», agilizar la redacción del anteproyecto constitucional, cuyo texto fue presentado a Pinochet el 30 de octubre de 1978. El borrador fue discutido por el Consejo de Estado en 57 sesiones plenarias durante veinte meses. El 08 de julio de 1979, se entregó el documento al general, que si bien lo aprobó, sugirió un período de transición que se debía extender por cinco años. Finalmente el texto constitucional, quedó diseñado por 120 artículos permanentes y 29 transitorios. En consecuencia, desde la instalación de la junta militar, se observa la clara intención de crear una nueva Carta Fundamental, que permitiera a las Fuerzas Armadas conducir al país hacia una democracia protegida por los militares, transformándose en el guión de la transición chilena.

“En un primer momento se presenta como ordenamiento de emergencia, (bandos, decretos, decretos con fuerza de ley), como delegación del poder constituyente a la Junta y la derogación de la Constitución de 1925, hasta consolidarse en las llamadas Actas Constitucionales. Luego se plantea como ordenamiento propiamente constitucional, a partir de 1980, pero todavía condicionado a un artículo “transitorio” de 29 disposiciones

³⁷⁶Huneeus, C., op. cit., p. 235.

³⁷⁷Ibíd., p. 238.

adicionadas que postergan, por último, su plena vigencia hasta la llegada al poder de la Concertación en 1988-1990”³⁷⁸.

Dentro de las características de esta Carta Fundamental, se cuenta, primero, la restricción del sufragio universal como elemento de representación. Segundo, el rol tutelar asignado a los militares y el establecimiento de dos instituciones: El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y los senadores designados. Tercero, se incorporaron las llamadas «seguridades constitucionales», cuyo objetivo era otorgar continuidad al orden institucional. Por último, se estableció un «período de transición» que se estipulaba en los artículos transitorios. Lo que se desprende del texto, es que estipulaba una modificación sustancial de la conducción del país, debido a que:

“Permitía la consolidación del cambio político y económico, y servía para preparar a los grupos de derecha que competirían por las elecciones parlamentarias a convocarse después del plebiscito de 1988, supuesto como un mero trámite para ratificar la Presidencia al general Pinochet por otro de ocho años”³⁷⁹.

En consecuencia, la nueva Constitución, destacaba por el gran poder que otorgaba al ejecutivo, y sobre todo, por su rigidez en la forma y el excesivo autoritarismo. Asimismo, sobresale la determinación de un período presidencial de ocho años, bajo el título de «transición», y en el que se mantendrían las normas de los estados de excepción³⁸⁰. Fundamental en este caso es la disposición transitoria decimocuarta, que estipulaba la continuidad del general, pero “como Presidente de la República, el actual Presidente, General de

³⁷⁸ Correa, S., (et. al.), *Historia del siglo XX chileno*, Santiago, Sudamericana, 2001, p. 322.

³⁷⁹ Huneeus, C., op. cit., p. 244.

³⁸⁰ Chile, *Constitución Política de la República de Chile de 1980*. Disponible en, <http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica_2009.pdf>. [Consultado en enero 2012]. En el capítulo IV, “Gobierno”, desde el artículo 39 al 45, se establecen las características de los Estados de excepción constitucional. Véase Chile, *Ley n° 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción*, del 12 de junio de 1985. Diario Oficial del 14 de junio de 1985. La fuente consultada incluye las reformas que se han realizado, hasta 2009. Disponible en, <<http://docs.chile.justia.com/nacionales/leyes-organicas-constitucionales/ley-n-18-415.pdf>>. [Consultado en enero 2012].

Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, quien durará en el cargo hasta el término de dicho proceso”³⁸¹. Según Huneeus el objetivo de la transición fue, la regulación sucesoria de manera que permitiera la reelección de Pinochet, luego del período de transición de ocho años, de forma que “ejerciera como Presidente un total de dieciséis años a partir del 11 de septiembre de 1981”³⁸². Desde esta perspectiva, se advierte que la poca transparencia en el plebiscito de 1980, fue una de las características de la aprobación de la Carta Constitucional. Lo dudoso del proceso de consulta popular, que se realizó el 11 de septiembre de 1980, se debe entre otros, a que no existieron registros electorales, y tanto la campaña como la creación de comicios, se efectuaron bajo estados de emergencia. Patricio Navia cientista político chileno, señala que aunque el proceso fue irregular, los votantes debieron cumplir con los mismos requisitos que contemplaba la Constitución vigente de 1925, que incluía las reformas que permitían la extensión del voto a los analfabetos mayores de 18 años, y a las mujeres³⁸³. Todos sin excepción, debían presentar su documento de identidad en vigor (carné), para poder ejercer su derecho a voto.

“Los funcionarios que oficiaban de vocales de mesa, nombrados por el gobierno, debían cortar una punta del carné de identidad para asegurarse así que la gente no fuera a votar más de una vez. También, se requería que los votantes recibieran una marca indeleble en su dedo pulgar de tal forma que no pudieran volver a votar ese mismo día. Pero bajo cualquier criterio razonable, tanto

³⁸¹ Garretón, M. A., *Dictaduras y democratización*, Santiago, FLACSO, 1984, p. 7.

³⁸² Huneeus, C., op. cit., p. 245.

³⁸³ Sin duda, se observa un mayor número de electores inscritos cuando las mujeres obtuvieron el derecho a votar, primero en las elecciones municipales de 1935, y luego se les otorga el derecho para votar en las elecciones presidenciales en 1948, ejerciendo por primera este derecho en 1952. Véase Klimpel, F., *La mujer chilena (El aporte femenino al Progreso de Chile) 1919-1960*, Santiago, Andrés Bello, 1962. Kirkwood, J., *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*, Santiago, FLACSO, 1986. Gaviola, E. (et al.), *Queremos votar en las próximas elecciones. Historia del movimiento femenino en Chile, 1913-1952*, Santiago, La Morada, 1986. El cientista político chileno Patricio Navia, señala que “En los 21 años que transcurrieron entre 1952 y el golpe de 1973, las mujeres apoyaron con más fuerza a los candidatos conservadores y demócratacristianos que a los de izquierda”. Citado por Navia, P., “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, en *Revista de Ciencia Política*, vol. 24, n°1, Santiago, 2004, p. 86.

³⁸³ Navia, P., “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, en *Revista de Ciencia Política*, vol. 24, n°1, Santiago, 2004, p. 86.

la consulta de 1978 como el plebiscito de 1980 no pueden ser considerados comicios celebrados en forma abierta y transparente”³⁸⁴.

A ello se debe agregar, la facultad que tenía la Junta Militar, otorgada producto de la política diseñada por el régimen, y que le permitía “relegar, detener y exiliar”³⁸⁵. Esto sin mencionar la nula posibilidad que tuvo la oposición para realizar su campaña política, tanto en medios escritos como en radio y televisión, siendo esta última, casi inexistente.

“La constitución de 1980 es, sin duda, el texto constitucional chileno más controvertido a la par que inmodificable, atendida su vigencia pétrea, en sus aspecto esenciales, estos últimos veinte años. A pesar de su vigor, una sombra oscura empaña su origen. Si bien fue aprobado por el 67,04% contra el 30,19% de los votos, el plebiscito fue catalogado por sus opositores como espurio”³⁸⁶.

A pesar de estas arbitrariedades, la Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, convirtiéndose en el ideario de la transición política de Chile. A su vez, ha sido, la punta del iceberg de los debates en torno al proceso transicional, así como frente a las actuaciones, pactos y consensos a los que debió llegar la oposición para terminar de manera pacífica con la dictadura militar. Sin duda, resulta muy revelador y a su vez contradictorio, observar en las fuentes consultadas³⁸⁷, cómo se va diseñando la arquitectura política del régimen, y comprobar tanto en los bandos militares, actas constitucionales, disposiciones transitorias como en la propia Constitución, la reiterada referencia a la defensa de la democracia y protección de derechos humanos. Resulta paradójico, que en el espíritu de estos textos jurídicos se

³⁸⁴ Ibíd.

³⁸⁵ Correa, S., (et. al.), op. cit., p. 324.

³⁸⁶ Ibíd., p. 321.

³⁸⁷ Discurso del General Augusto Pinochet en cerro Chacarillas, con ocasión del Día de la Juventud, Santiago, 09 de julio de 1977. (En adelante *Discurso de Chacarillas*) <http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0003.pdf>. [Consultado en marzo de 2012]. Ver anexo nº 3.

contemplan estas preocupaciones, en circunstancias que en la práctica, era el propio Estado quien efectuaba todo tipo de violencias sobre la sociedad civil.

3.1.-Fuentes para investigar las violaciones de derechos humanos en Chile.

Como podemos observar, los ejemplos anteriores develan la existencia de una gran cantidad de fuentes y archivos que nos permiten analizar la represión política en el caso latinoamericano, que nos permiten analizar la historia de su tiempo presente. El caso de Chile, no es ajeno a esta realidad, ya que se advierte, a partir de la década de los noventa la promoción e inauguración de varios archivos, permitiendo el reconocimiento público de las víctimas, así como aquellos que sobrevivieron al período represivo. Si bien de forma paralela, como planteábamos en páginas anteriores, también nos encontramos con la dificultad de ingresar a los archivos de las organizaciones represivas, o bien a las instituciones que compartieron responsabilidades en estos hechos, como fueron las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros de Chile, o bien, organizaciones y partidos políticos de derecha. A pesar de estas trabas, es importante destacar los esfuerzos realizados por las diversas organizaciones de derechos humanos, de archivar y custodiar toda la información recibida, por las víctimas y sus familiares, sobre los apremios sufridos durante el período represivo, representado un importante valor como memoria y prueba de lo acontecido, en países que como Chile, han padecido la violencia política en el pasado cercano.

En Chile, un caso concreto de acopio documental durante la dictadura militar, y que luego sirvió de fuente documental durante la transición política chilena, es el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (en adelante, Vicaría), dependiente de forma directa de la Iglesia Católica, a través del Arzobispado de Santiago. Este organismo desarrolló un importante papel en la lucha contra la violación de los derechos humanos. Como hemos enunciado, sus orígenes se encuentran en la creación del «Comité de Cooperación para la Paz en Chile» (COPACHI), también conocido como «Comité Pro Paz», a través del

Decreto Arzobispal N° 158-73, del 4 de octubre de 1973, firmado por el entonces Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, nombrando como co-presidente del Comité al Obispo católico Fernando Ariztía y al Obispo Luterano Helmut Frenz. El Comité en sus inicios contó con sólo cinco profesionales, y ya en octubre de 1974 ascendían a 108 funcionarios solamente en Santiago, entre los que se contaban, abogados, asistentes sociales, procuradores, religiosas y sacerdotes. En enero de 1975, existían representantes en más de 20 ciudades del país³⁸⁸.

“El Comité fue una respuesta a una situación social. El 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado, se clausuraron las cámaras legislativas y se instauró el estado de guerra interior, quedando en consecuencia la justicia ordinaria encargada sólo de causas menores. Se detuvo a miles de personas que eran sometidos a tratamiento de prisioneros de guerra. Chile vivía una situación similar a la de un país ocupado. Patrullas militares recorrían las calles, imperaba el toque de queda, y las garantías individuales estaban suspendidas.

En este contexto, había que intentar la pacificación. Los partidos políticos en receso o declarados fuera de la ley, los sindicatos sin poder usar la fuerza, las universidades intervenidas militarmente...sólo las iglesias estaban en condiciones de tomar la bandera de la paz”³⁸⁹.

Como subraya el texto, esta fue una experiencia inédita, debido al perfil ecuménico del Comité, pero sobre todo, por el carácter represivo que había instaurado el régimen. A través del departamento Jurídico que estuvo a cargo del abogado José Zalaquett, su objetivo fue “acoger las necesidades de los familiares de personas que habían sido detenidas. Se presentaron recursos de

³⁸⁸ Frühling, H., *Autoritarismo y defensa de los Derechos Humanos: Estudio de la Vicaría de la Solidaridad en Chile*, Cuadernos de Trabajo n° 2, Programa de Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, septiembre de 1985, p. 5.

³⁸⁹ Comité para la Cooperación y la Paz en Chile, *Crónica de dos años de lucha solidaria*, Santiago, diciembre de 1975, p. 4.

amparo, se visitaron los campamentos de detenidos y se asumieron la defensa de los procesados en los Consejos de Guerra"³⁹⁰. En consecuencia, su objetivo estuvo centrado en "atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal"³⁹¹. Dentro del mandato de creación del Comité, se señalaba como objetivos, además de otorgar asistencia jurídica, prestar ayuda económica, técnica y espiritual. Se estableció a su vez, la necesidad de que la Comisión generara vínculos con las instituciones de los demás credos religiosos para realizar en conjunto una acción ecuménica en servicio de los perseguidos y damnificados por los recientes acontecimientos. En efecto, este fue un organismo que congregó a los líderes de las iglesias existentes en Chile en ese momento, entre ellas, la iglesia Católica, Metodista, Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa, Metodista Pentecostal, de la comunidad Israelita, y del Consejo Mundial de Iglesias, se reunieron con el objetivo de "afianzar en Chile la paz, y de servir a la comunidad"³⁹². Así nació el 06 de octubre de 1973, el Comité de Cooperación para la Paz, conocido también como Comité Pro-Paz, en una reunión que fue presidida por monseñor Fernando Ariztía Ruíz, y dirigida por el sacerdote jesuita Fernando Salas. Fue un organismo de carácter ecuménico, que dio asistencia jurídica, económica, técnica a las personas que sufrían persecución política. Las acciones que realizó, generó un profundo malestar en los altos mandos del régimen militar, lo que provocó que el 11 de noviembre de 1975, el general Pinochet en una carta dirigida al Cardenal Raúl Silva Henríquez solicitó la disolución formal del Comité Pro-Paz, la que fue

³⁹⁰ Hau, B., *La fuerza de la vida. La defensa de los derechos humanos, del Departamento Jurídico del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad*, Santiago, UAH, 2006, p. 12. La organización del Departamento Jurídico del Comité, estaba compuesto por los abogados: José Zalaquett en defensas, Antonio Raveau y Nibaldo Galleguillos a cargo de los casos de Consejos de Guerra, Marcos Duffau a cargo de los recursos de amparo. Además contaban con abogados internos entre los que estaban Fernando Guzmán, Sergio Concha y Antonio Cancino, y abogados que colaboraban de forma externa, como Roberto Garretón y Hernán Montealegre, que integraron el Departamento a partir de marzo de 1974. En sus inicios, el número de funcionarios fue muy reducido, sin embargo, hacia octubre del mismo año, ascendía a 108 funcionarios, distribuidos entre abogados, asistencias sociales, secretarías. Consultar en, <<http://www.museodelamemoria.cl/LinkClick.aspx?fileticket=zcDjxzYICkk%3D&tabid=203>>.

³⁹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Situación de los Organismos de Derechos Humanos", cap. XI, *Informe País, Chile*, Organización de los Estados Americanos, 1985. Disponible en, <<http://www.cidh.oas.org/countryrep/Chile85sp/cap11.htm>>.[Consultado en enero 2011].

³⁹² Cruz, M. A., "Silencios, contingencias y desafíos: El archivo de la vicaría de la solidaridad en Chile", op. cit., p. 144.

respondida por el Cardenal, quién aceptó su disolución. El directorio del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, acordó en la reunión del 21 de noviembre de 1975, que el Comité seguiría funcionando hasta el 31 de diciembre de 1975³⁹³. Hasta esa fecha, sus gestiones se focalizaron fundamentalmente en otorgar respaldo legal a quienes habían sido arrestados por razones políticas sin haber sido sometidos a un proceso, y a los trabajadores despedidos por razones políticas. Además implementó un servicio de asistencia médica gratuita.

“El Comité Pro Paz prestó asesoría jurídica, entre octubre de 1973 y diciembre de 1975 a un total de 6.994 casos de persecución política en Santiago; 1.908 casos de persecución política en provincias; 6.411 casos de despidos laborales por razones políticas; además, un total de 16.922 personas se beneficiaron de la ayuda que recibieron a través del Programa Médico”³⁹⁴.

Entre sus gestiones, también estuvo la colaboración para sacar del país a quiénes estaban siendo perseguidos, como también en prestar ayuda alimenticia a las personas de más escasos recursos, una vez que se instalaron las medidas económicas neoliberales. Sin duda, el auxilio facilitado por esta organización fue fundamental, en un tiempo en que la ignominia y el abuso de poder en Chile, permitió que se violaran de forma sistemática los derechos humanos, sobre todo de los más humildes de este país.

“El volumen de atenciones legales se iban multiplicando en la medida que se “corría la voz” y las funciones se diversificaban: presentaciones de Recursos de Amparo o *Habeas Corpus*, visitas a los campamentos de detenidos, defensa de procesados en Consejos de Guerra, informaciones a familiares que desean saber

³⁹³ Ver en anexo nº 4 Carta enviada del Comité para la Cooperación de la Paz en Chile.

³⁹⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los Organismos de Derechos Humanos”, cap. XI, op. cit. Véase Comité de Cooperación para la Paz, *Crónica de sus dos años de labor solidaria*, Santiago, Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, diciembre 1975.

el paradero de sus seres queridos, todo unido al consuelo y apoyo espiritual para familiares y a los propios detenidos”³⁹⁵.

Para cumplir dicha misión de apoyo y asesoramiento a víctimas y familiares, el Comité recibió ayuda económica desde el exterior, tanto de instituciones eclesiales como laicas. Estos vínculos permitieron a su vez, difundir la información el extranjero, sobre la represión política que se estaba efectuando en Chile. A su vez, el Comité se convirtió en una importante fuente de información, sobre todo para los corresponsales extranjeros acreditados en Chile, y que a través de sus notas de prensa, generaron gran interés de la comunidad internacional, por los hechos difundidos. En definitiva, se creó una conexión de información que funcionaba entre las bases sociales y el Comité, permitiendo a su vez un conocimiento exhaustivo de la represión política.

“Toda esta red se canalizaba, a través de las parroquias de sectores populares y de los vínculos directos entre miembros de la jerarquía eclesial y los dirigentes políticos de la oposición, las necesidades de ese primer tiempo de lucha por sobrevivir”³⁹⁶.

Estos elementos permitieron subsistir al menos durante dos años al Comité, recabando información sobre las víctimas y las condiciones de sus desapariciones e ilegales apresamientos. En consecuencia, en sus dependencias, que más tarde llevarían el nombre de la Vicaría de la Solidaridad, se transformaron de forma modesta en un incipiente archivo, con características particulares en cuanto a su naturaleza, contexto y contenido.

La Vicaría de la Solidaridad, creada por Decreto Arzobispal nº 05-76 el 01 de enero de 1976, nombró como primer vicario episcopal al joven sacerdote Cristián Precht, y al abogado Javier Luis Egaña Barahona como secretario ejecutivo. La misión de este organismo fue continuar la obra realizada por el Comité Pro Paz. El marco doctrinal de la Vicaría, se basaba en la carta pastoral

³⁹⁵ Comité de Cooperación para la Paz, *Crónica de sus dos años de labor solidaria*, Santiago, Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, diciembre 1975, p. 5.

³⁹⁶ Fernández, D., *La «Iglesia» que resistió a Pinochet*, Madrid, IEPALA, 1996.

sobre la solidaridad, que el Cardenal Raúl Silva Henríquez había enviado el 25 de julio de 1975. “Se trataba de una labor particular. Una tarea inédita que combinaba la entrega de profesionales, religiosos y miembros de organizaciones sociales; católicos, creyentes de otras denominaciones y no creyentes”³⁹⁷. Debido al aprendizaje adquirido durante el funcionamiento del Comité, la Vicaría centró sus objetivos en proteger y defender a los perseguidos políticos durante el régimen militar. Para ello contó con diferentes áreas de trabajo: el Departamento jurídico, en el que se desempeñó un grupo de abogados a tiempo completo, y otros que colaboraron en determinados casos; el Departamento Laboral, que a partir de 1977 se convirtió en la Vicaría Pastoral Obrera; el Departamento Campesino, que existió hasta 1983; el Departamento de publicaciones, que a partir de 1976 realizó ediciones periódicas en que se publicaron informes sobre el estado de los derechos humanos, sobre todo a través de la revista «Solidaridad». Más tarde en 1983, se creó el Departamento de Educación Solidaria. “Las dos líneas de acción, que tuvieron un carácter más permanente, fueron la atención jurídica y el trabajo de promoción y educación solidaria”. La Vicaría de la Solidaridad concluyó sus actividades el 31 de Diciembre de 1992, una vez recuperada la democracia en el país. Sin embargo, para salvaguardar la valiosa información recopilada durante todo el tiempo en que existió tanto el Comité Pro-Paz, como la Vicaría de la Solidaridad y el Arzobispado de Santiago, se constituyó la «Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad», establecida por Decreto Arzobispal nº 262, el 18 de agosto de 1992, y que entró en funciones el 01 de enero de 1993.

“Creada con el objeto de ser custodia de los archivos de información y documentación de la Vicaría de la Solidaridad y su antecesor, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, resguarda y preserva un importante fondo documental que contiene información referida a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el período comprendido entre

³⁹⁷ Disponible en, <http://www.archivovicaria.cl/historia_02.htm>.[Consultado en noviembre 2011].

septiembre de 1973 y marzo de 1990, y de las acciones desarrolladas en la defensa y promoción de los Derechos Humanos”³⁹⁸.

Este archivo, contiene cientos de expedientes de familiares que buscaban a sus seres queridos, así como el testimonio de víctimas de apremios ilegítimos, junto a todas las acciones jurídicas realizadas por el Comité Pro Paz y la Vicaría. A ello se suman las innumerables publicaciones periódicas que componen un excelente fondo documental. El valor histórico de la documentación que contiene el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad es incalculable, contribuyendo a la comprensión de la historia del tiempo presente en Chile. Su importancia también radica que en muchos casos, parte de esta documentación, corresponde a pruebas que se han presentado en procesos judiciales, algunos de ellos aun abiertos. Por otra parte, este tipo de documentación y fuentes presenta un gran desafío investigativo, ya que impulsa la adopción de nuevas metodologías de investigación. En este aspecto, María Angélica Cruz señala que a partir de la experiencia chilena, en materia de este tipo de archivos, se advierten al menos tres diferencias: La primera, se refiere a “la apertura, acceso y apropiación colectiva de los «archivos de la represión», entendidos como archivos de organismos del Estado responsables de las violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares”³⁹⁹. La segunda, está relacionada en cuanto a que el Archivo de la Vicaría, representa la protección y tenacidad contra la persecución política. Y una tercera característica que señala la investigadora, es que en la conformación de este archivo, participaron diversos organismos y personas, quienes dejaron constancia tanto de la búsqueda de sus familiares como de los padecimientos sufridos en las detenciones realizadas por las fuerzas militares y policía.

³⁹⁸ Disponible en, <http://www.archivovicaria.cl/historia_02.htm>.[Consultado en noviembre 2011].

³⁹⁹ Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, op. cit., p. 139.

En este difícil contexto, las acciones que realizó el Comité Pro Paz, y más tarde la Vicaría de la Solidaridad, respecto a la recepción de testimonios y denuncia por parte de los familiares de las víctimas, sobre los mecanismos a través de los cuales sus seres queridos habían desaparecido, o bien habían sido encarcelados, quedaron registrados en carpetas, que se fueron acumulando transformándose en un gran fondo documental. En ellas se archivó toda la información respecto a las víctimas, desde fotografías (que en esos años eran bastantes escasas, debido a su alto valor), hasta certificados de nacimiento, estudios y trabajo, entre otros. Esta documentación fue fundamental para los procesos de búsqueda a través de tribunales y organismos de derechos humanos, sobre todo a nivel internacional. El objetivo fue recopilar toda la información que comprobara la existencia de la persona desaparecida o detenida, cuya identidad y paradero había sido sistemáticamente negado por el Estado de Chile. En carpetas individuales, se reunió toda la información de las víctimas, en las que contenían además de la documentación oficial de identificación, diversos testimonios de personas que conocían a las víctimas, y que en algunos casos, habían presenciado su captura y compartido la celda y apremios. A ello se sumaban las numerosas copias de las denuncias interpuestas en juzgados, comisarias, hospitales y morgues. Así como recortes de prensa, en los que a veces aparecían fotos y nombres de las víctimas, que habitualmente eran asociados a supuestas acciones subversivas y terroristas, que respaldaban sus detenciones. Esta valiosa información, estuvo durante la dictadura militar, en manos de la Vicaría de la Solidaridad, para más tarde pasar a la «Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad», transformándose de “archivo «privado» con acceso «público»”⁴⁰⁰. Dentro de las colecciones que componen este Archivo, muchas de ellas consultadas en el transcurso de esta investigación, podemos señalar:

⁴⁰⁰ Ibíd.

El Archivo Jurídico⁴⁰¹: Tiene un acceso restringido, debido a la información que custodia. Contiene documentación referida a 47.000 personas que fueron atendidas por el Comité para la Paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad. Está compuesto de copias (y en no pocos casos, textos únicos), de expedientes judiciales, entre los que se cuentan procesos por delitos políticos, recursos de amparo y de protección en favor de detenidos, expulsados del país, relegados y desaparecidos. También contiene documentación sobre procesos por torturas, muertes, secuestros, así como testimonios y declaraciones juradas, junto a las denuncias y alegatos ante organismos internacionales. Esta documentación tiene a su vez secciones referidas a casos de detenidos desaparecidos y víctimas con resultado de muerte o ejecutadas por causas de la represión. El total de documentos de este Archivo supera los 86.000.

Centro de Documentación Pública: Tiene una colección bibliográfica referida a derechos humanos superior a los 3.600 títulos. Contiene 4.000 documentos editados tanto por la Vicaría como por otros organismos chilenos y extranjeros. A ello se suman 84 títulos de publicaciones periódicas (59 nacionales y 25 extranjeros). Además de 660.000 recortes de prensa nacional, clasificados por temas, durante el período (1973-1991), y desde 1993, en adelante de manera cronológica. Cuenta además con Archivo Audiovisual compuesto por un acervo fotográfico, de fotos históricas de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, fotos de Detenidos- Desaparecidos y Ejecutados Políticos; y una videoteca de un centenar de documentales y películas sobre Derechos Humanos.

Centro de Microfilmes: Contiene reproducida en microfilmes, gran parte de la información de mayor grado de confidencialidad y los documentos de difícil reproducción, así como aquellos de mayor relevancia de los archivos del Centro de Información Jurídica.

⁴⁰¹ Las referencias en cuanto al número de documentación que contiene el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, están publicada en la página web de este organismo. Disponible en, <www.archivovicaria.cl>. [Consultado en noviembre de 2011]. Véase Vergara Low, M. P., "Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad", en *Primera Jornada de Trabajo Recuperando Historias, Memoria y Conciencia*, Santiago, 5 de octubre de 2007.

Archivo Digital y Base de Datos: Este archivo contiene información acerca de todos los hechos represivos conocidos por la Vicaría de la Solidaridad desde 1984 en adelante, así como de las acciones jurídicas desarrolladas para enfrentar tales situaciones. Respecto de los temas de mayor relevancia histórica, como lo son todos aquellos casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición del afectado, la información abarca desde 1973 hasta el fin de la dictadura militar en Chile, en marzo de 1990.

Dentro de la abundante cantidad de fuentes documentales que contiene el archivo de la «Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad», destaca la colección de siete tomos de la publicación «¿Dónde están?», que se difundió de forma periódica entre el 27 de octubre de 1978 y los primeros días de marzo de 1979. Consistió en los expedientes de personas detenidas cuyo paradero era incierto, junto a copias de las acciones judiciales que realizaron los abogados de la Vicaría. Esta documentación para los efectos de nuestra investigación ha sido fundamental, sobre todo en lo relativo al examen de la memoria histórica sobre la represión política, en los años de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ya que aborda los años en que se concentra esta investigación (1973-1977), período en que estuvo en operó de forma oficial este servicio de inteligencia del régimen.

Los siete tomos que publicó la Vicaría de la Solidaridad, abarcan un total de 478 fichas de casos debidamente documentados, alcanzando un total de 1.895 páginas. En ellos se incluía un índice con el listado de las víctimas que contenía cada tomo, junto a las cartas que los diferentes Obispos enviaban al Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández⁴⁰², en las que se presentaban los casos que incluía cada publicación. Además, cada portada

⁴⁰² Ocupó el cargo de Ministro del Interior en dos ocasiones, primero desde el 14 de junio de 1978 al 22 de abril de 1982, y luego, desde el 11 de julio de 1987 y 21 de octubre de 1988. En 1989, fue designado por el general Pinochet como Senador, para el período 1990-1998. En 1997, fue electo senador independiente en la región XII para el período 1998-2006. En la última etapa política se integró al Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Disponible en, <http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Sergio_Fern%C3%A1ndez_Fern%C3%A1ndez>. [Consultado en enero 2012].

estaba compuesta de las fotografías de las víctimas detenidas desaparecidas que contenía esa publicación en particular. Este hecho fue muy significativo, puesto que permitió visibilizar a las víctimas, otorgándoles rostros y cuerpos, traspasando el mero dato de su identificación y nombre. Sin embargo, en muchas ocasiones el requerimiento por parte de la Vicaría de solicitar fotografías de las víctimas, significó para sus familiares, la difícil búsqueda entre sus propias redes de parientes y amigos, de imágenes en las que se retrataban aquellos a quienes buscaban. Esta solicitud tenía al menos dos complicaciones, por un lado, el de solicitar fotografías de aquellos que habían sido detenidos, en circunstancias en que todos eran posibles sospechosos de ser contrarios al régimen, ya que a través de la implantación de la violencia y el miedo impuesto en la sociedad chilena, las personas desconfiaban de unos y de otros, teniendo como consecuencia el rechazo de aparecer como vinculado a grupos de izquierda. Por otro lado, el uso de la cámara fotográfica no era masivo en Chile, y por tanto, el valor de las fotografías era de un alto costo, sobre todo para una población afectada por la implantación de un sistema neoliberal, más aun si se consideraba que gran parte de los afectados correspondía a sectores pobres de la sociedad⁴⁰³. Sin embargo, y a pesar de estos inconvenientes, esas imágenes fueron el símbolo de la injusticia y el dolor que acompañó a cientos de familiares, y que poco a poco se fueron masificando en carteles que acompañaron el infinito peregrinar de los familiares que solicitaban a las autoridades información sobre el paradero de quiénes habían detenido y que se encontraban desaparecidos. También esas imágenes, fueron utilizadas como escudos en los cuerpos de las personas, -principalmente mujeres- que buscaban a sus seres queridos, visibilizados principalmente en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

En consecuencia, las fichas de cada una de las víctimas incorporadas en estas publicaciones, contenían sus datos personales, así como la relación resumida de su detención y las circunstancias en que ocurrieron los

⁴⁰³ Sobre la importancia de la imagen y la fotografía como documento histórico, véase Burke, P., *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2005. Benjamín, W. *Sobre la fotografía*, Valencia, Pre-textos, 2004, (1ª ed. 1974).

apresamientos, junto a las gestiones jurídicas que se realizaron. Entre ellas, podemos mencionar los recursos de amparo que se interpusieron en los respectivos juzgados, en el momento en que se informaba a la Vicaría de la detención de la persona. Se encuentran también, las denuncias y querellas criminales por los delitos de secuestro y arresto ilegal, junto a las acciones de otro orden que se realizaron, como los testimonios de los familiares y testigos. Como lo manifestó en su momento el Arzobispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida: “Estos antecedentes eliminan, a mi juicio, la posibilidad de que se trate de personas que estén en la clandestinidad y que hayan caído bajo nombres supuestos de enfrentamientos con los Servicios de Seguridad”⁴⁰⁴. Es decir, la documentación que recibía la Vicaría, eran la prueba fehaciente de que los delitos que se imputaban a las víctimas en su gran mayoría eran falsos.

Parte de las acciones de la Vicaría, se plasmó en pequeñas publicaciones que se distribuyeron en las Arquidiócesis, Parroquias, y sedes de la Vicaría en regiones. Si bien no fueron publicaciones masivas, permitieron al menos, difundir con el respaldo del Arzobispado de Santiago, los hechos vinculados a los detenidos-desaparecidos, facilitando el público conocimiento de este problema y su reconocimiento internacional, debido sobre todo a que la Vicaría logró interponer las denuncias ante la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, a quienes también se les enviaba copia de cada una de los casos que contenían estas publicaciones.

La primera publicación, a través de un exhaustivo prólogo firmado por el Vicario Episcopal de la Vicaria de la Solidaridad, Monseñor Cristián Precht Bañados, con fecha 06 de noviembre de 1978, señalaba con gran detalle las acciones que se realizaban una vez que se informaba a este organismo, de la detención ilegal, que iba aparejada del desaparecimiento de la víctima. En este aspecto, el entonces Vicario Episcopal de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, Cristián Precht Bañados, era enfático al indicar que:

⁴⁰⁴ Carta enviada al Ministro del Interior, por el Arzobispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, Los Ángeles, 23 de septiembre de 1978, en *¿Dónde Están?* tomo 7, marzo 1979, op. cit.

“Las autoridades militares y de gobierno conocieron de innumerables y reiteradas comunicaciones que les enviaron los familiares al momento de ocurrir las detenciones, rogándoles una respuesta y una aclaración. Incluso, hicieron llegar sus comunicaciones a todos los miembros de la Junta de Gobierno, reclamando el derecho a la vida de los suyos. Hasta el día de hoy no han dado ningún resultado”⁴⁰⁵.

En las publicaciones de cada uno de los tomos que componen la colección de « ¿Dónde están? », destaca el arrojo y decisión con que abordaron el tema de los detenidos desaparecidos, más aun cuando se dirigían al Ministro del Interior, en cada una de las cartas de presentación. Es así como es posible apreciar un gran conocimiento por parte de la Vicaría y sobre todo del departamento jurídico, de las acciones que en materia legal realizaba el régimen, cuestión que se puede advertir en la introducción de la primera publicación:

“Tras cinco años de haberse denunciado el primer desaparecimiento de un chileno luego de su arresto, y uno del último, la situación de estas personas sigue siendo un hecho desconocido que golpea a la comunidad nacional e internacional. Han sido cinco años de largo bregar para los familiares, en los que han recorrido todos los caminos posibles de imaginar en la búsqueda de los suyos, sin otro afán que el de abrazar al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, al hijo, a la hija. Cinco años en que en todas las formas posibles de imaginar se han golpeado las puertas y las conciencias con una sola pregunta: ¿Dónde están?”⁴⁰⁶.

En esta primera publicación como en las seis restantes, se acompañaba una carta del propio Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez,

⁴⁰⁵ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 1, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 6 de noviembre de 1978, p. 6.

⁴⁰⁶ *Ibíd.*, p. 5.

dirigida al Ministro del Interior del Régimen, que acompañaba las primeras 54 fichas de detenidos desaparecidos.

“Señor Ministro:

Como usted lo señalara al país hace algunas semanas, la superación del drama de los detenidos-desaparecidos debe comprender muy especialmente la acción constructiva de quienes ejercen autoridad en cualquier campo de la vida nacional.

A dicho compromiso no podía sentirse ajeno quien, en su calidad de pastor de la Iglesia, ha conocido muchos casos de personas que han perdido alguno de sus seres queridos y que no saben dónde están, comprendiendo que la superación del problema es condición importante para el logro de la reconciliación nacional, lo que ha planteado a veces por escrito. Lamentablemente, tal vez por falta de información de los procedimientos a seguir, ha transcurrido un mes desde que la iglesia hizo presente al Supremo Gobierno su parecer en el sentido de que los familiares tienen derecho a una respuesta en cada caso particular, sin que hasta el momento les haya sido entregada”⁴⁰⁷.

La práctica de enviar una carta al Ministro del Interior, en la que se detallaba los años que correspondía la recopilación de datos que componía cada publicación, así como el listado con el nombre completo de las víctimas junto a sus respectivos expedientes, fue la metodología adoptada durante todo el período en que se divulgó «¿Dónde están?». Los expedientes de este archivo que se refiere a personas que luego de su arresto desaparecieron, está compuesta de la siguiente manera: datos personales de la víctima (nombre completo, cédula de identidad, estado civil, fecha de nacimiento, edad, domicilio, profesión, partido político, y cargo que tenía dentro de él), a su vez se

⁴⁰⁷ Carta enviada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez el 05 de julio de 1978 al Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, en la que además se adjuntó la nómina de 54 personas cuyo paradero era desconocido. En Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 1, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 27 de octubre de 1978, p. 13.

presenta un detalle de los hechos de la situación represiva, y se señalan las acciones legales y administrativas que hasta la fecha se habían realizado.

El primer volumen aborda los hechos ocurridos entre 1973 y 1976, destacando que la mayor cantidad de arrestos registrados habían sido practicados principalmente por agentes militares o carabineros. Asimismo, sostiene que para el año 1974, la forma en que las personas habían sido arrestadas y que luego desaparecieron, difería de las anteriores, debido a que los arrestos fueron realizados por agentes de civil, que pertenecían a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y que afectaron principalmente a los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria (MIR), aun cuando se constataba casos de militantes de los partidos Socialista y Comunista de Chile. Estos hechos, permitieron identificar diferentes formas de detenciones por parte de los organismos represores, y que más tarde se transformarían en base argumentativa en los informes Rettig y Valech. Por otra parte, es importante subrayar que en estos volúmenes se señalaba de manera pública ya en 1978, los nombres de centros de detención. “En cuanto a los arrestos, se puede constatar que los detenidos son trasladados a recintos secretos de reclusión, como son, por ejemplo, los locales de Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Quilín”⁴⁰⁸. Este último recinto correspondía a «La venda sexy», casa que se ubicaba en calle Irán nº 3037, en la comuna de Quilín. Como veremos en páginas posteriores, estos fueron los principales centros secretos de la DINA y desde el que desaparecieron cientos de personas. Asimismo, en esta publicación señalaba la forma en que estas casas eran «adaptadas» para contener a la gran cantidad de detenidos que albergaban, haciendo especial mención a las llamadas «ratoneras». “Esto significa que los aprehensores se instalan en el interior de una casa y arrestan a todos los que llegan a ella; también algunas personas son detenidas para apresar a otras”⁴⁰⁹.

El segundo tomo se publicó en enero de 1979, contenía 66 casos registrados entre el 29 de marzo y el 09 de septiembre de 1976. Y como se

⁴⁰⁸ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 1, op. cit., p. 13.

⁴⁰⁹ *Ibíd.*, p. 14.

había resuelto en la primera publicación, se envió una copia al Ministro del Interior, junto a una carta de presentación del Arzobispo Silva Henríquez, en el que se adjuntaba el listado de las víctimas y las respectivas fichas de cada caso. A diferencia del primer volumen, este realizó el listado de las víctimas de acuerdo a la fecha de su desaparición, insistiendo en que; “a través de las fichas que se presentan, se explicita claramente la acción concertada y decidida que desplegó la DINA contra el Partido Comunista y que se llevó a cabo durante todo ese año 1976 terminando sólo en los últimos días de diciembre”⁴¹⁰. Frente a las diversas formas en que las víctimas eran apresadas señala que:

“Las detenciones son efectuadas en su mayoría en la vía pública, sin la presencia de testigos. Otras se llevaron a cabo mediante la utilización de «ratoneras» (...). Los agentes que participan visten de civil, no se identifican, y sus vehículos no llevan patente. En los procedimientos no se cumple ninguna de las formalidades legales fijadas por el propio Gobierno para este tipo de detenciones. La rapidez de los hechos como el uso de la violencia, es otra característica que revistieron las detenciones”⁴¹¹.

En los prefacios de cada una de estas publicaciones se puede constatar la decisión de la Vicaría, sobre todo a través de las cartas emitidas por sus Obispos, de denunciar de manera explícita el tema de los detenidos desaparecidos. Así como cuestionar las acciones que realizaba el régimen, refutando las ambiguas respuestas que emitía, respecto al paradero de las víctimas, sobre todo, debido a las contradicciones que se percibían en los comunicados que sobre este tema se emitían:

“Acerca del tema de los detenidos-desaparecidos se han dado diversas explicaciones. Una de ellas, es la de que estas personas habrían perecido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad

⁴¹⁰ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 2, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, enero de 1979, p. 263.

⁴¹¹ *Ibíd.*, pp. 263-264.

y serían el producto de la guerra civil existente en el país. Sin embargo, cuando estos hechos ocurrían hacían ya casi un año (el 10 de septiembre de 1975) que la Junta de Gobierno había decidido derogar lo que llamó el “Estado o Tiempo de Guerra” señalando que a esa de 1975 se “ha permitido controlar la acción subversiva de grupos organizados que perseguían tomar el control político del país”. Adecuó por eso el régimen de excepción “a las condiciones reales que vive el país”, declarando el territorio nacional en Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, que procede cuando no hay fuerzas rebeldes organizadas. Por ende estas detenciones, seguidas de desaparecimiento, no son la consecuencia de una confrontación bélica de ningún tipo (que expresamente un texto legal declaró superada), sino fue la acción de la DINA contra opositores políticos”⁴¹².

Por su parte, la tercera edición publicada en febrero de 1979, contenía la documentación de 20 casos de detenidos desaparecidos que correspondían al año 1973; 21 fichas se referían a 1974, insistiendo en que destacaba el accionar de la DINA. “Vehículos sin patentes, lugares secretos de detención, agentes que pasan más desapercibidos; a los detenidos se les ciega con vendas, telas, etc., para que no identifiquen a sus captores o el lugar donde se encuentran”⁴¹³. Asimismo, para el año 1975 se adjuntaron 15 fichas de víctimas; 9 para 1976, y sólo un expediente para 1977. Todos estos antecedentes constaban una vez más las exigencias por esclarecer la suerte de los desaparecidos, y la urgencia de saber qué sucedió con cada uno de ellos. En el cuarto tomo se incluyeron fichas de víctimas de regiones, lo que representó un dato más para argumentar que la violencia de estado se perpetró en todo el país. Si bien este ámbito excede los marcos referenciales de nuestra investigación, encontramos importante al menos, mencionar estos casos. Las desapariciones a las que hace referencia la citada publicación, fueron

⁴¹² *Ibíd.*

⁴¹³ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 3, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, febrero de 1979, p. 563.

comunicadas por los diferentes Obispos de todo el país al Ministro del Interior, con el objetivo de realizar las investigaciones que en su momento había prometido, y que evidentemente nunca se realizaron.

“El obispo de Talca, Monseñor Carlos González, comunicó 8 casos de desaparecidos; el Obispo de Linares, Monseñor Carlos Camus Larenas, envió 11 casos; Monseñor Sergio Contreras, Obispo de Temuco, entregó 14 fichas correspondientes a desaparecidos de su zona; de la misma manera, Monseñor Fernando Ariztía, Obispo de Copiapó, envió 3 casos; Monseñor Manuel Sánchez, Arzobispo de Concepción, hizo llegar fichas por 17 desaparecidos en su zona y Monseñor Ramón Salas Valdés, Obispo Prelado de Arica, presentó 4 casos correspondientes a su jurisdicción”⁴¹⁴.

En general en esta cuarta entrega, se constata que las denuncias por detenciones y posteriores desapariciones, corresponden a casos que van entre 1973 y 1977. A su vez es posible identificar el accionar de la DINA en diferentes ciudades y pueblos del país, cuya actuación realizaba de forma diferente, ya que se hacía acompañar de agentes uniformados, hecho que no ocurría en Santiago. En esta publicación, como en otra que incorporaban detenciones en pueblos, se enfatizó el dramatismo con que se vivían estos apresamientos, debido sobre todo, a que en estos lugares era habitual que la mayoría de sus habitantes se conociera, por tanto, no era difícil identificar a los victimarios y las víctimas en un mismo lugar público.

Por otra parte, resulta muy interesante el prefacio del quinto tomo, en el que se envían al Ministro del Interior un total de 61 casos, todos correspondientes a los años que van entre 1973 y 1976. Los 30 primeros se enviaron el 24 de agosto de 1978, en representación del Cardenal Arzobispo

⁴¹⁴ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 4, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, marzo de 1979, p. 761.

de Santiago, y fueron firmados por los Obispos Monseñor Enrique Alvear U., Monseñor Jorge Hourton D., y el Vicario General Ignacio Ortúzar R. Igualmente, el 06 de septiembre de 1978, el Obispo de Chillán envió al Ministro 31 fichas de casos de detenidos desaparecidos debidamente documentados. Es importante destacar el énfasis que se otorgó en identificar a la DINA como responsable de las desapariciones de las personas cuyas fichas acompañaron cada publicación. También es posible identificar diferencias en los organismos que realizaban las detenciones, constatando que los apresamientos que se realizaron en 1973 fueron efectuados por personal militar o bien por Carabineros de Chile, debido a que vestían de uniforme y se movilizaban en vehículos que pertenecían a estas instituciones. En cambio, el modo de operar de la DINA era diferente, cuestión que es posible advertir en relatos como este:

“Cuyo *modus operandi* revela la existencia de una organización que dispone de los más diversos medios para llevar a efecto los secuestros y mantener por largos períodos a las víctimas en lugares secretos de su dependencia y en los que éstas son sometidas a tratamientos crueles y degradantes”⁴¹⁵.

Por otro lado, la Vicaría en múltiples ocasiones se refirió a la tortura, que aunque en estos casos aun no estaba tipificada en la legislación chilena, sí era parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 5° indica: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”⁴¹⁶. Pese a ello, esto no fue acatado por las autoridades militares. A su vez, y como hemos enunciado, la publicación «¿Dónde están?», se esforzó en identificar y difundir los lugares secretos a los que eran llevadas las víctimas, señalando «una ruta» por los diferentes centros que pertenecían a la DINA:

⁴¹⁵ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* tomo 5, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, marzo 1979, pp. 945-946.

⁴¹⁶ Asamblea General de las Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, París, 10 de diciembre de 1948.

“Se puede observar que de acuerdo al orden cronológico de los secuestros, los afectados permanecen en distintos recintos, siendo el primero de ellos la casa de calle Londres nº 38, luego aquel de José Domingo Cañas esquina de República de Israel, más tarde, el ubicado en calle Quilín y posteriormente el de Avenida Lo Arrieta nº 8200, conocido como «Villa Grimaldi»”⁴¹⁷.

En consecuencia, podemos apreciar que este tipo de publicación otorgó una de las primeras pistas sobre los padecimientos que experimentaron no sólo las víctimas apresadas, sino también sus familias. Por tanto, consideramos que aquí radica una de las grandes fortalezas de este archivo, por cuanto, también son víctimas de la represión quienes buscaban a sus familiares y amigos, los que muchas veces fueron increpados por personal militar, investigaciones y Carabineros de Chile, quienes en reiteradas ocasiones, negaron la existencia de las víctimas desaparecidas, es decir, rechazaron incluso la existencia física de las víctimas. En este aspecto, se puede constatar lo transversal del ejercicio de la violencia que afectó a gran parte de la población, ya que el régimen propagó la sensación de constante inseguridad a través de diferentes acciones legales, como estados de excepción, toques de queda y detenciones arbitrarias, por sólo nombrar algunas, en que se mantenía a gran parte de la población subsumida en el miedo y en algunos casos, en el desconocimiento real de lo que estaba sucediendo a gran parte de la población chilena. Es por ello, que este tipo de publicaciones fueron muy importantes, aunque no tuvieron un gran tiraje, permitieron apreciar no sólo la valentía por parte de la Vicaría de asumir el riesgo de enfrentarse al régimen militar, sino también, la importancia de difundir dentro y fuera del país lo que estaba sucediendo, buscando a su vez, apoyo en organismos internacionales.

El séptimo y último tomo de esta publicación contiene 97 casos debidamente documentados. De ellos, 52 fueron presentados al Ministro del Interior a través de una carta con fecha 23 de septiembre de 1973, por el Obispo de Los Ángeles, Monseñor Orozimbo Fuenzalida, correspondientes a

⁴¹⁷ Ibid., p. 946.

su diócesis. Otros 45 casos, fueron enviados a la misma autoridad, con fecha 27 de octubre de 1978, a través de una carta firmada por tres de los Obispos auxiliares del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Alvear U., Monseñor Jorge Hourton P., y el Vicario General, Monseñor Ignacio Ortúzar R. Estos últimos casos correspondieron a detenciones seguidas de desapariciones que ocurrieron en Santiago entre 1973 y 1977. En esta presentación, se logró detallar con mayor facilidad las características de los apresamientos según los años que abarcaba la publicación. Es así como se pueden identificar con cierta claridad los diferentes *modus operandi* de los diferentes organismos represores, es decir, las diversas formas de actuar que tenían en las detenciones Carabineros de Chile, el Ejército, Fuerza Aérea, y más tarde los servicios de seguridad, en especial la Dirección de Inteligencia Militar (DINA). Así también, se describen las características generales de las víctimas, señalando los operativos que se realizaron en 1976, sobre todo en contra de los militantes del Partido Comunista de Chile. A su vez, presta especial atención a las víctimas de Lonquén, caso que hemos mencionado en capítulos anteriores, y en el que por primera vez este tipo de información adquirió un carácter internacional. Este caso destaca, debido a que si bien no estuvieron recluidos en ninguno de los centros de tortura que examina esta investigación, es importante resaltar el carácter que adquirió el descubrimiento de estos asesinatos cuyos cuerpos fueron calcinados. La lectura de sus expedientes, permiten comprobar una vez más, tanto la crueldad con que actuó Carabineros de Chile, como el dramatismo que debieron vivir los familiares de las víctimas. En honor a este lamentable hecho, fue que en el último prólogo de « ¿Dónde están? », se incorporó la transcripción de la homilía que se pronunció en la Capilla de Lonquén el 25 de febrero de 1979, por Monseñor Cristián Precht Bañados, quién en aquella ocasión subrayó: “Lo que nosotros queremos y proclamamos en esta Iglesia de Lonquén es que queremos que el respeto se imponga en nuestra patria”.⁴¹⁸

⁴¹⁸ Precht, C., Homilía pronunciada en la Capilla de Lonquén, domingo 25 de febrero de 1979, en *¿Dónde Están?* tomo 7, marzo 1979, op. cit., p. 230.

En definitiva, este archivo cuyos expedientes contienen datos de 478 personas, se fue configurando en la medida en que este tipo de dificultades, referidas a la búsqueda de personas que habían sido detenidas, y cuyo paradero era desconocido fue creciendo. Por esta razón se fue reuniendo poco a poco la documentación vinculada a cada caso, y que luego de cinco años de trabajo, se pudo constatar, como muy bien se explica en sus prólogos, que se podían identificar ciertas características en las formas en que las diversas instituciones y organismos del régimen militar funcionaban en estas materias, más específicamente, en lo que estaba relacionado con detenciones de personas y su posterior reclusión. Por otra parte, el contenido de este archivo, fue parte central de la documentación que recibió años más tarde la CNVR, y que había sido custodiada por la propia Vicaría. Como hemos enunciado, en los prólogos que componen los siete volúmenes de la publicación «*¿Dónde están?*», destaca la valentía con que la Vicaría, sus obispos y funcionarios, afrontaron desde los primeros años de la dictadura militar, el tema de las personas que estaban detenidas y cuyo paradero era desconocido. Insistiendo a su vez en las diferentes modalidades que iban adoptando las masivas detenciones. Es por ello que la propia Vicaría, se transformó en testigo fehaciente de los hechos que estaban ocurriendo en Chile durante los diecisiete años de dictadura. Durante este tiempo, y debido a la gran cantidad de información que recibió, logró identificar las diferentes estrategias de represión que puso en práctica el régimen, así como también hacer pública la denuncia de los centros secretos de detención a los que eran conducidas las víctimas. Estas razones llevan a destacar el incalculable valor histórico que tiene el archivo «*¿Dónde están?*», sobre todo porque en algunos de sus textos encontramos el testimonio de quienes se desempeñaron como funcionarios en esta organización, visibilizando el rol que desempeñó la Iglesia en estos casos. Es más, en varios de los prólogos escrito por los obispos, se formulaban algunas de estas interrogantes:

“¿Por qué la Iglesia se interesa por el problema de los familiares de los detenidos- desaparecidos? ¿Para atacar al Gobierno?
¿Para atraerse las simpatías de los sectores afectados por el

problema? Para la Iglesia, ninguna de esas razones es valedera”⁴¹⁹.

Frente a estas interrogantes se podía apreciar la respuesta contundente de la Iglesia chilena, que argumentaba que sus motivaciones eran de orden cristiano, y que por tanto no se debían tergiversar las acciones que realizaba. Ante los ataques que el régimen propiciaba a la Vicaría, acusándola de cómplice de estrategias vinculadas al marxismo, o de encubrir a terroristas, los obispos respondían con extensas cartas en que argumentaban que “la Iglesia impulsa a practicar la misericordia a los que reconocen haberse equivocado”⁴²⁰. Subrayando a su vez que frente a los graves hechos que estaban ocurriendo en el país, pero particularmente frente al tema de los «desaparecidos», en el que incluso se llegó a negar su existencia, afirmando que los desaparecidos eran personajes ficticios, “agregando así al dolor, la burla para los estremecidos familiares, sobrevivientes y para todos los que mirábamos horrorizados el sucederse de los hechos”⁴²¹. La Iglesia Católica no podía quedar muda e indiferente. Frente a estos hechos, se subrayó que:

“La Iglesia de Santiago, en su Vicaría especializada, concentró sus esfuerzos para “hacer la verdad”, discernir los casos, protestar –en privado al principio, en público después- ante la evidencia de las violaciones, aliviar el dolor a los familiares, actuar en su defensa, despertar a la opinión pública para que estos incalificables episodios de deshumanización fueran repudiados y no se volvieran a repetir, colaborar en toda acción lícita y no violenta para promover la causa de clarificación de la verdad en todos los niveles y tratar de suavizar las heridas que socialmente se iban agravando”⁴²².

⁴¹⁹ Alvear, E., *Prólogo ¿Dónde Están?* tomo 2, enero de 1979, op. cit., p. 261.

⁴²⁰ Prólogo de Gustavo Ferraris, Vicario Episcopal Zona Sur, Arzobispado de Santiago, en *¿Dónde están?* tomo 5, Santiago, marzo 1979, p. 942.

⁴²¹ *Ibíd.*

⁴²² *Ibíd.*, pp. 942-943.

Desde los inicios de la publicación, la Vicaría subrayó que las detenciones y posteriores desapariciones de las víctimas, tuvieron características diferentes, que permitían diferenciarlas por períodos. Destacó además que las situaciones de arresto se vivieron con dramática intensidad. Estos y otros argumentos que sostuvo la Vicaría de la Solidaridad, tanto a través de esta publicación como a través de otras vías de difusión, fueron confirmadas más tarde por la CNVR. Asimismo, se puede apreciar que los fondos documentales de la Vicaría, otorgaron muchas veces luces a la Comisión de Verdad y Reconciliación, en la metodología de abordar esta difícil tarea.

Por otra parte, consideramos importante destacar que gran parte de la información que logró recopilar la Vicaría de la Solidaridad, se debió al esfuerzo conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la agrupación ha marcado un camino indispensable para comprender las complejidades sobre cómo se ha articulado el pasado reciente en Chile. Como hemos enunciado, si las Comisiones de Verdad en América Latina son fundamentales para analizar las formas sobre cómo se organiza y relatan estos pasados, fundamental es el análisis de las trayectorias de este tipo de organizaciones sociales que surgieron debido a la injusticia e impunidad imperante, ya que fue la necesidad de querer saber dónde estaban sus seres queridos lo que llevó a que estas personas se agruparan. En este contexto en 1974 se reunieron los familiares de los detenidos desaparecidos en Santiago, amparados en el Comité Pro Paz de las Iglesias Cristianas, “se iniciaba una larga marcha que estuvo marcada en un primer momento, por la esperanza de encontrarlos con vida hasta la constatación de lo impensable, el ocultamiento y confiscación de sus cuerpos y de sus identidades sociales”⁴²³.

“Las primeras acciones de los familiares se dirigieron a lograr el funcionamiento del poder judicial, demandando, a través de

⁴²³ Horvitz, M. E., “Entre lo público y lo privado: la vocación femenina para resguardar la memoria. Recordando a Sola Sierra”, en *Revista Cyber Humanitatis*, nº 48, Universidad de Chile, 2008, p. 18. Disponible en, <http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/19/horvitz2.html> >.[Consultado en agosto de 2011]

recursos de amparo y denuncias de "presunta desgracia", que se realizaran las investigaciones que dieran con el paradero de las víctimas. Como es sabido, ninguna petición fue cursada; más aún, los jueces comunicaron las aseveraciones del que era el único poder constituido, el de los aparatos de terror del Estado, en una consigna repetida: "no se registra la detención". La existencia, prisión y muerte de esos detenidos fueron consideradas presuntas, solo visible para sus familiares dolientes y ofendidos"⁴²⁴.

Es interesante analizar las formas en que desde la dañada sociedad civil subsumida en el miedo y la censura, se intentó tanto durante la dictadura militar como en la transición política, vencer el terror. Más significativo es dar cuenta que fueron mujeres, esposas, madres y hermanas, no importando condición social, las que irrumpieron en el espacio público exigiendo saber dónde estaban sus seres queridos. Ejemplo de ello, son las acciones que realizaron para llamar la atención tanto de los medios de comunicación, como del propio régimen, debido a la casi nula información sobre sus familiares y amigos.

"El 14 de junio de 1977, veintiséis mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se instalaron en el local de la CEPAL y comenzaron una huelga de hambre, para hacer un llamado al secretario general de la ONU y exigir al gobierno chileno que diera explicaciones sobre las desapariciones"⁴²⁵.

Si observamos la región de latinoamericana durante este período, nos damos cuenta que el movimiento de mujeres que se organizaba en contra de las dictaduras de sus países no era menor, tal es caso de las madres de la Plaza de Mayo, que se enfrentaban en Argentina a los torturadores del general Videla. Y es que para comprender las transiciones a las democracias en América Latina, sin duda el papel desempeñado por las mujeres es

⁴²⁴ Ibíd.

⁴²⁵ Guillaudat, P. y Mouterde, P., *Los movimientos sociales en Chile 1973-1983*, Santiago, LOM, 1998, p.120.

fundamental. Puesto que fueron en su gran mayoría mujeres quienes desafiaron la extrema vigilancia de la dictadura militar y se atrevieron a exigir justicia. No son las únicas, sin duda, pero lo que impacta, es que muchas de ellas venidas de sectores populares, dueñas de casa, sin conocer tal vez la impronta del terror existente, se atrevieron a denunciar el horror. Cobijadas por aquellos roles tradicionales asignados a las mujeres, en que se “consagró la vocación femenina de preservar a los suyos en la vida y en la muerte (...). También las mujeres fueron convocadas a seguir ocupándose del cuidado de los restos mortales y de la trascendencia histórica de sus hombres, así como del recuerdo que en el cumplimiento de los deberes familiares hicieron de sus antecesoras”⁴²⁶.

Con mucho esfuerzo y valentía realizaron todo tipo de acciones de denuncia, desde las huelgas de hambre hasta las visitas a los sitios que hasta ese momento se sabía había cuerpos; Lonquén, Patio 29 y el Cementerio General todos en la Región Metropolitana. Son mujeres que por más de una década han caminado con las fotografías de sus seres queridos y la profunda pregunta que nos atraviesa ¿dónde están?, y detrás de la cual continúa un subterráneo silencio. Son mujeres que simbolizan mucho, primero, la fuerza y valentía de una búsqueda que muchas veces no han visto resultados, y en cuya lucha han dejado su vida. Por otro lado, desde sus prácticas cotidianas han logrado visibilizar su dolor, el bordado de arpilleras, el canto solitario y los testimonios que se han atrevido a realizar en diferentes instituciones públicas y privadas, dan cuenta de ello⁴²⁷. Han sido, al mismo tiempo testigos y protagonistas de esta triste historia de las últimas décadas del pasado siglo, observando con sospecha las formas y modos en cómo se ha organizado la actual Democracia en Chile.

⁴²⁶ Horvitz, M. E., op. cit. 19.

⁴²⁷ Las imágenes que hoy disponemos a través del Cine y las fotografías, que se niegan a olvidar dan cuenta de ello, un ejemplo es el documental *La Ciudad de los Fotógrafos* de Sebastián Moreno, 2006. En que en un episodio muestra cómo las madres de los campesinos enterrados en las fosas de Lonquén, custodian la memoria de sus seres queridos.

“Las críticas más frecuentes son porque nunca nos cansamos y continuamos luchando. Es que para nosotros todos los días es hoy. Se debe entender que la desaparición de nuestros familiares nos cambió la vida. Después del 15 de diciembre de 1976, durante más de una década, no celebramos en mi casa la Navidad y Año Nuevo. No llorábamos todo el tiempo, pero tampoco estábamos en condiciones de brindar”⁴²⁸.

Son innumerables los esfuerzos que ha realizado esta Agrupación por exigir la plena justicia en materia de Derechos Humanos, por ello consideramos que el análisis de la historia del tiempo presente en Chile, no se puede comprender sin sus actores, entre ellos a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ya que si observamos los hitos de este período, a saber, el Informe Rettig, la detención de Pinochet en Londres, la Mesa de Diálogo, y el Informe Valech, en todos ellos, la actuación de la Agrupación cobra un rol fundamental, porque a través de sus demandas de justicia y de querer saber el paradero de sus seres queridos, recuerdan que hay temas pendientes que por cierto no se pueden olvidar.

3.2.- La aceleración del proceso: El período de la agitación nacional

La génesis de la transición política chilena, contiene una amplia literatura, vinculada sobre todo a la ciencia política y sociología, en las que se identifican los inicios del proceso transicional, dando cuenta de los acuerdos, dificultades y tensiones que existieron para que finalmente se concretara el término del régimen militar, en un clima de gran tensión política y alta movilización social. No obstante, la promulgación de la Constitución de 1980, definió el camino institucional de la democracia protegida, permitiendo al general Pinochet iniciar un período de ocho años en la cúspide del poder. Esto se debía entre otros, a que “la economía parecía encaminada a un éxito

⁴²⁸ Schüller, P., Sola Sierra: “Simplemente hice lo que tenía que hacer”, entrevista concedida a De mujer a mujer, poco antes morir. Disponible en, <http://www.archivochile.com/Experiencias/hist_vida/EXPhisvida0005.pdf>.[Consultado en julio de 2011].

espectacular que los partidarios del gobierno ya calificaban como “el milagro chileno”⁴²⁹. Sin embargo, el impacto de la crisis de 1981, repercutió de forma importante, debido a su gran vulnerabilidad⁴³⁰, y al mismo tiempo, ocasionó un quiebre en los acuerdos internos que hasta ese momento había tenido el régimen militar respecto a las políticas para abordar el problema económico. Esta situación contribuyó para que se propiciaran protestas nacionales en diversos sectores de la sociedad, aún cuando continuaba existiendo la represión política, lo que implicaba que las manifestaciones de la sociedad civil, eran violentamente reprimidas, a través de la implementación de todo tipo de violencias, desde golpes, tortura y muerte hasta la desaparición forzada de cientos de personas.

“A su vez, la explosión social forzó al régimen a aceptar una liberación de facto del orden político, abriendo espacio para la acción de los partidos, el que aprovecharon para convertirse en poco tiempo en conductores indiscutibles de la disidencia”⁴³¹.

A juicio del destacado politólogo chileno Eduardo Boeninger, este hecho fue uno de los primeros elementos que configuraría el entramado que dejó vislumbrar las falencias de la dictadura militar.

“La crisis económica 1982-1984 fue el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que echó por tierra el proyecto político del régimen de Pinochet e hizo posible la restauración de la democracia en 1990. Correspondió al movimiento social el rol protagónico en esta primera fase de la larga lucha por la democracia”⁴³².

⁴²⁹ Boeninger, E., *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*, Santiago, Andrés Bello, 1998, (1ª ed. 1997), p. 292.

⁴³⁰ Meller, P., *Un siglo de economía política chilena (1880-1990)*, Santiago, Andrés Bello, 1996, pp. 196-197.

⁴³¹ Boeninger, E., op. cit., pp. 297-298.

⁴³² *Ibíd.*, p. 298.

En efecto, en 1983 se inauguró el llamado ciclo de protestas nacionales, que se extendieron hasta 1986. La convocatoria fue realizada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), el 11 de mayo de ese año, y fue la primera protesta organizada por el movimiento sindical⁴³³. Estas movilizaciones sociales “se debieron a la crisis interna que vivió el gobierno de Pinochet tras el fracaso del modelo económico que había implantado”⁴³⁴. En efecto, las jornadas de movilización nacional que ocurrieron en la década de los ochenta, fueron el resultado de los grandes fallos del modelo económico instaurado por el régimen, pero también la oportunidad que tuvo el pueblo de Chile, para sacar a luz pública, la fuerte represión de que era objeto por parte del Estado.

“La violencia política en Chile, entre 1983 y 1986, se inscribe dentro de un proceso de conflicto político y social, en el cual las jornadas de protesta opositoras al régimen militar fueron la manifestación de una de las más profundas crisis de legitimidad por las que atravesó el régimen, desde su instalación en el poder (...). Durante esos años, la violencia política, jugó un rol determinante como modeladora del escenario político nacional, influyendo en el proceso de cambio político que llevaría a la transición a la democracia a partir de 1989”⁴³⁵.

Al llamado de la CTC, se unieron los grupos de opositores del régimen político, así como las organizaciones juveniles y vecinales que en las sucesivas protestas que se realizaron cada mes durante dos años, a poco andar fueron tomando el liderazgo del movimiento social. En definitiva, esta primera convocatoria, sorprendió tanto al gobierno como a la sociedad civil, debido a la

⁴³³ Días más tarde, concretamente el 20 de mayo de 1983, se creaba “el *Comando Nacional de Trabajadores*, un organismo de coordinación sindical que reagrupó a la *Confederación de Trabajadores del Cobre*, la *Coordinadora Nacional Sindical*, la *Confederación de Empleados Particulares de Chile*, la *Unión Democrática de Trabajadores* y el *Frente Unitario de Trabajadores*”, en Guillaudat, P., Mouterde, P., *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1983*, Santiago, LOM, 1998, p. 155.

⁴³⁴ Lúnechen, G., *Violencia política. (Violencia Política en Chile. 1983-1986)*, Santiago, Arzobispado de Santiago. Fundación de documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 2000, p. 44.

⁴³⁵ *Ibíd.*, p.9.

masividad de la convocatoria y la radicalidad con que fue reprimida, sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables. “Todo ello hizo posible que la crisis de la dimensión transformadora del régimen encontrara no solo un potencial social muy vasto de descontento, sino organizaciones que pudieron canalizarlo y darle formas de expresión colectiva”⁴³⁶.

Las protestas nacionales y las manifestaciones sociales, también generaron la movilización de los partidos políticos de oposición, que se encontraban replegados y desarticulados debido a violenta represión que experimento la izquierda chilena, en particular el Partido Socialista (PS), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Chile (PCCH), que tenían un gran número de militantes exiliados, detenidos y desaparecidos. A su vez, “otros partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Nacional -opositores al gobierno de la Unidad Popular- se encontraban en receso obligatorio desde fines de los setenta. Sin embargo, en el caso del PDC, sus dirigentes mantenían contacto y organizaban al partido en la clandestinidad”⁴³⁷.

En definitiva, el llamado a las protestas nacionales, generó un punto de inflexión dentro de la política del régimen, ya que permitió visibilizar las demandas de la gran mayoría de la sociedad, y que hasta ese momento se había desplegado sorteando de diversas maneras la censura y represión que el régimen utilizaba desde que se había hecho con la conducción del país.

“[La] naciente actividad opositora se desarrollaba a nivel intelectual y artístico, amparados en organismos eclesiásticos y universitarios. Las primeras expresiones de descontento

⁴³⁶ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, en Drake, P., Jaksic, I., Angell, A. (et. al.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990*, Santiago, FLACSO, 1993, p. 406.

⁴³⁷ Vásquez, D., “*Algunas notas sobre el origen de la Concertación de Partidos por la Democracia*”, Informe nº 144, año XV, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2005, p.2. Disponible en, < http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/informes/estudios_pdf_informes/nro144.pdf>. [Consultado en enero de 2012].

ciudadano se llevaron a cabo a fines de la década a través de organizaciones sindicales y estudiantiles”⁴³⁸.

En este contexto, uno de los primeros esfuerzos que se observa, y que fue elaborado por políticos contrarios al régimen, fue el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional (PRODEN), a fines de 1982. Promovido originalmente por simpatizantes de los diferentes partidos de izquierda, se definió como pragmático y tuvo como objetivo, instalar una propuesta en contra del régimen de Pinochet, cuyo fin era el regreso de la democracia. Esta fue una de las razones para que en los primeros meses de 1983 presentaran “ante la Junta de Gobierno un proyecto de reforma constitucional que contemplaba derogar las disposiciones transitorias, concentrar los poderes ejecutivo y legislativo en la Junta durante 2 años para transitar a la democracia mediante una elección de un Congreso unicameral de 120 miembros”⁴³⁹. Posteriormente se identifican algunos momentos claves en la articulación de la oposición política, y que tuvieron como objetivo, canalizar las demandas que estaba realizando el conjunto de la sociedad civil, y que por primera vez en diez años, se exigían en la calle. Uno de ellos fue la redacción del «Manifiesto Democrático» el 14 de marzo de 1983, firmado por dirigentes de los distintos partidos de oposición. La importancia de este texto radicó en que:

“Diagnosticaba una profunda crisis moral, social, política y económica que agudizaba las injusticias y las tensiones del país, así como rescataba al sistema democrático inherente a la tradición republicana del país y proponía la realización de una Asamblea Constituyente para dotar al país de una nueva Carta, terminar con los estados de excepción, la plenitud de libertades de expresión y opinión, planes económicos de emergencia para enfrentar la pobreza y el desempleo, entre otras medidas”⁴⁴⁰.

⁴³⁸ Ibíd.

⁴³⁹ Ibíd., p.3.

⁴⁴⁰ Ibíd.

El texto fue firmado por “democratacristianos, radicales, Partido de Izquierda Radical, socialistas renovados y disidentes de derecha, todos, formalmente a título personal en virtud de la proscripción legal de la actividad política”⁴⁴¹. Otra oportunidad, fue la creación de la Alianza Democrática el 22 de agosto de 1983, compuesto por “pequeños grupos de derecha, Democracia Cristiana y otros partidos de centro menores, y algunos partidos y grupos socialistas”⁴⁴². Este bloque político, tomó como referencia las reflexiones de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) que se realizó en Santiago, el 17 de diciembre de 1982. En el documento titulado «el renacer de Chile», por primera vez, los obispos exigían el retorno de la democracia. Así también, tomó como marco de operación el propio Manifiesto Democrático. Los ejes que articulaban sus demandas eran: “Renuncia de Augusto Pinochet; Asamblea Constituyente para reformar la Constitución vigente y Gobierno provisional para una transición de dieciocho meses”⁴⁴³.

Por otra parte, la creación el 20 de septiembre del mismo año, del Movimiento Democrático Popular (MDP)⁴⁴⁴, constituido por la izquierda que apostaba por una estrategia más rupturista y de enfrentamiento con el régimen. Por consiguiente, la reorganización de los conglomerados de oposición, sumado a los pequeños pero significativos triunfos en organizaciones de estudiantes y trabajadores, unido a la gran convocatoria que adquirirían las movilizaciones sociales que se sucedieron ese año, generaron un espacio para que se realizara una «apertura política» por parte del régimen hacia los grupos de oposición. No obstante, la represión se hizo sentir con mayor fuerza.

⁴⁴¹ Boeninger, E., op. cit., p. 301.

⁴⁴² Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 411.

⁴⁴³ Vásquez, D., “*Algunas notas sobre el origen de la Concertación de Partidos por la Democracia*”, op. cit., p.6.

⁴⁴⁴ El Movimiento Democrático Popular (MDP), estaba constituido por el Partido Comunista, el Partido Socialista la facción de Almeyda, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Manuel Antonio Garretón, identifica otro bloque político, el “Bloque Socialista (de carácter diferente pues intentaba más la unificación del campo socialista, agrupando a sectores socialistas que estaban en la Alianza, más la Izquierda Cristiana y MAPU)”, en Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 411.

“Las jornadas de protesta del 11 y 12 de agosto de 1983 fueron enfrentadas por el régimen con 18 mil soldados en la calle, por orden expresa del general Pinochet, y con resultado de decenas de muertes y centenares de heridos y detenidos”⁴⁴⁵.

Manuel Antonio Garretón, señala que la cristalización de las alianzas políticas de centro derecha e izquierda, se constituyó en una forma de “hacer frente a la cuestión de la unidad opositora”⁴⁴⁶. En efecto, el hecho de que los partidos políticos de oposición se organizaran en bloque, significo a juicio del autor que:

“Por un lado, se intentaba superar una fragmentación frente a un adversario que aparecía monolítico. Por otro, se apreciaban importantes cambios en la Democracia Cristiana, al romper su tradicional tendencia a actuar por sí sola y aceptar alianzas principalmente hacia sectores de izquierda aunque siempre excluyendo a los comunistas. También, algunos sectores socialistas no pusieron como condición de su participación en alianzas la obligatoriedad de la unidad previa de la izquierda”⁴⁴⁷.

Por consiguiente lo que se configuró fue una coalición que favoreció sus afinidades ideológicas, por sobre la forma en cómo se pondría fin al régimen y la manera de recuperar la democracia. En definitiva, lo que se observa con el inicio de las jornadas de protestas en 1983, es que existió un viraje en el escenario político del país. Entre los diversos factores que posibilitaron esta situación, estaba la precaria condición en que se encontraba el gobierno, producto de la crisis económica que atravesaba el país, lo que sumado a la magnitud que habían alcanzado las protestas nacionales, llevaron a que el nuevo Gabinete del gobierno, dirigido el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa (1983-1985), diera inicio a la llamada «apertura», y que en palabras del

⁴⁴⁵ Vásquez, D., op. cit., p. 6.

⁴⁴⁶ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 410.

⁴⁴⁷ *Ibíd.*

sociólogo chileno, consistió en “una doble estrategia: una estrategia de contención y una estrategia de rearticulación”⁴⁴⁸. La primera implicaba la implementación del terror, lo que se traducía en el empleo de la extrema violencia para reprimir cualquier tipo de manifestación en contra del régimen, junto a la aplicación del toque de queda, que tenía como objetivo, evitar la circulación y reunión en los espacios públicos, promoviendo el miedo en la población, y por tanto, dismantelar la movilización social. Sin embargo, las protestas continuaron, colocando en evidencia la crudeza de la política de contención adoptada por el régimen.

“Las jornadas de protesta del 11 y 12 de agosto de 1983 fueron enfrentadas por el régimen con 18 mil soldados en la calle, por orden expresa del general Pinochet, y con resultado de decenas de muertes y centenares de heridos y detenidos”⁴⁴⁹.

Otra estrategia de contención fue el denominado “plan de Jarpa”⁴⁵⁰. Que consistió en una apertura política, cuyo eje se concentró en reuniones realizadas entre agosto y septiembre de 1983, con la Iglesia Católica a través del Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, como interlocutor entre oposición y régimen.

“El plan concreto consistía en adelantar la aprobación de la ley de partidos políticos y en acelerar el estudio de la legislación sobre registros electorales y elecciones como bases para la suspensión del receso político y para una elección anticipada del Parlamento. A ello se agregaba una promesa sobre el término paulatino del exilio”⁴⁵¹.

Garretón señala que desde la oposición se asumió una forma triple: “salida de Pinochet, Gobierno Provisional y Asamblea constituyente,

⁴⁴⁸ Moulian, T., *Chile Actual. Anatomía de un Mito*, Santiago, LOM, 1998, p. 300.

⁴⁴⁹ Vásquez, D., op. cit., p.6.

⁴⁵⁰ Moulian, T., *Chile Actual*, op. cit., p. 306.

⁴⁵¹ *Ibíd.*, pp. 306-307.

declarándose la ilegitimidad de la Constitución de 1980 y de cualquier mecanismo incluido en ella”⁴⁵². Sin embargo, el diálogo entre ambas partes se vio truncado, primero, debido a la contundente declaración de Pinochet, los primeros días de octubre de 1984, en que se señalaba que la Constitución no se alteraba. Y en segundo lugar, el paro convocado para el 30 del mismo mes, que llevó a la implantación del estado de sitio en noviembre de ese año, sumado a la censura la prensa, junto a la detención y asesinato de opositores al régimen, provocando por tanto, el repliegue de las manifestaciones. De forma paralela, la estrategia de rearticulación que señala Moulian, estaba relacionada con el rescate del que había sido hasta antes de la crisis, el exitoso neoliberal.

“Más allá de sus diferencias en materia de ideología económica o de políticas macro económicas, la gran mayoría de las decisiones estuvieron de acuerdo en que el rol del Estado debía ser transitorio, pero también en que un papel activo del Estado era básico para evitar que la crisis se convirtiera en un desastre”⁴⁵³.

En efecto, la incipiente apertura política que se originó a propósito de la crisis económica internacional que afectó gravemente a la economía chilena, puso en jaque la credibilidad del modelo económico de los llamado «Chicago boys», basada en la exclusividad del mercado sobre el Estado. Elementos que en su momento sentaron las bases del sistema neoliberal. Fueron aquellas fisuras que se detectaron a propósito de esta coyuntura económica, las que permitieron la movilización social a través de jornadas de protestas, y el acuerdo entre los principales partidos de la oposición, hechos que tuvieron importantes repercusiones dentro del régimen, ya que visibilizó la gran movilización que se estaba gestando, y que alcanzó su punto máximo en la campaña del plebiscito de 1988.

⁴⁵² Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 408.

⁴⁵³ Moulian, T., *Chile Actual*, op. cit., p. 314.

En consecuencia, a partir de 1985, Pinochet logró reconducir su proyecto político inicial, nombrando como Ministro del Interior a Ricardo García, y designando a Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, que a poco andar, logró captar un alto grado de poder en materia económica. Asimismo, este nuevo viraje implicó la clausura de todo tipo de diálogo con los diversos actores políticos, e hizo más dura la represión. En efecto, el secuestro y brutal asesinato de tres dirigentes del partido comunista, que fue conocido por la opinión pública, como “El caso degollados”⁴⁵⁴. Colocó de manifiesto, una vez más la violencia con que actuaba el régimen. Si bien estos hechos lograban salir a luz pública, hoy sabemos que son cientos los casos de tortura, muerte y desaparición que se realizaron en Chile entre 1973 y 1990. Este hecho, recordó lo sucedido en 1978, con el descubrimiento los cuerpos de once campesinos calcinados en los Hornos en Lonquén. Hallazgo que produjo un gran impacto mediático a nivel local e internacional, demostrando nuevamente la brutalidad de la represión que se estaba realizando en Chile, y que era paralela a los acuerdos que se estaban llevando a cabo entre la oposición y régimen. En otras palabras, el Chile bajo Pinochet, tuvo muchas víctimas, algunos casos de los casos emblemáticos fueron:

“Sebastián Acevedo, quien se inmolara el 11 de noviembre [1983], frente a la Catedral de Concepción, angustiado por la falta de noticias sobre sus hijos detenidos por la CNI [Central Nacional de Informaciones]; el del sacerdote francés André Jarlan, muerto el 4 de septiembre de 1984, mientras leía su Biblia en el interior de su

⁴⁵⁴ “El 29 de marzo de 1985, frente al Colegio Latinoamericano de Integración son detenidos por un comando José Manuel Parada, integrante de la Vicaría de la Solidaridad, y el profesor Manuel Guerrero. Al día siguiente son encontrados degollados, en las cercanías del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Quilicura, junto a Santiago Nattino, quien había sido arrestado con anterioridad. Los tres eran militantes del Partido Comunista. El doloroso hecho conmueve a la opinión pública. Más tarde, se comprueba que los autores del asesinato integraban la Dicomcar, un organismo de Carabineros de Chile ligado directamente al general comandante de la institución, César Mendoza, realizándose grandes movilizaciones para exigir su renuncia por su responsabilidad en los hechos”. En Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, *Memorias para construir la Paz. Cronología. El auge de la Movilización Social 1983-1986*, Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, s/f, p. 44. Disponible en, <<http://www.archivovicaria.cl/archivos/1983-1986.pdf>>. [Consultado en octubre de 2011].

casa en la población de La Victoria, en momentos que afuera Carabineros [la policía nacional] reprimía una protesta”⁴⁵⁵.

La violencia fue aplicada de forma sistemática durante todo el régimen militar, generando en la población civil, una sensación de miedo y vulnerabilidad constante, existiendo por tanto un clima de confrontación permanente. Es en este contexto fue donde se desarrollaron los diversos pactos y negociaciones políticas para intentar terminar con el régimen, aunque el itinerario de transición estaba previamente diseñado en la Constitución de 1980.

En definitiva, el difícil camino hacia la democracia, todavía tenía otra oportunidad. Ante la abrumadora forma en que el régimen puso fin a las jornadas de protestas, y frente al fracaso del diálogo entre oposición y gobierno, la Alianza Democrática intentó realizar una estrategia de movilización que se convirtiera en una forma de resistencia pero de una forma pacífica. Ello a pesar de que la movilización social, era la única forma en que se podía mantener unida a la oposición, fundamentalmente a los sectores de izquierda, cuestión que requería incluir al Movimiento Democrático Popular. A juicio de Boeninger ésta “opción [fue] frontalmente rechazada por la Democracia Cristiana en virtud de la falta de compromiso del PC con la democracia y la no violencia”⁴⁵⁶. En consecuencia, la propuesta de la Alianza de resistir resistencia pacífica no tuvo éxito, aunque no abandonaron la idea de llegar a algún tipo de acuerdo con el oficialismo para elaborar un proceso que proporcionara el retorno a la democracia.

Una última instancia preliminar que identificamos dentro del complejo recorrido que realizaron los diversos partidos políticos y grupos de izquierda, antes de conformarse en el bloque definitivo de la Concertación, fue la que se gestó en 1985, a propósito del fracaso de la estrategia pacífica de la Alianza. En efecto, de forma gradual surgió un acercamiento de este sector con una

⁴⁵⁵ Guillaudat, P. y Mouterde, P., *Los movimientos sociales en Chile 1973-1983*, Santiago, LOM, 1998, p. 165.

⁴⁵⁶ Boeninger, E., op. cit., p. 308.

facción más liberal de los grupos de derecha, quienes decidieron buscar una forma de llegar a un acuerdo entre los sectores del gobierno y la oposición. Hecho que se concretó un Seminario a cargo de la Democracia Cristiana (DC)⁴⁵⁷. Este nuevo contacto surgió a propósito de que el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, de filiación demócratacristiana, organizó a principios de 1985, un seminario titulado “Una salida político-institucional para Chile”, cuyas principales figuras fueron Patricio Aylwin y Francisco Bulnes. En esta reunión Aylwin señaló que, “sin perjuicio de su ilegitimidad de origen, la Constitución de 1980 debía entenderse como un hecho del que no se podía prescindir. Bulnes se mostró de acuerdo”⁴⁵⁸. Fue en este contexto, de delicada tensión que se produjo un acercamiento entre la derecha política y los representantes de oposición. En la reanudación de las conversaciones entre ambas partes, colaboró como interlocutor el entonces Arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, que junto a un grupo de personas vinculadas a la iglesia⁴⁵⁹, se implementó una Comisión que comenzó a trabajar para generar un diálogo sobre la forma de conducir el proceso político de manera pacífica. José Zavala argumentaba en un Seminario, tres meses después, que monseñor Fresno, “realizó un diálogo personal, discreto y privado, para buscar un acuerdo básico sobre la gobernabilidad del país para el día en que el gobierno sea reemplazado”⁴⁶⁰. Luego de realizar varias entrevistas a un amplio ámbito de figuras políticas de diversos horizontes políticos, Fresno, los convocó a una reunión el 22 de julio de 1985, en Calera de Tango. Allí los animó a realizar un acuerdo, debido a las coincidencias que había detectado en cada entrevista, entre las que destacan:

⁴⁵⁷ Los orígenes doctrinarios e ideológicos de la democracia cristiana se remontan a fines del Siglo XIX con la publicación de la primera encíclica social de la Iglesia denominada *Rerum Novarum* (1891) del Papa León XIII, que fue el impulso doctrinario inicial a partir del cual se hizo un llamado a los cristianos a participar activamente en la construcción de un mundo más justo para los trabajadores y los humildes, en una época de marcada insensibilidad de la elite gobernante y los partidos políticos tradicionales frente a las dramáticas consecuencias de la “cuestión social”. Disponible en, <www.pdc.cl>.[Consultado en agosto de 2011].

⁴⁵⁸ Boeninger, E., op. cit., p. 308. El Seminario se desarrolló en el Hotel Tupahue, ubicado en el centro de Santiago.

⁴⁵⁹ Entre ellos los empresarios José Zavala, Fernando Léniz, y Sergio Molina que había sido Ministro del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970).

⁴⁶⁰ «Acuerdo Nacional y Transición a la Democracia», Seminario realizado en el Centro de Estudios Públicos el 26 y 27 de noviembre de 1985, en *Revista de Estudios Públicos* n° 21, Santiago, 1986, p. 3.

“La primera coincidencia era una unánime disposición a dialogar con otras corrientes de opinión; la segunda, un unánime rechazo a la violencia y a aquellos que la usan como objetivo o como práctica política. La tercera coincidencia, y esto lo destaco especialmente, era la necesidad de llegar a un entendimiento con el gobierno de las Fuerzas Armadas. La cuarta, la necesidad de un plan económico-social, además de uno sociopolítico, y la quinta –y también lo destaco–, el reconocimiento de que la actitud del Partido Demócrata Cristiano era “la espina dorsal” de cualquier consenso”⁴⁶¹.

Para Boeninger existieron tres elementos que incidieron en que se produjera este acercamiento de manera real, y que a su juicio fueron: “El peso moral de la Iglesia, la convicción compartida de esos sectores de que el país necesitaba una salida política consensuada y la destreza de los asesores del Arzobispo”⁴⁶². El documento titulado «Acuerdo Nacional para la Transición a la plena Democracia», firmado un domingo 25 de agosto de 1985, contenía tres aspectos: I) Acuerdo Constitucional, II) El Orden Económico y Social, III) Medidas Inmediatas⁴⁶³. Este texto fue un acuerdo colectivo, que se convirtió

⁴⁶¹ *Ibíd.*, pp. 3-4.

⁴⁶² Boeninger, E., *op. cit.*, p. 309. El autor argumenta que este fue un “acuerdo entre partidarios políticos, negociado y suscrito al margen del gobierno, con participación de dirigentes indiscutiblemente partidarios del régimen, que actuaron con total autonomía, sin consulta ni contacto alguno con el gobierno”. En efecto, en este acuerdo participaron Francisco Bulnes, Andrés Allamand, Patricio Phillips y Pedro Correa, que pertenecían al partido de Unión Nacional (UN) y el Partido Nacional (PN). Por otra parte, uno de los problemas que debió resolver la Comisión que estaba redactando el documento fue la posición que se tendría frente al Partido Comunista. José Zavala expone que para resolver esta situación, se creó una “Comisión que estaba constituida por Fernando Léniz, Sergio Molina, y el propio José Zavala, “más un representante de la Izquierda que fue Luis Maira; un representante de la Derecha, que fue Andrés Allamand, y un representante del Centro, que fue Patricio Aylwin”. En *Revista de Estudios Públicos* n° 21, *op. cit.*, p. 5

⁴⁶³ El «Acuerdo Nacional para la Transición a la plena Democracia», fue suscrito en Santiago, en agosto de 1985, y firmado por: René Abeliuk, Andrés Allamand, Patricio Aylwin, Carlos Briones, Francisco Bulnes, Pedro Correa, Armando Jaramillo, Luis Fernando Luengo, Fernando Maturana, Sergio Navarrete, Darío Pavez, Germán Pérez, Patricio Phillips, Mario Scharpe, Enrique Silva Cimma, Ramón Silva Ulloa, Gastón Ureta, Gabriel Valdés, Hugo Zepeda. Por su parte, Luis Maira y Sergio Aguiló participaron en la aprobación del documento original, no firmaron, pero adhirieron posteriormente. Ambos pertenecían a la Izquierda Cristiana. Los firmantes del documento pertenecían, en el mismo orden, a los siguientes partidos o movimientos políticos: Socialdemocracia, Unión Nacional, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Unión Nacional, Partido Nacional, Derecha Republicana, Partido Radical, Unión Nacional, Partido Socialista (línea Mandujano), Partido Socialista (línea Briones), Partido

en un marco general de convivencia para avanzar hacia la democratización. “El Acuerdo Nacional fue el primer paso en el tránsito de la confrontación al consenso que marcó el proceso político chileno, un episodio precursor de la transición chilena a la democracia”⁴⁶⁴.

Sin embargo, el texto fue rechazado por el gobierno y la derecha. Uno de sus mayores detractores fue el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, líder del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Si bien valoraba el tono «moderado» del texto, puesto que a su juicio era “un elemento de avance positivo respecto de la conducta observada por los sectores opositores en la apertura de 1983 y 1984”⁴⁶⁵, consideraba el conjunto del documento como “poco serio, vago y de desarrollo imprevisible”⁴⁶⁶. En el Seminario organizado por la Revista Qué Pasa⁴⁶⁷, Guzmán formuló nueve preguntas a quienes habían firmado el Acuerdo. En esa ocasión, señaló que la característica central de la propuesta era, la “vaguedad genérica en casi todos sus postulados”⁴⁶⁸. Frente a las interrogantes que había formulado, señaló que “todas esas preguntas apuntaban a temas que, por su contenido, eran y son vitales en el tema que nos ocupa. No quise referirme a nada que el Acuerdo no tocara. Solamente me referí a materias que abordaba en forma directa o en forma implícita o indirecta”⁴⁶⁹.

A su vez, los sectores de izquierda también reaccionaron frente al Acuerdo Nacional. El Movimiento Democrático Popular (MDP), expuso su rechazo debido a que el texto “no consideraba una salida inmediata del gobierno militar del poder como condición para transitar a la plena

Socialista (línea Mandujano), Partido Nacional, Socialdemocracia, Partido Radical, Unión Socialista Popular, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano, Derecha Republicana. En *Revista de Estudios Públicos* n° 21, op. cit., pp. 57-62.

⁴⁶⁴ Boeninger, E., op. cit., p309.

⁴⁶⁵ Guzmán, J., *Seminario del Centro de Estudios Públicos 26 y 27 de noviembre de 1985*, Santiago, en *Revista de Estudios Públicos* n° 21, op. cit., p. 19. texto del seminario, p. 19.

⁴⁶⁶ Vásquez, D., op. cit., p.11.

⁴⁶⁷ Seminario organizado por *Revista Qué Pasa*, Santiago, septiembre, 1985.

⁴⁶⁸ Guzmán J., op. cit.

⁴⁶⁹ *Ibíd.*, p. 20.

democracia”⁴⁷⁰. En definitiva, las reacciones no se hicieron esperar, y desde los diferentes sectores políticos se enviaron cartas a los periódicos permitidos por el gobierno, a favor y en contra del Acuerdo Nacional. Cuestión que dejaba entre ver, que la iniciativa de monseñor Fresno no había pasado inadvertida para ningún sector político. Por su parte, como era de esperar, Pinochet rechazó entablar negociaciones con quienes habían coordinaron el documento. En un discurso pronunciado a fines de agosto en Santiago, el general expresaba que, “existen diferencias que no pueden ser materia de acuerdo o transacción”, y que Chile no quiere volver al tipo de democracia abolida por el golpe militar de septiembre de 1973”⁴⁷¹. Todas estas críticas dejaban “sin piso”, como expone Boeninger, el acuerdo alcanzado bajo la dirección del Arzobispo. Pese a ello, el 18 septiembre de 1985, en la celebración del *Te Deum* Ecuménico, el cardenal Fresno realizó “invitaciones a diversos sectores sociales y políticos, «como una manera de expresar ante Dios nuestro deseo de unidad»”⁴⁷².

Otra señal de respaldo al desafío que había constituido la formulación del Acuerdo, y que puso de manifiesto el gran apoyo que contaba la Alianza Democrática, fue la multitudinaria concentración en el Parque O’Higgins, el 21 de noviembre de ese mismo año, la convocatoria llevó como título, “Chile exige democracia”. El acto tuvo como orador principal, al líder del partido Demócrata Cristiano Gabriel Valdés, y contó con la participación de cientos de organizaciones sociales y movimientos de izquierda. Pese a ello, el 22 de diciembre de 1985, Pinochet rechazó de manera oficial el «Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia», debido a que carecía de definiciones y coherencia. Argumentos que ya había señalado meses antes, Jaime Guzmán. Luego de la reunión que sostuvieron los coordinadores con el

⁴⁷⁰ Vázquez, D., op. cit.

⁴⁷¹ *El País*, 30 de agosto, 1985. Disponible en, <http://www.elpais.com/articulo/internacional/PINOCHET/_AUGUSTO/CHILE/LATINOAMERICA/DESAPARECIDOS_Y_DICTADURA_MILITAR_DE_PINOCHET/general/Pinochet/rechaza/acuerdo/nacional/propuesto/oposicion/chilena/elpepiint/19850830elpepiint_23/Tes>.[Consultado en octubre de 2011].

⁴⁷² Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, *Memorias para construir la Paz. Cronología. El auge de la Movilización Social 1983-1986*, op. cit., p. 50.

subsecretario del Interior, Alberto Cardemil⁴⁷³, se publicó un comunicado en el que se indicaba que:

"El Gobierno estima que mal podría calificarse de acuerdo, y menos aún de nacional, a una acción en la que se verifica la ausencia de definiciones en materias fundamentales y urja consiguiente falta de coherencia entre las palabras y los hechos".

Si bien el texto había sido rechazado de forma oficial, aun quedaba pendiente una cita con el general, la que estaba en agenda para el 24 de diciembre de ese año. Esta reunión entre Pinochet y el cardenal Fresno, fue la ocasión en que se hizo explícita una indicación al arzobispo: "«debía dar vuelta la hoja y no involucrarse más en asuntos políticos»"⁴⁷⁴. A propósito de esta iniciativa, Boeninger señala:

"La lección de esta experiencia es que mientras las Fuerzas Armadas mantuvieran su solidez y cohesión internas y en tanto no se produjera una avasalladora presión social, la transición sólo podía darse en el marco del esquema oficial. Estas reflexiones fueron surgiendo en los círculos opositores en el curso del año 1986"⁴⁷⁵.

El denominado «año decisivo», fue como denominó a 1986, el Partido Comunista de Chile. Particularmente importante dentro del camino que se había gestado hacia el tránsito a la democracia, desde las primeras jornadas de protesta nacional en 1983, ya que se sucedieron hechos de tal magnitud, que permitieron observar una vez, el gran poder de las Fuerzas militares. Sin duda, los reiterados fracasos en las negociaciones de los sectores opositores al régimen no habían alcanzado ningún éxito real, sin embargo, habían abierto un

⁴⁷³ Miembro del partido Renovación Nacional (RN), durante la dictadura militar ocupó el cargo de subsecretario del Interior. Fue el encargado de anunciar los resultados del plebiscito de 1988 que pondría fin a la dictadura de Augusto Pinochet.

⁴⁷⁴ Guzmán J., "El Acuerdo Nacional y la transición a la democracia", Santiago, *Revista de Estudios Públicos* nº 42, 1991. Citado por Boeninger, E., op. cit., p. 311.

⁴⁷⁵ Boeninger, E., op. cit., p. 312.

camino que se continuara intentando fórmulas que permitieran llegar a un acuerdo con el régimen para avanzar hacia una democracia. Por tanto no se bajó la guardia frente a la posibilidad de convocar a nuevas movilizaciones sociales. Manuel Antonio Garretón frente a esta situación que existía “la necesidad de restablecer una relación entre lo político y social (...), se buscó un nuevo mecanismo de concertación de la oposición. Esta vez, a través de las organizaciones sociales, que incluían a los Comunistas (...)”⁴⁷⁶.

El curso de los acontecimientos permitieron que el 30 de marzo de 1986, en un acto organizado por el Consejo Metropolitano de Colegios Profesionales, se convocara a una «Asamblea Nacional de Civilidad» para el día 26 de abril. Los hechos demuestran que la iniciativa tuvo una alta adhesión tanto en los partidos de la Alianza Democrática, como en la propia izquierda, a través del Movimiento Democrático Popular (MDP). Sin embargo, la novedad de la invitación que se extendió a las diversas organizaciones sociales y políticas, fue que se incorporó al Partido Comunista de Chile, excluido en las anteriores iniciativas. Eduardo Boeninger, señala que: “La Asamblea de la Civilidad fue un vehículo de incorporación del Partido Comunista a la lucha social sin mediar compromiso político y en un plano de acción no violenta”⁴⁷⁷. Esta Asamblea redactó un documento que título «La Demanda de Chile», y que fue entregado el 06 de mayo de 1986, otorgándole al gobierno un mes para respondiera a las peticiones concretas. El eje del texto no era el aspecto político, sino más bien, lograr la unidad de sus organizaciones sociales por suma de sus reivindicaciones y aspiraciones específicas, una de ellas, “la restitución de la soberanía popular para restablecer la democracia”⁴⁷⁸. De la misma forma en que lo había manifestado “la Conferencia Episcopal en el documento «Justicia o Violencia», del 7 de junio, se partía de la base de que Chile estaba sumido en una profunda crisis política y moral”⁴⁷⁹. En consecuencia, el cambio en la

⁴⁷⁶ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 413.

⁴⁷⁷ Boeninger, E., op. cit., p.313.

⁴⁷⁸ Balbontin, I., *La Asamblea de la civilidad*, Debat nº 12, Barcelona, Fundación Rafael Campalans, 1988. Citado por Cañas, K. E., *Proceso político en Chile, 1973-1990*, Santiago, Andrés Bello, 1997, p. 201.

⁴⁷⁹ Cañas, K. E., *Proceso político en Chile, 1973-1990*, Santiago, Andrés Bello, 1997, p. 201.

estrategia de la Alianza, se debió a que concluyeron que adolecían de un acuerdo real que permitiera desarrollar una política efectiva. Sin embargo, Garretón señala que a su juicio, esta nueva iniciativa tenía dos carencias fundamentales:

“Una, el predominio de las organizaciones de capas medias que dejaba a los sectores populares y de izquierda en posición relativamente subordinada. La segunda, la ausencia de un diseño propiamente político estratégico que canalizara la movilización social”⁴⁸⁰.

A pesar de ello, lo cierto es que la «Asamblea de la Civilidad» se instituyó en un importante referente, debido a que estaba compuesto por líderes de diversas organizaciones sociales y gremiales, lo que permitió generar la idea de un frente unitario de oposición, aun cuando, en lo político tuviera grandes vacíos. En definitiva, la Asamblea y el documento elaborado, la Demanda de Chile, otorgó un nuevo impulso a la movilización social, y un alto nivel de adhesión, que permitieron convocar paros nacionales.

“«La Demanda de Chile» fue el momento populista de la oposición, no en el ánimo de lograr acogida a las exigencias específicas, sino con el evidente propósito de “sacar a la totalidad del pueblo a la calle, cada sector motivado por sus propias reivindicaciones.

De no obtenerse respuesta positiva del gobierno, la Asamblea acordaría la fecha para un paro nacional con un fuerte contenido desestabilizador. Los voceros clandestinos del Partido Comunista fueron claros al respecto: el eventual paro debía incluir la sublevación masiva contra el régimen, con el propósito firme de derrocarlo”⁴⁸¹.

⁴⁸⁰ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 414.

⁴⁸¹ Cavallo, A. Salazar, M., Sepúlveda, O., *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988*, Santiago, Grijalbo, 3ª ed., 1997, (1º ed.1989), p. 496.

El paro nacional convocado para los días 2 y 3 julio de 1986, tuvo un alto nivel de adhesión, pero fue duramente reprimida por el gobierno, actuando en ella, además de la policía nacional -Carabineros-, el Ejército de Chile. Se detuvieron a los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, y se produjo la brutal agresión contra dos jóvenes, este caso, fue este caso fue dado a conocer como “el caso quemados”⁴⁸². Esto llevó a que la frágil unidad interna de la Asamblea se fraccionara, cuestión que se vio acrecentada por el descubrimiento de arsenales ingresados al país de forma clandestina, en la zona costera de

⁴⁸² Lo que se informó fue que a las 8 de la madrugada del día 2 de julio, un grupo de jóvenes estaba preparando una barricada en la Avenida General Velázquez en el Barrio Los Nogales, de la Comuna de Estación Central, en Santiago. En esas circunstancias, una patrulla de policía, integrada por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 militares, a cargo del teniente Pedro Fernández Dittus, capturaron a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron brutalmente golpeados, luego fueron rociados con gasolina e incendiados, dejándolos abandonados a 20 km de Santiago, en una acequia en la zona rural de entonces Quilicura. Sólo logró sobrevivir Carmen Gloria, con más del 65% de su cuerpo quemado. Véase *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, Organización de Estados Americanos, Resolución nº 01ª/88. Caso 9755, Chile, 12/08/1988.

El proceso de este caso, culminó con la condena del teniente Pedro Fernández Dittus a 600 días de presidio por ser autor de cuasidelito de homicidio de Rodrigo y las graves lesiones a Carmen Gloria. El 07 de octubre del 2000, luego de 12 años de litigio, le permitió recibir a Carmen Gloria, la indemnización al que el Estado de Chile fue condenado a pagar por los tribunales, como responsable por las graves quemaduras que sufrió, luego de ser detenida por una patrulla militar. Disponible en < <http://www.fasic.org/bol/bol00/bol0010.htm>>. [Consultado en julio de 2011]. Frente a la pregunta sobre estos hechos, Pinochet, respondía: “No se sabe nada, pero es muy curioso que la marca que tenía el joven que murió, no estaba quemada por fuera, la quemadura estaba por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que pensara de un muerto mal. Pero me da la impresión que a lo mejor llevaba algo oculto y se le reventó y le provocó la quemadura”. En Declaración de prensa a Televisión Nacional de Chile en 1986. Datos extraídos del documental “Imágenes de una dictadura”, Patricio Guzmán, 1999.

Por otra parte Informe Rettig, señaló que en las jornadas del Paro Nacional de los días 2 y 3 de julio de 1986, murieron ocho personas, entre ellas, Rodrigo Andrés Rojas De Negri, “de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis semanas antes de los hechos que terminaron en su muerte. En la madrugada del 2 de julio de 1986, primer día del Paro Nacional, se dirigió con otros jóvenes a participar en el levantamiento de una barricada-fogata. Fue detenido junto a una joven integrante del grupo, por efectivos de una patrulla militar, uno de los cuales llevó hasta el lugar elementos incendiarios que los jóvenes habían dejado abandonados más atrás. Posteriormente, en un incidente confuso que se ha controvertido judicialmente, se produjo la inflamación de los dos detenidos. Los militares apagaron el fuego envolviendo a los dos jóvenes en frazadas. Luego los subieron a un vehículo militar y los dejaron abandonados lejos del lugar de detención. Más tarde fueron auxiliados por particulares y recogidos por funcionarios de Carabineros, quienes los hicieron transportar en un automóvil particular a un centro asistencial donde recibieron atención médica. Sólo logró salvarse la joven. Rodrigo Rojas falleció el 6 de julio en la Posta Central.

Conocidos y analizados todos los antecedentes del caso y las distintas versiones presentadas ante el Tribunal competente, esta Comisión tiene la convicción que Rodrigo Rojas fue víctima de grave violación a los derechos humanos, por cuanto su muerte, cualquiera sea el grado y la naturaleza de la responsabilidad individual de los involucrados, se produjo como consecuencia directa de las acciones u omisiones ilícitas de los efectivos militares”. *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, tomo 2, Santiago, Gobierno de Chile, 1996, pp. 734-735.

Carrizal Bajo, en el norte del país, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que conocía el Partido Comunista. A ello se sumó el atentado contra Pinochet y su escolta el 7 de septiembre de 1986, perpetrado también por el FPMR, en el murieron cinco de sus escoltas. El gobierno respondió con gran fuerza, declarando Estado de Sitio en todo el país, realizando secuestros y asesinatos a diferentes dirigentes de oposición⁴⁸³. Este hecho llevó a que la Asamblea se debilitara, debido a que el sector de la Alianza Democrática se alejó del PC. Y aunque el pequeño espacio de acción político alcanzado por la Alianza se encontraba fracturado, los partidos que habían firmado el Acuerdo Nacional, redactaron un nuevo documento titulado: «Bases para la sustentación del régimen democrático. Profundización del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia»⁴⁸⁴, si bien no logró un gran impacto en el gobierno, permitió a la oposición reflexionar sobre la capacidad de acuerdo político para llevar adelante un gobierno de transición, lo que implicaba a su vez, considerar la relación que debían tener con las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, estos hechos llevaron una nueva fase tanto dentro del gobierno como en las filas de la oposición. Manuel Antonio Garretón señala que:

⁴⁸³ Se realizaron allanamientos en poblaciones, iglesias y viviendas de opositores al régimen. El Informe Rettig bajo el título de «Muertes bajo estado de sitio», señaló que: “Según la versión de los familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República, cerca de las 02:00 de la madrugada del 08 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodeó la casa de Felipe Rivera Gajardo, electricista, militante del PC, en Pudahuel; lo sacaron y lo subieron a un taxi que partió con rumbo desconocido. Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpieron en la casa de Gastón Vidaurrázaga Manríquez, profesor, militante del MIR, en San Bernardo, los que se cruzaron con Carabineros y lo sacaron a empujones con destino desconocido. A las 05:00 de la madrugada llegaron has el domicilio del periodista José Humberto Carrasco Tapia, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista, tres civiles armados que se lo llevaron a la fuerza. Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos. Al día siguiente, el 09 de septiembre, llegaron a la casa de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, doce individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén. Esa misma noche, civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Toro, de la Vicaría de la Solidaridad”. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 648.

⁴⁸⁴ Firmaron este documento, “los siguientes partidos políticos: Democracia Cristiana, Democrático Nacional (PADENA), Humanista, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Socialista de Chile, Socialista Histórico, Nacional, Radical, Republicano, Liberal, Social Demócrata, Socialista de Chile, (M. Mandujano), Unión Socialista Popular (USOPO)”, en Ortega, E., Moreno, C., *¿La Concertación desconcertada? Reflexiones sobre su historia y su futuro*, Santiago, LOM, 2002, p. 82.

“Desde el punto de vista del régimen, ella se caracterizaba por el cumplimiento del itinerario previsto en la Constitución, es decir, plebiscito. Esto incluía una cierta recuperación económica (...), y la promulgación de las leyes políticas, complementarias a la Constitución (ley de partidos políticos, de registros electorales, votaciones y escrutinios, etc.), además de las operaciones necesarias para asegurar la candidatura de Pinochet y su triunfo en el Plebiscito”⁴⁸⁵.

Y agrega que para la oposición, este período significó comprender el tipo de transición que experimentaba el país, esto es, que no sería por ruptura, sino que siguiendo el itinerario de la Constitución.

“La experiencia del ciclo de movilizaciones y la rearticulación del régimen después de los arsenales y el atentado a Pinochet, así como el aprendizaje de otras experiencias de transición (...), fueron homogeneizando la perspectiva que no habría término del régimen por colapso o derrocamiento, sino a través de un proceso político”⁴⁸⁶.

Para la oposición, la dificultad radicaba en la incapacidad que habían demostrado de generar un proyecto político sustentable, que permitiera otorgar otra vía, diferente a la establecida por la Constitución de 1980 para terminar con el régimen. A través de estos hechos, se apreciaba que según lo previsto por el régimen, el plebiscito sólo permitiría perpetuar el régimen de Pinochet. A su vez, la oposición debió enfrentar la vulnerabilidad sociopolítica que se había exacerbado luego del atentado de Pinochet, y que contribuyó a mantener el escepticismo en la población respecto al cercano plebiscito, generando inseguridad y miedo en la población frente a los posibles cambios. Esta sensación se acrecentaba con el recuerdo del fatídico 11 de septiembre 1973, que el régimen se empeñaba en recordar, y que por tanto, estaba latente en el

⁴⁸⁵ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., pp. 417- 418.

⁴⁸⁶ *Ibíd.*, p. 418.

imaginario de la sociedad chilena. Otro elemento que favorecía la desconfianza de un posible cambio, fue la aparente recuperación de la crisis económica que en las primeras décadas de los ochenta, puso en jaque al hasta entonces exitoso modelo neoliberal. Esto debió al incremento sustancial del PIB, se percibió a partir de 1984, y que influyó en favor del régimen⁴⁸⁷. Por consiguiente, en 1987 y con la arremetida del control total del país, Pinochet comenzó la tarea de confirmar su continuidad política, ya que de acuerdo a la Constitución y a sus pronósticos, sería elegido a través de elecciones abiertas, cuestión que también desde el oficialismo daban por hecha.

Sin embargo, y de forma paralela, la visita del Papa Juan Pablo II en abril de ese año, otorgó un espacio para que los pobladores pudieran exponer sus demandas. Las pancartas con frases como “Gritemos la verdad al Papa. ¡En Chile se tortura!”, daban cuenta de los agitados días que vivía el país. Esta situación se puso de manifiesto cuando el Sumo Pontífice, visitó alguno de los sectores más pobres que Santiago, que coincidentemente eran los que sufrían con mayor énfasis la violencia del régimen, y donde escuchó los testimonios de víctimas, como Carmen Gloria Quintana, y de familiares de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en la voz de Sola Sierra, que entonces era su representante⁴⁸⁸. En consecuencia, tanto la preocupación por parte del régimen de otorgar un buen recibimiento al Papa, sumado al fervor

⁴⁸⁷ “El crecimiento del PIB de 5.6%, 6.6% y 7.3% entre 1984 y 1988, y que incluso llegó a la asombrosa cifra de 10.2% en 1989”. En Correa, S., (et. al.), *Historia del siglo XX*, op. cit., p. 334. Véase Meller, P., *Un siglo de economía política chilena (1880-1990)*, Santiago, Andrés Bello, 1996.

⁴⁸⁸ El 01 de abril de 1987, llega a Chile el Papa Juan Pablo II, quien permanece en el país durante seis días. Su visita da lugar a grandes manifestaciones de personas que acuden a verlo y a escuchar su mensaje. Pancartas con la frase “Gritemos la verdad al Papa. ¡En Chile se tortura! Daba cuenta de los agitados días que vivía el país. Esta fue además la oportunidad para que algunas personas dieran su testimonio de la situación chilena al Santo Padre. Fue el caso de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, cuando el Papa visitó la población La Bandera, uno de los lugares de Santiago más pobres y emblemática en la lucha contra la dictadura, La Bandera. En esa ocasión señaló “Conozco vuestros sufrimientos, y vuestro clamor de esperanza (...)”. El Sumo pontífice también dio muestra de su solidaridad con el pueblo de Chile, cuando se reunió con los jóvenes en el Estadio Nacional, el 02 de abril, en esa ocasión expresó: “Ahora, en este estadio, lugar de competencias, pero también de dolor y sufrimiento en épocas pasadas, quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos: ¡asumid vuestras responsabilidades!”. En “Seis discursos del Papa Juan Pablo II en Chile”, *Documentos, Revista de Estudios Públicos* nº 26, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1987.

que generó su visita en la sociedad chilena, llevaron a la disminución de las tensiones de la vida política oficial, transformándose casi en una tregua.

“Cuando el Papa abandonó el país, la Conferencia Episcopal declaró: La reconciliación exige justicia social. ¡Los pobres no pueden esperar!...hay estructuras que obstaculizan la reconciliación. Hay que poner fin a las odiosas discriminaciones que impiden la plena participación de todos los chilenos en la gestión del bien común. (...)Que las autoridades avancen decididamente en el deber patriótico de abrir prontamente las puertas a una verdadera democracia (...)”⁴⁸⁹

En definitiva, los sucesos anteriores al plebiscito de 1988, por un lado tuvieron que ver en la reorganización de los partidos políticos de oposición, debido a que varios de ellos se fraccionaron. Y por otro, convencer a la población de que participara de un proceso que a decir verdad, todos desconfiaban. Pese al adverso panorama, con iniciativa de la Democracia Cristiana (DC), se elaboró un itinerario para reorganizar a la oposición, con el objetivo de cambiar el plebiscito previsto para 1988, por el de «elecciones libres». Una de las primeras tareas, fue crear en marzo de 1987, el Comité por las Elecciones Libres (CEL), coordinada por Sergio Molina. A pesar de los problemas que tuvieron que resolver, para inscribir legalmente a sus partidos políticos en los registros electores, lograron cumplir con los requisitos que la ley imponía. Esta tarea era muy importante dentro del proceso, debido a que buscaba generar un cambio que permitiera llevar a elecciones libres, por ello, era fundamental contar el reconocimiento oficial de los partidos políticos. Este objetivo, permitió que confluyeran además de los propios partidos, la iglesia, y el PC, que si bien tenía aprehensiones con el procedimiento, apoyó junto al resto de los actores políticos, el llamado a la población para que se inscribiera

⁴⁸⁹ Camus Larenas, C., Obispo de Linares, “¿En qué consiste el Acuerdo?”, *Revista Hoy*, año IX, nº 426, p. 10. Citado por Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación política, 1932-1994*, Santiago, LOM, 2000, p. 479.

en los registros electores, que habían comenzado a funcionar desde febrero de 1987⁴⁹⁰.

Aunque el gran rechazo de la sociedad civil hacia el régimen, era evidente, hecho que se había comprobado en las jornadas de protesta, en que miles de personas y sus familias salieron a las calles a manifestarse contra la dictadura militar, esto no se demostraba en términos de adhesión cívica. Es decir, en un primer momento, no se observó la inscripción masiva de la población en los registros electorales. En consecuencia, esta fue una de las grandes preocupaciones de los partidos políticos de oposición.

“Después de aprobarse la ley 18.556, mientras los simpatizantes de la dictadura se inscribirían rápidamente para votar, los oponentes enfrentarían un problema de coordinación. Si se inscribían, estarían obligados a votar y, por lo tanto, legitimarían el proceso electoral. Si no lo hacían, no legitimarían el proceso pero la posibilidad de derrotar a Pinochet en el plebiscito sería mínima. Mientras para los simpatizantes de la dictadura siempre era más conveniente inscribirse, los opositores debían primero solucionar su problema de coordinación”⁴⁹¹.

Si bien la rearticulación de la oposición había generado nuevamente adhesión en la población, la idea de elecciones libres había sido desechada, por esta razón se concentraron en aunar fuerzas para afrontar el plebiscito. Fue así como los partidos políticos de oposición se organizaron en lo que se llamó «la Concertación de Partidos por el NO»⁴⁹², con Patricio Aylwin como vocero.

⁴⁹⁰ Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, n° 18.556, publicada en el Diario Oficial el 01/10/1986, y promulgada el 11/09/1986. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, *Historia de la Ley n° 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre el sistema de inscripciones electorales y servicio electoral*, Santiago, 01 de octubre de 1986, p. 365.

⁴⁹¹ Navia, P., “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, en *Revista de Ciencia Política*, Santiago, vol. 24, n° 1, 2004, p. 89.

⁴⁹² El 2 de febrero de 1988 en el Hotel Tupahue, firmaron el acuerdo 17 que diversos partidos políticos: Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Almeyda, Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero Campesino, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido Radical de Luis Fernando Luengo, Partido Radical de Enrique Silva Cimma, Izquierda Cristiana,

Esta fue una coalición de carácter político que aglutinó a los partidos de centro-izquierda, y en los que se marginaron los partidos de extrema izquierda. “Partía así la lucha de los demócratas chilenos para derrotar, en su propia institucionalidad, a la dictadura que encabezara Pinochet.”⁴⁹³ El gran despliegue que se implementó para la campaña por el No, significó a su vez, reunir hacia un mismo fin, a las diversas organizaciones sociales, además de los partidos políticos, cuestión que no siempre fue fácil. Por lo tanto, esto representaba un gran desafío, puesto lo que requería era “transformar la movilización social-capital opositor-, en movilización político-electoral para derrotar al régimen”⁴⁹⁴. En consecuencia lo que necesitaba era elaborar un marco general que garantizara la confianza del electorado.

“La Concertación por el No suplió la ausencia de programa con un enfoque optimista, una visión positiva de un futuro para todos los chilenos, un llamado a construir Chile entre todos. «La alegría ya viene», leitmotiv de su campaña, caló muy hondo en un país que sólo anhelaba paz, agotado por dos décadas de conflicto”⁴⁹⁵.

En cambio, plebiscito de 1988, desde la óptica del régimen militar se concebía como un momento formal de legitimación, como había sido ocho años antes, con la aprobación de la Constitución de 1980. Sin embargo, el proceso social había generado cambios ciertamente irreversibles. Las protestas nacionales de los primeros años de la década de los ochenta, habían sido la tierra fértil para la gran movilización nacional que no tenía marcha atrás. El plebiscito se conoció como del “Sí” o del “No”, y que significaba aprobar o rechazar la continuidad de Pinochet, pero ahora como presidente de Chile. El

Socialdemocracia, Partido Socialista de Núñez, Partido Democrático Nacional, Partido Humanista, Unión Socialista Popular y Unión Liberal Republicana. En las siguientes semanas se incorporaron el Partido Socialista sector de Manuel Mandujano y el Partido Socialista Histórico. Se marginaron el PC y el MIR, pese a ello, esta coalición se transformó en el organismo opositor al régimen, con un gran peso político y social. En Ortega Frei, E., *Historia de una Alianza*, Santiago, CESOC-DEC, 1992, p. 353. Podemos agregar que a propósito de esta campaña creó un partido de carácter instrumental, por parte de facciones en su mayoría del partido socialista, este fue el Partido Por la Democracia (PPD).

⁴⁹³ Aylwin Azócar, P., *El reencuentro de los Demócratas. Del Golpe al Triunfo del NO*, Santiago, Ediciones B, 1998, p. 323.

⁴⁹⁴ Vásquez, D., op. cit., p. 18.

⁴⁹⁵ Boeninger, E., op. cit., p. 342.

despliegue de la campaña fue diverso. En ella, se usó de todo tipo de estrategias publicitarias para informar a la población respecto a las ventajas y desventajas de votar por cada opción, así como también, sobre la importancia de inscribirse en los registros electores.

La tarea de informar a la población chilena, mayor de 18 años, de que acudiera a los registros electores a inscribirse, fue uno de los objetivos centrales del documento fundacional de la *Concertación por el No*, ya que sin esta acción, era prácticamente imposible que la opción del No, contraria al régimen pudiera ganar. Aunque existía “un fuerte rechazo popular al régimen, a las desigualdades originadas por las políticas económicas, a la falta de libertad, a los atropellos a los derechos humanos, no se transformaban en voluntad de acción política”⁴⁹⁶. Sin embargo, la dificultad con la que se encontraba la oposición, tenía argumentos de peso para que la sociedad chilena, estuviera escéptica frente a los futuros comicios.

“En suma, la historia de la «transición», o si se quiere de una «normalidad» tutelada por los militares, es la historia de cómo las Fuerzas Armadas dictan los términos de una nueva institucionalidad que se crea a partir de 1973, y cómo Pinochet, en tanto “líder natural” de las fuerzas castrenses, se va erigiendo en pieza clave e intocable de ese nuevo orden instituido, lo anterior suscrito a regañadientes o no por todas las fuerzas políticas que han gobernado el país”⁴⁹⁷.

Elementos como la vigencia del estado de excepción, en plena víspera de los pactos y acuerdos políticos que conducían al plebiscito. La violenta represión de cualquier manifestación contraria al régimen. La constante represión a la que se veían expuestos los medios de comunicación de oposición. Y la campaña publicitaria de desprestigio que mantenía el régimen, respecto a la oposición, conducían a observar este proceso con gran sospecha

⁴⁹⁶ *Revista Proposiciones* n° 16, Editorial, Santiago, Ediciones SUR, 1998, p. 8.

⁴⁹⁷ Boeninger, E., op. cit., p. 323.

e incredulidad, situación que se comprobaba, al no existir un cronograma con información específica sobre el proceso para llevar a cabo el plebiscito.

En consecuencia, el contexto en que se desarrolló el plebiscito permite advertir que había resistencias que inhibían la participación ciudadana. En un pequeño artículo del mismo 1988, del sociólogo Eugenio Tironi, se preguntaba sobre cuáles de aquellos elementos que llevaban a presentar cierto escepticismo en la sociedad chilena, y que se transformaban en barreras que inhibían la participación en el proceso. El autor, identificaba cuatro grandes resistencias: Por una parte, el miedo que dominaba las conductas de los chilenos, producto de la propia inseguridad debido a las precarias condiciones económicas, y el recuerdo latente del Golpe de Estado, junto a la violencia del régimen. Por otro, influía la frustración que se manifestaba en el descontento generalizado y en diversas dimensiones, respecto a la situación que estaba viviendo el país. Un tercer elemento era la humillación de la población, y que a juicio del autor, era experimentado sobre todo por los grupos más pobres y por tanto vulnerables de la sociedad. Así también, identificaba la impotencia y desconfianza de la sociedad, que vinculado al miedo, producto de los abusos por parte de los militares, frente a los cuales no se podía reclamar o denunciar, puesto que en sí mismo era peligroso y podía traer represalias. Con estos argumentos, Tironi situaba las esperanzas y la importancia que tenía el plebiscito por el No, y llamaba a su vez, a la población a inscribirse para poder votar en contra del régimen.

Si bien, el plebiscito de 1988, fue un evento fijado por la propia Constitución⁴⁹⁸, al pasar los meses, se transformó en la oportunidad de revertir

⁴⁹⁸ El sistema actual de votación obligatoria e inscripción voluntaria parece haber respondido al interés de la dictadura por crear un sistema que incentivara a sus simpatizantes a inscribirse para votar en el plebiscito de 1988 y a la vez desincentivara a muchos opositores a hacerlo. Aunque la Constitución de 1980 establece la obligatoriedad del voto (artículo 15), cuando se adoptó la Ley Orgánica Constitucional nº 18.556 del Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral el 1 de octubre de 1986, no se estableció la obligatoriedad de la inscripción electoral (artículo 35, ley nº 18.556), creando así la inusual combinación de inscripción voluntaria y votación obligatoria. En la ley no se establecieron penas ni multas a los que no se inscribieran. Los chilenos podían optar simplemente por no inscribirse para votar y evitar ser sujetos a las sanciones que sí reciben aquellos que, estando inscritos, deciden no ir a votar. Ya que uno sólo precisa inscribirse para votar una vez en la vida (aunque supuestamente se

esta situación a pesar de lo difícil que habían sido los años previos. Como hemos visto, ello permitió que se propagara en la población el miedo y la desconfianza, respecto al plebiscito, debido al recuerdo de lo que había sido el anterior, ocho años antes. Estos elementos, junto al recuerdo latente del Golpe de Estado, que por cierto, desde el oficialismo se esmeraban en rememorar, habían sembrado un fértil terreno para que la población considerara este derecho, como mero trámite, de la misma forma como lo entendía el propio régimen, situación que le permitiría a Pinochet, permanecer al frente de la dirección del país hasta 1997.

A pesar de aquellas trabas que evidentemente existieron, la campaña política que realizó la oposición, destacó por su creatividad, junto al gran nivel comunicacional y al asesoramiento de entidades vinculadas a los derechos humanos extranjeras. Además, reunió en un mismo formato, a destacados artistas, intelectuales, académicos, pobladores, trabajadores de diversas profesiones y oficios, así como dueñas de casa. Sin embargo, lo que más expectación generó, fue la incorporación de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de violación de derechos humanos. Esta fue la primera vez, en que se mostró públicamente al país, a través de la televisión, y más aún, de una franja política, testimonios e imágenes de aquello que gran parte de la población había experimentado, pero que era duramente reprimido y silenciado por el régimen: la violencia, las detenciones, los secuestros, la tortura, muerte y desaparición de cientos de personas. Es interesante en este aspecto, dar cuenta del impacto que provocó en la población, la campaña por el No, puesto que se difundieron muchas de las agresiones que hasta ese momento había experimentado gran parte del pueblo chileno. Todo dentro de los marcos que exigía la Ley, para que no se tildara de extremista o conspiradora. “La franja política comenzaba con “de acuerdo a la ley le corresponde usar su tiempo a la opción No, lo que contribuyó también a que

debería informar al Servicio Electoral cada cambio de domicilio), la legislación actual permite la existencia de dos tipos de ciudadanos, aquellos que están inscritos y por lo tanto están obligados a votar y aquellos que no estando inscritos no pueden ejercer su derecho al sufragio. En Navia, P., op. cit., p. 89.

ésta fuera percibida como democrática y tranquilizadora”⁴⁹⁹. Por su parte, la campaña diseñada por los partidarios del régimen, subrayaba la tarea de los militares de haber salvado al país del marxismo, y de la supuesta guerra civil a que estaba destinado Chile⁵⁰⁰.

Manuel Antonio Garretón señala que la Concertación, logró incorporar dos elementos en la opinión mayoritaria del país “el anhelo de cambio político realizado en tranquilidad y orden”⁵⁰¹. En definitiva, el 5 de octubre de 1988, fue sin lugar a dudas uno de los días decisivos dentro de la historia del tiempo presente de Chile, puesto que luego quince años, la población chilena volvía a las urnas para ejercer su derecho ciudadano, en un procedimiento en que los actores políticos, y más aun la oposición, velaba por la transparencia. El despliegue de «educación cívica» que realizó la Concertación se focalizó en promover la inscripción en los registros electores, y enseñar a los mayores de 18 años a votar, ya que era una práctica olvidada para algunos, debido a que había pasado más de una década en que la ciudadanía estaba imposibilitada de ejercer este derecho, y nueva para muchos jóvenes chilenos que accedían a inscribirse en los registros electorales. Por tanto, existió un gran operativo tanto en la franja electoral, como en el ejercicio de voluntarios que iban a las diversas poblaciones y realizaban simulacros de votación, donde se disipaban dudas, frente a cómo votar, y se instruía sobre la correcta forma de ejercer su derecho ciudadano, acción que fue de gran importancia, sobre todo en los sectores populares, maltratados por el régimen militar. Sin duda, este esfuerzo tuvo su

⁴⁹⁹ Soto, A., *El Mercurio y la difusión del pensamiento político-económico-liberal, 1955-1970*, Santiago, Instituto Libertad, 1995, p. 102. Citado por Boeninger, E., op. cit., p. 343.

⁵⁰⁰ Véase Tironi, E., *La invisible victoria (los chilenos y el plebiscito)*, Santiago, Ediciones Sur, 1988. Vergara, C., *¿Quiénes decidirán en el plebiscito? Un análisis de la constitución del cuerpo electoral*, Santiago, Ediciones Sur, 1988. Auth, J., *Esperando a la Esperanza: Los jóvenes y el plebiscito*, Santiago, Ediciones Sur, 1988; *Plebiscito y Elecciones*, *Revista Proposiciones*, nº 16, Santiago, Ediciones Sur, 1988. *La transición chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial en Chile de 1988*, Massachusetts, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, 1989. Chateau, J., Rojas, J., *Antecedentes electorales vol. I. Informe sobre población, electores y resultados del plebiscito de 1988*, Documento de Trabajo, Santiago, FLACSO, 1989. Gutiérrez, H., *Chile 1989: ¿Elecciones Fundacionales?*, Serie de Estudios de Estudios Políticos, nº 3, Santiago, FLACSO, 1990. Engel, E., “Evolución del comportamiento electoral desde el plebiscito a la elección presidencial”, *Colección de Estudios CIEPLAN*, nº 28, Santiago, 1990. Navia, P., “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, en *Revista de Ciencia Política*, volumen 24, nº 1, Santiago, 2004.

⁵⁰¹ Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 422.

recompensa, ya que la noche del 5 de octubre, en medio de una gran expectación nacional e internacional, los votos escrutados indicaron el triunfo del No, con un 54.6%, y la derrota del Sí oficialista con un 43, 04%⁵⁰². Sin duda, estos resultados respondieron también al arduo trabajo por parte de los partidos políticos de oposición, que lograron coincidir en una propuesta que tenía por objetivo, devolver la democracia a Chile, asumiendo la gran responsabilidad de terminar con la dictadura militar a través de la vía electoral.

Luego del plebiscito y el triunfo de la oposición, se debían preparar para las elecciones presidenciales y parlamentarias que estaban fijadas para diciembre de 1989. Por esta razón, el nuevo desafío al que se vio enfrentada la Concertación fue mantener la unidad que habían logrado en la campaña del NO. La responsabilidad que tenían ahora era la “de consensuar candidato, coalición, pacto parlamentario y programa, además de negociar un conjunto de reformas constitucionales con el gobierno militar”⁵⁰³. La primera tarea fue transformarse en Concertación de Partidos por la Democracia, en el que se incorporaron todos los partidos y grupos que habían participado en la campaña del NO. Fue una coalición política, que tenía como compromiso presentar un único candidato para las elecciones presidenciales, que llevarían a retomar la vida democrática del país. Aunque en la elección del candidato existieron disputas, estas se resolvieron a través de la aplicación de mecanismos democráticos dentro de la Concertación, que por cierto, no estuvieron exentos de tensiones. La tareas que tuvo que resolver la coalición de cara al próximo escenario político, fueron amplias y diversas, que partían con la designación del candidato, pasando por determinar quienes formarían la coalición del futuro gobierno. A su vez, se debía elaborar un programa de gobierno, y diagramar los diversos pactos para las elecciones parlamentarias que también se realizaban en 1989. Por último, se necesitaba precisar en las reformas a la Constitución que se habían solicitado ese año al régimen.

⁵⁰² Correa, S., (et. al.), *Historia del siglo XX chileno*, op. cit., p. 336. Sin embargo, Manuel Antonio Garretón señala: “43, 01% por el SI a Pinochet y un 54,72% por el NO, con una inscripción de más del 90% y una abstención de 2, 39%, estas dos últimas cifras records en la historia del país”. Véase Garretón, M. A., “La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, op. cit., p. 428.

⁵⁰³ Vásquez, D., op. cit., p.11.

Luego de las elecciones de octubre de 1988, desde el gobierno, a través del Ministro del Interior Carlos Cáceres, se expuso la necesidad de “abrirse a un diálogo con la Concertación para concordar un conjunto mínimo de reformas a la Constitución a cambio de que la Concertación aceptara dicho texto como Carta Fundamental que había de regir a Chile en su nueva etapa democrática”⁵⁰⁴. Este acuerdo de reformas a la Constitución, aprobado en julio de 1989, se efectuó entre el Ministro Cáceres, la Concertación, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente de derecha. Y tuvo como objetivo, dejar atado aquellos elementos que permitieran la vigencia del modelo de democracia protegida.

“Como faltaban meses para la reapertura del Congreso Nacional, fue la Junta Militar la encargada de hacer los cambios al texto tras un plebiscito realizado el 30 de julio de 1989 y que apoyó el proyecto con un 85,7% de aprobación.

En esa oportunidad se hicieron 54 reformas a la Constitución, orientadas principalmente a establecer el pluralismo político, aumentar el número de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, dar mayor relevancia a los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico del país, limitar el poder del Ejecutivo sobre algunas libertades personales y definir en cuatro años el período presidencial de quien resultara electo en los comicios de diciembre de 1989”⁵⁰⁵.

Si bien estas reformas permitieron realizar importantes modificaciones, como la derogación del artículo 8º, que prohibía la existencia de partidos políticos que promovieran la lucha de clases⁵⁰⁶. O bien, la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al ordenamiento

⁵⁰⁴ Boeninger, E., op. cit., p. 348.

⁵⁰⁵ *Las reformas a la Constitución de 1980*, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

⁵⁰⁶ El derogado Artículo 8º de la Constitución política de Chile de 1980, señalaba “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”. Texto completo en anexo nº 2.

constitucional, significó un gran avance. Sin embargo, lo que quedó pendiente, fueron los temas relacionados directamente con las Fuerzas Armadas. Esto generó gran preocupación dentro de la oposición, debido al gran poder que demostraban las Fuerzas Armadas en las decisiones políticas. Denominados como «enclaves autoritarios», fueron aquellos temas que no se resolvieron en las reformas, que persistieron durante gran parte de los llamados “gobiernos de la transición”, y que estaban relacionados con: la duración en sus cargos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el rol del Consejo de Seguridad Nacional, el sistema electoral, y los senadores designados. A juicio de Boeninger: “El factor crucial en la aprobación unánime por la Concertación del paquete plebiscitado, fue la convicción de que lo fundamental era asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente transferencia del poder”⁵⁰⁷.

Respecto a la elección del candidato para representar a la coalición, si bien, se propusieron candidatos que habían tenido una destacada participación en el proceso previo al plebiscito de 1988, como Gabriel Valdés, que había sido líder de la primera etapa de movilización social y de la Alianza Democrática, Andrés Zaldívar, que se había transformado en un férreo representante de la resistencia en el exilio, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con gran proyección política. Sin embargo, y pese a la importancia de estos políticos, fue elegido como líder indiscutible Patricio Aylwin Azócar, debido sobre todo al liderazgo alcanzado como vocero en la campaña del No. Aunque las elecciones parlamentarias, fueron complejas debido al sistema binominal imperante, se elaboró un “engorroso trabajo de “ingeniería electoral”, que finalmente permitió a la Concertación ganar en la Cámara y el Senado, aunque en esta última el triunfo en las urnas no se veía reflejado en la correlación de fuerzas dados los senadores institucionales, uno de los “enclaves” autoritarios heredados”⁵⁰⁸.

En las primeras elecciones democráticas a la presidencia, luego de dieciséis años de dictadura militar. Cuatro fueron los candidatos, Patricio Aylwin

⁵⁰⁷ Boeninger, E., op. cit., p. 364.

⁵⁰⁸ Vásquez, D., op. cit., p. 22.

Azócar, DC, que representaba a la Concertación de Partidos por la Democracia, Hernán Büchi, ex Ministro de Hacienda, y Francisco Javier Errázuriz, candidato independiente, Aylwin ganó las elecciones con el 55,17% de los votos, siendo elegido primer presidente de la transición en Chile, asumiendo el poder el 11 de marzo de 1990 por un período de cuatro años⁵⁰⁹.

El gobierno de Patricio Aylwin Azócar, cuya frase «justicia en la medida de lo posible», caracterizó su mandato que estuvo más centrado en las alianzas y pactos, que en adoptar políticas decisivas frente a temas de la magnitud de la violación de derechos humanos. No obstante, como hemos apreciado de manera general en estas páginas, la gestación del proceso transicional chileno, fue difícil, ya que contó con la figura latente del general Pinochet. Por ello, este tránsito hacia una democracia pactada es un período interesante de examinar, no sólo desde el ámbito político, sino también desde propuestas interdisciplinarias que ofrecen otros enfoques, y que enriquecen el análisis de este proceso.

3.3.- Los debates sobre la transición política en Chile

Cuando se abordan los temas referidos a las transiciones políticas, advertimos los diferentes enfoques que existen para analizar estos procesos políticos. En el caso de Chile, así como en otras experiencias transicionales, el debate adquiere gran relevancia, por cuanto el proceso se realiza con Pinochet participando de forma cautelosa del proceso. Por consiguiente, este período en Chile, tiene varias entradas de análisis que están asociados a la periodización de la transición, a sus características y al ámbito de verdad y justicia. Para las agrupaciones de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos, la transición que comenzó con el triunfo del No en octubre de 1988, terminará sólo cuando se resuelvan los temas pendientes de derechos humanos, es decir, cuando se

⁵⁰⁹ De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio del Interior, para las elecciones de 1989 de un total de 6.979.859 votos válidamente emitidos, los resultados fueron: Hernán Büchi Buc, 2.052.116 votos, con un 29,40%; Francisco Javier Errázuriz Talavera, 1.077.172 votos válidos, que equivale a un 15,43%, Patricio Aylwin Azócar, 3.850.571 votos, con un 55,17%. En TRICEL, disponible en, <http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/index1989_pres.htm>. [Consultado en octubre de 2011].

aclare el paradero de los detenidos desaparecidos, se realicen juicios y se castigue a los responsables. Si bien, es lo que todo estado derecho anhela a realizar, en este caso, la resolución de estos temas, contiene una gran dificultad, no sólo por lo que implica la ubicación de las víctimas desaparecidas, sino por la forma en que se desarrolló el proceso, es decir, con las Fuerzas Armadas como activos participantes.

“La transición a la democracia en Chile posee una serie de características que la hacen difícilmente comparable con otros procesos similares. La más importante fue la presencia del dictador como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta presencia determinó la actuación de los Gobiernos que, pese a sus esfuerzos, se vieron condicionados, y en algunos momentos humillados por la actuación del ejército”⁵¹⁰.

En estos análisis también coinciden historiadores, sociólogos y politólogos, quienes señalan tanto la complejidad del proceso como las particularidades en el que se desarrolla, y donde influyen elementos vinculados a las características de la propia sociedad. Carlos Huneeus, explica que si bien la dictadura militar se caracterizó, por el bajo nivel de institucionalización y la alta personalización del poder, correspondió a la incipiente democracia, asumir el proceso de institucionalización, permitiendo por tanto, el desarrollo de tareas necesarias para el tránsito de un gobierno autoritario a uno democrático. Asimismo, se advierte un fructífero debate sobre la periodización de la transición chilena, el sociólogo Manuel Antonio Garretón señala que:

“El 11 de marzo de 1990, con la inauguración del gobierno de Patricio Aylwin, terminó la transición chilena desde un régimen militar a uno democrático, que se había iniciado el 5 de octubre de 1988 con la derrota del General Pinochet en el plebiscito

⁵¹⁰ Soto Carmona, A. (et. al.), “Transición a la Democracia en Chile y Derechos Humanos: Una revisión del Informe Rettig”, en *Historia del Presente*, nº 12, Bautista, J., Mateos, A., (ed.), Madrid, Eneida, 2008, p. 75.

convocado para perpetuar su régimen autoritario y mantenerse en el poder por ocho años más”⁵¹¹.

Esta argumentación también es compartida por el propio Patricio Aylwin, cuestión que puso de manifiesto en el discurso que pronunció en el inicio de la Legislatura Ordinaria en el Congreso Nacional:

“[...] hace algún tiempo, que considero concluida la etapa de «transición a la democracia». La frase mereció críticas, especialmente a muchos de mis propios partidarios, y ha dado origen a sesudas disquisiciones. No me arrepiento de haberla dicho, porque es lo que realmente pienso. No es que yo crea que nuestra democracia sea perfecta, ni que me haya olvidado de las reformas que nos comprometimos a hacer para perfeccionarla. Es que jamás dijimos que todo nuestro Programa de Gobierno fuera cosa de transición.

La transición era el paso del gobierno autoritario al régimen democrático, del Estado Policial al Estado de Derecho, del abuso de poder a la vigencia de las libertades, del insulto y persecución al disidente al respeto al adversario y a su derecho a ser oposición, de los medios de comunicación agentes de propaganda oficialista a la libertad de información y de opinión, de la convivencia fundada en la fuerza y el temor a la convivencia pacífica”⁵¹².

Álvaro Soto por su parte, sostiene que la transición chilena se inició el 5 de octubre de 1988, con el plebiscito donde más del 55% de la población votó en contra de la dictadura de Pinochet. A su juicio, el proceso terminó con el

⁵¹¹ Garretón, M. A., *La transición chilena. Una evaluación provisoria*. Documento de Trabajo. Serie de estudios políticos, Santiago, FLACSO, 1991, p.1.

⁵¹² *Discurso de Patricio Aylwin Azócar*, en el inicio de la Legislatura Ordinaria del Congreso Nacional, Valparaíso, 21 de mayo de 1992, Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Santiago, Antártica, mayo 1992, p. VI. Disponible en, <http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1992.pdf>.[Consultado en septiembre de 2011].

arresto de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. Para argumentar esta secuencia de inicio y término de la transición chilena, señala que “el criterio que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer la cronología en los procesos de transición, es la persistencia o no de incertidumbres sobre el sistema político”⁵¹³. Subraya que este proceso en Chile, se realizó bajo la sombra del dictador, a diferencia por ejemplo, del caso español, donde la transición se llevó a efecto una vez que Franco había fallecido.

“La gran incertidumbre sobre el proceso de transición en Chile, fue la presencia del general Pinochet, primero como presidente de la República, hasta el 11 de marzo de 1990 (fecha de la toma de posesión de Patricio Aylwin como nuevo presidente), luego como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desde ese día hasta el 10 de marzo de 1998 y, por último, como senador vitalicio”⁵¹⁴.

Por su parte, el cientista político Carlos Huneeus coincide con estos autores, desde la perspectiva de que la transición chilena se realizó a través de la reforma y no por ruptura con el régimen anterior. Esto se debió a los diversos aparatos institucionales que estableció la Constitución de 1980, y en la que se instauraba la continuidad del régimen. “La estrategia de cambio de régimen, (...) fue más bien una entrega de poder y no una caída del poder de los militares”⁵¹⁵. Además, indica que existe una imprecisión respecto a la fecha en que finaliza la transición, cuestión que se asocia al período en que está consolidada la democracia. Desde esta perspectiva, señala que “no hay un momento concreto en el que termina una fase y comienza la otra, la diferencia entre las etapas radica en las distintas tareas que hay que realizar en cada una”⁵¹⁶. Y en consecuencia, la política del consenso es fundamental para llevar adelante las tareas que requiere el proceso de redemocratización, entre ellas, el establecimiento de las instituciones democráticas, y la convivencia

⁵¹³ Soto Carmona, A. “Transición a la Democracia en Chile...”, op. cit., pp. 75-76.

⁵¹⁴ *Ibíd.*

⁵¹⁵ Huneeus, C., “La transición ha terminado”, en *Revista Ciencia Política*, vol. XVI, nº 1-2, Santiago, PUC, 1994, p. 35.

⁵¹⁶ *Ibíd.*

ciudadana. Huneeus, advierte que la política del consenso, no implica necesariamente que todos los temas pendientes en el proceso ingresen en ese momento, así como, que este tipo de políticas no evite tensiones en esta materia. A su juicio, las políticas del consenso, permiten la existencia de “mejores condiciones para encarar esas dificultades, pues hay una mayor cohesión política de la democracia, producto de una disminución de las zonas de tensión y división”⁵¹⁷. Sostiene que el problema en Chile, no ha sido cuándo terminó la transición, sino más bien, en qué momento finalizó la política de los consensos. Para argumentar este problema, advierte que, al declarar que la transición está finalizada y por tanto, que la política del consenso no continúa, no se debe desconocer la existencia de problemas institucionales que es necesario resolver y perfeccionar.

“Cuando el Presidente Aylwin señaló que la transición había terminado no cometió una herejía académica, sino hizo una declaración de voluntad política, para reconocer que la etapa de la emergencia estaba superada y que el país debía acometer la solución de los problemas concretos que afectaban a la inmensa mayoría de los chilenos. Más que dar por cancelada una etapa, estaba con ello reorientando la acción política hacia los temas sustantivos que afectan a las democracias”⁵¹⁸.

Por otra parte, algunos historiadores conservadores como Álvaro Góngora, señalan que la transición en Chile, comenzó con el Golpe Militar, debido a que esta acción se le adjudica razones de orden fundacional referidas al inicio de una nueva etapa.

“Ello porque la democracia fundada con la Constitución de 1925 había mostrado, promediando el siglo, síntomas de crisis severa, y el año 73 ocurre el colapso de esa democracia. Al Golpe se le

⁵¹⁷ Ibid., p. 36.

⁵¹⁸ Ibid., p. 38.

asignan, aquí, razones fundantes: iniciaría una nueva etapa, donde se programa una salida hacia la democracia”⁵¹⁹.

El planteamiento de Góngora, resulta contradictorio puesto que se puede objetar considerando que se entiende a los procesos transicionales como el tránsito desde regímenes autoritarios hacia otros democráticos. Aunque el autor, coincide con este planteamiento, argumenta que “no se reconoce en el gobierno de Allende una democracia y, a partir de ahí, se postula que el Golpe es un punto de inflexión. Pinochet siempre creyó que el país no estaba en democracia”⁵²⁰. En esta misma línea el historiador liberal, Alfredo Jocelyn Holt, precisa aún más, indicando que la transición en Chile se inició con «El discurso de Chacarillas», donde se diagrama la ruta del proceso transicional, y desde esta perspectiva, los gobiernos de la transición habrían seguido el guión instaurado por el régimen. A su juicio la clave se encuentra en cómo se utiliza el término «transición». A esto respecto señala que el texto de Chacarillas resulta notable, ya que en él este concepto está claramente enunciado, señalando lo contradictorio que resulta su utilización en este contexto. “El período final es la normalidad; y en la normalidad gobernarían “básicamente” los civiles, pero en una institucionalidad en que los militares, a la vez, serían “garantes de la institucionalidad”, y esto es el principio fundamental de la Constitución de 1980”⁵²¹.

En esta idea también coincide Góngora, señalando que en el citado texto, se presentan las que serían las etapas de la Transición:

“La primera, es de recuperación del poder político, que se hace con las Fuerzas Armadas y civiles, porque la democracia anterior había devenido en caos y el marxismo había sido el causante de

⁵¹⁹ Góngora, A., “Introducción a la Transición chilena”, en De Mussy, A., Yávar, A. (comps.), *Cuadernos de Trabajo. Seminario, Transiciones Políticas Comparadas: España y Chile. Temas, fuentes y mitologías*, Santiago, CIDOC, UFT, 2009, p. 69.

⁵²⁰ *Ibíd.*, p. 74.

⁵²¹ Jocelyn Holt, A., “La Transición chilena”, en De Mussy, A., Yávar, A. (comps.), *op. cit.*, p. 77. Véase Jocelyn Holt, A., *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, Planeta/Ariel, 1998.

esta crisis definitiva. Tras esta actitud refundacional vendría una etapa de Transición, con participación de los civiles. Finalmente la Consolidación, donde el poder sería asumido por la civilidad y las Fuerzas Armadas serían las garantes y custodias del proceso: básicamente, la democracia protegida”⁵²².

Además en este discurso se enfatiza las causas que a juicio del régimen, llevaron al fracaso del régimen político anterior. Es más, en la exposición de Chacarillas, se afirmó en relación con la Constitución de 1925, que si bien continuaba vigente, se encontraba en claro retroceso. Situación que ayudaba para argumentar la necesidad de “completar las Actas Constitucionales y leyes de rango constitucional, todo esto antes del 31 de agosto de 1980”⁵²³, puesto que de acuerdo al diseño trazado meses más tarde, la transición debía coincidir con la puesta en marcha de todas las instituciones que las actas contemplaban. Por consiguiente, y como ya lo hemos expuesto, la importancia del texto pronunciado por Pinochet en Chacarillas es fundamental, para comprender el diseño de la política del régimen militar.

En ello también se debe considerar la dinámica histórica que da cuenta del tiempo en que se elaboró el texto, ya que tiene que ver con la etapa más radical de la dictadura (1973-1977). En este período estaba en pleno funcionamiento la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta del régimen, y que operaba a través de centros clandestinos de tortura. En los que se encontraban Londres 38, Villa Grimaldi, La venda Sexy, y José Domingo Cañas, ubicados en Santiago, y que son materia de estudio en nuestra investigación. En consecuencia, la violencia que se estaba llevando a cabo sobre la sociedad chilena, era brutal. Es decir, mientras Pinochet y los miembros de la Junta Militar, se enarbolaban con discursos frente jóvenes chilenos partidarios del régimen, el 09 de julio de 1977, donde se resaltaba el orgullo y deber que tenían con la patria, gran parte de la población estaba

⁵²² Góngora, A., op. cit., p. 69. Véase en anexo Discurso de Chacarillas.

⁵²³ Correa, S., (et. al.), *Historia del siglo XX chileno*, op. cit., p. 321.

siendo arrestada, torturada y asesinada, generando todo tipo de martirios y padecimientos.

“Mi espíritu de Presidente de la República se llena de justificada esperanza, al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile”⁵²⁴.

Si bien el texto de Chacarillas, fija las etapas para llegar de manera gradual a la «nueva democracia», subraya la idea de crear una nueva época, y desde esta perspectiva señala que:

“Es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó sólo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo.

No se trata pues de una tarea de mera restauración sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional”⁵²⁵.

Paradójicamente, este documento se refiere al concepto de «transición», generando una contradicción en la naturaleza del propio concepto. Deja claro, a su vez, que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas las encargadas de conducir el proceso final, cautelando la institucionalidad de forma permanente. “En definitiva, le correspondería al régimen sancionar tanto la transición como

⁵²⁴ Discurso del General Augusto Pinochet en cerro Chacarillas, con ocasión del Día de la Juventud, Santiago, 09 de julio de 1977.

Disponible en,

<http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0003.pdf>.

[Consultado en octubre de 2011].

⁵²⁵ *Discurso de Chacarillas*, p. 3.

la normalidad, cualquiera que fueran sus respectivas naturalezas”⁵²⁶. Asimismo, se puede advertir, que esta idea de transición cuyos inicios se sitúan antes del plebiscito de 1988, también se observa en aquellos que plantean a la Constitución de 1980 como iniciadora del proceso. En este contexto, el historiador Ricardo Krebs señala, que lo que habría realizado el régimen de Pinochet, es “cumplir el itinerario constitucional que fue aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de 1980”⁵²⁷. La idea de que la instalación de la democracia protegida y tutelada, es a partir de las directrices que se diseñaron en la Constitución, es respaldada por la comunidad científica, que coinciden además en la idea de «continuidad», durante la transición política, y donde al parecer, no se observan cambios relevantes. En esta línea de prolongación institucional, se observan los llamados «enclaves autoritarios» o «leyes de amarre» -siguiendo a Luis Maira-, que persistieron durante gran parte del proceso transicional, y que tenían como característica fundamental, otorgar garantías a los sectores militares en el momento de cambio de gobierno. Otros autores, se refieren al conocido consenso que se gesta entre oposición y régimen dictatorial, cuyo trasfondo fue:

“Institucionalizar el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, y que los sectores que eventualmente entraron a compartir el poder, o, para ser más precisos, cogobernar con éstas después de 1989 debieron atenerse estrictamente a los condicionamientos forzosos que exigiera el gobierno militar a fin de permitirles, y sólo bajo esas restricciones, acceder a la primera línea de autoridad y liderar la siguiente fase”⁵²⁸.

Así también, desde la ciencia política, se observa cierta coincidencia en situar el inicio de la transición chilena en la década de los ochenta. Sin duda, la gestación está ahí, sin embargo, se advierten ciertos matices al momento de sentar mayores precisiones temporales, lo que evidencia la complejidad del

⁵²⁶ Correa, S., (et. Al.), *Historia del siglo XX chileno*, op. cit., p. 322.

⁵²⁷ Cruz, N., y Whipple, P., *Nueva Historia de Chile: Desde los orígenes hasta nuestros días*, Santiago, Zig Zag, PUC, 1996.

⁵²⁸ Correa S., (et. al.), *Historia del siglo XX chileno*, op. cit., p. 331.

proceso. En suma, lo que queda de manifiesto, es que en la década de los ochenta es donde se observa una apertura del régimen militar, que no es gratuita, puesto que es producto de la gran movilización popular que se genera en los primeros años de la década, y a pesar de que es duramente reprimida, fue el caldo de cultivo que permitió un cambio en los actores políticos.

Carlos Huneeus señala que, “la transición se inicia en la década de los 80’ con las múltiples estrategias de la oposición al régimen para obtener el retorno a la democracia”⁵²⁹. Similar es la conclusión a la que llega Eduardo Boeninger al manifestar que, “la transición en Chile es pactada y se inicia con una serie de acuerdos en la década de los 80’, para completarse totalmente bajo el gobierno de Patricio Aylwin, aunque es necesario seguir perfeccionando el sistema”⁵³⁰. Por otra parte, la crónica periodística también otorga precisiones, Ascanio Cavallo en su conocido libro *Historia oculta de la Transición chilena*, señala que, “desde 1990 se inicia una serie de negociaciones entre la Concertación y ex funcionarios del régimen militar para consolidar la transición”⁵³¹. Otros citan la conocida reunión en el Hotel Tupahue, en 1984 donde “Patricio Aylwin expuso la tesis para eludir el tema de la legitimidad de la Constitución de 1980, para aunar consenso dentro de la oposición y crear una estrategia para afrontar el plebiscito de 1988”⁵³².

Lo interesante de estos planteamientos, es la coincidencia en los tópicos sobre los cuales se construye la transición chilena, esto es, por una parte, que se continúa el itinerario diseñado tempranamente en el Discurso de Chacarillas, para luego seguir con el guión constitucional aprobado mediante el plebiscito de 1980, y por otra, la continuación de las garantías para los personeros de la dictadura militar. “El 30 de agosto de 1988, la Junta de Gobierno designó a Augusto como candidato, convocándose el plebiscito para el 05 de octubre y

⁵²⁹ Huneeus, C., “La transición ha terminado”, op. cit., p. 36.

⁵³⁰ Boeninger, E., op. cit., p. 298.

⁵³¹ Cavallo, A., *La historia oculta de la transición chilena. Memoria de una Época, 1990-1998*, Santiago, Grijalbo, 1998, p.24.

⁵³² Otano, R., *Nueva crónica de la Transición*, Santiago, LOM, 2006, p. 86.

derogándose el “Estado de Excepción”⁵³³. Sin embargo, el punto de inflexión fueron los resultados del plebiscito, que esto no estaba contemplados por el régimen. Sin duda, este hecho marcó de forma definitiva el término de la dictadura de manera formal, es decir, cerraba la posibilidad de que Pinochet fuera elegido como presidente. Sin embargo, debido a lo establecido por la Constitución vigente, los militares seguirían gozando de las garantías que permitía dicha Carta Fundamental, y este sería sin duda el talón de Aquiles del proceso democrático chileno.

3.4.- Los gobiernos de la transición en Chile y las políticas de la memoria.

“Hemos dicho que Chile es, desde el 5 de octubre, un país distinto.

Tal vez, lo más notable es el nuevo espíritu que se advierte en la convivencia social, manifestado especialmente en la forma admirable en que el pueblo celebró su alegría sin desmanes ni excesos de ninguna clase”⁵³⁴.

El triunfo del No, significó entre otros, la reconstrucción democrática de Chile. A partir del 5 de octubre de 1988, se han podido realizar elecciones presidenciales y parlamentarias de forma periódica, y a su vez se ha debido hacer frente a los problemas pendientes dejados por la dictadura militar, entre ellos, el tema de los derechos humanos. El 22 de octubre de ese año, y ante la junta del partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin realizaba una cuenta de del camino emprendido que había permitido culminar con la victoria del NO. Fruto de una estrategia que se puso en práctica a partir de la decisión de enfrentar al régimen por vía electoral. Asimismo afirmaba que: “En medio del odio y la violencia, tienden a prevalecer la dignidad personal, el respeto mutuo y la dignidad personal”. En este clima, la Concertación logró llevar a la presidencia cuatro gobiernos de forma ininterrumpida: Patricio Aylwin Azócar

⁵³³ Soto, A., “La larga sombra del dictador”, en *Stockholm Review of Latin American Studies*, nº 5, september, 2009, p. 7

⁵³⁴ Aylwin, P., “Cuenta de una victoria”, en *Documentos, política y Espíritu*, Santiago, 1988, p. 60.

(1990-1994), que representaba a la Concertación de Partidos por la Democracia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), ambos del partido de centro, la Democracia Cristiana (DC), Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) del Partido por la Democracia (PPD)⁵³⁵, más cercano a la izquierda, y Michelle Bachelet Jeria (2006-2010), del Partido Socialista (PS), y primera mujer en llegar a la presidencia en la Historia de Chile⁵³⁶.

Nuestro interés en esta investigación está centrado en el análisis que los llamados gobiernos de la transición, realizaron sobre el pasado dictatorial, es decir, cómo reconstruyeron la memoria histórica de ese complejo «ayer»⁵³⁷, prestando especial atención en lo que se refiere a los centros de tortura ubicados en Santiago y dirigidos por la policía secreta del régimen, DINA. En definitiva, lo que moviliza nuestro trabajo es indagar en cómo se reconstruye esa memoria que contiene todo tipo de padecimientos humanos perpetrados sobre hombres y mujeres, y que a su vez fueron ejercidos por otros hombres y otras mujeres. Sin duda, estas son las grandes paradojas humanas sobre las que debemos trabajar, porque si bien fue el Estado de Chile, el responsable de estos tormentos, son personas quienes las ejercieron. Dentro de este proceso transicional, como hemos enunciado en las primeras páginas, tomamos como arco de temporalidad, el período que comprende a la elaboración del Informe sobre Verdad y Reconciliación (1991), y el Informe sobre Prisión Política y Tortura (2004), que se realizaron durante los gobiernos de la coalición de la Concertación. Entre ambos identificamos la «mesa de diálogo», convocada por

⁵³⁵ El Partido Por la Democracia (PPD), de centro izquierda, fue fundado el 15 de diciembre de 1987, por Ricardo Lagos Escobar, su objetivo fue político instrumental para contribuir a derrocar la dictadura de Pinochet. En la declaración de principios semana que “reconoce como elemento básico de todo su accionar político, la búsqueda de la plena democracia, fundada en el ejercicio de la soberanía popular”. Disponible en, <http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_por_la_Democracia>. [Consultado en agosto de 2011].

⁵³⁶ La candidata Michelle Bachelet Jeria, ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta el 15 de enero de 2005, con un 53, 50%. Asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2006 hasta el 2010. Disponible en, <http://www.emol.com/noticias/todas/2006/01/15/208038/michelle-bachelet-es-la-primera-mujer-presidenta-con-un-5349.html>>.[Consultado en enero 2012].

⁵³⁷ Como lo señala la *Revista Ayer*, de la Asociación de Historia Contemporánea, “Ayer es el día precedente e inmediato a hoy”, Madrid, Marcial Pons, 1988.

el presidente de turno, a propósito de la detención de Pinochet en Londres en 1998.

La necesidad de saber la verdad sobre lo que realmente sucedió durante el período de represión política, es uno de los grandes desafíos al que se ven interpeladas las sociedades que deben hacer frente al legado del pasado represivo. En los países del Cono Sur de América Latina, donde se ejerció violencia de Estado a través de las dictaduras, se advierte que estos temas no están cerrados, sino que son parte central del escenario político presente. Debido a que los procesos democratizadores no son sencillos puesto que se enfrentan de forma directa a las herencias y legados dictatoriales, así como a los grandes temas vinculados a derechos humanos, lo que hace mucho más complejos estos procesos, ya que en una misma realidad social, conviven víctimas y victimarios.

“Una vez instalados los mecanismos democráticos en el nivel de los procedimientos formales, el desafío se traslada a su desarrollo y profundización. Las confrontaciones comienzan a darse entonces con relación al contenido de la democracia”⁵³⁸.

El proceso de transición iniciado en Chile, conoció las experiencias que habían tenido Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Desde esta perspectiva, el abogado José Zalaquett argumenta que “las transiciones a las democracias deben entenderse como períodos re-fundacionales, porque lo que se persigue es reconstruir un orden político y moral quebrantado”⁵³⁹. Y en ese contexto, la conformación de Comisiones de la verdad, fueron fundamentales para analizar las formas en que estas sociedades analizan sus pasados, entendiéndolas como:

⁵³⁸ Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, Colección *Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 4.

⁵³⁹ Zalaquett, J., “*La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile*”, 2000. Disponible en <http://www.cdh.uchile.cl/articulos/Zalaquett/Mesa_de-Dialogo_CEP2000.pdf>. [Consultado en agosto de 2011].

“Organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro. A través de las Comisiones de Verdad se busca conocer las causas de violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes”⁵⁴⁰.

En términos generales, la creación de Comisiones de Verdad, coincide con el intento de dismantelar y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los regímenes militares. En los casos de Argentina, Chile, Guatemala y Perú presentan características similares en cuanto a los objetivos de su instauración, ya que sus propósitos estaban orientados al análisis de «la verdad» en “sus diferentes estatus: judicial, histórica, ética y subjetiva”⁵⁴¹. Las investigaciones que se han preocupado de estos temas, y de las cuales referenciamos en estas páginas, señalan que esta es una de las cuestiones políticas y éticas más importantes que deben afrontar este tipo de sociedades, ya que deben resolver problemas que están relacionados, de un lado, con ámbitos ético-simbólico, y que de acuerdo al planteamiento de Manuel Antonio Garretón, demandan “el máximo castigo para los culpables, y toda la reparación que se pudiera para los familiares y las víctimas sobrevivientes”⁵⁴². Y de otro, encontramos lo que se relaciona con el aspecto político-estatal, que coloca “la cuestión de los derechos humanos dentro de un contexto amplio en los procesos de transición a la democracia o de calma de un conflicto”⁵⁴³. Sin embargo, estos planteamientos señalan que,

⁵⁴⁰ Cuya, E., *Las Comisiones de la Verdad en América Latina*, KO'AGA ROÑE'ETA se.iii, 1996. Disponible en <[<http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html#per>](http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html#per)>. [Consultado en agosto de 2011].

⁵⁴¹ Zalaquett, op. cit., p. 21

⁵⁴² Garretón, M.A., *La sociedad en que vivi (re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*, Santiago, LOM, 2000, p. 127.

⁵⁴³ *Ibíd.*

si el imperativo que predominaba tenía mayor vinculación con el deber ético y la búsqueda de la justicia, las circunstancias políticas y sociales, obligaban a mantener determinados acuerdos para no quebrar los frágiles y susceptibles pactos entre las Fuerzas Armadas, sectores políticos y sociedad civil. En definitiva, como expone Alexander Wilde las “transiciones se transan (en los diversos sentidos de la palabra) con el fin de alcanzar la meta principal que comparten los demócratas, esto es, la de poner fin a la dictadura y establecer la mejor democracia posible en las circunstancias imperantes”⁵⁴⁴.

3.5.- Patricio Aylwin Azócar: “Justicia en la medida de lo posible”

Una vez alcanzada la victoria en contra de la continuidad del régimen en 1988, y luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre de 1989, el nuevo gobierno tuvo que hacer frente a varias tareas, dentro de ellas, se encontraba conseguir que las Fuerzas Armadas retornaran a su ámbito profesional. Asegurar la gobernabilidad del país, refutando las ideas que insistían en que sin el amparo de los militares, se volvería a una situación de caos. Mejorar la legitimación institucional, y favorecer los consensos básicos en los gobiernos locales y la legislación laboral. En su discurso del 21 de mayo de 1990, planteaba las tareas que como primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia (PPD), debía realizar:

- “1º Esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional;
- 2º Democratizar las instituciones;
- 3º Promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos;

⁵⁴⁴ Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, op. cit., p. 10.

- 4º Impulsar el crecimiento económico, desarrollo y modernización del país, y
- 5º Reinsertar a Chile en el lugar que históricamente se había ganado en la comunidad internacional”⁵⁴⁵.

Sin embargo, la tarea más importante, era la que se refería al tema de los derechos humanos. Para abordar este problema era necesario la “construcción de un Estado Democrático Constitucional de Derecho”⁵⁴⁶, que permitiera la inserción del nuevo estado democrático en el sistema internacional de derechos humanos, debido a que uno de los compromisos que había adoptado la Concertación, era la búsqueda de verdad y justicia. En consecuencia, el programa de gobierno de Patricio Aylwin, en el apartado dedicado a los Derechos Humanos, abordaba cinco temas centrales: Compromisos Fundamentales, Verdad y Justicia, Presos políticos, Reparación a las víctimas, Pueblos indígenas, y Medio ambiente. Señalaba que las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, habían ocasionado graves consecuencias tanto en las víctimas como en la vida política del país. Por tanto, no se podía desarrollar una vida democrática, sino se afrontaban esas consecuencias.

“En los casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos será conveniente acumular, conforme a las reglas ordinarias vigentes, el conocimiento de todas ellas en una sola instancia judicial. En todos los procesos por violaciones de derechos humanos (...) se respetará también el principio general de derecho en virtud del cual la responsabilidad penal es personal y, por

⁵⁴⁵ *Discurso de Patricio Aylwin Azócar, en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional*, Valparaíso, 21 de mayo de 1990, p. 9. Disponible en, <http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1990.pdf>. [Consultado en marzo de 2011].

⁵⁴⁶ “Orientaciones y criterios para la elaboración de una propuesta de derechos humanos para el tránsito a la democracia”, en *Derechos Humanos y elecciones presidenciales y parlamentarias*, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1989, pp. 213-225.

tanto, no se perseguirá la responsabilidad de las instituciones a las que hubieren pertenecido los eventuales culpables”⁵⁴⁷.

Elizabeth Lira y Brian Loveman, indican que estas razones llevaron a la coalición de gobierno, a plantear una política amplia de reparaciones. Además de insistir en la definición de un marco jurídico y político para que existiera la plena vigencia de los derechos humanos en el país, y permitiera la construcción de una cultura democrática⁵⁴⁸. Para ello, se adecuaría toda la legislación y las instituciones existentes a los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana, y a los Pactos Complementarios.

“Una vez establecida la incorporación de los tratados sobre derechos humanos en las bases de la institucionalidad, luego de las reformas constitucionales, asumimos el compromiso público y solemne de dar plena vigencia a tales tratados. En el mismo sentido deberán ratificarse aquellas disposiciones de la Convención Internacional contra la Tortura de que el actual régimen ha hecho reserva”⁵⁴⁹.

Respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, el programa de gobierno señalaba que su objetivo era alcanzar la verdad y la justicia, como requisito fundamental para la convivencia en una sociedad democrática. En general, estos problemas emergen como una de las demandas fundamentales que se deben resolver durante las transiciones políticas, por cuanto se observa, que de manera oficial existe la voluntad política por parte del Estado, de querer saber lo sucedido durante la dictadura militar. El caso de Chile, no era ajeno a esta necesidad.

⁵⁴⁷ “Programa de Patricio Aylwin”, en *Derechos Humanos y elecciones presidenciales y parlamentarias*, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1989, pp. 227-232.

⁵⁴⁸ Lira, E., Loveman, B., *Políticas de reparación, Chile 1990-2004*, Santiago, LOM, 2005, p. 20.

⁵⁴⁹ “Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia. Bases programáticas político-institucionales”, *Documentos La Época* n° 856, Santiago, 25 de julio de 1989, p. 3.

“El gobierno democrático se empeñará en el establecimiento de la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos que hayan ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973.

Asimismo, procurará el juzgamiento, de acuerdo a la ley penal vigente, de las violaciones de derechos humanos que importan crímenes atroces contra la vida, la libertad y la integridad personal.

Se derogarán aquellas normas procesales, dictadas bajo el actual régimen, que ponen obstáculos a la investigación judicial o establecen privilegios arbitrarios que favorecen a determinados funcionarios estatales eventualmente implicados en violaciones a los derechos humanos.

El conocimiento de estos casos será radicado en los Tribunales ordinarios de justicia, los que deberán conocer y juzgar conforme a las reglas del debido proceso de derechos, con pleno respeto de las garantías procesales de víctimas y victimarios”⁵⁵⁰.

La dificultad que representaba para Aylwin aplicar su programa de gobierno era no menor, por cuanto, asumió como presidente democrático, con la vigencia de una Constitución elaborada por el régimen, y con Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército, hasta 1998. Elementos que sumados a la amplia operación legislativa que realizó la dictadura militar entre 1988 y 1990, permitió dejar «todo bien atado» para el gobierno de la Concertación, promulgando numerosas «leyes de amarre», y creando los denominados «enclaves autoritarios», que tenían como objetivo:

“Asegurar la autonomía relativa de las Fuerzas Armadas, el funcionamiento de un sistema electoral y partidista que garantizara una representación desproporcionada para los partidos de derecha y grupos gremiales y el «poblamiento» de los

⁵⁵⁰ Ibíd., pp. 3-4.

tribunales y puestos administrativos con adherentes del régimen militar”⁵⁵¹.

La promulgación de estas leyes, obstaculizaron los temas vinculados a los derechos humanos, en especial, el que se refería a la anulación del Decreto de Ley nº 2.191 de 1978, que creaba la Ley de Amnistía para todos aquellos crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Decisión ilegítima en su origen y contenido, así como en forma y fundamentos, “ya que condicionaba los resultados de los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, a lo que se sumaban restricciones de diverso tipo que afectaban la independencia del poder Judicial”⁵⁵². Alexander Wilde, señala que las limitaciones que se ejercieron sobre la recién instalada democracia, también se puede observar a través de los valores y mentalidades autoritarias tanto en actores políticos, organizaciones y sectores sociales. “Estos actores, sobre todo las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, pero también buena parte del sector empresarial y los medios de comunicación, han ejercido un importante poder de facto para mantener la conspiración del consenso”⁵⁵³.

A ello podemos agregar que paradójicamente, durante los cuatro gobiernos de la concertación, que sumaron más de veinte años, esta ley no se logró derogar. Situación que delata una gran contradicción, a la vez que se comprueba la permanencia en el tiempo de la frase de Patricio Aylwin, respecto de hacer justicia “en la medida de lo posible”. Álvaro Soto, señala que luego de que Aylwin asumiera como presidente de la República, habría abandonado las ideas referidas a la derogación de esta Ley, sin embargo, persistió ante los tribunales para que las investigaciones en materia de derechos humanos continuaran “hasta llegar a identificar a los culpables, como paso previo a la

⁵⁵¹ Lira, E., y Loveman, B., *Derechos Humanos en la transición “modelo”: Chile 1988-1999*. Documento preparado para la reunión “Chile 1990 1999: The model country for democracy and development? University of California, San Diego, La Jolla, California, 10-12 de Diciembre 1998, p. 4.

⁵⁵² Lira, E., Loveman, B., *Políticas de reparación*, op. cit., p. 21.

⁵⁵³ Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, op. cit., p. 12.

aplicación de dicha ley y como una contribución a la aclaración y destino de los detenidos-desaparecidos”⁵⁵⁴. Para alcanzar estos objetivos, era fundamental llegar a la «verdad» de los hechos ocurridos, sin enjuiciarlos ya que esa era función de los tribunales de justicia, decisión que también demostraba la necesidad de separar los poderes del Estado, puesto que durante el régimen no contaron con autonomía.

De ahí que no sea extraño observar los conflictos que experimentaron las diferentes propuestas elaboradas durante los gobiernos transicionales en Chile, así como el gran protagonismo que adquirieron las Comisiones de Verdad, alcanzando un impacto internacional y generando importantes repercusiones políticas y sociales. En este contexto, es importante considerar que “las políticas de verdad y justicia dependen estrechamente del modo de transición. Cuanto más derrotada y debilitada llega la elite del viejo régimen a la transición, más amplio es el campo de maniobra para esas políticas”⁵⁵⁵. No obstante, es fundamental discurrir sobre los grandes desafíos que debieron enfrentar las nuevas democracias.

“Las sociedades en transición afrontan los legados de represión por medio de amnistías, juicios o purgas, establecimiento de Comisiones de la Verdad, compensación financiera y gestos simbólicos como la construcción de monumentos o la proclamación de días conmemorativos”⁵⁵⁶.

En consecuencia, las dificultades que se observan en la instalación de los procesos transicionales abarcan varios aspectos, no sólo jurídicos, sino también éticos, morales y simbólicos, y que son paralelos a la búsqueda de verdad y justicia. En el caso de Chile, las Comisiones de Verdad han tenido significados particulares, ya que se realizaron bajo el alero de una constitución elaborada durante el régimen, junto a una transición política pactada y vigilada desde las sombras, por el fallecido dictador. Pese a ello, Patricio Aylwin

⁵⁵⁴ Soto, A., “La larga sombra del dictador”, op. cit., p. 9.

⁵⁵⁵ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., p. 41.

⁵⁵⁶ *Ibíd.*, p. 29.

consciente de la dimensión simbólica de su papel histórico, “realizó varias ceremonias expresivas, deliberadamente dirigidas a restañar las heridas del pasado traumático del país”⁵⁵⁷. Entre ellas, la transmisión del mando en el Senado, el 11 de marzo de 1990, la masiva reunión en el Estado Nacional que funcionó como centro de detención y tortura los primeros días después del golpe militar, y en el que desaparecieron cientos de personas.

“Desde este recinto, que en tristes días de ciego odio, de predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: ¡Nunca más!
¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más odio fratricida! ¡Nunca más violencia entre hermanos!”⁵⁵⁸.

Otro gesto fue el multitudinario funeral de Estado para Salvador Allende Gossens, el 4 de septiembre de 1990, que reivindicaba la figura política del ex mandatario y rompía el silencio impuesto por casi dos décadas. Ocasión en que Aylwin señaló públicamente, que se estaba reparando un injusto error, en relación al tiempo que se debió esperar para realizar esta ceremonia. Varios fueron los guiños del gobierno democrático que permitieron apreciar la fuerza que tenía el tema de los derechos humanos dentro de la Concertación, lo que se tradujo en unidad, cuestión que se comprobó más tarde, al dar total cobertura mediática a la presentación oficial de los resultados de la Comisión de Verdad.

Así también se prestó especial atención y difusión a los diferentes episodios «irrupciones de memoria» en palabras de Wilde, que sucedieron en materia de derechos humanos los cuatro primeros años de gobierno democrático. Algunos de ellos fueron, el descubrimiento en junio de 1990 de

⁵⁵⁷ Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, op. cit., p.16.

⁵⁵⁸ “Un nuevo amanecer en el Estadio Nacional: discurso de Patricio Aylwin, 12 de marzo de 1990”, en Santibáñez, A., *Entre el horror y la esperanza: a 30 años del golpe*, Santiago, ed. Don Bosco, 2003.

una fosa común en Pisagua, situada en el norte de Chile, y que contenía los cuerpos de diecinueve personas sin identificar. Más tarde, en septiembre de 1991, se desenterraron treinta y cinco cuerpos de personas que estaban en tumbas anónimas, bajo la sigla “NN”, en el Patio 29, en el Cementerio General de Santiago⁵⁵⁹. Asimismo el gobierno se comprometió a crear en el mismo cementerio, el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, que se concretó a fines de su mandato⁵⁶⁰.

Por otra parte, es evidente que «los trabajos de memoria», sobre el pasado dictatorial si bien se masificaron durante la transición, aparecen en el momento en que se produjeron las detenciones y desapariciones de personas. Es frente a estos hechos que comienza la elaboración de un tipo de memoria que tuvo directa relación con los hechos de violencia que se perpetraron sobre hombres y mujeres. Producto que fueron familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas, quiénes intentaron denunciar los arrestos, golpes, y desapariciones de sus familiares, y que bajo el amparo de la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la Solidaridad, comenzaron la búsqueda, muchas veces interminable de sus seres queridos, en un clima de absoluta impunidad. En este contexto, es importante apreciar el gran esfuerzo, valentía y constancia que durante la dictadura militar, y bajo el miedo latente en los primeros años de la transición, tuvieron tanto los organismos de derechos humanos, como las agrupaciones de familiares de las víctimas, ya que a través de sus testimonios

⁵⁵⁹ Jaime Guzmán Errázuriz (1942-1991). Fundador y senador del partido de derecha Unión Democrática Independiente (UDI), colaborador del gobierno militar, uno de los principales redactores de la Constitución de 1980, y fundador de la UDI. El hecho, realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ocurre en el frontis del Campus Oriente de la Universidad Católica, (PUC). Véase Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, *Memorias para construir la Paz. Cronología (1990-1992)*. La Esperanza del Futuro, op. cit., p. 7.

⁵⁶⁰ El 26 de febrero de 1994, fue inaugurado en el Cementerio General de Santiago, el «Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político». Fue construido para que descansaran los restos de víctimas en la medida en que se iban encontrando. La obra contiene los nombres de más de cuatro mil personas. “En abril de 2004 se hizo una denuncia, al aparecer algunos nombres de agentes que murieron víctimas de la violencia política en el memorial del Cementerio general, junto a los nombres de las víctimas. Originalmente había sido un memorial para los ejecutados políticos y los detenidos desaparecidos, víctimas del régimen militar. La inclusión de estos nombres recaería en los responsables de la reconstrucción del memorial después de un incendio que lo había deteriorado”, en El Mostrador, Santiago, 02 de abril de 2004. Disponible en <www.elmostrador.cl>. Citado por Lira E., Loveman, B., *Políticas de reparación. Chile 1990-2004*, op. cit., p.465.

y denuncias en organismos nacionales, pero sobre todo internacionales, generaron una movilización social que tuvo como objetivo el esclarecimiento y denuncia de las violencias y apremios que se estaban cometiendo por parte del Estado en Chile. En su discurso en el Estadio Nacional, Aylwin reconocía el tema de los derechos humanos como prioritario. “(...) la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura”⁵⁶¹. A su vez que fijaba temas fundamentales a resolver en su gestión:

“a) La situación de los detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidos por actos políticos, b) la situación de los exiliados; y c) la situación de los llamados ‘presos políticos’”⁵⁶².

Tiempo después, Patricio Aylwin, señalaba las dificultades de las tareas que su gobierno debía resolver, al mismo tiempo que admitía la complejidad de la situación política.

“Para el nuevo gobierno era claro que el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido constituía una base indispensable para el reencuentro y reconciliación de los chilenos. Ninguna sociedad puede convivir pacíficamente sobre la base del imperio de la mentira o con la herida de la desconfianza recíproca entre sus integrantes. Pero, al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos centrar indefinidamente el debate nacional en escudriñar el pasado, porque esto significaría ahondar las divisiones que queríamos superar, postergar los grandes desafíos

⁵⁶¹ “Discurso en el Estadio Nacional”, 12 de marzo de 1990, en Aylwin, P., *La transición chilena. Discursos escogidos*, Santiago, Andrés Bello, 1990, pp. 17-24.

⁵⁶² Lira, E., Loveman, B., *Políticas de reparación. Chile 1990-2004*, op. cit., pp. 22-23.

en el ámbito económico social y aún poner en riesgo el propio proceso de democratización”⁵⁶³.

En definitiva, la propuesta del programa de gobierno de Patricio Aylwin, ratificaba que tanto el tema de las violaciones a los derechos humanos como la búsqueda de una forma de enmendar los daños ocasionados, aunque “la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables por lo que no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas”⁵⁶⁴, lo ocurrido era un problema político de la transición. De ahí la necesidad de obtener acuerdos amplios que permitieran implementar políticas para conocer la verdad sobre lo que había ocurrido en el país y sus efectos sobre las víctimas, advirtiéndose por tanto, el gran esfuerzo por parte del Estado, en implementar políticas de verdad y justicia. Es en este contexto, donde se inscribe el origen de la «Comisión de Verdad y Reconciliación», creada por decreto supremo nº 355 y publicada en el Diario Oficial de Chile, el 25 de abril de 1990, tuvo como objetivo “contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”. En cuanto a la elección de los integrantes de la comisión, fue competencia del presidente de la República. “Su composición final, mostraba los equilibrios que Aylwin deseaba y su trabajo debe ser considerado como decisivo para evitar el olvido y buscar la verdad”⁵⁶⁵. La constituyeron Raúl Rettig Guissen (Presidente), Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de la Jara, Laura Novoa Vásquez, José Zalaquett Daher, Ricardo Martín Díaz, Gonzalo Vial Correa, Jorge Correa Sutil (Secretario). Cuatro fueron las grandes tareas encomendadas a la Comisión:

⁵⁶³ Aylwin, P., “La Comisión chilena sobre la Verdad y la Reconciliación”, *Conferencia inaugural en el XIV Curso Interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, San José de Costa Rica, 12 de junio de 1996, p. 38.

⁵⁶⁴ Discurso de Patricio Aylwin Azócar al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, *La Nación*, Santiago, 04 de marzo de 1991.

⁵⁶⁵ Soto, A., “La Larga sombra del dictador”, op. cit., p. 9.

- “a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias;
- b) Reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;
- c) Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara de justicia; y
- d) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos”⁵⁶⁶.

A su vez, enfatizaba que no era competencia de la Comisión juzgar y aplicar sanciones, cuestión que explicitaba en el artículo segundo:

“En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos que haya tomado conocimiento.

Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hecho que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda”⁵⁶⁷.

Luego de nueve meses de investigación, el 9 de febrero de 1991 la Comisión entregó al Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, los resultados se conocieron como el «Informe Rettig», debido al nombre del presidente de la comisión el jurista Raúl Rettig. “El Informe –de tres volúmenes y 2.000 páginas- concluye que los derechos humanos de 2. 279 personas fueron gravemente violados durante el período 1973-1990, de las cuales 2.115

⁵⁶⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, 3 vol., Santiago, Reedición, 1996 (1ª ed. 1991), p. 3.

⁵⁶⁷ *Ibíd.*, pp. XI-XII.

son calificadas como “víctimas de violación a los Derechos Humanos” y 164 como “víctimas de la violencia política”⁵⁶⁸. El 4 de marzo de 1991, Aylwin presentó el informe a todo Chile en una ceremonia transmitida por televisión en el que llamaba a la reconciliación, además que pedía perdón en nombre del Estado, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura.

“Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”⁵⁶⁹.

El impacto y repercusión del informe fueron de gran alcance, adquiriendo “las dimensiones de un monumento, como se calificaba antaño a las obras imponentes y dignas de perdurar”⁵⁷⁰. Si bien con el paso de los años se transformó en un documento cuyos hechos eran irrefutables, según el abogado José Zalaquett, “la verdad que dio a conocer la Comisión Rettig actuó como una especie de buque rompehielos, permitiendo avanzar en lo que era impenetrable”⁵⁷¹. Debido a que no fue un documento judicial que juzgara definitivamente a quienes habían cometido dichos crímenes. Sin embargo, de manera pública denunció la violación de derechos humanos que de forma sistemática se cometió durante los diecisiete años de dictadura militar.

“En los dos primeros años del gobierno de la Concertación se había producido, sin duda, una oleada inicial de revelaciones

⁵⁶⁸ Ibíd., p. 27. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/historia_programa.html>.

⁵⁶⁹ Discurso de Patricio Aylwin Azócar, al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, op. cit.

⁵⁷⁰ Pérotin-Dumon, A., “Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile”, en Stabili, M. R. (coord.), *Entre historias y memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina*, Madrid, AHILA, 2007, p. 201.

⁵⁷¹ Ibíd.

sobre los horrores cometidos a lo largo de los 17 años anteriores, y se esbozó un debate público con respecto a ellos. (...) la publicación de Informe de la Comisión Rettig, dio a conocer al público el carácter masivo de las violaciones a los derechos humanos y estableció una lista de los muertos y desaparecidos, así como de las circunstancias de cada caso”⁵⁷².

Desde esta óptica se pueda analizar el gobierno de Patricio Aylwin, quien exigió justicia «en la medida de lo posible», manteniendo los acuerdos instalados en la Constitución de 1980, que “actuaba como un muro que protegía al ejército y garantizaba un paso gradual a una «democracia protegida» a través de diferentes disposiciones transitorias”⁵⁷³, y que permitió a los militares conservar el poder y legitimidad, como consecuencia de la institucionalidad impuesta entre 1973 y 1990. Brian Loveman y Elizabeth Lira señalan que, “el gobierno de Patricio Aylwin hizo de la reconciliación política una meta principal para la transición del gobierno militar a un gobierno elegido”⁵⁷⁴. Objetivo que subrayó en el Discurso en el Estadio Nacional.

“Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la patria nos demanda”⁵⁷⁵.

⁵⁷² Ibíd., p. 200.

⁵⁷³ Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), op. cit., pp. 212-213. Las investigadoras señalan que entre aquellos obstáculos del tránsito a las democracias, se encuentran las “leyes de amarre” que se aprobaron entre 1989 y 1990 cuyos objetivos eran limitar aún más la naciente democracia.

⁵⁷⁴ Loveman, B., Lira, E., *Leyes de reconciliación en Chile: Amnistías, Indultos y Reparaciones 1989-1999*, Santiago, LOM, 2001, p.223.

⁵⁷⁵ “Discurso en el Estadio Nacional”, 12 de marzo de 1990, en Aylwin, P., *La transición chilena. Discursos escogidos*, op. cit., pp. 17-24.

En consecuencia y producto de las limitaciones tanto impuestas como negociadas de la transición, no resulta extraño que las batallas políticas de búsqueda de la verdad, tuvieran impedimentos⁵⁷⁶. Lo lamentable es que sus repercusiones fueron sobre todo para las diferentes Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, alargando aún más la extenuante búsqueda para saber el paradero de sus seres queridos. Frente a esta situación Elizabeth Lira, señala que lo que se encontraba en la base la propuesta fue;

“el reconocimiento de Chile como un país fracturado, lo que se traducía, entre otras cosas, en el riesgo de una polarización latente y encubierta, que arriesgara la posibilidad de transitar hacia una democracia estable. Desde esa perspectiva, fue principalmente Patricio Aylwin, quién insistió en la reconciliación nacional como un objetivo político estratégico. La reconciliación, por otra parte, ha sido un deseo histórico en la sociedad chilena, apelado por todos los sectores y proyectando en él diversos contenidos y requisitos que se suponen comunes. Es una referencia constante, una meta y una utopía”⁵⁷⁷.

⁵⁷⁶ La historiadora Anne Pérotin-Dumon argumenta que a propósito de la campaña de difusión masiva del Informe Rettig y la sensibilización de la opinión pública que se había previsto, no se llevaría adelante por múltiples razones, entre ellas, plantea que “Tras la muerte del ideólogo Jaime Guzmán, artífice de la constitución de 1980 asesinado por un grupo revolucionario de extrema izquierda, el gobierno de Aylwin estimó prudente disponer una retirada ante la ofensiva generalizada de una derecha muy identificada con la dictadura. Expone además que se suspendió, en particular, la difusión de una *Síntesis del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación* realizada bajo la dirección de Alfredo Riquelme y Jaime Troncoso, Santiago, Comisión Chilena de Derechos-Humanos-Centro IDEAS (1991), en el marco de una campaña nacional de educación para la verdad y los derechos humanos denominada “Para crecer en Chile”. Véase Pérotin-Dumon, A., “Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile”, op. cit., p., 201.

⁵⁷⁷ Lira, E., Loveman, B., *Derechos Humanos en la transición “modelo”: Chile 1988-1999*. Documento preparado para la reunión “Chile 1990 1999: The model country for democracy and development?”, University of California, San Diego, La Jolla, California, 10-12 de Diciembre 1998. Los autores señalan además que “La reconciliación es un concepto complejo que tiene significados psicológicos, sociales, teológicos, éticos y políticos. Existen modelos distintos de reconciliación cuyos requisitos y resultados pueden ser muy diversos. Véase Loveman, B., Lira, E., *Las suaves cenizas del olvido: la vía chilena de reconciliación - 1814-1932*, Santiago, LOM, 1999.

Las recomendaciones del Informe, estuvieron enfocadas sobre todo en propuestas que tenían por objetivo prevenir las violaciones de derechos humanos, por ello se “hicieron sugerencias en el campo institucional y normativo, así como en materia constitucional, penal y procesal penal”⁵⁷⁸. Uno de los temas centrales de acuerdo con el cumplimiento del mandato de creación de la Comisión, fueron las medidas de reparación y reivindicación. Entre las diversas medidas que se propusieron, de gran trascendencia fue la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, (CNRR), a través de la Ley 19.123 publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1992, para determinar “los casos que la CNVR no alcanzó a conocer en profundidad, así como de nuevos casos que se presentaren y dar asistencia social y legal a los familiares de las víctimas”⁵⁷⁹. La presidenta de la AFDD, Sola Sierra, si bien valoraba esta iniciativa como un paso importante, señalaba a su vez que:

“No hablemos de reparación, porque no hay medida para el sufrimiento, la pena, la humillación y, por lo tanto, no hay dinero que pague el asesinato de un padre, la desaparición de un esposo o de un hijo, la pérdida de una hermana, el aniquilamiento de una familia o la incertidumbre de la suerte corrida por los hijos nacidos en cautiverio”⁵⁸⁰.

Se advierte, la complejidad y lo delicado del tema que tenía que resolver el primer gobierno de la Concertación. Como observamos, si bien las políticas reparación que propuso la Comisión Rettig y que adoptó el gobierno de Aylwin, tuvieron críticas por parte de las Agrupaciones de Familiares de las víctimas, también es cierto que fue un “reconocimiento oficial del terrorismo del Estado y

⁵⁷⁸ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación Política, 1932-1994*, Santiago, LOM, 2000, p. 525.

⁵⁷⁹ Presidente de la CNRR fue el jurista Alejandro González Poblete. Los consejeros: José Luis Cea Egaña, Jorge Correa Sutil, Carlos Andrade Geywitz, Carlos Reymond Aldunate, Rodolfo Armas Merino y Jorge Molina Valdivieso. El Secretario Ejecutivo: Andrés Domínguez Vial. Disponible en <http://www.ddhh.gov.cl/historia_programa.html>. [Consultado en octubre de 2011].

⁵⁸⁰ Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, *Resumen de Actividades*, Año 1992, pp. 24-25.

proporcionaban un apoyo concreto para continuar con la vida cotidiana”⁵⁸¹. La Comisión daba cuenta de su preocupación frente a la naturaleza del tema de la «reparación», por ello insistió en que:

“Ciertamente que no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las familias de las víctimas (...). La desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables. Sin embargo, la reparación moral y material parecen ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena.

En ese sentido entendemos la reparación como un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de este Informe. La reparación es una tarea en la que el Estado ha de intervenir en forma consciente y deliberada”⁵⁸².

3.5.1.- Principales reacciones frente al Informe Nacional de Verdad y Reconciliación

En efecto, lo que construyó la Comisión fue “una base inamovible de hechos establecidos acerca de lo ocurrido, como un aporte a la historia nacional de Chile”⁵⁸³. Como hemos enunciado, los resultados de la CNVR tuvieron gran impacto, si bien es cierto que la mayor parte de la sociedad tenía alguna idea de la represión con que había operado el régimen, pese a ello, su importancia radicó en que de forma oficial se difundieron todos los aspectos de las violaciones de derechos humanos. Esto significó a su vez que diversos sectores de la sociedad, se pronunciaron a propósito de los resultados que arrojó el Informe Rettig.

⁵⁸¹ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 527.

⁵⁸² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, tomo 2, op. cit., p. 823.

⁵⁸³ Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, op. cit., p. 16.

En el caso de las Fuerzas Armadas, en un primer momento respondieron de forma separada, observando algunos matices frente a sus respuestas, sin embargo días más tarde se presentó un texto conjunto titulado “El Ejército, la verdad y la reconciliación”, y que constituía las respuestas de las Fuerzas Armadas y de Orden al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Este Informe fue entregado al Consejo de Seguridad Nacional por el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Augusto Pinochet Ugarte, el 27 de marzo de 1991, y fue publicado en el periódico *La Nación* el 28 de marzo de 1991. En el que señalaba respecto al Informe Rettig, que su “contenido revela un desconocimiento imperdonable de las reales causas que motivaron la acción de restauración nacional emprendida a partir del 11 de septiembre de 1973”⁵⁸⁴. El texto destacaba la acción de las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado, denominado «intervención militar», debido a la situación imperante, argumentando que:

“La Unidad Popular había creado la fuerza y desarrollado el escenario para llevar a la fase de ejecución los planes que le permitirían materializar la guerra civil, la que, dadas sus características, no sería jamás declarada oficialmente ni cuya existencia se reconocería explícitamente.

La acción de las Fuerzas Armadas hizo fracasar este intento.

Sólo por eso la guerra civil revolucionaria pudo conjurarse en su fase larvada, sin que ella estallara en todas sus dimensiones. Pero persistió la guerra subversiva. Hoy, para algunos observadores ligeros y desinformados de la realidad, aparece como que las Fuerzas Armadas y Carabineros actuaron contra un enemigo interno que, en la perspectiva del tiempo, juzgan casi indefenso”⁵⁸⁵.

⁵⁸⁴ “El Ejército, la verdad y la reconciliación”. Respuesta de las Fuerzas Armadas y de Orden al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe presentado ante el Consejo de Seguridad Nacional por el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Augusto Pinochet Ugarte, 27 de marzo de 1991, en *La Nación* el 28 de marzo de 1991. Citado por *Revista de Estudios Públicos* nº 41, 1991, p. 451.

⁵⁸⁵ *Ibíd.*, p. 457.

En el texto se incluían las declaraciones oficiales de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Carabineros. Fernando Camacho, señala que en las respuestas emitidas por las ramas castrenses se podían apreciar algunas diferencias de forma y contenido, identificando a “los más duros (...) el Ejército y la Armada. Carabineros también se justificó y criticó las conclusiones del informe, aunque más suavemente. La Fuerza Aérea (FACH) mostró una mayor adhesión a Aylwin”⁵⁸⁶. El 8 de marzo de 1991, el Comandante en jefe de la FACH Fernando Matthei, señaló tanto su voluntad de responder moral y legalmente por posibles violaciones de derechos humanos, cometidas durante el ejercicio de su cargo como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile⁵⁸⁷, como su adhesión al marco histórico del Informe. Consideraba de suma importancia, reconocer el contexto político en el cual se produjo el golpe de Estado, considerándolo como una “consecuencia inevitable de un conflicto civil agudizado hasta el extremo, en cuya gestación y desarrollo, las Fuerzas Armadas y de Orden no tuvieron participación ni responsabilidad alguna”⁵⁸⁸. Asimismo apoyó la gestión de Aylwin en esta materia, afirmando que se debía asumir “el pasado con todas sus consecuencias, pero no quedarnos en él; sino por el contrario, proyectarnos al futuro promisorio que la patria nos demanda”⁵⁸⁹.

Por su parte, Carabineros de Chile, que a través de un comunicado realizado el 22 de marzo de 1991, el Comandante Rodolfo Stange, manifestó su molestia al indicar que el Informe Rettig “estaba viciado ya que no había considerado el período previo al 11 de septiembre de 1973. Lo calificó como un «intento serio pero incompleto»⁵⁹⁰. Si bien valoraba la acción de Patricio Aylwin de intentar lograr una reconciliación entre los chilenos, insistía en la defensa de la actuación de Carabineros, afirmando que en determinados casos se habían tomado las necesarias medidas para condenar a quienes correspondía. “En

⁵⁸⁶ Camacho, F., “Memorias enfrentadas: las reacciones a los informes Nunca Más de Argentina y Chile”, *Revista Persona y Sociedad*, Vol. XXII/nº2, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2008, p. 78.

⁵⁸⁷ Otano, R., *Nueva crónica de la transición*, Santiago, LOM, 2ª ed. 2006, (1ª ed. 1995), p. 171.

⁵⁸⁸ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 523.

⁵⁸⁹ *Revista de Estudios Públicos* nº 41, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1991, p. 490.

⁵⁹⁰ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 523.

todo caso, sostenía, que lo ocurrido era justificable, porque en el período en referencia se actuó bajo condiciones y situaciones de excepción”⁵⁹¹.

El 28 de marzo, el Ejército afirmaba en una declaración pública, su malestar respecto al contenido del informe ya que a su juicio revelaba “un desconocimiento imperdonable de las reales causas que motivaron la acción de restauración nacional emprendida a partir del 11 de septiembre de 1973”⁵⁹². Al igual que las otras ramas de las Fuerzas Armadas coincidía en reiterar la justificación del llamado «pronunciamiento militar» debido al contexto político del período. Se insistía en justificar el golpe de estado debido a que había existido una guerra, “y que todo lo sucedido fue consecuencia de ella y, como toda guerra, iba unida al dolor y a la muerte”⁵⁹³. Se argumentó que,

“al hacer la guerra, el Ejército junto a las demás instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, trataron de enmarcar las acciones de su personal en normas jurídicas y conforme a su honor y tradición. Ello, estamos seguros y orgullosos, se logró en la medida que una acción bélica lo hace posible”⁵⁹⁴.

A su vez subrayaron de manera enfática que: “El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado frente a la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad”⁵⁹⁵. Elizabeth Lira, sostiene que el Ejército estuvo lejos de reconocer las conclusiones del Informe, más aun, manifestó su total discrepancia y le restó validez no sólo jurídica sino también histórica. “No había por qué pedir perdón ni manifestar contrición. Como lo

⁵⁹¹ *Revista de Estudios Públicos* n° 41, op. cit., p. 494. Para profundizar sobre el aspecto teórico de estos temas véase Agamben, G., *Estado de excepción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007, (1ª ed. 2003).

⁵⁹² “Ejército respondió al Informe de la Comisión Rettig”, *La Época*, 28 de marzo, 1991, p. 13. Citado por Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit. p. 521.

⁵⁹³ *Ibíd.*

⁵⁹⁴ Castillo Velasco, J., “¿Hubo en Chile violaciones a los Derechos Humanos? Comentario a las Memorias del general Pinochet”, en *Comisión Chilena de Derechos Humanos*, Santiago, Editorial Nacional de Derechos Humanos, 1995, p. 56.

⁵⁹⁵ *La Época*, 28 de marzo de 1991, p. 15. Citado por Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 523.

expresaba el general Pinochet, si la Concertación o un futuro gobierno incurrieran en los errores de la Unidad Popular, estaba dispuesto a recurrir al «legítimo empleo de la fuerza»⁵⁹⁶.

Por su parte, la Armada a través del Almirante Jorge Martínez Busch, entregó su reacción centrada mayoritariamente en lo que a su juicio eran las supuestas omisiones que presentaba el Informe. Señalaba que se debía haber considerado el período anterior al 11 de septiembre de 1973 para comprender el período siguiente.

“c) (...)El caso de Chile, en los años que siguieron al pronunciamiento de septiembre de 1973, constituyó un ejemplo típico de un estado de guerra interna, en el que la Junta de Gobierno estaba permanentemente enfrentada a la enconada acción revolucionaria de grupos violentistas organizados, cuyo objetivo final era el de derrocar el régimen, implantar un sistema totalitario, destruir la libertad y la soberanía de nuestra patria y los grandes valores espirituales e históricos que identifican nuestra nacionalidad.

d) En consecuencia, en Chile existió un estado de guerra efectiva, con bases legales, doctrinarias y prácticas que así lo acreditan. Estos antecedentes, que no han podido ser ajenos al conocimiento de la Comisión, hacen que, a lo menos, se rechacen los fundamentos y las conclusiones que a este respecto manifiesta el Informe en análisis”⁵⁹⁷.

Sugirió a su vez, “la inconveniencia de conmemoraciones y actos para la enseñanza de las futuras generaciones por cuanto «podrían contradecir especialmente los conceptos de reconciliación, perdón y olvido que deberían

⁵⁹⁶ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 522.

⁵⁹⁷ “Informe presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad por el Comandante en Jefe de la Armada de Chile”, Almirante Jorge Martínez Bush, el 27 de marzo de 1991, en *La Nación*, Santiago, 28 de marzo de 1991. Véase *Revista de Estudios Públicos* nº 41, 1991, p. 481.

caracterizar esta etapa del proceso histórico chileno»⁵⁹⁸. En definitiva, se advierte la coincidencia con lo expuesto por las otras tres instituciones - Ejército- Fuerza Aérea y Carabineros-, en cuanto a la justificación del golpe de Estado, la situación de «guerra civil», la obra del «gobierno militar» y por supuesto, su paradójal anhelo de reconciliación entre todos los chilenos.

El poder Judicial, reaccionó de forma enérgica señalando que, “La Corte Suprema de Justicia no puede aceptar como válido el enjuiciamiento de los Tribunales por una entidad que carece totalmente de la más insignificante facultad para hacerlo, pero que en su afán de divulgar una absurda crítica no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones”⁵⁹⁹. Esto tenía mayores repercusiones debido a que gran parte de los miembros de la Corte Suprema, habían sido designados por Pinochet, meses antes de dejar el gobierno, sobre todo para evitar procesamientos contra las Fuerzas Armadas y Carabineros, decisión que cumplía con su objetivo de que «nadie tocara a sus hombres». El texto emitido por la Corte Suprema terminaba indicando que:

“Se puede concluir, entonces, que el Informe Verdad y Reconciliación no es trasunto precisamente de la total verdad como pretende, por lo que concierne al Poder Judicial, lo que no significa, bajo ningún punto de vista de que el Poder Judicial se resista o niegue su más decidida cooperación y concurso al mejoramiento de las normas que lo regulan con miras a hacerlo más eficaz y más al alcance de todos”⁶⁰⁰.

Los sectores vinculados a organismos de derechos humanos y la iglesia Católica, también presentaron sus reacciones frente a los resultados que entregó el Informe. En general se aprecia la aceptación de los resultados que entregó el Informe. La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH),

⁵⁹⁸ Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 524.

⁵⁹⁹ “Respuesta de la Corte Suprema al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, redactado el 13 de mayo de 1991, en *El Mercurio*, Santiago, 16 de mayo de 1991. Véase *Revista de Estudios Públicos* nº 42, Santiago, 1991, p. 237.

⁶⁰⁰ *Revista de Estudios Públicos* nº 42, Santiago, 1991, p. 249.

abrazó una posición más oficial, valorando el significado del Informe, manifestando a su vez que tanto “la interpretación y justificación de lo ocurrido difería entre los diferentes grupos políticos y sociales así como la calificación del contexto político en el que se produjeron”⁶⁰¹.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, si bien valoró el Informe, señaló también que “aún desconocemos toda la verdad, no sabemos del destino de las personas detenidas desaparecidas y tampoco hemos logrado justicia que permitirá sanar moral y éticamente al país”⁶⁰². En general las molestias de la Agrupación se orientaban en tres ámbitos. Primero, debido a dejaba fuera del ámbito de investigación otras formas graves de violación de derechos humanos, como era la tortura y el exilio. Segundo, porque las cifras de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, eran incompletas ya que sólo se consignaban los hechos sin dar respuesta a los familiares afectados, sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos, así como el lugar donde estaban enterrados los ejecutados políticos cuyos restos no habían sido encontrados. Tercero, porque no se publicaron los nombres de los responsables de los delitos, si bien en la mayoría de los casos estaban debidamente identificados. La presidenta de la Agrupación, Sola Sierra planteaba que “No nos sirven soluciones globales. Si nuestros seres queridos están muertos, no nos satisface el conocimiento moral del hecho sino la concreción de la muerte, o sea, saber dónde están sus restos”⁶⁰³. Pese a estas discrepancias la AFDD estuvo de acuerdo en las conclusiones del informe, sobre todo en aquellas relacionadas con la responsabilidad del Poder Judicial, debido que negó el auxilio a las víctimas durante la dictadura. Sin embargo, al terminar el gobierno de Patricio Aylwin, aún quedaban temas pendientes en

⁶⁰¹ Comisión Chilena de Derechos Humanos, *Las Deudas de la Transición*, Santiago, Ediciones Nacionales, 1994, pp.32-35. Citado por Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido*, op. cit., p. 525. Para una mayor profundización de las diferentes reacciones, véase Camacho, F., “Memorias enfrentadas: las reacciones a los informes Nunca Más de Argentina y Chile”, op. cit.

⁶⁰² Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, *20 años de la historia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Un camino de imágenes*, Santiago, Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1995, p. 115.

⁶⁰³ *La Tercera*, 26 de febrero de 1991. Citado por Camacho, F., “Memorias enfrentadas: las reacciones a los informes Nunca Más de Argentina y Chile”, op. cit., p. 73.

materia de derechos humanos, en consecuencia, la reconciliación política y el fin de la transición, seguían siendo un espejismo.

3.6.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Chile tiene una oportunidad histórica”.

Las elecciones presidenciales de fines de 1993, dieron como ganador a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, del partido Demócrata Cristiano (DC), llevando el segundo gobierno de la Concertación (1994-2000)⁶⁰⁴. En el primer mensaje presidencial exponía que:

“Vengo a afirmar que Chile tiene una gran oportunidad histórica. Vengo a invitar al país a asumirla. Vengo a dar cuenta de qué manera el Gobierno espera concretarla en lo inmediato y en el futuro próximo. Asumir una oportunidad supone reconocerla”⁶⁰⁵.

Su programa de gobierno tuvo un carácter marcadamente modernizador, basado en la convicción de que Chile estaba frente a una oportunidad histórica para enfrentar los desafíos del próximo siglo. Seis fueron las tareas prioritarias de su mandato:

“Ellas son la consolidación de nuestro desarrollo económico; la erradicación de la extrema pobreza; el establecimiento de un régimen moderno de relaciones laborales; la construcción de sistemas de salud y de educación eficientes, de amplia cobertura

⁶⁰⁴ Las elecciones presidenciales se realizaron el 11 de diciembre de 1993, se presentaron seis aspirantes a la presidencia: Manfred Max Neef, con 387.102 (5,55%); Eugenio Pizarro Poblete, 327.402 (4,70%); Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 4.040.497 (57,98%); Cristián Reitze Campos, 81.675, (1,17%), Arturo Alessandri Besa 1.701.324 (24,41%), José Piñera Echeñique, 430.950 (6,18%). Total de votos válidamente emitidos: 6.968.950. Disponible en, < http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/index1993_pres.htm>. [Consultado en noviembre de 2011].

⁶⁰⁵ *Mensaje Presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle*, en la Legislatura 329ª Ordinaria, Sesión del Congreso Pleno, 21 de mayo de 1994, p. 4. Disponible en, <http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1994.pdf>. [Consultado en noviembre de 2011].

y preparados para las exigencias de una sociedad en rápido crecimiento; y por último, la inserción internacional del país”⁶⁰⁶.

Respecto al tema de derechos humanos, el equipo político de Frei Ruiz-Tagle, había planteado sustraerse de esos asuntos, ciñéndose a los procesos en los Tribunales de Justicia, en definitiva, se planteaba que el tema de los derechos humanos no era el eje fundamental del actual gobierno. Sin embargo, diferentes episodios sucedidos durante los seis años de su gobierno demostrarían una vez que el tema de derechos humanos, estaba lejos de cerrarse. En este aspecto existe una abundante literatura que da cuenta de las diferentes formas en que el pasado «difícil» de Chile, vuelve cada cierto tiempo a manifestarse⁶⁰⁷. Se advierte que sobre todo a partir de 1990, se fueron abriendo procesos judiciales contra miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas y de Orden por violaciones a derechos humanos que generaban gran tensión en el país. Si bien se habían reabierto casos, luego de largos años de investigación, esto causaba malestar en las Fuerzas Armadas, más aun cuando debían concurrir a declarar a pesar de estar vigente la ley de amnistía, sobre todo por la cobertura periodística. “La batalla judicial significaba un esfuerzo permanente y generalmente silencioso en la búsqueda de una justicia que no permitiera la impunidad”⁶⁰⁸.

Como hemos manifestado, no es nuestro objetivo plantear una cronología de aquellas «irrupciones de memoria» que se han suscitado luego de la vuelta a la democracia en Chile, sino más bien, centrarnos en algunos de esos temas, que tienen que ver con las políticas de la memoria que adoptan los gobiernos de la Concertación, en el arco temporal que va entre los Informe de

⁶⁰⁶ *Ibíd.*, p.7. Uno de los grandes logros fue el fortalecimiento de la apertura comercial, reinsertando al país en la comunidad internacional. Se suscribieron diferentes convenios, entre ellos, como miembro activo del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico APEC, un Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, así como un Acuerdo de Cooperación Económica y Política con la Comunidad Europea, y como miembro asociado del Mercosur.

⁶⁰⁷ La literatura sobre temas puntuales que tienen relación con la violencia ocurrida durante la dictadura militar es abundante, por ello citamos algunas de estas investigaciones en el desarrollo de nuestra investigación.

⁶⁰⁸ Lira, E., *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002*, Santiago, LOM, 2002, p. 178. Varios fueron los intentos del gobierno de Frei, por terminar con «los enclaves autoritarios», entre ellos, los senadores designados, la ley de amnistía de 1978.

Verdad que se elaboraron entre 1991 y 2004. Los hechos ocurridos en 1998 pusieron de manifiesto la vigencia del difícil pasado chileno que se negaba «a pasar». Si bien, Augusto Pinochet, se había mantenido como comandante en jefe del Ejército desde el retorno a la democracia, el 10 de marzo de 1998, por razones constitucionales y legales, entregó el mando del Ejército al teniente general Ricardo Izurieta Caffarena, en una ceremonia que se realizó en la Escuela Militar de Santiago. Inmediatamente, al día siguiente, juró como senador vitalicio de la República, en el Congreso Nacional, en un acto marcado de incidentes protagonizados por miembros de partidos de izquierda, quienes portaron imágenes de detenidos desaparecidos⁶⁰⁹. Y es en esa condición, es detenido el viernes 16 de octubre de 1998 en Londres, generando un alto impacto en Chile, así como una gran cobertura mediática en el extranjero, que sólo se podía explicar por la característica del detenido. Este hecho hizo evidente la frágil gobernanza que se había desarrollado en Chile en materia de derechos humanos.

En ese contexto, el 21 de agosto de 1999, el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, convocó a una «Mesa de Diálogo», como un instrumento para enfrentar el tema pendiente de los derechos humanos, en especial, en lo que se refería a los detenidos desaparecidos.

“Una tarea pendiente es saber la suerte y paradero de los detenidos desaparecidos y recuperar sus cuerpos para que sus familias les den sepultura. Nos asiste la convicción de que con un trabajo de reconstitución de la información podríamos acceder a esta verdad”⁶¹⁰.

⁶⁰⁹ La Constitución de 1980, en el Capítulo V, respecto al Congreso Nacional, en el artículo 45, señala que pueden ser senadores de la República: “a) Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, salvo que hubiese tenido lugar lo previsto en el inciso tercero del número 1. del artículo 49 de esta Constitución. Estos senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo contempladas en los artículos 55º, 56º y 57º de esta Constitución”.

⁶¹⁰ Quezada, J.A., “Pérez Yoma fijó pautas de negociación”, *La Tercera*, Santiago, 22 de agosto, 1999. Citado por Lira, E., *El espejismo de la reconciliación política*, op. cit., p. 278.

Sin duda, el arresto de Pinochet había cambiado el escenario político, entre otras cosas, porque la comunidad internacional observó con mayor interés los temas referidos a derechos humanos. Por consiguiente, en esta nueva iniciativa, se incluyó a las Fuerzas Armadas, y en el que participaron representantes de los comandantes en jefe de cada una de sus ramas, así como también del General Director de Carabineros. “Para ninguno era misterio que la detención de Pinochet había cambiado las condiciones políticas”⁶¹¹. También se incluyó a representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados, religiosos y académicos, quienes acordaron un procedimiento destinado a hacer el mayor esfuerzo para ubicar los restos de los detenidos-desaparecidos⁶¹². El Ministro Edmundo Pérez Yoma, terminaba su discurso inaugural de la Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos, indicado que “El tejido cultural chileno está dañado y será un acto de cultura y de civilización restablecer la convivencia en nuestro país”⁶¹³. En las primeras reuniones para fijar la agenda de trabajo, se plantearon las apreciaciones de cada miembro de la Mesa. José Zalaquett, que había sido miembro de la Comisión sobre Verdad y Reconciliación señaló que la mesa debía proponerse dos objetivos centrales:

⁶¹¹ *Ibíd.*

⁶¹² *Suscribieron el Acuerdo*: Víctor Aravena Neftalí (Obispo Iglesia Metodista de Chile); Guillermo Blanco (Premio Nacional de Periodismo); Jorge Carvajal (Gran Maestro de la Gran Logia de Chile); Jaime Castillo Velasco (Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos); León Cohen (Representante de la Comunidad Judía en Chile); José Ignacio Concha (General de Aviación, Fuerza Aérea de Chile); Mario Fernández Baeza (Ministro de Defensa Nacional); Ángel Flisfisch (Subsecretario de Marina); Luciano Fouilloux (ex Subsecretario de Carabineros); Roberto Garretón (Abogado); Felipe Howard (Contralmirante, Armada de Chile); Elizabeth Lira (Sicóloga); Jorge Manzi (Coordinador de la Mesa de Diálogo); Pamela Pereira (Abogada); José Reinaldo Ríos Cataldo (General de Carabineros, Carabineros de Chile); Héctor Salazar (Abogado); Juan Carlos Salgado (Brigadier General, Ejército de Chile); Gonzalo Sánchez (Coordinador de la Mesa de Diálogo); Sol Serrano (Historiadora); Claudio Teitelboim (Premio Nacional de Ciencias); Sergio Valech (Obispo Auxiliar de Santiago); José Zalaquett (Abogado, Académico, Consultor), en *Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos*, Documentos, Revista de Estudios Públicos nº 79, Santiago, 2000, p. 481. La Mesa de Diálogo realizó cinco sesiones de manera ininterrumpida, 21 de agosto de 1999, Sesión de Constitución; 31 de agosto, 07, 14 y 24 de septiembre, y la última, fue el 05 de octubre de 1999.

⁶¹³ Pérez Y. E., *Discurso de Constitución de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos*, 21 de agosto de 1999. Disponible en, <<http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhy/Mesadedialogo/otros/DISCPYO M.htm>>. [Consultado en noviembre de 2011].

“a) Contribuir a establecer la verdad respecto de las más graves violaciones de derechos humanos del pasado, en lo que aún no ha sido esclarecida; esto es, principalmente, la verdad sobre la suerte y paradero de más de 900 detenidos desaparecidos.

b) Contribuir a que las responsabilidades sobre violaciones de derechos humanos y sobre otros hechos relacionados con el quiebre de nuestra convivencia, sean debidamente reconocidas y asumidas por las personas, sectores, institutos armados y partidos políticos que corresponda.

Si pudiéramos avanzar hacia el primero de esos objetivos, ya se justificaría nuestro trabajo, aunque el segundo, esto es, el reconocimiento de distintas responsabilidades, es también esencial para la tarea de refundación ética en que todos debiéramos estar empeñados y para enseñanza de futuras generaciones”⁶¹⁴.

Así como la publicación del Informe Rettig en 1991, generó un gran debate en la sociedad chilena, sobre el difícil pasado reciente, la Mesa de Diálogo, contribuyó a demostrar la vigencia de aquel pasado, sobre todo por el desafío que significó fomentar el diálogo sobre el tema de los detenidos desaparecidos. A ello contribuyó la metodología de trabajo que desarrolló la Mesa, donde los representantes de cada una de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, así como de organismos de derechos humanos, de las iglesias, y otros actores sociales como historiadores, psicólogos y abogados, debían responder a la pregunta “¿Qué objetivos queremos que cumpla la mesa de diálogo y de qué manera los podemos alcanzar?”, ya que se debían establecer las bases para un diálogo efectivo y eficiente que permitiera abordar la problemática de los derechos humanos en Chile, para ello, cada integrante debía presentar una intervención como respuesta la pregunta planteada. Como era de suponer no participaron en esta iniciativa los generales en retiro, así

⁶¹⁴ Zalaquett, J., *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 24 de septiembre de 1999, disponible en, <<http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhoy/Mesadedialogo/zalaquett.htm>>. [Consultado en noviembre de 2011].

como también la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y Ejecutados Políticos, quienes manifestaron que era una iniciativa de punto final. Sola Sierra, presidenta de la AFDD, declaraba en junio de 1999, días antes de fallecer el rechazo de la Agrupación para organizar una Mesa de Diálogo con las Fuerzas Armadas:

“Los familiares de las víctimas no tenemos que buscar ningún acuerdo ni sentarnos a ninguna mesa a negociar nada, porque aquí no hay nada que negociar. Nuestros planteamientos han sido muy claros: exigimos que se reconozca nuestro legítimo derecho a la justicia, y vamos a seguir planteando que aquí tiene que haber verdad y justicia plena; no verdades arqueológicas, ni verdades que surjan en una oficina a la que supuestamente llegaría un señor sin identidad a entregar una información que tampoco va a ser comprobable”⁶¹⁵.

Esta negativa, ocasionó tensiones dentro de los representantes de Derechos Humanos, entre ellos, Pamela Pereira, Jaime Castillo Velasco y Nelson Caucoto, quien solicitó dialogar sólo con los Comandantes en Jefes de las instituciones, finalmente este abogado no participó de la Mesa. En definitiva, la oportunidad que representaba la Mesa de diálogo para saber finalmente sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, permitió a su vez observar la insistencia de los representantes de las Fuerzas Armadas, de que “sólo el reconocimiento de las circunstancias de violencia y quiebre institucional que provocó el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 permitiría llegar a un acuerdo”⁶¹⁶. En la exposición que realizaron las Fuerzas Armadas, el Brigadier Juan Carlos Salgado señaló:

“(…) de suma injusticia que se ponga en tela de juicio toda la trayectoria institucional del Ejército –de casi dos siglos de contribución a los derechos esenciales de todos los chilenos- por

⁶¹⁵ Declaración de Sola Sierra, en *Punto Final* n° 941, septiembre de 1999. Véase “Pasado y Futuro. El Chile pendiente”, en *Revista Ercilla* n° 3.119, Santiago, septiembre de 1999.

⁶¹⁶ Lira, E., *El espejismo de la reconciliación política*, op. cit., p. 282.

determinadas situaciones que no están siendo analizadas con la objetividad e imparcialidad que requiere un enfoque histórico justo y no sacado de contexto.

Comprendiendo lo doloroso de la situación de los detenidos desaparecidos y asumiendo que es uno de los temas de mayor impacto en los proyectos de reconciliación y unidad nacional, no parece conveniente excluir otros temas relativos a los derechos humanos o que propendan a la pacificación y concordia nacional. En tal sentido, debe evitarse hacer sinónimo el tema de los detenidos desaparecidos con el de los derechos humanos”⁶¹⁷.

Por su parte la destacada abogada Pamela Pereira señaló en su intervención que:

“El golpe militar no sólo se produjo para enfrentar una crisis institucional en el país, sino que los mentores del mismo buscaron imponer un determinado modelo de sociedad, y en ese sentido tuvo carácter refundacional para sociedad chilena.

El modelo se nos impuso a sangre y fuego, y eso explica el porqué el gobierno de las FF.AA. llevó adelante políticas represivas de carácter institucional, sistemáticas y masivas que claramente tuvieron por objeto exterminar, hacer pedazos toda estructura real o potencial de los partidos políticos de izquierda, de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales”⁶¹⁸.

Los historiadores invitados a la Mesa de Diálogo fueron Gonzalo Vial, quien había redactado el Marco Histórico del Informe Rettig. Su intervención en la Mesa, estuvo centrada en aclarar la metodología de trabajo de la Comisión.

⁶¹⁷ Salgado, J. C. Brigadier General, *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 31 de agosto de 1999. Disponible en, <<http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhoy/Mesadedialogo/salgado.htm>>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶¹⁸ Pereira, P., *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 31 de agosto de 1999. Disponible en, <http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhoy/Mesadedialogo/pereira.htm>>. [Consultado en octubre de 2011].

Por su parte, la historiadora Sol Serrano, planteó la necesidad de la reflexión sobre el pasado y que a su juicio significa asumir los errores de aquel.

“El pasado está siempre presente a través de la memoria, pero el pasado no está siempre pendiente. El tiempo no pasó en vano. La crisis y sus secuelas nos han transformado y por ello creo que estamos en un momento propicio de avanzar en algo que ya se comenzó: hacer del pasado historia, es decir, reflexión para el presente”⁶¹⁹.

La psicóloga Elizabeth Lira, planteó la necesidad reconocer la existencia de las diferentes visiones sobre el pasado reciente.

“(...).Situaciones como el padecimiento de torturas, la ejecución, la detención y desaparición de personas, el exilio y otras formas de persecución generaron sufrimiento y miedo. Este sufrimiento y miedo han atravesado a la sociedad, afectando la convivencia social y constituyendo la marca de la ruptura y de la tragedia, poniendo en evidencia viejos problemas de la sociedad chilena de carácter institucional y político. (...) El Logro de la paz social ha de iniciarse con el reconocimiento de la existencia de estas diferentes visiones en una sociedad diversa y plural. (...) Lo que divide a la sociedad, sin embargo, es la existencia de violaciones de los derechos de las personas, las que han sido negadas sistemáticamente contradiciendo la experiencia de los miles que la sufrieron”⁶²⁰.

⁶¹⁹ Serrano, S., *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 07 de septiembre de 1999. Disponible en, <http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhoy/Mesadedialogo/serrano.htm>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶²⁰ Lira, E., *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 14 de septiembre de 1999. Disponible en, <http://www.derechoschile.com/prensa/espanol/temas/ddhhoy/Mesadedialogo/lira.htm>. [Consultado en octubre de 2011].

Las conclusiones emitidas por la Mesa de Diálogo debieron esperar unos meses, ya que sus equilibrios se vieron tensionados debido al regreso de Pinochet a Chile luego de haber quedado en libertad el 2 de marzo de 2000. Si bien fue recibido como un héroe en el aeropuerto de Santiago, le esperaban alrededor de setenta querellas, junto a la solicitud de desafuero que había encauzado el juez Juan Guzmán. A ello se sumaron las elecciones presidenciales, que se realizaron en segunda vuelta. En consecuencia, la iniciativa que creada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, debió ser retomada por Ricardo Lagos Escobar, quien el 11 de marzo de 2000, había asumido como presidente de Chile. El texto final de la Mesa de Diálogo, fue entregado al nuevo presidente el 13 de junio del 2000, quién se dirigió al país indicando que:

“(.)La valentía y coraje tiene muchas formas. Y por eso, en el nombre de Chile, quiero dar las gracias por lo alcanzado. Quiero agradecer la valentía y el coraje con que las Fuerzas Armadas y Carabinero de Chile han reconocido lo que ocurrió en materia de violaciones de derechos humanos.

No me cabe duda que vamos a avanzar y vamos a encontrar a aquellos desaparecidos. No me cabe duda que, llegado el momento, se podrá establecer la data precisa de su muerte, y no me cabe duda que cuando ello ocurra, el poder judicial hará lo que corresponde, conforme a derecho”⁶²¹.

Por su parte, las reflexiones que realizó la Mesa de Diálogo, plantearon una vez más que Chile había experimentado “a partir de la década de los 60’ una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar”⁶²². Frente al tema de la ubicación de los detenidos desaparecidos, hacía un llamado a la comunidad nacional en su conjunto –

⁶²¹ *Discurso de Ricardo Lagos Escobar*, al recibir el *Acuerdo Final de la Mesa de Diálogo*, 13 de junio de 2000. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Discurso_Presidente.pdf>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶²² “Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos”, en *Revista de Estudios Públicos* nº 79, 2000, p. 482. Ver anexo nº 5.

instituciones civiles, militares, religiosas y éticas- de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, bien de otorgar información que permita clarificar su paradero. Dentro de los compromisos adoptados, las Fuerzas Armadas y de Orden se comprometieron a desplegar en plazo de seis meses, “los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil, para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”⁶²³. Así también lo hicieron las instituciones religiosas y éticas que participaron en la mesa de diálogo, promoviendo “mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esta vía, la lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información”⁶²⁴. Para ello se aprobó la Ley n° 19.687, que establece obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos⁶²⁵.

En definitiva, lo que generó la Mesa de Diálogo reunida por iniciativa del Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, a fines del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, mientras Augusto Pinochet se encontraba encarcelado en Londres, fue el reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas, de “la responsabilidad por los atropellos a los derechos humanos cometidos por efectivos militares, alejándose de la postura del general Pinochet que había descalificado el Informe Rettig. Incluso admitieron haber hecho desaparecer cadáveres, de desaparecidos que fueron arrojados al mar”⁶²⁶. El texto preparado por civiles y militares, otorgaba las directrices de aquel ideario de reconciliación nacional planteado en el programa de gobierno de Patricio Aylwin. En este contexto, cobra vital importancia el documento redactado por el entonces General del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre (2002-2006), titulado “Ejército de Chile: El fin de una visión”, y en el que calificaba dicha

⁶²³ *Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, Reflexiones Finales*. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Declaracion_Acuerdo_Final.pdf>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶²⁴ *Ibíd.*

⁶²⁵ Chile, *Ley n° 19.687 que establece obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos*, del 28 de junio del 2000. *Diario Oficial* del 06 de julio de 2000.

⁶²⁶ Huneeus, C., “*El Informe Valech y su aporte al fortalecimiento de la democracia*”, en *Revista Mensaje* n° 536, Santiago, UAH, 2005, p. 2.

reunión como un “paso más en la contribución que las Fuerzas Armadas han venido haciendo para la reconciliación nacional”⁶²⁷, refiriéndose de manera global “a todas las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”⁶²⁸.

Por otro lado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estimaron insuficiente las resoluciones del Mesa, ya que a su juicio, lo que se buscaba era “una ley de punto final, frente al tema de los detenidos desaparecidos, puesto que sólo consideraba el paradero de las víctimas, y no permitía un proceso judicial contra los culpables. “Aquí se ha dejado de lado la justicia, y el propio Presidente Lagos no lo mencionó en su discurso. Y si bien nosotros queremos encontrar a nuestros seres queridos, además queremos que los culpables de esos crímenes paguen por ellos”⁶²⁹. Por consiguiente, y luego de sortear las dificultades que tenían que ver con el nuevo clima político que vivía el país debido al caso Pinochet, finalmente en enero de 2001, se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por la Mesa de Diálogo. Paradojalmente, a diferencia de la publicación del Informe Rettig, no existió una difusión masiva de su contenido.

“Como resultado de los acuerdos alcanzados, en enero de 2001 las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron un listado señalando lo que habría sido el destino final de 200 víctimas, entre ellas 180 identificadas y 20 NN. Los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto se sintieron fuertemente impactadas por estos antecedentes, que dio a conocer oficialmente al país el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, haciendo entrega de tal información a la Corte Suprema y solicitándole reforzar las

⁶²⁷ *Discurso del Ministro de Defensa Jaime Ravinet*, en el Seminario “*Ejército y Derechos Humanos compromiso para el siglo XXI*”, Escuela Militar, Santiago, 07 de diciembre de 2004. Disponible en, < http://www.ejercito.cl/images/uploads/file_49c930e4c432f.pdf>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶²⁸ Cheyre, J. E., “*Ejército de Chile: El fin de una visión*”, 2004. Disponible en, <http://www.ejercito.cl/admin/uploads/file_4406f16f61ae8.doc?PHPSESSID=5d3a1b2911fd34161e65de1b82b50606>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶²⁹ “Declaración de Viviana Rodríguez, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos”, *La Nación*, Santiago, 14 de junio, 2000, p. 5

instancias judiciales para avanzar en el establecimiento de la verdad y aclarar el destino de los detenidos desaparecidos. La Corte Suprema, a su vez, procedió a designar Ministros en Visita, jueces especiales con dedicación exclusiva y jueces preferentes y ordenó la reapertura de procesos en torno al tema, agilizando notablemente la acción de los tribunales en todo el país y abriendo de hecho nuevas posibilidades para establecer el destino de las víctimas del período 1973-1990”⁶³⁰.

Finalmente al recibir el texto definitivo de la Mesa de Diálogo, Ricardo Lagos destacaba la importancia del esfuerzo de la Mesa, señalando que “Resolver este problema, que es la herida más profunda que afecta el alma del pueblo de Chile, nos va a permitir retomar el hilo de nuestra historia, empinándonos por encima de los bandos en que nos dividimos como nación. Es aquí donde está la esencia de este acuerdo”⁶³¹.

En los seis años de gobierno de Eduardo Frei, se observan dos momentos, el primero caracterizado por una aparente estabilidad que manifiesta en el equilibrio entre las instituciones, las Fuerzas Armadas, y la oposición. El segundo momento, está caracterizado por la detención de Pinochet en Londres, instalándose en el debate público el pasado reciente, esto es, el golpe de estado, la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, cuestión que repercutió no sólo en los partidos políticos de oposición y gobierno, sino en la sociedad en su conjunto.

⁶³⁰ Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/mesa_dialogo.html>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶³¹ *Discurso de Ricardo Lagos Escobar*, al recibir el documento final de la *Mesa de Diálogo*, Santiago, 13 de junio de 2000, en Lagos Escobar, R., *Abrir las puertas. Discursos escogidos marzo 2000 – mayo 2001*, tomo 1, Santiago, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, 2002, p. 113.

3.7.- Ricardo Lagos Escobar: “El destino ha querido que sea el primer presidente del siglo XXI”.

Elegido presidente en segunda vuelta, Ricardo Lagos Escobar, asumió el mando de la nación el 11 de marzo de 2000⁶³². En su primer discurso, subrayó que sería el presidente de todos los chilenos, y que sería «el gobierno de las reformas, para llegar a ser un país desarrollado en el 2010». Dos días después de haber ocupado el mando de la nación, dispuso abrir las puertas del Palacio de La Moneda, que se mantenía cerrado casi por tres décadas, permitiendo que se conociera este patrimonio histórico, hecho que fue muy bien recibido por el conjunto de la ciudadanía. En el discurso presidencial del 21 de mayo de 2000, señalaba los objetivos que se trazaba alcanzar durante su mandato:

“Tres son los pilares rectores en donde pondremos el énfasis fundamental próximos años:

El primero: Abrir las puertas al desarrollo. Nadie debe quedar sin acceso al bienestar que surja del crecimiento económico y de la incorporación de Chile a la revolución tecnológica!

El segundo: Integrar al país. ¡Todo chileno y toda chilena debe estar incorporado al mundo moderno mediante servicios e infraestructura adecuados, con más atribuciones y responsabilidades para las regiones y para las comunas donde habita!

Y el tercero: Engrandecer el espíritu de los chilenos. ¡No debemos tener miedo a ampliar las libertades, promover la participación, expandir el conocimiento, la cultura y la ciencia, incorporarnos al

⁶³² Las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de 1999, los chilenos debían votar para elegir el primer presidente del siglo XXI. Se presentaron seis candidatos, Arturo Frei Bolívar 0,38%; Sara María Larraín Ruiz-Tagle, 0,44%; Gladys Marín Millie, 3,19%; Tomás Hirsch Goldschmidt, 0,51%; Ricardo Lagos Escobar, 47,96%; Joaquín Lavín Infante, 47,51%. Los dos últimos debieron ir a segunda vuelta el 12 de enero de 2000, ganando Ricardo Lagos E., con el 51,31% de los votos, por sobre Joaquín Lavín que obtuvo, el 48,69%. Disponible en, <http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/index1999_p2v.htm>. [Consultado en octubre de 2011].

mundo de nuestros días, vigorizar las familias y las comunidades!”⁶³³.

El tercer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, abordar los temas en materia de derechos humanos que habían quedado pendientes. Estos eran, concluir las tareas de la Mesa de Diálogo, y hacer frente a las repercusiones del regreso de Pinochet luego de su arresto en Londres. Desde esta perspectiva, el gobierno de Lagos, insistió en respetar la autonomía e independencia de los Tribunales de Justicia, enfatizando que en Chile existían las condiciones para juzgar a Pinochet. Subrayó la necesidad de dejar a un lado el pasado difícil, no para olvidarlo sino para aprender de él. “Este aprendizaje, estos Nunca Más, se nutren de la memoria, no del olvido. Recordar es, para nuestra sociedad, un gran logro por el que se ha esforzado de una y otra forma”⁶³⁴. Las diligencias para desaforar a Pinochet, se masificaron dentro de los abogados de derechos humanos, así como también el clima político se tornó denso, ya que la derecha política le enrostraba al gobierno, lo inviable que significaba enjuiciar a Pinochet. Finalmente el 5 de junio de 2000, Pinochet fue oficialmente desaforado por 13 votos contra 9, por existir «sospecha fundada» de su participación criminal en el caso Caravana de la Muerte⁶³⁵.

⁶³³ *Mensaje presidencial de Ricardo Lagos Escobar*, Valparaíso, 21 de mayo 2000. Disponible en, <http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_2000.pdf>. [Consultado en octubre de 2011].

⁶³⁴ Lagos E., R., *Abrir las puertas. Discursos escogidos. Marzo 2000- Mayo 2001*. Tomo I. Gobierno de Chile. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Secretaría de Comunicación y Cultura, Santiago, enero de 2002, pp. 235- 236.

⁶³⁵ Se llamó «Caravana de la Muerte» a la columna militar que recorrió Chile, cargo del oficial Sergio Arellano Stark en octubre de 1973 y ejecutó a 72 prisioneros políticos. La comitiva visitó las ciudades de Valdivia, Temuco, Linares, Cauquenes, Talca, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama principalmente.

El Informe Rettig señala que “La comitiva estuvo físicamente presente en las ciudades y horas de todas ellas.

En todas, se pretextó “la ley de fuga”; hace excepción el caso de Antofagasta, donde en algunos casos se inventaron (según parece) Consejos de Guerra para los fines de ocultamiento de la verdad, y de regularización formal de la documentación pertinente.

Por último, las ejecuciones todas fueron selectivas, de socialistas, comunistas, y miristas, con énfasis sobre los primeros. Se advierte que, de 72 ejecutados, 40 son socialistas”, *Informe Nacional de la Comisión sobre Verdad y Reconciliación*, op. cit., tomo 1, p. 122.

La prensa internacional señaló que: “En julio de 1998, Augusto Pinochet reconoció a la prensa que le encargó al general Arellano la misión de ‘agilizar’ los juicios en el norte. Asimismo, admitió que “hubo ejecuciones luego de juicios de guerra”, en el marco de la ‘guerra interna’

Nuestro interés de abordar el gobierno de Ricardo Lagos, es porque en materia de derechos humanos, se elabora el segundo informe de verdad, que siguiendo la tarea iniciada en el gobierno de Patricio Aylwin, significó un gran avance, debido a que el objetivo de esta nueva iniciativa fue el reconocimiento de la tortura como práctica sistemática que fue aplicada el Estado de Chile, durante la dictadura militar (1973-1990). En efecto, el 12 de agosto de 2003, Lagos presentaba al país su propuesta sobre derechos humanos, “No hay mañana sin Ayer”. En el reafirmaba la verdad, la justicia y la reparación como los tres valores a los que no renunciaría en su gobierno, asumiendo a su vez, la deuda que tenía el estado en esta materia, subrayando la necesidad de que nadie debía quedar ajeno a la profunda división que había ocurrido en los chilenos y que había conducido «a la catástrofe antidemocrática que todos conocemos».

“Intentar comprender y asumir el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió.

Vimos cómo agentes del Estado persiguieron organizadamente, y con inusitada violencia, a quienes pensaban distinto. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se asesinó, se torturó, se detuvo y se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y

que vivió el país, aunque negó haber dado ‘instrucciones de matar a nadie’, desligando su posible responsabilidad de los hechos.

Los procesados por el delito de ‘secuestro calificado’ de 19 presos políticos en las localidades de Cauquenes, Calama y Copiapó fueron el general retirado Sergio Arellano Stark, ex jefe de la DINA; los coroneles Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo González, el brigadier Pedro Espinoza Bravo - número dos de la DINA - y el capitán Patricio Díaz Araneda.

En agosto de 1999, el juez Guzmán solicitó a EEUU la extradición de otro miembro de la comitiva, el ex mayor Armando Fernández Larios, amparado por el régimen estadounidense de protección a testigos por colaborar en la investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976. La llamada «Caravana de la muerte» es uno de los casos más emblemáticos de la represión de Pinochet.

El 23 de enero de 2001 el juez chileno Juan Guzmán pudo interrogar, una vez realizadas las pruebas médicas que determinaban su estado de salud normal, al ex general Augusto Pinochet para averiguar su responsabilidad en los 72 asesinatos y homicidios atribuidos a la llamada “Caravana de la muerte”. De las 210 querellas que afrontó Pinochet en Chile, este caso es el que más indicios ha aportado sobre la presunta responsabilidad del ex general en las violaciones de derechos humanos en Chile. La apertura del auto de procesamiento sobre este caso tuvo lugar el 8 de junio de 1999”. Disponible en,

<<http://www.elpais.com/especiales/2001/pinochet/ante/represion.html>>.

[Consultado en noviembre de 2011].

todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas”⁶³⁶.

En su propuesta, valoraba el camino iniciado en los gobiernos democráticos, en busca de la verdad y la justicia, reconociendo el significado que había tenido la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y el esfuerzo de la Mesa de Diálogo. Sin embargo, asumía las tareas pendientes en el tema de los derechos humanos, para ello trazaba su propuesta sobre la base de cuatro objetivos fundamentales:

“Alcanzar el conocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo ético: la ubicación de las personas detenidas desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

Persistir en nuestra conducta de asegurar la independencia, agilidad y eficacia en la acción de los tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en la interpretación de ésta. Ello supone impulsar iniciativas legislativas cuyo fin sea facilitar y agilizar las investigaciones judiciales.

Profundizar y mejorar las medidas de reparación que hasta ahora se han aplicado, y complementarlas en caso de vacíos o situaciones que ameriten ser incorporadas.

Mejorar, a través de iniciativas legislativas, de diseño y acciones institucionales, la protección, promoción y garantía del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales”⁶³⁷.

⁶³⁶ Lagos Escobar, R., *No hay Mañana sin Ayer. Propuesta en materia de derechos humanos*, Santiago, Gobierno de Chile, 12 de agosto de 2003. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/propuesta_DDHH.pdf>. [Consultado en noviembre de 2011]. Véase *Revista de Estudios Públicos* nº 92, Santiago, CEP, 1993, p. 315.

⁶³⁷ Lagos Escobar, R., *No hay Mañana sin Ayer. Propuesta en materia de derechos humanos*, Santiago, Gobierno de Chile, 12 de agosto de 2003. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/propuesta_DDHH.pdf>. [Consultado en noviembre de 2011]. Véase *Revista de Estudios Públicos* nº 92, Santiago, CEP, 1993, p. 319.

En el mensaje presidencial de Lagos, donde expuso el contenido de su propuesta sobre derechos humanos, planteaba la convicción de que no constituía una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento ocasionado. Destacó la tarea pendiente que hacerse cargo de ese pasado, sobre todo en lo relacionado con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la lección que sociedad se debe aprender sobre los errores del pasado, desestimando cualquier referencia al olvido. “Muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con dar vuelta la página o con echar tierra sobre la memoria. Una sociedad no se hace más humana negando el dolor, el dolor de su historia. Al contrario, con ello sólo se denigra y envilece”⁶³⁸.

En consecuencia, el 26 de septiembre de 2003, se crea Decreto Supremo N°1.040 y el 11 de noviembre del mismo año se publica en el Diario Oficial, la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos. Su función sería la de órgano asesor del Presidente de la República, y su objetivo exclusivo sería “determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”⁶³⁹. Entre las razones que planteaba el decreto de creación de la Comisión, señalaba que:

“(..) cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones”; que “muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter

⁶³⁸ Lagos Escobar, R., Mensaje al país al dar a conocer propuesta en materia de derechos humanos “No hay mañana sin ayer”, Santiago, Gobierno de Chile, 12 de agosto de 2003. Disponible en, <http://www.ddhh.gov.cl/propuesta_mensaje.html>. [Consultado en noviembre de 2011].

⁶³⁹ Chile, *Decreto Supremo n° 1.040*, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la Verdad acerca de las violaciones de Derechos Humanos en Chile, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, 26 de septiembre de 2003. Véase anexo n° 6.

de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado”, y que “sólo en la medida que se esclarezca completamente la verdad, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”⁶⁴⁰.

Señalaba que correspondería a la Comisión proponer formas y medidas de reparación a las víctimas reconocidas como prisioneros políticos o torturados. Así como también que dicha Comisión no tendría competencias jurisdiccionales, y que su objetivo final era la elaboración de “un informe lo más completo posible de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, reuniendo los antecedentes aportados por los interesados que permitan acreditar de manera fehaciente dichas circunstancias”⁶⁴¹. A contar del 13 de noviembre de 1999, comenzó el trabajo de recopilación de antecedentes sobre las personas que sufrieron la prisión y la tortura en el período de competencia de la Comisión, y contaría con seis para desarrollar sus funciones desde su aprobación⁶⁴². Esta Comisión estuvo integrada por Monseñor Sergio Valech Aldunate, quien la presidirá, Miguel Luis Amunátegui Monckeberg, Luciano Fouilloux Fernández, José Antonio Gómez Urrutia, Elizabeth Lira Kornfeld, María Luisa Sepúlveda Edwards, Lucas Sierra Iribarren y Álvaro Valera Walker.

El arduo trabajo desarrollado por la Comisión dentro de los plazos estipulados, permitió que el 28 de noviembre de 2004, el presidente Ricardo Lagos, en su mensaje al país titulado “Nunca más vivirlo, nunca más olvidarlo”, expuso los resultados que había preparado la Comisión que se plasmaron en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, apellido del obispo que presidió dicha Comisión. Las primeras palabras de

⁶⁴⁰ Ibíd.

⁶⁴¹ Ibíd., artículo Sexto.

⁶⁴² Período que fue ampliado a tres meses para la elaboración del Informe correspondiente. Luego, mediante el Decreto Supremo del Interior n° 889, de 2004, dicho plazo fue ampliado hasta el 30 de noviembre de 2004. Véase *Informe Nacional sobre prisión política y tortura*, capítulo II, “Funcionamiento de la Comisión”, Santiago, 2004, p. 15.

Lagos plantearon sólo el inicio de lo que más tarde se conocería a través de los cientos de páginas del Informe.

“Creo no equivocarme al señalar que este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo. Ha sido capaz de entrar -treinta y un años después- a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a un abismo profundo. He leído y analizado este Informe con mucho cuidado. Allí está el testimonio de más de 35 mil personas residentes en Chile y el extranjero. Veintiocho mil de esos testimonios han sido aceptados como válidos, y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos para ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas tendrán derecho a que su situación sea revisada por la Comisión, la cual volverá a estudiar sus antecedentes para tomar una decisión definitiva.

La conclusión es clara e insoslayable: la prisión política y la tortura fue una práctica institucional de Estado, absolutamente inaceptable, y por completo ajena a la tradición histórica de Chile⁶⁴³.

Los resultados de la Comisión visibilizaron la existencia de recintos - públicos y secretos, utilizados durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, para ejercer la práctica de la tortura y otros padecimientos, así como de “agentes del Estado que los practicaron, civiles y uniformados, los medios empleados, las leyes que ampararon las prácticas represivas, las actuaciones de los tribunales y otros”⁶⁴⁴. Lo que expuso el Informe Valech, fue la evidencia de la sistematicidad de la práctica de la tortura y otros apremios, que se ejercieron sobre hombres y mujeres de diferentes edades y condición social. Asimismo, develó los horrores cometidos. El Informe señaló que, “la experiencia de la

⁶⁴³ “Mensaje presidencial, *Nunca más vivirlo, nunca más negarlo*”, Ricardo Lagos Escobar, Santiago, *La Nación*, 28 de noviembre de 2004. Disponible en, <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041128/pags/20041128210542.html>. [Consultado en noviembre de 2011].

⁶⁴⁴ *Ibíd.*

prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente". Lagos subrayó que este Informe, «desenterraba el olvido», asimismo enfatizó enfático que, "si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor"⁶⁴⁵.

Siguiendo la metodología de su antecesora, la Comisión sobre Verdad y Reconciliación, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, también elaboró medidas de reparación que se orientaron en tres ámbitos:

"En primer lugar, las medidas institucionales, las cuales cristalizarán en la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá a través de la educación el respeto por los derechos humanos, a la vez que se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada desde la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.

En segundo lugar, las medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de la terrible experiencia que hemos conocido. Estas medidas, por cierto, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico"⁶⁴⁶.

Otra cosa fue la puesta en marcha de estas medidas, ya que debido al delicado clima político que se percibió luego de la publicación del Informe

⁶⁴⁵ Ibíd.

⁶⁴⁶ Ibíd.

Valech, gran parte de las instituciones de manifestaron realizando declaraciones públicas, a propósito de los resultados que emitió la Comisión. Esto generó en la sociedad chilena, lo que Wilde denomina como «irrupciones de memoria», propiciando que ese pasado se hiciera nuevamente presente. En efecto, las reacciones frente al detalle de la tortura y prisión política, así como de los cientos de centros de detención –públicos y clandestinos - que existieron en todo el país, llevaron a que se reabiera nuevamente el debate sobre el pasado reciente. Cuestión que se tornó mucho más complejo, luego de la situación del caso Pinochet, las cientos de querellas que pesaban en su contra, a lo que se sumó el descubrimiento de millonarias cuentas bancarias, que hicieron prever sobre todo entre sus más fieles adherentes, el enriquecimiento del general durante el período en que había dirigido los hilos de la nación⁶⁴⁷.

3.7.1.- Reacciones frente al Informe Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

En consecuencia, las reacciones frente al contenido del Informe sobre Prisión Política y Tortura, permitieron a su vez apreciar una vez más lo presente que estaba en la sociedad chilena ese pasado. Desde la iglesia, el entonces arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, afirmaba que “el país había sido capaz de mirar su propia historia. Enfatizando que el documento había que tomarlo como un trozo de verdad, una verdad dolorosa”⁶⁴⁸. Estas repercusiones también se hicieron sentir en las ramas castrenses. En el Seminario que se realizó en la Escuela Militar de Santiago, días después de la publicación del Informe Valech, el Ministro de Defensa

⁶⁴⁷ En 1988, Pinochet fue arrestado en Londres, acusado de crímenes contra la Humanidad, a la solicitud del juez Baltasar Garzón. Quien luego, ordenó congelar sus cuentas bancarias. A partir de esta orden, se develaron las cuentas bancarias que el ex general mantenía de forma secreta en el Banco Riggs, abriendo una verdadera caja de pandora. Véase, Kornbluh, P., Pinochet: *Los archivos secretos*, Barcelona, Crítica, 2004. (*The Pinochet File A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*, National Security Archive, 2003). “El Botín de Pinochet”, en *Revista Punto Final*, nº 572, Santiago, 23 de julio al 05 de agosto de 2004.

⁶⁴⁸ Entrevista otorgada el 08 de noviembre de 2004 a diferentes medios de comunicación, entre ellos, Radio Cooperativa. Disponible en, <http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20041108/pags/20041108193703.html>.[Consultado en diciembre de 2011].

Jaime Ravinet, expresaba que “las Fuerzas Armadas y Carabineros han validado la cruda realidad expuesta por los testimonios allí recogidos”⁶⁴⁹. En la misma ocasión desde el Ejército, el Comandante en Jefe Juan Emilio Cheyre, señaló que las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, podían tener justificación ética.

“El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación.

Asimismo, se ha conolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse.

Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente.

Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo

⁶⁴⁹ *Discurso del Ministro de Defensa, Jaime Ravinet, en Seminario “Ejército y Derechos Humanos compromiso para el siglo XXI”, Escuela Militar, Santiago, 07 de diciembre de 2004. Disponible en, < http://www.ejercito.cl/images/uploads/file_49c930e4c432f.pdf>. [Consultado en octubre de 2011].*

contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora”⁶⁵⁰.

Por su parte, en la declaración pública emitida por Policía de Investigaciones, valoraba la acción de la Comisión Valech, y reconocía la profunda división y antagonismo interno, de la que habían surgido tantos sufrimientos, destacando que para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos, se han realizado muchos esfuerzos, “de grupos humanos de alta jerarquía moral y reconocimiento público, como así también el esfuerzo sistemático y permanente de los Tribunales de Justicia”, agregando que:

“2.- En los contenidos de esa verdad se señalan prácticas institucionales y conductas de integrantes de esta Policía, que constituyeron graves crímenes contra los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad humana. No obstante, también es preciso reconocer (...), que parte de la familia policial también fue víctima de la persecución y la tortura cumpliendo su deber.

3. Es válido señalar que nuestra Institución no concurrió con su pequeña fuerza, ni con sus armas ni hombres, al quiebre de la democracia chilena. Como todas las reparticiones públicas, la Policía de Investigaciones de Chile debió acatar las condiciones impuestas hace 31 años. En ese contexto, no fuimos ajenos a actos que causaron daño, dolor y sufrimientos extremos a muchas personas, contradiciendo la ética y la deontología policial, así como las misiones que la Constitución Política y la Ley encargan a esta Institución, por lo que representan la más grave afrenta a su historia y vocación de servicio público.

4.- En virtud de lo expresado, como Director General considero necesario asumir dichas verdades de la historia social de nuestro

⁶⁵⁰Cheyre, J. E., “*Ejército de Chile: El fin de una visión*”, *La tercera*, 05 de noviembre de 2004. Disponible en, <http://www.ejercito.cl/admin/uploads/file_4406f16f61ae8.doc?PHPSESSID=5d3a1b2911fd34161e65de1b82b50606>. [Consultado en noviembre de 2011].

país y, consecuentemente, solicito el perdón de todos los compatriotas”⁶⁵¹.

Esta es la única declaración en que desde una institución castrense se pide expresamente perdón por las atrocidades cometidas por parte de sus integrantes. Por su parte la Armada de Chile, también emitió una declaración en la que si bien aceptó las conclusiones del Informe Valech, señalando que nada justificaba las violaciones a los derechos humanos, insistió en que no se podía disociar del clima de polarización y odio que se había generado desde antes de 1973.

“1. La Armada de Chile en general acoge con generosidad y cristiana humildad el Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, basándose principalmente en la competencia profesional, experiencia y calidad moral de los miembros de la citada Comisión. Valoramos el esfuerzo realizado en busca de la verdad.

3. No obstante, independientemente de las observaciones procesales que pudiera merecer el Informe, su lectura es impactante y conmovedora, y nadie podría desconocer que en Chile se violaron gravemente los Derechos Humanos y la dignidad de muchas personas inocentes, por parte de Agentes del Estado. En este contexto, algunos miembros de la Armada, desviándose de la recta doctrina, también participaron en estos luctuosos hechos, particularmente durante los primeros meses inmediatamente posteriores al 11 de Septiembre de 1973.

4. Al respecto, la Institución deja expresa constancia que jamás ha validado y ni siquiera insinuado la aplicación de tortura. La violación de los Derechos Humanos nunca ha sido una política Institucional. No obstante, a la luz de los testimonios recogidos por la Comisión, no podemos sino reconocer que en la cadena

⁶⁵¹ “Declaración pública del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile”, Arturo Herrera, 13 de noviembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005, p. 509.

jerárquica de quienes estaban encargados de los procesos de interrogación, hubo personas y mandos que cometieron, autorizaron o simplemente permitieron que en los recintos de detención a su cargo ocurrieran tan lamentables hechos. Tales responsabilidades en lo ético y lo penal son estrictamente individuales. En todo caso, la Armada a corto andar enmendó rumbos y eliminó estas prácticas contrarias a su ser íntimo”⁶⁵².

Asimismo, en la breve declaración emitida por Carabineros de Chile, valoraba los esfuerzos realizados por la Comisión, rechazando que parte de sus integrantes estuvieran implicados en estos temas: “Carabineros repudia que personal de sus filas tuviese participación en casos de violaciones a los derechos humanos, donde se cuentan personas que ejercían el mando jerárquico y que tuvieron responsabilidad por acción u omisión”⁶⁵³. Así también la Fuerza Aérea de Chile, valoró las gestiones de la Comisión, señalando que:

“3. Los hechos mencionados en el informe ocurrieron en un marco de convulsión, de polarización y de escenarios confusos asociados a la guerra fría, que afectaron a la sociedad en su conjunto, dividiéndola ideológicamente en sectores irreconciliables y sobre los cuales cada chileno puede tener su opinión.

En ese contexto, el informe que motiva esta declaración atribuye a personal de la Fuerza Aérea la comisión de actos de privación ilegítima de libertad y torturas, ocurridos principalmente en un primer período. El documento contempla un número significativo de casos e involucra a unidades de la Institución.

El contenido del informe de la Comisión compromete a la Fuerza Aérea, en consideración a la extensión de las situaciones que describe, como también por la tardanza de algunos niveles de

⁶⁵² “Declaración Pública de la Armada de Chile”, 30 de noviembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, op. cit., p. 511. Disponible en, <www.armada.cl>.[Consultado en noviembre de 2011].

⁶⁵³ “Comunicado oficial de Carabineros de Chile, 30 de noviembre de 2004”, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, op. cit., p. 513. Disponible en, <www.carabinerosdechile.cl>.[Consultado en noviembre de 2011].

mando en la adopción de medidas destinadas a reafirmar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona.

Lo expresado anteriormente no se inscribe en la tradición histórica de la Institución y tampoco en la aplicación de la recta doctrina. Prueba de ello es que la mayoría de los integrantes de la Institución siempre estuvo dedicada a sus labores profesionales habituales.

En la Fuerza Aérea las responsabilidades corresponden siempre a los mandos, quienes tienen la obligación moral y legal de velar para que la Institución no se aparte nunca de la finalidad para la cual fue creada”⁶⁵⁴.

La Corte Suprema, también emitió un comunicado expresando su opinión respecto al Informe, y como el resto de las instituciones, valoraba los esfuerzos que búsqueda de verdad, dejando pública constancia de su consternación frente a los hechos sucedidos. A pesar de ello expresaba que se veía en la obligación de aclarar algunos puntos en que sus integrantes, se veían particularmente vinculados. En su declaración, fueron enfáticos al presentar su molestia en lo que se refería a su responsabilidad como jueces en el período de competencia de estudio de la Comisión, y en el que de acuerdo a lo señalado en ella, fueron muchas las personas que necesitaron de su ayuda.

“3. Que muy distinto es el parecer de la Corte sobre los reproches genéricos que se vierten en el mismo informe en relación con el Poder Judicial, en especial, cuando se afirma que en el periodo más crítico, inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973, habría existido de parte de los tribunales o de los ministros de la Corte Suprema de la época, una suerte de connivencia con quienes cometieron los excesos y violaciones que se han conocido. Esto importa un grave cargo, que carece de sustento

⁶⁵⁴ “Declaración Pública de la Fuerza Aérea de Chile”, *La Nación*, 01 de diciembre de 2004. Disponible en, <http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/declaracion_publica.pdf>. [Consultado en noviembre de 2011].

objetivo en el propio informe y que no es posible aceptar, ya que no existen antecedentes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos magistrados se hayan podido concertar con terceros para permitir detenciones ilegítimas, torturas, secuestros y muertes”⁶⁵⁵.

Se sumaron a estas declaraciones los Magistrados del Poder Judicial, quienes precisaron que durante los años que compete el análisis del Informe, efectivamente existieron jueces que actuaron conforme a las pautas de respeto y que tuvieron una actitud digna de reconocimiento en la defensa de los derechos de las personas. Sin embargo, reconocieron que debido al clima de violencia que se vivió, era necesario revisar el actuar de los jueces caso a caso, evitando así culpar a toda la institución, por responsabilidad de algunos pocos.

“No obstante, resulta necesario puntualizar que respecto de los demás magistrados que debieron intervenir —pudiendo hacerlo— en causas en que se denunciaron violaciones a los derechos humanos, su actuación, enmarcada en el ámbito de la información oficial de la época, resultó insuficiente, la que debió ser eficaz para impedir y sancionar los excesos que se cometieron en ese ámbito, considerando que otros jueces realizaron indagaciones sobre la base de antecedentes o información no oficial que fue entregada en los procesos que les tocó sustanciar, es evidente que no se concedió a los hechos denunciados la gravedad que tenían y no se les prestó la atención ético-jurídica que merecían”⁶⁵⁶.

⁶⁵⁵ “Declaración de la Corte Suprema”, 09 de diciembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, n° 97, op. cit., p. 527. Disponible en, <www.poderjudicial.cl>. [Consultado en noviembre de 2011].

⁶⁵⁶ “Declaración de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile”, 14 de diciembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, n° 97, op. cit., p. 530.

Observamos que todas las ramas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, realizaron declaraciones sobre el contenido del Informe. En ellas, se aprecia una valoración positiva frente al gran esfuerzo realizado por la Comisión. Asimismo, se advierte su estupor y asombro frente a los detalles sobre la prisión política y tortura que se ejerció en el país, donde se señalan nombre de los perpetrados, así como sus instituciones. Frente a este tema, en las declaraciones revisadas, se observa la necesidad de precisar que frente al clima de extrema violencia que vivía el país, producto de un contexto internacional, ocasionando una profunda polarización, se habían cometido «excesos», por parte de funcionarios de algunas instituciones. Por esta razón era erróneo responsabilizar a las instituciones en su conjunto, sino que se debía revisar de manera individual cada caso. Asimismo, en sus declaraciones se argumentaba tanto el respeto a los valores de la nación, como a la dignidad de las personas, explicitando en algunas de sus declaraciones, que en la formación de sus integrantes se contemplaba la educación integral cuyo objetivo era la incorporación en sus planes educativos del respeto a los derechos humanos.

En definitiva, fueron varias las instituciones que reaccionaron frente a al contenido de la publicación del Informe Valech. En este contexto, un grupo de historiadores y académicos contrarios al régimen, elaboraron un Manifiesto, siguiendo la línea del que habían publicado unos años antes, a propósito del Marco Histórico redactado por el historiador conservador Gonzalo Vial Correa en el Informe Rettig⁶⁵⁷. La iniciativa de responder públicamente frente a lo expuesto por el Informe Valech, generó una rápida respuesta de los intelectuales, en su mayoría perseguidos durante la dictadura. El «Manifiesto de Historiadores contra los que Torturan a nombre de la Patria», publicado el 16 de diciembre de 2004, si bien reconocía los méritos del Informe Valech, aclaraba que:

⁶⁵⁷VV. AA., “Manifiesto de Historiadores contra los que torturan en nombre de la patria”, Santiago, 16 de noviembre de 2004. Disponible en, <http://www.archivochile.com/Ceme/recup_memoria/cemememo0004.pdf>. [Consultado en agosto de 2011]. La publicación generó un fructífero debate y así como numerosas adhesiones en Chile y en el extranjero, convirtiéndose en una importante referencia en los debates sobre la coyuntura y el pasado nacional.

“El mérito del Informe Valech no radica sólo en que el Gobierno haya ordenado constituir la comisión respectiva, sino, principalmente, en que recopila y revela un trascendental «testimonio ciudadano», cuya importancia no es judicial ni es sólo ética, sino, más bien, «histórica y política». Como tal, es un testimonio que corona el largo y valiente esfuerzo de los luchadores por los derechos humanos, que fueron abriendo camino, trabajosamente, a la verdad y la justicia”⁶⁵⁸.

Afirmaban que la labor realizada por la Comisión, superaban el campo de acción tanto del Estado como de los Tribunales de Justicia, debido al contenido que se desprenden de él, por lo mismo, rebasan la esfera de acción del Estado, incluso de los tribunales de justicia, debido a la magnitud de lo que se relata a través de los testimonios que componen las páginas del Informe, esto es, la verdad sobre los padecimientos sufridos por cientos de personas. Es en ese contexto, que la sociedad chilena debe entrar en acción no sólo para hacer “justicia de tribunal, sino, sobre todo, justicia histórica y política”⁶⁵⁹. Asimismo, subrayaban lo que a su juicio era la gran debilidad del Informe: la restricción de conocer el nombre de los victimarios.

“Es inaceptable, por ejemplo, que su publicación vaya acompañada de restricción: se dará a conocer lo ocurrido a las víctimas, pero se mantendrá oculto, por medio siglo, el nombre y la conducta de los torturadores y los victimarios. ¿Por qué se entrega una verdad cercenada? ¿Por qué dar libre curso al dolor y la conmisericordia y no a la indignación y la justicia? ¿Por qué un gobierno que se dice democrático tiene que seguir ocultando a los culpables? ¿Es que la impunidad es una inconveniencia política mayor que la justicia? ¿Es que el respeto a los poderes fácticos es más importante que el respeto a la dignidad humana?”⁶⁶⁰.

⁶⁵⁸ Ibíd.

⁶⁵⁹ Ibíd.

⁶⁶⁰ *Discurso del Ministro de Defensa Jaime Ravinet, en el Seminario “Ejército y Derechos Humanos compromiso para el siglo XXI”, op. cit.*

En definitiva, el Informe Valech, representó la inaplazable obligación de reparar las carencias históricas de los propios procesos de reparación, “representa lo no dicho en el Informe Rettig más de una década atrás, sus dolorosas omisiones, reflejo directo de la vacilante estrategia política que ha caracterizado a la transición en materia de derechos humanos”⁶⁶¹. Por consiguiente, tiene un valor fundamental, ya que coloca la impronta de la reparación moral de las víctimas -hasta entonces ignoradas-, junto a la descripción de las conductas de las instituciones ante los padecimientos descritos.

“El Informe Valech, es en lo fundamental, el resultado del incansable esfuerzo de los propios torturados de este país, de sus agrupaciones, de la Comisión Ética contra la Tortura, y de instituciones como CINTRAS y CODEPU que los han acompañado en este objetivo, aportando toda la información que disponen -su memoria institucional- a partir de la asistencia tanto médico-psicológica como jurídica de cerca de diez mil personas afectadas directamente por el terrorismo de Estado”⁶⁶².

Sin duda, mucho se debe a la tenacidad e insistencia de los propios familiares de las víctimas, quienes en muchos casos ayudaron en la organización de incipientes archivos, que más tarde acogería y resguardaría la Vicaría de la Solidaridad, organismo que fue sin lugar a dudas, el principal servicio de ayuda legal durante la dictadura, y que actuó bajo la protección de

⁶⁶¹ Madariaga, C., “El informe Valech, otra tarea a medio terminar”, Santiago, CINTRAS, 2004, p. 2. Disponible en, <<http://www.cintras.org/textos/reflexion/r31/infvalech.pdf>>.[Consultado en diciembre de 2011].

⁶⁶² Entre las organizaciones no gubernamentales que han colaborado con las víctimas y sus familias, además de *Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas* (FASIC), se encuentra el *Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos* (ILAS), que presta atención en salud mental a aquellas personas que fueron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile. Consultar en, <www.ilas.cl>. La *Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo* (CODEPU), fundada durante la dictadura militar, el 08 de noviembre del año 1980. Se dedica a la asistencia de las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Consultar <www.codepu.cl>. *Centro de Salud Mental y Derechos Humanos* (CINTRAS), creado en 1985 para la atención médico-psicológica a personas que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en especial sobrevivientes de tortura. Consultar, <www.cintras.org>.

la Iglesia Católica. Junto a ella, los registros de la propia Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) por citar sólo alguna de las instituciones no gubernamentales que acogieron a las víctimas familiares y amigos⁶⁶³. Todos ellos representan el gran cúmulo de fuentes que sirvieron como pruebas y junto a los ciento de denuncias en los tribunales de justicia, como en organismos de derechos humanos, permitieron dar cuerpo al fondo documental que permitió comprobar que en Chile durante diecisiete años de manera sistemática fueron violados los derechos humanos de cientos de personas por parte del Estado de Chile.

⁶⁶³ *La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas*, fue fundada el 01 de abril de 1975, asumió la defensa de los derechos humanos de las personas más vulneradas y oprimidas durante la dictadura militar. Consultar en, <www.fasic.cl>.

IV.- Fuentes para el estudio de la memoria histórica del horror

4.1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación

Como hemos visto, las Comisiones de Verdad creadas en distintas regiones para resolver el tema de violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares, tuvieron entre sus desafíos, buscar la «verdad» de los hechos pasados. En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), tuvo entre sus objetivos:

“(…) establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines políticos; reunir antecedentes que permitieran individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justicia y aquéllas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevas violaciones”⁶⁶⁴.

El gran trabajo de la Comisión, se desarrolló en un período de nueve meses. Durante este tiempo, se entrevistó a las personas que voluntariamente lo decidieron. Para ello los integrantes del equipo de trabajo de la Comisión, visitaron el país de norte a sur, algunos de ellos viajaron al extranjero, obteniendo la cooperación de las “unidades diplomáticas de Chile, procurando así que ningún familiar se viera privado de hacer llegar sus presentaciones”⁶⁶⁵. Colaboraron sin excepción todas las organizaciones de derechos humanos, quiénes abrieron sus archivos para que la Comisión las pudiera examinar. Asimismo, solicitó información a organismos nacionales e internacionales, despachando a su vez, cerca de dos mil oficios a entidades públicas y privadas. En todas estas acciones, fue de especial importancia la colaboración de todas las personas, que concurrieron voluntariamente a dar su testimonio de

⁶⁶⁴ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, tomo1, Santiago, Reedición, 1996 (1ª ed. 1991), VIII.

⁶⁶⁵ *Ibíd.*

los apremios que padecidos, tanto de las víctimas directas como de sus familiares.

“Fuimos depositarios de centenares de testimonios de aquellos que voluntariamente quisieron colaborar y revisamos todos los antecedentes reunidos en cada uno de los casos hasta formarnos convicción de lo ocurrido. La colaboración de todas estas personas y organismos fue de un valor inconmensurable (...)”⁶⁶⁶.

Es importante destacar el reconocimiento que la Comisión realizó a las víctimas y sus familiares, al admitir que el ejercicio de las violencias cometidas por el Estado de Chile, durante la dictadura militar, también repercutieron de forma dramática en sus familias.

“Las consecuencias de estas violaciones alcanzaron a los parientes de las víctimas, alterando radicalmente sus vidas. Este informe da cuenta también de ello. Muestra el dolor, la marginación y el miedo en que aún hoy se debaten esos grupos familiares”⁶⁶⁷.

En consecuencia, el conocimiento de «la verdad», significó para este tipo de Comisiones, desplegar un trabajo que abarcó diferentes ámbitos y estrategias. En el caso de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, implicó la recopilación de los datos de las víctimas detenidas desaparecidas, ejecutadas y torturadas con resultado de muerte, en el que aparecieran comprometidos el Estado a través de sus agentes y personas en servicio activo. El trabajo que desarrolló la Comisión abarcó seis etapas, algunas de ellas se realizaron de forma paralela. La primera, fue determinar los casos que debía conocer la Comisión. Para cumplir con este objetivo, invitó a los familiares de las víctimas a prestar declaración sobre los hechos ocurridos. Este llamado fue difundido a través de reiterados avisos en diferentes

⁶⁶⁶ Ibíd.

⁶⁶⁷ Ibíd., p. IX.

periódicos. Tanto la inscripción de los casos como la solicitud de audiencia con la Comisión, se realizó en determinadas instituciones previamente asignadas, gestión para la que se dio como plazo, sólo el mes de junio de 1990⁶⁶⁸. En regiones, este procedimiento se efectuó en las Intendencias y Gobernaciones provinciales. En el exterior, se debió concurrir a las Embajadas y Consulados de Chile. En Santiago, las entrevistas y audiencias se realizaron en organismos públicos ubicados en pleno barrio cívico. En este contexto, uno de los problemas con que se encontró la CNVR, fue que en varias de estas instituciones se desempeñaban como funcionarios activos, ex colaboradores de la dictadura militar, hecho que influyó en el descenso de las denuncias, por miedo a futuras venganzas. Carlos Hunneus señala que luego del plebiscito de 1988, el régimen colocó innumerables obstáculos al primer Gobierno democrático, impidiendo su instalación y labor lo que se tradujo en múltiples trabas sobre todo en el ámbito de la administración.

“Una de las principales medidas adoptadas en este sentido fue la de hacer rígido el aparato administrativo, con la finalidad de obligar al nuevo Gobierno a tener que trabajar con el personas nombrado por el régimen militar. Además, se estableció la inamovilidad del personal mediante la promulgación del Estatuto Administrativo, que tampoco se había despacho durante el autoritarismo y que consagraba la permanencia de los funcionarios nombrados por éste”⁶⁶⁹.

La segunda tarea consistió en la organización del personal. Es interesante destacar que de acuerdo a lo dictaminado por el Decreto de creación de la Comisión, sus miembros desarrollaron su función sin recibir remuneración, no así el personal de Secretaría, quienes fueron contratados a honorarios, recayendo todos los gastos en que incurrió la Comisión en fondos

⁶⁶⁸ *Ibíd.*, p. 5.

⁶⁶⁹ Hunneus, C., *El régimen de Pinochet*, Santiago, Sudamericana, 2000, pp. 614-615. El autor agrega la aprobación de este estatuto fue a través de la “Ley nº 18.834. Esto se reafirmaba con la Ley nº 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado. También congelaron las plantas de los gobiernos locales por la Ley nº 18.923, de Municipalidades”. *Ibíd.*, p. 622.

estatales que suministró el Ministerio de Justicia⁶⁷⁰. El tercer cometido dentro de la organización del trabajo de la Comisión, fue la referida a las audiencias con los familiares. Cada caso que se presentó se constituyó en un expediente. En él se incluía la inscripción y solicitud de audiencia, junto a todos los antecedentes que se habían podido recopilar, como certificaciones de nacimiento, estudios, defunción y autopsia entre otros. En el Informe de la CNVR se señala, que las solicitudes de entrevista en la Región Metropolitana alcanzaron a 1.485 y el número de audiencias solicitadas en regiones, fue de 1.688⁶⁷¹. Cada entrevista tuvo una duración de cuarenta y cinco a setenta minutos.

“En esa audiencia se encontraban presentes el abogado, la asistente social, y el egresado de Derecho correspondiente, aun cuando en los períodos de mayor trabajo las audiencias fueron tomadas por sólo dos de éstos y, en algunos casos, aunque muy excepcionalmente, por una sola de estas personas. Al menos un Miembro de la Comisión estuvo siempre presente en el local de ésta, participando en las diversas audiencias que se llevaban a efecto procurando resolver cualquier problema de emergencia que se presentara”⁶⁷².

El objetivo de las audiencias, fue el de obtener toda la información sobre los hechos de violación a los derechos humanos, pero por parte de los familiares de las víctimas. Especial interés tuvo la recopilación de antecedentes que permitieran avanzar en las respectivas investigaciones, por ello fijó su atención en “la mención de testigos y las gestiones que se hubieran hecho ante los tribunales de Justicia, los Organismos de Derechos Humanos u otras Instituciones”⁶⁷³. Pero también fue relevante, que la Comisión solicitara a los familiares narrar las consecuencias que los hechos relatados habían tenido en

⁶⁷⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 6.

⁶⁷¹ *Ibíd.*

⁶⁷² *Ibíd.*

⁶⁷³ *Ibíd.*

su grupo familiar más cercano, visibilizando a su vez, el daño provocado, y de esta forma poder argumentar la necesidad de contar con políticas de reparación.

Una vez terminadas las audiencias, correspondió realizar indagaciones posteriores, que consistieron en decretar las diligencias que permitieran reunir nuevos antecedentes, como también comprobar las versiones que se habían recibido. Con las facultades que el Decreto Supremo nº 355 otorgaba, se realizaron diversas indagaciones y diligencias, permitiendo solicitar informes, documentos y antecedentes a las autoridades y servicios del Estado.

“Muchas de las diligencias que se decretaron tuvieron un carácter general. Así, se pidió al Registro Civil los certificados de nacimiento de todas aquellas personas que habían sido presentadas como víctimas, a fin de certificar, en primer lugar, que legalmente habían existido. Respecto de aquellos que habían sido presentados como muertos, se pidió siempre el certificado de defunción y los protocolos de autopsia correspondientes. Respecto de los presentados como detenidos desaparecidos, junto al certificado de nacimiento se solicitó siempre el de defunción, por si en algún caso éste se hubiere encontrado registrado sin conocimiento de los familiares”⁶⁷⁴.

Por su parte, y siguiendo el ejemplo de otras Comisiones que se habían creado en la región, solicitó información sobre los detenidos por razones políticas durante los años de la dictadura militar. Esta solicitud se envió en los casos en que los antecedentes que se habían recopilado, indicaban la participación de agentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, consultándoles “al Comandante en Jefe de la rama respectiva y al General Director, en su caso, por los antecedentes que pudieren existir en la Institución sobre tales hechos”⁶⁷⁵. En el fondo, el objetivo que se perseguía era saber las

⁶⁷⁴ Ibid., p. 7.

⁶⁷⁵ Ibid.

condiciones de sus apresamientos, y en el mejor de los casos, poder hallar los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, y como era de esperar, las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a Carabineros de Chile, entregaron una mínima información, argumentando que sus archivos y expedientes habían sido quemados accidentalmente, o bien porque se habían acogido a las leyes que se habían publicado en el Diario oficial en 1989, que permitía a las Fuerzas Armadas, destruir o esconder información que fuera relevante para la institución. Al menos dos fueron las leyes que permitieron a las instituciones castrenses realizar estas acciones. La primera, fue la Ley nº 18.771, publicada en el diario oficial el 17 de enero de 1989, que agregó al artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley nº 5.200, del Ministerio de Educación de Chile, lo que sigue:

“No obstante, la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva”⁶⁷⁶.

Posteriormente, la Ley nº 18.845 publicada en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 1989, sobre sistemas de microcopia o micro grabación, permitía la destrucción de documentación, hecho que explica en su artículo sexto.

“(..) Podrá procederse a la destrucción de los demás documentos que sean microcopiados o micrograbados de conformidad a esta ley, una vez transcurridos diez años desde la fecha de la

⁶⁷⁶Chile, Ley nº 18.771 *que modifica Decreto con fuerza de Ley nº 5.200 de 1929 del Ministerio de Educación Pública*, del 30 de diciembre de 1988. *Diario Oficial* del 17 de enero de 1989. Participaron en la promulgación los miembros de la Junta Militar, compuesta por: José T. Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada; Fernando Matthei Aubel, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; Rodolfo Stange Oelckers, General Director, General Director de Carabineros; Santiago Sinclair Oyaneder, Teniente General de Ejército. Fue firmada por Augusto Pinochet Ugarte, Capitán General, quien se autodefinía como Presidente de la República; Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro de Defensa Nacional; Juan Antonio Guzmán Molinari, Ministro de Educación Pública. Disponible en, <<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30150&idVersion=1989-01-17>>. [Consultado en diciembre de 2011].

microcopia o micrograbado si se trata de instrumentos públicos o cinco años si fueren instrumentos privados”⁶⁷⁷.

La promulgación de este tipo de leyes, llevó a que frente a las solicitudes que realizó la Comisión respecto a la documentación que permitiera rearmar la historia de cada persona detenida, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, respondieran argumentando que «legalmente» habían destruido la documentación solicitada. En consecuencia, los sectores castrenses manifestaron en su mayoría no contar con la documentación requerida, debido a que habían seguido las instrucciones que en su momento se habían decretado, aludiendo a las leyes mencionadas.

“El Ejército de Chile, respondió más de dos terceras partes de estas solicitudes. En una mayoría de sus respuestas se señaló que, conforme a la legislación vigente y a la reglamentación institucional respectiva, los antecedentes que pudieran haber existido sobre estos hechos, en cumplimiento a las disposiciones jurídicas, habían sido incinerados o destruidos luego de transcurrido el plazo legal para hacerlo. En un número mejor el Ejército entregó información solicitada que resultó valiosa para el conocimiento de lo ocurrido.

Carabineros de Chile respondió casi invariablemente a este tipo de solicitudes haciendo ver que los documentos de la época habían sido legalmente incinerados.

La Fuerza Aérea de Chile aportó los antecedentes pedidos; señaló en otros casos que no registraba información sobre los mismos, o que ésta habría sido legalmente incinerada.

La Armada de Chile respondió a todas las solicitudes de la Comisión, enviando material que resultó de gran utilidad para las indagaciones. En un número menor de respuestas, esta rama

⁶⁷⁷ Chile, Ley n° 18.845 *que establece sistemas de microcopia o micrograbación de documentos*, del 19 de octubre de 1989. Diario Oficial del 03 de noviembre de 1989. Disponible en, <<http://www.diariooficial.cl/actualidad/20jul18/18845.html>>. [Consultado en enero 2012].

señaló no tener antecedentes sobre las situaciones consultadas”⁶⁷⁸.

Similar argumentación emplearon cuando se solicitó información sobre los servicios de seguridad, en los que Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, “hicieron ver que se encontraban legalmente impedidos de aportar información que se refiriera a labores de inteligencia”⁶⁷⁹. En este aspecto, es importante constatar las múltiples formas que adoptaron las reiteradas negativas adoptadas por los sectores militares, para colaborar con la Comisión. Aunque de manera formal, no sin reparos, se mostraron favorables en proporcionar la ayuda necesaria para «esclarecer la verdad de los hechos», en la práctica ocurrió todo lo contrario. En efecto, elaboraron diversas argumentaciones, y buscaron innumerables resquicios legales para no entregar la información solicitada. Es más, cuando la Comisión requirió la declaración de al menos 160 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los respectivos Comandantes en Jefe respondieron a este llamado, indicando que algunas de las personas señaladas no pertenecían a su institución, y en aquellas en que se logró localizar, se les hizo saber el interés de la Comisión de contar con su declaración. De todos aquellos a quienes se les invitó a declarar se obtuvo como respuesta, que “un miembro en servicio activo de Carabineros y uno de la Fuerza Aérea mostraron su disposición a prestar declaraciones. Un número apreciable de Carabineros y un oficial de la Fuerza Aérea aceptaron responder cuestionarios por escrito”⁶⁸⁰. A pesar de ello, la Comisión señaló que “en el caso de que estas personas no pertenecieran a las Fuerzas Armadas o se encontraran en retiro, las solicitudes les fueron dirigidas personalmente, produciéndose aquí un grado mayor de comparecencia”⁶⁸¹.

A pesar de estos obstáculos, tanto la CNVR, como después lo haría su sucesora, esto es, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

⁶⁷⁸ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 8.

⁶⁷⁹ *Ibíd.*

⁶⁸⁰ *Ibíd.*, p. 9

⁶⁸¹ *Ibíd.*

(CNPPYT), consideraron necesario incorporar todo tipo de fuentes e información, evitando de esta manera las críticas frente a sesgos de parcialidad. Fue prioritario que se proveyera de una documentación variada que permitiera indagar sobre la sistematicidad de la violencia ejercida por el régimen, y responder a las acusaciones de falta de pruebas y fundamentos verídicos que pudieran confirmar las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, servicios de inteligencia, o adherentes al régimen militar. Aunque sin lugar a dudas, fueron mayoritarios los testimonios de familiares y amigos de las víctimas, así como también de los que habían sobrevivido a los padecimientos, quienes entregaron una valiosa información sobre las formas de reclusión y tortura a que fueron expuestos. En el caso de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estos testimonios permitieron, en muchos casos, identificar a los perpetradores, situación que también permaneció supeditado al espíritu para el que había sido creada la Comisión, quedando el juzgamiento de cada caso, bajo la responsabilidad de los Tribunales de Justicia.

Sin duda, fue fundamental el acopio documental que la Vicaría de la Solidaridad, entregó a dicha Comisión, ya que resultó en algunos casos, ser una hoja de ruta, en la forma sobre cómo abordar una de las tareas encomendadas, que consistió en “reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y establecer su suerte o paradero (...)”⁶⁸². En esta labor, la abundante documentación que entregó la Vicaría fue de vital importancia, entre ella podemos mencionar, además de la ya citada colección de siete tomos de la publicación *¿Dónde están?*, los *informes mensuales* que abordaron la situación de los derechos humanos en Chile, (desde julio de 1976 a febrero de 1989); La memoria anual de la Vicaría que abarcó los años 1973 a 1977; Los cuadernos jurídicos que se publicaron entre septiembre de 1977 a noviembre de 1979. Otras organizaciones de derechos humanos que también colaboraron con su documentación, se encuentra la Comisión Chilena de derechos humanos, que donó todos los informes mensuales desde 1982 hasta

⁶⁸² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 3.

1989. Asimismo, entregaron información relevante, el CODEPU, entre los que se destaca la publicación *Tortura. Documento de denuncia*, publicación semestral que abarcó desde 1984 a 1988.

Entre la documentación que entregó FASIC, destacan las fichas de los consejos de Guerra entre 1973 y 1977, así como la nómina y cuadros estadísticos de presos políticos del régimen militar al 31 de diciembre de 1990. Por su parte, entre la documentación aportada por el PIDEE, destacan aquellos informes sobre las violaciones a los derechos de la infancia en Chile, así como los estudios realizados respecto a las repercusiones psicológicas en niños víctimas de la represión política. También entregó documentación el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que proveyó de los informes de visitas a los lugares de detención desde 1973 hasta 1988. Amnistía Internacional, también envió sus informes desde 1983 hasta 1989. Naciones Unidas remitió la documentación referida a la situación de los Derechos Humanos en Chile.

Asimismo, entre octubre de 1990 y enero de 1991, se presentaron 3.400 casos a la Comisión, en cada uno de ellos se redactó un informe escrito de acuerdo a las pautas previamente diseñadas por la Comisión. En ellos, se describían todos los antecedentes que se habían logrado reunir sobre cada una de las situaciones de apresamiento, para que posteriormente la Comisión realizara una lectura de ellos, revisando uno a uno los casos, y estableciera convicción, respecto a si efectivamente constituían graves violaciones de derechos humanos, o eran víctimas de la violencia políticas, señalando aquellos que quedaban excluidos de su competencia⁶⁸³.

⁶⁸³ La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consideró como víctimas que quedaban fuera de su competencia, aquellos casos de personas que “cayeron o perecieron víctimas de enfrentamientos armados o, en un sentido general, víctimas de la situación de contienda política. Así como también los accidentes que tuvieron lugar en el contexto de un enfrentamiento armado y que cobraron víctimas fatales, sea entre uniformados o entre opositores al régimen militar, incluyendo accidentes de vehículos, disparos accidentales entre compañeros de armas, y la detonación de explosivos que portaba la propia víctima”, en Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., tomo 1, pp.26-27.

De forma paralela, además de evaluar la información recibida, debió establecer la organización y característica final del Informe. En aquellos casos en que existió convicción de que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos, se redactaron informes breves que luego se enviaron a la Comisión, esto llevó a prescindir de una serie de “circunstancias vinculadas a las más graves violaciones mismas, tales como seguimientos previos, tratos sufridos en prisión y procedimientos de detención en casos individuales, salvo que ellos hubieren sido determinantes para la convicción”⁶⁸⁴. Se puede constatar la riqueza de esta información, debido a que en muchos de los casos revisados, se relatan con gran detalle las formas de reclusión, así como todo tipo de torturas que padecieron quienes sobrevivieron a estos apremios. En definitiva, debido a estos testimonios fue que se pudo comprobar que la víctima con resultado de muerte o bien desaparecida, efectivamente había estado recluida y había compartido estos apremios con aquellos que concurrían a dar su testimonio a la Comisión.

En consecuencia, en este tipo de evidencia existe una doble función, por un lado, dar cuenta de la existencia de quién ya no está, esto es la víctima con resultado de muerte, y por otro, dejar constancia de que efectivamente se aplicaron todo tipo de apremios y tormentos a los sobrevivientes. Es decir, se representa la ausencia del otro, a través del testimonio de quienes están presentes⁶⁸⁵. Esto cobra vital importancia para el reconocimiento del status de víctima, cuestión que comporta por una parte su visibilización como persona que fue violentada por el Estado, provocando su muerte y desaparición, y por otro, también permite re-conocer el daño provocado a quienes rodean a estas víctimas, esto es su círculo más cercano, su familia y seres queridos.

⁶⁸⁴ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., tomo 1, p. 11.

⁶⁸⁵ Véase Chartier, R., *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1992.

4.1.1.- Metodología de trabajo utilizada por la CNVR (criterios utilizados por la Comisión)

Para desarrollar el trabajo encomendado por el presidente Patricio Aylwin, la Comisión organizó una metodología de trabajo que permitiera cumplir con el objetivo encomendado, que era “contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones de derechos humanos”, definiendo estas últimas como,

“(…) las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidas por particulares bajo pretextos políticos”⁶⁸⁶.

Dentro de los fundamentos morales y teóricos que dieron el marco conceptual a la Comisión, se encuentran las normas, en que la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue un eje central. En general, la Comisión reconoció que en lo sustancial, estos derechos eran parte de la legislación de Chile, pero al mismo tiempo, subrayó que frente a las normas internacionales, en el período que estudio de la Comisión se observan carencias en la legislación nacional que permitieran una efectiva protección de los derechos fundamentales. El informe advierte que se refiere sólo a algunos de los derechos consagrados internacionalmente, lo que no significa restarle importancia, sino más bien, que esa decisión tiene que ver con el cometido creado. Por esta razón, examinó las más graves violaciones de derechos humanos que tuvieron como resultado la muerte de personas.

Asimismo, y dada la gravedad de los hechos, la Comisión también se refirió a la tortura, como una de las más graves violaciones, centrándose en

⁶⁸⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 15.

aquellas que tuvieron como resultado la muerte, debido a la restricción que impuso el propio Decreto de creación de la Comisión. Por consiguiente, señaló que se refería a ella, cuando “(...) el hecho de la tortura haya sido importante para formarse convicción sobre aspectos esenciales de cada caso, como ser, irregularidades de los Consejos de Guerra o inverosimilitud de la supuesta fuga de detenidos”⁶⁸⁷. Por otro lado, la Comisión indagó en las leyes de guerra y en el Derecho Internacional Humanitario, subrayando que Chile había ratificado las convenciones de Ginebra de 1949, sin embargo, en lo que respecta al recurso a la guerra o rebelión armada que se aplicó como argumento del golpe de Estado de 1973, eludió manifestar un juicio argumentando que:

“La Comisión se ha abstenido de pronunciarse sobre la legitimidad del recurso a la fuerza que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 y en el período inmediatamente posterior, sea por parte de quienes perseguían derrocar al gobierno del Presidente Salvador Allende o por parte de quienes buscaban defenderlo”⁶⁸⁸.

El Informe, también se refirió a las normas sobre el empleo de la fuerza, y en la que destacó que la Comisión había llegado a la convicción de cada caso, considerando las normas generales sobre el empleo de la fuerza que se habían utilizado sobre las víctimas. Destacó que el “Estado, a través de los órganos y autoridades debidamente autorizados por la Constitución y las Leyes tiene el monopolio de la fuerza legítima”⁶⁸⁹, y que su uso se debe efectuar de forma racional con el fin de hacer cumplir las leyes y salvaguardar el orden público, por tanto su empleo debe ser fundamentado y ajustado al fin que lícitamente persigue. Por ello, también la Comisión fue enfática al señalar que entenderá por violaciones a los derechos humanos, aquellos actos en los que haya incurrido el Estado, basadas en las Normas de Humanidad, derivadas de las Normas de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, o Leyes de Guerra. En consecuencia la Comisión entendió como violaciones de

⁶⁸⁷ Ibid., p.16.

⁶⁸⁸ Ibid., p. 17.

⁶⁸⁹ Ibid.

derechos humanos, “no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino que también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos”⁶⁹⁰. En este aspecto, la CNVR abordó el tema de las responsabilidades que cabía a personas, partidos políticos, Fuerzas Armadas y de Orden, así como instituciones y sectores sociales, frentes a los hechos que debía examinar. Para ello enfocó este asunto en tres ámbitos. El primero, «La relación entre la situación política anterior al 11 de septiembre de 1973 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de esa fecha»; el segundo, correspondió a «La “responsabilidad moral” del Estado», entendiendo como aquella que;

“Le cabe al Estado por actos de sus agentes (o de personas al servicio de éstos) ejecutados en cumplimiento de políticas o directivas de órganos del Estado; o por actos ejecutados sin que medien políticas o directivas específicas, si el agente del Estado contó con la ratificación expresa o tácita de órganos del Estado, o con la protección o inacción de éstos, tendientes a que la conducta quedara impune”⁶⁹¹.

En tercer lugar, se refirió a otro de tipo de responsabilidades, vinculada tanto a los individuos como a las instituciones a las que pertenecían. Argumentó que las responsabilidades de carácter penal, y otras responsabilidades legales que pudieron existir producto de violaciones a los derechos humanos fueron de carácter personal, y que no afectaron a las instituciones de las fueron parte. A pesar de ello subrayó que no se podía negar la responsabilidad histórica y moral de las instituciones, “por prácticas que ordenó, o en las cuales consintió, o respecto de las cuales no hizo todo lo debido por evitarlas o por prevenir su repetición”⁶⁹². En consecuencia, lo que intentó plantear la CNVR, es que tanto el Estado como sus instituciones a

⁶⁹⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 19.

⁶⁹¹ *Ibíd.*, p. 20.

⁶⁹² *Ibíd.*, pp. 21-22.

través de sus funcionarios, tuvieron responsabilidad en los hechos que examinó la Comisión.

Por otra parte, la CNVR también analizó algunas de las formas de violación de derechos humanos cometidas en el período de la investigación que le fue encomendado. Tema que para nuestra investigación es de gran importancia, toda vez que en su tipificación existen diversas formas de infligir este tipo de violencias. La Comisión consideró siete de ellas: La primera es la que está relacionada con los detenidos desaparecidos. Señaló que esta expresión adquirió un uso frecuente en Chile, precisamente en el período en que cubre el estudio de la CNVR, explicando que:

“Con ella se alude a la situación de quienes fueron detenidos por agentes de la autoridad o por personas a su servicio, siendo la última noticia que se tuvo de ellos que fueron aprehendidos o que se les vio posteriormente en un recinto secreto de detención. La autoridad niega haberlos detenido, o bien declara haberlos liberado luego de un cierto período de tiempo, entrega otras explicaciones insatisfactoria o simplemente guarda silencio”⁶⁹³.

Aunque esta expresión se parece para aquellas situaciones en efectivamente no se tiene noticias del paradero de personas, referidos a otro tipo de problemas, vinculados más a temas policiales, en los que es posible apreciar otro tipo de delitos, como crímenes comunes, suicidios, desgracias de otro tipo, en los que no está involucrado de forma directa el Estado. En consecuencia, la CNVR es enfática al señalar que frente al tema de los «detenidos desaparecidos», tal desaparición no es real, por cuanto se trató de personas que fueron detenidas con medidas de ocultamiento y de negativas oficiales;

“detención durante la cual, por lo general, se aplicaron torturas, y de la que se tiene la certeza moral que concluyó con el asesinato

⁶⁹³ Ibíd., p. 22.

de la víctima y la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados”⁶⁹⁴.

En el estudio que realizó la Comisión, detectó dos formas principales de desaparición de personas: La primera fue la que predominó en los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado de 1973, y que se caracterizó porque detenciones de personas que fueron realizadas en diferentes lugares en todo el país, realizadas por dispositivos militares y que en algunas ocasiones participaron civiles.

“En el fondo, consistieron en una ejecución sumaria o asesinato de la víctima, disponiéndose luego del cadáver (por lo común lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente) todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas”⁶⁹⁵.

La CNVR subrayó que la desaparición de estas personas, tuvo por objetivo el ocultamiento y encubrimiento de los crímenes cometidos, antes que a una acción coordinada central que tuviera por objetivo eliminar a determinados grupos o categorías de personas. La segunda forma de «desapariciones» identificó la Comisión fue practicada entre los años 1974 y 1977, años que comprende nuestra investigación, cuyo responsable principal fue la Dirección de Inteligencia Militar (DINA). Estos casos la Comisión sí pudo constatar “que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas”⁶⁹⁶. Una segunda forma de desaparición de personas que conoció la Comisión fueron aquellas que se practicaron a raíz de ejecuciones que se realizaron acatando sentencias de muerte que se habían dictado anteriormente por un Consejo de Guerra. La CNVR, consideró que estas ejecuciones corresponden a violaciones de derechos humanos, ya que en lo sustancial,

⁶⁹⁴ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 22.

⁶⁹⁵ *Ibíd.*

⁶⁹⁶ *Ibíd.*, p. 23.

faltó en los procesos, cuando consecuentemente existieron, las garantías mínimas de un juicio justo. A su vez, conoció diversas formas de ejecuciones que estuvieron fuera de un debido proceso, estas fueron las ejecuciones extra-judiciales o extra-legales.

Entre este tipo de ejecuciones, fue frecuente, durante los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, el empleo de la llamada «ley de fuga». Las explicaciones oficiales más socorridas entregadas en estos casos, sostenían que los uniformados dispararon contra los prisioneros que intentaban fugarse, y que debido a que no acataron la advertencia de alto, tuvieron como resultado la muerte. Las explicaciones que se dieron para argumentar la llamada «ley de fuga», fueron consideradas como inverosímiles por parte de la Comisión, debido a que en todos los casos que se examinaron, estas ejecuciones se realizaron al margen de todo proceso. Otra forma de desaparición que identificó la CNVR, fue el «uso indebido de la fuerza», y producto de ese accionar se ocasionó la muerte de personas, cometidas por agentes del Estado. Estas situaciones fueron muy variadas, sin embargo, en todas ellas, destaca el uso indebido de la fuerza, y en la que se pueden observar desde golpes hasta disparos a participantes de manifestaciones todos los que provocaron la muerte de estas personas. Asimismo, la Comisión también consideró las «muertes en horas de toque de queda», como forma indebida del uso de la fuerza. Por consiguiente, incorporó dentro de las acciones que provocaron la desaparición de personas los «abusos de poder», si bien en algunos casos en los que se tipificaron como delitos comunes, las autoridades responsables condonaron los hechos, no los denunciaron o bien ampararon a los responsables, asegurando su impunidad, la Comisión consideró que en esos casos “se comprometió la responsabilidad moral del Estado y hay, por ende, una violación de derechos humanos”⁶⁹⁷. Además subraya, que el Estado al no castigar los abusos de poder cometidos por sus agentes, se hace partícipe de tales actos, adquiriendo la connotación de violaciones de derechos humanos.

⁶⁹⁷ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 24.

Otra forma en que la Comisión definió la violación de derechos humanos, fue a través de la tortura. Para ello, se amparó en la definición de tortura que incluye la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término de ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”⁶⁹⁸.

Por último, la Comisión también consideró a los «actos terroristas», entendiendo por ellos a casos de muertes realizadas por particulares con motivos o pretextos políticos. También calificó como tales a atentados, a aquellos que se realizaron contra víctimas indiscriminadas, como por ejemplo, la colocación de explosivos en lugares públicos. A su vez, consideró como actos terroristas a “los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro en contra de agentes del Estado”⁶⁹⁹. Una vez publicado el Informe, este tipo de cuestiones generó gran resquemor en organismos de derechos humanos y

⁶⁹⁸ Ibid., p. 25. Esta definición aparece contenida en el artículo 1º que corresponde a la primera parte de la *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes*, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Un texto previo, pero de igual importancia fue la *Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros tratos Cruelles, Inhumanos o Degradantes* (Resolución 3452 [XXX]), de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1975).

⁶⁹⁹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., p. 25.

agrupaciones de familiares de las víctimas, ya que se colocaba en igualdad de condiciones, esto es, como víctimas a los agentes del Estado, cuestión que plantea además algunas precisiones frente al concepto de víctima. Debates y reflexiones que por lo demás escapan de nuestro ámbito de investigación⁷⁰⁰. Todo este tipo de precisiones y conceptualizaciones, permitió a la CNVR calificar a las víctimas de derechos humanos, entendiendo por ellas a las personas que fueron sometidas a diferentes apremios entre ellos:

- “-Desaparición forzada, esto es, desaparecieron luego de su detención;
- Ejecución, en cualquiera de sus formas;
- Uso indebido de la fuerza, con resultado de muerte;
- Abuso de poder, con resultado de muerte, si el Estado ha condonado el hecho o facilitado su impunidad;
- Tortura, con resultado de muerte;
- Atentados contra la vida, con resultado de muerte, cometidos por particulares, bajo pretextos políticos, incluyendo actos de terrorismo indiscriminado y selectivo, así como otros atentados”⁷⁰¹.

Como víctima de violaciones de derechos humanos, considero también a aquellas personas que se quitaron la vida, producto de la desesperación, ya fuera que producto de los apremios físicos y psíquicos producidos por la tortura y las condiciones del encierro, o por otra causa en que se cabe la

⁷⁰⁰ Nos referimos a personal del Ejército y Carabineros de Chile, que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación identificó como víctimas. Entre los casos podemos citar el atentado al General Pinochet el 07 de septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo, donde murieron cinco cabos del Ejército de entre 25 y 32 años, sus nombres son: Roberto Segundo Rosales Martínez, Miguel Ángel Guerrero Guzmán, Cardenio Hernández Cubillos, Gerardo del Carmen Rebolledo Cisterna, Pablo Arturo Silva Pizarro. Así como también, Guillermo Bratti Cornejo, ex agente del Comando Conjunto. Julio Benimelli Ruiz, ex jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Nelson González Ulloa del Comando Conjunto. A su vez aparecen los nombres del ex director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, ejecutado en 1980 por el MIR; y el del ex intendente de Santiago, general (R) Carol Urzúa, ejecutado en 1983 también por el MIR. Véase Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., tomo 2, pp. 559, 604, 605, 674, 675, 688 y 692.

⁷⁰¹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, op. cit., tomo 1, p. 26.

responsabilidad del Estado. Si bien la Comisión no se pronunció frente al tema del suicidio en sí, porque ese no era su objetivo, sino más bien examinó aquellos casos, en que producto de los antecedentes recabados era posible que se produjeran estos casos ilícitos. Finalmente y respecto al destino de los desaparecidos, la Comisión concluyó como:

“Su deber de conciencia declarar su convicción de que en todos los casos de desapariciones que ha acogido como tales, las víctimas están muertas y perecieron en manos de agentes del Estado o personas a su servicio, habiendo éstos u otros agentes, dispuesto de los restos mortales arrojándolos a las aguas de algún río o del mar, enterrándolos clandestinamente o de algún otro modo secreto”⁷⁰².

Para los efectos de elaborar un exhaustivo estudio de la dictadura militar en Chile, la Comisión diseñó una periodización, considerando para ello las diferentes formas legales que fue adoptando el régimen. En este contexto, se observa una división, por supuesto no rígida, según argumenta el informe, en tres períodos: el primero que va desde septiembre de 1973 a diciembre de 1973; el segundo de enero de 1974 a agosto de 1977 y el tercer de septiembre de 1977 a 1990. Nuestro objetivo es profundizar en cada una de las etapas, sino más bien, dar cuenta en términos generales de las particularidades que identificó la comisión en cada período, colocando nuestro énfasis en los años en que funcionó la DINA, período en que estuvieron en funcionamiento los centros de tortura que forman parte de nuestro estudio. El Informe señala que “lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973 representó una alteración profunda del sistema gubernativo chileno”⁷⁰³. En el relato de las tres fases de la represión política que ejerció la dictadura militar, la CNVR realizó un guión similar para narrar los hechos. Un primer aspecto, lo denominó «Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado o personas a su servicio», y en el que se describen las características de cada fase, en cuanto a

⁷⁰² Ibid., pp. 29-30.

⁷⁰³ Ibid., p. 55.

las organizaciones de inteligencia que operaron y las formas de represión que ejercieron. Para abarcar los diferentes tipos de apremios cometidos, a su vez, abordó cuatro ámbitos de explicación. Uno orientado a «la detención y reclusión», en el que se identificaron los métodos de detención y los recintos de reclusión.

En otro ámbito, abordó los «maltratos y torturas», en el que se refirió expresamente a «la tortura», y «los centros de tortura más conocidos». Se refirió también a «las muertes y desapariciones», donde puntualizó respecto de «las víctimas», «las motivaciones de los agentes del Estado para causar la muerte o desaparición», y «los procedimientos empleados» (Consejos de Guerra, las ejecuciones al margen de todo proceso, las muertes por tortura). También hizo referencia a la «desaparición de los cadáveres», el «tratamiento a las familias», así como el recrudecimiento de la violencia a partir de octubre 1973, debido a la creación de la «Comisión DINA» y la llamada «Caravana de la muerte». A su vez abordó otras violaciones de derechos humanos, como la muerte de transeúntes o aquellos que infringían el toque de queda, sin representar peligrosidad. O bien homicidios cometidos por abuso de poder por parte de agentes de seguridad del Estado.

El primer período de la represión política, fue definido por la CNVR como de «consolidación», se caracterizó debido a que las Fuerzas Armadas y de Orden, alcanzaron su propósito más cercano, que fue hacerse con el control efectivo del país, como lo expuso el Decreto-Ley de constitución de la Junta Militar:

- “1º.- Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas (...).
- 2º.- Designan al General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte como Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo.

3º.- Declaran que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone”⁷⁰⁴.

Si bien fue característico durante toda la dictadura militar, la violencia y sistemática represión, el Informe Rettig señala que en los primeros días inmediatamente después del Golpe de Estado, la resistencia armada de los partidarios del depuesto gobierno de Salvador Allende Gossens, fue “mínima, irregular respecto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada; y sin la menor probabilidad de éxito, ni siquiera en el nivel local”⁷⁰⁵. Asimismo la CNVR agregó que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden tuvieron atribuciones muy amplias.

En definitiva, la Junta Militar se hizo con la dirección casi absoluta del país, aun cuando había declarado arrogarse sólo las funciones administrativas, ejecutivas y aquellas propias de las funciones del ejecutivo de acuerdo a como lo explicitó el Decreto Ley nº 128 que indicó, “que la asunción del Mando Supremo de la Nación supone el ejercicio de todas las atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativos y Ejecutivo, y en consecuencia, el Poder Constituyente que a ellos corresponde”⁷⁰⁶. La CNVR, señaló que la Junta se atribuyó la totalidad de los poderes del Estado hasta el 26 de junio de 1974, cuando entró en vigencia el Decreto-Ley nº 527, en el que se aprobó el «Estatuto de la Junta de Gobierno», ya que entre otros, el artículo séptimo indicaba que: “El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, quien es el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades,

⁷⁰⁴ Chile, *Acta de Constitución de la Junta de Gobierno*, Decreto Ley nº 1 del 11 de septiembre de 1973. Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973.

⁷⁰⁵ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 2º ed., 1999, (1º ed. 1991), p. 40.

⁷⁰⁶ Chile, *Decreto Ley nº 128*, que Aclara el sentido y alcance del artículo 1º del Decreto Ley nº 1 de 1973, Ministerio del Interior del 12 de noviembre de 1973. Diario Oficial del 16 de noviembre de 1973.

atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto otorga”⁷⁰⁷. En la práctica esto significó, que se entregó la titularidad del poder ejecutivo al presidente de la Junta de Gobierno, quien desde aquel día se convirtió en Jefe Supremo de la Nación. Esto último se concretó el 17 de diciembre de 1974, a través el Decreto-Ley n° 806⁷⁰⁸, se equiparó la figura de Jefe Supremo y de Presidente de la Nación. En efecto, la Junta otorgó al General Augusto Pinochet el título de Presidente de la República de Chile, correspondiéndole en tal calidad, el carácter de Jefe Supremo de la Nación y la administración del Estado con las facultades, atribuciones y prerrogativas que el Estatuto de la Junta de Gobierno le otorgó. De acuerdo a la investigación que realizó la CNVR, este hecho delimitó lo que denominó como «fase de consolidación del régimen», debido entre otros, en que el General Pinochet, adquirió sino todas, gran parte de las atribuciones que correspondía al cargo de Presidente de la República.

El Informe señaló que todas las detenciones fueron realizadas por personal de Carabineros de Chile, y en ocasiones colaboró la Policía de Investigaciones así como civiles. Y que cuando fueron apresamientos masivos, los efectuaron ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Asimismo, para esta primera fase de consolidación del régimen, la Comisión identificó determinados métodos de reclusión que se fueron utilizados de forma habitual, entre los que podemos señalar:

“-Requerimiento de los afectados por bando a presentarse ante la autoridad militar. Al cumplir –los requeridos- con este llamado, se les detenían.

-Búsqueda particular de una persona en su casa o lugar de trabajo, o en la vía pública.

“-Redadas en zonas rurales y allanamientos en ciudades importantes”⁷⁰⁹.

⁷⁰⁷ Chile, *Decreto Ley n° 527*, que Aprueba Estatuto de la Junta de Gobierno, del 16 de junio de 1974. Diario Oficial del 26 de junio de 1974.

⁷⁰⁸ Chile, *Decreto Ley n° 806*, que Modifica Decreto Ley n° 527 de 1974, del 16 de diciembre de 1974. Diario Oficial del 17 de diciembre de 1974.

⁷⁰⁹ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 40. Véase Corporación Nacional de

En lo que concierne a los recintos de detención en esta primera fase de instalación del régimen, la CNVR, señaló que para estos efectos se habilitaron, “los regimientos, las comisarias de Carabineros, las cárceles y los cuarteles de Investigaciones”⁷¹⁰. A su vez fueron utilizados otros recintos como campos de prisioneros, para ello se dispusieron algunos recintos especiales, como “los de Pisagua (Primera Región); Campamento de Prisioneros nº 2 de Tejas Verdes (Quinta Región); Isla Quiriquina (Octava Región), Isla Dawson (Duodécima Región)”⁷¹¹. La Armada de Chile, utilizó buques como lugares de detención. Se utilizaron campos deportivos como el Estadio Nacional y el Estadio Chile⁷¹² entre otros. También fueron ocupados establecimientos educacionales de las Fuerzas Armadas y de Orden.

En cuanto a los maltratos y torturas, la Comisión señaló que fueron aplicadas durante todo el período, tanto en los traslados como en los diferentes centros de reclusión, y que se efectuaron en distintos grados y formas. Las golpizas y vejaciones cuando se detenía a la persona, fueron habituales, así como la tortura en los interrogatorios. Los métodos de tortura que se aplicaron fueron variados. “Los golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre se usaron universalmente. También el agravar, hasta constituir tortura, la rigurosidad de la detención”⁷¹³.

Asimismo la Comisión indicó que los lugares de tortura que existieron en el país, fueron numerosos, sin embargo, señala que de acuerdo a los testimonios

Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., tomo1, pp.109-110.

⁷¹⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo1, op. cit., p.110.

⁷¹¹ *Ibíd.*

⁷¹² Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el campo de Prisioneros del Estadio Chile concentró el mayor número de prisioneros en 1973, aunque existieron detenidos hasta 1974. Comenzó a funcionar el día 12 de septiembre de 1973, con el traslado de los primeros 600 prisioneros políticos procedentes de la Universidad Técnica del Estado. El 14 de septiembre en sus instalaciones es asesinado el cantautor Víctor Jara, luego de ser sometido a largas y durísimas sesiones de tortura, por parte de funcionarios del Ejército de Chile. En 2004, este complejo deportivo pasó a llamarse Estadio Víctor Jara. Véase Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*, cap. VI, p. 440.

⁷¹³ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo1, op. cit., pp.110-111.

recogidos “de siniestra memoria para quienes pasaron por allí”⁷¹⁴, se pueden identificar:

“El antiguo aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; barcos de la Armada o bajo su control, en Valparaíso; el Estadio Nacional, el Estadio Chile y la Academia de Guerra Aérea, en Santiago; la Isla Quiriquina y el Fuerte Borgoño, en Concepción; la Base Aérea de Maquehua, en Temuco (...), el Campo de Prisioneros de Pisagua, la Comisaría de Rahue, en Osorno, el Campo de Prisioneros nº 2 de la Escuela de Ingenieros Militares del Regimiento de Tejas Verdes, en San Antonio”⁷¹⁵.

En lo que respecta a las víctimas, la Comisión señaló que gran parte de las muertes y detenciones que siguieron a las desapariciones, fue producto de acciones que se dirigieron fundamentalmente a “los funcionarios destacados del régimen depuesto, sus más altas autoridades y mandos medios”⁷¹⁶, aunque como hemos señalado, no fueron el único objetivo. A estos fines, respondieron los procedimientos empleados, en los que revistió una aparente legalidad que efectivamente no existió, como fueron los Consejos de Guerra, o la llamada «ley de fuga», por citar algunos. En consecuencia, es posible identificar diferentes formas de dar muerte a las víctimas, según el Informe Rettig, estas se practicaron por los general “en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención”⁷¹⁷. Los mecanismos utilizados para ejecutar a las víctimas, fueron en algunos casos selectivos, y que tuvieron como objetivo tanto a personeros políticos como simpatizantes del régimen depuesto. También se suman las ejecuciones selectivas a supuestos delincuentes, así como aquellas que se realizaron por venganza personal, se suman también las muertes perpetradas por agentes del Estado. En cuanto a

⁷¹⁴ Ibíd., p. 111.

⁷¹⁵ Ibíd., p. 112.

⁷¹⁶ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 43.

⁷¹⁷ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo1, op. cit., p.117.

los métodos en que se utilizaron en las ejecuciones, se señala que fueron diversas:

“En ocasiones el detenido era muerto de un solo, o dos tiros en el cráneo. A veces era acribillado. Algunas veces se le hacía correr con la ilusión (o sin ella) de que tenía alguna posibilidad de librar con vida, para de inmediato dispararle por detrás. No faltan tampoco las mutilaciones previas, o de los cadáveres”⁷¹⁸.

Respecto al destino de las víctimas, la CNVR indicó que este período se caracterizó tanto por el ocultamiento como la negación de los ejecutados o detenidos desaparecidos, cuestión que también es posible apreciar en la siguiente fase, cuyo carácter fue sistemático. Sin embargo, en esta primera fase, la CNVR, señala que el procedimiento utilizado fue “anárquico e irracional”⁷¹⁹, lo que se manifestó en la predisposición de no entregar los cadáveres, ocultándolos de diferentes formas, ya fuera en “fosas clandestinas, o en piques de minas, arrojándolos a ríos o al mar, o dinamitándolos”⁷²⁰. Relacionado con estas acciones, fue también el tratamiento que se dio a los familiares de las víctimas, en que la decisión respecto al destino de los cadáveres, fue parte del maltrato a que fueron estos familiares. Entre las prácticas que se realizaron de forma reiterada durante todo el período de estudio de la Comisión son:

- “-Negación a la familia del hecho de la detención.
- Ocultamiento de la muerte del detenido.
- Destrucción o robo de objetos y muebles en los allanamientos.
- Extorsiones a las familias bajo falsas promesas de libertad del detenido.
- Entrega del cadáver en una urna sellada.

⁷¹⁸ Ibíd.

⁷¹⁹ Ibíd., p. 120.

⁷²⁰ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 45.

-Orden perentoria de dejar la ciudad o pueblo”⁷²¹.

La CNVR, realizó un explícito reconocimiento a los familiares de las víctimas, al reconocer que frente a los malos tratos y humillaciones sufridas por parte de quiénes ilegítimamente se hicieron con el poder, las familias y amigos de las víctimas, continuaron de forma incesante la búsqueda de sus seres queridos, generando a su vez, diversas acciones y estrategias, saber de ellos, y denunciar los hechos que estaban ocurriendo en el país. Estas actividades tuvieron una materialidad, es decir, mecanismos a través de los cuales pudieron realizar tanto la búsqueda como la denuncia, en un período en las libertades personales estaban muy limitadas, entre otros por las constantes declaraciones de la Junta militar, donde se indicaba que Chile vivía un estado de «conmoción interna», y que los que destacan, cartas enviadas a las instituciones militares, eclesiásticas, a organismos internacionales, denuncias en los tribunales de justicia, entrevistas en medios internacionales, declaraciones, fotografías y objetos personales de las víctimas, en fin, todo lo que pudiera comprobar primeramente su existencia y posteriormente su detención, desaparición y en muchos casos la muerte. Estas huellas, son para nosotros una fuente imprescindible de conocimiento, para acceder a los hechos de ese pasado. Sin embargo, estas fuentes no pueden describir el profundo daño y dolor irreparable ocasionado a estas familias:

“Frente a ello, resulta admirable la paciencia, pertinacia y dignidad con que las familias se empeñaron, primero, en mantener el contacto con los detenidos; segundo, en auxiliarlos y consolarlos; tercero, en defenderlos legalmente; y cuarto, ya muertos o desaparecidos, en buscar sus restos para honrarlos.”⁷²²

La segunda fase que identificó la Comisión, transcurrió entre enero de 1974 y agosto de 1977, y se caracterizó por el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo de seguridad que aplicó el método de

⁷²¹ *Ibíd.*, p. 45.

⁷²² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo1, op. cit., p.121.

desaparición forzada de personas, y aunque existieron otros organismos represivos, las graves consecuencias de su actuación, llevaron a la CNVR identificarla como representativa de la extrema violencia que ejerció contra las personas opositoras al régimen.

Consideramos de especial importancia situar estos hechos en un contexto regional, como se puede apreciar en otros capítulos de esta investigación. Ello debido que al igual que otras regiones del mundo, América Latina también se vio trastocada por los efectos de la guerra fría. Concretamente, el proceso de descolonización en Argelia, y la Revolución Cubana, y el llamado del Che Guevara a ampliar la revolución a toda América Latina, marcaron la segunda mitad del siglo XX en la región. Para extender la Revolución se debían implementar “«focos» guerrilleros altamente preparados tanto en lo doctrinario como en lo militar, cuya ubicación serían las zonas campesinas”⁷²³. El Informe Rettig, señala que este anuncio de la instalación efectiva de «focos», tenía la idea de realizar una acción centralizada en América Latina. Cuestión que de acuerdo a lo señalado en el Informe Rettig, habría motivado a los Estados Unidos, entre otros Estados, a fomentar movimientos de «contrainsurgencia». “Este asimismo tuvo, al igual que los “focos”, un carácter local, de cada país, y central, de una cierta coordinación entre todos los países latinoamericanos. La coordinación central estuvo a cargo de los Estados Unidos”⁷²⁴. En definitiva, la contrainsurgencia fue una técnica de lucha armada contra el enemigo de la guerrilla, localizado en el campo o en la ciudad. “Los Estados deben entender el inmenso peligro de la guerrilla, y responder a él mediante la contrainsurgencia, desde luego en el nivel local, pero también en el continental”⁷²⁵. La CNVR, señaló que la contrainsurgencia se practicó en varios países de Latinoamérica, y que compartió varias características, como fueron, las formas en que actuaron, el período en que se desarrollaron, las instituciones que formaron parte de estas acciones, es decir, el ejército, la policía y los servicios de seguridad locales, así como las conexiones de

⁷²³ Ibid., p. 44.

⁷²⁴ Ibid.

⁷²⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo1, op. cit., p.44.

acciones y organismos comunes, que llevan a confirmar un origen común⁷²⁶. Es en este contexto regional donde se pueden apreciar con mayor claridad –en el ámbito local- las acciones que realizaron los organismos de inteligencia nacional que caracterizan esta segunda fase, denominada por la CNVR como de «consolidación del régimen», debido a que a diferencia de la primera fase, existió una acción planificada que se expresó en una represión mucho más selectiva en contra de los militantes de los principales partidos de izquierda.

El Informe destacó que la desaparición selectiva de personas, “respondió a un patrón de planificación previa y coordinación central que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas: aquellas a quienes se atribuía un alto grado de peligrosidad política”⁷²⁷. En la práctica los servicios de inteligencia creados en esta segunda fase, fueron responsable de la muerte y desaparición de cientos de personas, en su mayoría pertenecientes a los partidos de oposición, en los destacan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Partido Comunista de Chile (PCCH), Partido Socialista de Chile (PSCH), y el Movimiento de Acción Popular (MAPU), aun cuando todos los partidos de izquierda, así como simpatizantes del régimen depuesto fueron violentados. Si bien nuestro objetivo no es plantear en detalle las características de los servicios de inteligencia del régimen, si consideramos para los objetivos de nuestra investigación elaborar una descripción general de aquellos que identificó la CNVR, debido a que para realizar sus acciones de represión, implementaron centros de tortura, entre los que se encuentran los cuatro centros de represión que analizamos en esta investigación.

Asimismo, el Informe señaló que en esta fase, existieron otros organismos destinados a reprimir a quienes se consideraba como enemigos políticos. Entre ellos, destaca una organización creada en 1976, por iniciativa de la propia

⁷²⁶ Véase Gaudichaud, F., *Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur*, Madrid, Sepha, 2005. Nilson Cezar, M., *Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur*, Buenos Aires, Lumen, 2004.

⁷²⁷ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 62.

DINA, cuyo objetivo fue establecer una forma de colaboración entre los “servicios de inteligencia del Cono Sur (en particular Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) que permitió el desarrollo de actividades conjuntas, a través de un plan operativo denominado «Cóndor», que incluía la eliminación de opositores políticos”⁷²⁸. Otro organismo que operó en la represión de política, fue el denominado «Comando Conjunto», que funcionó desde fines de 1974 hasta 1976, fundamentalmente en Santiago. Esta organización de inteligencia, participaron mayormente efectivos de la Fuerza Aérea de Chile. A su vez, la CNVR, señala que en esta fase de represión también actuaron los sistemas de inteligencia de las diferentes áreas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Sin embargo sostiene que con anterioridad a la creación del «Comando Conjunto», ya operaban diversos servicios de inteligencia, entre ellos: el (SIFA), que fue el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, y que más tarde se denominó Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA); el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), y el Servicio de Inteligencia Naval (SIN)⁷²⁹.

La Dirección de Inteligencia Nacional DINA, se denominó al servicio de inteligencia a cargo de la represión política en el período 1974-1977. De acuerdo a lo que señaló el Informe Rettig, sus orígenes se encuentran en el llamado «Grupo DINA», que estaba integrado por mayores y coroneles del Ejército, conocido como «Comité de Coroneles», cuyas primeras actuaciones se realizaron en las dependencias de la Escuela Militar desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (y quizás, embrionariamente, con anterioridad, en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes). El Informe Rettig, señala que debido a la concepción de enemigo interno con que luego del Golpe de Estado pasó a denominarse a los partidos políticos, movimientos y grupos de izquierda, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), y Carabineros de Chile, consideraron aun más necesario disponer de servicios de inteligencia, de información y de represión política. Es en este contexto que el oficial del Ejército Manuel Contreras, que luego sería Director de la DINA, el 12 de

⁷²⁸ Ibíd., p. 63.

⁷²⁹ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 63.

noviembre de 1973, presentó ante las más altas autoridades de Gobierno y de las FF. AA., “un plan completo para la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El plan fue aprobado y cada rama de las FF. AA., así como Carabineros, destinaron personal a este nuevo servicio, en un número que se estima, para los primeros meses, de unos 400 a 500 efectivos”⁷³⁰. Este se denominó «Comisión DINA», tanto su organización como accionar fue rápido, realizando sus primeras actuaciones represivas a fines de 1973. En definitiva, la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), propiamente tal, fue creada formalmente a través del Decreto-Ley nº 521 de 1974, estipulando en su artículo que:

“Créase la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país”⁷³¹.

En consecuencia, la DINA tuvo en la práctica amplias facultades, que le permitieron menoscabar los derechos fundamentales de cientos de personas. Empleó su poder para ocultar sus acciones y asegurando su impunidad. El Informe Rettig, señala que fueron estos amplios poderes y los conceptos que tenía sobre la “seguridad interna, la naturaleza y peligrosidad del enemigo, y el carácter irredimible que atribuía a algunos de los militantes políticos de

⁷³⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 451.

⁷³¹ Chile, Decreto Ley nº 521 que crea la Dirección de Inteligencia Nacional, del 14 de junio de 1974. Diario Oficial del 18 de junio de 1974. Este texto como otros del período, fue conocido parcialmente por la opinión pública, debido a que el artículo 9º, 10º y 11º, se publicaron en un anexo de circulación restringida en el Diario Oficial. La CNVR señaló que al cabo de unos años, se conocieron estos artículos, y en ellos se permitía “a la Junta disponer de la participación de todos los organismos de inteligencia de las Instituciones de la Defensa Nacional en funciones propias de la DINA y facultar a ésta para practicar allanamientos y aprehensiones”. Véase Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., p. 63. Véase anexo nº 1.

izquierda, se sumaron para originar la gravísima práctica de desaparición forzada de personas”⁷³². Las características específicas de la DINA fueron, de un lado, que fue un organismo de inteligencia que dependía directamente del Gobierno, lo que le permitió contar con mayores recursos, así como ejercer una acción centralizada. De otro lado, se trató de un organismo que funcionó de forma secreta y muchas veces por encima de la ley, siendo protegida de todo control, ya que si bien formalmente dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió sólo al presidente de la Junta, y más tarde al denominado Presidente de la República. En este aspecto tuvo también como misión reunir y evaluar información que luego se emplearían para decisiones de gobierno. Por último, la DINA fue un organismo que operó en todo el país, y que mantuvo conexiones con el extranjero. Respecto a las funciones que tuvo este organismo, la CNVR señala que fueron amplias, y que en práctica se atribuyó otras. Además de acciones de inteligencia y seguridad de Chile, reunía información específica relevante para los fines del régimen. Tuvo funciones llamadas operativas en las que se identifican aquellas que lesionaron profundamente los derechos de las personas.

En lo que se refiere a su estructura interna, la CNVR indicó que fue compleja, debido a la diversidad y magnitud de sus funciones, que no sólo se debió al tipo de represión política que ejerció, sino también al gran número de personas que llegó a trabajar en esta organización, y que el Informe Rettig señala que fueron “varios miles de personas”⁷³³, lo que refuerza la suposición de que tuvo una estructura interna compleja. En efecto estudios posteriores han confirmado las afirmaciones realizadas por el informe Rettig⁷³⁴. Lo que se sabe es que tuvo una estructura jerárquica, con un Comando General o Comandancia, que estaba a cargo de un Director Nacional, que tenía subdirecciones y funciones de apoyo que dependían directamente de él. Entre éstas se pueden contar, departamentos o secciones, brigadas y agrupaciones,

⁷³² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 452.

⁷³³ *Ibíd.*, p. 453.

⁷³⁴ Salazar, M., *Las letras del horror. Tomo I: DINA*, Santiago, LOM, 2011.

así como equipos asesores, e incluso un Departamento Exterior⁷³⁵. El informe señaló que existieron unidades que se encargaban de funciones específicas tales como:

“Operaciones, servicios de gobierno, telecomunicaciones o inteligencia electrónica, finanzas, propaganda o guerra psicológica, investigaciones económicas, contrainteligencia. Se sabe también de una Escuela Nacional de Inteligencia. Finalmente, se conoce del concurso legal de profesionales que brindaban asesoría a la DINA en los campos legales y médico, entre otros, aun cuando no está claro cómo se organizaban estas asesorías”⁷³⁶.

Dentro de las Subdirecciones, la denominada de «Interior», tuvo entre sus funciones las acciones logísticas y de represión, para ello, tuvo un brazo operativo en Santiago denominado «Brigada de Inteligencia Militar (BIM)», y otra que se ocupó de los contactos de la DINA en las regiones, y que se denominó «Brigada de Inteligencia Regional (BIR). En nuestra investigación la relevancia que alcanzó la BIM, debido a que en una primera etapa se instaló en la Rinconada de Maipú⁷³⁷, y luego de forma definitiva en Villa Grimaldi. El Informe Rettig señala que en los inicios de la DINA existió dispersión y descoordinación, existiendo diversas unidades denominadas como «Caupolicán», «Lautaro» y «Purén». Sin embargo, la creación de la BIM llevó a la DINA a organizarse de forma más efectiva, cuestión que se concretó cuando

⁷³⁵ “El Departamento Exterior de la DINA, fue creado en abril o mayo de 1974. En él estaban destinados oficiales de las tres ramas militares, con experiencia y formación en tareas de inteligencia, y civiles provenientes de grupos nacionalistas de extrema derecha. Su función principal consistía en tareas de inteligencia y contrainteligencia; además tenía una capacidad extraterritorial”, en Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 65.

⁷³⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., pp. 453-454.

⁷³⁷ Estaba situado en una parte del fundo de la Universidad de Chile, ubicado en las cercanías de Santiago, específicamente en el sector llamado Ovejería, fue utilizada por la DINA y CNI, como resultado de un comodato del Ministerio de Educación. En la práctica los agentes de la DINA hicieron uso constante de este lugar. Aparentemente el recinto fue utilizado como centro de adiestramiento y habría funcionado allí una Escuela de Inteligencia dependiente de la DINA. En Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 458.

se trasladó a la Villa Grimaldi. En efecto, la BIM organizó sus fuerzas en dos grandes agrupaciones: «Caupolicán», que tuvo como objetivo perseguir a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y «Purén», que tenía entre sus objetivos, vigilar, detener y aprehender a los otros integrantes de los partidos de izquierda. Respecto a la forma interna de organización de estas unidades, el Informe Rettig, precisa lo siguiente:

“Cada una de estas agrupaciones, Caupolicán y Purén, se subdividían en cuatro o cinco unidades de 20 o 30 agentes, que eran los que desarrollaban la acción represiva más directa. Cada unidad contaba con vehículos, con patentes otorgadas por gracia o inscritas a nombre de “Dinar”, armas y municiones, oficinas y locales donde trabajar, lugares de alojamiento y beneficios para el personal”⁷³⁸.

En definitiva, se puede apreciar que en el momento de mayor actividad de la DINA, contó con miles de personas que trabajaron en distintas calidades y grados de afiliación. Si bien el gran número de funcionarios que tuvo esta organización tuvo participación de civiles, la mayoría de sus funcionarios de mandos medios correspondió a personal que provino de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, así como de Carabineros de Chile. El Informe Rettig, subraya que los más altos mandos estuvieron a cargo de personal del Ejército, en donde, en menor medida participaron algunos oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea. Todo lo que tenía que ver con «los mandos operativos», estuvo a cargo, principalmente del Ejército y de Carabineros. En cuanto a su personal, estuvo constituido por efectivos del Ejército, de Carabineros, Fuerza Aérea, e Investigaciones, así como civiles que provenían de grupos nacionalistas y de extrema derecha. Asimismo, contó con colaboradores que se desempañaban en reparticiones y empresas del Estado, tanto dentro de Chile como en el exterior. También contó con “el servicio de profesionales, especialmente médicos, tanto para la atención de su personal, como para la asistencia a

⁷³⁸ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 454.

sesiones de tortura para evaluar la capacidad del detenido de soportar el tormento”⁷³⁹.

Por otra parte, la DINA para implementar sus acciones represivas, necesitó de recursos económicos, los que fueron suministrados mediante los fondos presupuestarios asignados y que tuvieron carácter reservado. Así como también recibió la donación de diferentes empresas. También la DINA se adueñó de “(...) vehículos u otros bienes de las personas detenidas, y cobró cheques u otros documentos que éstas tenían en su poder al momento de su aprehensión, usando para ello, falsas identidades y endosos”⁷⁴⁰. Todos estos elementos llevan a confirmar el alto grado de complejidad que alcanzó esta organización, toda vez que logró implementar un red de inteligencia que permitió capturar, torturar, asesinar y en muchos casos desaparecer a cientos de personas que como hemos visto, pertenecían a los grupos políticos de izquierda.

El denominado Comando Conjunto (CC), fue una agrupación de inteligencia que funcionó aproximadamente entre los últimos meses de 1975 y fines de 1976, su objetivo principal fue la represión del Partido Comunista y la cúpula central del MIR. El Informe Rettig señaló que durante el período en que existió, fue responsable de la desaparición forzada de cerca de treinta personas⁷⁴¹. Entre sus características, se observa que a diferencia de la DINA, no fue una institución formal sino de hecho, y en el que también participaron miembros de Policía de Investigaciones, así como civiles que pertenecían a grupos nacionalistas de extrema derecha. Concretamente, estuvo integrado por:

“Agentes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR),

⁷³⁹ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 65.

⁷⁴⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 455.

⁷⁴¹ *Ibíd.*, p. 458.

agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y en menor grado por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)”⁷⁴².

Los orígenes del Comando Conjunto, según señaló el Informe Rettig, se debe a las diferencias y rivalidades que existieron entre los distintos organismos armados frente a las acciones que realizaba la DINA, cuestión que fue mucho más patente en la FACH, a través de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) que a juicio del Informe, creó el Comando Conjunto. Sus inicios se encuentran en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (SIFA), que desde el principio dependió directamente de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Entre sus funciones estaban las tareas profesionales y operacionales de inteligencia, que estuvieron bajo la supervisión de un grupo operativo especial. Este «grupo especial» como lo denominó el Informe, tuvo como principal objetivo ejercer la represión en contra del MIR. Sus acciones las desarrolló fundamentalmente en las dependencias de la Academia de Guerra (AGA). Contó además con una cercana relación con la Fiscalía de Aviación, y estuvo dotado principalmente de personal que provenía de la Fuerza Aérea. El hecho que detona la definitiva creación del Comando Conjunto, según los antecedentes recabados por el Informe Rettig, se debió sobre todo, a una orden escrita enviada por la Junta militar, en el mes de septiembre de 1975, cuyo objetivo fue comunicar:

“(…) a las Comandancias en Jefe por oficios de los Ministros de Interior y de Defensa, en virtud de la cual toda detención de personas que violaran el receso político concernía directa y exclusivamente a la DINA. Si se detectaban infiltrados de izquierda en las respectivas ramas, también debía comunicarse a la DINA”⁷⁴³.

⁷⁴² Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 65.

⁷⁴³ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 461.

Este hecho llevó a que en los primeros meses de 1975, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (SIFA) cambiara de estrategia creando la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), esta nueva táctica tuvo por objetivo “dar más amplitud y alcance a las funciones de inteligencia, precaverse mejor de posibles infiltraciones, participar más eficazmente en la neutralización del enemigo interno, particularmente del Partido Comunista”⁷⁴⁴. Como su antecesora, la DIFA también dependió del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. En cuanto a su estructura, tuvo dos áreas centrales, divididas en seis secciones. Una de ellas se denominó «operaciones especiales», esta unidad fue la que operó en el Comando Conjunto. Formaron parte de esta organización, civiles de ultraderecha y militantes de grupos nacionalistas⁷⁴⁵, que fueron contratados por la FACH, quienes se desempeñaron como agentes a quienes también se fue otorgando grados, siguiendo la lógica jerárquica de la institución.

En definitiva, se aprecia que en la incipiente conformación de lo que más tarde se conoció como Comando Conjunto, participaron los servicios de inteligencia de gran parte de las instituciones de armadas, entre ellas: Carabineros de Chile a través de su Servicio de Inteligencia (SICAR), que más tarde se denominó Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), que tuvo a su vez una estrecha relación con la DINA. También participaron en menor medida, efectivos del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), que de igual manera había asumido la tarea de acechar al MIR, en la ciudad de Valparaíso. Se sumaron también, algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Asimismo en Concepción, ciudad donde se habría forjado el MIR, existió un organismo para enfrentarlo, denominado Servicio de Inteligencia Regional (SIRE), que estaba integrado por efectivos de las distintas instituciones de la zona, como oficiales de la Armada y del Ejército. Si bien también tuvo diferencias con la DINA, respecto a las operaciones que se

⁷⁴⁴ Ibíd., p. 459.

⁷⁴⁵ “El Frente Nacionalista Patria y Libertad, creado en 1971 por Pablo Rodríguez Grez y Jaime Guzmán. Fue un movimiento de extrema derecha que se oponía violentamente al gobierno de Salvador Allende, organizando y ejecutando atentados y sabotajes”. Disponible en, <http://www.memoriachilena.cl/temas/cronologia.asp?id_ut=nacionalismofascismoycorporativismoenchile%281932-1945%29>. [Consultado en enero 2012].

realizaron en Concepción para perseguir a los militantes del MIR, no generó gran rivalidad, lo que al parecer puede explicar que no fueran parte del Comando Conjunto. A pesar de ello, recibió colaboración de miembros de la Policía de Investigaciones de Chile.

Otro antecedente previo a la creación de este organismo, fue la denominada «Comunidad de Inteligencia», que se localizó en un edificio localizado en Santiago y que albergó a partir de 1975, los servicios de inteligencia de las ramas de las FF. AA., y de Carabineros, quienes habrían comenzado con su creación. Más tarde se sumaría la DINE, el SIN, la DIFA y la DICAR, es decir, gran parte de los servicios de inteligencia de las Instituciones castrenses. En este inmueble, se reunían semanalmente para intercambiar información, a la que también asistía el Director de la DINA, Manuel Contreras. La llamada «comunidad de inteligencia» funcionó aproximadamente hasta fines de agosto de 1975, hasta esa fecha, cada sección se desarrolló con independencia en lo se refería a las operaciones de represión⁷⁴⁶.

Por consiguiente, el impacto que causó aquella orden emitida en septiembre de 1975, generó la molestia de la DIFA, y aunque presentó sus objeciones, aquella instrucción no se modificó. Por esta razón la DIFA continuó con sus acciones de represión en contra de uno de sus objetivos que era el Partido Comunista. El Informe Rettig, señala que estas acciones realizadas fundamentalmente a finales de 1975, mediante brigadas o agrupaciones especiales, y en la que participaban también civiles es lo que se conoce como Comando Conjunto. En ocasiones operó con notoria competencia con la DINA. Rivalidad entre ambos que incluso llegó a acciones criminales entre ellos: “tres miembros del Comando Conjunto de quienes se sospechaba habían entregado información a la DINA fueron detenidos; uno de ellos fue dado de baja y los otros dos fueron ejecutados y sus cuerpos encontrados en el Cajón del Maipo”⁷⁴⁷. Finalmente, podemos agregar que el Comando Conjunto, también

⁷⁴⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 461.

⁷⁴⁷ Como sucedió con el caso de Guillermo Enrique Bratti Cornejo, 26 años cuando Su cuerpo fue encontrado sin vida 01 de junio de 1976, en el Cajón del Maipo, cerca de Santiago. Había

fue responsable de numerosas desapariciones forzadas, y a diferencia de la DINA, sus operaciones se concentraron específicamente en Santiago. Como hemos enunciado, su objetivo central fue la represión al Partido Comunista de Chile, para ello se concentró en la zona sur de Santiago, que militarmente estaba a cargo de la FACH⁷⁴⁸.

Las someras explicaciones frente a estos servicios de inteligencia que se crearon en esta segunda etapa de la dictadura militar, permiten observar la planificación que realizaron para llevar a cabo las acciones de represión realizadas entre los años 1974 y 1977. Período que es identificado en los informes que sustentan esta investigación, como los años de mayor terror y violencia, sobre todo, por la selectividad de la represión, y la implementación de lugares para su ejercicio.

En cuanto a los tipos de recintos utilizados para mantener detenidas a las personas que fueron apresadas en esta segunda fase, el Informe Rettig identificó al menos cuatro tipos: El primero, referido a aquellos «lugares secretos de detención», y donde se identifican diferentes formas en que fueron utilizados. En algunos casos, las víctimas estuvieron durante un período recluidas, tiempo que el que se les aplicó todo tipo de torturas, y luego fueron dejados en libertad. En otros, las víctimas fueron sacadas del sitio en que se encontraban recluidas, para posteriormente asesinarlas, y sólo en algunos casos, sus cuerpos fueron encontrados, otros continúan como «detenidos desaparecidos». Así también, fueron reubicados en “recintos donde no se torturaba, pero donde no se podía recibir visitas”⁷⁴⁹. O bien volvían nuevamente a los recintos secretos, los menos recuperaban su libertad, y otros

sido amarrado y mediante disparos fue lanzado al río. Era miembro de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), se desempeñaba en labores de seguridad integrando el Comando Conjunto. En Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 559.

⁷⁴⁸ El *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, precisa que la captura de militantes del PCCH en la zona sur de Santiago, más tarde pasaron a colaborar con el Comando Conjunto, hecho que le permitió reunir bastante información tanto de la estructura como de miembros de este partido, acción que facilitó la captura de sus militantes. Véase Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 462.

⁷⁴⁹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 463.

definitivamente ingresaban en la categoría de «desaparecido». El segundo conjunto de recintos de detención, correspondió a aquellos donde no se practicaban torturas, sin embargo, los detenidos no podían recibir ningún tipo de visitas, excepto aquellas que pertenecían a los propios organismos de inteligencia. En tercer lugar, estaban los «campamentos de detenidos», entre los que se encuentran Tres Álamos y Ritoque. En ellos estaban detenidas aquellas personas “por disposición del Poder Ejecutivo y a los cuales podían tener acceso familiares de los detenidos y otras visitas”⁷⁵⁰. Por último, estaban las cárceles y penitenciarías donde se mantenía a las personas que eran sometidas a procesos o bien condenadas.

Los recintos que estuvieron bajo la dirección de la DINA, fueron: El Regimiento de Tejas Verdes, localizado en San Antonio, Cuatro Álamos⁷⁵¹, Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, la Discotéque o La Venda Sexy, Implacate y Cuartel Venencia, todos en Santiago. Otros locales utilizados fueron, el Cuartel General de Calle Belgrano nº 11, donde funcionó el «Cuartel General de la DINA», Rinconada de Maipú, predio que al parecer fue utilizado como centro de adiestramiento de esta organización. La DINA también contó con una clínica propia, conocida por su ubicación en calle Santa Lucía nº 120, y la Clínica London clínicas, ambas en pleno centro de Santiago. A su vez utilizó las dependencias del Hospital Militar. Por otro lado, entre los recintos vinculados a la DINA en regiones, se encuentra, Colonia Dignidad y La Casa de Parral. En otras ocasiones la DINA realizó sus acciones desde recintos de otras ramas castrenses, como fue el Regimiento Maipo de Valparaíso⁷⁵².

Por su parte, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y el Comando Conjunto, tuvieron como recintos de detención y tortura, la Academia de Guerra Aérea (AGA), Casa de Apoquindo, Hangar de Cerrillos, Nido 18, Nido 20, Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina (Remo Cero), La Firma. El Servicio

⁷⁵⁰ Ibíd., p. 463.

⁷⁵¹ Este recinto era administrado directamente por la DINA. Se encontraba al interior del campamento de detenidos de Tres Álamos, ubicado en Santiago.

⁷⁵² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., pp. 463-474.

de Inteligencia Naval (SIN), utilizó el Cuartel Almirante Silva Palma de Valparaíso. El Servicio de Inteligencia Regional (SIRE), utilizó la Base Naval de Talcahuano, y el Estadio El Morro, además de recintos de Investigaciones y Carabineros⁷⁵³. Además el Informe subraya que debido al gran número de condenados por supuestos delitos políticos, el régimen creó diversos campos de concentración en todo el país.

“Las inhóspitas condiciones de los lugares y el duro trato recibido en ellos, provocaron grandes sufrimientos en las miles de personas que injustamente fueron allí recluidas.

Los principales campos fueron: Isla Dawson (extremo sur de país), Tres Álamos (Santiago), Chacabuco (extremo norte), Ritoque (Aconcagua) y Puchuncaví (Aconcagua)⁷⁵⁴.

En lo que respecta a las muertes y desapariciones en esta segunda fase, el Informe agrupó a las víctimas de la siguiente forma:

“-Víctimas de uso indebido de la fuerza o de abusos de poder sin motivación política, por parte de agentes del Estado.

-Mapuches y campesinos que fueron muertos o sufrieron desaparición forzada como resultado de acciones represivas.

-Víctimas con prontuario criminal que las sindicaba como delincuentes habituales. Otros agentes del Estado, y no la DINA, parece haber sido responsables de estos crímenes (...) ⁷⁵⁵.

En cuanto a su militancia, la gran mayoría pertenecía a partidos y organizaciones de izquierda, quiénes luego de su detención desaparecieron. Entre ellos, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y sus principales unidades: El Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) y el Frente de

⁷⁵³ Ibíd.

⁷⁵⁴ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 74.

⁷⁵⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 474.

Estudiantes Revolucionarios (FER), que era la sección de estudiantes de esta organización. También fueron blanco de las persecuciones el Partido Comunista de Chile (PCCH), junto a los miembros de las Juventudes Comunistas (JJCC), y el Partido Socialista de Chile (PSCH). En menor medida, otros partidos de izquierda, como el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Partido Radical (PR), Partido Demócrata Cristiano (DC), y la Izquierda Cristiana (IC), entre otros⁷⁵⁶.

Otra de las características de las víctimas, además su militancia, fue su edad. Si bien, en el Informe tanto en su primera edición (1991) como en la segunda (1996), presenta algunas deficiencias en cuanto a datos precisos respecto a la situación etaria de las víctimas, se puede concluir que en términos generales, la característica general de las víctimas es su juventud. En efecto, el Informe señala respecto a los militantes del MIR y del Partido Socialista que la gran mayoría eran jóvenes, así como también que tenían estudios completos e incluso universitarios. En cuanto al Partido Comunista, señaló que “su edad promedio era más elevada que la de las víctimas de otros partidos”, así como también que entre sus militantes se encontraban numerosos profesionales⁷⁵⁷.

El Informe Rettig, argumentó que un número importante de los miembros de los partidos de izquierda, habían ocupado altos cargos en la dirigencia de sus partidos, o bien en el gobierno (con excepción de los militantes del MIR). Caso aparte es lo relacionado con las mujeres víctimas de violación de derechos humanos, tema que por las características de la represión ejercida es parte de otro tipo de estudio, ya que exceden los objetivos de nuestra investigación. El Informe indicó que según los datos estadísticos recopilados, la mayoría de las víctimas fueron hombres, sin embargo señaló que: “Nueve de las mujeres detenidas estaban embarazadas y no se han logrado saber si alguna de las

⁷⁵⁶ *Ibíd.*, p. 475.

⁷⁵⁷ Véase en anexo n° 7, los resultados que entregó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuadro VI. “De miembros de partidos y movimientos políticos víctimas de agentes del Estado o de particulares actuando a su servicio”.

criaturas nació, y de ser así, cuál fue la suerte de ellas”⁷⁵⁸. Nos interesa al menos señalar, que dentro de la geografía del terror que se plasmó en Chile durante la dictadura militar, es posible observar diferencias en cuanto a la forma en cómo operó la represión, cuestión que toma como precedente el propio Informe Rettig, al dividir en fases los años del régimen. Así también la forma en cómo se aplicó la violencia en las víctimas, esto es, en hombres y mujeres, en jóvenes y adultos, ya que no fue igual para todos, no tuvo las mismas connotaciones, tema que intentaremos desarrollar en el capítulo siguiente.

En lo que se refiere a las motivaciones de los victimarios, el Informe se refirió expresamente a la desaparición forzada, acción que fue característica de esta segunda fase. Aun cuando la Comisión señaló la dificultad de referirse a este tipo de actos debido a la complejidad que significa atribuir motivaciones a la práctica de una política de desapariciones forzadas, hechos que repugnan la conciencia humana, pero que sin embargo, a juicio de la Comisión, fue necesario dar a conocer, ya que correspondió a uno de sus objetivos centrales, esto fue, contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos sucedidos durante la dictadura militar. Por esta razón, la Comisión indicó que luego de analizar los casos tanto de detenidos como de desaparecidos, determinó que la desaparición forzada tuvo “un doble objetivo: “matar y ocultar para destruir a un enemigo que hay que exterminar”, (...) y al que se le atribuía el objetivo de atentar contra los valores superiores y permanentes”⁷⁵⁹. En definitiva, si nos interrogamos sobre el objetivo que tuvieron las desapariciones forzadas, la siguiente pregunta, es quiénes fueron las víctimas, y por qué se les hizo desaparecer. Estas cuestiones plantean importantes reflexiones y debates, de las que nosotros sólo enunciaremos. Sin duda el llamado «enemigo interno», eran para la DINA fundamentalmente las organizaciones y partidos de

⁷⁵⁸ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 475. Véase el excelente trabajo de María Inés Muñoz y Paz Rojas, *Todas íbamos a ser reinas*, Santiago, LOM, 2002. En esta investigación se aborda el crimen cometido en contra de un grupo de nueve mujeres que fueron detenidas y desaparecidas mientras estaban embarazadas.

⁷⁵⁹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 476.

izquierda, principalmente el MIR, el PCCH y el PSCH. Esto se debía sobre todo a sus convicciones ideológicas y a sus vinculaciones partidistas internacionales, sobre todo con la ex Unión Soviética. Pero también influyeron la popularidad y masividad de estos grupos, así como su disciplina y habilidad para generar adherentes, elementos que sumados a la potencial capacidad para realizar acciones concretas. Por su parte, la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), atribuyó mayor peligrosidad al MIR y al PCCH. Asimismo el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), tanto en Valparaíso como en Concepción se concentró en la represión del MIR. El Informe explica que dentro de la lógica que guiaba a los organismos de seguridad del régimen, “la destrucción de los partidos significaba la eliminación de los militantes que hacían posible la existencia de la organización”⁷⁶⁰. Estas motivaciones llevaron a que los agentes de estas organizaciones, detuvieran a los militantes que consideraban de mayor importancia dentro de las jerarquías de los partidos, influían en esta determinación, sus cualidades personales vinculadas sobre todo a la valentía, coraje y resistencia física, además de los ideales contrarios a la dictadura militar. Estas características tildaban a la víctima de «enemigo», cuestión que de acuerdo a con la idea del enemigo interno, lo que quedaba era eliminarlos físicamente.

En consecuencia, la CNVR señaló que las motivaciones que existieron para perpetrar estos hechos, fueron fundamentalmente de orden ideológico, contraponiéndose a un Estado de Derecho en el que se deben inculcar las normas de los derechos humanos. Asimismo, indicó que el método de desaparición forzada tuvo por objetivo cumplir con otros fines, entre los que destacan, por un lado, facilitar que tanto el Estado como sus servicios de seguridad eludieran la responsabilidad de los hechos, por otro, evitar todo tipo de acciones judiciales, así como, esquivar presiones tanto de la opinión pública en Chile como en el extranjero. Por tanto, los motivos señalados por los servicios de seguridad del régimen, permitieron que se produjeran los desaparecimientos de las víctimas que habían sido detenidas. Presentándose para los años que comprende nuestro estudio, un número detenidos

⁷⁶⁰ Ibíd.

desaparecidos militantes del MIR en 1974 y un alto número de dirigentes del PCCH en 1976. Se observa según lo señala el Informe Rettig, sobre todo en el primer caso, que “las detenciones eran más indiscriminadas y el tratamiento de torturas no tenía límites en el esfuerzo por reunir rápidamente la mayor cantidad posible de información sobre actividad política clandestina”⁷⁶¹. Pero también se observan otras motivaciones de los servicios secretos de seguridad, para decidir sobre el destino de los detenidos, entre las que se pueden destacar rencillas políticas y discriminatorias sobre todo con la etnia Mapuche⁷⁶². Pero también se detuvieron a personas por error, o bien porque aquellos detenidos que lograron quedar en libertad, se acercaban a los centros donde habían otros recluidos, siendo sorprendidos intentando pasarles algún tipo de mensaje a los detenidos. También se dieron casos en que personal o guardias de seguridad de los organismos de inteligencia, fueron calificados de traidores y muertos por sus compañeros en servicio⁷⁶³. En otras situaciones, las víctimas desaparecieron cuando intentaban asilarse en alguna embajada. También se dieron circunstancias, en que algunos detenidos políticos «cedieron», transformándose en colaboradores de los servicios secretos, razón que les permitió continuar con vida, a pesar de este tipo de situaciones, que

⁷⁶¹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 477.

⁷⁶² Véase Mallon, F., *Historiografía y pueblos indígenas. Enfoque desde los derechos humanos*, Temuco, Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco, 2000; *La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001*, Santiago, LOM, 2005.

⁷⁶³ Como fue el caso de Guillermo Eugenio Schmidt Godoy de 23 años, ejecutado el 12 de septiembre de 1973, funcionario de Carabineros de la Comisaría de Antofagasta; condenado según se informó por un Consejo de Guerra como autor del homicidio de dos oficiales del mismo cuartel policial, el Comisario, Mayor Mario Osvaldo Núñez Carrasco, y el Sub Comisario, Capitán Héctor Dávila Rodríguez. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación indicó que: “Las circunstancias precisas de los hechos no han podido ser conocidas por esta Comisión, toda vez que la causa rol 412-73, donde constan, no fue remitida a pesar de haber sido solicitada a la autoridad correspondiente.

Sin perjuicio de la responsabilidad que efectivamente pudo haber cabido al Carabinero Schmidt en la comisión de los hechos y de la gravedad de éstos, la Comisión se formó la convicción que el condenado a muerte no contó con el derecho a un justo proceso, en razón de las siguientes consideraciones: la falta de certeza de que tal Consejo de Guerra se hubiese efectivamente realizado, toda vez que la autoridad competente no lo puso a disposición de la Comisión y la falta de asistencia de un abogado para el acusado, derecho que no puede ser negado cualquiera fueran las acciones por éste realizadas.

En consecuencia, a juicio de la Comisión, no se respetó al condenado un derecho fundamental, cual es el derecho al proceso regular, ejecutándosele al margen de las reglas del derecho y la justicia”. En Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., p. 261.

fueron casos puntuales, repercutió profundamente en estas personas⁷⁶⁴. Existieron ocasiones en que los detenidos salvaron su vida producto de “extrañas y complejas relaciones con sus captores, que resultan difíciles de explicar fuera del ambiente de secreto, de violencia y de degradación que se daba en los recintos secretos de detención”⁷⁶⁵. Es decir, aquellas personas que bajo la condición de víctimas, colaboraron con los agentes en la identificación de otras víctimas. Sin duda estas son situaciones muy complejas ya que se enmarcan en dentro de la psicología del miedo y la amenaza, por dentro del círculo de la violencia, que genera una identificación con el agresor, y desde dónde es muy difícil que la persona afectada logre salir fácilmente, ya que se ve afectada y minimizada, entre las muchas consecuencias, su integridad como persona, su porque también ha sido víctima de la violencia en que ella de forma directa o indirecta a colaborado a que se aplique a otras personas. Estos temas adquieren una gran complejidad, y han sido abordados sobre todo desde la psicología y la antropología, quedando un desafío para las futuras investigaciones en Historia, que apunten a enfoques interdisciplinarios.

Por otra parte, y siguiendo con el análisis de esta fase, los métodos represivos que caracterizan esta segunda fase, destacan las detenciones, las torturas, ejecuciones y encubrimientos. En lo que respecto a la primera, se observa que fueron incrementando las acciones que les permitieron encubrir los hechos, evitando la presencia de testigos. En lo que respecta a la DINA, en un primer momento realizó las detenciones en los hogares de las víctimas. Más tarde se optó por estudiar los itinerarios cotidianos de las víctimas, utilizando para ello redes de comunicación y agentes que vigilaban diariamente y durante semanas a estas personas. Por su parte, el Comando Conjunto, no implementó una red de espionaje tan compleja como la que implementó la DINA, cuestión

⁷⁶⁴ Los casos de Marcia Merino, conocida como “la flaca Alejandra” y Osvaldo Romo “Guatón Romo” ambos del MIR, Partido Socialista, son de público conocimiento. Ver entrevista a Marcia Merino en La Época, Santiago, 21 de julio de 1991.

⁷⁶⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 477.

que a juicio de la Comisión, “permitió el conocimiento no sólo de los hechos sino también de las identidades de los aprehensores”⁷⁶⁶.

En lo que respecta al segundo método masivo de represión, esto es la tortura, se puede constatar que en general, las personas luego que eran detenidas, pasaban a los recintos secretos que tuvieron a su cargo, tanto la DINA como el resto de servicios de seguridad, y en los que eran sistemáticamente torturados. Aun cuando este tema lo desarrollamos en el siguiente capítulo, no interesa al menos enunciar las características que persigue la práctica de la tortura. Por un lado la práctica de estos suplicios busca obtener información de la víctima, y de otro, busca quebrar la entereza, física y moral de la víctima, así como atemorizar a terceros, exponiéndolos a que presenciaran sesiones de torturas. La Comisión señaló que también se realizaron “los denominados tratos crueles, inhumanos y degradantes”⁷⁶⁷, cuyo objetivo era principalmente infringir castigos y atemorizar a los detenidos. Dentro de los métodos más utilizados de tortura física, que se aplicaron posiblemente a todos los detenidos en los recintos de detención fueron: “la parrilla, colgamientos, hundimientos o “submarinos”, “submarinos secos”, y golpes de todo tipo”⁷⁶⁸. A los detenidos se les provocó diversos traumatismos producto de heridas a bala o cortes. Fueron víctimas de violencia sexual y vejámenes de todo tipo, así como de violaciones o amenazas de ello. “También se perpetraron quemaduras en el cuerpo con líquidos hirvientes, la realización de actos aberrantes con el empleo de animales e inyección de drogas”⁷⁶⁹.

En lo que se refiere a las ejecuciones de los detenidos, la Comisión señaló que en la mayoría de los casos los detenidos desaparecidos, fueron sacados directamente de los recintos secretos donde se encontraban y fueron ejecutados cerca de los lugares donde posteriormente se les enterraría o arrojarían sus cadáveres. Estas prácticas fueron acompañadas en muchos

⁷⁶⁶ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 75.

⁷⁶⁷ *Ibíd.*, p. 76.

⁷⁶⁸ *Ibíd.*

⁷⁶⁹ *Ibíd.*, p. 77.

casos, con malos tratos y con “disparos de metralletas con silenciador o de armas cortas”⁷⁷⁰. En definitiva, las ejecuciones se pudieron realizar en los mismos recintos de detención, en la calle, disparándoles por la espalda, o bien “en el extranjero con el uso de bombas, como los casos de Orlando Letelier y Ronnie Moffit y de Carlos Prats y su esposa”⁷⁷¹. Otro tipo de ejecuciones consistió en llevar a los detenidos dormidos a causa grandes dosis de sedantes, “en un helicóptero que sobrevolaba el mar, desde el cual se los iba arrojando a las aguas, abriéndoles previamente el vientre con un arma blanca para impedir que los cuerpos flotar”⁷⁷². Como el caso de Marta Lidia Ugarte Román de 42 años, miembro del Comando Central del Partido Comunista. Fue detenida el 09 de agosto de 1976 por agentes de la DINA.

“Según testigos, la afectada permaneció recluida en el sector denominado La Torre de Villa Grimaldi, muriendo posteriormente a consecuencia de las torturas de que fue objeto. Su cadáver fue arrojado por sus captores, pero, no obstante las precauciones que estos tomaron para evitarlo, fue encontrado semidesnudo y dentro de un saco amarrado al cuello con alambre, el 09 de noviembre de ese mismo año en la playa La Ballena, ubicada en Los Molles”⁷⁷³.

El Informe Rettig, indicó que por lo general los cuerpos fueron sepultados de manera clandestina o bien arrojados al mar o algún río. Así como también se dejaron los cadáveres en la vía pública como fue en el llamado “caso degollados”, o bien se los llevó directamente al Instituto Médico Legal. Sin

⁷⁷⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 480.

⁷⁷¹ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 77. Véase Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 593.

⁷⁷² *Ibíd.*

⁷⁷³ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 551. El informe precisa en cuanto a la muerte de Marta Ugarte que: “Según el informe de la autopsia, la afectada sufrió en vida una luxofractura de la columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 09 de septiembre de 1976”.

embargo, en otros casos, las víctimas fueron sepultadas en un cementerio como N.N., y sólo en contadas ocasiones se les entregó el cadáver a sus familias. Es más, el Informe precisa respecto a las formas en que el Comando Conjunto clandestinamente sepultó los cuerpos de las víctimas, cuyos “cadáveres eran prácticamente mutilados y los rostros desfigurados para impedir su posterior identificación”. Como es el caso de Luis Alejandro Largo Vera 26 años, militante del Partido Socialista de Chile. Detenido el 14 de septiembre de 1973, cuando circulaba por la vía pública, cerca de su domicilio junto a unos amigos, en horas cercanas al toque de queda. El 20 de junio de 1995 fue identificado como uno de los cuerpos enterrados clandestinamente en el Patio 29 el año 1973. “En el año 2002 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos le informó que según las conclusiones del informe Glasgow los restos le habían entregado no correspondían a su hermano. El año 2006 le fue confirmado el error”⁷⁷⁴.

En consecuencia, se ocultó de forma sistemática a los familiares de las víctimas, tanto los hechos ocurridos como el destino final de ellas. La Comisión identificó al menos tres grandes formas de ocultar la verdad de lo que estaba sucediendo. En primer lugar, es el propio ocultamiento a los familiares de las víctimas, ya que luego detenerlos de forma sistemática el Gobierno negó las detenciones, negando los hechos, o bien entregando información falsa. A ello se suma la supuesta inexistencia de nóminas oficiales de detenidos, cuestión que ocasionó un profundo daño en las familias de las víctimas, ya que de manera incansable visitaron todas las instituciones buscando información sobre sus seres queridos, intentando por sus propios medios saber la verdad de lo ocurrido. Una segunda forma, fue ocultar información ante las diferentes autoridades nacionales y extranjeras. Frente a las diversas acciones judiciales se realizaron, como la presentación de recursos de amparo, que fueron dirigidos fundamentalmente al Ministerio del Interior, en que se preguntaba por el destino de la persona en cuestión. En la mayoría de los casos, se negaron las detenciones a través de respuestas que tenían un modelo definido, llegando

⁷⁷⁴ Bustamante, J., Ruderer, S., *Patio 29, tras la cruz de fierro*, Santiago, Ocho libros, 2008, p. 150. Véase, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., p. 147.

a adquirir un contenido estándar, en ellas se señalaba que la persona que se buscaba “no había sido detenida, por ninguna orden emanada del Ministerio del Interior, o bien, que no habían en los archivos de ese Ministerio, información sobre tal hecho”⁷⁷⁵. El régimen también negó las detenciones y entregó informaciones falsas a Organismos de Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al respecto indicó que “la víctima no tenía existencia legal, que había abandonado el territorio nacional, que fue víctima del fuego de francotiradores o simplemente que nunca había sido detenida”⁷⁷⁶. También fueron formas de ocultar los hechos que estaban ocurriendo, las profundas limitaciones de libertad de prensa que caracterizó el período. Debido a la censura impuesta, no fue posible difundir públicamente estos hechos. Es más la propia DINA a través de sus operativos, se encargó de distorsionar la información como ocurrió con el caso de la lo que se conoció como «Operación Colombo». Esta operación de montaje internacional de la dictadura militar, concretamente la DINA, que recibió el apoyo del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina. El objetivo de esta maniobra, fue desacreditar a través de distintos medios de comunicación tanto en el extranjero como en Chile, las denuncias sobre detenidos desaparecidos. Las publicaciones en que se informó sobre los supuestos hechos fueron, LEA de Argentina, *O’Día* de Brasil, La segunda, el Mercurio, y Las Últimas Noticias, en el caso de Chile. Se trató de 119 personas, que acuerdo con los datos entregados por sus familiares, habían desaparecido entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975⁷⁷⁷.

El total de víctimas en la llamada “Operación Colombo” fue de 119 personas, 100 eran hombres (84,0%) y 19 mujeres (16,0%), mayoritariamente menores de 30 años. Del total, 100 militaban en el MIR (84,0%), 9 en el Partido

⁷⁷⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 483.

⁷⁷⁶ *Ibíd.*

⁷⁷⁷ Véase Sepúlveda Ruiz, L., *119 de nosotros*, Santiago, LOM, 2005. Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, *La Gran Mentira. El caso de las "Listas de los 119". Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990*. Santiago, Equipo Nizkor-Derechos Human Rights, 2002. Disponible en, <http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/119/index.html> >.[Consultado en noviembre de 2011]. Ver anexo nº 8 el nombre de las víctimas de las 119 víctimas.

Comunista (7,6%), 7 en el Partido Socialista (5,9%), 2 en el Partido Socialista (1,7%), 1 en el Partido Demócrata Cristiano (0,8%) y 3 no tenían militancia (2,5%). El régimen afirmó que se encontraban fuera de Chile, específicamente en Argentina, y que habían sido asesinados por sus propios compañeros. El montaje fue denunciado como una farsa y repudiado por la comunidad internacional. Los 119 continúan desaparecidos hasta hoy. Una muestra de la falsedad de la «Operación Colombo», documentada en el Informe Rettig:

“En el mes de julio de 1975, la prensa de Santiago anunció el hallazgo en Ciudad Pilar, Buenos Aires, Argentina de dos cadáveres con varios disparos y carbonizados, con documentos de identidad chilenos que los identifica como Luis Alberto Wendelman Wisnik y Jaime Eugenio Robostan Bravo, versiones erróneas de los nombres de los detenidos desaparecidos Luis Alberto Guendelman Wisniack y Jaime Eugenio Robotham Bravo. Miembros de las familias de ambos desaparecidos se constituyeron en el lugar y lograron comprobar que los cadáveres no correspondían a los de sus parientes y que los documentos son burdas falsificaciones plagadas de errores”⁷⁷⁸.

Por su parte, la prensa nacional informó sobre estos hechos con los siguientes titulares: “Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina”⁷⁷⁹. “se organizan guerrillas en Chile”. Y en cuyo texto se indica que:

“Fuerzas de Seguridad del Ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan compañías guerrilleras”⁷⁸⁰.

⁷⁷⁸ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., pp. 482-483.

⁷⁷⁹ *La Segunda*, Santiago, 12 de junio de 1975, p. 28.

⁷⁸⁰ *Ibíd.* El periódico *El Mercurio*, informó que “50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca (VII región de Chile), y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino”. Añadió que según

Asimismo, el periódico *Las Últimas Noticias* tituló su portada con la frase : “Extremistas cruzan la Frontera”⁷⁸¹. En el ámbito internacional, la Revista Lea en Argentina, en su único y primer número, publicó un artículo fechado en Ciudad de México, titulado : “ La vendetta chilena”. Entre otros, se incluyó una fotografía de gran tamaño en la que aparecían, Salvador Allende, Orlando Letelier y su esposa, con una leyenda que señalaba : “ Salvador Allende ‘El Padrino’ mata desde su tumba”⁷⁸². Y en Brasil a través del periódico *O’ Día de Curitiba*, con sólo una única y primera edición, titulaba su portada con la frase “Terroristas chilenos no interior de Argentina”⁷⁸³. Por consiguiente, la información circuló en este tipo de prensa extranjera, en Chile, los periódicos del régimen, no tardaron en reproducirla con grandes titulares. Uno de ellos, fue el de *La Segunda*, que el 24 de julio de 1975, que tituló “ Exterminan como ratas a miristas ... “. O como afirmó el periódico *El Mercurio* en su editorial del 25 de julio, respecto al destino de lo que denominó “los 119” : “ Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar”⁷⁸⁴.

En definitiva, una vez más podemos comprobar tanto por los objetivos perseguidos por la DINA como por los métodos empleados conseguirlos, no es de una entidad abstracta, sino de una institución creada por personas, que como lo subraya la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fue planificada y con elementos necesarios para su funcionamiento. Respecto a quiénes fueron responsables de los suplicieron infringidos, señala que : “Fue necesario que se escogiera el personal humano. Este debía contar ya con una

provenían de Buenos Aires daban cuenta de un enfrentamiento con Carabineros de Chile en el que se habrían producido algunas bajas. Véase, *El Mercurio*, Santiago, 14 y 16 de junio de 1975.

⁷⁸¹ *Las Últimas Noticias*, Santiago, 16 de junio de 1975.

⁷⁸² *Revista LEA*, Buenos Aires, Argentina, 15 de julio de 1975.

⁷⁸³ *O’ Día*, 17 de julio de 1975. La información que siguió a este titular, afirmó que 59 extremistas chilenos habían sido identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia de Salta, Argentina. Agregando que habían muerto “durante choques con fuerzas antiguerrilleras en la provincia de Salta, Argentina”. Disponible en, <<http://chile.exilio.free.fr/chap06b.htm>>. [Consultado en octubre de 2011].

⁷⁸⁴ *El Mercurio*, editorial, Santiago, 25 de julio de 1975.

mentalidad dispuesta o bien que pudiera adaptarse poco a poco a prescindir del sufrimiento ajeno, aun cuando llegara a su grado extremo”⁷⁸⁵.

La Tercera Fase que identificó la Comisión se situó entre septiembre de 1977 y marzo de 1990. Si los períodos anteriores se caracterizaron por la relativa homogeneidad en la implementación de las formas de represión, esta etapa se caracterizó por presentar diversos intervalos en los que varió tanto el número como método de las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte. Debido a que esta etapa excede el marco cronológico de nuestra investigación, identificamos en términos generales sus características. De acuerdo a lo que señaló el Informe Rettig, esta etapa se caracterizó por la disolución de la DINA en agosto de 1977, creada debido a “la situación de conflicto interno”⁷⁸⁶ que vivía el país. Así lo señaló el Decreto-Ley nº 1.876, que puso término a esta organización, argumentando que aquellos hechos de peligro interno ya habían sido superados. Sin embargo, en noviembre de 1977, fue creada formalmente la Central Nacional de Informaciones (CNI), aun cuando entre agosto y noviembre, operó de la misma forma que su antecesora, debido a que no asumía el que sería su director en los primeros años de esta organización⁷⁸⁷. A través del Decreto Ley nº 1.878, fue definido como un organismo “militar especializado”, cuyo objetivo fue :

⁷⁸⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., pp. 484.

⁷⁸⁶ Chile, Decreto Ley nº 1.876 que *Deroga Decreto Ley nº 521 de 1974, que creó la Dirección de Inteligencia Nacional*, del 12 de agosto de 1977. Diario oficial, del 13 de agosto de 1977.

⁷⁸⁷ En diversos organismos de derechos humanos y medios de comunicación se hicieron públicos nombres que están directamente relacionados con este organismo, entre ellos destacan: Odlanier Mena, general y Director de la CNI, Humberto Gordon Rubio, general, Hugo Salas Wenzel, general, Julio Corvalán, (cuyo seudónimo fue Álvaro Valenzuela) jefe de operaciones del organismo, Marcos Derpic, coronel, nombrado subdirector de la CNI en 1989. Disponible en, <<http://www.memoriaviva.com/culpables/organizaciones/CNI.htm>>. [Consultado en octubre de 2011]. Véase, Coordinadora de ex presas y ex presos políticos de Santiago, *Nosotros, los sobrevivientes acusamos*, Santiago, diciembre 2004. Es una documentada denuncia de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, que los ex presos(as) políticos (as) elaboraron donde se presentan los nombres de los hombres y mujeres de los aparatos represivos de la dictadura militar. Disponible en, <http://www.memoriaviva.com/Tortura/nosotros_001_110.pdf>. [Consultado en septiembre de 2011].

“(...) reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas ; la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y mantención de la institucionalidad establecida”⁷⁸⁸.

La Comisión señaló que entre noviembre de 1977 y mediados de 1980, la Central Nacional de Investigaciones (CNI), orientó sus tareas más hacia la inteligencia política que a la represión, cuestión que no quita el que hayan continuado las violaciones de derechos humanos, sólo que la forma en que se perpetraron cambió de estrategia. A su vez desde los grupos de izquierda, también se advirtieron cambios, uno de ellos fue que entre 1979 y 1980 se observa el retorno siempre clandestino de grupos de izquierda, fundamentalmente del MIR, y como lo hemos mencionado en otro capítulo, se crea la facción armada de esta organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y más tarde el “Grupo Lautaro”.

El cambio que experimentaba la propia dictadura en cuanto a su implementación, cuyo eje fue la Constitución de 1980, permitió advertir atisbos de una crecimiento pero reprimida movilización social, que se hizo manifiesta a partir de las jornadas de protesta nacional que se sucedieron de forma consecutiva entre 1983 y 1985. Así también se observa el accionar de la CNI que a partir de 1980 desarrolló una actividad represiva mucho más intensa. El Informe Rettig subraya que: “A partir de 1981, se efectuó un número de desapariciones aplicada de manera selectiva y con métodos distintos a los períodos anteriores, que fueron de responsabilidad de la CNI”⁷⁸⁹. En general fue muy similar a la DINA en cuanto a su definición, que como lo estipuló el artículo 1º del Decreto-Ley, fue un “organismo de carácter técnico”. En cuanto a

⁷⁸⁸ Chile, Decreto Ley nº 1.878 que crea la *Central Nacional de Informaciones*, del 12 de agosto de 1977. Diario Oficial, del 13 de agosto de 1977.

⁷⁸⁹ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 85.

sus características, esto es una estructura jerárquica, a la cabeza de la CNI estaba un Director General, como lo estipuló el artículo segundo del Decreto-Ley n° 1.878 que señaló: “la CNI estará dirigida por un oficial General o Superior en servicio activo de las FF. AA. Y de Orden, el que tendrá la dirección superior técnica y administrativa del servicio”. Estuvo dotada de personal que provenía de las instituciones de Defensa Nacional y de Orden y también de personal civil. Al igual que la DINA, contó con una red de colaboradores, así como profesionales, entre los que destacan algunos médicos, que examinaban a los detenidos para comprobar su resistencia frente a las torturas y malos tratos. También la CNI, fue similar en cuanto a sus funciones y objetivos, es decir, fue un organismo de inteligencia y represión del régimen, y como la DINA, ejerció la tortura, provocó muertes y desapariciones de personas entre otros suplicios. A su vez, la CNI heredó los efectos patrimoniales de su antecesora, según el mandato del artículo 11° del Decreto Ley de creación. Sin embargo, una de las mayores diferencias, fue que dependió jerárquicamente del Ministerio de Interior, y que tuvo como una de sus funciones centrales la “mantención de la institucionalidad establecida”⁷⁹⁰. Otra diferencia como lo señaló el Informe Rettig, fue que enfrentó una década que se caracterizó por el cambio político nacional, sobre todo por las acciones armadas de grupos de extrema izquierda. Así como también las jornadas de protesta ocurridas entre 1983 y 1985, que marcaron un giro, ya que permitió visibilizar la fuerza que había alcanzado el movimiento social en contra de la dictadura, y de otro, comprobar una vez más la brutalidad de la represión que desplegaba en las calles de todo el país.

En definitiva, podemos afirmar que aunque la CNI tuvo algunas diferencias con la DINA, en el fondo fue dotada de amplias facultades que le permitieron, arrestar mediante una orden judicial, así como también podía apresara a posibles sospechosos, recordemos la plena vigencia del artículo 8vo de la Constitución. Asimismo podía realizar todo tipo de allanamientos con la sola presunción de la existencia clandestina de armas. En el artículo primero

⁷⁹⁰ Chile, Decreto Ley n° 1.878 que crea la *Central Nacional de Informaciones*, del 12 de agosto de 1977. Diario Oficial, del 13 de agosto de 1977, artículo 1°.

se estipularon las más amplias atribuciones de esta organización: “Reunir y procesar toda las informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas”⁷⁹¹.

Debido a las labores de represión que tuvo la CNI, contó con funciones de “inteligencia, contrainteligencia, análisis del comportamiento, seguimiento, e incluso penetración, de partidos y organizaciones políticas y sociales, la Iglesia y movimientos religiosos”⁷⁹². Estas acciones requirieron una compleja estructura que permitió llevar a cabo todas sus maniobras. Contó con secciones destinadas al seguimiento y represión de determinados grupos políticos. Uno de ellas fue la División de Inteligencia Metropolitana (DIM), que tuvo como objetivo el seguimiento y represión de las organizaciones “político-militares” como fue el FPMR y el MIR, para ello desplegó centenares de efectivos que se abocaron a la captura de sus militantes. Para cumplir estos objetivos en regiones, estaba la División de Inteligencia Regional (DIRE), que también contaba con un gran número de personal destinado a estas acciones.

El Informe Rettig señaló que la CNI contó con una estructura que estaba “destinada a la inteligencia en el extranjero, incluyendo infiltración entre los chilenos exiliados, y el control permanente de las actividades de organizaciones y personas que apoyaban a la oposición”⁷⁹³. Sin embargo, el grueso de su acción represiva estuvo destinado a la actuación de forma directa sobre estos grupos de izquierda que habían tomado la vía armada para ir en contra del régimen. Fue contra sus militantes a quienes estuvieron dirigidas las

⁷⁹¹ Ibíd. Posteriores modificaciones al Decreto Ley nº 1.878, permitieron dar mayores facultades a la CNI a través de la promulgación de diferentes tipos de leyes, entre ellas podemos mencionar: Chile, Ley nº 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, del 16 de mayo de 1984. Diario Oficial, del 17 de mayo de 1984. Chile, Ley nº 18.315 que otorga a la CNI la facultad de practicar arrestos, del 16 de mayo de 1984. Diario Oficial, del 14 de junio de 1984. En virtud de la Disposición 24 transitoria de la Constitución permitió detener a las personas en sus dependencias cuando lo dispusiera el Ministro del Interior. Con posterioridad y debido al clima político que se vivía en el país, derogó las facultades de la CNI para detener a personas en sus dependencias. Véase Chile, Ley nº 18.623 que deroga artículo 2º transitorio del Decreto Ley nº 1.877 de 1977.

⁷⁹² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, Ministerio del Interior, Santiago, 2004, cap.2, p. 620.

⁷⁹³ Ibíd., p. 621.

acciones de infiltración, seguimiento, detenciones, tortura, represión armada y ejecuciones. También actuó con violencia en las diferentes jornadas de protestas que se realizaron en todo el país a partir de los años ochenta. Y siguiendo el ejemplo de la DINA, instauró el miedo en la población a través de estas y otras acciones, entre los que destacan amedrentamientos tanto a políticos como a las familias y amigos de quienes eran perseguidos. Debido a las facultades con que contó esta organización, pudo operar con absoluta impunidad. Sus agentes actuaban con nombres falsos. El Informe Rettig, subrayó respecto a que no revelaban sus identidades que: “Tampoco se vieron en los hechos forzados al cumplimiento de las contadas resoluciones judiciales que les afectaban. Actuaban en los hechos sin sujeción a las normas, con facultades ilimitadas de desplazamiento y medios”⁷⁹⁴. La compleja estructura en red de la CNI, junto a sus agentes y colaboradores, así como los insumos para ejecutar sus acciones, requirió de un financiamiento que en este caso, fue fiscal, a través de la Ley de Presupuestos. Estos fondos eran administrados por el Director Nacional de la organización, que tenía amplias facultades en cuanto al manejo y disposición de bienes y fondos. Si bien estos capitales eran fiscales, en la práctica, tenían carácter de reservados, hecho que permitió una vez más actuar al margen de la ley, ya que careció de una real fiscalización.

El Informe, identificó determinadas características en la CNI que a su vez permitieron observar etapas en el transcurso de los años en que funcionó. Un primer momento que identificó fue en 1977, donde a juicio de la Comisión, se pudo constatar una disminución de las acciones represivas de la DINA, cuestión que se infiere según la Comisión, por el clima tenso y de inseguridad que se vivió al interior de ese organismo, producto de cuestionamientos internos venidos del propio régimen, así como por las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Se trató de “una etapa marcada por la inminencia de cambios. Sintomática es la destrucción y desaparecimiento en esos meses de archivos de la DINA, de lo que no se tiene

⁷⁹⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, Ministerio del Interior, Santiago, 2004, cap.2, p. 622.

noticias dignas de crédito”⁷⁹⁵. Un segundo momento es a partir de noviembre de 1977, cuando asume un nuevo director de la CNI y se reestructura, diferenciándose mucho más de lo que había sido la DINA. Según señala el propio Informe, en esta etapa por una parte se termina el Estado de Sitio en todo el país, y por otra, se dicta la Ley de Amnistía en 1978. Un tercer momento, estuvo caracterizado por el retorno clandestino de los miembros del MIR, organismo que había asumido una política de ataque en contra del régimen, cuestión que provocó enfrentamientos armados. Un cuarto momento, correspondió al intento por parte del MIR de instalar una base permanente en Neltume durante 1981. Junto a ello destacó el cambio de estrategia del Partido Comunista de hacer frente a la dictadura asumiendo la vía armada, para ello creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Y un último momento, está relacionado con lo que fue denominado por parte de la izquierda como «el año decisivo», y que correspondió a 1986, debido al masivo ingreso de armas y al fallido ataque al General Pinochet. Esta denominación se incluye a 1987, debido a que se produjeron “desapariciones forzadas de cinco miembros del FPMR y la llamada Operación Albania, en que mueren doce militantes. También del FPMR, estos dos hechos se atribuyeron a la CNI”⁷⁹⁶. Estos últimos temas los abordamos en otro capítulo a propósito de los años previos que constituyeron el plebiscito de 1988. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, se constata fehacientemente que la violencia en esta tercera etapa no disminuyó, sino por el contrario, fue selectiva, a su vez que estuvo atravesada por el propio cambio histórico que experimentaba el país, y que tenía que ver entre otros, con el movimiento social contrario a la dictadura que alcanzaba una mayor cohesión, hecho que es posible pesquisar a propósito de las protestas nacionales que se producen a partir de 1983, y que aglutinaron a diferentes actores sociales, todos los que se organizaron para ir en contra de la dictadura.

⁷⁹⁵ Ibíd., p. 623.

⁷⁹⁶ La llamada *Operación Albania*, también conocida como la *Matanza de Corpus Christi*, ocurrió entre el 15 y 16 de junio de 1987, en la que fueron asesinados por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), 12 personas miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Disponible en, <http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/albania/ddhh_albania_0001.pdf>. [Consultado en septiembre de 2011].

La organización denominada Comando de Vengadores de Mártires (Covema), tuvo su génesis en el Comando Antisubversivo (CAS) formado a raíz de la muerte en julio de 1980, del Coronel del Ejército Roger Vergara Campos, que fue Jefe de Inteligencia de esta institución. El CAS estuvo integrado por personal de “la Brigada de Homicidios e Inteligencia Policial de Investigaciones, el OS7 de Carabineros y la División Metropolitana (DIM) que formaba parte de la CNI”⁷⁹⁷. El Covema, como los otros organismos represivos, contó con una infraestructura para ejercer la violencia, esto es, vehículos donde trasladar a las víctimas y recintos de detención en los que también se practicaron todo tipo de torturas. Más aun, este organismo fue conocido debido a la muerte de un estudiante de periodismo, Eduardo Jara, que falleció debido a las torturas inflingidas por el Covema. Esta organización estuvo integrada por personal de CNI, “de hecho, el Director de la CNI a esa fecha señaló públicamente que el COVEMA fue formado en forma autónoma a partir de funcionarios de la CNI”⁷⁹⁸.

La Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), creada en septiembre de 1983, con posterioridad a la disolución de la Dicar. Con su creación se buscaba dotar de mayor protagonismo a Carabineros de Chile en su acción de inteligencia y contrainsurgencia. Entre sus miembros se encontraban ex miembros del Comando Conjunto, y participación de civiles. Estaba a cargo un director y subdirector, ambos bajo el mando de coroneles de Carabineros, cuya autoridad superior estaba al parecer, a cargo del Director General de Carabineros. Dos lamentables hechos hicieron que se conociera dentro de la opinión pública. El primero, correspondió a la muerte de Carlos Gody Echegoyen, quién falleció producto de las torturas aplicadas en la Comisaría de Quintero. El segundo hecho, fue porque se les vinculó al “caso degollados”, que correspondió al asesinato el 30 de marzo de 1985, de

⁷⁹⁷ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 87.

⁷⁹⁸ *Ibíd.*, General de Ejército Odlanier Mena Salinas, fue el primer director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Santiago Nattino, Manuel Guerrero, y José Manuel Parada, miembros del Partido Comunista⁷⁹⁹.

En lo que respecta a las víctimas tanto de la CNI como del Covema y Dicomcar, según argumentó la Comisión, las detenciones fueron mucho más selectivas que en los dos períodos anteriores. Mayoritariamente se persiguió a miembros del MIR, FPMR y PCCH. Se trató fundamentalmente de personas que habían retornado clandestinamente al país, o eran parte de la facción militar del MIR y del FPMR, o bien la apoyaban, así como también aquellos que realizaban otro tipo de tareas dentro de estas organizaciones, como las de comunicación tanto dentro como fuera del país. En cuanto a la justificación de estas acciones, no fueron muy diferentes a las que expusieron en otros grupos represivos, donde lo que prevaleció en general fue el argumento del enemigo interno. Sin embargo, a juicio de la Comisión existieron diferencias respecto de las motivaciones de la DINA y la CNI. La primera justificó la eliminación de los militantes de izquierda, debido a que su objetivo era extinguir el potencial peligro que significaban. Y la segunda, tenía la convicción de que “combatían los intentos de insurgencia armada, el adversario o enemigo era más tangible”⁸⁰⁰. Lo que en ningún caso justifica las acciones de violencia cometidas. En muchos de los casos que recibió la Comisión, se observó que efectivamente se habían realizado ejecuciones y simulacros de ellas, como formas de amedrentamiento y represalias, puesto que según la lógica de la CNI se situaban en acciones propias de “una guerra irregular en la que el adversario también las cometía”⁸⁰¹.

⁷⁹⁹ El triple homicidio, obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito. Después de cuatro meses, y luego de la persistencia de las viudas que semanalmente marchaban exigiendo justicia hacia el Ministerio de Justicia. Finalmente, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales no encargados de la policía nacional (carabineros). Esto produjo que el 02 de agosto de 1985, el General César Mendoza, Director General de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno, dimitiera de su cargo, disolviéndose de forma definitiva la Dicomcar. Disponible en, <http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/dego/ddhh_dego0001.pdf>.[Consultado en octubre de 2011].

⁸⁰⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 626.

⁸⁰¹ *Ibíd.*

En cuanto a los métodos de represión difirieron de la fase anterior, sobre todo porque la CNI utilizó una doble forma de ejercer la represión. Por una parte, se realizaron arrestos que se reconocían y se colocaban a disposición de la Fiscalía Militar. Pero al mismo tiempo, existían otros apresamientos que se ocultaban, no dando información, cometiendo violaciones de derechos, argumentando que eran “acciones de legítima defensa en enfrentamientos”.

Dentro de los métodos de represión, la Comisión identificó como tales : la detección, detención, tortura, Ejecuciones y desapariciones forzosas, disposición de los cadáveres y los métodos de ocultamiento de los hechos y de desinformación. En lo que respecta al primero, esto es a la detección de las víctimas, se observa que debido al sistema de inteligencia que implementó la CNI, tanto a través de seguimientos como infiltraciones en los propios grupos de izquierda, logró detectar con gran eficacia a los partidos que aun resistían en la clandestinidad. Por tanto, la información obtenida fue resultado tanto de las investigaciones que se habían acumulado en las fases anteriores, y que había realizado fundamentalmente la DINA, como de la sistema práctica de la tortura para extraer confesiones e informaciones por parte de víctimas que habían sido apresadas.

En lo que respecta a las detenciones, en la mayoría de las veces organizó amplios operativos con la participación de un gran número de personas, vehículos y armas de fuego. Estos dispositivos fueron montados muchas veces para ejecutar a las personas que previamente habían sido detenidas. “Similares operativos de gran escala y muy elaborados se montaron a veces para dar muerte a personas y presentar los hechos como una detención a la cual se había opuesto resistencia”⁸⁰². En esta etapa, como en las otras, la tortura fue aplicada por todos los organismos represivos. El Informe Rettig, señala que en el caso de la CNI, la aplicó de forma sistemática, pero que a diferencia de la DINA, cuyas víctimas eran torturadas en cada uno de sus centros, la CNI aplicó una “tortura selectiva”. Entre los principales métodos de tortura, “continuaron

⁸⁰² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 627.

siendo el empleo de electricidad, sobre todo en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo, y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de la asfixia, repitiéndose luego la operación”⁸⁰³.

En lo que se refiere a las desapariciones forzosas, la Comisión señaló que “entre el período 1981-1989, se practicaron de tal manera que prácticamente no se conocen testigos de los hechos o recintos donde hayan permanecido las víctimas”⁸⁰⁴. Con daba respecto a las ejecuciones, se pueden identificar diferentes tipos en este tercer período, todos los que tienen mayor relación con la CNI :

“En algunos casos se daba efectivamente un enfrentamiento entre las fuerzas que concurrían sea a detener, sea a matar a aquéllos que eran buscados. En varios de estos casos se dio muerte a los capturados o heridos.

En otros casos se trataba simplemente de una emboscada para matar al militante buscado, que se había pasar por enfrentamiento real.

En un menor número de casos, se dieron otras formas de ejecución, como el degollamiento y el secuestro y ejecución por múltiples disparos en la cabeza”⁸⁰⁵.

Por otra parte, los cadáveres de las víctimas en su mayoría fueron entregados a sus familias, aun cuando en algunos casos los cuerpos de los ejecutados, fueron lanzados a ríos, campos, caminos, en su mayoría correspondían a lugares próximos a las ciudades. En este aspecto, la Comisión fue enfática al señalar que “con respecto a los desaparecidos de esta período, no tiene información de cual haya sido el destino de sus restos”⁸⁰⁶. Asimismo, en lo que se refiere a la los métodos de ocultamiento, como en los otros períodos, de manera sistemática se impidió la identificación de la víctima,

⁸⁰³ Ibíd.

⁸⁰⁴ Ibíd.

⁸⁰⁵ Ibíd., pp. 627-628.

⁸⁰⁶ Ibíd, p. 628.

ocultando y distorsionando toda información que pudiera dar con su paradero. En la impunidad de estos hechos, influyó también la protección que tuvieron los agentes de la CNI, ya que en las contadas ocasiones en que fueron requeridos por los tribunales, utilizaron nombres ficticios o seudónimos que se concieron también como “chapas”, cuestión que imposibilitó seguir con procedimientos judiciales transparentes.

En cuanto a los recintos de detención y tortura, la Comisión identificó aquellos que utilizó la CNI, entre los que consideró “aquellos más conocidos”, entre los que destacan los recintos de calle “República nº 517, donde funcionaba el cuartel general ; el de Borgoño nº 1470, donde se detenía y torturaba ; y Villa Grimaldi”⁸⁰⁷. Los recintos que utilizó el COVEMA, la Comisión señaló que debido al proceso judicial que se llevó a cabo debido a la muerte de Eduardo Jara, que señalamos en páginas anteriores, se reconocieron como centros de detención “la 8va Comisaría de Investigaciones y la Central de Investigaciones de calle General Mackenna. Por su parte, la DICOMCAR, empleó un recinto que había sido utilizado por el Comando Caonjunto, ubicado en calle Dieciocho, denominado « La Firma »”⁸⁰⁸. Todos estos centros se localizaron en el centro de Santiago, lo que detalla también la cercanía territorial al régimen, ya que a escasos kilómetros —en el edificio Diego Portales- se concentraba la totalidad del poder del régimen, y por supuesto, el conocimiento de los hechos que en estos centros ocurrían, ya que los directores de cada uno de estos organismos debían rendir cuentas directamente a general Pinochet.

Todo ello terminó por imprimir en esta tercera fase, el miedo y la injusticia frente a una dictadura militar que de manera sistemática violó los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, es posible advertir el cambio histórico que de forma paulatina se estaba llevando cabo, toda vez que a pesar de existir fuertes leyes que cohartaban los derechos fundamentales, es posible advertir en esta etapa, la fuerza del movimiento social que con diferentes

⁸⁰⁷ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 87.

⁸⁰⁸ *Ibíd.*, p. 87.

medios hizo frente al régimen. Asimismo, se observa que el propio régimen intentó rearticular su poder, implementando diferentes estrategias que permitieran sustentar su dominio absoluto, a través del miedo y la muerte y las desapariciones forzadas.

4.2.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura

El origen de este Informe se encuentra en la propuesta sobre Derechos Humanos, titulada “No hay mañana sin ayer”, elaborada por el entonces presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, el 12 de agosto de 2003. Sobre la base de los logros alcanzados en esta materia durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, entre ellas, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, junto a las diversas medidas de reparación, entre ellas, la Oficina Nacional del Retorno, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), junto a las diversas acciones de reparación que se formularon, y que siguieron sobre todo las recomendaciones de la CNVR, así como también las conclusiones que más tarde emitió la Mesa de Diálogo. La propuesta de Lagos, se presentó como una continuación de las acciones destinadas a profundizar los temas aun pendientes en materia de Derechos Humanos. Además enfatizaba que sólo los Tribunales de Justicia constituían el medio para avanzar en la verdad, de acuerdo a la aplicación de las leyes vigentes. Asimismo subrayó su negativa a promover alguna ley que fuera de punto final de los procesos abiertos de derechos humanos. De la misma manera, “dejó en los tribunales la interpretación respecto a la Ley de Amnistía”⁸⁰⁹. Sobre la base de cuatro objetivos, propuso seguir avanzando en materia de derechos humanos, ellos fueron:

“Alcanzar el conocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo ético: la ubicación de personas detenidas

⁸⁰⁹Lagos Escobar, R., “No hay mañana sin ayer”, mensaje presidencial al dar a conocer la propuesta en materia de derechos humanos, op. cit., p.13.

desaparecidas, y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

Persistir en nuestra conducta de asegurar la independencia, agilidad y eficacia en la acción de los tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en la interpretación de ésta. Ello supone impulsar iniciativas legislativas cuyo fin sea facilitar y agilizar las investigaciones judiciales.

Profundizar y mejorar las medidas de reparación que hasta ahora se han aplicado, y complementarlas en caso de vacíos o situaciones que ameriten ser incorporadas.

Mejorar, a través de iniciativas legislativas, de diseño y acciones institucionales, la protección, promoción y garantía del pleno respecto de los derechos humanos fundamentales”⁸¹⁰.

Es en este contexto donde se establece la creación de una Comisión que determina con gran rigurosidad, un listado con todas las personas que, “hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas”⁸¹¹, para ello se argumentaba que:

“Mucho ha sido el sufrimiento de quienes estuvieron detenidos y fueron torturados. Todos ellos merecen el más profundo respeto de la ciudadanía y del Estado hacia las terribles experiencias que vivieron. Su dolor, bien sabemos, no puede ser reparado sino en mínima parte”⁸¹².

Con el objetivo de saber quiénes eran las personas –chilenos y chilenas- que habían pasado por estas graves experiencias, el Decreto Supremo nº 1.040, creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que fue promulgado en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2003. Esta Comisión

⁸¹⁰ Ibid., pp. 14-15.

⁸¹¹ Ibid., p. 26.

⁸¹² Ibid.

tuvo la categoría de constituirse en un órgano asesor del Presidente de la República, cuyo objetivo exclusivo fue:

“(...) determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”⁸¹³.

En el informe que preparó la Comisión se refirió con más detalle al tema de los agentes del Estado que participaron en las detenciones subrayando que:

“b) El hecho de haber sido cometidas por agentes del Estado o por personas a su servicio, entendiéndose por tales a aquellos particulares que, sin tener calidad de agentes del Estado, actuaban con conocimiento, tolerancia, aquiescencia o en connivencia de éstos, sin que se precise una relación formal o de tipo contractual (...)”⁸¹⁴.

Quedaron excluidas de la investigación, aquellas personas que fueron apresadas en manifestaciones públicas, y aquellas que fueron condenadas por delitos comunes y que luego pasaron a los tribunales. Esta Comisión como su antecesora, tuvo la misión de proponer al presidente de la República, medidas austeras de reparación. Quedó facultada para realizar todas las averiguaciones que estimara necesaria, así como, quedando supeditados todos los órganos del Estado a prestar su colaboración, permaneciendo en reserva tanto los testimonios recibidos, como todos los antecedentes reunidos. Asimismo, tuvo como objetivo elaborar un completo informe sobre las personas que fueron víctimas de la tortura y privación de libertad por razones políticas. El plazo estipulado fue de seis meses, y al igual que la CNVR, se podía prorrogar por un

⁸¹³ Chile, *Decreto Supremo nº 1.040*, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, op. cit.

⁸¹⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 16.

período de tres meses, para la elaboración y redacción del Informe final⁸¹⁵. Y como ella, no tuvo atribuciones jurisdiccionales, como lo estipula en el artículo tercero del citado Decreto, “(...) no podrá, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere haber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento”⁸¹⁶.

El argumento central que inspiraba el decreto que creó la Comisión, estuvo relacionado con la necesidad de reconocer a las personas que habían sido víctimas de la represión política, y otorgar al menos de forma simbólica, algún tipo de reparación. Si bien se era consciente desde el propio ejecutivo y las diversas organizaciones que habían colaborado de forma permanente apoyando tanto a las víctimas como a sus familias, que el daño o pérdida causado a personas por razones políticas, no podía ser reparado de manera total, al menos se aspiraba a dar un más paso más en materia de derechos humanos, siguiendo las iniciativas de los gobiernos de la concertación que le habían precedido. Es por esta razón que el gobierno de Ricardo Lagos, pretendía con esta nueva iniciativa avanzar en el tema de los derechos humanos, ya que como lo manifiesta el decreto de creación de la Comisión, era un deber del Estado de Chile, reconocer a las víctimas, y trabajar hacia una cultura democrática. Es por ello que los fundamentos que sustentaban el Decreto de creación de la Comisión, insistía en:

“Que, cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones.

⁸¹⁵ El plazo fue ampliado hasta el 30 de noviembre de 2004, esta medida se llevó a efecto mediante la promulgación de una norma que así lo instruyó. Véase Chile, *Decreto Supremo n° 889*, que modifica decreto n° 1.040, de 2003, en sentido que indica y prorroga plazo de funcionamiento de Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, 27 de agosto de 2004. Diario Oficial del 06 de octubre de 2004.

⁸¹⁶ Chile, *Decreto Supremo n° 1.040*, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la Verdad acerca de las violaciones de Derechos Humanos en Chile, op. cit.

Que, muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado.

Que, sólo en la medida que se conozca en forma completa la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”⁸¹⁷.

Tanto las características que orientaron la investigación de la Comisión, como los resultados que más tarde publicó, continuaron la labor investigativa y de reparación de los gobiernos de la Concertación, que tuvieron como objetivo, contribuir al esclarecimiento global de la verdad, sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En efecto, la Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación tuvo como objetivo central el reconocimiento de personas detenidas desaparecidas, ejecutadas y torturadas cuyos padecimientos dieron como resultado la muerte. Más tarde, la Mesa de Diálogo tuvo como propósito, avanzar para encontrar a las víctimas del régimen militar, buscando información sobre el destino, para invitó a participar a las Fuerzas Armadas y de Orden. Sin embargo, dentro de los temas pendientes, uno de gran importancia, es el que estaba relacionado con aquellas personas que habían sobrevivido a las detenciones, apremios, y torturas, es decir, faltaba el reconocimiento formal de las víctimas, que habían logrado sobrevivir a las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Esta fue la tarea fundamental de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Estas tres instancias, que como hemos mencionado en páginas anteriores, forman el arco temporal desde dónde ingresamos al estudio de la memoria histórica que la sociedad chilena realizó sobre ese pasado traumático, generaron a su vez “irrupciones de memoria”, y como analizábamos en el capítulo anterior, donde ningún sector de la sociedad quedó indiferente ante la publicación de sus resultados.

⁸¹⁷ Ibíd.

4.2.2.- Metodología y fuentes que utilizó la Comisión Valech

Siguiendo lo que había sido la experiencia de trabajo de su antecesora, la Comisión Valech, redactó el Informe en un solo tomo de seiscientos cuarenta y seis páginas, repartidas en diez capítulos. A diferencia del Informe Rettig, sus resultados fueron publicados en versión electrónica, y existió un reducido número de ediciones en papel, que fue proporcionada fundamentalmente a las víctimas que colaboraron con su testimonio. En cuanto al funcionamiento de la Comisión, como enunciamos en el capítulo anterior, ocho fueron las personas designadas por el presidente de la República, las que se desempeñaron *adhonorem*⁸¹⁸. Y aunque en el Informe se realiza un detalle de las acciones que realizó la Comisión, no se da un número específico del total de personal y funcionarios con que contó dicha Comisión. Destaca que los funcionarios que desarrollaron las actividades tanto de antecedentes como de las entrevistas fueron mayoritariamente abogados, psicólogos y asistentes. A su vez se aprecia un gran despliegue de profesionales y funcionarios que colaboraron en el transcurso de la investigación, así como también la gran cantidad de trabajo que desarrollaron durante los nueve meses en que funcionó la Comisión.

Dentro de las tareas asignadas estaba aprobar su propio reglamento, así como realizar las modificaciones que fueran necesarias, y al mismo tiempo clarificar las dudas que se fueran suscitando en el transcurso de la investigación. Una cuestión central fue que debían “determinar los criterios para calificar la condición de preso político o torturado”⁸¹⁹, para ello era preciso a su vez fijar los métodos y criterios de aprobación de los antecedentes recibidos, que permitieran alcanzar convicción de los hechos. Por otra parte, era su responsabilidad fijar los criterios bajo los cuales funcionaría la Vicepresidencia Ejecutiva, así como realizar la selección de los profesionales que colaborarían en las distintas tareas que la Comisión estimara necesarias. Asimismo contó

⁸¹⁸ El *Informe Valech* señala que: “con la excepción de aquellas propias de las funciones ejecutivas de la Vicepresidencia Ejecutiva. A la vez, una modificación del Reglamento de la Comisión, de fecha 23 de abril de 2004, permitió financiar a los comisionados los gastos en que incurrieron con motivo de su constitución en regiones”, en Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 26.

⁸¹⁹ *Ibíd.*, p. 27.

con absoluta libertad para solicitar informes y documentos necesarios para desarrollar la investigación tanto a autoridades como servicios del Estado. Tuvo bajo su responsabilidad la emisión de comunicados públicos a nombre de la Comisión. A su vez, podía encomendar funciones específicas o bien diligencias a alguno de sus miembros. Estaba facultada para conocer las diversas materias que el presidente pudiera incorporar como diligencias a la Comisión, y por último, elaborar el Informe. Emitiendo los avances de investigación sólo al Presidente de la República. Se fijaron tareas específicas para el presidente de la Comisión, que estuvieron orientadas más bien hacia la conducción del proceso de investigación. También se designaron tareas para la vicepresidencia ejecutiva, que estuvo a cargo de la organización de cada una de las áreas de trabajo y distribución de las tareas de la Comisión, dividiendo sus tareas en cuatro grandes áreas, estas fueron: Atención de Público, Información e Investigación Documental, Calificación, Administración y Finanzas. A su vez se designaron dos unidades de apoyo: Unidad de Procesamiento y Archivo, y Unidad de Apoyo Informático⁸²⁰. Ello permitió que se pudieran adelantar algunas gestiones, iniciando su trabajo, el mismo día en que se publicó en el Diario Oficial el decreto que creó la Comisión⁸²¹.

El trabajo de la Comisión se desplegó en todo el país, a través de las cuarenta y dos gobernaciones que a la fecha existían⁸²². En las trece con mayor población, se contrató más profesionales para realizar el trabajo de manera eficiente. Asimismo, el grupo central de la Comisión, realizó visitas de forma permanente en todo el país, mientras se recibían los antecedentes, superando las ciento cincuenta visitas a más de cien localidades que estaban apartadas de las ciudades en donde estaban ubicadas las gobernaciones. Por otra parte, para aquellas personas que querían dar su testimonio, pero que se

⁸²⁰ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 28.

⁸²¹ *Ibíd.*

⁸²² El 20 de diciembre de 2006 el Congreso de Chile aprobó la ley para incorporar dos nuevas regiones, Los Ríos (XIV), Arica y Parinacota (XV) desde 2007, dividiendo administrativamente al país en quince regiones. Véase Chile, *Decreto Ley n° 20.174* que crea la XIV Región de Los Ríos y la provincia de Ranco en su territorio, del 13 de diciembre de 2005. Diario Oficial del 05 de abril de 2007. Chile, *Decreto Ley n° 20.175* que crea la XV Región de Arica y Parinacota y la provincia del Tamarugal en la Región de Tarapacá, del 13 de diciembre de 2005. Diario Oficial del 11 de abril de 2007.

encontraban fuera de las fronteras del país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se coordinó tanto la difusión como recepción de los antecedentes, hecho que se concretó mediante los consulados de Chile en el extranjero, cuya información fue recopilada por la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, y para facilitar el acceso de las personas que se encontraban en Santiago, y querían solicitar una entrevista, se dispusieron líneas telefónicas gratuitas que funcionaron entre el 13 de noviembre de 2003 y el 31 de mayo de 2004. En regiones, el procedimiento fue más directo, funcionando por orden de llegada a las gobernaciones, o bien mediante la inscripción previa, cuestión que dependía de la demanda y de las características de trabajo local que se realizaba. En todas las modalidades, “el período de atención comprendió entre el 1 de diciembre de 2003 y el 11 de mayo de 2004, mismo plazo que tuvieron los residentes en el exterior para entregar sus antecedentes en los consulados”⁸²³.

Otra de las tareas asignadas, era la que correspondía al área de “Información e Investigación Documental”. En este aspecto, destacó el despliegue informático implementado, que permitió realizar un trabajo conjunto tanto desde los diferentes centros en que se gestionaban los antecedentes y entrevistas, hasta aquel que se ejecutaba en la sede de la Comisión, ubicada - como su antecesora- en el barrio cívico del centro de Santiago, a escasas cuadras del Palacio de Gobierno. El objetivo de esta sección fue el de estructurar, “una red de información, disponible para validar antecedentes, corregir o complementar la información y documentación de respaldo para cada uno de los casos recibidos por la Comisión”⁸²⁴. Ya que lo que se buscaba, era dotarla tanto de fuentes como de documentación fidedigna que permitiera respaldar la información que se recibía de cada uno de los casos que llegaban

⁸²³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 30. El mandato de la Comisión estipuló que la atención de personas que habían solicitado entrevista sería hasta el 11 de mayo de 2004, aun cuando la cita se hubiera agendado para un fecha posterior. Por esta razón, se indicó en el Informe que en un importante número de gobernaciones se realizaron atenciones a personas hasta el 31 de mayo del mismo año.

⁸²⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 30.

a la Comisión. En consecuencia, se organizó un coordinado tejido de información, en la que participaron determinadas áreas del Estado, organismos de derechos humanos, y organizaciones internacionales que luego de concertar acuerdos, pusieron a disposición de la Comisión sus archivos y bases de datos. En el ámbito nacional se celebraron acuerdos de cooperación y entrega de información con:

“La Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)”⁸²⁵.

Además, se realizaron convenios con diferentes instituciones, una de ellas fue la Universidad Alberto Hurtado, lo que permitió que un grupo de estudiantes que se dedicaran al análisis de los diferentes informes emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de extraer los listados de las personas que aparecían como detenidas, que en su mayoría correspondía a dirigentes sindicales, razón por la que se había recurrido a esta organización internacional. Con este mismo objetivo, se realizó un catastro de la prensa que está bajo la tutela de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Asimismo y gracias a la celebración de convenios, se pudo acceder a los archivos de diferentes Obispos, entre ellos, el de San Felipe, Talca, Copiapó, Temuco y el Departamento de la Paz Obrera de Concepción. Todas estas fuentes permitieron respaldar y validar los antecedentes recopilados para cada caso. En este aspecto, la forma en cómo operó con respecto a la información que se recopilaba, consistió en que ésta se ingresaba inmediatamente en la red, lo que permitió una mayor rapidez y eficacia del trabajo realizado. Por consiguiente, y con el fin de corroborar los datos entregados por las víctimas, la Comisión utilizó la información que había logrado sistematizar la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, así

⁸²⁵ Ibíd.

como los listados de detenidos que habían solicitado a las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre ellos podemos destacar:

- “• Dos listados de detenidos elaborados aparentemente por el Ejército, que contenía nombres de más de 12.000 detenidos en diversos recintos de dicha rama y de la Armada, en noviembre y diciembre de 1973;
- Listados de Gendarmería de detenidos en distintas unidades penales del país por razones políticas y las respuestas que este servicio del Estado entregó a numerosas consultas hechas por esta Comisión;
- Listas entregadas por el Archivo Nacional de los libros de ingreso a la Cárcel Pública de prisioneros de guerra;
- Relación de los ingresos de recursos de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago durante los años 1973 a 1976;
- Información entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación en respuesta a consultas hechas por la Comisión”⁸²⁶.

En consecuencia, la base de datos que logró reunir la Comisión es de una gran riqueza en cuanto a su origen y contenido, ya que incluía información de diversas organizaciones de derechos humanos, así como también de los servicios públicos del Estado. De gran importancia fue la documentación que entregaron las agrupaciones de ex prisioneros políticos. Entre las donaciones que se entregaron a la Comisión, destaca “una biblioteca documental y literaria, archivos de prensa de la época, registros de recintos de detención en el país, bases de datos de organismos internacionales, como Cruz Roja, y otros”⁸²⁷. A ello se debe agregar la base de datos con más de 1.000 nombres de recintos que fueron utilizados como lugares de detención y tortura en todo el país. En consecuencia, el gran cúmulo de documentación recopilada, permitió a esta área de trabajo de la Comisión, responder desde la gran base de datos creada,

⁸²⁶ Ibid., p. 31.

⁸²⁷ Ibid., p. 32.

comprobando “los antecedentes de las 35.868 fichas recibidas y a las más de 35.000 consultas específicas en relación con casos cuyos antecedentes debían ser validados en más de una fuente”⁸²⁸.

La tercera área de trabajo de la Comisión fue la de «calificación». Su objetivo consistió en evaluar para cada uno de los casos, los antecedentes que se presentaban sobre detenciones o tortura, “identificando los elementos de juicio que permitieran formar convicción y proponer una precalificación para ellos”⁸²⁹. Lo que se esperaba era precisamente una primera identificación de cada caso, de acuerdo a las categorías previamente diseñadas por el equipo de trabajo, para posteriormente, proponer el análisis y evaluación de la Comisión. Si bien al principio esta sección estuvo compuesta solo de abogados, en el transcurso de la investigación, se necesitó de la colaboración de expertos en experiencia en la atención de público, más aun, debido a las características de los casos que se presentaban, se requirió de un grupo específico de profesionales que se dedicara al análisis de aquellos casos que según el previo estudio realizado por el área de calificación, tenían mayor complejidad debido a sus implicaciones procesales y su relevancia. Como lo señala el Informe, estos equipos se organizaron en regiones, lo que contribuyó a que cada uno de ellos, de alguna manera, se especializara en el “conocimiento de las características que tuvo cada una de las situaciones de prisión y tortura”, situándolos en cada uno de los períodos de violencia identificados por la anterior Comisión. En este aspecto, lo que se perseguía concretamente, era centrar el análisis en los diferentes espacios administrativo-territoriales, así como en los lugares específicos que se constituyeron en recintos de detención, con el fin de realizar un exhaustivo y minucioso estudio de identificación de los antecedentes recabados.

⁸²⁸ Ibíd. Esta base de datos, según consta en el informe también contó con un número importante de publicaciones que abordaban el tema de la prisión política y tortura, ya fuera desde lo testimonial, o narrativo, así como también de documentos y bibliografía donada por organismos internacionales.

⁸²⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 33.

Por su parte, la «Unidad de procesamiento y Archivo», completó las cuatro áreas de trabajo de la Comisión. Su objetivo fue mantener la circulación de los antecedentes que se recibían, así como su sistematización. Tuvo como función central, la de “dirigir, reorientar y realizar correcciones en el flujo de las Fichas de Antecedentes, a través de los procesos que implicaba la calificación de los casos”⁸³⁰. Tenía bajo su responsabilidad, la custodia de las fichas físicas de los casos. Correspondió a su competencia la elaboración de los informes de antecedentes de cada caso, requeridos para el análisis y calificación por parte de la Comisión. Por consiguiente, esta sección era responsable de la mantención de los flujos expeditos de las Fichas de Antecedentes en los procesos de precalificación, junto a la mantención, disponibilidad y actualización de las fichas en el transcurso de la calificación y administración del archivo. Como resultado de este trabajo, la Comisión creó un archivo que contiene Fichas de Antecedentes y los documentos anexos de las 35. 868 de personas que concurrieron a la Comisión a dar su testimonio⁸³¹. Así también la «Unidad de Apoyo Informático», otorgó el asesoramiento informático para sistematizar, procesar y custodiar la información recabada. El objetivo fue proporcionar una base de datos que permitiera almacenar y manejar de forma eficiente en la investigación los datos recopilados. Dentro de esta sistematización, nos interesa destacar tres de entrada de datos: El primero, corresponde al de las víctimas, en el que consta la información respecto a la identificación de cada persona; El segundo se relaciona con las detenciones, y contiene el registro de cada una de las detenciones realizadas por los diferentes organismos que las llevaron a cabo. Y por último, el índice de reclusiones, que señalaba cada uno de los recintos donde las víctimas estuvieron detenidas.

⁸³⁰ Ibid., p. 33.

⁸³¹ Ibid.

4.2.3.- Conceptualización sobre la tortura y reclusión política

Un aspecto de gran relevancia dentro de la constitución de la Comisión es el que se relacionó con el Marco jurídico, los conceptos y las definiciones desde la que actuó para dar cumplimiento al mandato de su creación. En este aspecto, las normas que constituyeron el marco jurídico básico de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, estuvieron dados por una parte por la normativa legislativa interna, en el que se consideraron, la Constitución Política de la República de Chile, con especial énfasis en los capítulos I “Bases de la Institucionalidad”, y capítulo 3º “De los derechos y deberes constitucionales”; el propio Decreto nº 1.040 de creación de la Comisión, donde se explicita objetivos, integrantes, funciones y plazos. El Código Penal de Chile, que sanciona de manera expresa la tortura en el artículo 150, indicando que:

“Sufrirán las penas de presidio o reclusión menores y suspensión en cualesquiera de sus grados:

1.- Los que decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicación de un procesado, le aplicaren tormentos o usaren con él de un rigor innecesario.

Si de la aplicación de los tormentos o del rigor innecesariamente empleado resultaren lesiones o la muerte del paciente, se aplicarán al responsable las penas señaladas a estos delitos en sus grados máximos.

2.- Los que arbitrariamente hicieren arrestar o detener en otros lugares que los designados por la ley”⁸³².

Por su parte, el Código de Justicia Militar dictado en 1926, estipula también la responsabilidad penal en estos casos, subrayando que: “1º El que obligue a los prisioneros de guerra a combatir contra sus banderas, los maltrate de obra, los injurie gravemente, o los prive del alimento indispensable o de la

⁸³² Chile, *Código penal de la República de Chile*, Santiago, 1876. Véase artículo 150, Libro Segundo Crímenes y Simples Delitos y sus Penas, Título III: De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución.

asistencia médica necesaria”⁸³³. Es más en el artículo 261, identifica como penalmente responsable al que "obligue a los prisioneros de guerra a combatir contra sus banderas, los maltrate de obra, los injurie gravemente, o los prive del alimento indispensable o de la asistencia médica necesaria". Complementariamente, el artículo 330, sanciona también al "militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar", aumentándose las sanciones según la gravedad de las lesiones o el resultado de muerte, para concluir que todas esas penas se agravan si las "violencias se emplearen contra detenidos o presos con el objeto de obtener datos, informes, documentos o especies relativos a la investigación de un hecho delictuoso”⁸³⁴.

Asimismo, la normativa internacional completó y fortaleció el marco jurídico en materia de derechos humanos. Esto se sustentó como lo expresa el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución de Chile en que:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”⁸³⁵.

En cuanto a los conceptos básicos con que funcionó la Comisión, la principal fuente correspondió al “contenido sustantivo de los principios

⁸³³ Chile, Decreto Ley nº 806 que aprueba el Código de Justicia Militar para el Ejército de Chile, del 23 de diciembre de 1925. Diario Oficial del 27 de marzo de 1926. Véase Ejército de Chile, Código de Justicia Militar para el Ejército de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, Santiago, 1926, artículo 261.

⁸³⁴ Ejército de Chile, *Código de Justicia Militar para el Ejército de Chile*, Santiago, Imprenta Nacional, Santiago, 1926, artículo 330.

⁸³⁵ Chile, *Constitución Política de la República de Chile*, Santiago, 1980. Véase artículo 5, inciso segundo del Capítulo I, “Bases de la Institucionalidad”. Véase, Chile, Ley nº 18.825 que reforma la Constitución Política de la República de Chile, Ministerio del Interior, del 17 de junio de 1989. Diario Oficial del 17 de agosto de 1989. Disponible en, < <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-18825/HL18825.pdf>>.[Consultado en octubre de 2011].

generales del derecho internacional, como asimismo el respaldo jurídico que tienen estos derechos en la actualidad en el ámbito nacional”⁸³⁶. Dentro de ellos, uno fundamental fue el Derecho a la Integridad Personal, entendiendo por éste aquel que contempla:

“(…) la integridad física, psíquica y moral del ser humano, con el objeto de que las personas puedan desarrollarse en condiciones de seguridad ante cualquier intento de agresión, ya sea que ésta provenga de un representante del poder público que utiliza la violencia para la consecución de sus objetivos, o de particulares que actúen al amparo o con la tolerancia de los primeros”⁸³⁷.

En efecto, el Informe que elaboró la CNPPYT, argumentó que tanto los instrumentos internacionales ratificados por Chile en esta materia, como la propia legislación nacional, a través de la Constitución Política de la República, abordan el derecho a la seguridad, estableciendo un marco regulatorio general, a través de las convenciones que se han realizado en contra de la tortura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de forma expresa, lo señala en el artículo 5º: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En este contexto, la Comisión realizó una conceptualización sobre lo que iba a considerar por tortura, para efectos de la investigación encomendada. Para ello se proveyó de las definiciones de los diversos organismos internacionales. Adoptando una denominación más “operativa”, considerando sobre todo la definición que utiliza la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

“Constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que

⁸³⁶ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 18.

⁸³⁷ *Ibíd.*

haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia”⁸³⁸.

En este aspecto, la CNPPYT fue bastante precisa en identificar aquellas acciones y prácticas, que bajo esta definición eran consideradas como tortura. Así como también en aclarar que quiénes realizaron estas prácticas debían de ser agentes del Estado, o bien, haber tenido alguna relación con él, explicitando por tanto, el contexto en el que se desarrollaron. Dentro de las prácticas, métodos y actos a que se refiere la definición de tortura, y que lesionan la integridad personal, se encuentran:

“el *pau de arara* (forma de colgamiento), *el teléfono* (golpes violentos con las manos simultáneamente en ambos oídos), *la parrilla* (forma de aplicación de electricidad), *el submarino* (inmersión prolongada en agua fría u otros elementos líquidos), ingesta obligada de excrecencias, y toda la gama de vejaciones sexuales.

Existen otras formas de tortura que persiguen los mismos fines, como la *picana*, las *golpizas*, los *fusilamientos simulados* y aun los reales de terceros en presencia del resto de las víctimas, la observación obligada de torturas que se inflijan a otras personas, el confinamiento solitario por tiempos prolongados, los interrogatorios prolongados por horas con amenazas de represalias en familiares, la deliberada denegación de alimentos”⁸³⁹.

⁸³⁸ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 19.

⁸³⁹ *Ibíd.*, p. 20.

A diferencia de otras prácticas de violencia, ya fuera física, psíquica o simbólica, la tortura no persigue la muerte de la víctima, sino provocar la aflicción y despojo de su identidad, utilizando para ello diversas formas de vejámenes. Los objetivos de la tortura pueden ser diversos, entre ellos:

“Obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a la víctima, anular su personalidad, disminuir su capacidad física o mental, aplicar una medida preventiva, y cualquier otro motivo basado en razones de discriminación”⁸⁴⁰.

En todos ellos, es necesario que la persona que ejerce estas acciones sea un agente del Estado, o bien que desarrolle funciones públicas. La CNPPYT detalló con minuciosidad a quién identificaría como victimario, considerando como tal a aquella persona, cualquiera sea su condición, que haya procedido persuadida por un agente del Estado, “(...) o de otra persona en ejercicio de funciones públicas, y cualquier persona o grupo de personas que actúen con el consentimiento o aquiescencia de uno o más funcionarios públicos o personas en ejercicio de funciones públicas”⁸⁴¹. Es interesante el énfasis que coloca el Informe Valech, en reiterar que corresponde a «personas», responsables en nombre del Estado de infligir tales padecimientos. Más aun considera la complicidad en los actos de tortura de manera pasiva, siguiendo en este aspecto lo que indica la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en el artículo 3 señala:

“Serán responsables del delito de tortura:

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

⁸⁴⁰ Ibid., p. 20.

⁸⁴¹ Ibid.

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices”⁸⁴².

Como lo señala el propio Informe Valech, esto último corresponde al ámbito de la judicatura y funcionarios públicos, pero especialmente a los jueces a quienes se les pudo haber presentado el dilema de “aceptar o rechazar una confesión extrajudicial presuntamente obtenida bajo tortura y que disponen además, de facultades legales para comprobar el estado de salud de los detenidos”⁸⁴³. Y que de acuerdo a las investigaciones que realizó la CNPPYT, no fueron pocas las ocasiones en que jueces chilenos aceptaron efectivamente este tipo de declaraciones.

Otro de los derechos que contempló la Comisión Valech, fue el derecho a la libertad y seguridad personal, que se refería de forma específica a “realizar sus actividades según su propia voluntad y deseo, cuyo efectivo ejercicio requiere la seguridad de que tal posibilidad no será coartada, suspendida o privada de manera arbitraria o injusta”⁸⁴⁴. Corresponde a un Derecho Fundamental que se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales legales, y está relacionado con la libertad de las personas. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, es señalado de manera expresa en el artículo 13º:

“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

⁸⁴² Organización de Estados Americanos, *Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura*, Cartagena de Indias, 09 de diciembre de 1985. Entrada en vigor, 28 de febrero de 1987. Disponible en, < <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0028>>. [Consultado en septiembre de 2011].

⁸⁴³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 20.

⁸⁴⁴ *Ibíd.*

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”⁸⁴⁵.

Este derecho también se incluye en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 1º, “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”⁸⁴⁶. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9, inciso primero indica:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”⁸⁴⁷.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo señala en el artículo 7º, inciso primero: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”⁸⁴⁸. En la Constitución política del Estado de Chile, en general el artículo 19º está dedicado a la seguridad de las personas, pero en especial el inciso séptimo estipula, “El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual”⁸⁴⁹. A su vez, la Comisión Valech, también añadió las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, en cuanto a los fundamentos legales que se deben considerar para los casos de prisión política, donde es también necesario salvaguardar dentro de los

⁸⁴⁵ Asamblea General de Naciones Unidas, *Declaración Universal de Derechos Humanos*, Ginebra, 10 de diciembre de 1948, artículo 13º.

⁸⁴⁶ Conferencia Internacional Americana, *Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre*, Bogotá, 02 de mayo de 1948. Disponible en, <<http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2004.pdf>>. [Consultado en septiembre de 2011].

⁸⁴⁷ Asamblea General de Naciones Unidas, *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, Ginebra, 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor, 23 de marzo de 1976, parte II, artículo 9º, inciso 1º. Disponible en, <<http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>>. [Consultado en septiembre de 2011].

⁸⁴⁸ Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*, San José, Costa Rica, noviembre de 1969.

⁸⁴⁹ Chile, *Constitución Política de la República de Chile*, op. cit., artículo 19º, inciso 7º.

márgenes que corresponde a esta institución, sobre todo en relación al derecho a la vida y a la seguridad personal. Así lo estipulan los diferentes apartados, como lo estipula su principio fundamental:

“1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso”⁸⁵⁰.

La incorporación de este tipo de reglamento al marco jurídico que desarrolló la Comisión Valech, permite observar el objetivo central que motivó su conformación. Esto es, la prisión política y tortura en Chile durante la dictadura militar. Debido a que aunque –como bien lo reconoce la Comisión- en el caso de la tortura no se admite bajo ninguna circunstancia su aplicación. Aun cuando existen casos en que es admitida la restricción de libertad para algunas personas, acción que se puede realizar de forma legítima cumpliendo sólo procedimientos que permitan el respeto de los derechos básicos. Para ello es necesario que sean conocidas las sanciones de forma previa a determinadas conductas, y que existan instrumentos jurisdiccionales con anterioridad que actúen con imparcialidad en la manera de juzgar. Es fundamental que se asegure el derecho de defensa de las personas imputadas, así como también que en “condiciones de reclusión se respeten la dignidad y particularidades de la persona, de forma que la restricción a sus derechos se limite a los estrictamente afectados por la decisión judicial”⁸⁵¹.

⁸⁵⁰ “Primera parte. Reglas de aplicación general”, en *Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos*. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra en 1955. Aprobada por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

⁸⁵¹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 21.

Las características de la investigación de esta Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a diferencia del trabajo realizado por su antecesora, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, debió profundizar con bastante detención en sobre estos temas, debido sobre todo, a que se trataba del testimonio de víctimas de hechos ocurridos hacía ya más de treinta años. Estas cuestiones no son menores, por cuanto aborda una complejidad mayúscula, de la cual esta investigación aborda sólo una pequeña parte. Sin embargo, la decisión política del gobierno de Ricardo Lagos, de abordar el tema de la tortura y la prisión política, sentó un precedente en la forma tanto de investigar cómo de visibilizar y en alguna medida otorgar dignidad a aquellas personas que por razones políticas sentían que la habían perdido, debido a los padecimientos de los cuales fueron víctimas.

Las especificaciones frente a la violación de los derechos garantizados, como el Derecho a la Integridad Personal y el Derecho a la libertad y la seguridad personal, llevan al análisis de determinadas violencias, como la tortura y la prisión política. Y como hemos visto en páginas anteriores, para efectos de que la Comisión Valech pudiera intervenir, era requisito que dichos padecimientos hayan sido efectuados por agentes del Estado. Esta es la cuestión central que moviliza la investigación de la Comisión, y cuya elaboración se logra visibilizar a través del Informe que elaboró. En efecto, la forma de violación del derecho de libertad y seguridad personal, permitió a la Comisión Valech, clasificar diversas formas de privación de libertades, identificando a su vez, las diferentes formas de «relegación o detención arbitrarias», cuando no se resguardaron “las garantías del debido proceso, se somete al detenido a tortura o a condiciones de reclusión que atenten contra su dignidad o excedan lo dispuesto por la ley o la sentencia”⁸⁵².

Teniendo en consideración estas especificaciones, la Comisión trabajó en su investigación con dos definiciones centrales, para cumplir con el mandato asignado. Estas fueron: la detención arbitraria o ilegal, y la relegación. Para ambas, elaboró un detallado análisis que permitiera identificar cuándo el

⁸⁵² Ibíd.

Estado había incurrido en una u otra práctica, avalándose en ambos casos en los tratados internacionales. Los elementos que contempló la Comisión para identificar estas prácticas, tienen directa relación con el testimonio de las víctimas, por cuanto existió una correlación directa entre lo que presenta la jurisprudencia internacional y el testimonio que dieron de forma libre las cientos de personas que concurrieron a los diferentes establecimientos que proveyó la Comisión. Por consiguiente, se está ante una detención arbitraria cuando una norma jurídica no tiene fundamentos para su aplicación; o bien, cuando no es coherente con el derecho internacional de derechos humanos; cuando la detención se prolonga de forma indebida, o no se respeten los derechos de la persona detenida en el período de privación de libertad, o más aún, “cuando al efectuarse la detención, los captores infrinjan las garantías y derechos que la ley reconoce a las personas o no se cumpla con las formalidades prescritas en la ley”⁸⁵³.

Frente al concepto de relegación y que está relacionado con el Derecho a la libertad personal, y que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparece en el artículo 9 que señala: “Nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado”. La Comisión adoptó la definición que manejaba la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas FASIC, entendiendo por relegación el “traslado obligatorio de una persona a un lugar distinto del de su residencia habitual, por un plazo definido, por disposiciones administrativas o judiciales”⁸⁵⁴. Identificando además cinco tipos de detenciones arbitrarias: Detención individualizada y no individualizada, detenciones en manifestaciones, en allanamientos masivos y secuestros⁸⁵⁵. En este aspecto la Comisión precisó que para los casos que investigaba, las relegaciones decretadas se cumplieron en sitios y formas que llevaban a infringir los derechos básicos, ya que se realizaron en:

⁸⁵³ *Ibíd.*, p. 22.

⁸⁵⁴ Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), *Glosario de Definiciones Operacionales de las Violaciones a los Derechos Humanos*, Santiago, FASIC, 1991.

⁸⁵⁵ *Ibíd.*

“(…) lugares aislados, inhóspitos, donde los afectados debían procurarse por sí mismos los medios de subsistencia, mientras permanecían bajo controles periódicos de las fuerzas militares o de orden, lo que restringía, asimismo, el ejercicio de una actividad remunerada para proveerse de sustento”⁸⁵⁶.

Con estos antecedentes, consideró para efectos prácticos dos formas de relegación: La primera fue la relegación administrativa, que se llevaba a cabo cuando la detención se realizaba a través de un decreto simple, donde no había intervención de ningún tribunal, y no existían cargos contra la persona. La segunda correspondió a la relegación judicial, que se realizaba cuando se cumplía una sentencia dictada por un tribunal que no tenía independencia e imparcialidad, o más aun, cuando se aplicaba una ley que infringía la Declaración Universal de Derechos Humanos, o el Derecho Humanitario Internacional⁸⁵⁷. Este tipo de relegación fue habitualmente utilizada como sanción luego de realizar consejos de guerra, en los días posteriores al golpe de Estado. A su vez, la Comisión identificó motivaciones políticas para realizar actos de tortura y privación de libertad, las que en la mayoría de los casos, tenían como argumento supuestas «razones de Estado». Bajo estas explicaciones, por ejemplo, se decretaron ilícitas asociaciones y partidos políticos, pertenecientes a la Unidad Popular. Cuestión que tiene directa relación con los estados de excepción que se aplicaron durante el régimen militar. Lo que llevó a que en reiterados casos no existiera legítima defensa de los supuestos acusados, ni garantías que velaran por el debido proceso, violando pactos internacionales como los acuerdos de Ginebra.

Teniendo como base argumentativa la legislación internacional y nacional que sanciona la violación de los derechos fundamentales, y de forma específica en lo que respecta a la tortura y prisión política, la Comisión Valech debió de actuar en absoluta reserva con la información que las víctimas otorgaron a través de sus testimonios, de acuerdo a como lo estableció el

⁸⁵⁶ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. 2, p. 23.

⁸⁵⁷ *Ibíd.*, p. 23.

Decreto Supremo 1.040, en el artículo 5°, inciso 4°: “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales”. Por tanto, una gran diferencia respecto de la Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación, fue no se publicaron de manera específica los nombres de las víctimas, es decir, no se realizó una exposición que vinculara a la víctima con el método de tortura a que fue expuesta. En consecuencia, de acuerdo al mandato de ambas comisiones, la CNVR tenía como objetivo la identificación de las víctimas con resultado de muerte producto de las aflicciones cometidas, cuestión que de acuerdo a la naturaleza de la Comisión Valech, no se efectuó. Sin embargo, en sus anexos se describieron los diferentes tipos de torturas, identificando a las víctimas según sexo, edad y localización geográfica, reservándose los nombres. Pese a ello, se elaboró un listado de todas las personas que de acuerdo a sus testimonios adquirieron convicción de parte de la Comisión y fueron reconocidas como víctimas de violencia política, siguiendo las recomendaciones de reparación, por supuesto simbólicas, que sugirió la CNPPYT.

Para registrar la información se creó una «Ficha de Ingreso de Preso Político y Torturado», que sumado a la entrevista, fueron los elementos centrales de cada archivo que se creó de las víctimas. De todos los campos que contenía la ficha, cinco resultan muy interesantes para los objetivos de la Comisión, estos fueron: Los organismos en que la víctima había sido atendida, o que conocían los hechos; los testigos del hecho y datos de la detención, las características de la privación de libertad; los antecedentes de tortura, en el que se solicitaba el detalle de los recintos de reclusión, junto a un relato breve de su reclusión y los efectos, y las acciones que se habían interpuesto a favor del denunciante⁸⁵⁸.

Posteriormente, se debió validar la información recibida, y para ello la Comisión realizó un exhaustivo procedimiento que le permitiera comprobar los datos recibidos. Si bien las personas que se presentaron a declarar, en la

⁸⁵⁸ Ibíd., p. 40.

mayoría de los casos, acompañaron sus testimonios con certificados emitidos por los centros de reclusión que validaban los datos entregados. Esto porque en los primeros años de la dictadura militar, el Ejército, la Armada y la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos SENDET, entregaron certificaciones que daban cuenta de su reclusión en determinados centros, y de los cargos que se les imputaban, así como tarjetas de visita, controles, etc., lo que daba cuenta de una administración que emitía documentación de las personas que eran apresadas. Sin embargo, existieron muchos casos en que se contaba con muy poca información, lo que complejizó mucho más la investigación, por ello se requirió contar con el testimonio de testigos, y diversas fuentes que permitieran validar los hechos. “Para muchas personas, el relato de los hechos y las circunstancias de su detención demandaron un esfuerzo de memoria realizado 30 años después de su ocurrencia”⁸⁵⁹. Debido a las formas en que fueron apresados y las características de la reclusión, muchas de las víctimas no siempre podían saber dónde habían estado detenidos, o quiénes habían sido las personas que los acompañaban en la celda, sobre todo, debido a que fue habitual que estuvieran privados de visión, con poca o nula capacidad de movilidad. En ello la Comisión subrayó que existieron organismos que nunca emitieron certificación que diera cuenta de la reclusión de las víctimas, entre los que destacó Carabineros de Chile. A ello se debe sumar los organismos de inteligencia secreta del régimen, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), a que nos hemos referido, ya que al mantener recintos secretos de detención y tortura nunca emitieron certificación.

“En efecto, las personas que permanecieron en los recintos secretos de la DINA, como Villa Grimaldi, Londres nº 38 o José Domingo Cañas, o en otros similares de la CNI, antes de que éstos pasaran a ser públicos, sufrieron detenciones sólo reconocidas a contar del momento en que los afectados pasaban a gozar de libre plática en algún recinto público”⁸⁶⁰.

⁸⁵⁹ Ibid., p. 42.

⁸⁶⁰ Ibid.

Esta fue una de las razones que otorgaron mayor dificultad a la Comisión, debido a que se buscaba reunir elementos de juicio, necesarios que permitieran comprobar los hechos ocurridos. Es por esta razón que en ambas comisiones, se debió acceder a diferentes fuentes de información, donde los testimonios de los testigos fueron de gran importancia. Sin embargo, también se trataba de reunir información proveniente de las propias instituciones militares, que como hemos observado fue muy difícil, debido a que muchas veces las diversas excusas emitidas por las instituciones castrenses sobre la inexistencia de documentación llevó a recurrir a otras fuentes, haciendo mucho más difícil aun la investigación. De ahí la importancia de los organismos de derechos humanos, ya que fueron innumerables las ocasiones en que las víctimas recurrieron a ellos, solicitando protección y buscando información sobre el paradero de sus familiares. En definitiva, a partir de los datos que recabó la Comisión Valech, dentro del proceso de precalificación le permitió llegar a dos categorías en las que podían quedar los casos recibidos, estos eran «calificados» y los denominados como «fuera de mandato», que fueron aquellos que quedaron excluidos, o bien que faltaban datos para dar la convicción⁸⁶¹. En consecuencia, el proceso de precalificación fue complejo y requirió de un trabajo intenso y sistemático por parte de todo el equipo de la Comisión Valech, cuyo resultado fue determinar los casos que de acuerdo a las categorías elaboradas calificaban o bien que quedaban fuera del mandato.

⁸⁶¹ Estas categorías respondieron en términos generales a las conclusiones que llegó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en relación a la validación de antecedentes que realizó de los casos recibidos. Éstas fueron: “La privación de libertad o tortura por razones políticas resultó suficientemente, demostrada; Pudo haber existido privación de libertad o tortura, pero resultó imposible obtener elementos de validación; Si bien pudo haber habido una violación de derechos humanos, no existió privación de libertad o tortura por motivos políticos, cometida por agentes del Estado, en el período y con las características comprendidas en el mandato de la Comisión”, en Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. II, p. 43.

4.2.4.- Características de la tortura y prisión política durante la dictadura militar en Chile

El informe Valech consideró la represión política como un proceso con diferentes ciclos, debido a que de la misma forma en que lo había diagnosticado el Informe Rettig, existieron características específicas en que se referido al “número y perfil de las víctimas, a los organismos involucrados, a los recintos de detención, a las normas jurídicas aplicadas como pretexto e instrumento de la privación de libertad, e incluso a los métodos de tortura perpetrados en ese contexto”⁸⁶². Sin embargo, la Comisión identificó elementos que comunes que estuvieron presentes durante la dictadura militar, y que permiten constatar que la prisión tenía evidentes motivaciones políticas. Estos elementos fueron:

- “1. La privación de libertad por disposición de organismos político-administrativos, como el Ministerio del Interior, las jefaturas de estado de sitio u otros.
2. Las detenciones ordenadas por fiscales militares en ausencia de proceso judicial contra el detenido, extralimitando así sus atribuciones.
3. Las detenciones practicadas por organismos de seguridad dependientes del gobierno, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y la Central Nacional de Informaciones (CNI) u otros servicios creados en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, para realizar la represión política al margen del Derecho, aun cuando algunos de éstos fueran consagrados por decretos leyes.
4. Las acusaciones de haber cometido delitos que no constituyen conductas punibles bajo un Estado de Derecho, o no contrarían derechos consagrados por la Constitución y el Derecho Internacional.

⁸⁶² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 227.

5. Finalmente, también constituyó prisión política aquella privación de libertad ordenada por un tribunal civil o militar, en el marco de un proceso judicial en el que se investigaban delitos tipificados como tales por cualquier ordenamiento jurídico democrático, pero en la que no se respetaron las garantías del debido proceso y la protección frente a torturas, dos derechos violados de modo sistemático”⁸⁶³.

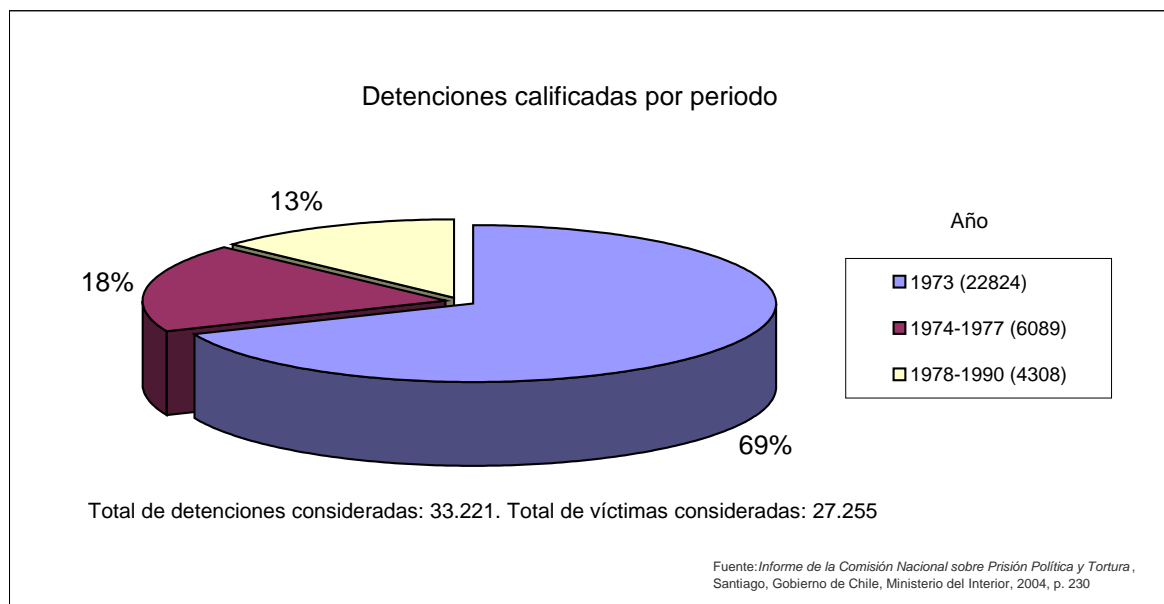
A ello se debe agregar que durante todo el período existió abuso de poder por parte de los organismos de inteligencia del régimen, y que a través de sus agentes se ampararon en la impunidad. En efecto, la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (CNPPYT), señaló que en el período que transcurrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, “existió una política de represión organizada por el Estado, y dirigida por sus más altas autoridades”⁸⁶⁴. Este hecho fue constatado por la Comisión, ya que del total de testimonios validados en todo el país, que correspondió a 33. 221, el 94% según la Comisión declaró haber sufrido torturas durante su detención, infringidas por efectivos de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, así como de los Servicios de Inteligencia como la DINA y CNI. Lo que confirma una vez más que la práctica de la tortura, fue un hecho habitual durante la dictadura militar. Dentro de las características generales que se pueden señalar para los primeros años, destaca tanto la brutalidad como las secuelas evidentes en las víctimas, y que en muchas ocasiones tenían grave riesgo vital. Prácticas que en un segundo momento, alcanzó mayor «especialización» en cuanto al tipo de violencia –sobre todo física- que se aplicó a los detenidos. Asimismo las víctimas indicaron que sufrieron más de un tipo de tortura, y donde los golpes y palizas fueron practicados de forma habitual, siendo muchas veces la antesala de otros suplicios.

La Comisión Valech, también optó por dividir en tres períodos la dictadura militar, subrayando que esto no respondía a cuestiones cronológicas

⁸⁶³ Ibíd., pp. 227-228.

⁸⁶⁴ Ibíd., p. 228.

estáticas, sino más bien, respondían a indicadores como: organismos de seguridad involucrados, número y perfil de las víctimas, y contexto nacional imperante. Esto permitió visibilizar un cuadro general de las detenciones efectuadas. En efecto, del total de detenciones que realizaron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, el número fue de 33.221, de ellos fueron considerados como víctimas 27.225, desagregándose en los tres períodos de la siguiente forma:



De acuerdo a los datos que observamos en el gráfico, el mayor número de detenciones ocurrió en los primeros meses después del golpe de Estado, que se sitúan entre septiembre y diciembre de 1973, alcanzando un 68,70 % en todo el país. Así también es posible observar un significativo descenso de las detenciones en el segundo período (1974-1977), alcanzando un 18,33%, y que se debió sobre todo, a la mayor selección de las víctimas, cuestión en la influyó el accionar de la DINA, principal organismo represor del período. Asimismo, para el tercer período (1978-1990) también descendieron los arrestos, alcanzando un 12,97%. Estos datos, no dejan de ser significativos, debido a que plantean una constante durante los años de la dictadura militar, esto es, que la población civil fue apresada de forma permanente, y que su número fue alto en relación a la cantidad de habitantes que tenía Chile. Así lo comprueban

los datos censales en que si bien se observa un aumento paulatino de la población, alcanzando recién en los 13.348.401 en el censo de 1992 sobrepasar los once millones de habitantes⁸⁶⁵.

El primer período que identificó la Comisión Valech, abarcó desde septiembre a diciembre de 1973. De los testimonios calificados por la Comisión, el 67,4% indicó haber sido detenida en estos meses, lo que corresponde a 18.364 personas, y 22.824 detenciones en todo el país. En esta fase, la tortura fue ejecutada por “miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, respondiendo a una práctica generalizada a escala nacional”⁸⁶⁶. Como también lo planteó la Comisión Rettig, este primer período no fue estático, ello debido a que en estos meses la Junta Militar organizó en términos generales la conducción del país a través de estados de sitio y restricción de todas las libertades individuales. En este contexto, es posible observar que las variaciones que se produjeron no se realizaron de forma simultánea en todas las regiones del país. Para efectuar las detenciones, se recurrió a las potestades de los «estados de excepción». Entre las formas que adoptaron los apresamiento se puede mencionar: algunos detenidos fueron enjuiciados en consejos de guerra; otros, si bien nunca fueron procesados, fueron recluidos por diferente tiempo en «campos de detenidos» habilitados para este fin, también fueron utilizados, regimientos, comisarías y cárceles. En otros casos, a los detenidos se les aplicó la relegación administrativa⁸⁶⁷; otros fueron condenados a relegación por los tribunales militares. Como lo señala la Comisión, fue una práctica frecuente, que una vez que los detenidos recuperaran su libertad, se les aplicaran medidas restrictivas como los arrestos domiciliarios, o la prohibición de abandonar la ciudad de su residencia. En algunos casos en este primer

⁸⁶⁵ Véase en anexo nº 9, relación de censos.

⁸⁶⁶ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 231.

⁸⁶⁷ La Comisión adoptó, para sus fines, la siguiente definición: “La relegación es el traslado obligatorio de una persona a un lugar distinto del de su residencia habitual, por un plazo definido, por disposiciones administrativas o judiciales”. En Glosario de definiciones operacionales de las violaciones a los derechos humanos; Red de Informática de instituciones de Derechos Humanos, editado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, 1991, pág. 30. Citado por Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. I, p. 23.

período, la Comisión señaló que algunos detenidos que llevaban años detenidos “fueron expulsados del país, ya sea conmutándoseles sus penas de prisión por extrañamiento o bien, tras forzar su abandono del país, prohibiéndoseles mediante decisiones administrativas, su reingreso”⁸⁶⁸. En lo que se refiere a las formas en cómo las Fuerzas Armadas y de Orden, ejercieron la violencia en la población en los días que siguieron al golpe de Estado, la Comisión señaló que en general se existieron elementos comunes, entre los que se pueden mencionar, los allanamientos que fueron masivos y que se produjeron en empresas, localidades, asentamientos campesinos, centros mineros y universidades.

“Estos allanamientos respondían a un mismo patrón en todo el país. Comenzaban de madrugada y se prolongaban por varias horas. Las personas afectadas, reunidas en un mismo lugar, eran forzadas a permanecer tendidas de cara al suelo, con las manos en la nuca. Muchas recibían golpes. Concluido el registro, se procedía a trasladar a los detenidos a recintos de reclusión. También se publicitaron sucesivas listas de personas conminadas a presentarse ante las nuevas autoridades”⁸⁶⁹.

También se detuvieron a personas desde sus domicilios particulares, lugares de trabajo, o en la vía pública. Estas acciones fueron posibles debido al seguimiento y coordinación de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas. La Comisión señala que fue común que se allanaran los domicilios particulares de estas personas, aplicando en estas acciones la máxima violencia, “causando el destrozo de enseres, acto al cual se sumaba, ocasionalmente, la sustracción de bienes muebles o dinero”⁸⁷⁰. Tanto el Informe Rettig, como el Informe Valech, mencionan que en estos actos existió –en menor medida- colaboración de civiles. No así en las prácticas de «delación», en este aspecto la Comisión Valech subrayó:

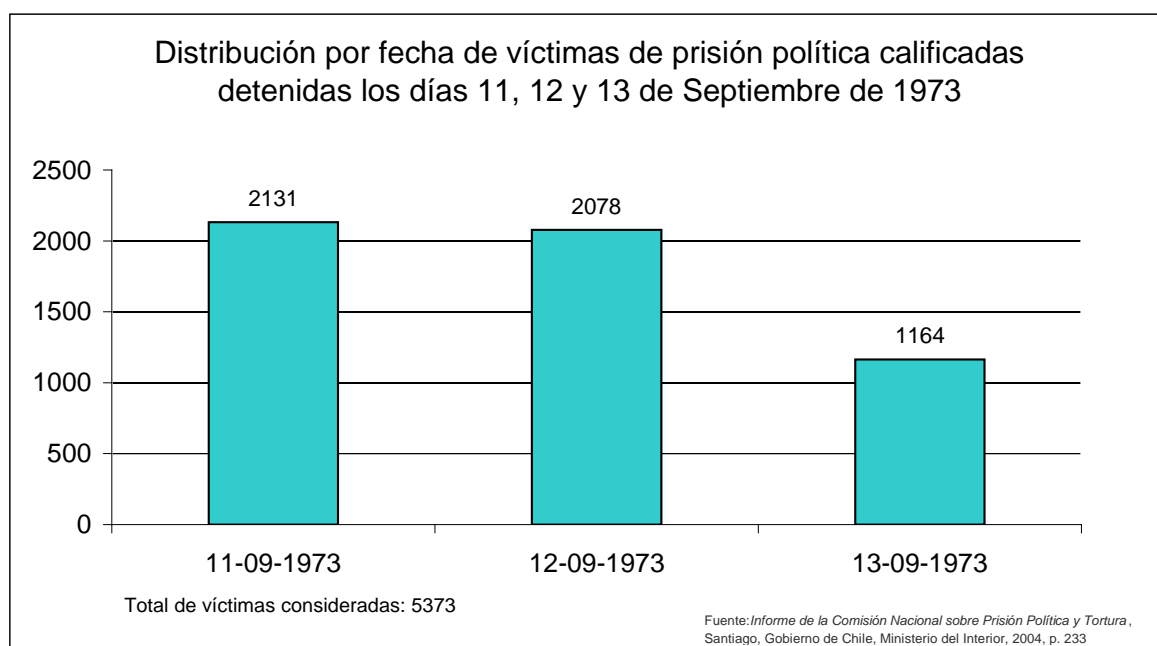
⁸⁶⁸ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 232.

⁸⁶⁹ *Ibíd.*

⁸⁷⁰ *Ibíd.*, p. 233.

“La delación debe ser entendida como la culminación de un intenso proceso de polarización social, que llegó al extremo de convertir al adversario político en un enemigo. Este fenómeno posibilitó la detención de personas en el contexto de los allanamientos, las redadas y los operativos militares, pero también se registraron casos puntuales en que se denunció a individuos de forma equivocada, o con el premeditado propósito de cobrar revancha por anteriores rencillas particulares, ajenas al conflicto político”⁸⁷¹.

En cuanto al perfil de los detenidos, la CNPPYT señaló que un número de personas detenidas fueron funcionarios del gobierno depuesto, simpatizantes, militantes y líderes e izquierdos, o bien miembros de organizaciones sociales. “De las 27.255 personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por esta Comisión, 5.373 fueron detenidas entre el 11 y 13 de septiembre, y trasladadas a recintos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de Investigaciones”⁸⁷².



⁸⁷¹ *Ibíd.*, pp. 233-234.

⁸⁷² *Ibíd.*, p. 234.

En lo que respecta al origen de las detenciones, la Comisión señaló que fueron ordenadas por las jefaturas de estado de sitio, “en virtud de disposiciones de los estados de excepción constitucional, sin formular cargos o acusaciones”⁸⁷³. Asimismo, algunos de los apresamientos fueron ordenados por “fiscales militares, pero al margen de cualquier proceso, bajo acusaciones vagas y antijurídicas como ser activista marxista, y, a la postre, sin traducirse en juicio alguno”⁸⁷⁴. En otros casos, la Comisión precisó que después de prolongados tiempos de reclusión, de semanas y meses, se expusieron cargos según los cuales las personas fueron sometidas a consejos de guerra, en los que fueron absueltas o condenadas. Otra forma de detención arbitraria, fue condenar con presidio por delitos que habían sido cometidos antes del golpe de Estado, cuestión que respondía a los intereses de la política de represión que se realizó en los días siguientes al 11 de septiembre de 1973. Asimismo, también fueron irregulares los mecanismos a través de los cuales se dejaba en libertad a las víctimas, debido a que no siempre proporcionaba el fin de la persecución política. La Comisión sostuvo que muchos de ellos, volvieron a ser detenidos y torturados, quedando supeditados a medidas de control, como firmas periódicas en cuarteles y comisarías, o bien prohibiéndoles que se desplazaran más allá de su lugar de residencia. En definitiva, “el abandono de la reclusión no significaba reintegrarse a la vida cotidiana, pues se les expulsaba del país por decreto”⁸⁷⁵.

Una situación diferente fue lo que sucedió en los sectores rurales, un ámbito de estudio que escapa a nuestra investigación, pero que presenta particularidades debido a las formas en que se implementó la violencia, efectuada con frecuencia por Carabineros de Chile, y que en la mayoría de los casos, para efectuar las detenciones no se contaba con ninguna orden judicial ni administrativa. De acuerdo a como lo señalaron ambas comisiones, los afectados debían permanecer en retenes y comisarías, donde en no pocas ocasiones fueron torturados. En algunas oportunidades fueron liberados sin

⁸⁷³ Ibíd.

⁸⁷⁴ Ibíd.

⁸⁷⁵ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 235.

formular cargos, o bien puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente y remitidos a otros centros de detención. Este tipo de casos también fue materia de estudio de la Comisión Rettig, y aunque como hemos indicado escapa a los objetivos de nuestra investigación, en los cientos de archivos que hemos revisado se constata fehacientemente la crudeza con que Carabineros de Chile, actuó en las zonas rurales. Como fue el caso de Hernando Aguilera Salas, 28 años y Leomeres Monroy Seguel (25), agricultores de la localidad de Freire, simpatizantes de izquierda y miembro de la directiva de asentamiento El Roble. Fueron detenidos el 17 de octubre de 1973 por una patrulla compuesta por Carabineros. Ese mismo día fueron ejecutados por agentes de Estado⁸⁷⁶.

En cuanto a la tortura y los malos tratos, fueron utilizados desde el mismo instante en que las personas fueron detenidas, prolongándose hasta que eran trasladados a los recintos de detención, donde se les infringían apremios físicos y psíquicos más especializados. En los primeros días después del golpe de Estado, fue característico que a los detenidos se les obligara a “permanecer tendidos en el suelo por horas, en espera del transporte que los llevaría al recinto de detención, mientras los efectivos militares o policiales les propinaban golpes al menor movimiento, pisoteándolos y aun saltando sobre ellos”⁸⁷⁷. La forma en que cómo las personas eran llevadas a los recintos de detención independiente del período tiene una característica común: el estado de indefensión de las víctimas. En efecto, se les obligaba a través de golpes y amenazas, bajo la atenta mirada y apuntados con armas por parte miembros del Ejército y Carabineros, a ingresar a los diferentes medios de transportes

⁸⁷⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., p. 386. En 2009, el periódico La Nación titulaba “Confirman fallo contra ex carabineros por violaciones de los DDHH”, indicando que: “La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó ayer las condenas a 10 años y un día de presidio en contra de cinco efectivos en retiro de Carabineros, acusados de violaciones de los derechos humanos en 1973. Los condenados son Luis Henríquez Apablaza, Juan Palmiño Sepúlveda, Ramón Arias Unzueta, Erasmo Enrique Palma y Juan Hernando Sprai, de la Tenencia de Freire, quienes no tendrán la posibilidad de acceder a beneficios. Los ex uniformados participaron en el doble homicidio calificado de los dirigentes agrícolas Leomeres Monroy Seguel (25) y Hernando Aguilera Salas (28), en octubre de 1973. Los ex policías entraron cumplir su pena en la cárcel de Temuco”, en *La Nación*, Santiago, 06 de febrero de 2009, p. 7.

⁸⁷⁷ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 235.

como autobuses, camiones de carga y frigoríficos de empresas estatales o en algunos casos privadas, así como de patrullas militares y policiales. Fue habitual que se a las personas se les inmovilizara mediante ataduras a su cuerpo, para luego ser arrojadas a estos vehículos como “bultos inertes al camión, en donde se las apilaba unas encima de las otra”. Durante estos traslados, se les obligó también a permanecer de rodillas frente a los respectivos asientos, obligándolos a mantener la cabeza gacha, y frente a cualquier movimiento se les golpeaba. En general en estos viajes, los detenidos fueron golpeados de forma constante, además “quienes viajaban tendidos en el piso y apilados, debían soportar, por añadidura, pisotones y saltos, mientras se proferían todo tipo de insultos, burlas y amenazas”⁸⁷⁸. Estas agresiones continuaban una vez llegados a sus destinos, es decir, a los centros de detención, y en general, ambos informes coinciden en que a los detenidos se les recibía con «golpes de pies, puños y culatas». Y en los casos en donde había una gran cantidad de detenidos, se les recibía con una práctica que se conoció como el «callejón oscuro», y que consistía en “hacer circular a los detenidos por entre dos hileras de uniformados, mientras éstos los golpeaban con sus botas y sus armas. Si alguien, en su carrera por esquivar los golpes, caía al suelo, era levantado a golpes por los uniformados y obligado a seguir corriendo por dicho callejón”⁸⁷⁹. Si bien el trato a los prisioneros variaba entre cada recinto, como se observa en los cuatro centros de detención en los que centra su atención esta investigación, se pueden identificar, de acuerdo a los testimonios de las víctimas entregados a la Comisión Valech, que existieron algunos elementos comunes a todos los recintos, donde la precariedad, el hacinamiento y los malos tratos fueron similares. Entre ellos, podemos mencionar por un lado la escasa alimentación, “(...) el abrigo insuficiente, las amenazas constantes, los golpes reiterados y el hacinamiento, [que] impedía o dificultaba conciliar el sueño”⁸⁸⁰.

⁸⁷⁸ Ibíd., p. 236.

⁸⁷⁹ Ibíd.

⁸⁸⁰ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 236.

Por otro lado, dentro de las diferentes formas de aislamiento que experimentaron las víctimas, se encuentra la incomunicación que a su vez adoptó dos modalidades, una fue la incomunicación individual, en que a la víctima se le aislaba espacialmente trasladándolas a celdas para este fin; otra forma fue la «incomunicación colectiva», y que consistió en impedir por todos los mecanismos existentes, la visita de familiares y tampoco se les entregaba información sobre el paradero del detenido, o bien, algún dato para saber si se encontraba con vida, o bien, en qué centro de detención se encontraba. Asimismo, se impedía todo tipo de comunicación con un abogado. La Comisión Valech indicó que esto fue permitido de forma excepcional, y en los casos en que el detenido había sido sometido a consejo de guerra. Asimismo señaló que estas formas de incomunicación presentaban al detenido como «un virtual desaparecido», debido a que no sólo se le negó el contacto con sus familiares y cercanos, sino también se impidió comunicarse con un abogado, hechos que a juicio de la Comisión Valech, excedían las facultades de un régimen normal de incomunicación, aun en el contexto de un Estado o tiempo de guerra⁸⁸¹.

Respecto a la tortura, la Comisión Valech señaló que en general se puede identificar esta práctica de forma masiva en los interrogatorios, al menos en la primera etapa, aunque sabemos que fue cometida durante todo el período de reclusión con diferentes intervalos. En esta primera fase del régimen, los apremios no se realizaron en el mismo sitio donde las víctimas estaban detenidas. Es decir, se habían habilitado de forma esporádica, zonas destinadas para este fin, ya fuera dentro del perímetro en que se encontraba el recinto de detención o bien en sitios aledaños. “En Santiago, por ejemplo, las personas confinadas en el Estadio Nacional fueron mantenidas en las escotillas, los camarines y los baños, pero los interrogatorios se realizaron en el velódromo del mismo estadio, o en las casetas destinadas a la prensa”⁸⁸². Por su parte, los interrogatorios de acuerdo a lo señalado por la Comisión Valech, las preguntas eran referidas sobre la tenencia de armas, presunta preparación militar y paramilitar, o bien con los detalles de un supuesto «Plan Z».

⁸⁸¹ Ibíd.

⁸⁸² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 237.

Interpelaciones que eran la antesala a otras de carácter más vinculadas a su militancia política e ideología.

“Estas acusaciones se entremezclaban con insultos y golpes, mientras el interrogado se encontraba amarrado, habitualmente a una silla, no rara vez con la vista vendada o con una capucha en la cabeza. Esta Comisión registró casos que indican que los golpes, las preguntas, las acusaciones y los insultos se sucedían unos a otros sin dar tiempo de contestar al detenido”⁸⁸³.

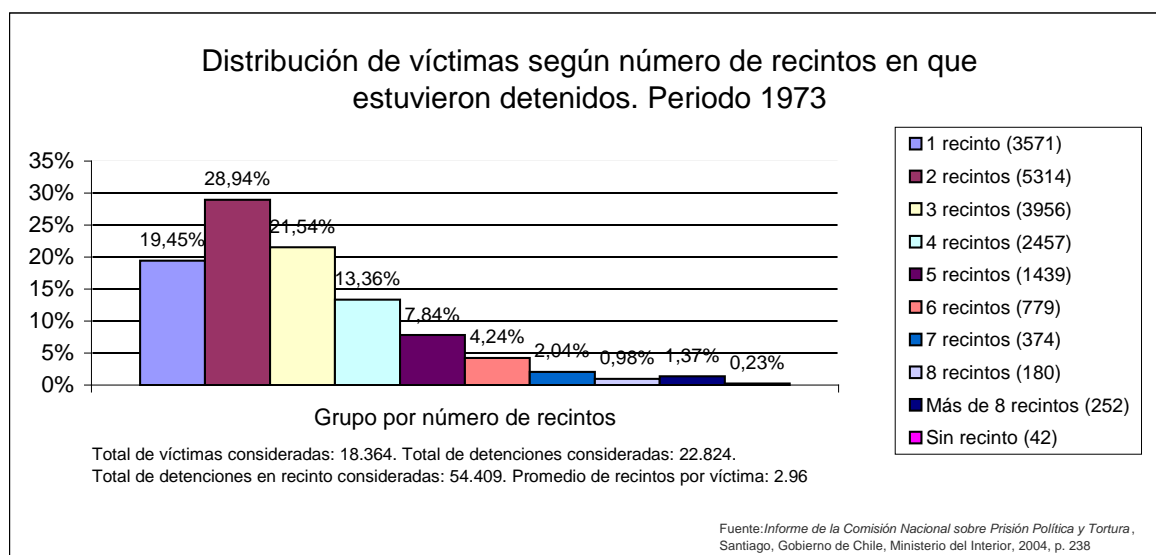
En cuanto a los métodos de tortura, la Comisión Valech señaló que en los interrogatorios, además de los golpes que se propinaban a todos los detenidos, la aplicación de electricidad fue también una práctica habitual, que se sumaba a amenazas de todo tipo, entre ellas, las de asfixia y las quemaduras corporales provocadas con cigarrillos. Si bien, en los primeros meses del primer período, la represión política fue mucho más masiva que en los otros, la Comisión señaló que se recibieron testimonios de agresiones sexuales, sufridas por mujeres y hombres. Entre otros objetivos, la práctica de la tortura se realizaba con el pretexto de «inquirir respuestas», o bien como forma de advertencia y castigo hacia los demás detenidos. Las escenas de tortura que fueron habituales, la Comisión las describió de la siguiente manera: “Lo habitual era que mientras uno de los agentes preguntaba, otros torturaban y tomaban nota de las respuestas del detenido. No era raro que un detenido fuera sometido a más de un interrogatorio”⁸⁸⁴. Luego de la sesión de interrogatorio a la víctima se le regresaba al lugar en que estaba detenida, según la Comisión, esta acción tenía como objetivo que “quedaran a la vista de sus compañeros las secuelas físicas de la reciente tortura, con el consiguiente efecto amedrentador sobre el resto de los prisioneros”⁸⁸⁵. Ello sumado a las precarias condiciones de higiene y alimentación que existían en los recintos de detención, impedían la recuperación física de las víctimas. Por su parte, el

⁸⁸³ Ibid.

⁸⁸⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 237.

⁸⁸⁵ Ibid. p. 237.

«equipo de interrogadores», estaba integrado por agentes y funcionarios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como por la Policía de Investigaciones. Al mismo tiempo la Comisión señaló que muchos de los detenidos, luego de ser interrogados y torturados, y en el traslado hacia los recintos donde estaban detenidos, se perdieron su rastro, pasando a formar parte de listas de «detenidos desaparecidos», en otros casos, los cadáveres fueron dejados en la vía pública, y en pocos casos entregados a sus familiares directos⁸⁸⁶.



Como se observa en el gráfico, del total de personas que acogió la Comisión, y que estuvieron privadas de libertad durante este primer período, 3.571 permanecieron en un solo recinto de detención, 5.314 pasaron por dos recintos, y 9.437, por tres o más. Asimismo, un total de 11.397 personas que equivale al 42,7% de los detenidos en esta época, fueron apresadas por Carabineros de Chile⁸⁸⁷. En estas acciones a los detenidos se les mantuvo en total incertidumbre, no informándoles de sus traslados ni tampoco brindado información sobre su paradero a los familiares. Como hemos visto, no fueron pocos los que pasaron por más de un centro de detención, así como fue habitual la práctica de la tortura en los interrogatorios. De forma excepcional en algunos recintos existieron registros de las personas que ingresaron, sobre

⁸⁸⁶ Ibid., p. 238.

⁸⁸⁷ Ibid., p. 239.

todo en aquellos que albergaron un gran número de detenidos, en estos casos, la liberación del detenido iba acompañada de la firma de una declaración, o «documento de situación», donde la persona “se comprometía a no participar en actividad política alguna, y a informar sobre cualquier cambio de domicilio o lugar de trabajo. (...) se obligaba a declarar que se había recibido un buen trato durante la «prisión preventiva»”⁸⁸⁸. En varias ocasiones, la documentación que se entregó como prueba de la libertad de los detenidos, indicaba que quedaban en “libertad condicional”, sobre todo en aquellos certificados que entregó el Ejército y más tarde la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET). Esta denominación permitía a las autoridades solicitar la presencia de la persona en cualquier momento, y al mismo tiempo, desde el punto de vista jurídico, se planteaba como un beneficio o gracia que se concedía al detenido. La Comisión lo aclaró de la siguiente manera:

“(...) cabe precisar que la libertad condicional es un beneficio carcelario que se otorga a quien, habiendo sido condenado, ha tenido buena conducta en el recinto penitenciario. De la mayoría de los concurrentes ante esta Comisión, los menos fueron sometidos a juicio. También sucedió, particularmente en provincias, que las personas liberadas sin mediar juicio alguno quedaban sujetas a control de firma ante la autoridad militar, policial o de Gendarmería”⁸⁸⁹.

Todo lo que permite observar la irregularidad de la situación, así como la ilegitimidad con que procedieron las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Cuya característica central fue la masividad de las detenciones.

El segundo período que identificó la Comisión Valech, se situó entre los meses de enero de 1974 y agosto de 1977, registrándose en esta fase un 19, 3% del total de testimonios recibidos, que correspondió a 5.266 casos. Dentro

⁸⁸⁸ Ibid., p. 239.

⁸⁸⁹ Ibid., p. 240.

de las principales características de esta fase podemos señalar: Primero, que se mantuvieron las características de la primera etapa, sobre todo en lo relativo a la implementación de la violencia, y del mantenimiento de los campamentos de detenidos, incluso hasta 1976. Segundo, este período se caracterizó por la acción represiva de la DINA, a partir de junio de 1974 cuando recibió reconocimiento legal, a pesar de que funcionó de forma irregular desde fines de 1973. Tercero, se observó un paulatino tránsito entre una etapa y otro, razón por la cual se mantuvieron elementos del período anterior en esta segunda fase. En efecto, del total de detenciones que fueron calificadas para este período, al menos 2.892 corresponden a personas que señalaron haber permanecido en al menos un recinto de la DINA⁸⁹⁰. Cuarto, esta etapa tuvo como objetivo fundamental por parte del aparato represor señalado, la destrucción de los cuadros directivos del MIR, PCCH, y PSCH, evitando así su rearticulación clandestina, por tanto, a diferencia del período anterior, las detenciones fueron selectivas.

En cuanto a la forma en que se realizaron las detenciones, fundamentalmente fueron individuales, y se realizaron en domicilios, lugares de trabajo, y en la vía pública. Respecto a la forma en que se efectuaron los apresamientos, la Comisión lo detalló de la siguiente manera: “Los agentes represivos irrumpían en el entorno de la vida cotidiana, preguntando por quien buscaban; conocían su ocupación, su rutina habitual, los lugares que frecuentaba, los nombres de sus familiares y amigos, su militancia política”⁸⁹¹. Asimismo, se realizaron detenciones, conocidas también como «redadas», en los puntos de reunión de militantes, simpatizantes de partidos y movimientos de izquierda, que habían sido declarados ilegales por la Junta Militar. A su vez, también que personas «con compromisos militantes», fueron detenidas junto a sus familias, parejas, hijos, padres o madres, no considerando si estas personas estaban involucradas o no en organizaciones políticas. Asimismo, muchas personas que habían sido liberadas «condicionalmente» en la primera etapa, fueron nuevamente detenidas.

⁸⁹⁰ Ibíd.

⁸⁹¹ Ibíd., p. 241.

En este segundo período, los encargados de detener eran mayoritariamente agentes de civil sin identificación, a lo sumo lo hacían verbalmente, indicando que pertenecían a alguno de los servicios de inteligencia, ya fuera de las Fuerzas Armadas y de Orden o bien de la DINA. A su vez, eran estos organismos que sin otro requerimiento judicial, más que su propio parecer, quiénes decidían quiénes debían ser detenidos. Asimismo en muchos casos, estas detenciones no fueron reconocidas por tribunales. Sin embargo, en los casos excepcionales en que los fueron aceptados los recursos de amparo interpuesto por las familias, con ayuda de organizaciones de Derechos Humanos, Vicaría de la Solidaridad, abogados y organismos internacionales, “el Ministerio del Interior validaba a posteriori el arresto, dictando un decreto en virtud de las atribuciones que otorgaban los estados de excepción constitucional”⁸⁹². Sin embargo, fue habitual que los Tribunales de Justicia de Chile rechazaran los Recursos de Amparo, ya fuera porque recibían información que emitían los organismos de seguridad, o bien debido a que el Ministerio del Interior negaba su detención, o porque se basaban en decretos que reconocían las detenciones, otorgándoles una figura legal. En lo que respecta al traslado de los detenidos, éstos se hicieron en vehículos militares o policiales, en camiones frigoríficos, y en “camionetas Chevrolet C-10 con la parte posterior cubierta por una lona, o vehículos requisados con antelación a otros prisioneros. En general, los vehículos carecían de patente o portaban imitaciones de matrículas extranjeras”⁸⁹³. Como en la etapa anterior, las detenciones se efectuaron sin ningún tipo de disposición legal, al contrario eran órdenes en blanco que se cumplimentaban al realizar la detención o bien después, incluso se emitieron justo cuando se presentaban los recursos de amparo.

Esta etapa se caracterizó sobre todo, por el uso de recintos secretos de detención donde se les interrogaba y torturaba. Las Comisiones Rettig y Valech, señalaron que esta modalidad primero se aplicó en Santiago y luego en regiones. La permanencia en estos lugares casi nunca superaba dos semanas

⁸⁹² Ibíd.

⁸⁹³ Ibíd.

o un mes. El número de personas recluidas en estos centros ya no era tan elevado como antes; conformaban grupos que no pasaban de 30 ó 40 individuos”⁸⁹⁴. Como veremos, la excepción fue el centro de detención y tortura, Villa Grimaldi, sin embargo, la capacidad de albergar a un gran número de detenidos fue inferior por ejemplo en comparación a uno de los mayores centros de detención que existió en la primera etapa, como fue el Estadio Nacional⁸⁹⁵. En lo que respecta a la situación en regiones, la Comisión Valech señaló que se continuó con las formas de detención que existían en la primera etapa, pero que a su vez, los apresamientos se volvieron mucho más selectivos, siguiendo la tónica del período. A su vez, indicó que desde regiones se trasladaron detenidos hacia los recintos secretos tanto de Santiago como de otras ciudades importantes⁸⁹⁶. Asimismo señaló que fue común que los agentes de seguridad fueron al domicilio del detenido y lo allanaran, intimidando y agrediendo a sus familiares. Realizando no en pocas ocasiones robo de especies y dinero.

Como también lo mencionó la Comisión Rettig, existieron casos en lo que luego de que los detenidos fueran interrogados y torturados, se les llevó bajo amenazas que iban desde la muerte y peores torturas, hasta la detención de familiares (parejas, hijos, padres y madres), a la vía pública en vehículos con el fin de identificar a personas, que más tarde fueron arrestadas, y que en algunas ocasiones fueron torturadas juntas. De esta manera, la Comisión identificó una práctica de detención que fue poco aplicado, y que se conoció como «ratonera». Consistió en la captura por sorpresa de las personas que sospechosas, posteriormente los agentes de seguridad allanaban su domicilio. En estas acciones, se hacían acompañar de detenidos que mediante la tortura, habían indicado la dirección exacta de la persona que se buscaba. En estas

⁸⁹⁴ Ibíd., p. 242.

⁸⁹⁵ El campamento de prisioneros del Estado Nacional, estuvo a cargo del Ejército. “Hubo detenidos allí entre septiembre y noviembre del año 1973. El día 22 de septiembre, según la Cruz Roja Internacional (CRI), había 7.000 detenidos. El informe agrega que hubo entre 200 y 300 extranjeros de diversas nacionalidades. Miles de detenidos, hombres y mujeres, provenientes de distintos lugares de la Región Metropolitana fueron trasladados a este lugar”. En Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 439.

⁸⁹⁶ Véase Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, pp. 261-439.

operaciones, los agentes podían permanecer días, a la espera de que llegara a quién buscaba. Mientras, tenían detenidos dentro de la casa a quienes vivían allí, así como a todo aquel que ingresara en el hogar.

“De este modo lograban capturar a varios individuos con vinculaciones políticas entre sí. En el domicilio ocupado - transitorio e improvisado lugar de arresto- se emprendían extensos interrogatorios y también sesiones de tortura. Ya finalizado el operativo, quienes aún resultaban de interés para los organismos de seguridad eran llevados a recintos clandestinos”⁸⁹⁷.

Una práctica común identificada en este período, fue que una vez liberadas de los centros secretos en los que estaban detenidas, las víctimas eran espiadas con la finalidad de detener a otras personas involucradas en actividades políticas de oposición. Sin embargo, esta situación podía cambiar drásticamente, ya que los recién liberados, podían nuevamente ser apresados para ser interrogados de forma conjunta con nuevos detenidos. Luego de esta acción, las víctimas podían ser liberadas nuevamente, dejándolas en la vía pública, o en sitios eriazos maniatados y con la vista vendada, o bien eran reubicados en centros públicos de detención, como podían ser campos de prisioneros o delegaciones de Gendarmería⁸⁹⁸. También fue habitual que las

⁸⁹⁷ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 242. Uno de estos casos, fue lo que ocurrió en la casa de Calle Conferencia n° 1587 en la comuna de La Reina. Funcionó entre 1976 y 1978, su objetivo era asesinar personas. En este cuartel existían las llamadas “ratoneras”. Véase Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., pp. 546-547. “En Mayo del 2007 el Juez Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, en el marco de la investigación por los crímenes perpetrados en los Casos Colombo, Conferencia y Operación Cóndor. Se trataba del mayor procesamiento hasta la fecha (en septiembre del 2009 el número se amplió a 120). Fue entonces cuando se conoció por primera vez la existencia de este cuartel. Su desconocimiento se debió a que ninguna de las víctimas, que allí eran utilizadas para experimentar sustancias químicas letales, salió con vida. Este recinto, como otros centros de detención, fue demolido por el gobierno militar para evitar futuras investigaciones”. Disponible en, <<http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/>>.[Consultado en enero 2012]. Véase también la investigación periodística de Televisión Nacional de Chile, *Caso Conferencia, Informe Especial*, Santiago, Televisión Nacional de Chile, 2007.

⁸⁹⁸ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 242.

detenciones de las víctimas en los diferentes recintos secretos fueran negadas, debido a que no existía un registro de ellas. En este contexto, la Comisión Valech señaló que mientras se tramitaban los recursos de amparo que se interponían en las Cortes de Apelaciones en favor de los detenidos, los tribunales debido a la petición de los demandantes, debían consultar a los Servicios de Seguridad del régimen si la persona del Recurso de Amparo se encontraba o no bajo su jurisdicción. La Comisión indicó que cuando se obtuvieron respuestas, la solicitud de amparo tenía una excesiva demora y muchas veces se hacía efectiva, cuando la víctima ya se encontraba en centros públicos de detención, o bien estaba en libertad.

En cualquier caso, en este tiempo de espera, existía el temor de que la persona hubiera desaparecido. El no reconocimiento de la detención, era uno de los principales temores por parte de las víctimas, sobre todo en este período –como lo señaló la Comisión Valech–, ya que existía el permanente temor de ser ejecutados y desaparecidos, puesto que su aprehensión no era conocida, negando incluso la existencia de naturaleza jurídica de las víctimas. En efecto, como lo constató el Informe Rettig, y el Informe Valech, en los diferentes recintos secretos de detención reconocida. Hay que señalar que en dichos recintos también permanecieron personas estaban detenidas y hasta hoy continúan desaparecidas. Diferente suerte corrieron aquellas personas que estuvieron detenidas en un recinto público, ya que era reconocido y tenía documentación en cuanto a la entrada y salida de los detenidos. Habitualmente la llegada a estos centros dependía de que quedaran a disposición del tribunal militar correspondiente, que los procesaba conforme a la legislación de «tiempo de guerra», o bien, que quedaran detenidos en “virtud de las normas de estado de sitio, sin cargo alguno, a la espera de un decreto de relegación o de expulsión del país, o bien una orden de libertad emanada de la autoridad militar”⁸⁹⁹. Así también existieron personas que fueron enviadas a recintos secretos que estaban destinados a la recuperación de los torturados, antes de ser transferidos a un centro de detención reconocido de forma oficial.

⁸⁹⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 243.

Respecto a las personas detenidas en este período, fundamentalmente se trató de individuos de quienes se presuponía que participaban en partidos, organizaciones y movimientos políticos de izquierda, que desde el Golpe de Estado habían quedado prohibidos. También fueron detenidas aquellas personas que prestaron algún tipo de colaboración con aquellos que estaban siendo buscados, ya sea mediante el ocultamiento o negación de éstos. Asimismo fueron detenidos, familiares, amigos y conocidos de quienes eran perseguidos. Quienes realizaron estas acciones fueron los organismos de seguridad del régimen, principalmente la DINA y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)⁹⁰⁰. Sus objetivos se centraron fundamentalmente en la represión del MIR, y luego el Partido Socialista de Chile (PSCH) y más tarde el Partido Comunista de Chile (PCCH) en el que también participaron agentes del Comando Conjunto. La Comisión precisó, que existieron personas que fueron detenidas en 1973, y que continuaron soportando la prisión política durante este segundo período, llevando largos períodos de reclusión. En definitiva, “la práctica de la prisión al margen de toda formalidad legal siguió vigente”⁹⁰¹. Otro tema es el que se refiere a aquellos que luego de permanecer largos períodos recluidos, fueron expulsados del país prohibiéndoles su ingreso. La Comisión Valech señaló que conoció al menos 1.432 casos de expulsiones del país. En consecuencia, no fue extraño que la prisión política y la tortura terminaran con el exilio de las víctimas, bajo condiciones de impunidad absoluta.

En esta segunda etapa, la tortura de los detenidos al igual que en el período anterior comenzaba en el mismo en que eran arrestados. Tanto los golpes como las amenazas acompañaban el ingreso de a los diferentes vehículos de los agentes de los organismos secretos. Luego se procedía a vendarles los ojos para evitar que reconocieran el trayecto hacia el recinto secreto donde eran llevados. En estos lugares durante gran parte de su reclusión permanecieron maniatados y con la vista vendada para así evitar el

⁹⁰⁰ Como hemos indicado en las páginas referidas al Informe *de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), a partir de 1975, pasó a denominarse Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA).

⁹⁰¹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 243.

reconocimiento de los agentes, así como “cualquier atisbo de empatía de éstos con las víctimas, este método aumentaba la sensación de vulnerabilidad y los desorientaba en términos espaciales y temporales”⁹⁰². Fue característico de esta etapa que los interrogatorios se realizaron inmediatamente que el detenido era ingresado al recinto clandestino de prisión, por tanto, se suprimieron las extensas esperas que eran la antesala de los padecimientos a que eran expuestos los detenidos. Sin embargo, estos interrogatorios podían extenderse por largas horas, incluso días y noches, donde los grupos de torturados se iban alternando. La Comisión Valech, indicó que el tipo de información que se les pedía a las víctimas por parte de los agentes, era mucho más precisa, cuestión que manifestaba un conocimiento de la biografía del detenido. En este contexto, la Comisión precisa que fue característico de organismos represivos como la DINA, intimidar a las víctimas con el empleo de la tortura a sus seres queridos, padres, parejas e hijos, como mecanismo de coacción sobre aquellos prisioneros que no querían colaborar, es decir, que pese a la tortura, se negaban a dar información. Lamentablemente, en ocasiones estas amenazas se materializaron, siendo torturados de forma simultánea. Como fue en el caso de los hermanos Mario Fernando y Nilda Patricia Peña Solari, como lo señaló en la CNVR, fueron detenidos los días 9 y 10 de diciembre de 1975 en Santiago, ambos eran militantes del MIR. “Los detenidos desaparecieron en poder de la DINA. Hay testimonios de la presencia de ambos hermanos en el recinto denominado La Venda Sexy”⁹⁰³. Una testigo que fue detenida junto a Mario Fernando, señaló que “(...) fuimos llevados vendados y llevados a la casa de torturas de la venda sexy (...) luego fui llevada al subterráneo de esa casa donde fui torturada e interrogada en compañía de Mario Fernando. El incluso me dirigió la palabra por orden de los torturadores”⁹⁰⁴. También podemos mencionar el caso de la familia Recabarren González, el 29 de abril de 1976, fueron detenidos los hermanos Manuel Guillermo (22 años) y Luis Emilio (29 años) militantes del Partido Comunista, junto a la cónyuge del último Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), que tenía tres meses de embarazo,

⁹⁰² *Ibíd.*, p. 245.

⁹⁰³ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 527.

⁹⁰⁴ Ficha testigo, folio nº 118.209, en caso Mario Fernando Peña Solari.

junto al hijo que ambos de dos años de edad, que luego fue entregado a sus abuelos. El 30 de abril detienen al padre de los afectados, Manuel Segundo Recabarren Rojas (50 años), también militante del Partido Comunista “quien había salido a realizar gestiones para determinar el paradero de sus familiares. Sin embargo, fue detenido y trasladado a Villa Grimaldi, lugar del cual se perdió el rastro en agosto de 1976. De los cuatro detenidos no se ha vuelto a tener noticias”⁹⁰⁵.

Los métodos de tortura que más se utilizaron en esta etapa, fueron los golpes en zonas específicas del cuerpo, y que diferencia de la etapa anterior no las agresiones no se daban en cualquier parte de la masa corporal de los afectados, hechos que ocasionaban desmayos, asfixia y lesiones en órganos internos. “Se adoptaron técnicas conducentes a evitar que los golpes [dejaran] rastros visibles en el cuerpo”⁹⁰⁶. Asimismo, fue común el uso de la electricidad como método de tortura, existiendo en los diferentes centros clandestinos, ciertas rutinas de aplicación de estos tormentos, en donde a las víctimas se les colocaba sobre catres con cintas de metal, en los que se aplicaban descargas eléctricas. Este método fue conocido por quienes lo padecieron y lograron sobrevivir como «la parrilla». La Comisión Valech, subrayó que en la aplicación de estos suplicios, se había instaurado el uso de aparatos que permitían regular el voltaje y disminuir las marcas y quemaduras. Asimismo, se precisó que en algunos recintos secretos, presenciaron las sesiones de tortura médicos y personal de salud, quienes evaluaban la resistencia de las víctimas. También se aplicaron otros tormentos como amenazas, diferentes tipos de asfixia y colgamientos. Igual que en el período anterior, las agresiones sexuales no fueron hechos aislados, es más, la Comisión Valech, como su antecesora, informó que se cometieron “prácticas aberrantes como violaciones con perros especialmente entrenados al efecto, o la introducción de arañas en la vagina o

⁹⁰⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 545.

⁹⁰⁶ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. IV, p. 245.

en el año”⁹⁰⁷. Como veremos existieron centros secretos de detención, donde se utilizaron como práctica habitual de tortura la agresión sexual.

El tercer período que identificó la Comisión se situó entre agosto de 1977 y marzo 1990, registrándose 4.308 detenciones de las cuales 3.625 fueron detenciones por motivos políticos aceptadas por la Comisión, lo que representa un 13,3% del total de testimonios validados. Dentro de las principales características del período, podemos señalar la absoluta presencia de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que funcionó hasta el final de esta etapa, donde al menos 3.059 personas permanecieron en recintos en algunos de sus recintos de detención. Y las jornadas de protestas nacionales que se realizaron a partir de mayo de 1983. Como lo señaló la Comisión Rettig, esta etapa se caracterizó por presentar un contexto histórico diferente, debido a la progresiva denuncia de las violaciones de derechos humanos, el surgimiento de la oposición armada, y la expansión de “un proceso de movilización social que buscaba forzar por medios pacíficos una pronta salida democrática”⁹⁰⁸. En consecuencia, la progresiva rearticulación política de la sociedad chilena, llevó a que desde el régimen se interviniera mediante Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes actuaron reprimiendo a quienes oponían resistencia al régimen, deteniéndolos por breve tiempo para luego ponerlos a disposición tanto de la CNI como de tribunales, enviándolos a las fiscalías militares para que fueran procesados por las diferentes leyes que había creado el régimen para inculpar a quienes se oponían a la dictadura militar. Estas razones llevaron a la CNI a dedicar mayor esfuerzo a la persecución de los grupos implicados en la resistencia armada al régimen. Estos fueron, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y el Movimiento Mapu Lautaro, en los que realizaron detenciones selectivas. Quienes eran detenidos, podían ser enviados a los tribunales militares, o bien, se les inculpaba por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, ante ministros de las Cortes de Apelaciones”⁹⁰⁹.

⁹⁰⁷ Ibíd.

⁹⁰⁸ Ibíd., p. 246.

⁹⁰⁹ Ibíd., p. 247.

Por otro lado, como lo demostró la Comisión Rettig, en este período se llevó a cabo la «institucionalización jurídica del régimen militar», es decir, la puesta en marcha de instrumentos legales que permitieron al régimen actuar conforme a leyes creadas para sus propios fines, sobre todo en lo que se refirió de privar de libertad por motivos políticos. “No obstante que se recurría a normas contrarias al debido proceso y a las exigencias del derecho internacional en materia de prevención de torturas”⁹¹⁰. Entre estas acciones se es posible identificar, por un lado, el decreto-ley de Amnistía de 1978 que implicó la liberalización de quiénes aun se encontraban detenidos. En este aspecto, la Comisión Valech señaló que al momento de dictar esta ley, ya muchas personas habían sido puestas en libertad. Sin embargo, no fueron pocos los casos en que se les substituyeron las condenas de reclusión por «extrañamiento». La Comisión señaló que esta medida se mantuvo “a pesar de la amnistía, mediante la prohibición administrativa de ingreso al país dictada de conformidad con las normas de estados de excepción constitucional”⁹¹¹. Por otro lado, se destacó en este período la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Sin embargo, se mantuvieron las limitaciones de los derechos constitucionales, debido a la implementación de estados de emergencia se que se restablecían sin fundamentos aparentes, así como por “el establecimiento de un estado especial y permanente de restricción de dichos derechos, contemplado en el articulado transitorio de la Constitución, denominado «de peligro de perturbación de la paz interior»”⁹¹².

En el análisis de este período, ambas comisiones coincidieron que en términos generales se puso término al estado de sitio y al toque de queda, aun cuando, ambas informaron que al menos en dos ocasiones se declaró el estado de sitio, manteniéndose por unos meses. Estas medidas se aplicaron para “decretar arrestos y relegaciones de opositores al régimen, con prescindencia de todo control jurisdiccional”⁹¹³. Otra característica de este tercer período fue que se volvieron a realizar allanamientos masivos, sobre

⁹¹⁰ Ibid., p. 249.

⁹¹¹ Ibid., pp. 247-248.

⁹¹² Ibid., p. 248.

⁹¹³ Ibid.

todo en grandes ciudades como Santiago. Aun cuando estas acciones no formaron parte del objetivo del Informe Valech, esta Comisión reconoció que la violencia que se ejerció en estos allanamientos sí constituyeron violaciones a los derechos humanos, y que se perpetraron sobre todo en los sectores más pobres, por tanto, si bien esto escapaba al mando de la Comisión, en las páginas del Informe Nacional sobre Prisión Política y Tortura, sí condenó estas acciones.

En general podemos señalar que los organismos de seguridad del régimen, especialmente la CNI, realizaron detenciones, amedrentamientos, amenazas y seguimientos, tal como lo describe la Comisión Valech. También se mantuvieron detenciones que no fueron reconocidas, así como personas que estuvieron detenidas en recintos secretos. La Comisión señaló que la mayoría de los testimonios referidos a la CNI, denunciaron que sus detenciones fueron “habitualmente reconocidas y registradas, apelando de preferencia, como justificación oficial de las mismas, a la legalidad e institucionalidad creada para enmarcar las acciones de dicho organismo”⁹¹⁴. En general se les trasladó a recintos que eran de público conocimiento. La permanencia –según señala la Comisión Valech- tendió a ser más breve que en otros períodos, aun cuando las confesiones «auto-inculpatorias» fueron, en la mayoría de las veces, resultado de las torturas. Como en otros períodos, a las personas que eran liberadas, se les dejó en tanto en la vía pública como en sitios eriazos, y en ambos casos, siempre fueron dejados con los ojos vendados y maniatados.

En consecuencia, la tortura fue una práctica habitual también en este período, así como también en los primeros años continuaron existiendo los recintos secretos de detención, hasta la publicación del Decreto Supremo N° 594, con fecha 14 de junio de 1984 del Ministerio del Interior, que fijó los lugares de detención de la CNI, referido al Art. 2 de la Ley N° 18.315, publicado en el Diario Oficial N° 31.897, de fecha 15 de junio de 1984. Mediante este decreto se autorizaba a la CNI para detener personas en los centros de

⁹¹⁴ Ibíd., p. 250.

detención habilitados de forma secreta, y que a partir de este decreto serían de público conocimiento. En consecuencia, tanto los extensos períodos de detención bajo la custodia de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, o la CNI, como la «discrecionalidad» en cuanto a las atribuciones que no tuvieron ningún control judicial, otorgaron todas las posibilidades para la práctica de la tortura sobre los detenidos. Posibilitaron estas prácticas, medidas que fueron adoptadas por tribunales militares, y que consistían entre otros, los largos períodos de incomunicación de los detenidos, en que se les prohibía la visita tanto de médicos como de abogados, situación que dejaba en estado de indefensión de las víctimas. Los métodos de tortura, fueron los mismos que en los períodos anteriores, los de mayor frecuencia fueron los constantes golpes en la totalidad de los cuerpos de los detenidos, así como en zonas específicas, y la aplicación de electricidad.

“Era práctica común desnudar y vendar los ojos a los detenidos por largo tiempo. También se recurría con insistencia a otros métodos de tortura, como agresiones sexuales, colgamientos, asfixia y quemaduras. Como ya era costumbre, la aplicación de torturas comenzaba en el momento de la detención, mediante golpes y amenazas. Las víctimas, de inmediato privadas de visión con vendas o capuchas, podían comenzar a ser interrogadas ya en el vehículo de los agentes. Recurrentemente, apenas ingresados al recinto de detención, los afectados eran torturados con electricidad”⁹¹⁵.

⁹¹⁵ Ibíd., p. 250. Véase Chile, Decreto Ley nº 1.697 que declara disueltos los partidos políticos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en el Decreto Ley nº 77, de 1973. Del 11 de marzo de 1977. Diario Oficial del 12 de marzo de 1977.

4.3.- Resultados entregados por las Comisiones Rettig y Valech.

Las investigaciones que elaboraron tanto la Comisión Rettig (1991) como Valech (2004), permitieron conocer de manera oficial y pública, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La constatación de que el Estado de Chile infringió derechos internacionales en esta materia, y que en ello participaron militares y civiles, sentó un importante precedente en la forma en cómo los gobiernos de la concertación abordaron una de las herencias más importantes dejadas por la dictadura militar: La violación de los derechos fundamentales de cientos de personas en Chile.

Los datos que arrojaron estas comisiones, permitieron confirmar la sistemática y masiva violencia cometida contra personas por razones políticas, y que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Así también, se pudo conocer el mapa de la violencia, ya que estos padecimientos fueron realizados en lugares determinados, y como hemos indicado antes, por personas, en su mayoría militares, en la que también existió colaboración de civiles. Consideramos para efectos de nuestra investigación, que aquellos lugares que se transformaron en escenarios del horror cometido, fueron visibilizados sobre todo debido al testimonio de las víctimas, así como también de aquellos que se transformaron en testigos, ya fuera porque compartieron la reclusión en los diferentes recintos o bien, porque presenciaron el apresamiento de las víctimas. En efecto, además de constatar el gran número de personas que fueron víctimas de unos y otros apremios, también se pudo comprobar la masividad de los centros de detención.

Como sabemos, el Informe que elaboró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, configuró un cuadro general de víctimas con resultado de muerte en todo el país entre 1973 y 1990, que corresponden a 3.196 personas, y que considerando la población existente de acuerdo a los datos

censales, es un alto número⁹¹⁶. Esto porque el censo de 1970 indicó que la población total del país era de 8.884.768 habitantes, por su parte el censo de 1982 indicó que la población en Chile era de 11.329.736 personas, y que corresponden a:

I. Cuadro general de víctimas 1973-1990.

	Total	%
1. Víctimas de agentes del estado o de particulares actuando a su servicio	2.905	90,9%
1.1 Muertos	1.720	53,8%
1.2 Detenidos desaparecidos	1.185	37,1%
2. Muertos por personas o grupos opositores al régimen militar	152	4,8%
3. Muertos por la violencia política del periodo sin haberse podido identificar a sus autores *	139	4,3%
Totales	3.196	100%

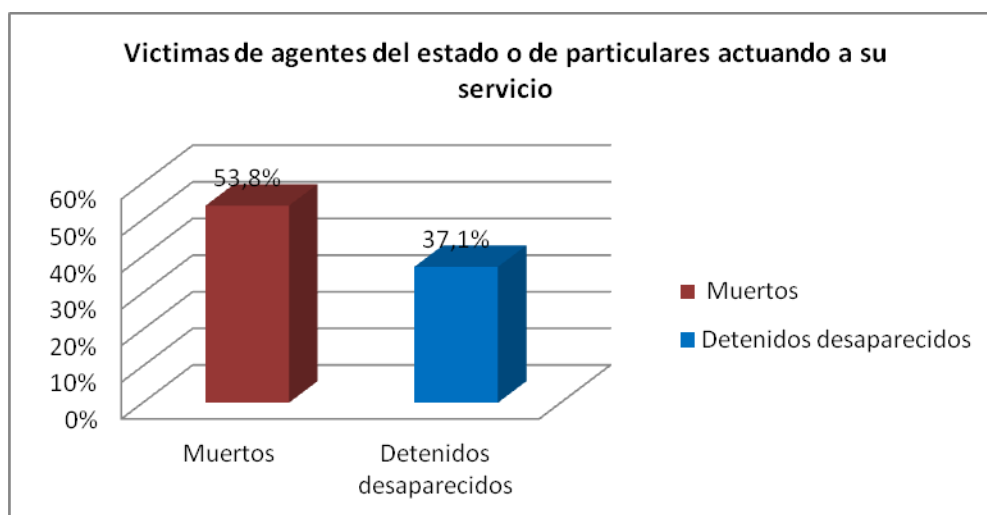
* Aunque en general puede presumirse que fue obra de agentes del estado, por tratarse en la inmensa mayoría de los casos de civiles muertos a bala en horarios de vigencia del toque de queda.

Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 299.



Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 229.

⁹¹⁶ República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, *Población total del país. XIV Censo de Población y III de Vivienda*, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1970. Ver relación de censos en anexo nº 9.



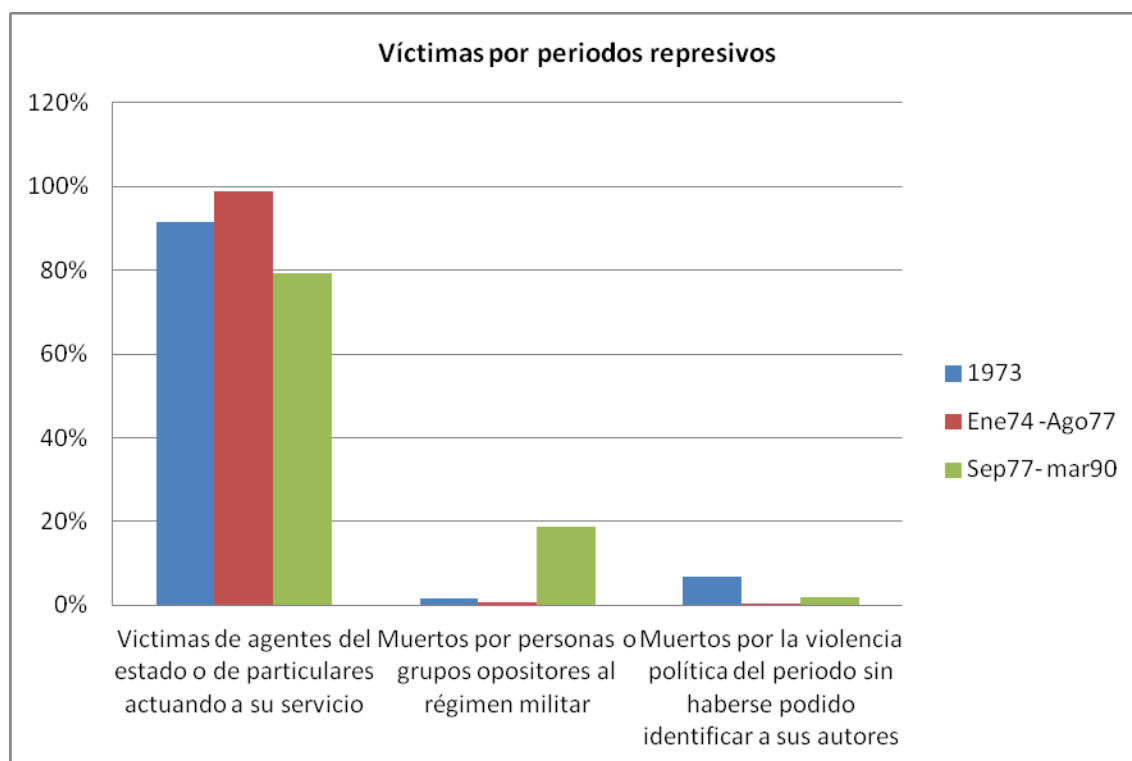
Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 229.

A su vez, el informe situó las víctimas de acuerdo a los períodos represivos que identificó la Comisión y que permite constatar el alto número de víctimas dentro de un país pequeño en cuanto a densidad de población. La Comisión Rettig recopiló datos que permitieron identificar a las víctimas por año, y que para nuestro caso de estudio se sitúan en el segundo período, que se ubica temporalmente entre enero de 1974 y agosto de 1977. Como hemos señalado, resulta complejo realizar una periodización exhaustiva del accionar del régimen, sobre todo porque si bien la DINA fue creada formalmente en junio de 1974, sus orígenes, tal como lo señaló el propio Informe Rettig, se pueden rastrear desde los últimos meses de 1973. En consecuencia estos son algunos de los problemas que se asocian al hecho de intentar ordenar hechos dispersos en el tiempo, cuya característica es la clandestinidad e impunidad con que se desarrollaron, cuestión que ha sido avalada por los cientos de testimonios que se entregaron a las Comisiones Rettig y Valech, de los cuales varios de ellos componen el fondo documental que sustenta esta investigación. De acuerdo a los datos entregados por la Comisión Rettig, entre 1974 y 1977, se registraron 757 víctimas cuyos datos se desagregan de la siguiente forma:

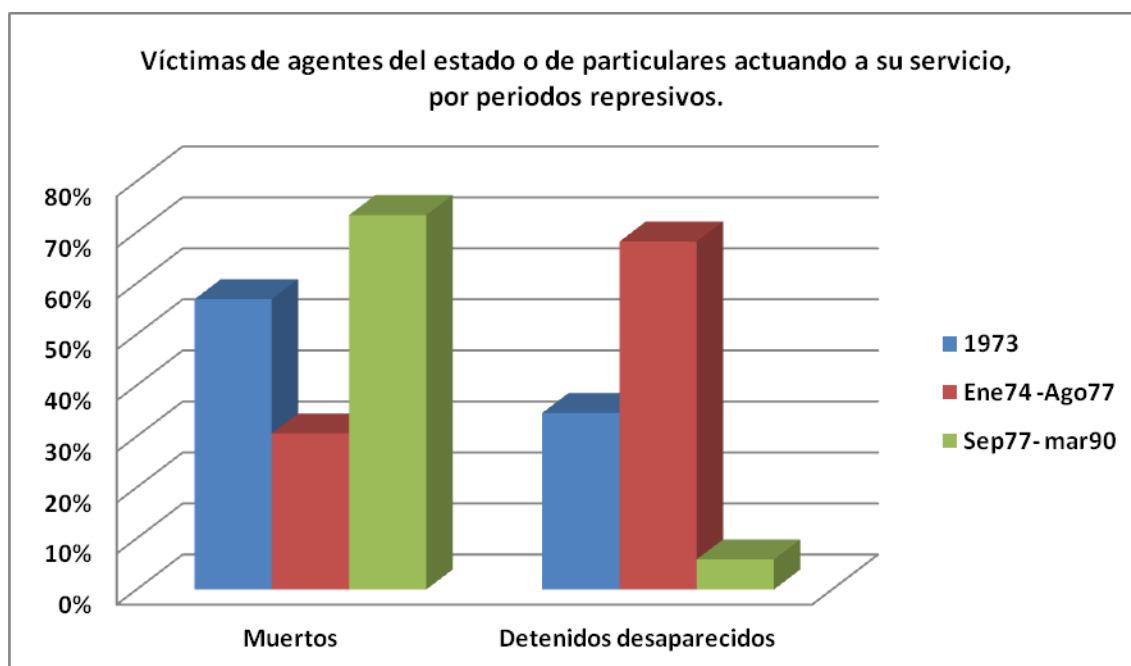
II. Cuadro de Víctimas por períodos represivos.

	1973	%	Ene74 -Ago77	%	Sep77- mar90	%	Total
1. Víctimas de agentes del estado o de particulares actuando a su servicio	1.674	91,5	748	98,8	483	79,3	2.905
1.1 Muertos	1.041	56,9	232	30,6	447	73,4	1.720
1.2 Detenidos desaparecidos	633	34,6	516	68,2	36	5,9	1.185
2. Muertos por personas o grupos opositores al régimen militar	32	1,7	6	0,8	114	18,7	152
3. Muertos por la violencia política del periodo sin haberse podido identificar a sus autores	124	6,8	3	0,4	12	2,0	139
Total	1.830	100	757	100	609	100	3.196

Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 229.



Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 229.



Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 229.

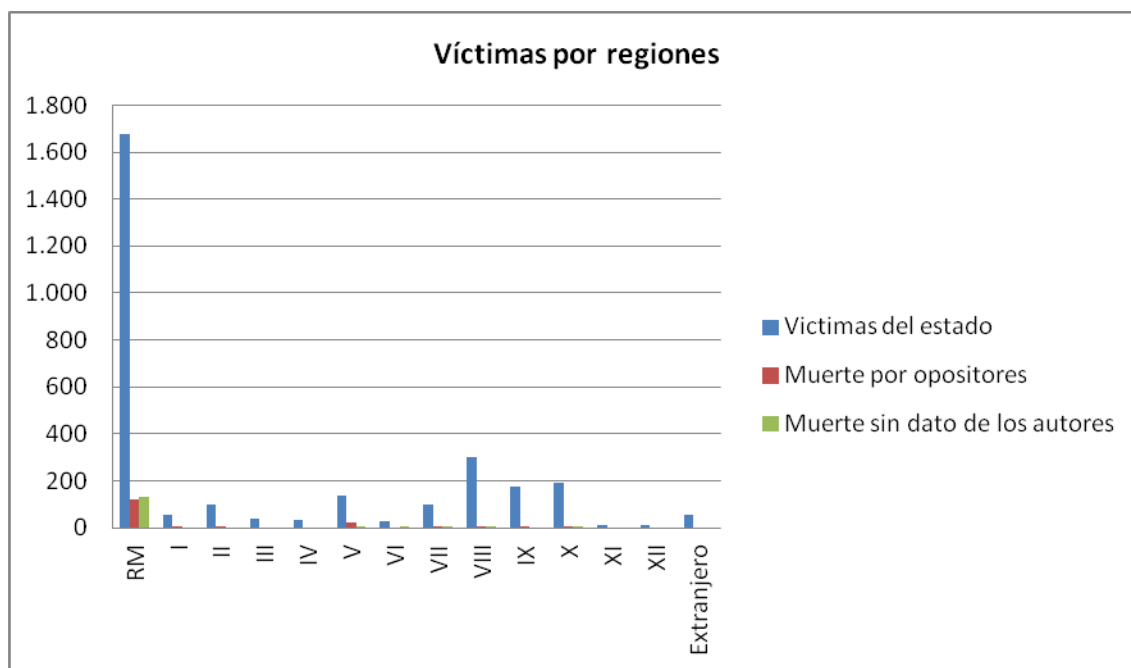
Del total de víctimas del Estado, de los que se formó convicción la Comisión, 1.675 ocurrieron en la Región Metropolitana –durante todo el período de la dictadura- de ellos, 1.040 tuvieron como consecuencia la muerte, y 635 fueron designados como detenidos desaparecidos (DD). Además identificó a 118 personas con resultado de muerte por opositores y 130 sin datos de autores, lo que da un total de víctimas de 1.923 y que corresponde al 60% de las víctimas identificadas por regiones⁹¹⁷.

⁹¹⁷ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 231.

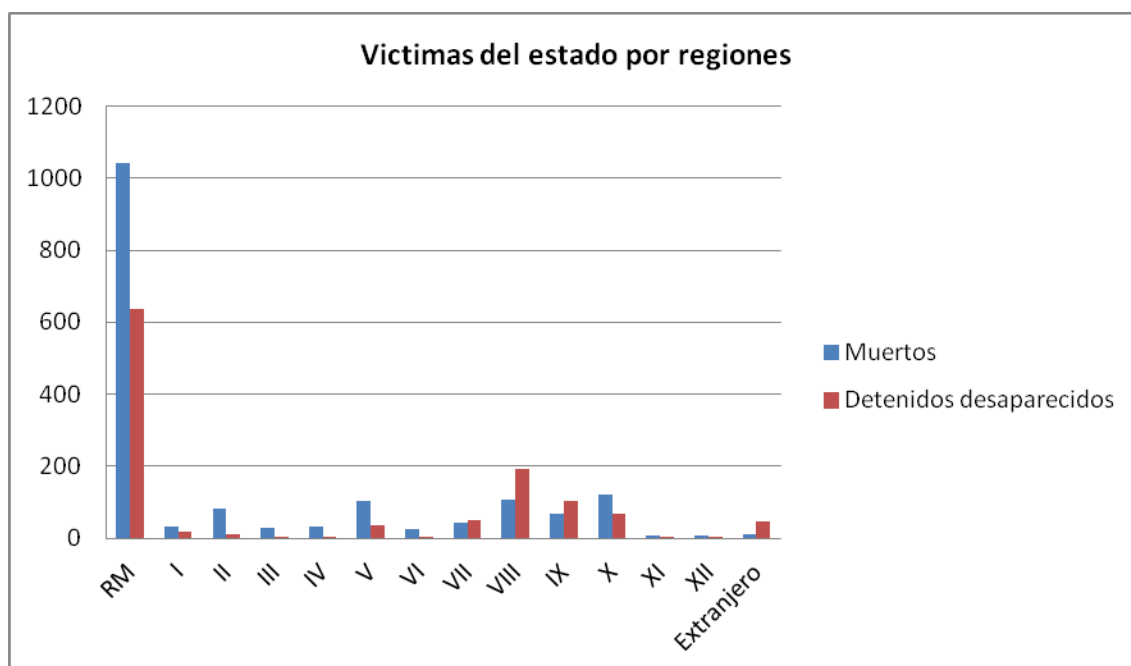
V. Cuadro de víctimas por regiones.

Región	Victimas del estado			Muertos por opositores	Muertos sin dato autores	Total	%
	Total	M.	D.D				
RM	1.675	1.040	635	118	130	1.923	60,2
I	54	34	20	1	-	55	1,7
II	96	84	12	2	-	98	3,1
III	36	30	6	-	-	36	1,1
IV	35	32	3	-	-	35	1,1
V	139	103	36	21	2	162	5,1
VI	26	25	1	-	1	27	0,8
VII	96	44	52	4	1	101	3,2
VIII	301	107	194	4	2	307	9,6
IX	175	70	105	1	-	176	5,5
X	193	123	70	1	3	197	6,1
XI	13	9	4	-	-	13	0,4
XII	9	8	1	-	-	9	0,3
Extranjeros	57	11	46	-	-	57	1,8
Total	2.905	1.720	1.185	152	139	3.196	100

Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 230.



Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 230.



Fuente: Comisión Chile de Derechos Más en Chile, Fundación Ideas, *Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM, 1999, (1ª ed. 1991), p. 230.

En cuanto a los centros de detención y tortura, la CNVR los identificó siguiendo las fases en que caracterizó la dictadura militar. En la primera de ellas, localizó geográficamente en todo el país, los recintos que a su juicio y de acuerdo a las evidencias entregadas por los testimonios de las víctimas, fueron más representativos, y que correspondieron en su mayoría a los que mencionamos cuando analizamos cada etapa. En este contexto, la Comisión Rettig, no realizó una cuantificación del total de recintos de detención y tortura, ya que ese no era su objetivo, sino más bien los identificó, en aquellos casos en que las evidencias lo permitieron. Sin embargo, cuando describió la situación en cada región del país, subrayó que se utilizaron diferentes recintos para detener a las víctimas, entre las que se pueden mencionar a Comisarías de Carabineros, regimientos, cárceles, cuarteles de la Policía de Investigaciones, buques, escuelas y recintos deportivos. En los primeros meses luego del golpe de Estado, debido al alto número de detenidos se debió improvisar lugares de detención.

“Por lo mismo, en ellos reinaba el hacinamiento, se dormía generalmente a suelo raso y los servicios sanitarios, la

alimentación, y otros servicios de primera necesidad dejaban mucho que desear. En estos lugares los detenidos estaban sometidos a un régimen absoluto de incomunicación con el exterior, no existía regularidad de vida, y el nivel de incertidumbre que sufrían respecto a la suerte que correrían era absoluto. No se sabía cuándo serían trasladados a otros lugares, sometidos a proceso o dejados en libertad”⁹¹⁸.

Sin embargo, estas características se mantuvieron durante todo el período de la dictadura militar, es decir, la precariedad de los centros de detención y tortura fue una de las características principales, donde el hacinamiento y la falta de servicios de primera necesidad como agua limpia y útiles de aseo, así como la falta de comida y abrigo, junto a la ausencia de condiciones mínimas que permitieran la subsistencia de los detenidos, no existieron. Es más, los centros de detención tanto en su infraestructura como en los tratos, buscaron degradar la condición humana de las personas detenidas. Esto se comprueba a propósito de los testimonios de las víctimas. Como por ejemplo en el caso de Mario Eduardo Calderón Tapia, (DD), militante del MIR, y que según datos entregados a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue detenido por agentes de civil el 25 de septiembre de 1974. “Hay testigos que dan cuenta de la permanencia del detenido en los recintos de la DINA de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, lugar desde dónde desapareció a mediados de noviembre del mismo año”⁹¹⁹. En consecuencia, el testimonio de otros detenidos que compartieron la celda, son fundamentales para saber qué sucedió con la vida de esta persona mientras estuvo detenida. Un testigo en el caso Calderón Tapia, señaló su experiencia de reclusión indicando que:

“Fue trasladado a Villa Grimaldi, en cuyo lugar lo vendan y lo sientan junto a un grupo de personas en una pieza de madera de 5x3 mts². En ese lugar se torturaba de día en el primer piso y de

⁹¹⁸ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 1, op. cit., p. 111.

⁹¹⁹ *Ibíd.*, tomo 2, p. 516.

noche, en el sótano donde había una parrilla eléctrica. Fue torturado con descargas eléctricas y golpes de bastón (...)”⁹²⁰.

Por otra parte, en la segunda fase de la dictadura militar, que la Comisión Rettig denominó “de consolidación”, donde identificó los principales centros de detención de acuerdo a los respectivos organismos de inteligencia del régimen, es decir, DINA, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Comando Conjunto, Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Servicio de Inteligencia Regional (SIRE). En total para esta fase, el Informe identificó veinticuatro centros de detención y cinco campos de concentración. Además con en la fase anterior, la Comisión explicita que de forma genérica se utilizaron diferentes tipos de recintos, adscritos a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, así como cárceles, cuarteles, comisarías, casas particulares, entre otros. Para la tercera fase, la Comisión identificó los centros de detención y tortura siguiendo el mismo esquema, es decir, aquellos que estuvieron bajo la responsabilidad de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA), y la Dirección de Comunicación de Carabineros (DICOMCAR), los que en su mayoría estuvieron centrados en la región Metropolitana.

En consecuencia, el Informe Nacional de Verdad y Reconciliación, otorgó una primera radiografía a la sociedad chilena y la comunidad internacional, sobre lo que había sucedido en Chile durante los diecisiete años de dictadura, centrando sus objetivos en los detenidos que habían tenido como resultado la muerte y la desaparición. Es por esta razón que como fuente histórica, el Informe Rettig nos permite ver la pulsión del país, es un momento histórico tan importante para la transición chilena, esto es, la publicación de un Informe Nacional denominado «de Verdad y Reconciliación», en un clima político tan delicado como el que experimentaba Chile a comienzos a los años noventa, en que la injerencia de los militares todavía era muy importante, con la

⁹²⁰ Ficha testigo, foja nº 25,921, en caso Mario Eduardo Calderón Tapia. Parte de su expediente está disponible en, <http://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/119/021calderon_mario.pdf>.[Consultado en enero de 2012].

figura del ex dictador activa políticamente, y con el descubrimiento de «fosas clandestinas», meses antes de la presentación de los resultados del Informe, como fue el caso del hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, en junio de 1990, noticia que estremeció a todo el país. Estaba ubicada cerca de la Cárcel de Pisagua, que desde septiembre de 1973 fue utilizada como Centro de Prisioneros. En la fosa clandestina se hallaron los cuerpos de 19 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos con claros signos de haber sido fusilados. “Los cuerpos estaban cubiertos por dos bolsas de arpillera amarradas, a la altura de las caderas, por gruesos alambres. Tenían los ojos vendados, sus ropas estaban intactas y orificios de bala atravesaban sus pechos”⁹²¹.

Si bien el objetivo de la CNVR fue saber qué había sucedido con las personas que luego de su detención habían muerto, o bien se encontraban desaparecidas, o habían sido ejecutadas sin un juicio previo, es importante destacar que para realizar esta gran tarea, la Comisión Rettig realizó un enorme trabajo de investigación, en el que visibilizó las formas en que habían sido violados los derechos de cientos de personas, los métodos de tortura y desaparición, así como la forma en que se habían dispuesto los cadáveres de las víctimas, y los lugares en que se ejecutaron estas acciones, junto con el reconocimiento público del profundo dolor de los familiares. Es decir, para conocer a fondo lo que había ocurrido este tipo de víctimas (que se encontraban muertas o desaparecidas), la CNVR requirió del testimonio tanto de familiares y amigos, como de aquellos que habían compartido la celda y lograron sobrevivir a la prisión política y la tortura. Este es el gran valor del Informe Rettig como fuente histórica, esto es, que permite realizar una primera radiografía sobre la violencia política cometida por Estado de Chile durante la dictadura militar. Tarea que prosiguió la Comisión Valech, ya que reconoció de forma oficial aquellas víctimas que lograron sobrevivir a estos padecimientos, concretamente como hemos visto, a la prisión política y la tortura. En

⁹²¹ Hallazgos fosa clandestina en Pisagua, Registro de Cámara del hallazgo de osamentas en Pisagua. Donación de Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). Disponible en, < <http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/>>. [Consultado en septiembre de 2011]. Véase Soto Carmona, A., (et. Al.), “Transición a la Democracia en Chile y Derechos Humanos: Una revisión del Informe Rettig”, en *Historia del Presente* n° 12, Bautista, J., Mateos, A., (ed.), Madrid, Eneida, 2008, pp. 77-85.

consecuencia, ambas comisiones, visibilizaron las víctimas, la primera, dando cuenta de la muerte y desaparición forzada producto de la violencia política, y la segunda, aquellas que sobrevivieron a la prisión política y tortura. Ambas otorgaron el status de víctimas, tanto a quienes habían perecido como a los sobrevivientes y sus familiares. Al publicarse los dos informes, los presidentes en aquel momento, Patricio Aylwin Azócar y Ricardo Lagos Escobar pidieron perdón en nombre del Estado de Chile a las víctimas y sus familiares, reconociendo públicamente el enorme daño causado.

En efecto, los informes que se elaboraron durante los gobiernos de la concertación adquirieron gran relevancia, ya que se inscribieron en las disputas por contrarrestar los olvidos, negaciones y silencios, respecto a la represión política experimentada durante los años de la dictadura militar (1973-1990). En este caso, y como hemos enunciado en páginas anteriores, accedemos al estudio de la represión en Chile, a través de los informes que se elaboraron durante los gobiernos democráticos, específicamente el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1991), y el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), fuentes fundamentales de nuestra investigación. Es a través del contenido de estos Informes, que accedemos al conocimiento de las huellas dejadas por la dictadura militar en Chile. Y es gracias a los relatos y testimonio de las víctimas, familiares y amigos, así como de las evidencias de las actuaciones de las instituciones civiles y militares, que se ingresa al complejo y difícil pasado reciente de este país.

V.- Centros secretos de detención, tortura y muerte en Santiago

Como manifestamos anteriormente, nos ha interesado investigar los principales recintos clandestinos de detención localizados en Santiago, adscritos a la Dirección de Inteligencia Militar DINA. Ello porque tanto el Informe Rettig como Valech, indicaron que durante los años en que esta organización estuvo en funcionamiento (1974-1977), existió un “circuito” de lugares en el que transitaban las víctimas que eran detenidas. Estos fueron, la casa de calle Londres nº 38, Villa Grimaldi, la casa José Domingo Cañas nº 1367, y la Venda Sexy. Sin duda, esta es una pequeña muestra de la magnitud que alcanzó la violencia política ejercida durante los años de la dictadura militar en Chile, sin embargo, este desafío ha tenido entre otros objetivos, acercarnos históricamente a nombrar aquello que cotidianamente es innombrable, y más aun, hacer el esfuerzo desde nuestra disciplina y oficio, de abordar estos temas a través de una metodología que permita la comprensión histórica del proceso.

Cuando nos aproximamos a la violencia política en su conjunto, son muchos los temas que encontramos, y que alcanzan mayor visibilidad sobre todo en las transiciones a la democracia, ya que en la mayoría de los casos, son herencias que las jóvenes democracias deben abordar. En este contexto es que nos ha interesado examinar cómo durante la transición chilena se abordó esta memoria histórica, ya que como en el resto de la región latinoamericana, ha debido afrontar un pasado que tiene la impronta de la violencia ejercida por el Estado. Reto aun mayor, cuando se analiza cómo es nombrado ese pasado en el que se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, planteando nuevos desafíos metodológicos. Habitualmente estos temas han sido abordados con mayor profusión desde las ciencias sociales, fundamentalmente el derecho, la ciencia política, la sociología y la psicología. Haciéndose cargo más tardíamente la historia, generándose importantes debates y reflexiones sobre todo desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, ya que se interroga cómo afrontar esos pasados traumáticos de los que somos coetáneos, cuestiones sobre las que ya hemos reflexionado en capítulos anteriores de esta investigación. A través del estudio

de cuatro recintos secretos de detención que mantuvo la DINA en Santiago, nos aproximamos a aquello que tiene tintes de innombrable, ya que se enmarca en todo aquello que lesionó profundamente la integridad de cientos de personas. “(...) un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años”⁹²², reflexionaba Patricio Aylwin, reflexión que realizó cuando presentó al país el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 04 de marzo de 1991. Una década más tarde, Ricardo Lagos Escobar se interrogaba sobre “¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen?”⁹²³, al dar a conocer los resultados del Informe Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el 28 de noviembre de 2004.

Hemos escogido la segunda fase de la dictadura militar identificadas por la Comisión Rettig y Valech, que se caracterizó por la acción de la DINA que se sitúa entre el 14 de junio de 1974 y el 12 de agosto de 1977. En este período se realizó una acción sistemática para exterminar a quienes este organismo atribuyó una peligrosidad política, y donde según los datos entregados por el Informe Rettig, se produjo el mayor número de desapariciones de personas. Asimismo, el Informe Valech, identificó los recintos secretos de detención que funcionaron durante este período, y en los que se perpetraron la tortura sistemática, señalando a los agentes que la habían perpetrado, así como los métodos empleados. Por consiguiente, ambas Comisiones coincidieron en señalar que durante la dictadura militar, la muerte, la prisión política y la tortura fueron una práctica habitual del Estado de Chile. El Informe Rettig planteó que “las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet han sido, lejos, las más graves y sistemáticas de la historia patria.”⁹²⁴ Y el Informe Valech profundizó esa reflexión indicando que:

⁹²² *Discurso de Patricio Aylwin Azócar*, al dar a conocer el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, *La Nación*, Santiago, 4 de marzo de 1991.

⁹²³ Lagos Escobar, R., “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, Prólogo del *Informe Nacional sobre Prisión Política de Chile*, Santiago, 28 de noviembre de 2004. Disponible en, <<http://www.comisionvalech.gov.cl/informeValech/prologo.pdf>>.[Consultado en octubre de 2011].

⁹²⁴ Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 6.

“La prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas”⁹²⁵.

Los Informes elaborados por las Comisiones Rettig y Valech, son fuentes fundamentales que examinan la memoria traumática de Chile. A través del análisis de los recintos de detención y tortura que existieron en todo el país, es posible identificar pautas, formas y arquitecturas de funcionamiento que permiten reconocer particularidades, sobre todo en lo relacionado con los métodos de represión y tortura, elementos centrales que tuvo la violencia política en los años de la dictadura militar, describiendo la geografía del horror. Características que son fundamentales cuando se observa con mayor detalle aquellos recintos denominados «secretos o clandestinos», ya que como funcionaron al margen de toda legalidad, pudieron perpetrar con mayor impunidad mayores vejámenes a los prisioneros. Los Informes elaborados por las comisiones de verdad, señalaron que fue posible identificar mecanismos comunes en la implementación de la represión política, cuestión que permitió identificar a los organismos represores, como fue en el caso de los cuatro recintos clandestinos que investigamos y que estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia Militar DINA.

5.1.- Aproximaciones a la práctica de la Tortura

La definición clásica nos indica que proviene del latín, *tortura*, que significa “grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo”⁹²⁶. Sin duda, este es un tema muy amplio y con profundas implicancias (jurídicas, políticas y sociales, entre otras), para nuestro objetivo la abordamos

⁹²⁵ Ibíd., p.9.

⁹²⁶ Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Madrid, 22º ed., 2001, p. 915.

de forma tangencial, asumiendo que es un tema que escapa a los objetivos iniciales de esta investigación, pero que sin embargo, es muy cercano, puesto que indagamos sobre los centros de detención y tortura. En el capítulo anterior analizamos la forma en que la Comisión Valech, debido al mandato de su creación, abordó este término, conceptualizándolo sobre todo desde el ámbito del derecho y de la jurisprudencia internacional. En este apartado nos interesa tratar el tema de la tortura, debido a que constituyó una práctica habitual dentro de la dictadura militar. Si bien la Comisión Valech, realizó una descripción detallada de los métodos, nos interesa contrastarla con los casos investigados reflexionando sobre el cuerpo, el dolor y el duelo de forma enunciativa, puesto esto es materia para nuestra futura investigación. En un Informe de trabajo encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile 1976, realizó una caracterización de las diferentes formas de tortura, indicó que en lo que respecta a la tortura física se pueden distinguir –en términos generales– dos modalidades:

“La que cabe calificar de “salvaje”, porque en ella no se hace discriminación según los sujetos a los que se aplica (es decir, según su edad, sexo, estado de salud, o tipo de acusación). Esta tortura se aplica masivamente y deja huellas visibles. La “selectivo-progresiva”, por cuanto está planificada con arreglo a la evaluación global del sujeto. En general no deja huellas visibles”⁹²⁷.

En lo que respecta a la tortura psicológica, también es posible identificar dos formas, por un lado, la forma tradicional de tortura psicológica que consiste en una combinación de “técnicas que emplean los regímenes represivos, tales como los simulacros de fusilamiento, la incomunicación (absoluta o parcial), administración de pentotal, amenazas y humillación”⁹²⁸. De otro, es aquella

⁹²⁷ “La tortura en Técnicas y Métodos”, Santiago, 1976, E/CN.4/1221, Anexo XVI p. 8. Caja “Tortura” nº 2, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago.

⁹²⁸ *Ibíd.*

específica y refinada, que consiste en la incorporación progresiva de técnicas que provienen de:

“La psicología que los verdugos aplican, evalúan y perfeccionan por medio de una experimentación dirigida, empleando privación del sensorial, las alteraciones del ritmo del sueño, el condicionamiento, la hipnosis, las drogas, técnicas provenientes del psicoanálisis o de la psicoterapia, el uso de rehenes”⁹²⁹.

Sin embargo, muy común fue la tortura mixta, en que tanto la tortura física y psíquica se aplican al mismo tiempo. En definitiva, lo que provoca la tortura es el dolor, es decir, la “sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior”⁹³⁰, ocasionando generalmente, sentimientos de pena y congoja. Emociones que se materializan en los cuerpos, a través de lágrimas, sangre, sudor, desgarró, espasmos, quebrantos. La víctima es desprovista de su identidad, es humillada debido a las aflicciones provocadas.

“La forma en la que los hombres han sido sometidos a ejecución y tortura constituye un museo del horror que ha comenzado a develarse a través de estudios relacionados con la historia de las prácticas punitivas. El arte de castigar forma parte de la historia macabra del dolor provocado y de una economía del sufrimiento tratada de manera muy diversa según diferentes tendencias”⁹³¹.

Existen interesantes investigaciones dedicadas a tratar en profundidad el tema de la tortura desde diferentes disciplinas, tal vez las de mayor conocimiento sean las que provienen desde el área de la psicología, cuyo objeto de estudio son las víctimas. Existen otros estudios que la analizan en

⁹²⁹ Ibíd., pp. 8-9.

⁹³⁰ Real Academia de la Lengua Española, op. cit.

⁹³¹ Moscoso, J., *Historia Cultural del dolor*, Madrid, Taurus, 2011, p. 43. Véase Foucault, M., “*Vigilar y Castigar*”: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, Xª ed.), 2005. (*Surveiller et Punir: Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975).

perspectiva histórica, situándola en un contexto regional. En una laboriosa investigación, la periodista Naomi Klein, señaló que en el período de la Guerra Fría, la influencia de la CIA en la instalación de dictaduras militares en América Latina, abarcó diferentes ámbitos, entre ellas, la implementación de mecanismos que permitieran ejercer la represión en la población. La autora señala que en 1988 el New York Times publicó un valiente reportaje sobre la implicación de Estados Unidos en la implementación de técnicas de tortura en de diferentes países. En 1997, luego de una intensa investigación del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., “la CIA hizo público un manual titulado *Kurbark Counterintelligence Information*”⁹³².

Conocido como *Kurbark*, se trata de un manual de 1963, que no superaba las 128 páginas, y en el que se describían las “técnicas de «interrogación de fuentes no colaboradoras». Los métodos iban desde la consabida privación sensorial hasta posiciones de estrés, capuchas y técnicas para infligir dolor”⁹³³. Según Klein, “El manual afirma que si las técnicas se utilizan debidamente, «destruirán la capacidad de resistencia» de una fuente no colaboradora. Lo que proponía esta manual de tortura, era “diseñar un sistema basado en premisas científicas para extraer información a las «fuentes no colaboradoras». En otras palabras, tortura”⁹³⁴. Nos ha parecido interesante citar esta investigación, puesto que los métodos de tortura utilizados por la CIA, son muy similares a los que hemos leído en los testimonios de las víctimas y que han sido señalado por los informes de verdad en Chile. Nuestro interés no es forzar las relaciones, sino más bien, invitar a la reflexión de métodos comunes de represión implementados durante la Guerra Fría, y aun cuando se tenía el recuerdo imposible de Auschwitz, la persistencia por provocar dolor, continuaba. Klein señala que en aquellos lugares donde el método *Kurbark* fue

⁹³² Klein, N., *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*, Madrid, Paidós, 2007, p. 66. La referencia del manual es: *Central Intelligence Agency, Kurbark Counterintelligence Interrogation*, julio 1963. Disponible en, < www.gwu.edu/~nsarchiv>.[Consultado en enero 2012]. Asimismo, en 1983 la CIA publicó otro manual de similares características titulado *Manual de entrenamiento para la explotación de los recursos humanos*, y que también se puede consultar en la web. Se pueden consultar un trabajo fundacional en el tema de los centros de reclusión véase Benthan, J., *El panóptico*, Madrid, Imprenta de D. Fermin Villalpando, 1822. Foucault, M., *Genealogía del poder*, Madrid, Ediciones la Piqueta, 1979.

⁹³³ Klein, N., *La doctrina del Shock*, op. cit., p. 67.

⁹³⁴ *Ibíd.*

enseñado surgen los mismos modelos de comportamiento, diseñados para inducir, profundizar y mantener el estado de shock en el prisionero:

“A los prisioneros se los captura de la forma más desorientadora y confusa posible, a última hora de la noche o en veloces operaciones al amanecer, tal y como indica el manual. Inmediatamente se les pone una capucha o les ponen un trapo encima de los ojos. Les desnudan y reciben una paliza. Luego son sometidos a algún tipo de privación sensorial. Y desde Guatemala a Honduras, de Vietnam a Irán, desde las Filipinas a Chile, el empleo de las descargas eléctricas es omnipresente”⁹³⁵.

Pues bien, todo acto de violencia recae en el cuerpo, son los cuerpos sufrientes de las víctimas los que dejan la huella del sufrimiento causado, son los relatos de los testigos quiénes estuvieron con la víctima, es la fuerza que contiene este tipo de testimonio. En este aspecto es importante destacar que si algo diferencia al testimonio de otras formas de representar su paso por los recintos de detención, es:

“En primer lugar, el hecho de que la palabra testimonial postula una cierta correspondencia entre lo narrado y una experiencia *efectivamente vivida*. Y es más, esa experiencia es efectivamente vivida por el individuo con cuyo nombre se firma el testimonio: se trata de la experiencia individual –aunque se pueda narrar hechos que afecten a las colectividades, la experiencia sobre la que se funda su autoridad como testigo es personal- de un sujeto que mediante el gesto de sellar el testimonio con su firma trata de suturar los desgarros y las lagunas figurativas que implica la enunciación testimonial”⁹³⁶.

⁹³⁵ Ibíd., p.69.

⁹³⁶ Peris Blanes, J., *La imposible voz. Memoria y presentación de los campos de concentración en Chile: la posición del testigo*, Santiago, Cuarto Propio, 2005, p. 71.

Podemos señalar que nuestro interés no es la descripción en sí misma de los recintos de detención, sino más bien, indagar cómo las víctimas vivieron la experiencia de la reclusión y los padecimientos sufridos, a través de las evidencias que entregaron los propios informes, así como también de otras fuentes encontradas en el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, y algunas publicaciones vinculadas a organismos de derechos humanos. En ellos encontramos testimonios, de sobrevivientes, o bien de testigos que vieron o compartieron la celda, con aquellos que perdieron la vida o bien, que se encuentran desaparecidos. Los testimonios tanto de las propias víctimas, como de sus familiares y amigos, son fuentes fundamentales que nos permiten acceder a aquello que es difícil de nombrar, puesto que contiene múltiples elementos que hacen muy compleja la comprensión del proceso histórico desde sólo un tipo de análisis, puesto que “la representación del horror y el trauma no es lineal y sencilla”⁹³⁷. Este es un importante desafío para nuestra disciplina, y en ello esta investigación pretende contribuir. Tal vez por ello, es que nos acerquemos a la idea de representación⁹³⁸, de aquella ausencia asociada a la identificación y significación de ese algo anterior y exterior, y que en el caso de las víctimas, se puede plantear como un antes y un después de la detención y la tortura. Como lo plantea Elizabeth Jelin, “¿Cómo representar entonces los huecos, lo indecible, lo que ya no está?, ¿Cómo representar a los desaparecidos?”⁹³⁹.

Si bien este es otro tema, muy complejo también y delicado, por diferentes razones. Una de ellas, es por la ausencia de la víctima. “El detenido-desaparecido es un individuo dividido; es un cuerpo separado de nombre; es una conciencia escindida de su soporte físico; es un nombre aislado de su historia; es una identidad desprovista de su identidad cívica, de sus cartas de

⁹³⁷ Jelin, E., Langland, V. (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, op. cit., p. 2.

⁹³⁸ Véase Chartier R., *El mundo como representación: Historia cultural. Entre práctica y representación*, op. cit., p. 45-62. Ricoeur, P., *La memoria, la historia y el olvido*, op. cit.

⁹³⁹ Jelin, E., Langland, V. (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, op. cit., p. 52.

ciudadanía”⁹⁴⁰. Estas son algunas de las problemáticas que se observan cuando indagamos en los horrores ocurridos en Chile durante la dictadura militar. Las interrogantes y dudas y reflexiones circulan intentando articular una visión general sobre cómo se diseñó en términos legales y prácticos la violencia política de Estado en Chile.

Al analizar cómo se materializaron aquellas prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos, dónde ocurrieron y cuáles fueron los elementos comunes, es difícil dejar de lado la referencia a la muerte, la detención y la tortura ámbitos que comporta la violencia política⁹⁴¹. Y que al igual que otros tipos de violencia, opera en varios niveles; físico, psíquico y simbólico, la que a su vez se materializa a través de una compleja red de coordenadas que son las que a gran escala conforman los mecanismos y prácticas en con las que finalmente se lleva a cabo la violencia de Estado. Y que en el caso de nuestra investigación, se observan claramente cuando analizamos la historia del tiempo presente de Chile, donde la dictadura militar es un tema más, pero que debido a la impronta de la violación de los derechos humanos que provocó adquiere interés y a su vez requiere ser historizado considerando enfoques multidisciplinarios, que permitan incorporar nuevas metodologías.

La Comisión Valech, señaló que el objetivo de torturar de manera sistemática tenía buscaba no sólo obtener información, sino que además “gobernar por el miedo, inculcando el temor profundo y duraderamente en las víctimas inmediatas y, a través de ellas, en todos quienes tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura”⁹⁴². Lo que pretende la tortura es anular a la víctima, devastándola a través del sufrimiento infringido. “La victoria no es total hasta que la víctima reconoce en su verdugo lo que él espera de ella: su superioridad. Se busca el aniquilamiento físico, el abandono

⁹⁴⁰ Gatti, E., *El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad*, Montevideo, Trilce, 2008, p. 47.

⁹⁴¹ Véase Aróstegui, J., “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, en *Ayer* n° 13, Madrid, Marcial Pons, 1994, pp. 17 -55.

⁹⁴² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 225.

total de la voluntad, de la libertad, de la personalidad, no un aniquilamiento físico”⁹⁴³. En los testimonios revisados, muchas víctimas coinciden en señalar que ante la súplica a los agentes de la DINA, para que los mataran rápidamente, éstos propinaban golpes, negándose, señalándoles que estaban en ese lugar para que “hablaran”. Un sobreviviente de la casa de Londres n° 38, luego de una sesión de tortura, con la vista vendada y amarradas sus manos señaló:

“En un momento sentí pasos que nuevamente venían hacia mí. El golpe en el hombro y la orden seca: ¡párate! Me sacaron de la sala y en el pasillo me esperaba el primer interrogador (...). Me dijo que ellos ya sabían que yo había mentido todo el tiempo, y que por tanto, tenían orden de eliminarme. Entonces sentí que sacaba un arma, que pasaba bala, el metal frío del cañón en mi sien izquierda y el sonido seco del percutor de la pistola. No tenía balas”⁹⁴⁴.

En consecuencia, la tortura no busca la muerte de la víctima, sino su sufrimiento, anulando su personalidad y disminuyendo su capacidad física. “La tortura institucionalizada significa destrozo y humillación hasta extremos insospechados, penetra en los recovecos humanos para doblegar las voluntades y derrotar actitudes, ejemplariza el castigo para disuadir disidencias y exhibe el terror para sumar adhesiones”⁹⁴⁵. Para efectos de una mejor comprensión de lo comprenden las prácticas de tortura que se utilizaron durante la dictadura militar, la Comisión Valech describió algunos de los métodos de tortura que fueron identificados a través del testimonio de las víctimas, los que señaló como representativos, aun cuando subrayó que no

⁹⁴³ Branche, R., *La Torture et l' Armée pendant la guerre d' Algérie, 1954-1962*, Paris, Gallimard, 2001, p. 325. Citado por Audoin-Rouzeau, S., “Matanzas. El cuerpo y la guerra”, en Courtine, J.J., *Historia del Cuerpo. El siglo XX*, Tomo III, Madrid, Taurus, 2006, p. 302.

⁹⁴⁴ “Hace 31 años”, en Kunstman Torres, W., Torres Ávila V. (recop.), *Cien voces Rompen el Silencio. Testimonios de expresas y presos políticos de la dictadura militar en Chile (1973-1990)*, Santiago, Dibam, 2008, p. 158.

⁹⁴⁵ Risques i Cobella, M., “La tortura y la brigada político social. Barcelona 1947”, en *Historia Social n° 44*, Valencia, 2002, pp.87-104.

fueron los únicos, que no se aplicaron todos de forma separa, y que tuvieron diferentes intensidades en cuanto a las formas en que se provocaron.

a) Palizas reiteradas:

La Comisión indicó que ésta fue una de las prácticas de tortura más utilizadas durante toda la dictadura militar, debido a que se empleaban golpes reiterados desde los primeros momentos de la detención, identificándose como la primera forma de agresión que se aplicó a las víctimas. Este tipo de golpes denominados “uso excesivo de la fuerza”, es una forma de tortura, debido a que su objetivo es provocar sufrimiento en las víctimas, por ello, se podían provocar antes, durante o después de los interrogatorios.

“En la Villa Grimaldi le sacaron el scotch y le pusieron venda de tela. Luego comenzaron a golpearlo, a patearlo y a insultarlo. Afirmaban, preguntándole a la vez si tenía armas, si sabía de algún escondite, reiterando que debía saberlo y al mismo tiempo lo golpeaban con los puños”⁹⁴⁶.

Las repetidas golpizas se aplicaron en todo el cuerpo o en zonas específicas, y generalmente correspondió a las más sensibles. “Muchas de las personas golpeadas fueron previamente desnudadas y privadas del sentido de la vista mediante una venda en los ojos o la colocación de una capucha, que les impedía advertir los golpes y les generaba una mayor sensación de indefensión”⁹⁴⁷. Las consecuencias de estas violencias, como ya lo había manifestado en 1976, el estudio sobre los efectos de la prisión y la tortura en Chile, ocasionaba diferentes consecuencias en las víctimas, tanto físicas como psíquicas. La Comisión hizo referencia a las primeras indicando que: “La pérdida total y parcial de la visión, pérdida total o parcial de la audición, pérdida de piezas dentales, problemas renales, esterilidad y distintas lesiones en la

⁹⁴⁶ Testimonio de detención en Villa Grimaldi, en Caja nº 2 “Torturas”, Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Mayo 1975, foja nº 934.

⁹⁴⁷ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 226.

columna, y también hubieron personas muertas a causa de los golpes”⁹⁴⁸. El testimonio de un hombre detenido en noviembre de 1975, señala su reclusión en Villa Grimaldi, donde señala de forma expresa, los tipos de golpes y la forma de intimidación que se generaba:

“El día 19 de noviembre de 1975, a las 2:00 a.m. aproximadamente, ingresan a nuestro domicilio, rompiendo la puerta, unos 12 a 15 civiles (...). Inmediatamente proceden a amarrar a mis hijos con un alambre en las muñecas y los obligan a permanecer de boca en el piso en el pasaje. A mí me golpean con los puños al intentar averiguar lo que estaba sucediendo. Revisan toda la casa, causando enormes destrozos en muebles, colchones, etc. A mí también me atan las manos con alambre; todos vendados, somos subidos a diferentes vehículos particulares. Yo quedé en el mismo vehículo con mi hijo. Según relato posterior de mis vecinos, había gran cantidad de vehículos estacionados en un gran operativo. Fuimos trasladados a lo que resultó ser Villa Grimaldi. Allí permanecí alrededor de tres horas, en un lugar que parecía ser una especie de patio habilitado como galpón. Se escuchaban voces y gritos, como que hubiera un gran número de personas. Me interrogaban siempre y me golpeaban fuertemente con los puños y manos, especialmente en la cara; a veces caía al suelo y me costaba incorporarme, ya que aún estaba amarrado”⁹⁴⁹.

b) Lesiones corporales deliberadas

De acuerdo a las evidencias que se entregaron a la Comisión, los daños corporales fueron realizados de forma intencionada, en los que se utilizaron diferentes métodos de tortura, los que produjeron en las víctimas menoscabo físico. En este contexto, la Comisión definió la lesión como:

⁹⁴⁸ Ibid., p. 228.

⁹⁴⁹ Ibid.

“El daño o detrimento corporal causado a una persona por una herida (corte o desgarro) o por un golpe. Si esta lesión es provocada intencionalmente por otro y cuando este otro un agente del Estado, o un particular con el consentimiento de aquel, quien realiza esta acción con la específica intención de provocar una lesión, esta acción es constitutiva de tortura”⁹⁵⁰.

Con el apelativo de “lesiones corporales”, la CNPPYT recopiló las acciones que tuvieron como propósito específico producir un daño específico en el cuerpo de la víctimas, cuando éstas se encontraban indefensos, con el rostro cubierto y maniatados, muchas veces desnudos y desprovisto de cualquier posibilidad de de defensa. La Comisión subraya que no son lesiones “colaterales” sino todo lo contrario, son lesiones y daños de primer grado, esenciales dentro de la acción que constituye la práctica de la tortura. En lo que respecta a daños en zonas específicas del cuerpo de las víctimas, se pueden señalar:

“Las extracciones de partes menores del cuerpo -como uñas de pies y manos, piezas dentales, pelo, cejas, etc.,- resultan ilustrativas de este método de tortura. Valgan como ejemplo las heridas producidas por contacto con el fuego, un objeto caliente o una sustancia cáustica o corrosiva que descompone el tejido orgánico. En efecto, las quemaduras fueron la modalidad de lesión corporal deliberada más común durante el régimen militar. Se provocaron quemaduras en diversas partes del cuerpo de la persona detenida, inclusive en las partes más sensibles, como genitales masculinos y femeninos. Las quemaduras con cigarrillos fueron las más habituales. Pero también constan casos de quemaduras con fierros calientes u otros objetos que provocaron serios daños a quienes fueron las víctimas”⁹⁵¹.

⁹⁵⁰ Ibíd., p. 229.

⁹⁵¹ Ibíd.

c) Colgamientos

Esta práctica de tortura fue aplicada durante todo el período de la dictadura militar, sobre todo por los organismos de seguridad especializados en la represión política. Este método consiste en mantener inmovilizada a la persona colgándola mediante posiciones forzadas. Estos colgamientos generaban en las víctimas tensión en las articulaciones hasta su dislocación, ocasionando fuertes dolores. “Permanecer colgado, en especial por períodos prolongados, genera, además, sensaciones de indefensión, abandono y humillación, derivadas del trato atentatorio contra la dignidad humana”. Existieron diferentes formas de colgamientos aplicados⁹⁵², cuyos nombres se conocieron entre las víctimas como: “La paloma, *Pau de Arará* (palo volador), y caballito”. Este último no aparece señalado en la descripción que realiza la Comisión, sin embargo encontramos descripciones de esta método de tortura en varios de los testimonios revisados en el Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad:

“El caballito. Método que consiste en un banquillo con cuatro patas o caballete. De espaldas y colgando, el sujeto de pies y manos, amarrado muchas veces con alambre o cordón de nylon, quede el interrogado por algún tiempo. Es tal el dolor que produce esta posición que es difícil soportar un par de horas sin sentir que el cuerpo se adormezca, que los brazos y piernas se empiezan a hinchar.

Este corresponde a una forma de “ablandamiento” que se estila mientras el detenido espera ser interrogado (por primera o enésima vez)”⁹⁵³.

⁹⁵² Ver anexo nº 10, descripción de los diferentes métodos de tortura que fueron aplicados durante la dictadura militar.

⁹⁵³ Testimonio sobre “la Silla” y “Tejas Verdes”, documento nº 0074, en Caja nº 2 “Torturas”, Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Mayo 1975, p. 3.

Respecto al tiempo de aplicación de estos tormentos, variaba desde minutos a días, dependiendo de los agentes a cargo. Asimismo, fue habitual que la víctima que permanecía colgada, además recibiera, todo tipo de insultos, amenazas y golpes. Generalmente estaban desnudos. Se les aplicó electricidad, o bien se les sometió a algún tipo de agresión sexual⁹⁵⁴. Este fue el caso de una mujer detenida en enero de 1974 por agentes de la DINA. Fue llevada a Londres nº 38. En este lugar la obligaron a desnudarse, la maniataron, golpearon, y le aplicaron electricidad mientras permanecía suspendida en el aire:

“Me trasladaron a otra pieza [habitación] en donde me hicieron desnudarme completamente. Luego me amarraron las muñecas con los tobillos quedando totalmente encogida. Enseguida colocaron una barra entre mis muñecas y los tobillos quedando suspendida de un mueble. En esta posición me golpearon los oídos y me aplicaron electricidad en las sienes, en los ojos, en la vagina, en el recto y en los pechos. Me interrogaban por nombres de personas, [...] Les dije que no conocía a nadie, entonces me volvieron a golpear y aplicar corriente. En la boca me colocaron un paño, el que me lo sacaban a ratos para que hablara”⁹⁵⁵.

Este tipo de tortura fue descrito por un sobreviviente que fue detenido enero de 1975 y conducido a Villa Grimaldi: “En una oportunidad me colgaron desnudo, amarrado con los brazos a la espalda y me aplicaron corriente en las partes más sensibles, especialmente genitales [...] hasta la pérdida del aliento”⁹⁵⁶. En ambos relatos lo que observamos es el tratamiento que adquiere el cuerpo, simplificado a la categoría de “cosa”, y la víctima humillada y deshumanizada. Ello porque la tortura busca destruir en la persona que está siendo torturada, su capacidad de actor social y político.

⁹⁵⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 230.

⁹⁵⁵ *Ibíd.*, p. 231.

⁹⁵⁶ *Ibíd.*

d) Posiciones forzadas

En general las personas fueron sometidas a este tipo de tortura luego de que eran detenidas. Se utilizaron como preámbulo de traslados a otros recintos de detención, y de los interrogatorios. Como en todos los métodos de tortura que describió la Comisión Valech, los responsables fueron los organismos de seguridad del régimen, prolongando la inmovilidad de la víctima incluso por semanas. Debido a esta característica, la casa de calle Londres 38, fue denominada por los detenidos que estuvieron allí recluidos como “la casa de la silla”, puesto que mientras estaban detenidos en este lugar, se les mantenía con la vista vendada, amarrados de pies y manos a una silla.

“Por posiciones forzadas se entiende la coacción para que el detenido mantenga una determinada posición durante un largo tiempo hasta lograr un agotamiento físico extremo. La posición puede no ser incómoda en sí misma, pero se hace intolerable y desesperante cuando se la debe mantener desde algunas horas hasta días enteros”⁹⁵⁷.

La forma de obligar la persona detenida a permanecer en estas posiciones, evidentemente fue a través de la violencia, es decir, de golpes que se aplicaban ante cualquier movimiento, por más pequeño que fuera, así como todo tipo de amenazas y humillaciones. Esto sumando a que los cuerpos de víctimas, podían permanecer desnudos, con la vista vendada, o con una capucha en la cabeza, y amordazados de pies y manos, con diferentes elementos, cuerdas y alambres entre otros. En cada uno de los recintos de detención estudiados en esta investigación, se advierte el uso de posiciones forzadas en los detenidos, donde lo que se exigía era la quietud del cuerpo mientras estaba siendo detenido, golpeado o vejado, cuestión que fisiológicamente es imposible. Es por ello que estas prácticas, vienen a argumentar una vez los propósitos de la tortura:

⁹⁵⁷ Ibíd., p. 232.

“La información entregada por el torturado se realiza para doblegar su resistencia o entereza física o moral; para confirmar la veracidad de su confesión, aterrorizar a otros e intimidar al resto de su entorno. Son por cierto, una manifestación de la crueldad o bajas pasiones de un agente de Estado o de un guardia”⁹⁵⁸.

e) Aplicación de electricidad

Como otros métodos de tortura, la aplicación de electricidad en el cuerpo de las víctimas, fue una práctica habitual que se empleó en todo el país. Se trata de la “aplicación de descargas eléctricas en la totalidad del cuerpo o bien en zonas específicas, según sean los instrumentos empleados al efecto”⁹⁵⁹. Provocando agudos dolores físicos e intenso sufrimiento psíquico, manteniéndose en el tiempo. Para efectuar este método, los organismos de seguridad del régimen, contaron con un espacio –una habitación-, que implementaron para estos fines, así como utensilios que permitieran aplicar este tipo de tortura.

“Las víctimas describen como un magneto del cual salían los cables que se adherían a los puntos más sensibles del cuerpo del detenido. En muchos casos, los instrumentos disponibles permitían graduar las descargas eléctricas, aumentando o disminuyendo el voltaje a voluntad de los torturadores. En cualquier caso, en recintos de detención menores y peor equipados, también se aplicó electricidad a los interrogados aunque en forma más rudimentaria”⁹⁶⁰.

⁹⁵⁸ Briceño Valencia, L., “Tortura y torturadores”, en *La dictadura militar. Un balance necesario. Encuentro XXI*, nº 11, año 4, Santiago, S/E, 1998, p. 28.

⁹⁵⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 233.

⁹⁶⁰ *Ibíd.*

Este espacio de tortura, como los otros que componen la arquitectura del horror en Chile, señalan la utilización de elementos que permitieran perpetrar estos padecimientos, existiendo casi una forma o método de cómo desarrollar cada una de las sesiones de tortura. En este caso, las víctimas señalaron que en el momento de aplicar la electricidad:

“(…) los interrogadores los sentaban en una silla, de preferencia metálica, o bien los tendían sobre una cama o un catre metálico. Se procedía a maniatarlos, inmovilizándolos. Previamente se solía desnudar a las personas; la vista vendada o la cabeza encapuchada agravaban la sensación de indefensión⁹⁶¹.

Un hombre detenido en mayo de 1975, y conducido a Villa Grimaldi, donde permaneció cuarenta y cinco días, señaló lo siguiente:

“Como no respondiera satisfactoriamente, a juicio de los torturadores, lo desnudaron y lo pusieron en la “parrilla”: un somier CIC metálico; ahí fue amarrado y amordazado, pusieron la radio a todo volumen y comenzaron a aplicarle electricidad en todo el cuerpo, preferentemente en los testículos, donde mantenían largo tiempo las placas transmisoras de corriente. Tenía que indicar bajando el dedo índice cuando iba a estar dispuesto a hablar: lo hacía a cada rato para que cesara la electricidad, pero como contestaba siempre que no sabía nada, volvían a aplicarle corriente eléctrica. Por dos días seguidos fue el mismo tratamiento y el interrogatorio no variaba nada”⁹⁶².

La Comisión señaló que con la DINA y luego la CNI, este tipo de tortura se volvió habitual, diversificándose a su vez los métodos y las herramientas utilizadas. Uno de ellos, fue el método que se conoció como “la parrilla”, y que consistía en que:

⁹⁶¹ Ibíd.

⁹⁶² Testimonio de detención en Villa Grimaldi, en Caja nº 2 “Torturas”, op. cit., foja nº 935.

“Al detenido se le vendaban los ojos o se le encapuchaba. Luego se le desnudaba, acostándole sobre un catre metálico, al cual se le amarraba de pies y manos. Listos los preparativos, se procedía a aplicar descargas eléctricas mediante la colocación de electrodos en diferentes partes del cuerpo, eligiendo de preferencia las zonas más sensibles: axilas, plantas de los pies, sienes, ojos, oídos, boca, encías, lengua, senos o tetillas, pene o vagina, testículos, ano, hasta en heridas abiertas. El dolor provocado en las zonas con electrodos se irradiaba hacia el resto del cuerpo”⁹⁶³.

Otra forma de tortura con electricidad fue la llamada “picana eléctrica”, y que consistía en un bastón con el que administraban descargas focalizadas en el cuerpo del detenido. Menos masiva, fue el uso de “la bañera con agua fría”, a la que se le aplicaba electricidad. Así lo relató un hombre detenido en abril de 1974, y llevado al recinto de Londres 38:

“(..) me hacen meterme en la tina llena de agua, no muy fría, tendido boca arriba siento unos tiritones fuertes en el cuerpo, siento un dolor fuerte en el cuerpo y parte del corazón, quedo sin conocimiento sólo por unos segundos, vuelvo a mi conocimiento, me repiten esto dos veces más, seguramente eran golpes de corriente. Luego me ponen boca abajo con un elemento, seguramente como un horcajo y algún mango, me lo colocaban en el cuello y me hundían la cabeza en el agua, cuando ya estaba muy desesperado y había tomado un poco de agua, me quitaban el elemento, repitiendo varias veces lo mismo; en ese tipo de tortura no me preguntaban nada, me sacan de la tina y me sientan en el wáter. Desnudo y manos esposadas me pregunta una voz si conozco a algunas personas y que dónde se encuentran”⁹⁶⁴.

⁹⁶³ Ibíd.

⁹⁶⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 236.

La Comisión destacó que producto de los riesgos que implicaba este método de tortura, en cualquiera de sus formas, los agentes de seguridad se asesoraron tanto por médicos como otros profesionales de la salud, con el fin de mantener con vida al detenido. “Estos colaboradores realizaban evaluaciones de la resistencia física de la víctima, antes o durante la tortura, para ir graduando la intensidad de las descargas”⁹⁶⁵. Esto se constata en diferentes testimonios que señalan la presencia de médicos que supervisan a las víctimas luego de las sesiones de tortura:

“El doctor de Villa Grimaldi, que suele ir en las noches les inyecta pentotal a los enfermos y a los detenidos o intenta el tratamiento hipnótico o narco-hipnótico. La situación que se presenta es invariable: los enfermos fingen dormirse, para probarlo, los torturadores les aplican electricidad en las muñecas y los enfermos o detenidos gritan, ante lo cual vuelven a ser torturados en la forma habitual”⁹⁶⁶.

f) Amenazas

La amenaza grave es considerada un método de tortura causante de agudo sufrimiento psicológico en el detenido. Se aplicó durante todo el período de la dictadura militar. Entendiéndose como:

“la intimidación mediante la advertencia respecto de los graves males o peligros que se ciernen sobre la persona afectada o sobre terceros relacionados con la misma, en caso de no satisfacer los deseos de sus captores. Reunidos ciertos requisitos, la amenaza constituye un delito en sí, sancionado por el Código Penal chileno”⁹⁶⁷.

⁹⁶⁵ Ibíd, p. 234.

⁹⁶⁶ Testimonio de detención en Villa Grimaldi, en Caja nº 2 “Torturas”, op. cit., foja nº 936.

⁹⁶⁷ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 236.

En este contexto, la Comisión consideró como tortura:

“las amenazas de muerte, de desaparición forzada y de aplicación de algún otro tipo de tortura (por lo general física) en la persona del detenido o en familiares cercanos. Se recurrió al amedrentamiento para mermar la fortaleza del interrogado, bien antes o durante el interrogatorio, llegando al extremo de detener al cónyuge y a los hijos, incluidos los menores de edad, para exhibirlos al detenido mientras se le advertía que serían torturados, muertos o desaparecidos”⁹⁶⁸.

Debido a que la DINA realizó seguimientos previos a las víctimas, muchas veces allanaron sus domicilios, así como de familiares y amigos, de donde extraían fotografías de ellos, así como elementos personales que se exhibían a los detenidos obligándolo a declarar. Una mujer que estuvo detenida en Villa Grimaldi en enero de 1975, relató lo siguiente:

“Escuché con horror cómo sabían cada uno de mis pasos, lo que los calificaba para tratarme de puta cuantas veces quisieron. Lloré bajo la venda de algodón, tuve mucho miedo; me decían a cada rato que había desaparecido sin dejar rastros y que no volvería a ver a mis dos hijos. Sabían sus nombres, los colegios donde iban, los horarios de entrada y salida. Yo no lo podía creer”⁹⁶⁹.

g) Simulacro de fusilamiento

Correspondió a una práctica sistemática y masiva que se utilizó durante el mismo 11 de septiembre de 1973, persistiendo durante todo el período represivo. La Comisión Valech, la define como “(...) el fingimiento o imitación de la ejecución de una persona mediante la descarga de fusiles de un pelotón

⁹⁶⁸ Ibid., p. 237.

⁹⁶⁹ Ibid.

comisionado para tal efecto”⁹⁷⁰. Incluyéndose para los objetivos de la Comisión Valech, aquellos actos de simulación con otro tipo de armas como metralletas, pistolas o revólveres. Estos simulacros inducen a la víctima a padecer el apremio de la muerte como un suceso verídico. Generalmente, estas prácticas representaban la escena de fusilamiento con la mayor realidad, ya que de esta forma se evitaba toda sospecha de parte de las víctimas de que se trataba otra forma de mantener bajo el miedo y el pánico a los detenidos.

“La víctima podía ser llevada desde su recinto de reclusión hasta un lugar apartado donde se le maniataba y vendaba o encapuchaba, para luego dar instrucciones al pelotón que en efecto disparaba. En algunos casos se utilizaron balas de salva, aunque en la mayoría de los casos, éstas eran reales. La diferencia consistía en que, en vez de apuntar al cuerpo, se disparaba al aire, a los costados o sobre cabeza de la víctima”⁹⁷¹.

Estas formas de aplicar la tortura, permitieron entre otros, mantener al resto de los detenidos en constante situación de vulnerabilidad. Primero por la situación misma de la detención y las condiciones en que se encontraban. Segundo, debido que de forma constante debían escuchar desde las celdas y habitaciones el ruido de los disparos. Lo que permitía mantener la impresión de que los detenidos efectivamente habían sido fusilados debido a que no retornaban a los recintos originales de detención. Tercero, esta situación llevaba a pensar a aquellos que se habían quedado en las celdas, que los próximos serían ellos.

h) Humillaciones y vejámenes

La gran cantidad de testimonios sobre esta forma de tortura, permite confirmar, como lo hizo la Comisión Valech, que correspondió a una práctica,

⁹⁷⁰ Ibíd.

⁹⁷¹ Ibíd., p. 238.

masiva y habitual, aplicada desde el momento mismo del golpe de Estado. Bajo la designación de «humillaciones y vejámenes» es posible identificar:

“Los tratos y las coacciones hacia el detenido cuya única finalidad es menoscabar su dignidad como ser humano, herir su honor, su honra y su orgullo personal. Están destinados a causar daño psíquico o mental grave. Prácticas como la ingestión forzada de desechos, no sólo provocaban un grave sufrimiento mental derivado del trato indigno de la condición de ser humano, sino que, ocasionalmente, también generaban daños físicos originados en las infecciones y enfermedades contraídas a causa de la materia ingerida”⁹⁷².

Algunos de los testimonios revisados indican que efectivamente una de las formas de humillar a los detenidos, era no permitirles realizar sus necesidades fisiológicas, manteniéndolos en condiciones higiénicas infrahumanas. El testimonio de un sobreviviente de Villa Grimaldi detalla el tipo de servicios higiénicos que existía para los prisioneros:

“El baño de los presos está al lado donde de una de las casetas, y es una taza que va a dar a un pozo séptico. Las condiciones higiénicas son indescriptibles, a los presos no se les da tiempo para evacuar sus necesidades. Los llevan al baño en grupos de diez. En pocos minutos -tres como máximo- todos tienen que hacer todas sus necesidades”⁹⁷³.

El testimonio de una mujer detenida en febrero de 1975 por la DINA, y llevada a Villa Grimaldi, confirma el relato anterior, en cuanto a la falta de higiene y hacinamiento:

⁹⁷² Ibíd., p. 239.

⁹⁷³ Relato de sobreviviente en Villa Grimaldi, Caja nº 2, “torturas”, foja nº 938, op. cit.

“Se me obligaba a hacer mis necesidades con la puerta abierta mientras los guardias me miraban y se mofaban de mí, se me obligaba a sentarme en la taza del baño con restos de excrementos y orina y sin que me permitieran limpiar un poco la taza antes de sentarme o limpiarme yo cuando ya había hecho mis necesidades. Exigencia de controlar el organismo de tal modo que la orina y los excrementos debían salir del cuerpo a horarios fijados por ellos. En caso contrario, se amenazaba con que si no se controlaba el organismo, te obligarían a comer tus excrementos o a beber tu orina. Este tipo de amenazas aprendí rápidamente a creerlas cuando me tocó presenciar esta situación con un preso que no logró controlar su diarrea. De forma inexplicable mi organismo se adaptó a esta exigencia (...)”⁹⁷⁴.

I) desnudamiento

Esta práctica fue habitual entre los detenidos: se les obligó a desnudarse contra su voluntad, golpeándolas aun cuando en la mayoría de las veces estaban encadenadas. También fueron arrancadas sus vestimentas violentamente, por agentes, militares y policías, instaurándose como una práctica común dentro de los organismos represivos.

“Quitarse la ropa y permanecer desnudo han sido conductas reservadas al ámbito privado, dentro de un contexto de intimidad. Por eso, coaccionar a alguien a desvestirse, o bien quitarle las ropas a la fuerza, obligándole a permanecer desnudo en presencia de desconocidos con intenciones manifiestamente hostiles, es un modo de tortura que sume a la persona en un estado de extrema vulnerabilidad e indefensión. Súmese a ello que la persona así intimidada está privada de libertad y desnuda contra su voluntad mientras es sometida a interrogatorios

⁹⁷⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 241.

irregulares; que en esas condiciones se impone el temor a ser víctima de afrentas sexuales y que el cuerpo desnudo solía ser expuesto a otras formas de padecimiento, como golpes o aplicación de electricidad”⁹⁷⁵.

El siguiente testimonio es muy ilustrativo respecto a la forma en que esta forma de tortura fue aplicada. Corresponde a una mujer detenida en mayo de 1975 y conducida a Villa Grimaldi.

“Al llegar al recinto me tiraron de la camioneta al suelo y luego me sometieron a interrogatorios con [se omite el nombre], quien me descalificó verbalmente.

Luego me llevaron a las "casas Corvi" (cajones donde sólo se podía permanecer de pie). Siempre me mantuvieron con la vista vendada, manos atadas y desnudas. Me aplicaron la parrilla eléctrica, fui víctima de tocaciones y abusos deshonestos, muchas golpizas y simulacro de fusilamiento en la punta de la piscina”⁹⁷⁶.

j) Agresiones y violencia sexuales

“La agresión sexual consiste en forzar a una persona mediante coacción física o psicológica, a realizar o padecer actos de carácter sexual. Las agresiones de este tipo se encuentran legalmente prohibidas y, reunidos ciertos requisitos, se identifican con distintas figuras delictivas por constituir un serio atentado contra la libertad de las personas, lesivo del sano desarrollo de su sexualidad y de su personalidad. En suma, cuando un detenido es violentado sexualmente por un agente del Estado o por un particular a su servicio, estas agresiones constituyen una forma de tortura porque causan en las víctimas un grave sufrimiento

⁹⁷⁵ Ibíd.

⁹⁷⁶ Ibíd., p. 242.

psicológico, generalmente acompañado de un dolor físico capaz de provocar secuelas”⁹⁷⁷.

La Comisión señaló que muchos prisioneros sufrieron agresiones sexuales, tanto en mujeres como en hombres, en distintos grados, y que también fue cometida sobre menores de edad. La Comisión analizó la violencia sexual contra las mujeres en un capítulo aparte, debido a la gravedad de la situación, ya que algunas de ellas estaban embarazadas al momento de la detención, o bien, producto de las violaciones se embarazaron, en consecuencia este es un tema delicado en todas sus formas y dimensiones, que escapan a los objetivos de nuestra investigación.

Si bien todos los métodos de tortura dejan secuelas, ninguna comparable con otra, sin embargo, aquellas víctimas que fueron violentadas sexualmente –hombres y mujeres-, a juicio de la Comisión, tuvieron graves y variadas secuelas, y que la gran mayoría no contó con especialistas que las ayudaran a superar esta situación traumática. Es más, la Comisión señaló que muchas víctimas manifestaron que nunca antes habían dado su testimonio sobre este tipo de tortura, obviándolos en sus relatos sobre la prisión política.

El problema de la violencia sexual en los regímenes dictatoriales, sin duda es un tema para otra investigación, que son temas mucho más complejos, y que sin embargo, en los diferentes archivos y testimonios revisados, aparecen como una constante. Es por esta razón que incorporamos sólo algunos testimonios de personas detenidas, víctimas de la violencia sexual. Es interesante observar que la violencia sexual se aplicó tanto en hombres como en mujeres, y a su vez constatar en los testimonios analizados, la imposibilidad de hablar sobre estas experiencias, sobre todo en aquellos relatos de hombres que vivieron la violación, tocaciones indebidas denominados también “allanamientos corporales”. Estas cuestiones derivan en otro tipo de reflexiones, que nos permitimos sólo enunciar, puesto que son temas que –por

⁹⁷⁷ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 242.

su densidad- escapan a los objetivos de esta investigación y de los cuales quedamos en deuda para continuar investigando. Nos referimos a la imposibilidad de hablar de la experiencia traumática, pero sobre todo, de aquella violencia que tuvo connotaciones sexuales. Ello porque tiene que ver con la arqueología del horror, que como capas sedimentadas se van colocando en el relato de la víctima, y que le permite sobrevivir a la situación traumática. La valentía de quienes entregaron sus testimonios, permitió a su vez reconocer la violencia sexual como una práctica habitual y sistemática. Y que para nuestras preocupaciones iniciales se inscriben en las formas en cómo durante los gobiernos transicionales se nombra el horror vivido. El testimonio de una mujer detenida en noviembre de 1974 por la DINA y llevada a Venda Sexy, nos permite acercarnos a esas formas de violencia:

“(…) llegaron dos hombres y una mujer a buscarme. Yo corrí a la oficina del médico jefe para dejar una prueba de mi detención. En efecto, les pidió que se identificaran y ellos mostraron sus placas como agentes de la DINA. Me llevaron con mi delantal de servicio, sin dejarme tiempo de tomar mis ropas. Me subieron a una camioneta de la DINA, me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon [...] me dejaron sola en una oficina sentada en un banquillo de poca altura, siempre con la venda en los ojos. Pasé largo tiempo en ese lugar. Luego me hicieron subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara. Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad repetidas veces (...) vino un médico que me examinó ginecológicamente (...) violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas”⁹⁷⁸.

Asimismo un sobreviviente que fue detenido por agentes de la DINA en agosto de 1974 y llevado a Villa Grimaldi, indicó que “(…) me fue introducido un

⁹⁷⁸ Ibíd., p. 244.

objeto contundente en el ano; me rompieron las fibras y muchas veces al defecar botaba sangre”⁹⁷⁹.

i) Presenciar torturas de otros

Los detenidos fueron obligados a ver, oír y escuchar los padecimientos infligidos a otras víctimas. Fue habitual que los detenidos presenciaran la tortura de cónyuges, hijos, padres entre otros, con el objetivo de extraer declaraciones.

“Este método permite que el detenido incorpore en su racionalidad elementos de proyección sobre lo que puede ocurrirle si no colabora, a modo de anticipación o reforzamiento de la conciencia de su condición de víctima, en estado de indefensión absoluta frente a la tortura”.

La Comisión señaló que los métodos más utilizados en contra de los familiares fueron: las agresiones sexuales, la aplicación de electricidad y los golpes. El siguiente testimonio de un hombre detenido en diciembre de 1975, por agentes de la DINA, describe este método de tortura:

“(...) tras incitarnos injuriosamente a colaborar y ante mi mutismo, me golpeó brutalmente haciendo uso de puños, pies y un objeto contundente durante varios minutos delante de mi madre y de mi esposa. Mi madre fue llevada aparte (luego fue liberada) y la golpiza continuó sobre mi esposa. Ofuscado por nuestro silencio [...] ordenó "¡a la parrilla!" [...] me sacaron a un patio donde me dejaron tendido mientras me hacían escuchar los gritos de mi compañera que torturaban en una pieza aledaña. Tras una media hora de mantenerme escuchando los tormentos de mi esposa, durante los cuales me intimaban para evitarle sufrimientos [...] me

⁹⁷⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 244.

desnudaron a la fuerza, me introdujeron en una pieza con catres metálicos de dos pisos, me amarraron a uno de ellos, me conectaron cables y electrodos hechos con ganchos y llaves metálicas a los pies, las manos, narices, ojos, encías, ano, pene y testículos, y comenzaron a aplicar descargas eléctricas producidas por un dínamo a manivela⁹⁸⁰.

Así también lo relató una mujer detenida en septiembre de 1974, por la DINA y conducida la casa de calle José Domingo Cañas n° 1315. “En José Domingo Cañas fui golpeada en diversas partes del cuerpo. Nuevamente fui manoseada y obligada a presenciar la tortura de mi esposo. Fui desnudada y amarrada a un catre metálico en el que fui golpeada. Estaba embarazada, con 6 meses de gestación”⁹⁸¹. Otras formas de tortura fueron la llamada “ruleta rusa”, si bien fue un método de tortura que no se aplicó masivamente entre los detenidos, existen testimonios que dan cuenta de su práctica. Consistió en un “temerario juego de azar que ritualiza la práctica del suicidio. Consiste en dispararse en la sien un revólver cargado (o que simula estarlo) con una sola bala, ignorando en qué lugar del tambor o nuez está alojada ésta. La eventualidad de morir en este juego, que el detenido practicaba contra su voluntad, constituye la esencia de este método de tortura”⁹⁸². El “presenciar fusilamientos de otros detenidos”, también se considera una forma de tortura, ya que se obligó a los prisioneros a presenciar el fusilamiento de sus compañeros de prisión, quienes eran a su vez conocidos y amigos. Hecho que causaba un profundo sufrimiento a los detenidos, así como también agudizaba la situación de inseguridad del propio detenido. “En algunos recintos se practicó la modalidad agravante de arrojar sobre los detenidos, inmovilizados y tendidos en el suelo, los cuerpos agonizantes de quienes acababan de ser ejecutados”⁹⁸³. Por otra parte, aunque la Comisión señaló que el hecho de vivir la experiencia de presión, no constituye en sí mismo un hecho de tortura, el

⁹⁸⁰ Ibid., p. 245.

⁹⁸¹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 245.

⁹⁸² Ibid.

⁹⁸³ Ibid., p. 246.

“confinamiento en condiciones infrahumanas”, fue una forma habitual de reclusión de los prisioneros, en este contexto subrayó que:

“[Las] condiciones carcelarias agravantes de la prisión, como la incomunicación, tampoco pueden ser consideradas como un método de tortura *per se*, si bien implican una mayor vulneración de los derechos de la persona, aun en el caso de responder a un dictamen de la autoridad judicial competente en el marco de un debido proceso. Admitido lo anterior, debe precisarse que el confinamiento de una persona en una celda construida o ambientada con la expresa finalidad de provocar sufrimiento físico o psíquico, se considera como un método de tortura”⁹⁸⁴.

El relato de una mujer detenida en febrero de 1975 por agentes de la DINA y conducida a Villa Grimaldi, grafican esta situación: “(...) fui sometida a (...) aislamiento total en la torre de Villa Grimaldi, en una celda pequeña, sin ventilación, ni luz, sin puerta y con un orificio inferior por el que se entraba y salía, reptando”⁹⁸⁵. Asimismo la Comisión determinó que la privación deliberada de medios de vida, también constituye una forma de tortura, ya que gran parte de los testimonios recopilados y publicados en el *Informe Nacional sobre Prisión Política y Tortura*, señalan que las condiciones de vida dentro de los recintos de detención eran deplorables, cuestión que se agravaba debido a que se habilitaron lugares que no estaban capacitados para esos propósitos.

“También se privó deliberadamente al detenido de medios básicos de vida como el abrigo mínimo, el agua y los alimentos. La situación podía incluir ausencia de servicios higiénicos. Cuando las privaciones de medios básicos de vida son prolongadas y provocan sufrimiento innecesario, perjudicando la salud de la persona, constituyen un método de tortura destinado a provocar el

⁹⁸⁴ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 247.

⁹⁸⁵ *Ibíd.*, p. 248.

debilitamiento físico y moral de los detenidos, con el fin de castigar o disminuir la capacidad de resistencia de los mismos”⁹⁸⁶.

Otra forma de tormento es la privación o interrupción del sueño, ya que dormir es una necesidad fisiológica con efectos reparadores, que al no ser satisfecha de manera sistemática, produce alteraciones en los estados de ánimo y aun en la percepción de la realidad, así como un generalizado debilitamiento corporal. “Impedir a un detenido conciliar el sueño o interrumpirlo deliberadamente en reiteradas oportunidades, durante uno o varios días, constituye un método de tortura, debido al daño físico y las perturbaciones psicológicas que ocasiona”⁹⁸⁷. Por otra parte, un gran número de víctimas fueron sometidas a intentos de asfixia, y que consistía en impedir o dificultar la respiración. Por este medio se buscaba causar sufrimiento físico y psicológico mediante la confrontación con la eventualidad de morir ahogado. El testimonio de un hombre detenido en abril de 1975, por agentes de la DINA y trasladado a Villa Grimaldi, describe los padecimientos que implicó esta práctica en los detenidos:

“Aproximadamente a media noche fui sacado nuevamente de la celda y arrastrado a la sala de interrogatorio. Esta vez no se me aplicó electricidad. Se me ató a una silla y se me puso una bolsa de plástico en la cabeza que se me anudó con un cordón apretado al cuello. La bolsa contenía un poco de aire y un poco de aserrín de madera. Yo empecé a respirar el aire de la bolsa que en menos de un minuto se agotó. Las paredes de la bolsa se me adhirieron al rostro y en mi desesperación por inhalar aire ya inexistente empecé a tragar por nariz y boca el aserrín. Aquellas materias extrañas me penetraron hacia los pulmones y violentas contracciones musculares intentaron expulsarlas. El esfuerzo me provocó vómitos que se vaciaron en la bolsa. Ahora tragué mis propios vómitos unido al aserrín. Cuando los síntomas de asfixia

⁹⁸⁶ Ibíd.

⁹⁸⁷ Ibíd., pp. 248-249.

se hicieron muy fuertes, retiraron la bolsa y me dejaron tranquilo por unos minutos. Luego me golpearon con correas de cuero y con puños en cara, brazos, tórax y muslos. La tortura de la bolsa, conocida como submarino seco, me la aplicaron por dos veces más durante esa noche⁹⁸⁸.

La exposición a temperaturas extremas, también es considerada una forma de tortura, si bien en los recintos de detención que hemos analizado, localizados en Santiago, esta forma tortura fue muy escasa, debido a la geografía de Chile, fue mucho más habitual en los campos de concentración que se ubicaron en los extremos del país, como delo detallan los siguientes testimonios: El primero detenido en el extremo sur de Chile, en Aysén, en el Regimiento nº 14, en septiembre de 1974: "(...)Fui desnudado en la nieve, a un costado del recinto, a la intemperie, con aplicación de corriente en varias partes del cuerpo, golpes de culata estando en el suelo"⁹⁸⁹. El segundo testimonio, corresponde a un hombre detenido en enero de 1974, fue llevado al Campo de Prisioneros Chacabuco, en el extremo norte del país: "(...) de pie todo el día a pleno sol (40° C) y de noche nos hacían correr para sentir el frío del desierto"⁹⁹⁰.

"Más allá de las incomodidades propias de hallarse privado de libertad, el hecho de exponer deliberadamente a una persona a temperaturas muy elevadas o muy bajas con la única finalidad de causar sufrimiento físico o mental, también es un método de tortura"⁹⁹¹.

⁹⁸⁸ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p.250.

⁹⁸⁹ *Ibíd.*

⁹⁹⁰ *Ibíd.*, p. 251.

⁹⁹¹ *Ibíd.*, pp.250-251.

5.2.- Los recintos secretos de detención en Santiago

En el análisis de los métodos de tortura, es importante identificar la situación en sí, que desde la psicología se denomina “segundo plano”, y que adquiere una importancia fundamental en los recintos de detención, porque es en estos sitios donde con mayor periodicidad se implementaron los métodos de tortura. Es en estos lugares, donde observan las situaciones de agotamiento físico de las víctimas, lo que se denomina “situación intrínseca” de la tortura, ya que provienen de las condiciones materiales derivadas del encarcelamiento, entre las que se pueden mencionar, los abusos, la falta de alimentos, la deshidratación, la suciedad y el hacinamiento. Otra situación que se genera en dentro de estos recintos denominada también de segundo plano, corresponde a la “situación de deterioro físico y psíquico programado”, en que es posible observar:

“servicios sexuales, humillaciones, amenazas y una intimidación dirigida (por ejemplo, se escuchan constantemente alaridos, quejas o llantos; o bien se escucha música muy fuerte, siempre la misma, que luego se interrumpe bruscamente para dejar que se oigan gritos). El sujeto está a ciegas y tiene la sensación de ser observado; le está prohibido moverse, y no puede hacer las funciones fisiológicas en privado, sino bajo la observación de los guardianes”⁹⁹².

Los métodos de tortura fueron aplicados en un espacio determinado, en nuestro caso de estudio, en recintos de detención que tuvieron la connotación de “secretos”. Es la importancia del no-lugar en palabras de Marc Augè, ese lugar imposible. En nuestro caso de estudio, la Comisión Valech, constató que durante la dictadura militar en Chile, existieron 1.132 recintos utilizados como lugares de detención en las trece regiones del país⁹⁹³. El Informe que elaboró

⁹⁹² “La tortura en Técnicas y Métodos”, op. cit., p.9.

⁹⁹³ Véase Chile, Decreto Ley nº 212 que crea la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, del 17 de diciembre de 1973. Diario Oficial del 26 de diciembre de 1973. Conocida como

esta Comisión, incluyó al final de la publicación un listado con los recintos de detención claramente identificados de acuerdo a los testimonios recibidos. Sin embargo, puntualizó sumaban un total de 802 lugares de detención, ya que se habían excluido de la misma lista 330 recintos, debido al escaso número de testimonios que se referían a ellos, y por tanto no eran significativos como para ser incluidos en la nómina⁹⁹⁴. Asimismo indicó que a través de los testimonios recibidos, logró distinguir algunos aspectos comunes en todo el país, en lo que respecta a: “la manera en que fueron detenidas las personas, a las condiciones en las que estuvieron privadas de libertad y las características de los interrogatorios y torturas a las que fueron sometidas”⁹⁹⁵. Asimismo, sostuvo en cuanto a los lugares de detención e interrogatorio de las víctimas, que se utilizaron para estos fines “las más diversas unidades pertenecientes a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, cuarteles de las policías de Carabineros e Investigaciones, buques, intendencias, estadios, campos de prisioneros, cárceles y recintos secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI)”⁹⁹⁶. Fue común el uso de la máxima violencia en las detenciones, las que se realizaron en frente de los hijos, irrumpiendo en sus domicilios de noche:

“(…) con gritos, golpes y amenazas de muerte sobre el detenido y sobre otros miembros de la familia, creándose una atmósfera de terror y angustia. En muchos casos la familia quedaba desolada y temiendo por la vida del familiar que era sacado de la casa en medio de golpes, puntapiés y amenazas”⁹⁹⁷.

(Conara), se implementó el proceso de regionalización en Chile, que organizó administrativamente al país de trece regiones.

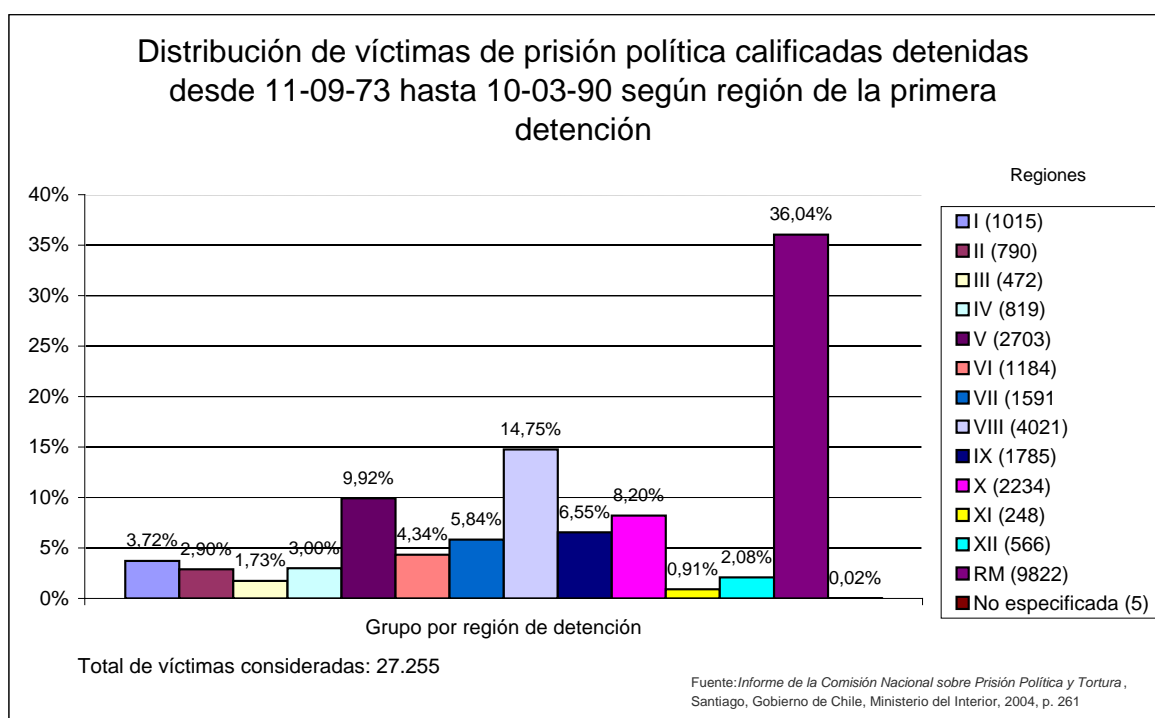
⁹⁹⁴ La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, argumentó esta decisión indicando que “La Comisión espera que toda esta información permita formarse una idea, lo más completa posible, de la extensión e intensidad de la prisión política y de la tortura en todo el país”. En Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 268.

⁹⁹⁵ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 261.

⁹⁹⁶ *Ibíd.*

⁹⁹⁷ *Ibíd.*, p. 262.

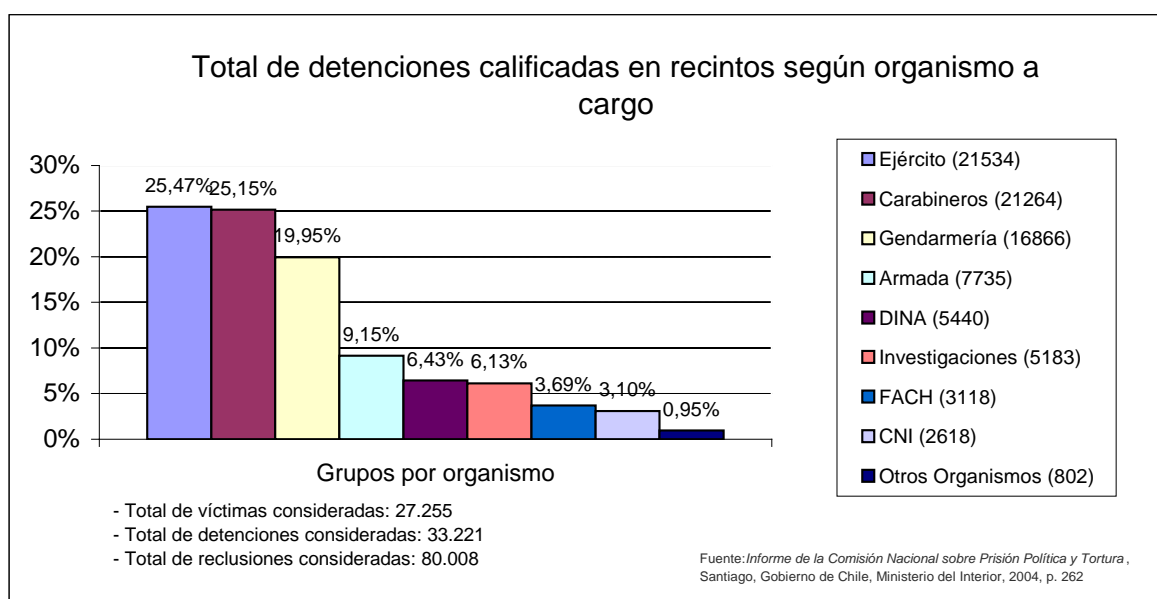
Violencia que continuaba -como hemos visto- en el tránsito hacia los diferentes recintos de detención. En la mayoría de las veces eran trasladados amarrados de pies y manos, con vendas o capuchas que impedían saber su destino, todo esto, entre las amenazas y golpes. La Comisión subrayó que en el período en que funcionó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue especialmente difícil para las víctimas que estaban detenidas, “conocer la ubicación e identificación exacta de esos recintos, principalmente por las medidas adoptadas por sus captores para mantener el carácter secreto y clandestino de esos lugares”⁹⁹⁸. Esta es una de las razones que impedía la localización de las víctimas.



En el siguiente gráfico, se puede observar el número de personas detenidas durante el período que abarcó la investigación de la Comisión Valech, concentrándose el mayor número de víctimas en la Región Metropolitana. Debido a la dificultad para identificar los recintos, algunos de ellos aun continúan denominándose «recintos desconocidos», sobre todo en el caso de las regiones. Sin embargo, y a pesar de esta dificultad, el gran

⁹⁹⁸ Ibíd.

esfuerzo que desplegó la Comisión Valech, permitió visibilizar más de mil recintos de reclusión en los que se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. En un primer momento, identificó las detenciones de acuerdo a los organismos de seguridad que las efectuaba, destacando al Ejército y Carabineros de Chile, como los que mayor número de detenciones realizaron, seguidos de Gendarmería y la Armada de Chile. En relación a los datos entregados, las detenciones tanto la DINA como la CNI, no superaron el 6,5%, ello se debe entre otros, a que este organismo secreto del régimen, efectuaba detenciones selectivas, destinada a perseguir y eliminar a los dirigentes de los diferentes partidos y organizaciones de izquierda.



La Comisión seleccionó sólo algunos del total de recintos que fueron identificados por las víctimas que acudieron a dar su testimonio, con el objetivo de realizar una pequeña caracterización de ellos en todo el país. En ella se incluyeron la localización y el organismo del que dependía, el su ubicación y dependencia, el tiempo aproximado en que estuvo en funcionamiento y las condiciones de privación de libertad, así como el tratamiento que se dio a los prisioneros. Los criterios que utilizó la Comisión para seleccionar los recintos fueron: Primero, «La importancia del recinto», se seleccionó aquellos que reunieron el mayor número de detenidos, así como de aquellos en donde se realizaron los interrogatorios, centralizando la información de inteligencia, y por

último donde se decía el destino de los prisioneros. Un segundo criterio fue «La condición de recintos secretos o clandestinos de reclusión», que fueron aquellos donde se realizaban interrogatorios, así como la práctica sistemática de tortura en contra de las personas detenidas. Acciones que estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Informaciones (CNI), Comando Conjunto, Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) o Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOmCAR). Un tercer criterio, fueron aquellos recintos en los que se destacó “la aplicación de malos tratos y torturas especialmente crueles en contra de los prisioneros, hombres y mujeres”. Por último se consideró el período en que funcionaron los recintos de detención, con la finalidad de que se pudiera “apreciar lo ocurrido durante todo el período incluido en el mandato de la Comisión”⁹⁹⁹.

En el Informe que elaboró la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se presenta una descripción de los recintos de detención y tortura, que coincidieron con los criterios mencionados, ordenados por región y según el período de funcionamiento, organismos involucrados y el trayecto que habitualmente realizaron las víctimas desde el momento de su detención. Es importante subrayar que la Comisión realizó un gran esfuerzo en describir los métodos de tortura que se emplearon en los distintos recintos, identificando aquellas prácticas que fueron más recurrentes en los diferentes recintos de detención.

A partir del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar decretó el «Estado de Emergencia», utilizándose gran parte de los recintos de las Fuerzas Armadas como centros de detención, entre ellos, “regimientos, escuelas de formación militar y de especialidades, hospitales institucionales y recintos bajo la custodia de alguna rama de las Fuerzas Armadas”¹⁰⁰⁰. La provincia de Santiago, perteneciente a la actual Región Metropolitana, aglutinaba en la

⁹⁹⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 264.

¹⁰⁰⁰ *Ibíd.*, p. 429.

época, cerca de un tercio de la población total del país¹⁰⁰¹, localizándose la ciudad de Santiago que capital del país, y sede político-administrativa del Estado de Chile. El Decreto Ley nº 4 del 11 de septiembre de 1973, además de declarar el «Estado de Emergencia» en todo el país, designó como «Jefes de Zona», a Oficiales de las Fuerzas Armadas a quienes les otorgó amplias facultades. En la Provincia de Santiago, fue nombrado el “General de Brigada don Hernán Julio Brady Roche (...)”¹⁰⁰².

Para efectos de nuestra investigación, nos hemos centrado en el segundo período que han identificado ambas comisiones como la fase en que se realizaron detenciones selectivas, a cargo de uno de los principales organismos de la represión durante la dictadura militar, como fue la DINA, cuyo funcionamiento estuvo entre los años 1974 y 1977. Sin embargo, también colaboraron en las acciones represivas pero con menor injerencia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), el Comando Conjunto, el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), denominado por un período como Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Una característica central de estas acciones, es que los detenidos permanecieron “secuestrados en recintos desconocidos y la negación del hecho de su detención fue una práctica común. Muchos prisioneros desaparecieron desde esos lugares”¹⁰⁰³. Como lo han señalado ambos informes, la DINA se caracterizó no sólo por mantener recintos secretos de detención, sino también por perpetrar las mayores atrocidades en las personas que estaban detenidas, cuestión que no exculpa a las diferentes ramas de instituciones como Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Si bien, la Central Nacional de Investigación (CNI) también tuvo recintos secretos de detención, fue la DINA quién los mantuvo durante más tiempo, realizando un «circuito del terror», por donde debían pasar las víctimas.

¹⁰⁰¹ Véase en anexo nº 9 datos censos en Chile.

¹⁰⁰² Chile, Decreto Ley nº 4 que declara en Estado de Emergencia las Provincias y Departamentos que indica, Ministerio de Defensa del 11 de septiembre de 1973. Diario Oficial de 18 de septiembre de 1973.

¹⁰⁰³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 429.

“Los detenidos por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no aparecían públicamente como detenidos. La vida cotidiana en esos lugares se caracterizaba por condiciones físicas insalubres y una constante presión psicológica sobre los prisioneros, manteniéndolos amarrados, vendados y en total incertidumbre respecto al desenlace de la irregular situación que los afectaba. Además, en todo momento estaban expuestos a interrogatorios brutales. Como se ha señalado en otros capítulos, los interrogatorios se realizaron casi siempre sometiendo a los prisioneros a múltiples torturas”¹⁰⁰⁴.

En el caso de la Región Metropolitana, la Comisión señaló que recibió “antecedentes de 221 recintos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, campos de prisioneros y otros lugares utilizados como centros de detención”¹⁰⁰⁵. Asimismo explicita que de todos ellos, realizará una breve descripción, por tanto, en este apartado se describen 41 recintos de detención y tortura. Para efectos de esta investigación, hemos considerado cuatro recintos clandestinos adscritos a la DINA, por las características señaladas anteriormente por ambas Comisiones, y que entre está relacionado con el «círculo del terror» en que transitaban cientos de prisioneros. Estos recintos que interrumpieron los habituales paisajes urbanos y rurales de Chile, inmersos en la clandestinidad y el silencio que otorga el miedo y la complicidad, años más tarde serían develados públicamente, gracias a los testimonios de víctimas y familiares. En muchos casos, permitiendo seguir la búsqueda de sus seres queridos apresados ilegalmente y aun desaparecidos, mediante nuevas huellas y pistas que permitan responder a la inconmensurable pregunta que ha estampado en carteles de cientos de familias «¿Dónde Están?».

A raíz de la publicación de los Informes, pero sobre todo del primero de ellos, el Informe Rettig, no fue menor el número de personas que advirtieron

¹⁰⁰⁴ *Ibíd.*

¹⁰⁰⁵ *Ibíd.*, p. 430.

que en las propiedades vecinas a sus hogares, como la casa ubicada en calle Irán n° 3037, conocida por las víctimas que allí estuvieron prisioneras como «Venda Sexy» o «La Discotheque», localizada en un barrio de clase media en Ñuñoa. Mucho más complejo debió ser para aquellas personas, que años más tarde se dieron cuenta que tenían como vecino a quién había sido su torturador¹⁰⁰⁶. Por consiguiente, es en los recintos secretos identificados por dichos informes que estuvieron bajo la responsabilidad de la DINA¹⁰⁰⁷, cuyo director teniente coronel de Ejército Manuel Contreras, recibía órdenes directamente del General Pinochet, es que nos interesa “descorrer el velo de la tortura”¹⁰⁰⁸, aproximándonos a la arqueología del horror instaurada durante la dictadura militar. “Sus conocidos centros de tortura incluían Villa Grimaldi, una mansión en la Reina (barrio en los márgenes orientales de Santiago)”¹⁰⁰⁹, en la misma comuna, las casas de calle José Domingo Cañas n° 1367, conocido en la jerga militar como «Cuartel Ollagüe», la casa de calle Irán n° 3037, denominada también «Venda Sexy» o «La Discotheque».

Otro recinto fue la casa de calle Londres 38 ubicada justo a un costado de la Iglesia San Francisco y muy próxima al barrio cívico de Santiago. Cercana al Palacio de Gobierno y el denominado Edificio Diego Portales, construido en 1972 para ser sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD III)¹⁰¹⁰. Y que con el

¹⁰⁰⁶ Véase Boston, S., *Cruel Separación*, Reino Unido, Fuse Films, 2006. Documental que reúne el testimonio de cuatro mujeres con un pasado común: todas fueron detenidas y torturadas durante la dictadura de Augusto Pinochet y sus maridos murieron víctimas de la represión del régimen militar. En él Ángela Jeria, madre de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, relata el encuentro en el ascensor de su edificio con el que había sido su torturador.

¹⁰⁰⁷ “(..) a fines de 1973 y luego de la fase de toma de toma del poder, el Gobierno Militar comenzó a pensar en llevar a cabo transformaciones profundas. En esa perspectiva, la Junta de Gobierno aceptó como necesario crear un organismo de inteligencia del Estado, para asistirle en ese proceso y combatir los obstáculos que se percibían, entre ellos, principalmente, la existencia de fuerzas políticas derrotadas, pero con el potencial de reorganizarse, tanto en la clandestinidad como fuera de Chile. Así nació la DINA”. En Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 451.

¹⁰⁰⁸ Lagos Escobar, R., “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, *Prólogo del Informe Nacional sobre Prisión Política de Chile*, Santiago, 28 de noviembre de 2004, op. cit.

¹⁰⁰⁹ Collier, S., op. cit., 309.

¹⁰¹⁰ “Una vez terminada la reunión, el edificio pasó por decisión del Ejecutivo a llamarse Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, un espacio abierto al pueblo. En él se montaron

incendio del Palacio Presidencial el 11 de septiembre de 1973, fue rebautizado por la Junta Militar como «Edificio Diego Portales», desde donde funcionó la sede de la administración hasta 1981, fecha en que la Junta de Gobierno se trasladó definitivamente al Palacio de La Moneda. En consecuencia, lo que nos interesa cuando reflexionamos sobre los lugares del horror en Chile, es rescatar aquellos elementos comunes que existen en los relatos de las víctimas, y que a través de los informes han sido visibilizados. En este sentido, es interesante apreciar cómo estos lugares –donde se perpetraron vejámenes de todo tipo- una vez que fueron identificados públicamente por las Comisiones de Verdad, adquirieron otros significados durante la transiciones chilena, transformándose en muchos casos en el símbolo del «Nunca Más». Es interesante observar cómo se transformaron en «lugares de memoria», y como lo plantea Elizabeth Jelin, transitando del «espacio al lugar», es decir, cómo sobrevivieron al olvido, o bien se sumergieron en él. Como planteábamos en un capítulo anterior, estos lugares de memoria, adquieren la connotación de «marcas territoriales», entendiéndolas como aquellos “espacios físicos donde ocurrió la violencia estatal”¹⁰¹¹, cuestión que nos permite analizar los cuatro recintos secretos de detención, no preocupándonos tanto de su descripción física, sino más bien, del recuerdo que las víctimas tienen de ellos, ya que su contenido es de violencia, formas que comportan el horror, y nuestro desafío es intentar históricamente nombrarlo. Es por ello, que esta investigación es una primera puerta de ingreso a ese desafío mayor, que es cómo desde nuestra disciplina, podemos nombrar el horror, cómo lo podemos aprehender para profundizar al menos con un pequeño grano de arena en los Nunca Más. En este contexto es que nos ha interesado indagar en estos recintos secretos de detención.

Los testimonios que recibieron las Comisiones, indicaron que existía una ruta o flujo de detenidos que transitaban entre los diferentes recintos de la DINA, entre ellos, los cuatro recintos que son parte de nuestras preocupaciones investigativas. Como lo señaló el Informe Valech, “según los

exposiciones plásticas, obras de teatros y danza que eran visitadas sin costo alguno”. En *La Nación*, Santiago, 05 de marzo de 2006.

¹⁰¹¹Jelin, E., Langland, V. (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, op. cit., 2.

antecedentes recabados, en este circuito Londres 38 era el primer recinto al que eran conducidas las personas recién detenidas”¹⁰¹².

5.2.1.- Londres nº 38

La casa de calle Londres nº 38, fue construida en 1925, en el barrio denominado «Paris-Londres». En los primeros años de la década de 1970, el Partido Socialista de Chile, adquirió este inmueble instalando aquí la sede de la «Seccional de la Octava Comuna» (estructura de base de dicha organización)¹⁰¹³. Este lugar fue ocupado por la DINA en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado, aun cuando recién en el año 1975, el Estado de Chile confiscó formalmente la propiedad al Sr. Javier Gutiérrez y otros, últimos propietarios legales del inmueble antes del golpe de estado de 1973. Sin embargo, en la investigación realizada por el destacado periodista Manuel Salazar, indica que:

“En octubre de 1973, el teniente de Carabineros Ernesto Torr  S ez, destinado a la DINA, recib  la orden de habilitar el derruido y abandonado caser n de Londres 38, para ser ocupadas por algunas brigadas que organizaba el coronel Contreras. Torr  cumpl  hasta entonces labores de log stica y ten  a su cargo un grupo que retiraba bienes que quedaban en las casas allanadas. Muebles, maquinarias, imprentas artesanales, talleres fotogr ficos, libros, prendas de vestir y todo lo que pudiera servir a los agentes fue apilado en bodegas”¹⁰¹⁴.

Otras investigaciones como la realizada por el Comit  de derechos del pueblo CODEPU publicada en 1990, a cargo de la m dico neuropsiquiatra Paz Rojas, indic  que Londres 38 estuvo a cargo de la Brigada de Inteligencia

¹⁰¹² Comisi n Nacional sobre Prisi n Pol tica y Tortura, *Informe Comisi n Nacional sobre Pol tica y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 442.

¹⁰¹³ Ver en anexo n  11, listado de los Centros de detenci n y tortura en la Regi n Metropolitana.

¹⁰¹⁴ Salazar, M., *Letras del terror. Tomo I: La DINA*, op. cit., p. 131.

Metropolitana (BIM), bajo las órdenes del comandante de Ejército Manuel Manríquez Moyano, y en el que funcionaron dos de las agrupaciones de la DINA, «Caupolicán» y «Tucapel». Así como grupos operativos que salían a detener y luego interrogaban y torturaban, estos eran « Halcón 1» y «Halcón 2»¹⁰¹⁵. A cargo del Capitán Miguel Krassnoff Martchenko permanentemente en esa casa investigando, dando órdenes de torturar¹⁰¹⁶. También se encontraba Marcelo Moren Brito, quién concurría a ese local a buscar información de aquellos detenidos que podían mediante tortura aportarle mayores antecedentes¹⁰¹⁷. Cuando esta casa dejó de funcionar como recinto de detención y como acción de borrar y olvidar las posibles huellas del lugar, se sustituyó la numeración original que designaba al inmueble, por el número 40. Así, las numerosas denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento, a una dirección inexistente. Posteriormente, mediante Decreto Supremo nº 964 del 29 de noviembre de 1978, firmado por el General Augusto Pinochet, fue transferido gratuitamente al Instituto O'higiniano¹⁰¹⁸, organismo

¹⁰¹⁵ En estos grupos operativos participaron *Basclay Humberto Zapata Reyes*, suboficial de Ejército, alias "el troglo", y Osvaldo Enrique Romo Mena, agente civil. Para profundizar en las acciones de estos agentes, consultar el testimonio de Raimundo Elgueta Pinto, publicado en el sitio web de *Londres 38*. Disponible en, <http://www.londres38.cl/1937/articles-82025_recurso_1.pdf>.[Consultado en enero 2012].

¹⁰¹⁶ Véase Echeverría Yáñez, M., *Krassnoff, arrasado por su destino*, Santiago, Catalonia, 2008.

¹⁰¹⁷ Rojas B., P., *Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile*, Santiago, CODEPU, 1990, pp. 20-21. Esta investigación señala que: "Entre el personal de la DINA que trabajaba en la casa de calle Londres existían mujeres que cumplían labor administrativa, escribían a máquina y consignaban los datos de los prisioneros que venían llegando. Nunca nadie las vio pues todos los detenidos llegaban a ese lugar con los ojos vendados. Ellas registraron la llegada de Cecilia Labrín. Los demás funcionarios eran hombres, alrededor de 20, estaban encargados de custodiar a los prisioneros".

¹⁰¹⁸ "El 11 de octubre de 2005, el Ministro de Educación de Chile, Sergio Bitar, firma el Decreto Exento nº 001413, declarando a «Londres 38» "Monumento histórico", por considerar que junto a los campos de concentración del «Estadio Nacional» y «Villa Grimaldi» "tocan el alma" del país.

Desde el 8 de agosto de 2007, Londres 38 pasó a ser propiedad del Estado después de un largo proceso que concluyó con la permuta del inmueble hasta entonces en manos del Instituto O'higiniano. A pesar de que el 2 de marzo de 2006, este organismo había aceptado la permuta ofrecida por el Ministerio de Bienes Nacionales, en dos ocasiones -febrero y agosto de ese mismo año-, intentaron rematar el inmueble. El Colectivo Londres 38 junto al Colectivo de los 119 y otros organismos de derechos humanos, se movilizaron en ambas oportunidades para impedir su venta, solicitando al Estado que se hiciera cargo de la recuperación de la casa para convertirla en un sitio de memoria. El 14 de agosto de 2007, la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, anunció que, por decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, el futuro Instituto de Derechos Humanos se instalaría en Londres 38. Finalmente, la casa fue

muy vinculado al Ejército de Chile. Asimismo fue dirigido hasta el año 2006, por el general en retiro, Washington Carrasco, ex vicecomandante en jefe del Ejército y Ministro de Defensa de Pinochet.

En cuanto a las fechas de funcionamiento como recinto de detención y tortura, el Informe Rettig señaló que fue “desde fines de 1973 y hasta aproximadamente los últimos días de septiembre de 1974”¹⁰¹⁹. Por su parte el Informe Valech, no precisa en cuanto a las fechas, sino que más bien señala que “Durante el año 1974 se concentró la mayoría de los detenidos”¹⁰²⁰. Sin embargo, la organización que en la actualidad está a cargo, denominada «Londres 38, Casa de la Memoria», señala que su funcionamiento se sitúa desde “septiembre de 1973 hasta septiembre de 1974”¹⁰²¹.

Estas aproximaciones temporales y nuevos datos, plantean la dificultad que implica y, se pueden historizar este tipo de pasados, así como reflexionar sobre el manto de secreto e impunidad con el que operó este tipo de recintos. Hecho que también pone en evidencia la dificultad de acceder a los diferentes tipos de archivos, entre ellos los militares, muchos de los cuales fueron arrasados por las llamas en extraños incendios. Por otro lado diversas organizaciones dedicadas al rescate de la memoria sobre estos hechos, han publicado en sus sitios webs los nombres de los agentes que estuvieron a cargo de los recintos secretos, y que han sido identificados por las víctimas como responsables de las torturas. Es el caso de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y Londres 38. Espacio de memorias¹⁰²².

completamente desocupada el 9 de diciembre de 2008, quedando a partir de ese momento en manos del Estado”. Disponible en, <www.londres38.cl>. [Consultado en octubre de 2011].

¹⁰¹⁹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 464.

¹⁰²⁰ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 442.

¹⁰²¹ Disponible en, <<http://londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-32013.html>>. [Consultado en octubre 2011]. Véase Sepúlveda Ruiz, L., *119 de nosotros*, Santiago, LOM, 2005, p. 28. La reciente investigación del periodista Manuel Salazar, referenciada en esta investigación, indica que luego del golpe de Estado, la vieja casona de Londres 38, “albergó a un cuartel de Carabineros hasta que a fines de 1973 fue habilitada como centro de detención e interrogatorios de la DINA”. En Salazar, M., *Letras del terror. Tomo I: La DINA*, op. cit., p. 127.

¹⁰²² La Corporación Parque por la paz Villa Grimaldi, tiene publicado en su sitio web el nombre de los torturadores que fueron identificados por las víctimas en el Cuartel Terranova. En el caso

La casa de calle Londres 38, se ubica a menos de 500 metros de la Iglesia de San Francisco, cuya construcción desde el siglo XVI, ha sido fiel testigo de la historia de Santiago, y un importante referente, al momento de identificar el lugar de detención y tortura por parte de las víctimas. Conocido en la jerga militar como «Cuartel Yucatán», adoptó también nombres como «Palacio de la risa»¹⁰²³, «Casa de las Campanas», pues desde allí se escuchaban las campanas de la Iglesia de San Francisco. También fue conocida como «La Silla», “por la forma en que se mantenía a los detenidos, con los ojos vendados, amarrados de pies y manos, sentados en una silla de día y noche”¹⁰²⁴. La implementación de este centro estuvo relacionado con:

“Las desapariciones de personas [que] responden a un patrón de planificación previa y coordinación central, los que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas: aquellas a quienes se atribuía un alto grado de peligrosidad política”¹⁰²⁵.

En cualquier caso, las fuentes consultadas coinciden que durante los meses de abril, mayo y junio de 1974 se concentró la mayor cantidad de

de Londres 38. Espacio de memorias, los nombres aparecen en las resoluciones judiciales que están publicados en su sitio web. Disponible en, <<http://www.londres38.cl/1934/w3-propertyvalue-32225.html>>. [Consultado en enero 2012].

¹⁰²³El Informe de la *Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*, señaló que existieron a lo menos otros dos recintos de detención que se denominaron “Palacio de la Risa”. El primero perteneciente al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), ubicado en calle Picarte n° 145- 1, en Valdivia -1. “Funcionó entre septiembre de 1973 y el año 1975. “Los detenidos provenían de la ciudad de Valdivia y de otras comunas de la provincia. Unos permanecían vendados y amarrados y otros en calabozos sin alimento ni agua. Luego, la mayoría era trasladada a otros centros de reclusión, principalmente a la cárcel. Los testimonios dieron cuenta de diversos tormentos físicos y psicológicos. Sufrieron golpes, aplicación de electricidad, amenazas, simulacros de fusilamiento, colgamientos y el *submarino*”. En *Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 397. El segundo, fue el Antiguo Hospital Naval de Punta Arenas, que se denominó “Palacio de las Sonrisas”. Se ubicó en la avenida Colón n° 636. “Los declarantes señalaron que funcionó desde septiembre del año 1973 hasta el año 1974. Fue el principal centro de torturas e interrogatorios de hombres y mujeres en Magallanes y la sede central del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la región. Por este recinto pasaron la mayoría de los presos políticos de Magallanes durante el año 1973”. *Ibíd.*, p. 426.

¹⁰²⁴ *Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 442.

¹⁰²⁵Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 62.

prisioneros, al mismo tiempo que aparecen las primeras evidencias del empleo sistemático del método de desapariciones forzadas por parte de la DINa en contra del MIR, así como una mayor precisión de este grupo de inteligencia en la selección de quiénes detenía. El Informe Rettig, describió el inmueble como:

“(...) una casa antigua relativamente amplia, pero que resultaba bastante estrecha para albergar el número subido de detenidos que llegó a tener y para cumplir las demás funciones. En su interior hasta unos sesenta detenidos permanecían con la vista vendada reunidos en una amplia sala que en el día tenía sillas y en la noche colchonetas”¹⁰²⁶.

Las declaraciones de los sobrevivientes que lograron resistir a las torturas, y que se han publicado en diversos medios vinculados a Agrupaciones de Familiares de las Víctimas, así como en organismos de derechos humanos, han permitido conocer las circunstancias en que se produjeron las detenciones y la forma en que estuvieron reclusos. Asimismo, otorgan pistas sobre aquellas personas que se encuentran en condición de detenidas desaparecidas (DD). En el caso del recinto de Londres n° 38 como en otros, gracias a los testimonios de los sobrevivientes podemos saber por un lado, cómo eran los recintos de detención y tortura, así como los agentes que operaban en ellos, y de otro, ayudan a constatar que las víctimas cuyo paradero se desconoce fueron identificadas en estos lugares, ya sea porque se las escuchó en los interrogatorios, o bien porque lograron hablar brevemente, o bien porque lograron quitarse la venda que cubría sus ojos, pudiendo identificarse unos a otros. Este es el caso de una de las tantas víctimas que estuvieron reclusas en Londres n° 38, nos referimos a Víctor Daniel Muñoz Arévalo (DD) cuyo rastro se perdió en este recinto. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación confirmó su situación represiva indicando que:

¹⁰²⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 464.

“el 21 de agosto de 1974 fue detenido en su trabajo de la Vega Central Víctor Daniel Arévalo Muñoz, aparentemente vinculado al PC. Al día siguiente fue detenido Alberto Bladimir Arias Vega, comunista, vecino del barrio en Conchalí de Víctor Arévalo y vinculado políticamente a él.

Ese mismo día 22 fue detenido por la DINA la cónyuge de Víctor Arévalo, quien fue conducida a Londres n° 38 donde constató la presencia de Alberto Arias.

La cónyuge fue puesta en libertad, pero Víctor Arévalo y Alberto Arias desaparecieron en poder de la DINA.

La Comisión está convencida de que la desaparición de ambos fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos”¹⁰²⁷.

Los antecedentes del caso, así como los testimonios que acompañan su expediente están publicados en varios medios vinculados a organismos de derechos humanos, y corresponden a los originalmente entregados a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Algunos de las declaraciones describen la casa de calle Londres n° 38, indicando que: “tenía un portón de metal plomo, hall de entrada y galería con piso de baldosas rojas con blanco, que terminaba con descenso de tres peldaños a una sala pequeña. Había una sala muy pequeña con una luz intensa en que interrogaban”¹⁰²⁸. En el caso que señalamos, la víctima pudo dar su testimonio a su esposa cuando fueron estuvieron detenidos en la celda. “Le contó que lo habían golpeado y torturado con electricidad, ácido en la boca, fierros en el ano y nada de agua o comida. Los agentes lo amenazaban con pasarle una camioneta por encima”¹⁰²⁹. Las

¹⁰²⁷ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 541.

¹⁰²⁸ Ficha de recinto n° 11.878, en expediente de Víctor Daniel Arévalo Muñoz (DD), chileno, 26 años al momento de su detención, vendedor. Fue detenido el 21 de agosto de 1974 desde su lugar de trabajo por agentes de la DINA. Este caso y los testimonios que componen la historia de su situación represiva ese encuentran disponibles en, <http://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/119/010arevalo_victor.pdf>, <<http://www.londres38.cl/1937/propertyvalue-30355.html>>. [Consultado en noviembre de 2011].

¹⁰²⁹ Ficha de testigo n° 11.869 de Ana Cristina Olivos De la Fuente, en expediente de Víctor Daniel Arévalo Muñoz. Véase Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, ¿Dónde Están?, tomo 7, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978, p. 1692.

descripciones entregadas en estos y otros testimonios, en cuanto a las características de este centro de detención, fueron más tarde corroboradas cinco años más tarde, en la visita que realizó al inmueble el juez Servando Jordán el 22 de junio de 1979, de acuerdo “con lo decretado a fs.97 vta. En el expediente por presunta desgracia de Jaime Buzio, rol n° 11.273 del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía”¹⁰³⁰. En la descripción se deja constancia de que una persona que trabajaba como florista muy cerca de la casa, había manifestado que dos meses antes de la inspección, llegaron dos camiones a limpiar el recinto de calle Londres n° 38. A pesar de ello, la narración que realizó el juez en su inspección, coincidió con aquellas que desde 1974, venían entregando a diversos organismos de derechos humanos las víctimas que habían sobrevivido a los apremios. Ejemplo de ello es la descripción de una habitación de tortura, y que coincide con dibujos realizados por algunas víctimas.

“Se examina a continuación un entrepiso que queda sobre el garaje, en este entrepiso hay dos habitaciones, es un pequeño recinto que queda debajo de la escala de madera que conduce al entrepiso. En la primera habitación próxima a la escala se observa un somier con patas de madera y malla metálica. Dicho somier está cubierto con pedazos de cartón y como varios de ellos presentan vestigios al parecer de sangre humana (...)”¹⁰³¹

En la misma explicación se agregó el testimonio una persona que había indicado que de una florista que Debido a que al gran número de personas que estuvieron detenidas en este lugar, la casa de Londres n° 38 rápidamente se posicionó como un lugar clandestino de reclusión en el centro neurálgico de la ciudad, en donde la tortura, muerte y desaparición se materializaron cada día, durante los casi doce meses en que estuvo en funcionamiento. “Los

¹⁰³⁰ Visita del Juez Servando Jordán al Inmueble de Londres 38, en Santiago del 22 de junio de 1979. Disponible en, < http://www.londres38.cl/1934/articles-85510_recurso_1.pdf>.[Consultado en septiembre de 2011]. Véase anexo n° 13.

¹⁰³¹ Ibíd. Véase en anexo dibujo sobre este recinto, Testimonio de detención en Villa Grimaldi, en Caja n° 1 “Torturas”, Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Mayo 1974.

testimonios recibidos, indican que los detenidos eran introducidos en el garage del lugar, donde se les registraba y fichaba. El segundo y tercer piso estaban destinados a los interrogatorios”¹⁰³². A su vez existieron flujos importantes de detenidos hacia otros centros, entre ellos Villa Grimaldi. “Según los testimonios, eran conducidos en furgones frigoríficos herméticos, tendidos boca abajo, amarrados y vendados”¹⁰³³. Asimismo señaló que el tiempo que permanecían en Londres 38, oscilaba entre días y semanas hasta alcanzar un mes. Si bien el Informe Rettig, señaló que la amplia casa se hizo estrecha para recibir a la cantidad de detenidos. La Comisión Valech, tampoco especificó el número de detenidos, cuestión que pone en evidencia la enorme complejidad de intentar registrar de manera exacta el número de prisioneros que pasaron por este recinto. Sin embargo la organización “Londres 38. Espacio de memorias”, indica que junto a los otros tres recintos secretos de detención que son materia de nuestra investigación:

“(…) fueron hechos desaparecer y/o ejecutados más de 219 prisioneros, en su mayor parte miembros del MIR, cifra equivalente al 40% de las estructuras de esa organización existentes al comienzo del año 1974 en Santiago. Esta fue una de las ofensivas represivas más intensas de la Dina. En Londres 38, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas y, hasta donde se ha podido establecer, desde allí la DINA hizo desaparecer o ejecutó a 96 personas”¹⁰³⁴.

En el análisis del recinto de reclusión y tortura de Londres 38 hemos considerado como universo de los noventa y seis casos que identificó como

¹⁰³² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 442. El Informe indicó que numerosos prisioneros fueron trasladados en su mayoría al campamento de Tejas Verdes, también a cargo de la DINA, y que incluía el campamento de prisioneros n° 2 de la Escuela de Ingenieros Militares del Regimiento de Tejas Verdes y la Escuela misma. Estaba ubicado en la zona sur de San Antonio (V Región) y fue utilizado por la DINA para recluir e interrogar a personas que provenían de distintos centros de Santiago”. En, Comisión chilena de derechos humanos, Fundación Ideas, *Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, op. cit., p. 68.

¹⁰³³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 442.

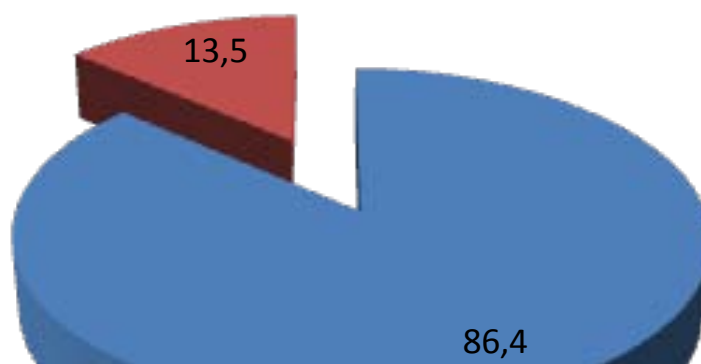
¹⁰³⁴ Disponible en, <<http://londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-32013.html>>. [Consultado en octubre de 2011].

víctimas la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y que están identificados públicamente por la organización “Londres 38, Espacios de Memorias”. De total de casos estudiados, como se observa en el gráfico n° 1, las víctimas mayoritariamente fueron hombres con un equivalente al (86,4%), y las mujeres al (13,6%), de cuales dos estaban embarazadas.

Víctimas según sexo

sexo	número	%
Hombres	83	86,4
Mujeres	13	13,6
Total	96	100%

Víctimas según sexo (%)



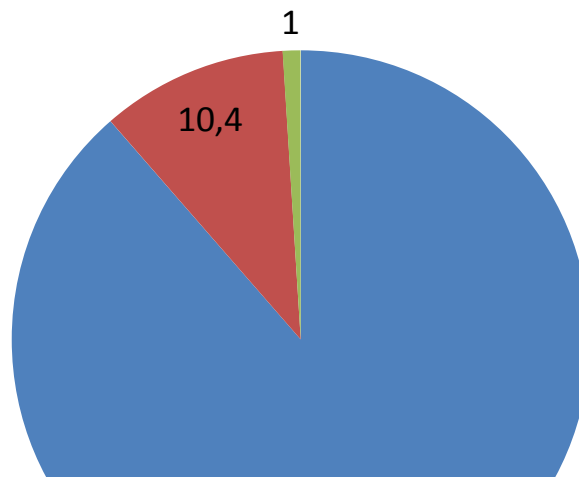
Fuente: Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* 7 tomos, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978. Disponible en, <www.londres38.cl>.

En cuanto a los efectos de la reclusión el (88, 54%) son detenidos desaparecidos (DD), y el (10,4%) corresponde a ejecutados políticos, existiendo una mujer (1,0%) que perdió la vida producto de la tortura a que fue sometida, como lo señala el siguiente gráfico.

Efectos de la reclusión.

Situación/sexo	Hombres	Mujeres	Total
Desaparecidos	74	11	85 (88,5%)
Ejecutados	9	1	10 (10,4%)
Muerte por tortura	0	1	1 (1,1%)

Efectos de la reclusión (%)

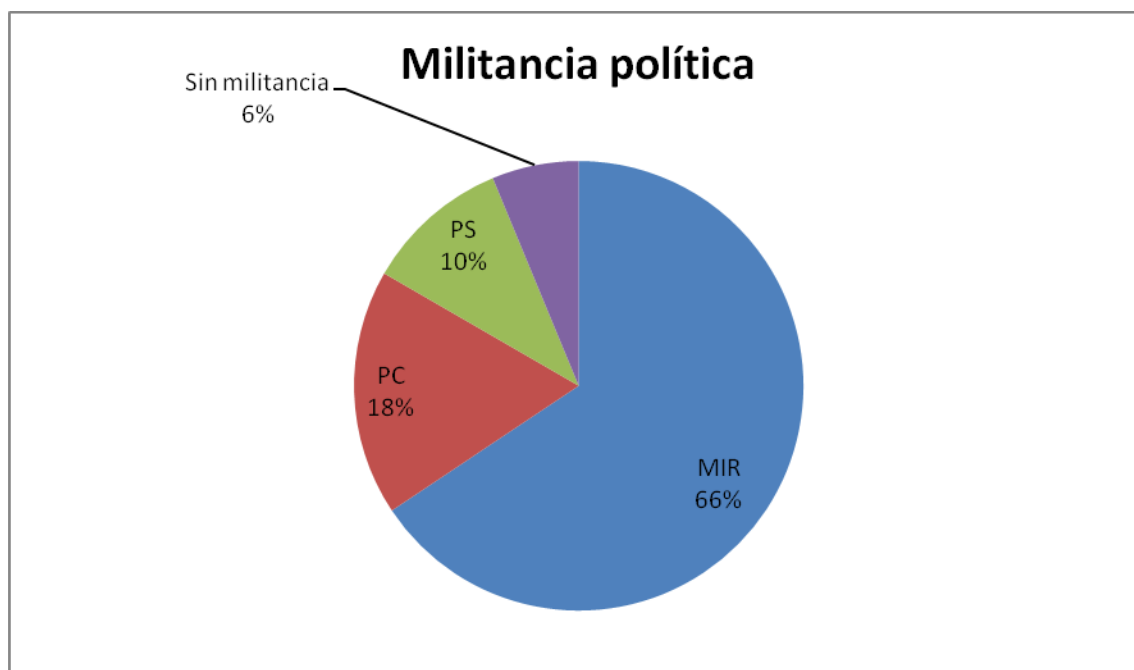


Fuente: Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* 7 tomos, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978. Disponible en, <www.londres38.cl>.

Respecto a la militancia de las víctimas, como lo constató tanto el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como el Informe Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la violencia generalizada fue aplicada sobre todo a los grupos de izquierda, adherentes y simpatizantes al gobierno de la Unidad Popular. Es por esta razón, que de acuerdo al estudio cronológico que realizó el Informe Rettig, se observa que la sistematicidad de la violencia fue selectiva en la segunda etapa de la dictadura, y que estuvo dirigida fundamentalmente a los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con un (65, 6%), el Partido Comunista de Chile (PCCH) (17, 7%) y Partido Socialista (10,4%), cuestión que se comprueba al analizar la militancia política de las víctimas que estuvieron detenidas en la casa de Londres nº 38, como se puede observar en las siguientes gráficas, donde también las hemos agrupado según sexo, donde se observa la preponderancia de los hombres como principales víctimas, sin embargo es importante subrayar que eso no resta importancia al tipo de violencia que se ejerció sobre las mujeres.

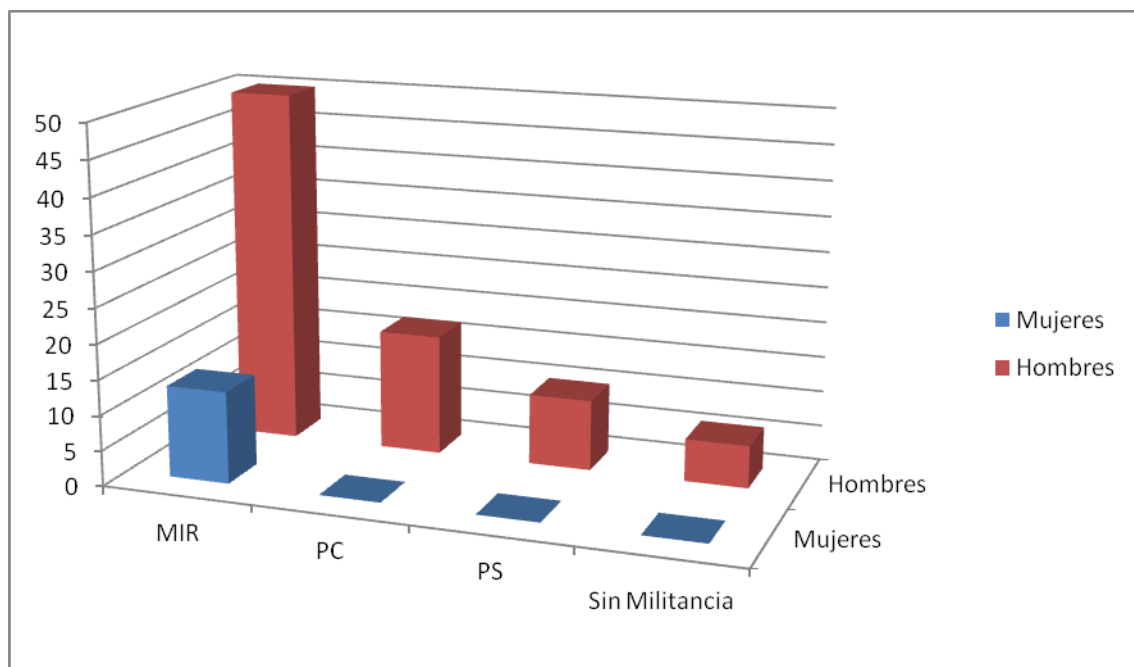
Militancia política.

Organización y/o partido político	Hombres	Mujeres	Total
Movimiento de Izquierda Revolucionaria	50 (79,4%)	13 (20,6%)	63 (65,6%)
Partido Comunista	17 (100%)	0 (0,0%)	17 (17,7%)
Partido Socialista	10 (100%)	0 (0,0%)	10 (10,4%)
Sin militancia	6 (100%)	0 (0,0%)	6 (6,2%)



Fuente: Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* 7 tomos, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978. Disponible en, <www.londres38.cl>.

Militancia política según sexo (%).



Fuente: Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* 7 tomos, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978. Disponible en, <www.londres38.cl>.

Para acercarnos al conocimiento de las formas en que se narra lo sucedido en Londres 38, hemos revisado los noventa y seis casos señalados, cuyos testimonios aparecen registrados de forma oficial en el sitio web de la organización de Londres 38, así como en la publicación a cargo de la Vicaría de la Solidaridad *¿Dónde Están?*, y en el Informe Nacional sobre Verdad y Reconciliación. Debido a la dificultad del relato en cuanto a que no todos los testimonios detallan de la misma forma su paso por este recinto clandestino, asimismo y con el fin de profundizar en las formas de narración respecto a la experiencia de reclusión de las víctimas, es decir, cómo es narrado el horror en el que parte importante pasa por el “lugar” carcelario, hemos incorporado testimonios que se han publicado en diferentes investigaciones. En algunos casos hemos señalado sus datos personales, en otros, adoptamos la metodología utilizada por la Comisión Valech, en cuanto a señalar sexo, edad al momento de su detención, adscripción política y ocupación.

Como lo hemos manifestado, referirnos a estos temas no es fácil, por cuanto lo que intentamos hacer es intentar nombrar aquello que comporta la

palabra horror, y que es parte de la memoria histórica de este país. Ya que como hemos analizado en el capítulo sobre la transición chilena, es interesante observar cómo dentro de la sociedad civil, se va creando el espacio para asumir como cuerpo social, lo que denunció públicamente la Comisión Rettig, y más tarde la Comisión Valech, y tiempo que otra parte importante de la sociedad, frente a esa “verdad pública”, se negó cualquier validez. Es en medio de esta fractura social, que emerge el reconocimiento público de los recintos clandestinos de detención, que como la casa de Londres 38, se implementaron en el más absoluto hermetismo.

Tanto el Informe Rettig como Valech, insistieron en que estos recintos se caracterizaron por ejercer determinados tipos de apremios físicos, a través de los cuáles fueron reconocidos por los sobrevivientes. En este caso, los informes señalados indicaron que Londres 38 se caracterizó por practicar sobre todo la tortura con electricidad, así como mantener a los detenidos amarrados a una silla.

“El método preferido de tortura era la aplicación de electricidad o “parrilla”. Probablemente el método de tortura que más caracteriza a este recinto (y que se facilita por el mayor desorden en el período inicial de la DINA, en que se detenía no sólo al sospechoso, sino a parientes y personas relacionadas con él) fue el de presionar a los detenidos con sus parientes cercanos, sea deteniéndolos, torturándolos y aun sometiéndolos a vejaciones sexuales en su presencia”¹⁰³⁵.

Frente a la tortura con aplicación de electricidad, dentro de los testimonios de sobrevivientes que una década más tarde recibió la Comisión Valech, se puede mencionar el relato de un hombre detenido por agentes de la DINA en abril de 1974, y llevado a la casa de calle Londres nº 38:

¹⁰³⁵ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 465.

“ [...] me hacen meterme en la tina llena de agua, no muy fría, tendido boca arriba siento unos tiritones fuertes en el cuerpo, siento un dolor fuerte en el cuerpo y parte del corazón, quedo sin conocimiento sólo por unos segundos, vuelvo a mi conocimiento, me repiten esto dos veces más, seguramente eran golpes de corriente. Luego me ponen boca abajo con un elemento, seguramente como un horcajo y algún mango, me lo colocaban en el cuello y me hundían la cabeza en el agua, cuando ya estaba muy desesperado y había tomado un poco de agua, me quitaban el elemento, repitiendo varias veces lo mismo; en ese tipo de tortura no me preguntaban nada, me sacan de la tina y me sientan en el wáter. Desnudo y manos esposadas me pregunta una voz si conozco a algunas personas y que dónde se encuentran [...]”¹⁰³⁶.

Asimismo esta Comisión señaló los testimonios de las víctimas indicaron que habían sido brutalmente torturadas, permaneciendo la mayor parte del tiempo “vendados, generalmente amarrados a una silla, eran desnudados y no recibían alimentación y sólo excepcionalmente se les daba de beber”¹⁰³⁷. Sometidos a intensos interrogatorios de forma constante, durante gran parte de su reclusión. Permanecían hacinados y en condiciones precarias de higiene. Fue una práctica habitual que durante estos interrogatorios a los prisioneros se les golpeará y tortura indistintamente. Entre las formas de tortura, el informe Valech señaló:

“ *pau de arara*, el submarino seco y el mojado, con aplicación de electricidad en la parrilla, colgamiento, quemaduras con cigarrillos, el teléfono, fueron sometidos a la ruleta rusa, se les administraban drogas y estaban expuestos a ruidos molestos durante la noche para impedirles dormir, especialmente música a todo volumen. Eran obligados a escuchar y presenciar torturas a otros detenidos;

¹⁰³⁶ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, p. 236.

¹⁰³⁷ *Ibíd.*, cap. VI, p. 442.

fueron objeto de vejaciones y violaciones sexuales, simulacros de fusilamiento, amenazas y manipulación psicológica”¹⁰³⁸.

Dentro de los testimonios que publicó la Comisión Valech, se encuentra el de una mujer detenida en enero de 1974, y conducida a este recinto.

“Me trasladaron a otra pieza en donde me hicieron desnudarme completamente. Luego me amarraron las muñecas con los tobillos quedando totalmente encogida. Enseguida colocaron una barra entre mis muñecas y los tobillos quedando suspendida de un mueble. En esta posición me golpearon los oídos y me aplicaron electricidad en las sienes, en los ojos, en la vagina, en el recto y en los pechos. Me interrogaban por nombres de personas, [...] Les dije que no conocía a nadie, entonces me volvieron a golpear y aplicar corriente. En la boca me colocaron un paño, el que me lo sacaban a ratos para que hablara [...]”¹⁰³⁹.

En gran parte de los testimonios revisados se hizo uso de la violencia sexual, desde formas de tocamientos indebidos en los cuerpos de las víctimas denominadas “allanamientos corporales”, hasta la violación.

“Me vendaron los ojos con un trapo, me amarraron las manos a la espalda y de un solo empujón me tiraron arriba de una silla. No sé a qué hora desperté en un rincón, helada y encogida. Horas más tarde me llevaron al segundo piso, me violaron y después me llevaron a un catre metálico, me desnudaron y me amarraron encima: era la parrilla. Allí me pusieron corriente eléctrica en la boca, los pezones y vagina. (...) perdí la noción del tiempo y de mí misma. Cuando desperté pedí autorización para ir al baño y me lo negaron, sólo se podía ir al baño cuando ellos querían”¹⁰⁴⁰.

¹⁰³⁸ Ibid., pp. 442-443.

¹⁰³⁹ Ibid., cap. V, p. 231.

¹⁰⁴⁰ “Una sobreviviente de la Casa de Torturas Londres 38”, en Kunstman Torres, W., y Torres Ávila, V. (recop.), *Cien voces rompen el silencio. Testimonios de ex presas y presos políticos*

5.2.2.- La Venda Sexy

La casa de calle Irán nº 3037. Ubicada en específicamente en esquina de calle Los Plátanos, en el sector de Quilín y Macul. El Informe Rettig señaló este local completaba la lista de los principales centros de detención y tortura que mantuvo la DINA. Y que junto a Londres nº 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, La Discotéque, fue uno de los recintos donde permanecieron, muchos de los que luego serían “detenidos desaparecidos de la DINA”.

Era una casa amplia de dos pisos y un subterráneo. Estaba ubicada en un barrio de clase media de Santiago, en la calle Irán nº 3037 esquina de calle Los Plátanos, cerca de la intersección de Quilín y Macul. El Informe de la Comisión Valech, indicó que la mayoría de las detenciones se realizaron en 1974. Asimismo, gracias a los testimonios de las víctimas, formuló una descripción sobre este recinto, indicando que “el piso era de parquet, en el baño había una ventana redonda y la escalera para el segundo piso era de mármol, muy larga, curva y ancha”¹⁰⁴¹. Sin bien, esta no es una descripción detallada del recinto de tortura, esto se debe entre otros, a que las víctimas estuvieron permanentemente con la vista vendada, por ello, en sus testimonios, lo primero que tienden a describir, es cómo era el suelo por el que los hacían caminar. Es decir, a través de los diferentes datos que otorgan los sobrevivientes, es posible elaborar el mapa de horror vivido.

Es interesante destacar que en relación con los otros tres recintos secretos de detención, La Venda Sexy, es de la que menos datos se tienen, a pesar que los dos informes de verdad señalaron que una de las características de este recinto fue la violencia sexual que se aplicó a hombres y mujeres. Esta situación sin duda ha planteado dificultades en este ámbito de la investigación, ya que la información que existe sobre este recinto es mucho más enunciativa, no sólo frente a los métodos de tortura, sino también en cuanto a la

de la dictadura militar en Chile (1973-1990). Fuentes para la Historia de la República, vol. XXIX, Santiago, DIBAM, 2008, p. 458.

¹⁰⁴¹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 444.

visibilización de las víctimas que aquí estuvieron. Al parecer no hay presencia de una organización de recuperación de memoria respecto al pasado de este lugar, o bien, ha sido mucho más difícil, cuestión que no escapa a los logros que han tenido en cuanto a este aspecto Villa Grimaldi, Londres 38, y José Domingo Cañas nº 1367, que hace sólo un par de años, han logrado mayor visibilidad en los medios de comunicación. Así también resulta paradójal que este recinto según testimonios publicados en diferentes medios, entre ellos, los propios informes, se señale que el tipo de tortura que caracterizó a este recinto fue la de tipo sexual. Resulta al mismo tiempo paradójal que sea uno de los recintos estudiados que sea mucho más difícil obtener información. Una de las razones puede ser por la falta de testigos, y por tanto datos, debido a que muchas de las víctimas que pasaron por este recinto, engrosaron el número de «detenidos desaparecidos» como lo señaló el Informe Rettig. La otra explicación posible, y muy compleja, tiene que ver con la experiencia de la situación traumática y el miedo que estas experiencias producen en las víctimas, tema que escapa a nuestros objetivos, pero sin duda plantea una posible perspectiva de investigación. Cómo historizar el trauma y el miedo en América Latina. Algunos de los trabajos revisados durante la elaboración de esta investigación, de autores como Dominick Lacapra, Paul Ricoeur, Jean Delumeau, Marc Augé, Josefina Cuesta, Elizabeth Jelin, Elizabeth Lira, por sólo citar algunos de los plantean importantes aspectos sobre los efectos de la violencia política en un amplio campo de análisis, en que es posible encontrar puentes comunes entre memoria, olvido, trauma y víctimas¹⁰⁴².

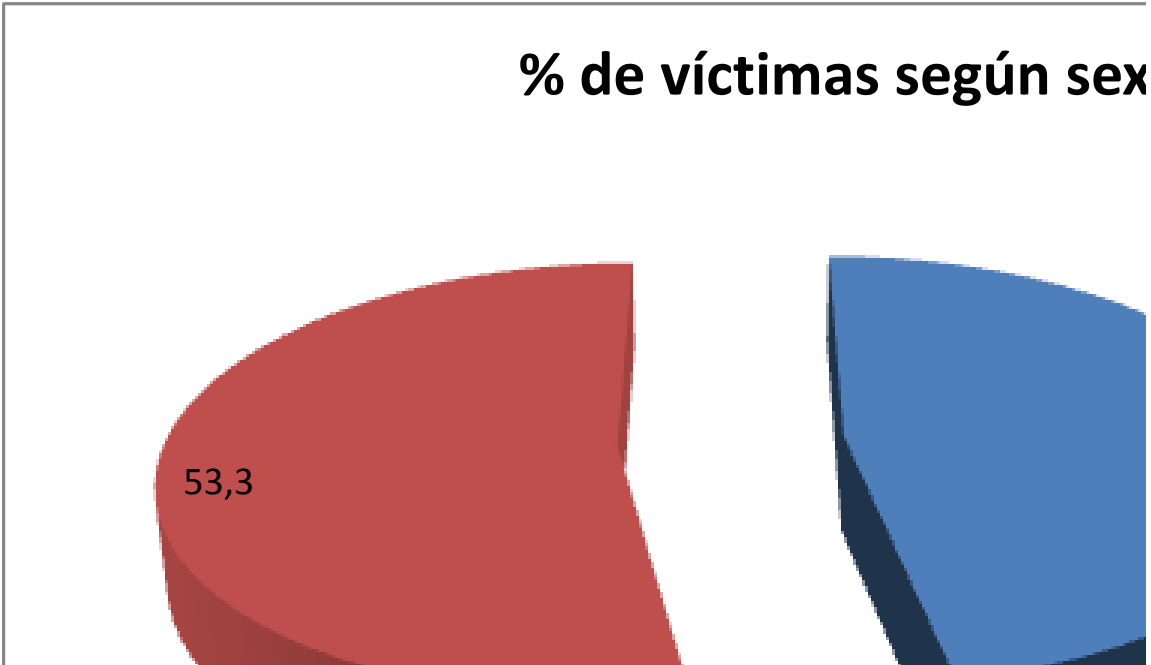
En cualquier caso, nos enfrentamos ante la falta de fuentes que respalden las evidencias que otorgan los testimonios de las víctimas. De los datos consultados en los informes de Verdad, así como en el Arhcvio de la

¹⁰⁴² Nos referimos fundamentalmente a las investigaciones revisadas en esta investigación, véase Delumneau, J., *El miedo en Occidente*, México, Taurus, 2005. Lacapra, D., *Historia y memoria después de Auschwitz*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008; *Representar el Holocausto. Historia, teoría, trauma*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008; *Historia en Tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica*, Buenos Aires, FCE, 2006. Ricoeur, P., *La memoria, la historia y el olvido*, Madrid, Trotta, 2003. (*Histoire, mémoire, oubli*, Paris, Seuil, 2000). Jelin, E., *Los trabajos de la memoria, Colección Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002. Lira, E., *Psicología de la amenaza política y el miedo*, Santiago, ILAS, 1991. Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política 1932-1994*, Santiago, LOM, 1999.

Vicaría de la Solidaridad, rescatamos los datos de 21 víctimas, cuyos datos graficamos en el siguiente cuadro:

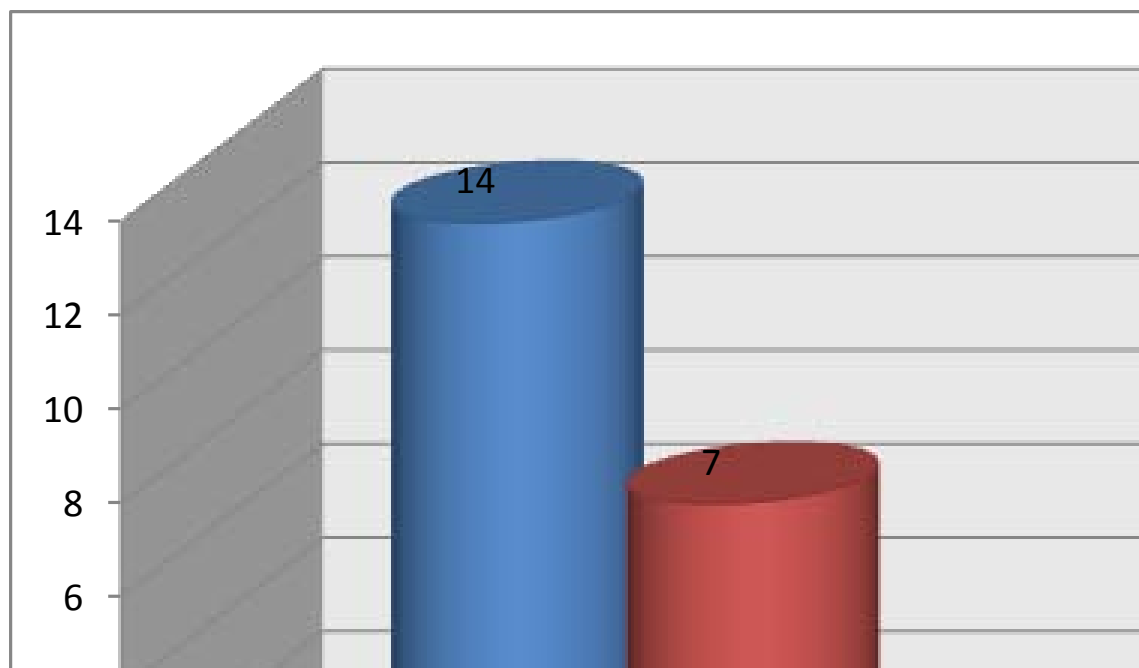
Total de casos investigados

N° casos estudiados	21	100%
Hombres	10	(47,7%)
Mujeres	11	(52,3%)



Fuente: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago, Gobierno de Chile 1996, (1º ed. 1991). Archivo. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde Están?* 7 tomos, Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978.

Situación de los detenidos.



Fuente: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago, Gobierno de Chile 1996, (1º ed. 1991).

En cuanto a la militancia de las víctimas 14 (66,7%) eran del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y las 7 (33,3%), que corresponde a sobrevivientes no expone su militancia. Pareciera ser que frente a este recinto de tortura, nos encontramos en un proceso de re-construcción de su historia que por diferentes motivos, va a un paso más lento que el de los otros centros en estudio. Lo que hemos encontrado son datos indirectos, en los que faltan acciones de agrupaciones que intenten rescatar del olvido esta casa que fue escenario de graves violaciones de derechos humanos. Considerando la escasez de fuentes y la dificultad de acceder a ellas, hemos considerado casos de víctimas que estuvieron en este recinto, y que son nombrados en el informe Rettig, y así como en aquellos testimonios de sobrevivientes que en diferentes declaraciones hacen referencia a víctimas que se encuentran en condición de detenidas desaparecidas. La Comisión Rettig, no señaló fechas exactas sobre el funcionamiento de la casa de calle Irán nº 3037, sino más bien indicó que habría operado “durante el verano de 1975 y hasta mediados de ese año, en

forma paralela a Villa Grimaldi”¹⁰⁴³. Asimismo indicó que al parecer funcionaba por un equipo de agentes diferentes al que existía en Villa Grimaldi, debido a las formas en que ejecutaba las detenciones y torturas, así como a las identidades de sus agentes. Respecto a la forma en que operó el recinto indicó que: “Los detenidos permanecían con la vista vendada, varios en una misma pieza [habitación], pero separados los hombres de las mujeres. La comida era bastante mejor que la de los demás recintos, el trato era, en general, menos brutal”¹⁰⁴⁴. Esto último nos parece una contradicción, debido a que varios testimonios publicados incluso en medios de comunicación se ha señalado la brutalidad de la tortura aplicada en este recinto, toda vez que tenía connotaciones sexuales aberrantes, donde las víctimas, -mujeres y hombres- eran agredidas sexualmente no sólo por los agentes sino también por animales adiestrados para estos fines. Respecto a los agentes que operaban en esta casa, el Informe Rettig, señaló que se desempeñaban en un horario parecido a una jornada de trabajo, y al término de ella el recinto quedaba a cargo de guardias. “Fuera de ese horario no se torturaba y las normas más estrictas se relajaban, dependiendo de la voluntad de los guardias. El recinto tenía música ambiental permanente, razón por la cual era conocido como La Discotéque”¹⁰⁴⁵. En cuanto a los métodos de tortura, el Informe Rettig, señaló que:

“Se diferenciaban de los otros recintos en cuanto se enfatizaban las vejaciones de tipo sexual. La violación de detenidas y otros abusos sexuales de parte de guardias y agentes eran práctica corriente. También los detenidos varones eran víctimas de tales vejaciones. La parrilla y las corrientes aplicaciones de electricidad eran, asimismo, práctica habitual en el recinto. Los episodios de tortura se alternaban con frecuencia con períodos de relajación y aún amabilidad de parte de los agentes, como método para tratar de obtener información requerida”¹⁰⁴⁶.

¹⁰⁴³

¹⁰⁴⁴ *Ibíd.*

¹⁰⁴⁵ *Ibíd.*, p.468.

¹⁰⁴⁶ *Ibíd.*

Por su parte, la Comisión Valech no modificó esta información, sino que agregó mayores antecedentes, indicando por ejemplo que la Venda Sexy era parte de un circuito de recintos de tortura por el que pasaban las víctimas, entre ellas, Villa Grimaldi, Londres nº 38 y José Domingo Cañas, para luego regresar a los recintos desde dónde provenía. En este contexto, aparecen en los testimonios, otros recintos a los que se enviaban los prisioneros como el Campamento de Prisioneros Cuatro Álamos. Este recinto ubicado en Santiago, (Avenida Departamental nº 3000, cerca de Avenida Vicuña Mackenna, en calle Canadá). Era administrado directamente por la DINA, aunque según el Informe Rettig, el personal no cumplía funciones operativas, sino más bien “se trataba de guardias y de personal subalterno a cargo, al parecer, de un oficial de Gendarmería que habría sido adscrito a la DINA”¹⁰⁴⁷. Y que funcionó durante todo el período vigente de la DINA. Se trataba de “una serie de doce celdas pequeñas, una celda grande y oficinas, todas ellas formando parte de un conjunto que se encontraba en el interior del Campamento de detenidos Tres Álamos, que era administrado por Carabineros de Chile”¹⁰⁴⁸. En lo que respecta a este Campamento de Prisioneros, el Informe Valech, que funcionó desde 1974 hasta 1976, y que los detenidos permanecían incomunicados y con la vista vendada, y que no se reconocía de forma oficial su detención en este lugar. Se trataba de un lugar de “recuperación física, ya que hasta allí llegaban después de haber permanecido en recintos de tortura”¹⁰⁴⁹. En lo que respecta al Campamento de Prisioneros de Tres Álamos, la Comisión Valech precisó que: “era una construcción que estaba dividida en cuatro pabellones, dos de hombres, uno de mujeres y un pabellón de incomunicación. Este último es el recinto denominado Cuatro Álamos”¹⁰⁵⁰.

En definitiva, al parecer los detenidos que llegaban a la Venda Sexy, venían desde otros recintos. El Informe Valech, señaló que las torturas e

¹⁰⁴⁷ Ibid., p. 464.

¹⁰⁴⁸ Ibid., p. 463.

¹⁰⁴⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 446.

¹⁰⁵⁰ Ibid., p. 437.

interrogatorios se realizaban en el subterráneo de la propiedad. Y subrayó frente a las agresiones sexuales que:

“En este recinto se practicó con especial énfasis la tortura sexual. Eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que se valían, además, de un perro adiestrado. Los testimonios denuncian que también sufrieron golpes, aplicación de electricidad, colgamientos, fueron sometidos a la *ruleta rusa*, sufrieron asfixia, quemaduras, privación de sueño, fueron obligados a presenciar y escuchar torturas a otros detenidos, amenazas; y manipulación psicológica permanente”¹⁰⁵¹.

5.2.3.- José Domingo Cañas nº 1367

Similar al inmueble de Calle Irán nº 3037, la casa de calle José Domingo Cañas nº 1367, se localizó en una zona de clase media en la ciudad de Santiago, en la intersección con calle República de Israel. Conocido también como “Cuartel Ollagüe”, este lugar ha tenido diferentes formas de ser habitado, hasta 1974 fecha en que fue ocupada por la DINA, era una casa habitación normal. “Hasta esa fecha pertenecía a un intelectual brasileño perseguido por el régimen, con posterioridad al golpe militar, la cedió a la embajada de Panamá para que ésta pudiera albergar a cientos de personas que solicitaban asilo”¹⁰⁵². El Informe Valech, precisó alguno de estos datos. Señaló que después de 1977 este inmueble pasó a depender de la Central Nacional de Inteligencia CNI. Y que “el 02 de marzo de 1987 se dictó el Decreto Supremo nº 324 del Ministerio del Interior, (...) publicado en el *Diario Oficial* el 24 de marzo del mismo año; en él que se agrega [ba] como recinto de detención en la Región Metropolitana”¹⁰⁵³. Sin embargo, este mismo año el Ministerio de Bienes Nacionales concedió el

¹⁰⁵¹ Ibíd., p. 443.

¹⁰⁵² Camus, M. E., “Testimonio imborrable: La casa de José Domingo Cañas”, en *Revista Análisis*, Santiago, del 6 al 12 de julio de 1987, p. 24. En Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

¹⁰⁵³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 443.

inmueble al Servicio Nacional del Menor (SENAME), que a su vez lo entregó a la Corporación de Protección, Orientación y Rehabilitación del Menor (PROMESI), donde funcionó entre 1987 y 1989. Desde esta fecha hasta el 2000, la casa estuvo abandonada. En ese año es adquirida por un empresario, quien demuele la propiedad, y la transforma en un estacionamiento, aun cuando se estaba gestionando en calidad de Monumento Histórico. Mediante el decreto n° 37.177, del 04 de febrero de 2002 se declara Sitio Histórico, a pesar de esta categoría y de las diferentes acciones de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, no se podía “habitar”, es a partir de 2009 cuando se comienza a construir “la casa de memoria”, que fue inaugurada el 30 de abril de 2010¹⁰⁵⁴.

Sin embargo, la forma en cómo habitó este inmueble por parte de la DINA, fue mediante la implementación de un recinto clandestino de detención y tortura. Tanto el Informe Rettig como Valech, coincidieron en señalar que su período de funcionamiento, situándolo entre agosto y noviembre de 1974. El Informe Rettig, lo denominó como un “local de transición, usado desde el fin del funcionamiento de la casa de Londres n° 38 y hasta comienzos del funcionamiento de Villa Grimaldi¹⁰⁵⁵. Asimismo, dicho informe indicó que a los detenidos se les mantenía por un número variable de días, y se les torturaba con los métodos similares a los otros recintos, es decir, golpes, aplicación de electricidad, para lo cuales los hacían desnudarse, junto a todo tipo de vejámenes, siempre con la vista vendada, maniatados. En cuanto a la descripción de este lugar, la Comisión Rettig especificó que:

¹⁰⁵⁴ Las diferentes acciones realizadas por estos “emprendedores de memoria”, han llevado a que de Corporación José Domingo Cañas, se denomina Fundación 1367, número en el que está situado el terreno de José Domingo Cañas. Es interesante destacar que como en otros recintos de detención los sobrevivientes como familiares de las víctimas, realizan velaciones, en este caso, corresponde a los días miércoles al atardecer. Como lo expone la Fundación 1367, Casa de la Memoria José Domingo Cañas: “Con esta actividad nos hemos dado a conocer no sólo en el barrio, sino que también se ha transformado en nuestra muestra permanente del compromiso adquirido para la recuperación de la Memoria de este Sitio. Nuestras velas han sido desde la fundación del colectivo, la señal más constante y simbólica de la actividad que realizamos”. Disponible en, <<http://casamemoria1367.blogspot.com.es/>>.[Consultado en enero de 2012].

¹⁰⁵⁵ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 465.

“Los detenidos eran mantenidos en una pieza común relativamente amplia, similar a la de Londres nº 38, y en un lugar llamado “el hoyo”, que era algo así como una despensa, sin ventanas ni ventilación, de aproximadamente 1 x 2 metros, donde se llegó a tener a un mismo tiempo hasta más de diez detenidos, en condiciones extremas de hacinamiento y falta de aire”¹⁰⁵⁶.

Otras investigaciones, señalan que en promedio había como promedio 40 detenidos, hombre, mujeres, a quienes se les mantenía con la vista vendada y con un guardia armado dentro del espacio donde permanecían.

“Las mujeres estaban en un pequeño cuarto que puede haber sido el de servicio anteriormente, y que estaba separado por un baño y un pasillo de un closet pequeño donde se encerraba a los hombres. Hubo momentos en que el hacinamiento era tal que, cuando los guardias abrían la puerta del closet para sacar a algún detenido a interrogatorio, los que permanecían dentro caían al suelo”¹⁰⁵⁷.

Asimismo la descripción que aportó la Comisión Valech, indicó que se trataba de:

“(…) una casa y un edificio contiguo. La casa tenía un solo piso, con jardín en la entrada y rodeada de una reja de un metro y medio de alto. En el costado derecho había un garaje. En el interior existía un patio a través del cual era posible comunicarse con el edificio contiguo, de tres pisos”¹⁰⁵⁸.

Situada en un barrio residencial, este recinto revestía pocas sospechas sobre su uso. De esta casa, entraban y salían camionetas C-10 con la parte

¹⁰⁵⁶ *Ibíd.*

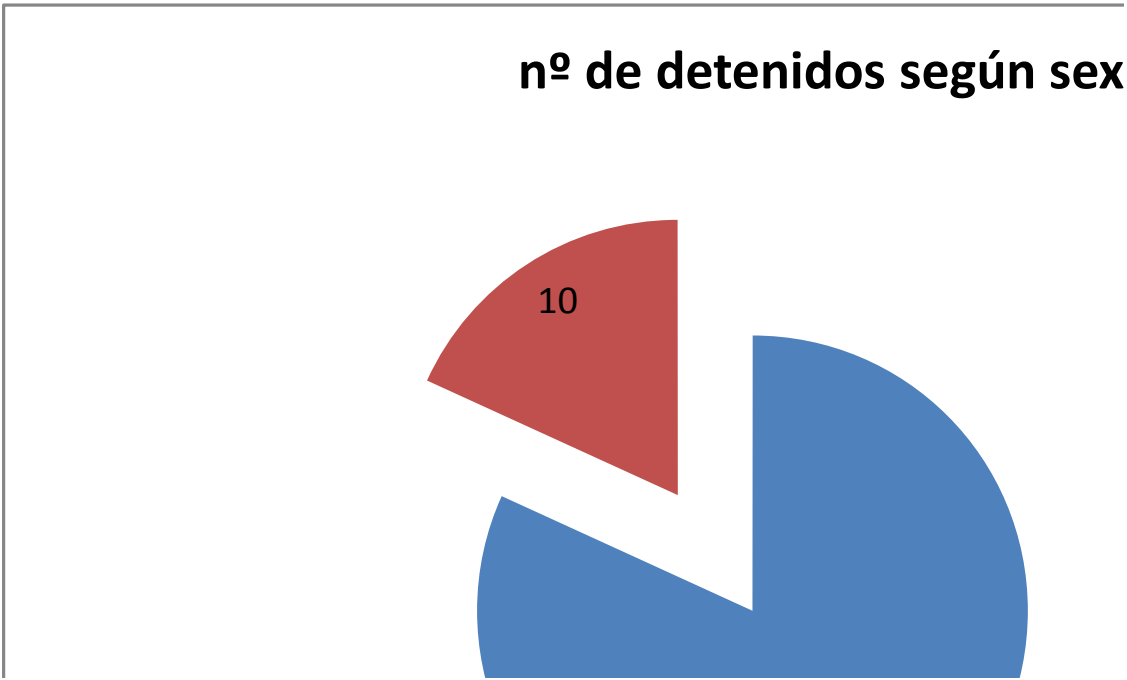
¹⁰⁵⁷ Camus, M. E., “Testimonio imborrable: La casa de José Domingo Cañas”, op. cit., p. 25.

¹⁰⁵⁸ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, pp.443 - 444.

posterior cubierta por un toldo. Se oía música muy fuerte. En general los vecinos de esta casa sabían que algo extraño ocurría, sin embargo, de lo que ocurría en su interior nadie se atrevía a preguntar. En el análisis de este recinto hemos considerado el estudio de 55 víctimas, de ellas 45 eran hombres (81,8%) y 10 mujeres (22,2%).

Casos analizados del centro de detención y tortura José Domingo Cañas.

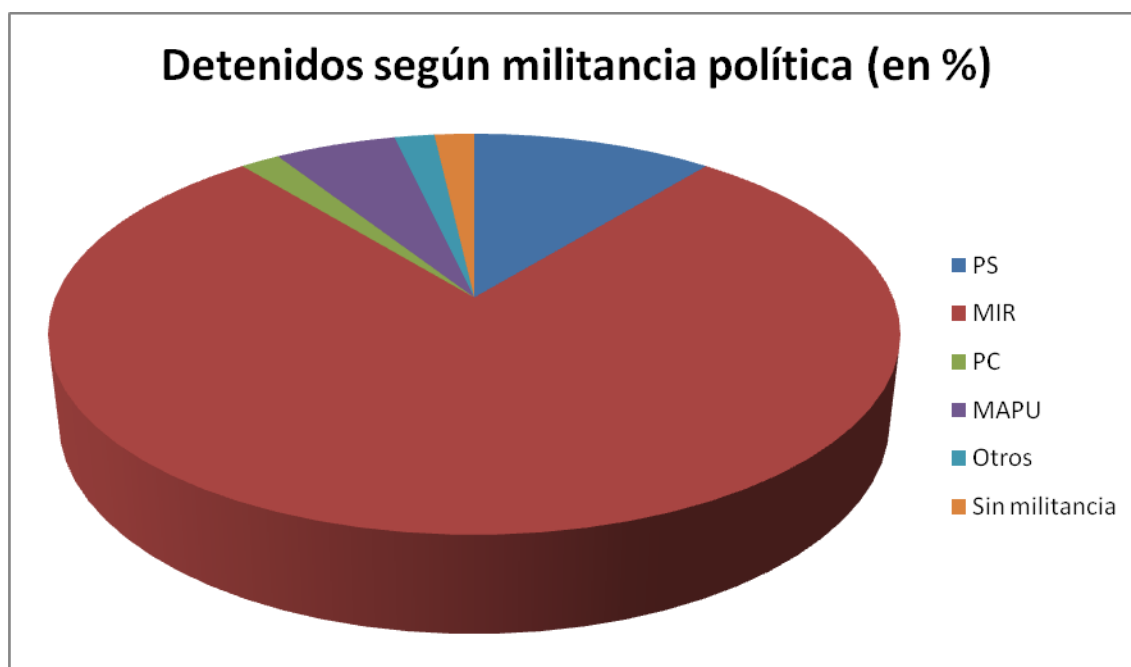
Sexo de las víctimas	Número	%
Total de casos analizados	55	100%
Hombres	45	81,8%
Mujeres	10	22,2%



Fuente: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* 3 tomos, Santiago, Gobierno de Chile, 1996 (1ª ed. 1991).

Según militancia política de los casos estudiados

Partidos políticos	número	%
Partido Socialista (PS)	6	10,9
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	43	78,2
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)	3	5,5
Partido Comunista (PC)	1	1,8
Otros	1	1,8
Sin militancia	1	1,8



Fuente: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* 3 tomos, Santiago, Gobierno de Chile, 1996 (1ª ed. 1991).

A este recinto, los detenidos ingresaban maniatados y con la vista vendada o con una capucha en su cabeza, eran conducidos hasta el garage del inmueble, en donde “el personal de guardia los enrolaba y los registraba. Después los llevaban por el interior, al segundo piso del edificio. Los interrogatorios se realizaban en el tercer piso del edificio y en la casa que se comunicaba con éste”¹⁰⁵⁹. Fue habitual de este recinto que como en otros, los detenidos permanecieran vendados, amarrados o bien encadenados, sin ningún tipo de alimento y agua, de manera constante se les agredía física o

¹⁰⁵⁹ *Ibíd.*, p. 444.

verbalmente a través de amenazas de todo tipo para impedir que pudieran dormir. La Comisión Valech, reiteró la descripción realizada por su antecesora, indicando la existencia de dos espacios dentro de este recinto importantes, uno de ellos denominado “el hoyo”, que tenía características de originalmente ser una despensa, ya que no tenía ni ventanas ni ventilación, de un tamaño muy reducido, uno por dos metros aproximadamente. En el que se mantuvieron hasta más de diez personas, graves condiciones de hacinamiento, movilidad y asfixia. La permanencia de los detenidos en este recinto podía variar, según indica el Informe Valech, desde días, semanas y hasta más de un mes. Las personas que llegaban a este recinto, provenían en calidad de prisioneros, desde otros recintos clandestinos, entre ellos, los que son materia de nuestra atención. Una característica que señaló el citado Informe, fue que cuando los detenidos lograban ser liberados, la mayor de las veces en pésimas condiciones de salud, generalmente desnutridos, golpeados y choqueados, los dejaban abandonados en lugares alejados de la ciudad, habitualmente en sitios eriazos y aislados, recibiendo amenazas si denunciaban su detención. En cuanto al tipo de tortura que se les aplicó a las víctimas, el Informe Valech señaló:

“(…), en este recinto se torturó continuamente a las personas. Sufrieron golpes de puño y pies en todo el cuerpo, así como con laques o *tontos de goma* y culatazos. Fueron atados en una mesa, con brazos y piernas extendidos, y en esa posición recibían aplicación de electricidad en partes sensibles del cuerpo. Sufrieron la *parrilla*, vejaciones y violaciones sexuales las mujeres y también algunos hombres, simulacros de fusilamiento, el *submarino*, quemaduras, fueron obligados a presenciar como torturaban a otros detenidos y en algunos casos a familiares; debieron permanecer encapuchados o con los ojos vendados; sufrieron ahogamiento por asfixia, con una cuerda en el cuello o

con bolsas de plástico, y también la introducción de objetos por el ano, colgamientos y tortura psicológica”¹⁰⁶⁰.

5.2.4.- Villa Grimaldi

De los cuatro recintos que hemos analizado, Villa Grimaldi era el más alejado del centro neurálgico de Santiago. Localizado en Avenida José Arrieta a la altura de 8200, estaba situado en la comuna de Peñalolén. El Informe Rettig señaló que: “fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. (...) conocido por los agentes de la DINA como Cuartel Terranova, ya estaba en funcionamiento en 1974, como sede de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM)”¹⁰⁶¹. El informe Valech, precisó que anteriormente había funcionado un restaurante. Y que a fines de 1974 la propiedad había sido expropiada a la Corporación de Mejoramiento Urbano por Resolución Exenta nº 3.575 de la Corporación de Mejoramiento Urbano¹⁰⁶². Según los datos entregados por ambos informes, así como por la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, señalan que “durante los cinco años de funcionamiento del Cuartel Terranova (1973-1978) pasaron alrededor de 4.500 personas de diversos orígenes: militantes de izquierda, trabajadores, trabajadoras y estudiantes”¹⁰⁶³. En cuanto al número de víctimas de los cuales se tienen los datos, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, indica que “211 son detenidos desaparecidos DD y 18 ejecutados políticos”¹⁰⁶⁴.

¹⁰⁶⁰ Ibid.

¹⁰⁶¹ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 465. En la descripción que entregó el *Informe Rettig* se señaló que la localización de Villa Grimaldi, correspondía a la comuna de La Reina. Sin embargo el *Informe Valech*, la sitúa en la comuna de Peñalolén. En Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 444.

¹⁰⁶² Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 445.

¹⁰⁶³ Disponible en, <<http://villagrimaldi.cl>>. [Consultado en enero 2012].

¹⁰⁶⁴ Disponible en, <<http://villagrimaldi.cl/historia/>>. [Consultado en enero 2012]. Sin embargo, que en el número total de víctimas que aparece en su sitio web, se observa que han agregado antecedentes otras víctimas, cuestión que explica la diferencia en el número de víctimas señaladas inicialmente.

Relación según sexo de los detenidos

Sexo de la víctimas	Número	%
Hombres	197	85,3
Mujeres	32	13,9
Total	231	100

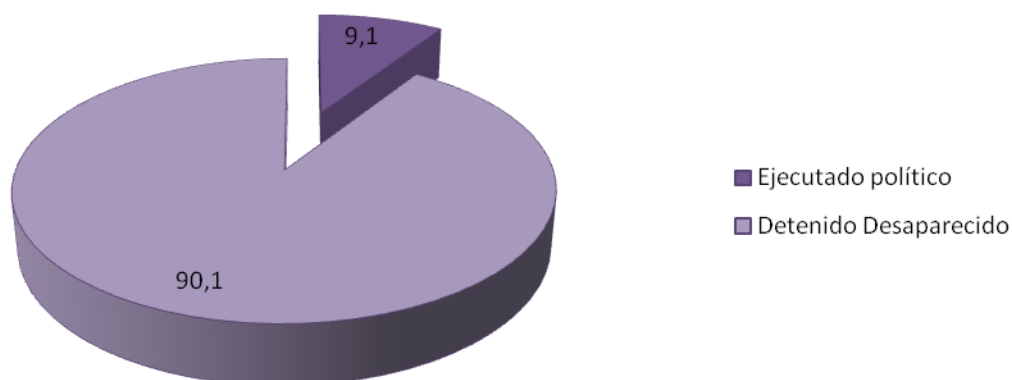


Fuente: *Corporación porque por la Paz, Villa Grimaldi*. Disponible en, <http://villagrimaldi.cl/victimas/>.

Situación represiva y relación según sexo de los detenidos.

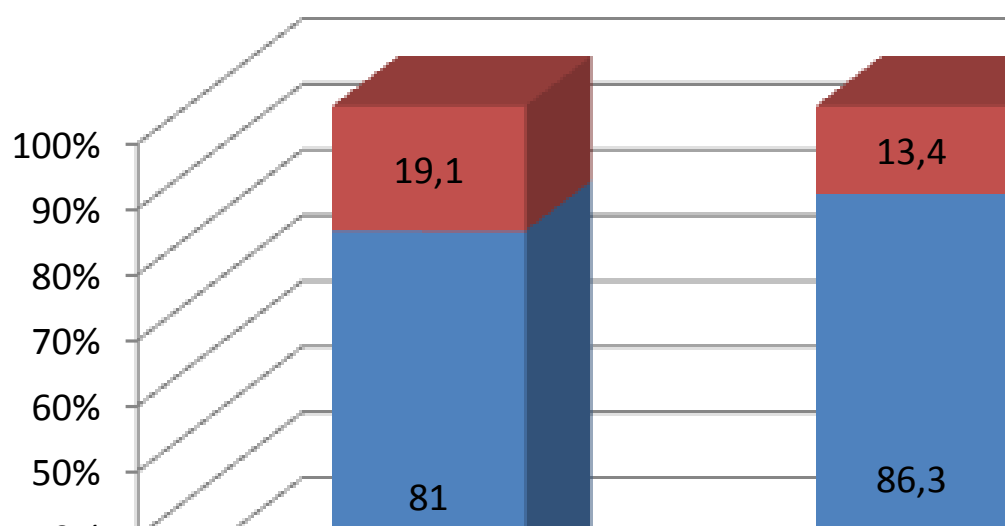
Situación represiva	Total	%	Hombres (%)	Mujeres (%)
Ejecutado político	21	9,1	17 (81%)	4 (19,1%)
Detenido Desaparecido	212	90,9	183 (86,3%)	29 (13,4%)

Proporción situación represiva



Fuente: Corporación porque por la Paz, Villa Grimaldi. Disponible en, <http://villagrimaldi.cl/victimas/>.

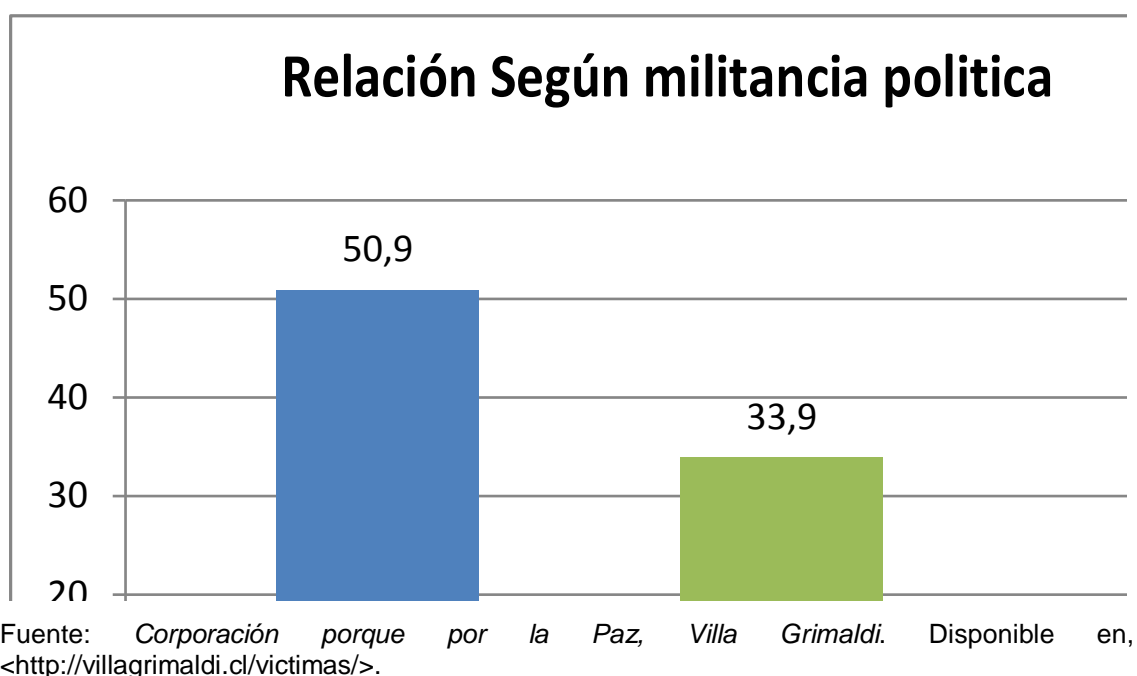
Relación entre sexo de la víctimas y situación



Fuente: Corporación porque por la Paz, Villa Grimaldi. Disponible en, <http://villagrimaldi.cl/victimas/>.

Relación según militancia política.

Partido político	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	117 (50,2)	99 (84,6)	18 (15,4)
Partido Socialista (PS)	24 (10,3)	19 (79,2)	5 (20,1)
Partido Comunista (PC)	79 (33,9)	70 (88,6)	9 (11,4)
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)	7 (3,0)	6 (85,7)	1 (14,3)
Otros	6 (2,5)	5 (83,3)	1 (16,7)



Para ejecutar estas acciones represivas, el Cuartel Terranova, modificó todos los usos y espacios de la Villa Grimaldi, construyendo un gran galpón donde se evidencia la intencionalidad y objetivos específicos de esta nueva construcción, y que como era de material ligero, pudo ser destruida rápidamente por las Fuerzas Armadas y de Orden luego de 1978. Esta arquitectura contemplaba salas de tortura, parrillas eléctricas, cuartos de aislamiento, barriles con agua en descomposición, y sitios de colgamiento entre otras estructuras de tortura.

“La casona fue usada como oficina de los grupos que integraban las brigadas militares. Funcionó también allí la Plana Mayor, la jefatura de la BIM (Brigada de Inteligencia Militar), el repostero, la

cocina, el casino del personal de la DINA y el casino de oficiales.

Sobre la cocina, en un altillo, la sala del radioperador”¹⁰⁶⁵.

Las antiguas caballerizas que tenía originalmente la Villa, se transformaron rápidamente, en sitio de detención y tortura sistemática, ya que desde sus inicios el Cuartel Terranova funcionó con estos objetivos. El informe Rettig, indicó de manera paulatina se fueron trasladando a los extensos terrenos de Villa Grimaldi las unidades operativas de la DINA, implementando edificaciones que fueron rodeando la casona de adobe que se situaba en la entrada de esta propiedad. Ambas comisiones coincidieron en señalar que si bien el flujo de detenidos se inició a mediados de 1974, fue hacia el verano de 1975 cuando se registró el mayor número de detenidos, convirtiéndose en el centro de operaciones de la BIM, que como hemos indicado anteriormente, cumplía una función de represión interna en Santiago, destinada fundamentalmente a la persecución y destrucción de los grupos y partidos de izquierda, sobre todo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Partido Comunista de Chile PCCH, Partido Socialista de Chile PSCH y el Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU.

En cuanto a la descripción de esta propiedad que realizó la Comisión Rettig, es importante destacar que realizó una visita a esta propiedad, de la cual otorgó una descripción que más tarde fue confirmada a través de los testimonios que recibió la Comisión Valech. En primer lugar, la Comisión Rettig, en cuanto a su funcionamiento indicó que efectivamente aquí los agentes de la DINA tenían un cuartel de operaciones. Y que las víctimas, luego de la detención, se procedían a vendarles la vista y maniataba, luego eran llevadas a los primeros interrogatorios, en donde “se mantenían lugares y artefactos especialmente dispuestos para las distintas formas de tortura”¹⁰⁶⁶. En este recinto se custodiaban a los prisioneros por largos períodos a la espera de nuevos interrogatorios y métodos de tortura, o bien mientras se decidía su

¹⁰⁶⁵ *Parque por la Paz Villa Grimaldi: Una deuda con nosotros mismos*, Santiago, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 1997, p. 18.

¹⁰⁶⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 465.

futura suerte. El informe indicó que en la medida que iban aumentando los detenidos se implementaban nuevos sitios para su confinamiento, y que al parecer “se encontraban diferenciados según la calidad en que se encontraba el detenido y los efectos que se esperaba producir en él”¹⁰⁶⁷. En segundo lugar, y raíz de su visita, indicó que si bien las construcciones estaban demolidas, si quedaban algunos vestigios, y que debido a la disposición de cimientos y ruinas pudo realizar una descripción que si bien ya circulaban desde hacía un par de años en algunos medios de comunicación, con testimonios de sobrevivientes en la Vicaría de la Solidaridad, a través de algunas publicaciones como “¿Dónde Están? Edición de siete tomos. O bien en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, Agrupaciones de Derechos Humanos y Organismos Internacionales. Lo que significó la descripción que hizo el Informe Rettig sobre Villa Grimaldi, fue dar validez a todos esos testimonios y denuncias sobre cómo era el recinto en que cientos de víctimas habían estado privadas de libertad de forma absolutamente injustificada. En la propiedad existían habían varias edificaciones, tres de ellas fue las que destacó el Informe Rettig. La primera fue “La Torre”:

“Efectivamente se trataba de una construcción como torre, que sustentaba un depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70 x70 centímetros y unos dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de rodillas. En esa torre había también una sala de torturas. En cada una de estas celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente. En el caso de haber dos detenidos en una celda debían acomodarse de modos muy forzados para permanecer en el lugar y especialmente para dormir. Aparentemente las personas que fueron llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado

¹⁰⁶⁷ Ibid., p. 466.

su etapa de interrogatorios intensos. A muchos de los detenidos que permanecieron en La Torre no se los volvió a ver”¹⁰⁶⁸.

La Comisión Valech indicó que esta construcción, “tenía unos seis metros de altura y fue acondicionada con nichos cuyas puertas medían aproximadamente sesenta centímetros. De acuerdo a los testimonios, en ella encerraban en aislamiento absoluto a los prisioneros que se negaban a colaborar”¹⁰⁶⁹. Es importante agregar a estas descripciones, que algunos testimonios señalaron que esta era una edificación de material ligero, fundamentalmente de madera, como el resto de las otras construcciones, a excepción de la casona que se ubicaba en la entrada de la propiedad. Asimismo, es significativo destacar que los detenidos que llegaban a este lugar, situado en una de las esquinas del terreno de Villa Grimaldi, generalmente lo hacían en pésimas condiciones de salud, debido a que habían pasado por las distintas fases de tortura que se aplicaban en este recinto. A ello se debe sumar que La Torre era un lugar muy húmedo debido a que estaba justo sobre una napa subterránea, y producto de la gran oscilación térmica que se produce, porque el terreno está situado en las laderas de la Cordillera de los Andes, las bajas temperaturas en los meses de invierno hacían muy difícil la sobrevivencia de los detenidos. A ello se agregan las graves condiciones de hacinamiento, privados de agua, acceso a sanitarios y de higiene personal, junto a lo estrecho de las salas de confinamiento, la falta de aire y condiciones de aseo básicas, espacio de fácil reproducción de parásitos y olores que las víctimas retrataban como insoportables.

La segunda edificación que describió el Informe fueron las denominadas «Casas Chile»: “Construcciones de madera destinadas al aislamiento individual de detenidos, que consistían en secciones verticales similares a closets donde el detenido debía permanecer de pie, a oscuras, durante varios días”¹⁰⁷⁰. El

¹⁰⁶⁸ Ibid.

¹⁰⁶⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, pp. 444-445.

¹⁰⁷⁰ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 466.

Informe Valech indicó que, se “llevaban a los detenidos después de la tortura, tenían dos por un metro y cada una alojaba a cinco personas”¹⁰⁷¹. La tercera construcción, fueron las llamadas «Casas Corvi»:

“Pequeñas piezas [habitaciones] de madera construidas en el interior de una pieza mayor. Dentro de cada una de ellas se ubicaba un camarote de dos pisos. Aparentemente era el lugar donde permanecían los detenidos que estaban siendo sometidos al régimen más intenso de interrogatorios y torturas”¹⁰⁷².

El Informe de Valech, indicó que los nombres que los agentes de la DINA colocaron a estas dos últimas construcciones, era en alusión a las casas edificadas por la Corporación de la Vivienda del Gobierno de la Unidad Popular. Correspondían a “habitaciones de ochenta por ochenta centímetros, donde se mantenía durante un tiempo a los detenidos con el propósito de *ablandarlos*”¹⁰⁷³. Por su parte, el Informe Rettig, señaló que en Villa Grimaldi existían habitaciones destinadas especialmente para la práctica de la tortura, y en su aplicación existía un orden y forma en cómo se desarrollan estos métodos:

“Unos agentes aplicaban los distintos métodos de torturas, y otros, generalmente oficiales, conducían los interrogatorios, aunque estos últimos también a veces manipulaban personalmente los instrumentos de tortura. En algunas ocasiones, durante los interrogatorios, con o sin tortura, un funcionario tomaba notas en una máquina de escribir”¹⁰⁷⁴.

¹⁰⁷¹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 444.

¹⁰⁷² Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 466.

¹⁰⁷³ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 445.

¹⁰⁷⁴ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 466.

Entre otras formas de tortura, destacó la que se denominó como «parrilla», y que consistía en:

“un catre de metal sobre el que se amarra desnudo al detenido para proceder a aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre distintas partes del cuerpo, especialmente aquellas más sensibles como los labios o los genitales, y aun sobre heridas o prótesis metálicas. Una modalidad particularmente cruel de este método consistía en la utilización de un camarote metálico de dos pisos; se colocaba al interrogado en el de abajo y en el de arriba se torturaba a un pariente o amigo suyo, como modo de presionarlo aun más”¹⁰⁷⁵.

También fue muy empleado el método de tortura denominado «colgamientos», y que como hemos visto anteriormente la víctima era colgada de una barra, atada sólo por las muñecas, o bien por las muñecas y las rodillas, y que el Informe Valech los denominó *pau de arará*. En ambos casos, “el dolor producido por el peso del cuerpo colgado por largo tiempo, se sumaba a la aplicación de corriente eléctrica, de golpes, heridas cortantes y vejámenes”¹⁰⁷⁶. Otros métodos habituales de torturas aplicados en Villa Grimaldi fueron las diferentes formas de asfixias, tema que por su naturaleza fue abordado en mayor profundidad por la Comisión Valech. Sin embargo el Informe Rettig, los describió indicando que una de estas formas de asfixia era hundir la cabeza de la persona en “un recipiente con agua, generalmente sucia, o con otro líquido. Manteniéndosela hundida hasta un punto cercano a la asfixia total. El mismo objetivo tenía el «submarino seco», y que consistía en colocar una bolsa plástica en la cabeza de la víctima, de forma de impedir el aire, provocando su asfixia. En definitiva, “al interior de Villa Grimaldi, se daba un ambiente de degradación generalizada. Además de las torturas durante los interrogatorios,

¹⁰⁷⁵ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 445.

¹⁰⁷⁶ Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* tomo 2, op. cit., p. 467.

tanto los oficiales como los demás agentes operativos y algunos guardias permanentemente golpeaban y vejaban a los detenidos”¹⁰⁷⁷.

Similar efecto se conseguía mediante el «submarino seco», que consistía en la colocación de una bolsa plástica en la cabeza de la persona de modo de no permitirle la entrada del aire, también hasta un punto cercano a la asfixia”¹⁰⁷⁸. El Informe Valech a través de los diferentes testimonios de las víctimas, confirmaron estos hechos:

“Quienes estuvieron en este lugar señalan que estuvieron siempre vendados y sometidos a interrogatorios y torturas, durante toda su permanencia. Fueron obligados a escuchar y presenciar las torturas de otros detenidos; sufrieron colgamientos; fueron incomunicados por largo tiempo en espacios extremadamente reducidos (cajones o closet); sufrieron quemaduras con cigarros, simulacros de fusilamiento, *pau de arara*, el *submarino seco* y el *mojado*, aplicación de drogas -ya sea por intermedio de inyecciones o pastillas- padecieron vejaciones y violación sexual, en ocasiones con animales; extracción de las uñas, el *teléfono*, amenazas, manipulación psicológica y fueron obligados a permanecer de pie por largo tiempo, a veces durante toda la noche”¹⁰⁷⁹.

¹⁰⁷⁷ Ibid.

¹⁰⁷⁸ Ibid.

¹⁰⁷⁹ Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. VI, p. 445. “En lo que respecta a las mujeres que estuvieron embarazadas durante su detención declararon ante la Comisión que fueron conducidas a este recinto y sometidas al mismo trato que el resto de los prisioneros sin consideración alguna por su condición, más bien las hicieron objeto de vejaciones sexuales y en algunos casos de violaciones. También los declarantes coincidieron en denunciar la presencia de menores de corta edad, que fueron llevados para presionar a sus padres mientras eran interrogados y torturados”. Véase Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, op. cit., cap. V, pp. 251 a la 257, y cap. VII, pp. 559-582. Rojas B., P., *Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile*, Santiago, CODEPU, 1990.

5.3.- Las huellas de la tortura

Al analizar los recintos de detención y los métodos represivos que se implementaron, fundamentalmente la tortura, podemos observar que su aplicación respondía a violaciones de derechos humanos como una práctica de Estado, ya que existía una base institucional que facilitaba estas violaciones, así como una organización burocrática capaz de hacer este tipo de trabajo y tomar decisiones políticas que permiten la implementación de este sistema. Las situaciones represivas descritas y analizadas, de acuerdo a investigaciones provenientes sobre todo desde la psicología, señalan que los efectos de la tortura en las víctimas produce estados patológicos que se caracterizan por: Trastornos de la conciencia, de percepción, de la memoria, y de la afectividad. Por otra parte, las consecuencias de las torturas físicas, más inmediatas son: laceraciones, hematomas, hemorragias, fracturas, luxaciones, perforaciones, quemaduras entre otros. Asimismo, las agresiones sexuales tienen graves daños psíquicos y físicos. En cuanto a la tortura psicológica, ocasiona trastornos en psíquicos en las víctimas, entre los que se pueden destacar, el Síndrome de depresión, de angustia, de paranoia, de apatía. También produce el deterioro del aspecto psíquico orgánico, así como la fijación de síntomas.

Las huellas de los padecimientos de las víctimas son los propios recintos de detención que citamos en esta investigación, ellos son la evidencia junto a las propias víctimas de la práctica de tortura de forma sistemática que fue perpetrada durante todo el período de la dictadura militar. Para referirnos a las huellas de la tortura, contamos con un cada vez mayor acopio de fuentes documentales cuyo acceso custodian organizaciones de derechos humanos, pero también, está el testimonio lacerante de los sobrevivientes, evidencias de un tiempo trágico y que enluta la historia de Chile.

Cuando nos referimos a la violación de derechos humanos, observamos que es un tipo de violencia que es ejercido sobre hombres y mujeres, que lesiona profundamente sus identidades, cuyos padecimientos quedan gravados en sus cuerpos y provocando una honda fractura en la historia de vida de las

víctimas, marcada por la secuencia traumática vivida durante los años de la dictadura en nuestro país. Al conocer los testimonios de las víctimas que han sido publicados en diversos medios, lo que no deja de llamar la atención es la crudeza del relato, y aun así queda la sensación que tanto las palabras como el propio espacio que ocupa el testimonio, no logra dimensionar el profundo horror de los hechos. Sin embargo la narración de la situación traumática, permite además advertir que parte de ese recuerdo, queda prohibido debido a la necesidad de sobrevivir, en consecuencia muchas veces se advierten huecos y vacíos en el relato, como si no existiera emoción o bien como si la experiencia de otras personas.

Por ello es tan importante la recuperación de la memoria histórica de un país, porque en la medida que otorgue el espacio para reconocer la violación de derechos humanos y sus víctimas, pero también los responsables, es posible realizar un trabajo de memoria en el conjunto de la sociedad. En ello ha sido fundamental los resultados que entregaron las Comisiones de verdad en Chile, y las medidas de reparación que se han ido aplicando desde el 04 de marzo de 1991, cuando se dio a conocer al país los resultados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ya que permitieron el reconocimiento y validación social de las víctimas.

En este contexto, adquiere una gran relevancia el reconocimiento oficial de aquellos lugares en que se perpetraron estos padecimientos, en este caso, de los centros de detención que citamos en esta investigación, ya que es gracias a las víctimas que sobrevivieron a las torturas, así como de testigos que desde el anonimato de la calle se atrevieron a identificar estos recintos clandestinos por los que pasaron cientos de personas, sin embargo, resulta mucho más desgarrador conocer los testimonios de los sobrevivientes que estuvieron reclusos en estos lugares, y de aquellos que fueron vistos por última vez. Para aproximarnos en esta geografía del horror, los informes de Rettig y Valech son fundamentales, ya que permiten aproximarnos a la reconstrucción de la memoria histórica de estos recintos de detención y tortura, comprendiendo el imperativo las víctimas y familiares que estos recintos sean

reconocidos como lugares de memoria. Gracias a ellos, y a los emprendimientos de memoria, que estos espacios se han constituido en lugares donde se trabaja hacia una cultura por la paz, la búsqueda de justicia y la dignificación de las víctimas. En definitiva, estos lugares de memoria vuelven dinámicos, debido a que se vinculan a las nuevas demandas sociales, insertando otras luchas sociales, de ahí entonces este tipo de memoria histórica se vuelva ejemplar, puesto tiene un fin mayor, que están directamente relacionado con los Nunca Más, el trabajo por la paz y justicia social que tanto falta hace a las contemporáneas sociedades.

Conclusiones de la investigación

El análisis de las sociedades en que vivimos, presenta un importante desafío que desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, que impulsa a indagar en aquellos pasados de los que somos coetáneos, accediendo desde el presente al pasado, comprendiendo las dinámicas históricas de los procesos sociales permitiendo entre otros, la reflexión cotidiana de problemáticas que enlutan el acontecer de las sociedades. Nuestro interés fundamental ha sido analizar en una perspectiva general las sociedades de postdictadura en América Latina, en particular a través del caso de Chile, cuyo proceso de transición política no ha pasado inadvertida en la región. Uno de nuestros desafíos ha sido el análisis de los mecanismos a través de los cuales esta sociedad enfrentó los legados dejados por la dictadura del general Pinochet, donde el tema más urgente fue la masiva violación de derechos humanos cometidas durante los diecisiete años dictadura militar.

La reconstrucción del pasado es un hecho que se vuelve fundamental cuando se reflexiona sobre aquellas sociedades que han experimentado situaciones de violencia de estado, ya que se une al trabajo investigativo de fuentes y archivos con un fin mayor, que está ligado a los *Nunca Más*. Desde nuestro oficio, el desafío se instala es interpelar las fuentes, por más próximas que se encuentren, y con un método de investigación científica, abordarlas intentando dar cuenta de las evidencias que sostienen la magnitud de los hechos. En este contexto, las disputas sobre el pasado reciente en estas sociedades es un hecho en el que confluyen las voces de las víctimas que claman justicia y muy a menudo el silencio de los que antes mantuvieron el poder político. Entre unos y otros existe un abismo inconmensurable, la violencia de Estado que se aplicó dentro del territorio nacional, las miles de víctimas, los detenidos, torturados, ejecutados políticos y desaparecidos, es el panorama al que se ven enfrentados los gobiernos de procesos de transición política, donde el caso de Chile no es una excepción. En este contexto, es importante conocer la trayectoria de la transición política chilena, así como los

pactos y consensos a los cuales se accede, junto a la forma en cómo se fueron aceptando los elementos esgrimidos durante la dictadura estableciendo el ideario del dictador y la forma en cómo se transitaría a una democracia tutelada.

En esta investigación hemos tomado como desafío analizar la violencia política de un tiempo determinado, que se enmarca en el período de la dictadura militar en Chile (1973-1990). A través del estudio de la represión política logramos acceder a la memoria histórica de este pasado, cuya característica central es la sistemática violación de derechos humanos. Este tipo de violencia se investiga a través de la narración del horror vivido por las víctimas, aproximándonos a la reconstrucción de la memoria histórica que realizó la sociedad chilena durante los gobiernos democráticos. La recuperación de ese pasado difícil, se realiza cuando se pacta entre civiles y militares una transición política hacia la democracia, donde las herencias de la dictadura han marcado la trayectoria de este proceso histórico. Sin embargo, es en esta etapa donde se asume la responsabilidad política de saber lo sucedido durante los años de la dictadura militar, dando un espacio a la narración de ese pasado, a través del testimonio de quienes lo padecieron. Este hecho es muy significativo si consideramos la importante presencia de los militares en la transición política, con la figura del general Pinochet como parte del proceso democrático.

Estos esfuerzos se materializaron en propuestas concretas que se observan como un arco temporal donde la emergencia de ese pasado violento se posiciona nuevamente en las agendas políticas. De ellos, tres representan momentos centrales dentro de las políticas de memoria, situados entre 1991 y 2004, años en que la sociedad chilena experimentó la irrupción de memoria, de un pasado que se negaba “a pasar”, en medio de datos macroeconómicos que destacaban su crecimiento económico, presentándose como ejemplo de políticas neoliberales en la región latinoamericana. Estos esfuerzos buscaban responder a la demanda social de verdad y justicia, donde este último ha debido sortear una larga espera. En efecto, los resultados que arrojó la

Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación, irrumpieron en la escena nacional provocando importantes reacciones en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, la mesa de diálogo logró que las Fuerzas Armadas de Chile, asumieran su responsabilidad respecto a los hechos de violación de derechos humanos, identificando el paradero de al menos 221 de detenidos desaparecidos. Asimismo, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, recogió el testimonio de 35.865 personas de los cuales 28 mil de ellos fueron aceptados por la Comisión, y donde el promedio de edad de las víctimas oscilaba entre los 18 y 30 años. Sin embargo, de forma paralela las víctimas y agrupaciones de derechos de humanos han clamado justicia, y los familiares de los detenidos desaparecidos han transido por las calles del país con fotografías de las víctimas preguntando ¿dónde están?

Son estas cuestiones que nos han llevado a investigar un tiempo histórico complejo en la historia de Chile, y en el que aun existen profundos desacuerdos, que van desde cómo denominar a la dictadura militar, pasando por la incansable búsqueda de las víctimas por parte de sus familiares, muchos de los cuales han fallecido sin obtener una respuesta, hasta el profundo silencio de quienes fueron responsables de la violencia cometida. La historia del tiempo presente en Chile, tiene diferentes matices, y uno de ellos está relacionado con la profunda huella que dejó la dictadura militar. Cómo recomponer ese tiempo, cómo aprehenderlo históricamente. Estas han sido una de las interrogantes iniciales de nuestra investigación, por cuanto lo que buscábamos no era realizar una narración cronológica de los hechos sucedidos, sino más bien, examinar cómo las sociedades durante la transición política nombraban el padecimiento sufrido por cientos de víctimas. Es decir cómo desde nuestra disciplina tratamos este tipo de cuestiones que han lacerado tan profundamente a las sociedades, generando a su vez diversos discursos y explicaciones sobre lo ocurrido, donde el caso de Chile no es una excepción.

Sin duda, la complejidad de la investigación ha sido a su vez también su fortaleza porque nos ha llevado, a indagar en otros ámbitos del conocimiento,

acercándonos al reconocimiento de un pasado que no pasa, que emerge por los recovecos de su propia historia, y esto se debe que así como las personas, las sociedades son el reflejo de su pasado. Por ello ha sido muy significativo que sociedades de postdictadura, generen espacios para saber lo sucedido en un pasado que aun en democracia tiende a ser incómodo para algunos, y necesario para otros, un pasado a veces lleno de silencios y otros sobrepoblado de detalles que se transforman en pistas que permitan dar con el paradero de alguna víctima, o bien, que permite el reconocimiento de aquellos lugares de detención en que estuvieron recluidos. Es en estos temas donde hemos decantado nuestro análisis desde una perspectiva histórica, tomando como enfoque los elementos que nos ofrece la historia del tiempo presente, donde la memoria histórica es una de sus fuentes. Examinamos un período determinado dentro de la dictadura militar, en que estuvo en funcionamiento la Dirección de la Inteligencia Militar DINA (1974-1977), y que las comisiones de verdad han coincidido en identificar como una fase que se caracterizó por la selectividad de las víctimas, es decir, que quienes eran detenidos, torturados, muertos y desaparecidos, eran militantes y simpatizantes de organizaciones y partidos de izquierda, que adherían al gobierno de la Unidad Popular, fundamentalmente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, el Partido Comunista de Chile PCCH, el Partido Socialista de Chile PSCH, y el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. En consecuencia, la forma de voz a la narración del horror, la situamos en un tiempo específico, vinculado también a una delimitación espacial, y que está relacionado con aquellos recintos secretos de detención, que se localizaron en Santiago, en lugares que no permitían sospechar de lo que sucedía dentro, como es el caso de Londres nº 38 que se localizó en un barrio cercano al palacio de gobierno, o los inmuebles de José Domingo Cañas nº 1367 y calle Irán nº 3037, ubicados en barrios residenciales, o en sectores un poco más alejados como Villa Grimaldi. Estos recintos clandestinos, fueron parte de un circuito del terror aplicado a las víctimas, donde se provocaron los mayores padecimientos humanos.

En este aspecto, es interesante señalar, que no eran lugares muy grandes dimensiones, sin embargo, por ellos pasaron una gran cantidad de

detenidos, provocando daños inconmensurables en las víctimas. Es por ello que el contenido de los testimonios cobra tanto valor, ya que es un gran esfuerzo por parte de las víctimas describir el sufrimiento vivido, sin embargo, ¿cómo se aprende a nombrar aquello donde las palabras quedan pequeñas frente al significado de la experiencia que intentan representar?, cómo una sociedad se hace cargo la memoria traumática que forma parte de su historia, cuáles son las formas a través de las cuales este tipo de sociedades se acerca al pasado traumático, reconociendo en él la violencia cometido por el Estado, transformándola en el trabajo de un *Nunca Más* que permita alcanzar un sociedad cohesionada. Estas son algunas de las interrogantes que han acompañado nuestra investigación en que se interceptan las víctimas, los testigos y los archivos, todos ellos huellas del horror.

En este contexto, presta especial atención a la acción llevada a cabo por los familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en contra del olvido. Resulta interesante analizar la dinámica que se genera en estos grupos, ya que han logrado resignificar e insertar en la agenda pública los temas referidos a los ex centros de tortura, evitando así su destrucción y anonimato, alcanzando incluso el reconocimiento como Monumentos Nacionales, hecho que manifiesta también la voluntad política de negar el olvido. En este sentido, muchas son las señales que evidencian la vigencia de estos debates, de un lado, la adecuación e incorporación de estos temas en ámbitos como la educación, y la resignificación de esta memoria de la violencia política en Chile, cuya reflexión alcanza no sólo los campos de investigación científica, sino también al espacio público, el lenguaje cotidiano, el patrimonio y el tipo de democracia que se busca, adquiriendo una contemporaneidad que se une a otras demandas sociales.

Las profundas lesiones que se despliegan dentro del período de estudio, presentan una trama desgarradora, y cualquier análisis tiende a arrojar el mismo resultado: la fractura y quiebre de una sociedad. Entre otros, resulta interesante analizar cómo dentro de aquellos acontecimientos traumáticos que

experimentó la sociedad chilena durante la dictadura militar, además de ser mermados todos sus derechos fundamentales, la fisonomía de la sociedad también se vio alterada, ya que sus ciudadanos debieron incorporar en el lenguaje la existencia de centros de detención, en los que cientos de personas eran ingresadas por sus ideas políticas asociadas fundamentalmente a la Unidad Popular. En consecuencia, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, erosionó drásticamente la historia de Chile, con el Palacio de Gobierno destruido, el Presidente sin vida, junto a la desaparición forzada de miles de personas, llevaron a que de forma definitiva cambiara la fisonomía del país. Esos dramáticos hechos llevaron también a cambiar involuntariamente la imagen de Chile, nunca antes el palacio de gobierno había estado en llamas, y muchos edificios transformados en clandestinos centros de detención y tortura agolparon la quieta arquitectura del país, otorgaron un valor agregado a dichos lugares, ya que familiares, sobrevivientes y amigos, buscaron en ellos algunas huellas de los seres queridos apresados ilegalmente. No es menor la cantidad de personas que una vez que se hicieron públicos los datos entregados por los informes de verdad, con sorpresa constataron que las propiedades vecinas a sus hogares, habían sido utilizadas como centros de detención y tortura, por parte del Ejército y Carabineros de Chile. Mucho más complejo debió ser para aquellos que años más tarde, se dieron cuenta que tenían como vecinos a los que habían sido sus torturadores.

Son aquellos cambios en los usos que tuvieron ciertos lugares de la sociedad chilena, como parte de ese pasado reciente que nos interesó analizar, por cuanto desde la instauración de la dictadura militar, se organizaron en el territorio nacional, centros de detención y tortura, utilizándose para ellos, todo tipo de recintos, adquiriendo connotaciones especiales aquellos que eran sedes de grupos partidarios al gobierno de la Unidad Popular. Es dentro de los recintos secretos identificados por éstos informes, que nos interesó “*descorrer el velo de la tortura*”, dibujando aquella arqueología del horror instaurada durante el régimen militar, donde la policía secreta identificada como Dirección Nacional de Inteligencia DINA, controlada directamente por Pinochet, mantuvo centros de represión. La pertinencia al momento de analizar aquellos

elementos que rodean estos y otros ex centros secretos de detención y tortura, se fundamenta en la necesidad de reconocer el andamiaje que tiene la práctica de la violencia de Estado, con esto queremos enfatizar que existió una intencionalidad, que quienes hicieron desaparecer a determinados grupos sociales, y de otro, subrayar la existencia de personas, civiles y militares, destinados a cumplir tareas que se enmarcaron en la aplicación de torturas y padecimientos a las víctimas. El terrorismo de Estado si bien se efectuó en todo el territorio nacional, utilizó para sus objetivos recintos secretos de detención y tortura, en algunos se implementó una infraestructura destinada a dichas actividades, como el caso de Villa Grimaldi, y en otros, utilizando las mismas instalaciones, como el caso de Londres nº 38, José Domingo Cañas nº 1367 y calle Irán nº 3037. La primera fue arrasada, los otros inmuebles conservados en el anonimato que ofrecía la impunidad de la clandestinidad. Es gracias a los testimonios de las víctimas que lograron sobrevivir, que estos sitios se visibilizaron convirtiéndose en parte de la geografía del horror en Chile.

Fuentes y referencias bibliográficas

1.1. Archivos y centros de investigación.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Archivo Nacional de la Administración (ARNAD)

Biblioteca Nacional de Chile (Sección Hemeroteca)

Corporación por la Paz Villa Grimaldi

Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Santiago de Chile

1.2 Fuentes y repertorios documentales

“Acuerdo Nacional y Transición a la Democracia”, Seminario realizado en el Centro de Estudios Públicos el 26 y 27 de noviembre de 1985, en *Revista de Estudios Públicos* n° 21, Santiago, 1986.

“El Ejército, la verdad y la reconciliación”. Respuesta de las Fuerzas Armadas y de Orden al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe presentado ante el Consejo de Seguridad Nacional por el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Augusto Pinochet Ugarte, 27 de marzo de 1991, en *La Nación* el 28 de marzo de 1991. Compendio de documentos, *Revista de Estudios Públicos* n° 41, 1991.

“Orientaciones y criterios para la elaboración de una propuesta de derechos humanos para el tránsito a la democracia”, en *Derechos Humanos y elecciones presidenciales y parlamentarias*, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1989.

“Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia. Bases programáticas político- institucionales”, *Documentos La Época* n° 856, Santiago, 25 de julio de 1989.

“Programa de Patricio Aylwin”, en *Derechos Humanos y elecciones presidenciales y parlamentarias*, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1989.

Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, Documentos, Revista de Estudios Públicos n° 79, Santiago, 2000.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, *Resumen de Actividades*, Año 1992.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Situación de los Organismos de Derechos Humanos", cap. XI, *Informe País, Chile*, Organización de los Estados Americanos, 1985.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 1985-1986.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Resolución nº 01ª/88. Caso 9755, Chile, 12 de agosto de 1988.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala, Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones*, Capítulo IV, Guatemala, UNOPS, junio 1999.

Comité de Cooperación para la Paz, *Crónica de sus dos años de labor solidaria*, Santiago, Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, diciembre 1975.

Comité para la Cooperación y la Paz en Chile, *Crónica de dos años de lucha solidaria*, Santiago, diciembre de 1975.

Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, *20 años de la historia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Un camino de imágenes*, Santiago, Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1995.

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago, Reedición, diciembre de 1996. (1ª ed. 1991).

Fuerza Aérea de Chile, "Declaración Pública" En Diario El Mercurio, Santiago, 01 de diciembre, 2004.

Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, *Memorias para construir la Paz. Cronología*, Santiago, Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1992.

Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile, Santiago, 2004.

La transición chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial en Chile de 1988, Massachusetts, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, 1989.

Las reformas a la Constitución de 1980, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Truth and Partial Justice in Argentina: an Unpate, Nueva York, Americas Watch, 1991.

1.2 Decretos de Ley

Chile, Decreto Exento nº 001413, del 11 de octubre de 2005, que declara a Londres 38, Monumento histórico.

Chile, Decreto Ley nº 1, Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, del 11 de septiembre de 1973. Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973.

Chile, Decreto Ley nº 1.876, que deroga el Decreto Ley nº 521 de 1974, que creó la Dirección de Inteligencia Nacional. Diario Oficial del 13 de agosto de 1977.

Chile, Decreto Ley nº 1.878, que crea la Central Nacional de Informaciones. Diario Oficial del 13 de agosto de 1977.

Chile, Decreto Ley nº 128, que declara que la Junta de Gobierno asume los poderes Constituyentes, Legislativo y Ejecutivo. Diario Oficial del 16 de noviembre de 1973.

Chile, Decreto Ley nº 27, que disuelve el Congreso Nacional, Ministerio del Interior. Diario Oficial del 24 de septiembre de 1973.

Chile, Decreto Ley nº 4, que declara en Estado de Emergencia las Provincias y Departamentos que señala y designa los Jefes de Zonas respectivas, 11 de septiembre de 1973. Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973,

Chile, Decreto Ley nº 50, que designa Rectores-Delegados en Universidades del país, Ministerio de Educación Pública. Diario Oficial del 02 de octubre de 1973.

Chile, Decreto Ley nº 77, que declara ilícitos y disueltos los partidos políticos que señala. Diario Oficial del 13 de octubre de 1973.

Chile, Decreto Ley nº 521, que crea la Dirección de Inteligencia Militar. Diario Oficial del 18 de junio de 1974.

Chile, Decreto Ley nº 527, que aprueba el Estatuto de la Junta de Gobierno. Diario Oficial el 26 de junio de 1974.

Chile, Decreto Ley nº 806, Diario Oficial nº 29.030, de 17 de diciembre de 1974, Modifica el Decreto Ley nº 527 de 1974.

Chile, Decreto nº c145-1996, que crea la Ley de Reconciliación Nacional. Diario Oficial del 27 de diciembre de 1996.

Chile, Decreto Supremo nº 1.040, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la Verdad acerca de las violaciones de Derechos Humanos en Chile, Ministerio del Interior. Diario Oficial del 26 de septiembre de 2003,.

Chile, Decreto Supremo nº 889, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, que permitió ampliar el plazo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, hasta el 30 de noviembre de 2004.

Chile, La Ley 18.315, que Faculta a la CNI para realizar arrestos en todas sus dependencias. Diario Oficial de 17 de mayo de 1984.

Chile, Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Diario Oficial de 17 de mayo de 1984.

Chile, ley nº 18.415 Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción. Diario Oficial del 14 de junio de 1985.

Chile, Ley nº 18.663, que otorga facultades especiales al rector de la Universidad de Chile. Ministerio de Educación Pública. Diario Oficial del 4 de noviembre de 1987.

Chile, Ley nº 18.771, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley nº 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, del 30 de diciembre de 1988. Diario Oficial del 17 de enero de 1989.

Chile, Ley nº 18.825, que reforma la Constitución Política de la República de Chile. Diario oficial del 1 de junio de 1989.

Chile, Ley nº 18.845, que establece sistemas de microcopia o micro grabación de documentos”, Ministerio de Justicia, del 19 de octubre de 1989. Diario Oficial del 3 de noviembre de 1989.

Chile, Ley nº 19.687, que establece obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de Detenidos Desaparecidos. Diario Oficial, del 06 de julio de 2000.

Chile, Ley nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, del 11 de septiembre de 1986. Diario Oficial del 01 de octubre de 1986.

España, Boletín Oficial del Estado, BOE nº 310, jueves 27 de diciembre de 2007

1.3 Discursos, mensajes y declaraciones

“Comunicado oficial de Carabineros de Chile”, 30 de noviembre de 2004, *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005.

“Declaración Pública de la Fuerza Aérea de Chile”, *La Nación*, 01 de diciembre de 2004.

“Declaración de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile”, 14 de diciembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005.

“Declaración de la Corte Suprema”, 09 de diciembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005.

“Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, Reflexiones Finales”. Santiago de Chile, S/f.

“Declaración de Viviana Rodríguez, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos”, *La Nación*, Santiago, 14 de junio, 2000.

“Declaración Pública de la Armada de Chile”, 30 de noviembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005.

“Declaración pública del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile”, Arturo Herrera, 13 de noviembre de 2004, en *Revista de Estudios Públicos*, nº 97, 2005.

“Discurso de Chacarillas, 09 de julio de 1977”, en *100 Primeros Decretos Leyes dictados por la Junta de Gobierno de la República de Chile*, Santiago, Jurídica de Chile, 1973.

“Discurso de Patricio Aylwin Azócar, en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional”, Valparaíso, 21 de mayo de 1990.

“Discurso de Patricio Aylwin Azócar”, al dar a conocer el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, *La Nación*, Santiago, 4 de marzo de 1991.

“Discurso de Patricio Aylwin Azócar”, en el inicio de la Legislatura Ordinaria del Congreso Nacional, Valparaíso, 21 de mayo de 1992, Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Santiago, Antártica, mayo 1992.

“Discurso de Ricardo Lagos Escobar”, al recibir el *Acuerdo Final de la Mesa de Diálogo*, 13 de junio de 2000.

“Discurso de Ricardo Lagos Escobar”, al recibir el documento final de la *Mesa de Diálogo*, Santiago, 13 de junio de 2000. En Lagos Escobar, R., *Abrir las puertas. Discursos escogidos marzo 2000 – mayo 2001*, tomo I, Santiago, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, 2002.

“Discurso del Ministro de Defensa Jaime Ravinet”, en el Seminario *Ejército y Derechos Humanos compromiso para el siglo XXI*, Escuela Militar, Santiago, 07 de diciembre de 2004.

“Discurso en el Estadio Nacional”, 12 de marzo de 1990, en Aylwin Azócar, P., *La transición chilena. Discursos escogidos*, Santiago, Andrés Bello, 1990.

“Ejército de Chile: El fin de la una visión”, Juan Emilio Cheyre, *La tercera*, 05 de noviembre, 2004.

“Informe presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad por el Comandante en Jefe de la Armada de Chile”, Almirante Jorge Martínez Bush, *La Nación*, 28 de marzo de 1991.

“Mensaje al país del Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar”, 12 de agosto de 2003.

“Mensaje presidencial de Ricardo Lagos Escobar”, 21 de mayo 2000.

“Un nuevo amanecer en el Estadio Nacional: discurso de Patricio Aylwin, 12 de marzo de 1990”, en Santibáñez, A., *Entre el horror y la esperanza: a 30 años del golpe*, Santiago, Don Bosco, 2003.

Declaración de Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, en *Punto Final* nº 941, septiembre de 1999.

Lagos Escobar, R., “No hay mañana sin ayer”, Mensaje al país al dar a conocer propuesta en materia de derechos humanos, Santiago, Gobierno de Chile, 12 de agosto de 2003.

Lagos Escobar, R., “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, Prólogo del Informe Nacional sobre Prisión Política de Chile, *La Nación*, Santiago, 28 de noviembre de 2004.

Lira, E., *Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos*, Santiago, 14 de septiembre de 1999.

Mensaje Presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en la Legislatura 329ª Ordinaria, Sesión del Congreso Pleno, sábado 21 de mayo de 1994.

Pereira, P., “Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos”, Santiago, 31 de agosto de 1999.

Pérez Y. E., “Discurso de Constitución de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos”, 21 de agosto de 1999.

Precht, C., “Homilía pronunciada en la Capilla de Lonquén”, domingo 25 de febrero de 1979, en *¿Dónde Están?* tomo 7, marzo 1979.

Salgado, J. C. Brigadier General, “Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos”, Santiago, 31 de agosto de 1999.

Serrano, S., “Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos”, Santiago, 07 de septiembre de 1999.

VV. AA., “Manifiesto de Historiadores contra los que torturan en nombre de la patria”, Santiago, 16 de noviembre de 2004.

Zalaquett, J., “Intervención en Mesa de Diálogo Derechos Humanos”, Santiago, 24 de septiembre de 1999.

1.4. Fuentes hemerográficas consultadas

Periódicos:

De Chile

La Época
El Mercurio de Santiago
La Nación
La Segunda
La Tercera
El Mostrador (electrónico)

De España

El País

Revistas consultadas

Análisis, Santiago.

Cauce, Santiago, Sociedad editora La República, Santiago.

Ercilla, Santiago.

Proposiciones Santiago, Ediciones SUR, Santiago.

Revista de Estudios Públicos (1991-1999), Santiago.

1.5 Fuentes Audiovisuales

Documentales

Calle Santa Fe, Carmen Castillo, Santiago, Karma Films, 2007.

Cruel Separación, Sara Boston, Chile, Reino Unido, Fuse, Films, 2006.

Imágenes de una dictadura, Patricio Guzmán, Quebec, 1999.

La ciudad de los fotógrafos, Santiago Moreno, Santiago, 2006.

48, Susana, De Sousa Dias, Lisboa, Betacan Digital, 2009.

2.- Bibliografía

2.1.- Libros

Actas del Congreso internacional de Archivos y derechos humanos: El acceso y la desclasificación de documentos, Sarrià de Ter, Ayuntamiento de Sarrià de Ter, 2008.

Agamben, G., *Estado de excepción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007 (3ª ed.), (*Stado di eccezione*, 2003).

_____, *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Valencia, Pre-Textos, 2006 (3ª ed.), (*Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, 2003).

_____, *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Homo Sacer III*, Valencia, Pre-Textos, 2009, (*Ciò che resta di Auschwitz: L' Archivio e il testimone, Homo sacer III*, 1999).

Aguilar, P., *Políticas de la memoria y memorias de la política*, Madrid, Alianza Editorial, 2008.

Amorós, M., *Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo*, Valencia, Universitat de València, 2008.

Anderson, B., *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México D. F., F. C. E., 1993 (*Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Londres, Verso, 1983).

Arendt, H., *Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal*, Barcelona, Lumen, 2001.

_____, H., *Sobre la Violencia*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, (1ª ed. 1969).

Aróstegui, J., *La Historia vivida. Sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza Editorial, 2004.

_____, *La investigación histórica: Teoría y Método*, Barcelona, Crítica, 2001.

_____, Saborido, J., *El tiempo presente. Un mundo globalmente desordenado*, Buenos Aires, Eudeba, 2005.

Aróstegui J., Godicheau, F. (eds.), *Guerra Civil. Mito y memoria*, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velásquez, 2006.

Arriagada, G., *Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet*, Santiago, Sudamericana, 1998.

Augè, M., *Diario de Guerra*, Barcelona, Gedisa, 2002.

_____, M., *El sentido de los otros. Actualidad de la antropología*, Barcelona, Paidós, 1996, (*Le sens de autres. Actualité de la l' anthropologie*, Paris, Fayard, 1994).

_____, *Las formas del olvido*, Barcelona, Gedisa, 1998, (*Les formes de l' oubli*, París, Payot, 1998).

_____, M., *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Barcelona, Gedisa, 2004, (*Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, París, du Seuil, 1992).

Aurell, J., *La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos*, Valencia, Universitat de València, 2005.

Auth, J., *Esperando a la Esperanza: Los jóvenes y el plebiscito*, Santiago, Ediciones Sur, 1988.

Aylwin Azócar, P., *La transición chilena. Discursos escogidos*, Santiago, Andrés Bello, 1990.

_____, *El reencuentro de los demócratas*, Santiago, Ediciones B; Barcelona, Grupo-Zeta, 1998.

Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

Bartra, R., *Territorios del Terror y la Otredad*, Valencia, Pre-Textos, 2007.

Baudrillard, J., *La agonía del poder*, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.

Benedetti, M., *Pedro y el Capitán*, Madrid, Alianza Editorial, 2009.

Benjamín, W., *Sobre la fotografía*, Valencia, Pre-textos, 2004.

Benthan, J., *El panóptico*, Madrid, Imprenta de D. Tomás Jordán, 1979.

Berman, M., *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Madrid, Siglo XXI Editores, 2008 (1ª ed. En español, 1988).

Bloch, M., *Apología para la historia o el oficio del historiador*, México, FCE, 2001.

_____, M., *La extraña derrota*, Barcelona, Crítica, 2002, (1º ed.1944).

Boeninger, E., *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*, Santiago, Andrés Bello, 1998, (1ª ed.1997).

Boero Vargas, M., *Recuerdos pendientes. Teología, sociedad y fe en la memoria cristiana de Chile. En el Centenario de Salvador Allende (1908-1973)*, Madrid, Arcos, 2008.

Bolshia Bravo, E., Gautier, A. (ed.), *Actas del 1er Simposio Internacional Terapéutico, jurídico y Preventivo sobre: Las secuelas de la tortura y la violencia estatal*, La Paz, Los amigos del libro, 2000.

Bourdieu, P., *La distinción criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1988.

Bronfman, E., Johnson, L., *De enterezas y Vulnerabilidades. 1973-2003: Hablan los mayores*, Santiago, LOM, 2003.

Burga, M., *Nacimiento de una utopía: muerte y resurrección de los incas*, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1988.

Burke, P., *Formas de Historia Cultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2006.

_____, P., *Formas de Historia cultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2006 (*Varieties of Cultural History*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1997).

_____, *Hablar y callar funciones sociales del lenguaje a través de la historia*, Barcelona, Gedisa, 1996.

_____, P., *Sociología e Historia*, Madrid, Alianza Editorial, 1987 (*Sociology and History*, London, 1980).

Cabrera, M. A., Mc Mahon, M. (coord.), *La situación de la Historia: Ensayos de Historiografía*, La Laguna (Tenerife), Universidad de la Laguna, 2002.

Cañas, Kirby. E., *Proceso político en Chile, 1973-1990*, Santiago, Andrés Bello, 1997.

Cariola, C., Sunkel, O., *Un siglo de Historia económica de Chile 1830-1990*, Santiago, FLACSO, 1991.

Carmona, E. (ed.), *Morir es la noticia*, Santiago, Carmona, 1997.

Carreras, J. J., Forcadell Álvarez, C. (eds.), *Usos públicos de la Historia*, Madrid, Marcial Pons, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

Castells, M., *La era de la información. Economía y Sociedad y Cultura*, vol. 2, *El poder de la identidad*, México D. F., Siglo XXI, 2003.

Cavallo, A. Salazar, M., Sepúlveda, O., *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988*, Santiago, Grijalbo, 3ª ed., 1997, (1ª ed.1989).

Cavallo, A., *La historia oculta de la transición chilena. Memoria de una Época, 1990-1998*, Santiago, Grijalbo, 1998.

Chartier, R., *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa, 1992.

_____, *La historia o la lectura del tiempo*, Barcelona, Gedisa, 2007.

Chateau, J., Rojas, J., *Antecedentes electorales vol. I. Informe sobre población, electores y resultados del plebiscito de 1988*, Documento de Trabajo, Santiago, FLACSO, 1989.

Correa, S., (et. al.), *Historia del siglo XX chileno*, Santiago, Sudamericana, 2001.

Courtine, J.J., *Historia del Cuerpo. El siglo XX*, Tomo III, Madrid, Taurus, 2006.

Cruz, M. A., *Iglesia, represión y memoria. El caso chileno*, Madrid, Siglo veintiuno de España Editores, 2004.

Cruz, N., y Whipple, P., *Nueva Historia de Chile: Desde los orígenes hasta nuestros días*, Santiago, Zig Zag, PUC, 1996.

Cruz, R., *Culturas políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares, 2005.

Cuesta Bustillo, J., *Historia del presente*, Madrid, Eudema Historia, 1993.

Cuesta, J., *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2008.

Cuevas, J. A., *Diario de la ciudad ardiente*, Santiago, LOM, 1998.

Cuya E, Menschenrechtszentrum N, "Comisiones de la Verdad en América Latina", *Ko'aga Roñe'eta*, Revista de Derechos Humanos. Serie VII Derechos Humanos en América Latina. <http://www.derechos.org/koaga/vii/>

Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

De Certeau, M., *Historia y Psicoanálisis. Entre ciencia y ficción*, México D. F., Universidad Iberoamericana, 2007. (*Historie et psychanalyse entre science et fiction*, Paris, Gallimard, 2002).

_____, *La escritura de la Historia*, México D. F., Universidad Iberoamericana, 2006 (2ª reimpresión en español, (1ª ed. 1999). (*L' Ecriture de l' histoire*, Paris, Gallimard, 1978).

De Mussy, L. (ed.), *Balance Historiográfico Chileno. El orden del discurso y el giro crítico actual*, Santiago, Universidad Finis Terrae, 2007.

De Mussy, L., y Yávar, A., *Seminario. Transiciones políticas Comparadas: España y Chile. Temas, fuentes y Metodología, Cuadernos de trabajo*, Santiago, Universidad Finis Terrae- UMCE, 2008.

Delumneau, J., *El miedo en Occidente*, México, Taurus, 2005.

Déotte, J. L., *Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el museo*, Santiago, Cuarto Propio, 1998, (*Les ruines, l' Europe, le Musée*, París, L' Harmattan, 1994).

Díaz Barrado, M. (coord.), *Historia del tiempo presente. Teoría y Metodología. Seminario de Historia del Tiempo Presente*, Extremadura, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura, 1998.

Dirección de Bibliotecas, Archivos y museos, *Territorios en conflicto ¿por qué y para qué hacer memoria?*, VII Seminario sobre Patrimonio Cultural, Santiago, DIBAM, 2005.

Drake, P., Jaksic, I., Angell, A. (et. al.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990*, Santiago, FLACSO, 1993.

Duby, G., Perrot, M., *Historia de la vida privada*, vol.5, *De la Primera Guerra Mundial a nuestros días*, Madrid, Taurus 1993.

Echeverría Yáñez, M., *Krassnoff, arrasado por su destino*, Santiago, Catalonia, 2008.

Elias, N., *El proceso de la civilización investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, F. C. E., 1989.

Eltit, D., *Emergencias. Escritos sobre literatura, arte y política*, Santiago, Planeta, 2000.

Engel, E., "Evolución del comportamiento electoral desde el plebiscito a la elección presidencial", *Colección de Estudios CIEPLAN*, nº 28, Santiago, 1990.

Farge, A., *La atracción del Archivo*, Valencia, Alfons el Magnànim, 1991, (*Le goût de l' archive*, Paris, Seuil, 1989).

Febvre, L., *Combates por la Historia*, Barcelona, Ariel, 1982.

Ferenczi, T. (dir.), *Devoir de mémoire, droit à l'oubli*, Bruxelles, Complexe, 2002.

Fernández, D., *La «Iglesia» que resistió a Pinochet*, Madrid, IEPALA, 1996.

Ferro, M., *Les tabous de l' Histoire*, Paris, NiL, 2002.

Figallo, B. y García de Ceretto, J., *La historia del tiempo presente. Historia y epistemología en territorios complejos*, Rosario, FFYL, UCA, 2010.

Figueroa, M. y Vicuña, M. (coord.), *El Chile del bicentenario*, Santiago, ediciones UDP, 2008.

Flores Galindo, A., *Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes*, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1987.

Fontana, J. (ed.), *Historia y proyecto social*, Barcelona, Crítica, 2004.

Forcadell, C., Sabio, A. (coord.), *Las escalas del pasado, IV Congreso de Historia local de Aragón*, Huesca UNED-Babastro, 2005.

Forges, J.F., *Educuar contra Auschwitz. Historia y memoria*, Barcelona, Anthropos, 2006, (*Éduquer contre Auschwitz. Histoire et mémoire*, Paris, ESF, 1997.)

Forteza, J., Gelabert J., Mantecón T., *Furor et Rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna*, Cantabria, Universidad de Cantabria, 2002.

Foucault, M., *“Vigilar y Castigar”: nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI, Xª ed.), (*Surveiller et Punir: Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975).

_____, *Genealogía del poder*, Madrid, Ediciones La Piqueta, 1979.

_____, *Genealogía del racismo*, La Plata, Altamira, 1996, (*Il faut défendre la société*, Paris, 1976).

_____, *La arqueología del saber*, México D.F., Siglo XXI, 1986, (*L' archeology du savoir*, Paris, Gallimard, 1969).

Franco, M., Levin, F. (comps.), *Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007.

Frühling, H., *Autoritarismo y defensa de los Derechos Humanos: Estudio de la Vicaría de la Solidaridad en Chile*, Cuadernos de Trabajo nº 2, Programa de Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, septiembre de 1985.

Fundación Instituto de la Mujer, *Memorias de Ocupación. Violencia sexual contra las mujeres detenidas durante la dictadura*, Santiago, Humanas, 2005.

Fundación Salvador Allende (ed.), *Salvador Allende. Fragmentos para una historia*, Santiago, Fundación Salvador Allende, 2008.

Garcés M., et. al. (comps.), *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 2000.

Garcés, J., *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1996.

García de la Huerta, M., *Memorias de Estado y Nación. Políticas y Globalización*, Santiago, LOM, 2010.

García, A. (ed.), *Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, Catarata, 2009.

Garretón M. A., *Dictaduras y democratización*, Santiago, FLACSO, 1984.

Garretón, M. A., (et. al.), *Por la fuerza sin la razón*, Santiago, LOM, 1998.

_____, *La transición chilena. Una evaluación provisoria*. Documento de Trabajo. Serie de estudios políticos, Santiago, FLACSO, 1991.

_____, *La sociedad en que vivi (re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*, Santiago, LOM, 2000.

Garzón Pérez, J. S., *La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder*, Barcelona, Crítica, 2000.

Gatti, E., *El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad*, Montevideo, Trilce, 2008.

Gaudichaud, F., *Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur*, Madrid, Sepha, 2005.

Gaviola, E. (et al.), *Queremos votar en las próximas elecciones. Historia del movimiento femenino en Chile, 1913-1952*, Santiago, La Morada, 1986.

Gillis, J. (ed.), *Commemorations: The Politics of National Identity*, New Jersey, Princeton University Press, 1994.

González Pino, M., y Fontaine Talavera, A. (eds.), *¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973?*, Santiago, LOM, 1997.

González Quintana, A., *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los Desaparecidos Regímenes Represivos*, Salamanca, Consejo Internacional de Archivos - UNESCO, 1995.

_____ (dir.), *Los Archivos de la Seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos*, Paris, UNESCO, 1995.

_____ *Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos*, Paris, Consejo Internacional de Archivos ICA, 2009.

Guillaudat, P. y Mouterde, P., *Los movimientos sociales en Chile 1973-1983*, Santiago, LOM, 1998.

Gumbrecht, H. U., *Producción de Presencia. Lo que el significado no puede transmitir*, México D.F., Universidad Iberoamericana, 2005. (*Production of Presence: What Meaning cannot Convey*, Stanford University Press, 2004).

Gutiérrez, H., *Chile 1989: ¿Elecciones Fundacionales?*, Serie de Estudios de Estudios Políticos, nº 3, Santiago, FLACSO, 1990.

Halbwachs, M., *La Memoria Colectiva*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

_____, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, Barcelona, Anthropos, 2004.

Hallermund-Platen, A., *Exterminio de enfermos mentales en la Alemania nazi*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, (*Die Tötung Geisteskranker in Deutschland*, Frankfurt, Mabuse-Verlag, 2006).

Hau, B., *La fuerza de la vida. La defensa de los derechos humanos, del Departamento Jurídico del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad*, Santiago, UAH, 2006.

Hobsbawm, E., *Sobre la historia*, Barcelona, Crítica, 1998.

_____, *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1994.

Huneeus, C., *El Régimen de Pinochet*, Santiago, Sudamericana, 2000.

Hunt, L., *La invención de los Derechos Humanos*, Barcelona, Tusquets, 2009.

Huntington, S., *La tercera ola la democratización a finales del siglo XX*, Barcelona, Paidós, 1994.

Illanes, M. A., *La batalla de la memoria*, Santiago, Planeta, 2002.

Jelin, E., *Los trabajos de la memoria*, Colección Memorias de Represión, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Jelin, E. (comp.), *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas "in-felices"*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Jelin E., y Langland, V. (comps.), *Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Colección Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2003.

Jelin, E., Longoni, A., (comps.), *Escrituras, imágenes y escenarios de la represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2005.

Jelin, E., y Da Silva, L. (comps.), *Los archivos de la Represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Jiménez, J. C., *España y Portugal en transición. Los caminos a la democracia en la Península Ibérica*, Madrid, Sílex, 2009.

Jocelyn Holt, A., *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, Planeta/Ariel, 1998.

Juan J. Paz y Miño Cepeda, *Removiendo el presente Latinoamericanismo e Historia en Ecuador*, Quito, PUCE-THE, Abya Yala, 2007.

Katz, C., *Chile bajo Pinochet*, Barcelona, Anagrama, 1975, (*Le Chili, sous Pinochet*, Paris, Cerf, 1975).

Keohane, R., Nye, J., *Poder e interdependencia. La política mundial en transición*, Buenos Aires, GEL, 1988.

Kirkwood, J., *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*, Santiago, FLACSO, 1986.

Klein, N., *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*, Madrid, Paidós, 2011 (3ª ed.), (*The Shock Doctrine*, Toronto, Random House, 2007).

Kornbluh, P., *Pinochet: Los archivos secretos*, Barcelona, Crítica, 2004, (*The Pinochet File A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*, National Security Archive, 2003).

Koselleck, R., *Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia*, Barcelona, Paidós, 2010.

Kunstman Torres, W., y Torres Ávila, V. (recop.), *Cien voces rompen el silencio. Testimonios de ex presas y presos políticos de la dictadura militar en Chile (1973-1990)*, Fuentes para la Historia de la República, vol. XXIX, Santiago, DIBAM, 2008.

LaCapra, D., *Escribir la historia, escribir el trauma*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005, (*Writing History, Writing Trauma*, The Johns Hopkins University Press, 2001).

_____, *Historia en Tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica*, Buenos Aires, FCE, 2006.

_____, *Historia y memoria después de Auschwitz*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

-----, *Representar el Holocausto. Historia, teoría, trauma*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

Lagos, E. R., *Abrir las puertas. Discursos escogidos marzo 2000 –mayo 2001*, tomo I, Santiago, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, 2002.

Langer, J., Valdés, A., *Guerra, memoria y exilio. La odisea de dos mujeres del siglo XX*, México D. F., CIDE, 2006.

Le Bretón, D., *La sociología del cuerpo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1992, (*La Sociologie du corps*, París, Presses Universitaires de France, 1992).

_____, *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2008, (*Anthropolgie du corps et modernité*, París, Presses Universitaires de France, 1990).

_____, *El silencio, aproximaciones*, Madrid, Sequitur, 2009. (*Du silence*, París, Métailié, 1997).

Le Goff, J., *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona, Paidós, 1991.

Le Goff, J. (dir.), *La nouvelle histoire. Les encyclopédies du savoir moderne*, Paris, RETZ, 1978.

Ledesma, J. L., Muñoz, J. y Rodrigo, J. (eds.), *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Siete Mares, Madrid, 2005.

Lefranc, S., *Políticas del perdón*, Madrid, Cátedra, 2004, (*Politiques du pardon*, París, Presses Universitaires de France, 2004).

Lemus López, E., *En Hamelín. La transición española más allá de sus fronteras*, Oviedo, Septem, 2002.

Léonard, J., *Archives du corps. La santé au XIX siècle*, Paris, Ouest-France, 1986.

Lewis, G. J., *El paisaje de la Historia: cómo los historiadores representan el pasado*, Barcelona, Anagrama, 2004.

Lira, E., *Psicología de la amenaza política y el miedo*, Santiago, ILAS, 1991.

_____, *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002*, Santiago, LOM, 2002.

Lira E., Loveman, B., *Políticas de reparación. Chile 1990-2004*, Santiago, LOM, 2005.

Lira, E., Loveman B. (et. al.), *Historia, política y ética de la verdad en Chile, 1891-2001. Reflexiones sobre la paz social y la impunidad*, Santiago, LOM, 2001.

López M., Figueroa, C., y Rajland, B. (ed.), *Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina*, Santiago, Arcis-CLACSO, 2010.

Loveman, B., Lira, E., *Las suaves cenizas del olvido: la vía chilena de reconciliación - 1814-1932*, Santiago, LOM, 1999.

_____, *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación política, 1932-1994*, Santiago, LOM, 2000.

_____, *Leyes de reconciliación en Chile: Amnistías, Indultos y Reparaciones 1819-1999*, Santiago, LOM, 2001.

_____, *Arquitectura política y seguridad interior del Estado 1811-1990. Fuentes para la Historia de la República*, vol. XIX, Santiago, DIBAM- LOM, 2002.

_____, *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002*, Santiago, LOM, 2002.

Lúnechen, G., *Violencia política. (Violencia Política en Chile. 1983-1986)*, Santiago, Arzobispado de Santiago, Fundación de documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 2000.

Mainer, J. C., Juliá, S., *El aprendizaje de la libertad 1973-1986. La cultura de la transición*, Madrid, Alianza, 2000.

Maira, L., *Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 1998.

Mallon, F., *Historiografía y pueblos indígenas. Enfoque desde los derechos humanos*, Temuco, Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco, 2000.

_____, *La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001*, Santiago, LOM, 2005.

Manrique, N., *El tiempo del miedo: la violencia política en el Perú, 1980-1996*, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002.

Mariño Menéndez, F., (et. al.) (coord.), *Los derechos humanos en la sociedad global: mecanismos y vías prácticas para su defensa*, Madrid, CIDEAL, 2011.

Martín, A., *La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique latine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Martínez Lillo, P. A., *Chile y España. Diálogos y encuentros*, Santiago, Aguilar, 2002.

Mate, R., *Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y política*, Madrid, Trotta, 2003.

Maturana, H., *La realidad: ¿objetiva o construida?*, *Fundamentos biológicos de la realidad*, Barcelona, Anthropos, 1995.

Mauss, M., *Sociología y Antropología*, Madrid, Tecnos 2ª ed., 1991, (1ª ed. 1979).

Meller, P., *Un siglo de economía política chilena (1880-1990)*, Santiago, Andrés Bello, 1996.

Morabec P., Spiniak. D., *Revista Hoy: 1.108 ediciones con historia*, Santiago, Copygraph, 2001.

Morales Moreno, L. G., *Historia de la historiografía Contemporánea (de 1968 a nuestros días)*, México D. F., Instituto Mora, 2005.

Morsch G., Ley, A. (ed.), *El campo de concentración de Sachsenhausen, 1936-1945. Acontecimientos y evolución*, Berlín, Metropol- Verlag, 2007.

Moscoso, J., *Historia Cultural del dolor*, Madrid, Taurus, 2011.

Moss, R., *El experimento marxista chileno*, Santiago, Gabriela Mistral, 1974, (*Chile's Marxist Experiment*, Londres, David & Charles, 1973).

Moulian, T., *Chile Actual. Anatomía de un Mito*, Santiago, LOM, 1998.

_____, *Conversación ininterrumpida con Allende*, Santiago, LOM, 1998.

Mudrovic, M. I., *Historia, narración y memoria. Los debates actuales en filosofía de la historia*, Madrid, Akal, 2005.

Negri, A., *Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio*, Buenos Aires, Paidós, 2004.

Nilson Cezar, M., *Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur*, Buenos Aires, Lumen, 2004.

Nirenberg, D., *Comunidades de Violencia*, Barcelona, Ediciones Península, 2001.

Nora, P., *Les Lieux de mémoire*, III, *Les France*, 3, Paris, Gallimard, 1992.

- Nora, P., *Pierre Nora en Les lieux de mémoire*, Santiago, LOM, 2009.
- O' Donnell, G., y Schmitter, P., *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. IV, Buenos Aires, Paidós, 1988.
- Orellana Benado, M., *Allende alma en pena: una mirada libre*, Santiago, Demens & Sapiens, 1998.
- Ortega Martínez, L., *Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión 1850-1880*, Santiago, DIBAM-LOM, 2005.
- Ortega Frei, E., *Historia de una Alianza*, Santiago, CESOC-DEC, 1992.
- Ortega, E., Moreno, C., *¿La Concertación desconcertada? Reflexiones sobre su historia y su futuro*, Santiago, LOM, 2002.
- Otano, R., *Nueva Crónica de la transición*, Santiago, LOM, 2ª ed. 2006 (1ª ed. 1995).
- Pardo, J., *Las damas del franquismo*, Madrid, Temas de Hoy, 2000.
- Parra, M. A., *La mala memoria*, Santiago, Planeta- Andros, 1997.
- Pasamar, G., *Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991.
- Paz, J. J., y Cepeda, M., *Removiendo el presente Latinoamericanismo e Historia en Ecuador*, Quito, PUCE-THE, Abya Yala, 2007.
- Pérez Garzón, J. (et. al.), *La Gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder*, Barcelona, Crítica, 2000.
- Peris Blanes, J., *La imposible voz. Memoria y presentación de los campos de concentración en Chile: la posición del testigo*, Santiago, Cuarto Propio, 2005.
- _____, *Historia del testimonio chileno. De las estrategias de denuncias a las políticas de memoria*, Valencia, Universitat de València, 2008.
- Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, Centro de Ética, 2007.
- Piper, I., *Memoria y Derechos Humanos: ¿prácticas de dominación o resistencias?*, Santiago, CLACSO- Arcis, 2005.
- Pollak, M., *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*, La Plata, Ediciones al margen, 2006.

Real Academia de la Lengua española, *Diccionario de la Real Academia de la Lengua española*, Madrid, 1970.

Ribó Durán, L., *Diccionario de Derecho*, vol. 2, Barcelona, Bosch, 2005.

Richard, N., *Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición)*, Santiago, Cuarto Propio, 2001.

_____, *Políticas y estéticas de la memoria*, Santiago, Cuarto Propio, 2006.

Ricoeur, P., *La Memoria, la Historia y el Olvido*, Madrid, Trotta, 2003. (*Histoire, mémoire, oubli*, Paris, Seuil, 2000).

_____, *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*, Madrid, Arrecife-UAM, 1999.

_____, *Lo justo*, Madrid, Caparrós Editores, 2003 (*Le juste*, Paris, Esprit, 1995).

_____, *Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción*, México D. F., Siglo XXI Editores, 2008 (*Temps et récit ii: La configuration dans le récit de fiction*, Paris, seuil, 1984).

Riquelme Segovia, A., *Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia*, Santiago, DIBAM, 2009.

Robles Piquer, C., *Memoria de cuatro Españas República, guerra, franquismo y democracia*, Madrid, Planeta, 2011.

Rodrigo, J., *Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947*.

Rodríguez Mateos, A., *Un franquismo de cine la imagen política del régimen en el noticiario NO-DO 1943-1949*, Madrid, Rialp, 2008.

Rojas B., P., *Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile*, Santiago, CODEPU, 1990.

Rojas Sánchez, G., *Chile escoge la libertad*, Santiago, Zig- Zag, 1998.

Rojas, B. P. (et. al.), *Tarda pero llega: Pinochet ante la justicia española*, Santiago, LOM, 1998.

Ruiz-Vargas, J. M., *Claves de la memoria*, Madrid, Trotta, 1997.

Sabio A., Forcadell C. (coord.), *Las Escalas del pasado: IV Congreso de Historia Local de Aragón*, Barbastro, Instituto de Estudios Altoaragonés/ UNED, 2005.

Sagredo, R., Gazmuri, C. (dir.), *Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo, de 1925 hasta nuestros días*, vol. 3, Santiago, Taurus, 2007.

Salazar, G., *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile 1947-1987, (Una perspectiva histórico popular)*, Santiago, LOM, 2006.

Salazar, G., y Grez, S. (comps.), *Manifiesto de Historiadores*, Santiago, LOM, 1999.

Salazar, M., *Letras del terror. Tomo I: La DINA*, Santiago, LOM, 2011.

Salazar, M., Valderrama, M. (comps.), *Dialectos en Transición. Política y subjetividad en el Chile actual*, Santiago, LOM, 2000.

Samaniego M. A., Ruíz R. C., *Mentalidades y políticas wingka: Pueblo mapuche, entre golpe y golpe. (De Ibañez a Pinochet)*, Madrid, CSIC, 2007.

Sánchez Amar, A. M., *Instrucciones para una derrota. Narrativas éticas y políticas de perdedores*, Barcelona, Anthropos, 2010.

Sandoica, M., E., *Tendencias historiográficas actuales. Escribir Historia hoy*, Madrid, Akal, 2004.

Santibáñez, A., *Entre el horror y la esperanza: a 30 años del golpe*, Santiago, Don Bosco, 2003.

Schmitt, C., *La Dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria*, Madrid, Alianza Editorial, 2009 (*Die Diktatur*, Berlín, Duncker & Humblot, 1985).

Segovia, E., *La historia secreta de "Cauce": gloria, pasión y muerte de una revista de oposición*, Santiago, Pehuén, 1990.

Semprún, J., *La escritura o la vida*, Barcelona, Tusquets, 1997.

Sepúlveda Ruiz, L., *119 de nosotros*, Santiago, LOM, 2005.

Sevillano, F., *Rojos. La representación del enemigo en la Guerra Civil*, Madrid, Alianza, 2007.

Skidmore, T., Smith, P., *Historia Contemporánea de América Latina*, Crítica, Barcelona, 1999 (2ª ed.), (*Modern Latin America*, Nueva York, Oxford University Press, 1984).

Soto, A., *El Mercurio y la difusión del pensamiento político-económico-liberal, 1955-1970*, Santiago, Instituto Libertad, 1995.

Soto Carmona, A., *¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.

_____, *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

Soto, H. (ed.), *Voces de muerte*, 2 vol., Santiago, LOM, 1998.

Souto Galván, B., *Libertad de creencias e intolerancia en el franquismo*, Madrid, Marcial Pons, 2008.

Stabili, M. (coord.), *Entre Historias y memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina*, Madrid, Iberoamericana, 2007.

Stern, S., *Recordando el Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998. Libro uno de la trilogía La caja de la memoria del Chile de Pinochet*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2009.

Stern, S., (comp.), *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1999. (*Shining and Other Paths: War and Society in Perú, 1980-1995*, Duke University Press, 1995).

Subercaseaux, E., *Gabriel Valdés: señales de historia*, Santiago, Aguilar, 1998.

Sunkel, O., *América Latina y la crisis económica internacional ocho tesis y una propuesta*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985.

Sunkel, O., *Democratización y política económica en perspectiva comparada*, Santiago, FLACSO, 1993.

Timmermann, F., *El factor Pinochet. Dispositivos de poder- legitimación- elites. Chile, 1973-1980*, Santiago, Universidad Católica Silva Henríquez, 2005.

Tironi, E., *El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet*, Santiago, Dolmen, 1998.

_____, *La invisible victoria (los chilenos y el plebiscito)*, Santiago, Ediciones Sur, 1988.

Todorov, T., *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Paidós, 2008 (*Les abus de la mémoire*, París, Arléa, 1995).

_____, *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX*, Barcelona, Península, 2002.

Tótoro, Taulis, D., *La cofradía blindada: Chile civil y Chile militar. Trauma y conflicto*, Santiago, Planeta, 1998.

Touraine, A., *Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy*, Buenos Aires, Paidós, 2006.

Traverso, E., *El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política*, Madrid, Marcial Pons, 2007, (*Le passé, modes d'emploi*, Paris, La Fabrique, 2000).

_____, *La historia desgarrada ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales*, Barcelona, Herder, 2000.

Uribe, A., *Carta abierta a Patricio Aylwin*, Santiago, Planeta, 1998.

Valdés, H., *Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile*, Barcelona, Ariel, 1974.

Vega León, E. (ed.), *Los rostros del otro. Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad*, Barcelona, Anthropos, 2009.

Verdugo, P., *Interferencia secreta: 11 de septiembre de 1973*, Santiago, Sudamericana, 1998.

Vergara, C., *¿Quiénes decidirán en el plebiscito? Un análisis de la constitución del cuerpo electoral*, Santiago, Ediciones Sur, 1988.

Vergara, P., *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, Santiago, FLACSO, 1985.

Vidal, H., *Política cultural de la memoria histórica*, Santiago, Mosquito, 1997.

Vidal- Naquet, P., *Los asesinos de la memoria*, México D. F., Siglo Veintiuno Editores, 1994.

Viera-Gallo, J. A., *11 de septiembre: testimonio, recuerdos y una reflexión actual*, Santiago, Chile América, CESOC, 1998.

Waisman, R., Gurrutxaga, A. (comp.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Bilbao, UPV- EHU, 2005.

White, H., *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*, México, FCE, 1992.

Yerushalmi, Y. (et. al.), *Usos del Olvido*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998.

Zerán, F., *Desacatos al desencanto*, Santiago, LOM, 1997.

2.2. Capítulos de libro

Águila, G., Luciani, L., "Argentina: Crímenes de Estado y Memoria", en García, A. (ed.), *Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional*, Madrid, Catarata, 2009.

Aróstegui, J., "Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración necesaria", en Díaz Barrado, M. (coord.), *Historia del tiempo presente. Teoría y Metodología. Seminario de Historia del Tiempo Presente*, Extremadura, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura, 1998.

Aylwin, P., "Cuenta de una victoria", en *Documentos, política y Espíritu*, Santiago, 1988.

-----, "La Comisión chilena sobre la Verdad y la Reconciliación", *Conferencia inaugural en el XIV Curso Interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, San José de Costa Rica, 12 de junio de 1996.

Balbontin, I., *La Asamblea de la civilidad*, Debat nº 12, Barcelona, Fundación Rafael Campalans, 1988. Citado por Cañas, K. E., *Proceso político en Chile, 1973-1990*, Santiago, Andrés Bello, 1997.

Borja Santa Cruz, R. E., "Los archivos de los derechos humanos en el Perú", en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Santiago, UAH, 2007.

Bormann, G., "El acceso y la desclasificación de documentos: los archivos de la Stasi (Alemania)", en *Actas del Congreso internacional de Archivos y derechos humanos: El acceso y la desclasificación de documentos*, Sarrià de Ter, Ayuntamiento de Sarrià de Ter, 2008.

Branche, R., *La Torture et l' Armée pendant la guerre d' Algérie, 1954-1962*, Paris, Gallimard, 2001, p. 325. Citado por Audoin-Rouzeau, S., "Matanzas. El cuerpo y la guerra", en Courtine, J.J., *Historia del Cuerpo. El siglo XX*, Tomo III, Madrid, Taurus, 2006.

Briceño Valencia, L., "Tortura y torturadores", en *La dictadura militar. Un balance necesario. Encuentro XXI*, nº 11, año 4, Santiago, S/E, 1998.

Carreras Ares, J. J., "¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir Historia?", en Sabio A., Forcadell C. (coord.), *Las Escalas del pasado: IV Congreso de Historia Local de Aragón*, Barbastro, Instituto de Estudios Altoaragoneses/ UNED, 2005.

Castillo Velasco, J., *¿Hubo en Chile violaciones a los Derechos Humanos? Comentario a las Memorias del general Pinochet*, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago, Editorial Nacional de Derechos Humanos, 1995.

Chateau, J., Rojas, J., *Antecedentes electorales*, vol. I, *Informe sobre población, electores y resultados del plebiscito de 1988*, Documento de Trabajo, Santiago, FLACSO, 1989.

Comisión Chilena de Derechos Humanos, *Las Deudas de la Transición*, Santiago, Ediciones Nacionales, 1994.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 1985-1986. Citado por Méndez, J. E., "El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad.

Cruz, M. A., "Silencios, contingencias y desafíos: El archivo de la vicaría de la solidaridad en Chile", en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Cuesta Bustillo, J., "Historia del presente y periodismo", en Díaz Barrado, M. P., *Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología*, Extremadura, Universidad de Extremadura, 1998.

Da Silva Catela, L., "El mundo de los archivos", en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Elster, Jon, "Coming to Terms with the Past, A Framework for the Study of Justice in the Transition to Democracy", en *Archives Européennes de Sociologie*. Citado por Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

Figueroa I. C., Iñigo C. N., "Reflexiones para una definición de Historia Reciente", en López M., Figueroa, C., y Rajland, B. (ed.), *Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina*, Santiago, Arcis- CLACSO, 2010.

Franco, M., Levin F. (comps.), "El pasado cercano en clave historiográfica", en Franco, M., y Levin, F. (comps.), *Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007.

Frühling, H., *Autoritarismo y defensa de los Derechos Humanos: Estudio de la Vicaría de la Solidaridad en Chile*, Cuadernos de Trabajo nº 2, Programa de Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, septiembre de 1985.

Garretón, M. A., "La oposición política y el sistema partidario chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición", en Drake, P., Jaksic, I., Angell, A. (et. al.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990*, Santiago, FLACSO, 1993.

Gillis, J. (ed.), *Commemorations: The Politics of National Identity*, New Jersey, Princeton University Press, 1994, p. 5. Citado por Jelin, E., *Los trabajos de la memoria, Colección Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Goicovic Donoso, I., "Transición y violencia política en Chile (1988-1994)", en *Ayer* nº 79, Madrid, Marcial Pons, 2010.

Góngora, A., "Introducción a la Transición chilena", en De Mussy, A., Yávar, A. (comps.), *Cuadernos de Trabajo. Seminario, Transiciones Políticas Comparadas: España y Chile. Temas, fuentes y mitologías*, Santiago, CIDOC, UFT, 2009.

González Quintana, A., "Archives of the security services of former repressive regimes", *Janus*, nº 2, 1998. Citado por Da Silva Catela, L., "El mundo de los archivos", en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Guzmán J., "El Acuerdo Nacional y la transición a la democracia", Santiago, *Revista de Estudios Públicos* nº 42, 1991.

Iuorno, G., "A propósito de la Historia reciente: ¿Es la interdisciplinaridad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales", en López M., Figueroa, C., y Rajland, B. (ed.), *Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina*, Santiago, Arcis-CLACSO, 2010.

Jelin, E., "Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión", en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.) *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Jelin, E., "La memoria en el mundo contemporáneo", en *Los trabajos de la memoria, Colección Memorias de Represión*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Klaren, F. P., "El tiempo del miedo (1980-2000), la violencia moderna y la larga duración en la historia peruana", Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Santiago, UAH, 2007.

S/A *La transición chilena hacia la Democracia. El Plebiscito Presidencial en Chile de 1988*, Massachusetts, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, 1989.

Lavabre, M. C., "Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria", en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007.

Lavabre, M.C., "Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos", en Aróstegui J., Godicheau, F. (eds.), *Guerra Civil. Mito y memoria*, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velásquez, 2006.

Lira, E., Loveman, B., *Derechos Humanos en la transición "modelo": Chile 1988-1999*. Documento preparado para la reunión "Chile 1990 1999: The model country for democracy and development?", University of California, San Diego, La Jolla, California, 10-12 de Diciembre 1998.

Lorenz, G. F., "Archivos de la represión y memoria en la República Argentina", en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Santiago, UAH, 2007.

Madariaga, C., "El informe Valech, otra tarea a medio terminar", Santiago, CINTRAS, 2004.

Marín Arce, J. M., "Algunas claves interpretativas de la transición española", en Waisman, Rein, R., Gurrutxaga, A. (comp.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Bilbao, UPV- EHU, 2005.

Méndez E. J., "El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad", en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007.

Milos, P., "La memoria y sus significados", en Garcés M., et. al. (Comp.), *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 2000.

Minow, M., *Between Vengeance and Forgiveness, Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998. Citado en: Barahona, A. Aguilar, P., González, C. (ed.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

Pérotin-Dumon, A., "Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo", en Pérotin-Dumon, A. (Dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, 2007.

_____, "Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú. Introducción", en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, 2007.

_____, "Enseñar el pasado latinoamericano cercano, o el presente de la historia en Chile", en Stabili, M. R. (coord.), *Entre historias y*

memorias. *Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina*, Madrid, AHILA, 2007.

_____, “Historia reciente y responsabilidad social. Introducción”, en Pérotin-Dumon, A. (Dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007.

Pollak, M., *L'expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l'identité sociale*, París, Métailié, 1990. Citado por Da Silva Catela, L., “El mundo de los archivos”, en Da Silva Catela, L., Jelin, E. (comps.), *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Pomian, K., “Les archives. Du Trésor des Chartes au Caran”, en Nora P. (ed.), *Les lieux de Mémoire, vol. III*, París, Gallimard, 1997. Citado por Jelin, E., Jelin, E., “Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión”. En Jelin, E., *Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad*, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.

Romero, L. A., “La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Santiago, UAH, 2007.

Salazar, G., “Historiografía chilena siglo XXI: transformación, responsabilidad, proyección”, en De Mussy, L. (Ed.), *Balance Historiográfico Chileno. El orden del discurso y el giro crítico actual*, Santiago, Universidad Finis Terrae, 2007.

“Seis discursos del Papa Juan Pablo II en Chile”, *Documentos, Revista de Estudios Públicos*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1987.

Spiegel, G., “Memoria e Historia: Tiempo litúrgico y Tiempo histórico”, en Cabrera, M. A., y Mc Mahon, M. (coord.), *La situación de la Historia: Ensayos de Historiografía*, La Laguna (Tenerife), Universidad de la Laguna, 2002.

Stabili, M., “Los desafíos de la memoria al quehacer historiográfico”, en Stabili, M. (coord.), *Entre Historias y memorias. Los desafíos metodológicos del legado reciente de América Latina*, Madrid, Iberoamericana, 2007.

Stern, S., “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como procesos histórico (Chile, 1973-1998)”, en Garcés M., et. al. (Comp.), *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM, 2000.

Taracena Arriola, A., “La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Santiago, UAH, 2007.

Vásquez, D., “*Algunas notas sobre el origen de la Concertación de Partidos por la Democracia*”, Informe nº 144, año XV, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2005.

Vera, R., “Los medios escritos contra la dictadura. Se rompe el silencio”, en *Archivo Chile*. Centro de Estudios “Miguel Henríquez”, CEME, Santiago, 31/12/2006.

Vergara Low, M. P., “Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”, en *Primera Jornada de Trabajo Recuperando Historias, Memoria y Conciencia*, Santiago, 5 de octubre de 2007.

Whitehead, L., “Prefacio. Sobre la Verdad y la Justicia”, en Barahona, A., Aguilar, P., González, C. (ed.), *Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid, Istmo, 2002.

Wilde, A., “Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007.

Winn, P., “El pasado está presente Historia y memoria en el Chile contemporáneo”, en Pérotin-Dumon, A. (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Santiago, UAH, 2007.

Yerushalmi, Y. H., “Reflexiones sobre el olvido”, en Yerushalmi, Y., Loraux, N.; Mommsen, H.; Milner, J. C. y Vattimo, G. *Usos del Olvido*, Segunda edición, Nueva Visión, Buenos Aires, 1998.

Zalaquett, J., “*La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile*”, 2000.

2.3 Artículos de revista

Acuña, C., “Lo que el Juicio nos dejó”, en *Revista Puentes*, nº 2, La Plata, 2000.

Aguilar, M., “El muro de los nombres de Villa Grimaldi (Chile): Exploraciones sobre la memoria, el silencio y la voz de la historia”, en *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 69, 2000.

Alcores, La(s) responsabilidad(es) del historiador, *Revista de Historia Contemporánea* nº 1, Salamanca, Fundación veintisiete de marzo, 2006.

Aróstegui, J. (coord.), *Violencia y Política en España*. Dossier de Ayer nº 13, Madrid, Marcial Pons, 1994.

Bédarida, F., "Definición, método y práctica de la Historia del tiempo presente", en *Cuadernos de Historia Contemporánea* nº 20, Madrid, UCM, 1998.

Bloch, M., "Mémorie collective, tradition et coutume. A propos d'un livre récent", *Revue de Synthèse Historique*, XL, nº 118-120, 1925.

Camacho, F., "Memorias enfrentadas: las reacciones a los informes Nunca Más de Argentina y Chile", *Revista Persona y Sociedad*, Vol. XXII/nº2, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2008.

Camus Larenas, C., Obispo de Linares, "¿En qué consiste el Acuerdo?", *Revista Hoy*, año IX, nº 426. Citado por Loveman, B., Lira, E., *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación política, 1932-1994*, Santiago, LOM, 2000.

Camus, M. E., "Testimonio imborrable: La casa de José Domingo Cañas", en *Revista Análisis*, Santiago, del 6 al 12 de julio de 1987. En Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Cañón, H., "Un antes y un después", en *Revista Puentes*, nº 3, La Plata, 2001.

Crenzel, E., "Políticas de la memoria. La historia del informe *nunca más*", en Papeles del CEIC # 61, septiembre 2010.

Cuesta, Bustillo, J., "Memoria e historia. Un estado de la cuestión", en *Revista Ayer* nº 32, Madrid, Marcial Pons, 1998.

Dossier, "Procesos de construcción de la democracia en España y Chile", *Ayer* nº 79, Revista de Historia Contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2010.

Dossier "Pasado y Memoria. Represión y violencia (1936-1945)", *Revista de Historia Contemporánea*, nº 4, Alicante, Universidad de Alicante, 2005.

Engel, E., "Evolución del comportamiento electoral desde el plebiscito a la elección presidencial", *Colección de Estudios CIEPLAN*, nº 28, Santiago, 1990.

Fazio Vengoa, H., "La historia del tiempo presente y la modernidad mundo", en *Historia Crítica*, nº 34, Bogotá, julio-diciembre 2007.

Henry, R., "L'histoire du temps présent, vingt ans après", en *Bulletin de l'Institut d'histoire du temps présent*, 75, junio 2000.

Horvitz, M. E., "Entre lo público y lo privado: la vocación femenina para resguardar la memoria. Recordando a Sola Sierra", en *Revista Cyber Humanitatis*, nº 48, Universidad de Chile, 2008.

Huguet S., M., "Historia del Tiempo Presente e Historia de las Relaciones Internacionales", en *Revista Ayer* nº 42, Madrid, Marcial Pons, 2001.

Huneus, C., "El Informe Valech y su aporte al fortalecimiento de la democracia", en *Revista Mensaje* nº 536, Santiago, UAH, 2005.

_____, "La transición ha terminado", en *Revista Ciencia Política*, vol. XVI, nº 1-2, Santiago, PUC, 1994.

Hurtado, F., "Barrio Paris-Londres, Calles con espíritu franciscano", en *Revista En Concreto*, nº 46, Santiago, 2006.

Koselleck R., "La investigación de una historia conceptual y su sentido socio-político", *Revista Anthropos, Huellas del conocimiento* nº 223, Barcelona, Anthropos, 2009.

Mandler, P., "La responsabilidad del historiador", en *Revista de Historia Contemporánea Alcores* nº 1, León, Fundación 27 de marzo, 2006.

Mudrovic, M. I., "Algunas consideraciones epistemológicas para una "Historia del Presente", en *Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea* nº 1, Madrid, 1998-2000.

Navia, P., "Participación electoral en Chile, 1988-2001, en *Revista de Ciencia Política*, volumen 24, nº 1, Santiago, 2004.

Nora, P., "La aventura de *Les lieux de mémoire*", en *Memoria e Historia, Ayer* nº 32, Cuesta Bustillo, (ed.), Madrid, Marcial Pons, 1992.

Orueta A., Zarco Colón, J., "La idea de generación: Una revisión crítica", en *Sistema: Revista de Ciencias Sociales*, nº 144, Madrid, Fundación Sistema, 1998.

Peiró, I., "Ausente" no quiere decir inexistente: La responsabilidad en el pasado y en el presente de la historiografía española", en *Alcores* nº 1, León, Fundación 27 de marzo, 2006.

Peiró, I., "La consagración de la memoria: Una mirada panorámica a la historiografía contemporánea", en *Revista Ayer Historia de los Conceptos* nº 53, Madrid, Marcial Pons, 2004.

Pollak, M., "Memória, esquecimento, silêncio", en *Estudios históricos*, vol. 2, nº 3, 1989.

Revista de Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos, Santiago (1979-2000).

Revista LEA, Buenos Aires, Argentina, 15 de julio de 1975.

Risques i Cobella, M., "La tortura y la brigada político social. Barcelona 1947", en *Historia Social* nº 44, Valencia, 2002.

S/A “El Botín de Pinochet”, en *Revista Punto Final*, nº 572, Santiago, 23 de julio al 05 de agosto de 2004.

S/A “El Informe Valech y su aporte al fortalecimiento de la democracia”, en *Revista Mensaje* nº 536, Santiago, UAH, 2005.

Sierra Diez, B., “¿Cómo está representada la experiencia de la memoria? En psicología cognitiva de la memoria”, en *Revista Anthropos*, nº 189-190, Barcelona, 2000.

Soto Carmona, A. (et. Al.), “Transición a la Democracia en Chile y Derechos Humanos: Una revisión del Informe Rettig”, en *Historia del Presente*, nº 12, Bautista, J., Mateos, A., (ed.), Madrid, Eneida, 2008.

Soto Carmona, A., “La transición a la democracia en el sur de Europa. La historia como instrumento para su comparación”, en *Revista de Estudios Internacionales* nº 162, Santiago, Universidad de Chile, abril, 2009.

Soto Carmona, A., “La larga sombra del dictador”, en *Stockholm Review of Latin American Studies*, nº 5, september, 2009.

Trebitsch, M., “El acontecimiento, clave para el análisis del tiempo presente”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 20, Madrid, UCM, 1998.

2.4 Artículos de Prensa

Constenla, Tereixa “Franco, ese (no tan mal) hombre”, en *El País*, 30 de mayo de 2011.

“Ejército respondió al Informe de la Comisión Rettig”, *La Época*, 28 de marzo, 1991.

Quezada, J.A., “Pérez Yoma fijó pautas de negociación”, *La Tercera*, Santiago, 22 de agosto, 1999. Citado por Lira, E., *El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002*, Santiago, LOM, 2002.

“Políticas de la memoria. La historia del Informe Nunca Más”, en *Papeles del CEIC* # 61, septiembre de 2010.

“Un cauce abierto”, Editorial de Revista Cauce, Santiago, Sociedad Editora La República, noviembre de 1983.

“Respuesta de la Corte Suprema al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, redactado el 13 de mayo de 1991, *El Mercurio* 16 de mayo de 1991.

S/A “Juan Pablo Cárdenas: La historia de “Análisis” y el libro que viene”, en *La Nación*, Santiago, 10 de abril de 2005.

Soto Carmona, A., Martínez Lillo, P., “La naturaleza del franquismo”, en *El País*, 08 de junio de 2011.

3.- Recursos electrónicos

3.1 Entidades, Organismos gubernamentales y documentos elaborados

Amnistía Internacional, “Guatemala/España: los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala no pueden quedar impunes”. Comunicado de Prensa, 02 diciembre, 1999. <http://www.es.amnesty.org/com/1999/com_02dic99.htm>

Archivo Chile. *Centro de Estudios Miguel Enríquez*. Documentación político social y movimiento popular contemporáneo de Chile y América Latina. <<http://www.archivochile.cl/>>

Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<http://www.archivovicaria.cl/>>.

Archivo del Fortín Mapocho, <<http://archivofortinmapocho.cl/>>.

Archivo Nacional de la Memoria, Gobierno Argentino, Archivo Nacional de la Memoria (ANM), 16 de diciembre de 2003 a través del Decreto N° 1259/03 <<http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html>>

Biblioteca del Congreso Nacional. Historia política legislativa del Congreso de Chile. <http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_por_la_Democracia>

Cámara de Diputados de Chile. <http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica_2009.pdf>
Centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas de Argentina. <<http://www.cedinci.org/>>

CINTRAS. Centro de salud mental y derechos humanos, Chile. <<http://www.cintras.org/textos/reflexion/r31/infvalech.pdf>>

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala, Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones*, Capítulo IV, Guatemala, UNOPS, junio 1999.

Comité para la Cooperación y la Paz en Chile, *Crónica de dos años de lucha solidaria*, Santiago, diciembre de 1975.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. <<http://www.oas.org/es/cidh/>>

Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. <<http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio19.php>>.

Dossier, "Plebiscito y Elecciones", *Revista Propositiones*, nº 16, Santiago, Ediciones Sur, 1988.

<<http://www.sitiosur.cl/publicacioneshistoriaproposiciones.php>>

Tribunal Calificador de elecciones TRICEL, República de Chile, Ministerio del Interior. <<http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/>>

Exilio chileno. Sitio web, sobre exilio, represión y violación a los Derechos Humanos. Centro Documental. <<http://chile.exilio.free.fr/chap06b.htm>>

Foro por la Memoria. <<http://www.foroporlamemoria.es/pl.php?id=12>>

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). <www.fasic.cl>

Fundación de Ayuda Social de los Fieles de las Iglesias Cristianas, FASIC, *Glosario de Definiciones Operacionales de las Violaciones a los Derechos Humanos*, Santiago, FASIC, 1991.

Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS). <www.ilas.org>.

Londres 38. Lugar de Memoria (ex Centro de represión y tortura).

<<http://londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-32013.html>>

Memoria Abierta Acción Coordinada de Organizaciones argentinas de Derechos Humanos.

<http://www.memoriaabierta.org.ar/como_trabajamos.php>

Memoria Chilena. Biblioteca Nacional Digital de Chile.

<<http://www.memoriachilena.cl/>>

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Santiago de Chile.

<http://www.museodelamemoria.cl/>

Museo de la Memoria. Rosario Argentina.

<<http://www.museodelamemoria.gob.ar/>>

Partido Comunista de Chile. <www.pcchile.cl>

Partido Demócrata Cristiano. <www.pdc.cl>

Poder Judicial de la República de Chile. <www.poderjudicial.cl>

Programa de Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile "Historia del Programa de Derechos Humanos: De la Comisión de Verdad y Reconciliación al Programa de Derechos Humanos".

<http://www.ddhh.gov.cl/historia_programa.html>

Radio Cooperativa Online, Compañía chilena de comunicaciones S.A; radio cooperativa. <www.cooperativa.cl>.

Tribunal Calificador de elecciones TRICEL, República de Chile, Ministerio del Interior. <<http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/>>

3.2 Artículos de revistas electrónicas

Bengoa, J., “Los Chacarilla boys o de la amnesia chilena”, en *Movimiento nuestra América*, 2007.

“Pasado y Futuro. El Chile pendiente”, en *Revista Ercilla* nº 3.119, Santiago, septiembre de 1999.

“Políticas de la memoria. La historia del *Informe Nunca Más*”, en *Papeles del CEIC* # 61, septiembre 2010.

Bautista Vilar, J., Mateos A. (ed.), *Revista Historia del Presente* nº 12, Madrid, Eneida, 2008.

Camacho Padilla, F. (ed.), *Los legados autoritarios en el Chile de post Pinochet*, Stockholm, Stockholm Review of Latin American Studies, nº 5, September, 2009.

Comisión de Comunicaciones del Partido Comunista de Chile, “A propósito del 11 de Septiembre de 1973”.

Cuesta Bustillo, J., *Memoria e Historia, Ayer* nº 32, Madrid, Marcial Pons, 1998.

Historia Contemporánea, Stvdia Histórica, Historia y Memoria, nº 25, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007.

Historia de los Conceptos, Ayer nº 53, *Revista de Historia Contemporánea*, Madrid, Marcial Pons, 2004.

Vera, R., “Los medios escritos contra la dictadura. Se rompe el silencio”, en *Archivo Chile*. Centro de Estudios “Miguel Henríquez”, CEME, Santiago, 31/12/2006.

Zalaquet J., “*La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile*”, 2000.

ANEXOS

Anexo nº 1

Decreto Ley N° 521 de 1974, Crea la Dirección de Inteligencia Nacional

Núm. 521.- Santiago, 14 de junio de 1974.-

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes números 1 y 128, de 1973, y
Considerando la necesidad de que el Supremo Gobierno tenga la colaboración inmediata y permanente de un organismo especializado que le proporcione en forma sistemática y debidamente procesada la información que requiera para adecuar sus resoluciones en el campo de la Seguridad y Desarrollo Nacional,

La Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país.

Artículo 2º.- La Dirección de Inteligencia Nacional estará dirigida por un Oficial General o Superior, en servicio activo, de las Fuerzas de la Defensa Nacional, designado por decreto supremo, el que con el título de Director de Inteligencia Nacional, tendrá la dirección superior, técnica y administrativa del Servicio. En el ejercicio de sus facultades, podrá dictar las resoluciones e impartir las instrucciones internas que sean necesarias para el funcionamiento de la repartición.

Artículo 3º.- La organización, estructura institucional interna y deberes de la Dirección de Inteligencia Nacional serán establecidas por un Reglamento Orgánico dictado a propuesta de su Director.

La planta estará constituida por personal proveniente de las Instituciones de la Defensa Nacional.

Cuando sea necesario contratar personal que no provenga de las Instituciones de la Defensa Nacional, deberá ser aprobado por decreto supremo, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. El régimen jurídico y los niveles remunerativos respectivos serán los mismos por los que se rige el personal civil de las Fuerzas Armadas.

Artículo 4º.- El Director de Inteligencia Nacional podrá requerir de cualquier servicio del Estado, municipalidades, personas jurídicas creadas por ley o de las empresas o sociedades en que el Estado o sus empresas tengan aportes de capital, representación o participación, los informes o antecedentes que estime necesarios para el eficaz cumplimiento de sus cometidos.

Del incumplimiento de esta obligación podrá dar cuenta al Contralor General de la República a fin de que aplique al infractor, directamente, cualquiera de las sanciones administrativas contempladas en el respectivo estatuto que rija su desempeño.

Las normas que establecen el secreto o reserva sobre determinadas materias no obstarán a que se proporcione a la Dirección de Inteligencia Nacional la información o antecedente solicitados, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar reserva o secreto.

Artículo 5°.- El Reglamento Orgánico a que se refiere el inciso 1° del artículo 3°, establecerá que el régimen jurídico y beneficios que regirán para el personal de las cuatro Instituciones de la Defensa Nacional y Servicio de Investigaciones, que sea destinado o comisionado a la Dirección de Inteligencia Nacional, será el mismo que rige para el personal que presta sus servicios en la Defensa Nacional.

Artículo 6°.- La Ley Anual de Presupuestos consultará, en sumas globales, los recursos que sean necesarios para el financiamiento de los gastos que demande la Dirección de Inteligencia Nacional.

El financiamiento correspondiente al año 1974 se hará con cargo a las sumas globales que al efecto pondrá a disposición de la Dirección de Inteligencia Nacional el Ministerio de Hacienda.

Artículo 7°.- Liberanse de los derechos específicos y advalorem establecidos en el Arancel Aduanero y de los demás impuestos, tasas y contribuciones y, en general, todo derecho que se perciba por intermedio de las Aduanas, como asimismo de la Tasa de Despacho establecida por el artículo 190 de la ley N° 16.464 y sus modificaciones y del impuesto del 10% previsto en el artículo 44 de la ley N° 17.564, todas las importaciones de equipos completos, accesorios y demás elementos, que efectúe la Dirección de Inteligencia Nacional.

Artículo 8°.- Agrégase en la letra a) del artículo 19 de la ley N° 17.798, de Control de Armas, el siguiente inciso nuevo:

"Asimismo, las diligencias a que se refieren los incisos precedentes, podrán ser cumplidas por la Dirección de Inteligencia Nacional en la forma y condiciones señaladas en esos preceptos."

Artículo único transitorio.- Los artículos 9°, 10 y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.

Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- **Jose Toribio Merino Castro**, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- **Gustavo Leigh Guzman**, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- **Cesar Mendoza Duran**, General Director de Carabineros.- **Oscar Bonilla Bradanovic**, General de División, Ministro del Interior.

Anexo nº 2

ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980

Artículo 8º.- Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.

Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.

Corresponderá al Tribunal Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el término de diez años contado desde la fecha de la resolución del Tribunal. Tampoco podrán ser rectores o directores de establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo.

Si las personas referidas anteriormente estuvieren a la fecha de la declaración del Tribunal, en posesión de un empleo o cargo público, sea o no de elección popular, lo perderán, además, de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto, no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso cuarto.

La duración de las inhabilidades contempladas en este artículo se elevará al doble en caso de reincidencia.

Anexo nº 3

DISCURSO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET EN CERRO CHACARILLAS, CON OCASIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD, SANTIAGO, 09 DE JULIO DE 1977

Al celebrarse hoy el Día de la Juventud que instituyéramos hace dos años en este mismo lugar, retorno a él con renovada fe en el futuro de Chile.

Concurro así a la invitación que me ha formulado el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que también celebra en esta noche el segundo aniversario de su creación, como un movimiento propio y responsable de la juventud chilena, que quiso identificar su compromiso con la defensa y proyección histórica del 11 de septiembre, uniéndolo a aquel imperecedero ejemplo de patriotismo que representa la inmolación de los 77 héroes juveniles de La Concepción.

Mi corazón de viejo soldado revive con profunda emoción el coraje insuperable de Luis Cruz Martínez y de los otros 76 jóvenes chilenos, que junto a él, en plena soledad de la sierra peruana, supieron demostrar con la entrega de sus vidas, que nuestra Patria y los valores permanentes del espíritu están por encima de cualquier sacrificio personal que su defensa pueda demandar.

Mi espíritu de Presidente de la República se llena de justificada esperanza, al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile.

Como muy bien lo señaláis en el lema que habéis escogido, ellos murieron porque soñaban en una Patria libre, unida, grande y soberana. Convertir ese ideal en la más plena realidad posible, efectivamente es y será vuestra obra. Abriros diariamente el surco para que podáis emprender y proseguir esa tarea, es en cambio la difícil e irrenunciable misión que Dios y la historia han colocado sobre nuestros hombros.

Hace muy poco, de nuevo el pueblo chileno supo reeditar durante tres años de heroica lucha en contra de la inminente amenaza de totalitarismo comunista, aquel supremo grito de guerra de la Batalla de la Concepción: “Los chilenos no se rinden jamás” Y cuando acudiendo al llamado angustioso de nuestra ciudadanía, las Fuerzas Armadas y de Orden, decidieron actuar el 11 de septiembre de 1973, nuevamente nuestra tierra

fue regada por la sangre de muchos de nuestros hombres, que cayeron luchando por la liberación de Chile.

Quedaba de este modo en evidencia que el temple de nuestra raza y la fibra de nuestra nacionalidad para defender la dignidad o la soberanía de nuestra patria no habían muerto ni podrían morir jamás, porque son valores morales que se anidan en el alma misma de la chilenidad. Hoy, volvemos a enfrentar una lucha desigual, contra una acción foránea de diversos orígenes y tonalidades, que a veces adopta la forma de la agresión enemiga, y que en otras ocasiones se presenta bajo el rostro de una presión amiga.

En ese complejo cuadro, Chile continuará actuando con la prudencia y mesura que tradicionalmente han caracterizado nuestra política internacional, aun en horas muy difíciles. Nuestra colaboración hacia los organismos internacionales y nuestro diálogo franco y leal con los países y Gobiernos amigos seguirán comprometiendo los mejores esfuerzos y la más amplia buena voluntad de parte nuestra. Pero por ningún motivo permitiremos que dicha actitud se confunda con debilidad o vacilación ante quienes pretendan dictarnos desde el exterior, el camino que debemos seguir, ya que su determinación es de exclusivo resorte de nuestra soberanía interna.

Por esta razón, dispuse recientemente que renunciáramos a la solicitud de un crédito externo, cuyo otorgamiento pretendió condicionarse públicamente a un examen de un Gobierno extranjero acerca de la evolución de nuestra situación en materia de derechos humanos. Estoy cierto de que en esta actitud me acompaña el país entero, porque si hay algo que todo chileno de verdad tiene muy en claro es que la dignidad de nuestra patria no se transa ni se hipoteca ante nada ni frente a nadie.

Desbordes del imperialismo ya superados

Quienes pretenden doblegarnos con presiones o amenazas foráneas, se equivocan rotundamente, y sólo verán crecer una cohesión interna que siempre se agiganta ante la adversidad. Quienes, por su parte pretenden desde el interior aliarse con estos desbordes internacionales que parecieran revivir formas de imperialismo que creíamos ya superadas en el Occidente, sólo logran retratarse mejor en sus ambiciones sin freno, y hacerse acreedores al justo desprecio del pueblo chileno.

Menos aceptable son todavía los intentos de intervención foránea cuando la causa que se invoca para ella es una supuesta defensa de los derechos humanos.

Nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado en el respeto a la dignidad del hombre. Sólo una amarga experiencia reciente, que estuvo a punto de conducirnos a la guerra civil, nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético, o a la subversión terrorista, que convierte a la convivencia social en una completa anarquía.

Resulta incomprensible que toda restricción a determinados derechos de las personas se enjuicie como una presunta transgresión de los derechos humanos, mientras que la actitud débil o demagógica de muchos gobiernos frente al terrorismo no merezca reparo alguno en la materia, aun cuando es evidente que ella se traduce en una complicidad por omisión, con una de las formas más brutales de violación de los derechos humanos.

Es posible que nuestro enfoque más amplio y profundo en esta materia sea difícil de comprender para quienes no han vivido un drama como el nuestro. He ahí, en cambio, la razón por la cual las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos, han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de nuestra Patria, que han visto en ella el complemento duro pero necesario para asegurar nuestra Liberación Nacional, y proyectar así amplios horizontes de paz y progreso para el presente y el futuro de Chile. La juventud se ha destacado por su comprensión visionaria hacia la exigencia histórica que afrontamos en el sentido de dar vida a un Nuevo Régimen político institucional.

Es por ello que, al cumplir el Frente Juvenil dos años de vida, siento el deber de expresar que, respetando el carácter plenamente autónomo e independiente de este movimiento, el Gobierno que preside aprecia debidamente los importantes avances que aquel ha ido logrando en su misión de unir a la juventud chilena en cursos humanos, geográficos y económicos; con el 11 de septiembre y con la nueva institucionalidad que a partir de esa fecha está surgiendo. De ahí que haya escogido esta noche, que ya se identifica con la juventud de nuestra Patria, para señalar públicamente los pasos fundamentales que hemos delineado para avanzar en el proceso institucional del país. Nada me parece más apropiado que hacerlo en un acto

juvenil, ya que seréis vosotros, jóvenes chilenos, los responsables de dar continuidad a la tarea en que estamos empeñados y los más directos beneficiados con el esfuerzo que en ella ha puesto desde su inicio, el país entero.

Frente al éxito ya perceptible del plan económico, el progreso en las medidas de orden social, y el orden y la tranquilidad que hoy brindan una vida pacífica a nuestros compatriotas, la atención pública se ha centrado ahora en mayor medida en nuestro futuro jurídico-institucional. Las sanas inquietudes de la juventud y de otros sectores nacionalistas por una participación cada vez mayor se inserta en esa realidad.

Para un adecuado enfoque de este problema, es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó sólo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo.

No se trata pues de una tarea de mera restauración sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional.

Nuestra democracia

Ello nos señala el deber de caminar por el sendero del Derecho, armonizando siempre la flexibilidad en la evolución social con la certeza de una norma jurídica objetiva e impersonal, que obligue por igual a gobernantes y gobernados. En esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo.

Una democracia es autoritaria, en cuanto debe disponer un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la

dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad. Consiguientemente, todo atentado en contra de estos principios, cuyo contenido se ha ido precisando en las Actas Constitucionales vigentes, se considera por éstas como un acto ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. La libertad y la democracia no pueden sobrevivir si ellas no se defienden de quienes pretenden destruirlas.

Integradora, en cuanto debe robustecer el Objetivo Nacional y los Objetivos permanentes de la Nación, para que por encima de legítimas divergencias en otros aspectos más circunstanciales, los sucesivos Gobiernos tengan en el futuro la continuidad esencial que les ha faltado en el pasado. De ahí debe brotar un poderoso elemento de unidad de la gran familia chilena, a la cual se ha pretendido sistemáticamente disgregar por tanto tiempo, impulsando una lucha de clases que no existe y no debe existir.

Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo contemporáneo, no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Sólo ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen de debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y dar estabilidad al sistema.

De auténtica participación social, en cuanto a que sólo es verdaderamente libre una sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus fines propios y específicos. Este principio es la base de un cuerpo social dotado de vitalidad creadora, como asimismo de una libertad económica que, dentro de las reglas que fija la autoridad estatal para velar por el bien común, impida la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente. Estamos frente a una tarea que, por su naturaleza y envergadura, debe ser gradual. De este modo, nos alejamos por igual de dos extremos: el del estancamiento, que más tarde o más temprano siempre conduce los procesos sociales a rupturas violentas, y el de la precipitación, que traería consigo la rápida destrucción de todo nuestro esfuerzo, el retorno del régimen anterior con sus mismos hombres y vicios y, muy pronto, un caos similar o peor al que vivimos durante el Gobierno marxista.

Las etapas

El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la de recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad, por el otro. Asimismo, se distinguen por los instrumentos jurídico-institucionales que en cada una de ellas deben crearse o emplearse.

En la etapa de recuperación el Poder Político ha debido ser integralmente asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad, pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación.

Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación, el Poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad, y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas.

Hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, pero estimo que los progresos que en todo orden estamos alcanzando, nos llevan hacia la de transición.

Durante el período que falta de la etapa de recuperación, será necesario completar la dictación de Actas Constitucionales, en todas aquellas materias de rango constitucional aún no consideradas por ellas, como también de algunas leyes trascendentales, como de seguridad, trabajo, previsión, educación y otras que se estudiarán en forma paralela. De esta manera, quedará definitivamente derogada la Constitución de 1925, que en sustancia ya murió, pero que jurídicamente permanece vigente en algunas pequeñas partes, lo que no resulta aconsejable.

Simultáneamente, deberán revisarse las Actas Constitucionales ya promulgadas, en aquellas materias donde su aplicación práctica hubiere demostrado la conveniencia de introducir ampliaciones, modificaciones o precisiones.

La culminación de todo este proceso de preparación y promulgación de las actas constitucionales, que continuará desarrollándose progresivamente desde ahora,

estimo que deberá en todo caso estar terminado antes del 31 de diciembre de 1980, ya que la etapa de transición no deberá comenzar después de dicho año, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de todas las instituciones jurídicas que las actas contemplen.

Entre las referidas actas constitucionales, ocupa un lugar prioritario la que habrá de regular el ejercicio y la evolución de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. Para orientar en esta materia a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el Presidente que os habla entregará próximamente ciertas directrices fundamentales que permitan a dicha comisión preparar el anteproyecto pertinente, para su posterior consulta al Consejo de Estado, antes del pronunciamiento final que corresponderá a la Junta de Gobierno.

Dichas orientaciones para el esquema que deberá regir en la etapa de transición son principalmente las siguientes:

- El Poder Constituyente deberá permanecer siendo ejercido por la Junta de Gobierno. Sin embargo, él se ejercerá normalmente con previa consulta al Consejo de Estado.
- El Poder Ejecutivo deberá permanecer siendo ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, en calidad de Presidente de la República, y con las facultades de que hoy está investido.
- El Poder Legislativo, de acuerdo a la tradición nacional, deberá tener dos colegisladores: el Presidente de la República y una Cámara Legislativa o de Representantes, como se podría denominar, sin perjuicio de las facultades legislativas que, en esta etapa de transición, deberá mantener la Junta de Gobierno, en carácter extraordinario.

Estas autoridades deberán comprender, por una parte, el derecho de cada uno de sus integrantes a presentar proyectos de ley a través de la Presidencia de la República, y por la otra, la facultad de solicitar, antes de la promulgación de cualquier ley, que su texto sea revisado por la Junta de Gobierno. En este último caso, si en la Junta prevaleciera la opinión de que un precepto atenta contra la Seguridad Nacional, éste

no podrá ser promulgado. Se trata de un veto absoluto, destinado a operar en los casos en que la Junta de Gobierno lo interponga, a petición de cualquiera de sus miembros, diferenciándose así del veto ordinario del Presidente de la República frente a la Cámara Legislativa.

Por su parte, y tal como lo expusiera el 18 de marzo pasado, la Cámara Legislativa o de Representantes deberá tener una composición mixta: un tercio de sus miembros habrá de corresponder a personalidades de alto relieve nacional, que la integrarán por derecho propio o por designación presidencial, y los otros dos tercios restantes, serán representantes de Regiones o agrupaciones de Regiones, en una cantidad proporcional al número de sus habitantes.

En cuanto a la legislación ordinaria, se deberán contemplar sistemas de iniciativa de las leyes, de veto presidencial y otros, que eviten los excesos demagógicos que caracterizaron a los últimos períodos de nuestro anterior Parlamento.

Especial importancia cabe atribuir a que la Cámara Legislativa cuente con Comisiones Técnicas, en que participen establemente, con derecho a voz, las personas más calificadas en el plano científico, técnico y profesional en las diversas materias.

La instalación de esta Cámara Legislativa deberá realizarse durante el año 1980 y para su primer período, cuya duración será de 4 ó 5 años, dado que no es factible la realización de elecciones, los representantes de las Regiones habrán de ser designados por la Junta de Gobierno.

Posteriormente, en cambio, dichos representantes regionales se elegirán ya por sufragio popular directo, de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la selección de los más capaces, y que eviten que los partidos políticos vuelvan a convertirse en máquinas monopólicas de la participación ciudadana.

Constituida la Cámara Legislativa en este período, es decir, con dos tercios de sus miembros elegidos popularmente, deberá corresponder a la propia Cámara el designar al ciudadano que a partir de esa fecha desempeñará el cargo de Presidente de la República por un período de seis años.

Simultáneamente con lo anterior, que implicará el paso de la etapa de transición a la de consolidación, corresponderá aprobar y promulgar la nueva Constitución Política del Estado, única y completa, recogiendo como base la experiencia que arroje la aplicación de las Actas Constitucionales. La etapa de transición servirá así para culminar los estudios del proyecto definitivo de la nueva Carta Fundamental.

Al bosquejar este plan general ante el país, el Gobierno cree cumplir con su misión de esclarecer las líneas básicas sobre las cuales anhela desarrollar nuestra evolución institucional próxima, durante la cual también será necesario intensificar la elaboración y consagración jurídica de las nuevas formas de participación social, tanto de carácter gremial o laboral, como estudiantil, profesional, vecinal y de las demás expresiones ciudadanas en general.

Jóvenes chilenos:

La posibilidad de materializar integralmente este plan está sujeta a la condición de que el país siga presentando los signos positivos que nos han permitido avanzar hasta la fecha. Para ello se requiere indispensablemente el concurso patriótico de toda la ciudadanía, y muy especialmente, el idealismo generoso de la juventud, que debe encender de mística nuestro camino hacia el futuro.

No ignoro que se levantarán muchos escollos, ambiciones y personalismos, que de mil maneras pretenderán impedir nuestra marcha, y hacernos volver hacia atrás, donde sólo nos esperarían las penumbras de la esclavitud. Pero estoy seguro de que la luz que emerge al final de nuestra ruta será siempre más fuerte y más luminosa, y por encima de todo, confío plenamente en Dios, en el pueblo de Chile, y en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que, con patriotismo, hoy guían sus destinos.

Mis queridos jóvenes:

El futuro de Chile está siempre en vosotros, cuya grandeza estamos labrando.

2/10 C2 46.11.3 00951.00 7374

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE
AL TERMINO DEL COMITE

DOCUMENTACION

El Directorio del Comité de Cooperación para la Paz en Chile decidió, el viernes 21 de Noviembre, que el cese del funcionamiento del Comité sería el 31 de Diciembre próximo, pretendiendo así indicar claramente hasta que día el Comité es responsable de esta tarea en la que ha estado empeñado durante más de dos años. Quiere urgir, asimismo, a las Iglesias, y en especial a la Iglesia Católica, para que se asuman con prontitud las tareas que el Comité deja de realizar.

El mismo directorio, además acordó nombrar una Comisión Ecuménica ad hoc, para que presenten en el plazo de una semana un estudio que contenga los elementos esenciales que forman parte de los objetivos y tareas del Comité, asegurando la mantención de los objetivos y criterios de acción que han informado esta labor.

Simultáneamente, durante las presentes semanas, se realizan en todas las Zonas Episcopales de Santiago, en las cuales su población es mayoritariamente popular, reuniones del clero y religiosas en las cuales se apunta, en general, aún cuando con matices diferentes según la zona, lo siguiente:

- Se lamenta la disolución del Comité y muchos plantean la medida como extremadamente grave y nociva.
- Se ve como absolutamente necesario que la tarea hasta ahora realizada por el Comité, continúe con los mismos criterios pastorales que lo orientaban; inspirada en criterios solidarios y no puramente asistenciales.
- Se observa, en muchas opiniones, la idea de mantener una necesaria centralización respecto del conjunto de las tareas desarrolladas hasta ahora por el Comité, con el objeto de evitar una dispersión y duplicidad de criterios.
- Finalmente, todos ellos esperan poder entregar su opinión y criterios en el momento en que se inicie el estudio de soluciones alternativas.

Por su parte, los funcionarios del Comité han recibido demostraciones de solidaridad, aprecio y agradecimiento de parte de numerosas personas, incluidos sacerdotes y religiosos; de parte de organizaciones de trabajadores, ya que el 31 de Diciembre próximo deben abandonar el trabajo que de una forma abnegada y plagada de sacrificios, y aún a riesgo de la seguridad individual, habían venido realizando, aunque en el desempeño de las mismas se hayan cometido errores o hayan tenido insuficiencias.

Respecto a la fecha fijada para el cierre del Comité (31 de Diciembre) la posición de los funcionarios del Comité es que esa fecha debe aplazarse si en esa oportunidad no existe una alternativa de trabajo preparada y en marcha y si no se ha logrado la libertad de los funcionarios del Comité arbitrariamente detenidos en razón de su trabajo en esa Institución.

Santiago, 28 Noviembre 1975

ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS

I. REFLEXIONES FUNDAMENTALES

La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.

Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:

El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.

Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.

Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.

II. CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS ENTERO

Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.

Condiciones generales sobre la información

- Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.
- La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:

- Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan, será entregada al Presidente de la República.
- Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.
- La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.

Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo:

Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentan las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:

Al Poder Ejecutivo:

- Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
- Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.
- Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional:

- Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.

A la Corte Suprema de Justicia:

- Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva

información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.

- Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.

Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar viables.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.

El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.

La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.

Santiago, 13 de Junio de 2000

Anexo nº 6

DECRETO SUPREMO Nº 1.040, QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD ACERCA DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE, MINISTERIO DEL INTERIOR, SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Visto: Lo dispuesto por los artículos 24 y 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República, en relación con los incisos cuarto y quinto del artículo 1º, con el inciso segundo del artículo 5º y 19 Nº 1 de la misma Constitución, y

Considerando:

Que, en el proceso de violación de los derechos humanos acaecido en Chile durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, muchas personas sufrieron injustas y vejatorias privaciones de libertad, muchas veces acompañadas de apremios físicos ilegítimos;

Que, cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones;

Que, muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado;

Que, sólo en la medida que se conozca en forma completa la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro;

Que, es una obligación del Presidente de la República, encargado del Gobierno y la administración del Estado, promover el bien común de la sociedad y hacer todo cuanto su autoridad permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de toda la verdad y a la reconciliación de la Nación;

Que, la experiencia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la denominada Mesa de Diálogo demuestran que es posible alcanzar crecientes grados de verdad, especialmente cuando la recopilación y sistematización de los

antecedentes del caso es entregada a personas de reconocido prestigio y autoridad moral del país;

D e c r e t o:

Artículo Primero: Créase, como un órgano asesor del Presidente de la República, una Comisión Nacional sobre Presión Política y Tortura, en adelante La Comisión, que tendrá por objeto exclusivo determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

No será objeto de calificación la situación de las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos.

Artículo Segundo: Corresponderá a la Comisión proponer al Presidente de la República las condiciones, características, formas y modos de las medidas de reparación, austeras y simbólicas que podrán otorgarse a las personas que, reconocidas como prisioneros políticos o torturados, no hubieren recibido hasta la fecha otro beneficio de carácter reparatorio derivado de tal calidad. Asimismo las propuestas de medidas reparatorias de orden pecuniario deberán considerar el hecho de que la persona reconocida haya sido objeto de otra medida reparatoria de carácter permanente.

Artículo Tercero: En el cumplimiento de su objeto, la Comisión no podrá, de manera alguna, asumir funciones de carácter jurisdiccional y, en consecuencia, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.

Artículo Cuarto: La Comisión estará integrada por las siguientes personas:

Monseñor Sergio Valech Aldunate, quien la presidirá

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg

Don Luciano Fouilloux Fernández

Don José Antonio Gómez Urrutia
Doña Elizabeth Lira Kornfeld
Doña María Luisa Sepúlveda Edwards
Don Lucas Sierra Iribarren y
Don Alvaro Valera Walker

Artículo Quinto: La Comisión recibirá, dentro del plazo que ella misma fije, los antecedentes que proporcionen los interesados.

La Comisión podrá realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para cumplir su cometido, tales como recibir o requerir de las agrupaciones de víctimas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria, y de organismos intergubernamentales o no gubernamentales, los antecedentes que en su oportunidad pudieren haber reunido.

Los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus atribuciones, toda la colaboración que ésta solicite en el desarrollo de sus labores, poner a su disposición los antecedentes que se les requieran y facilitar su acceso a todos los lugares que ella estime necesario visitar.

Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.

Artículo Sexto: La Comisión deberá elaborar un informe lo más completo posible de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, reuniendo los antecedentes aportados por los interesados que permitan acreditar de manera fehaciente dichas circunstancias.

Artículo Séptimo: La Comisión dispondrá de un plazo de seis meses para desarrollar su cometido, el que podrá ser prorrogado fundadamente, y por una sola vez, hasta por tres meses, si resultare necesario para el correcto cumplimiento de sus tareas.

Dentro de dicho plazo, y sobre la base de los antecedentes que reúna, la Comisión deberá elaborar un informe que será presentado al Presidente de la República, en el que se indicarán las conclusiones a que arribe, según el recto criterio y conciencia de sus miembros, respecto de las materias establecidas en los artículos 1° y 2°.

Entregado el informe al Presidente de la República, la Comisión terminará su cometido y quedará automáticamente disuelta.

Artículo Octavo: La Comisión tendrá una Vicepresidencia Ejecutiva, a cargo de María Luisa Sepúlveda Edwards. Corresponderá al Ministerio del Interior apoyar las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva, para lo cual pondrá a su disposición el personal y los medios necesarios para el desarrollo de sus tareas.

El Ministerio del Interior otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el desarrollo de sus funciones.

Artículo Noveno: La Comisión dictará su propio reglamento interno para regular su funcionamiento, el cual deberá establecer las actuaciones que podrán delegarse en uno o más de sus miembros, o en la vicepresidencia.

Artículo Décimo: Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 5°, la Comisión podrá, de oficio o a petición de parte, adoptar medidas tendientes a garantizar la reserva de identidad de quienes le proporcionen antecedentes o colaboren en sus tareas.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.-

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-

José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-

Saluda atentamente a usted.,

Jorge Correa Sutil, Subsecretario del Interior.

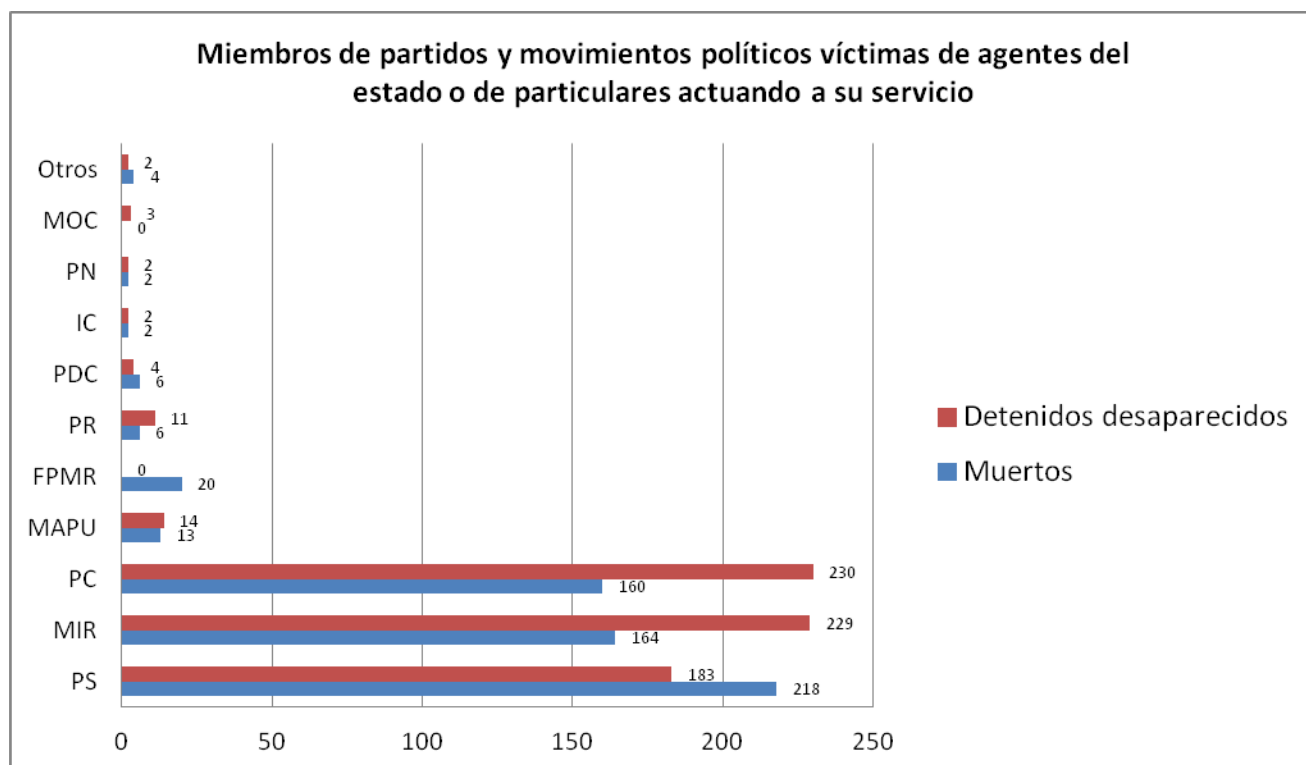
Anexo nº 7

VI. CUADRO DE MIEMBROS DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS VÍCTIMAS DE AGENTES DEL ESTADO O DE PARTICULARES ACTUANDO A SU SERVICIO.

	Muertos	Detenidos desaparecidos	Total
Partido socialista (PS)	218	183	401
Movimiento de izquierda revolucionario (MIR)	164	229	393
Partido comunista (PC)	160	230	390
Movimiento de acción popular unitaria (MAPU)	13	14	27
Frente patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)	20	-	20
Partido radical (PR)	6	11	17
Partido demócrata cristiano (PDC)	6	4	10
Izquierda cristiana (IC)	2	2	4
Partido nacional (PN)	2	2	4
MAPU obrero campesino (MOC)	-	3	3
Otros*	4	2	6
Total	595	680	1.275

*Partido izquierda radical (PIR), partido por la democracia (PPD), partido amplio de izquierda socialista (PAIS), partido comunista revolucionario (PCR), partido socialista de los trabajadores (PST) y movimiento bandera roja (MBR).

Gráfico 6.



Fuente: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Anexo nº8

Lista de los 119 compañeros desaparecidos en la llamada "Operación Colombo"

Nº	Fecha	Nombre completo	Edad	Militancia	Actividad
1	27/05/74	Reyes González Agustín Eduardo	23	MIR	Artesano
2	04/06/74	Cubillos Calvez Carlos Luis	20	MIR	Vendedor ambulante
3	15/06/74	Ziede Gómez Eduardo Humberto	27	MIR	Estudiante de Sociología
4	17/06/74	Fioraso Chau Albano Agustín	23	MIR	Profesor de Castellano
5	18/06/74	Espinoza Méndez Jorge Enrique	24	MIR	Estudiante universitario
6	25/06/74	Villarroel Gangas Víctor Man	18	s/m	Obrero
7	08/07/74	Acuña Castillo Miguel Ángel	18	MIR	Estudiante
8	08/07/74	Garay Hermosilla Héctor Marci	18	MIR	Estudiante
9	10/07/74	Toro Romero Enrique Segundo	28	PC	Obrero
10	10/07/74	Uribe Tamblay Barbara Gabriela	20	MIR	Secretaria
11	10/07/74	Van Yurick Altamirano Edwin	20	MIR	Vendedor
12	13/07/74	Buzzio Lorca Jaime Mauricio	21	MIR	Estudiante Técnico
13	13/07/74	Alvarado Borgel María Inés	21	MIR	Secretaria
14	07/14/74	Contreras González Abundio	28	MIR	Trabajador
15	15/07/74	Chacón Olivares Juan Rosendo	29	MIR	Médico Veterinario
16	15/07/74	Elgüeta Pinto Martín	21	MIR	Estudiante de Economía
17	15/07/74	Lara Petrovich Eduardo Enrique	35	PC	Empleado IRT
18	15/07/74	Moreno Fuenzalida Germán Rodol	25	MIR	Estudiante de Derecho
19	07/15/74	Villagra Astudillo José Caupol	40	PC	Obrero
20	17/07/74	Quiñones Lembach Marcos Esteban	26	MIR	Empleado público
21	18/07/74	Reyes Pina Daniel Abraham	24	MIR	Peluquero
22	19/07/74	Poblete Cordova Pedro Enrique	27	MIR	Obrero metalúrgico
23	07/20/74	Guajardo Zamorano Luis Julio	22	MIR	Estudiante Tec. Indu St.
24	07/20/74	Muñoz Andrade Leopoldo	22	MIR	Egresado Esc. industrial
25	23/07/74	González Pérez Rodolfo Valen	19	s/m	Servicio Militar Fach
26	25/07/74	Ibarra Toledo Juan Ernesto	21	MIR	Estudiante de Servicio Social
27	25/07/74	Núñez Espinoza Ramón Osvaldo	20	MIR	Estudiante
28	26/07/74	Chávez Lobos Ismael Darío	22	MIR	Empleado Obras Públicas
29	27/07/74	Olivares Graindorge Jorge	23	MIR	Jardinero

		Alejandro			
30	07/29/74	Machuca Muñoz Zacarías Antonio	22	MIR	Egresado Técnico Topográfico
31	30/07/74	Alarcón Jara Eduardo Enrique	49	MIR	Albañil
32	30/07/74	Lazo Lazo Ofelio de la Cruz	43	PS/MIR	Carpintero
33	31/07/74	Chanfreau Oyarce Alfonso René	23	MIR	Estudiante de Filosofía
34	01/08/74	Montecinos Alfaro Sergio Sebastián	28	PS	Sastre e interventor
35	05/08/74	Jorquera Encina Mauricio	19	MIR	Estudiante
36	06/08/74	Andreoli Bravo María Angélica	27	MIR	Secretaria
37	08/06/74	Dockendorff Navarrete Muriel	22	MIR	Estudiante de Economía
38	15/08/74	Espejo Gómez Rodolfo Alejandro	18	PS	Estudiante secundario
39	08/15/74	Gaete Farias Gregorio Antonio	24	PS	Obrero
40	15/08/74	González Inostroza Galo Hernán	27	MIR	Empleado particular
41	08/15/74	González Inostroza María Elena	22	MIR	Profesora
42	16/08/74	Salcedo Morales Carlos Eladio	21	MIR	Comerciante
43	17/08/74	Cabezas Quijada Antonio Sergio	29	PS	Interventor
44	21/08/74	Arévalo Muñoz Víctor Daniel	26	PC	Vendedor de frutas
45	22/08/74	Arias Vega Alberto Vladimir	19	PC	Mecánico en radiadores
46	22/08/74	Tello Garido Teobaldo Antonio	25	MIR	Fotógrafo
47	22/08/74	Espinoza Pozo Modesto Segundo	32	MIR	Rondín
48	23/08/74	Aguilera Peñaloza Stalin Arturo	41	PC	Maestro pintor
49	24/08/74	Maturana Pérez Juan Bautista	29	PC	Comerciante
50	24/08/74	Olmos Guzmán Gary Nelson	34	s/m	Artesano del calzado
51	26/08/74	Bravo Núñez Francisco Javier	24	MIR	Mecánico de automóviles
52	27/08/74	Binfa Contreras Jacqueline	28	MIR	Asistente social
53	28/08/74	Barría Araneda Antonio Arturo	38	PC	Profesor
54	29/08/74	López Díaz Violeta del Carmen	40	MIR	Secretaria
55	05/09/74	Bustos Reyes Sonia de las Mercedes	30	PDC	Cajera
56	06/09/74	Chaer Vasquez Roberto	21	MIR	Empleado particular
57	06/09/74	Llanca Iturra Monica Chyslaine	23	MIR	Empleada Gabinete
58	06/09/74	Morales Chaparro Edgardo	38	PS	Obrero
59	07/09/74	Aedo Carrasco Francisco Eduardo	63	PS/MIR	Profesor de Arquitectura
60	07/09/74	Retamales Briceño Asrael	44	s/m	Mecánico de feria libre

		Leona			
61	10/09/74	Pérez Vargas Carlos Freddy	25	MIR	Publicista
62	13/09/74	Jara Castro José Hipólito	24	MIR	Egresado de Química y Farmacia
63	14/09/74	De Castro López Bernardo	36	MIR	Dibujante Publicista
64	14/09/74	Durán Rivas Luis Eduardo	29	MAPU/MIR	Estudiante de Periodismo
65	14/09/74	Lagos Hidalgo Sergio Hernán	30	MAPU/MIR	Empleado particular
66	14/09/74	Merino Molina Pedro Juan	20	PC	Sastre
67	16/09/74	Carrasco Díaz Mario Edulfo	18	S/m	Estudiante de contabilidad
68	16/09/74	Palomino Benitez Vicente Segundo	30	MIR	Profesor de química
69	16/09/74	Zuñiga Tapia Héctor Cayetano	27	MIR	Estudiante de Química y Farmacia
70	17/09/74	Villalobos Díaz Manuel Jesús	22	MIR	Vendedor
71	17/09/74	Gallardo Agüero Néstor Alfonso	24	MIR	Contador
72	20/09/74	Gajardo Wolff Carlos Alfredo	34	MIR	Arquitecto
73	20/09/74	Fuentes Riquelme Luis Fernando	23	MIR	Estudiante universitario
74	23/09/74	López Stewart María Cristina	22	MIR	Estudiante de historia
75	25/09/74	Calderón Tapia Mario Eduardo	31	MIR	Periodista
76	25/09/74	Salinas Argomedo Ariel Martín	26	MIR	Estudiante de sociología
77	03/10/74	Andrónicos Antequera Jorge Eli	24	MIR	Estudiante
78	04/10/74	Andrónicos Antequera Juan Carlos	23	MIR	Estudiante
79	07/10/74	Miranda Lobos Eduardo Francis	27	MIR	Topógrafo
80	24/10/74	Martínez Hernández Eugenia Del	25	MIR	Obrera textil
81	30/10/74	Droully Yurich Jacqueline Paul	24	MIR	Asistente social
82	10/31/74	D'orival Briceño Jorge Humberto	26	MIR	Médico veterinario
83	31/10/74	Salinas Eytel Marcelo Eduardo	31	MIR	Técnico de radio y tv
84	11/16/74	Reyes Navarrete Sergio Alfonso	26	MIR	Egresado de economía
85	17/11/74	Castro Salvadores Cecilia Ga	23	MIR	Estudiante de Derecho
86	19/11/74	Pizarro Meniconi Isidro Migue	21	MIR	Técnico de máquina de escribir
87	25/11/74	Arroyo Padilla Rubén David	29	MIR	Artesano
88	26/11/74	Silva Peralta Claudio Guiller	23	MIR	Estudiante de biología
89	27/11/74	Silva Camus Fernando Gmo.	61	MIR	Decorador de interiores
90	27/11/74	De la Jara Goyeneche Félix	24	MIR	Estudiante de pedagogía
91	29/11/74	Bueno Cifuentes Carmen	24	MIR	Cineasta

		Cecilia			
92	07/12/74	Palominos Rojas Luis Jaime	23	MIR	Estudiante
93	08/12/74	Cid Urrutia Washington	25	MIR	Estudiante de pedagogía
94	09/12/74	Bustillos Cereceda María Teres	25	MIR	Estudiante de servicio social
95	09/12/74	Peña Solari Mario Fernando	21	MIR	Estudiante de arquitectura
96	09/12/74	Neira Muñoz Marta Silvia Adela	29	MIR	Empleada particular
97	10/12/74	Peña Solari Nilda Patricia	23	MIR	Estudiante de biología
98	10/12/74	Silva Saldivar Gerardo Ernesto	23	MIR	Estudiante de estadística
99	12/12/74	Eltit Contreras María Teresa	22	MIR	Estudiante de secretariado
100	12/12/74	Ortiz Moraga Jorge Eduardo	20	MIR	Estudiante de medicina
101	12/12/74	Radrigan Plaza Anselmo Osvaldo	25	MIR	Estudiante universitario
102	13/12/74	Herrera Cofre Jorge Antonio	18	MIR	Estudiante de enseñanza media
103	14/12/74	Labrador Urrutia Ramón Isidro	24	MIR	Comerciante
104	20/12/74	Joui Petersen María Isabel	19	MIR	Estudiante de economía
105	31/12/74	Robotham Bravo Jaime Eugenio	23	PS	Estudiante de sociología
106	01/01/75	Martínez Meza Agustín Alamiro	27	MIR	Ingeniero mecánico
107	02/01/75	Marchant Villaseca Rodolfo	29	PS	Técnico de aire acondicionado
108	06/01/75	Urbina Chamorro Jilberto Patricio	25	MIR	Estudiante de medicina
109	07/01/75	Contreras Hernández Claudio	27	MIR	Constructor civil
110	07/01/75	Sandoval Rodríguez M. Angel	26	MIR	Sastre
111	10/01/75	Flores Pérez Julio Fidel	22	MIR	Estudiante UTE Antofagasta
112	18/01/75	García Vega Alfredo Gabriel	30	MIR	Profesor Universidad de Valparaíso
113	29/01/75	Molina Mogollones J. Enrique	29	MIR	Empleado
114	07/02/75	Ugaz Morales Rodrigo Eduardo	22	MIR	Trabajador independiente
115	13/02/75	Vasquez Saenz Jaime Enrique	27	MIR	Estudiante de construcción civil
116	14/02/75	Cortes Joo Manuel Edgardo Del	28	MIR	Contador
117	14/02/75	Ríos Videla Hugo Daniel	21	MIR	Estudiante Ute
118	14/02/75	Acuña Reyes Rene Roberto	22	MIR	Estudiante universitario
119	20/02/75	Perelman Ide Juan Carlos	31	MIR	Ingeniero químico

Fuente: Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, *La Gran Mentira. El caso de las "Listas de los 119". Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990*. Santiago, Equipo Nizkor-Derechos Human Rights, 2002. Disponible en, <<http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/119/index.html>>.[Consultado en noviembre de 2011].

Anexo nº 9

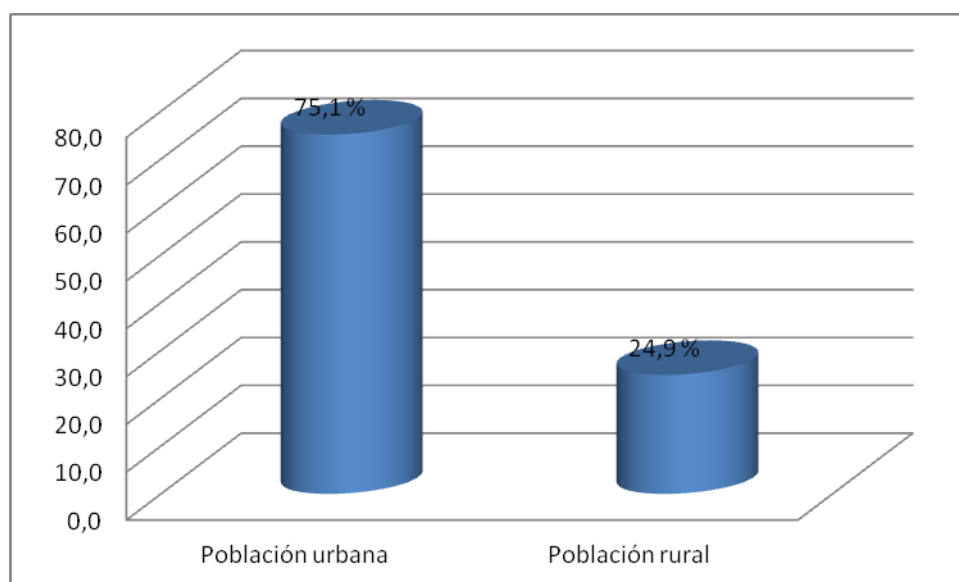
Datos de censos

1) DATOS CENSO CHILE 1970

Total población

	%	Total
Población urbana	75,1	6.675.137
Población rural	24,9	2.209.631

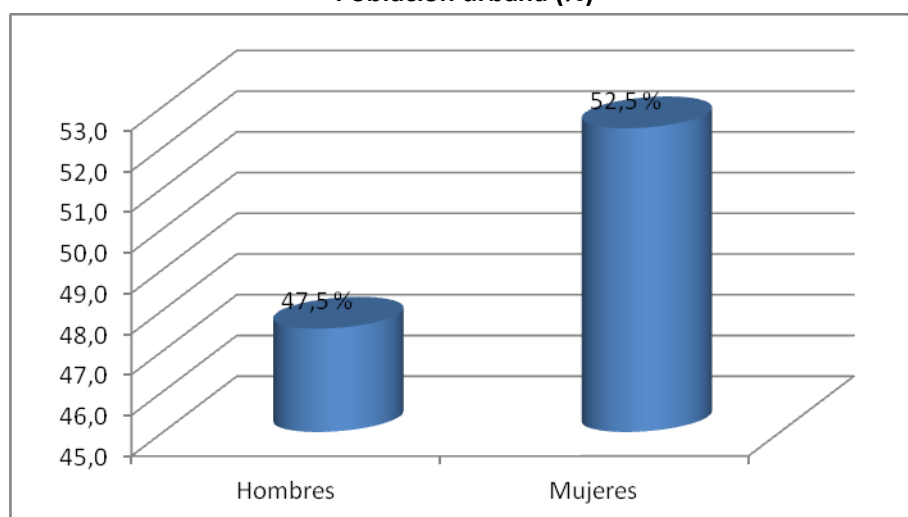
Población de Chile - 1970



Población urbana

Hombres	47,5	3.173.323
Mujeres	52,5	3.501.814
Total	100	6.675.137

Población urbana (%)

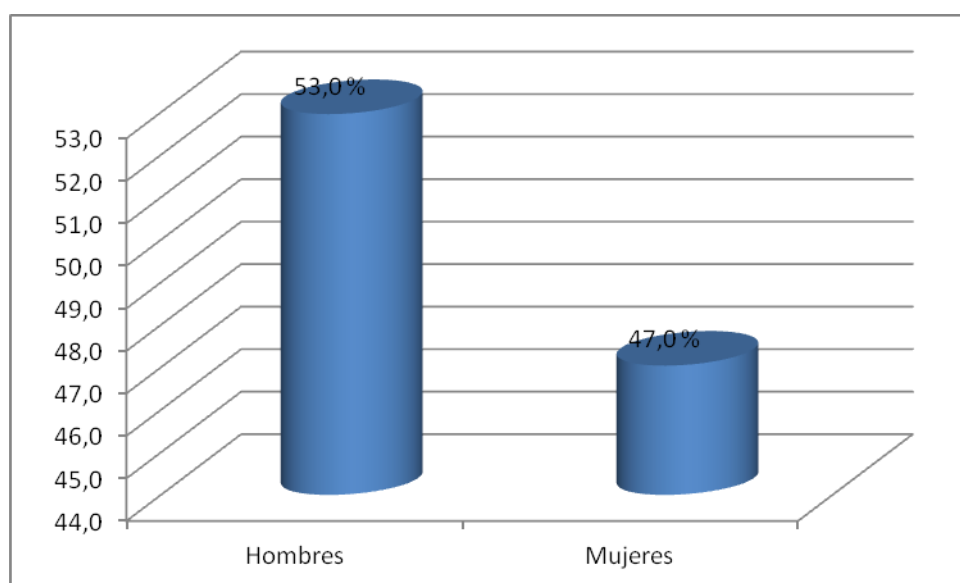


Fuente: República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, Población total del país. XIV Censo de Población y III de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1970.

Población rural

Hombres	53,0	1.170.189
Mujeres	47,0	1.039.442
Total	100	2.209.631

Población rural (%)

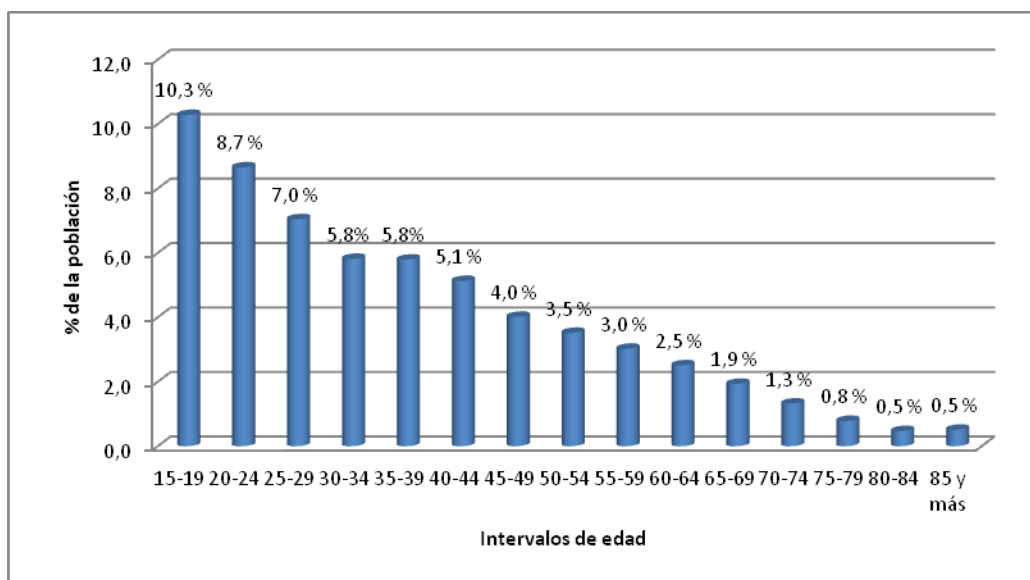


Fuente: República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, Población total del país. XIV Censo de Población y III de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1970.

Población por intervalos de edad

15-19	10,3	913.465
20-24	8,7	769.036
25-29	7,0	625.992
30-34	5,8	516.721
35-39	5,8	514.551
40-44	5,1	455.792
45-49	4,0	356.853
50-54	3,5	312.615
55-59	3,0	268.691
60-64	2,5	223.199
65-69	1,9	171.870
70-74	1,3	117.772
75-79	0,8	69.705
80-84	0,5	41.901
85 y más	0,5	45.463

Población por intervalos de edad (%)

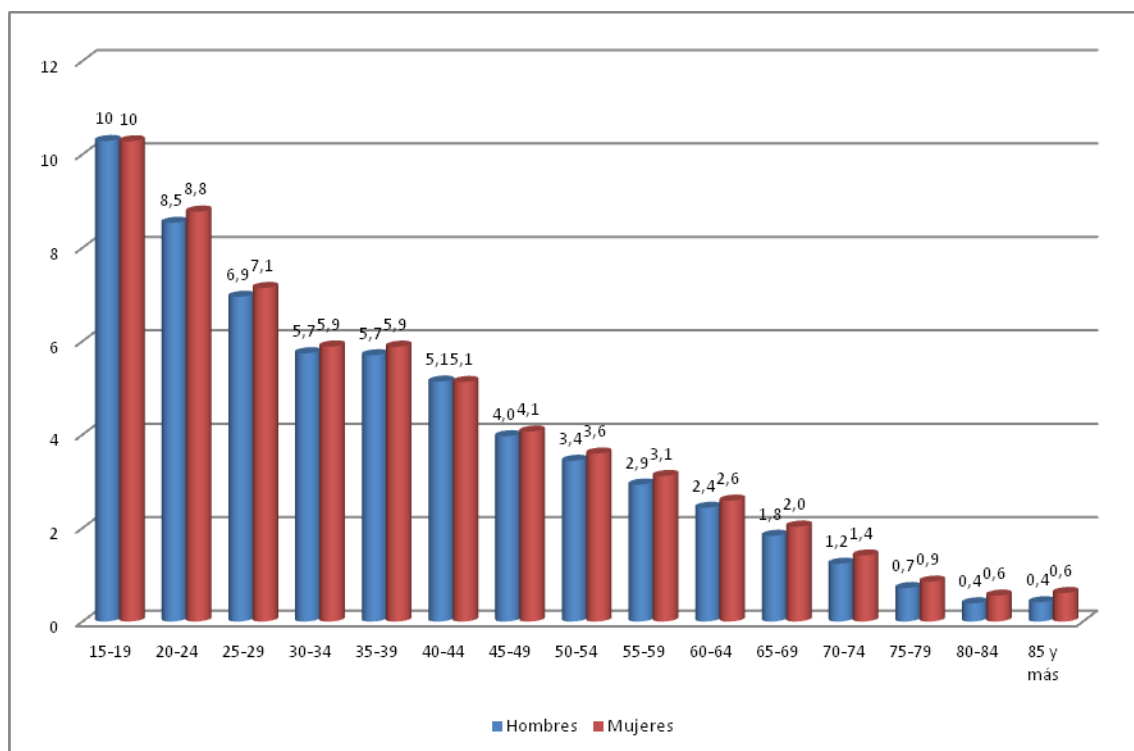


Fuente: República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, Población total del país. XIV Censo de Población y III de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1970.

Población por intervalos de edad y sexo

	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
15-19	10	10	446.720	466.736
20-24	8,5	8,8	370.653	398.383
25-29	6,9	7,1	301.862	324.130
30-34	5,7	5,9	249.409	267.312
35-39	5,7	5,9	247.473	267.078
40-44	5,1	5,1	223.014	232.778
45-49	4,0	4,1	172.260	184.593
50-54	3,4	3,6	149.338	163.227
55-59	2,9	3,1	127.242	141.449
60-64	2,4	2,6	105.715	117.484
65-69	1,8	2,0	79.614	92.256
70-74	1,2	1,4	53.660	64.112
75-79	0,7	0,9	31.021	38.684
80-84	0,4	0,6	16.805	25.096
85 y más	0,4	0,6	17.791	27.672

Población por intervalos de edad y sexo (%)



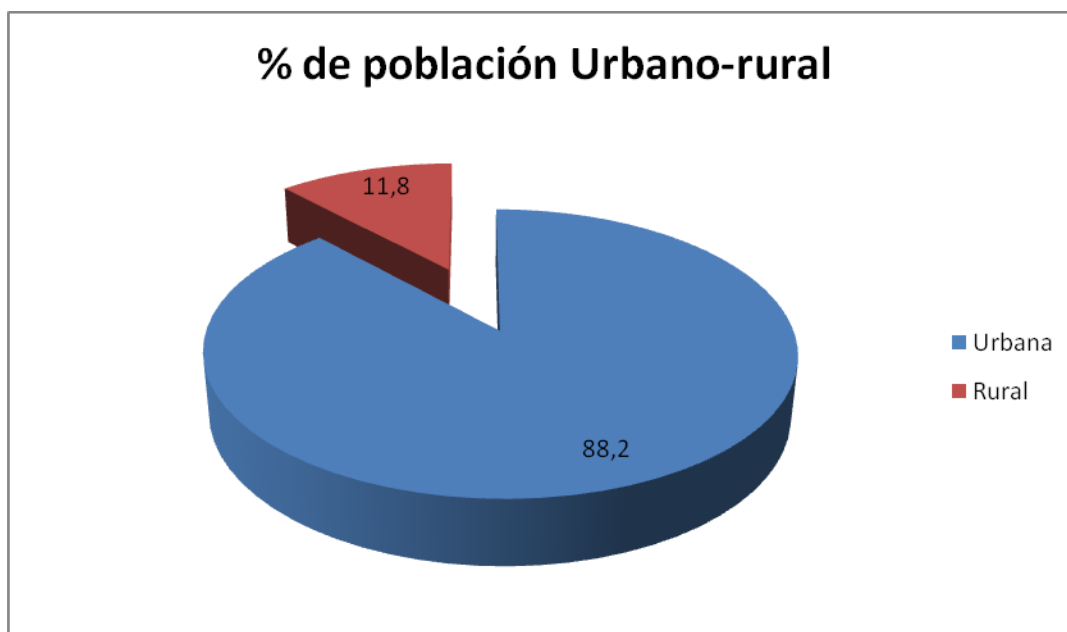
Fuente: República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, Población total del país. XIV Censo de Población y III de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1970.

2) DATOS CENSO CHILE 1982

Total población: 11. 329.736, tasa de crecimiento fue de un 2,05% (en 1970 fue de un 2,0%)

Población urbana: 9.316.127

Población rural: 2.013.609.

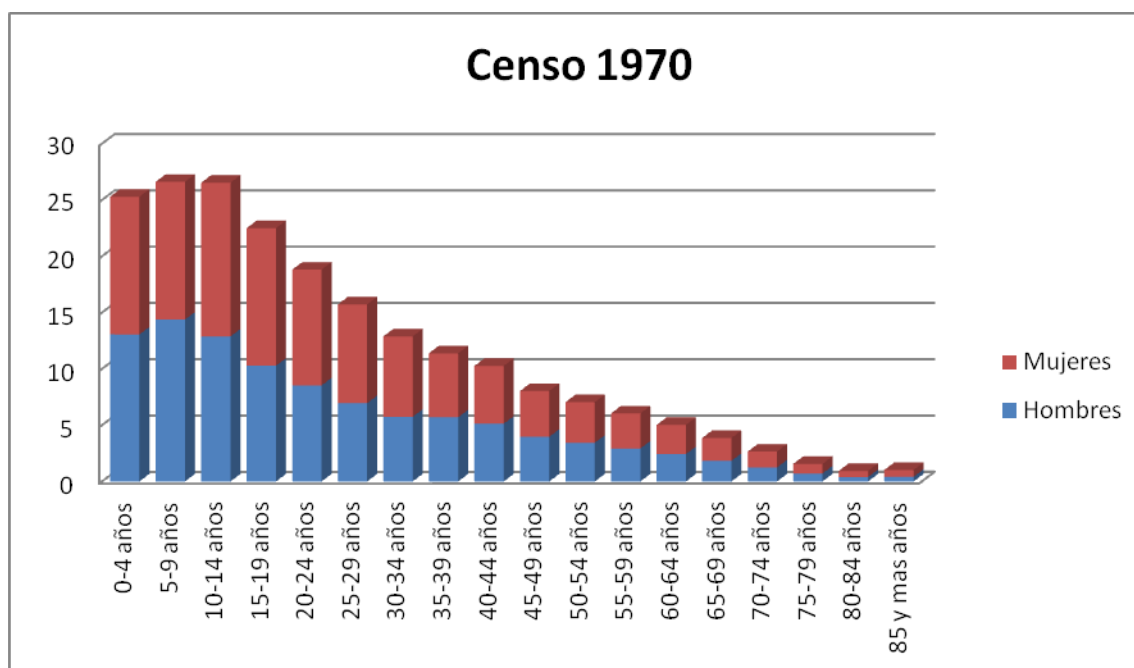


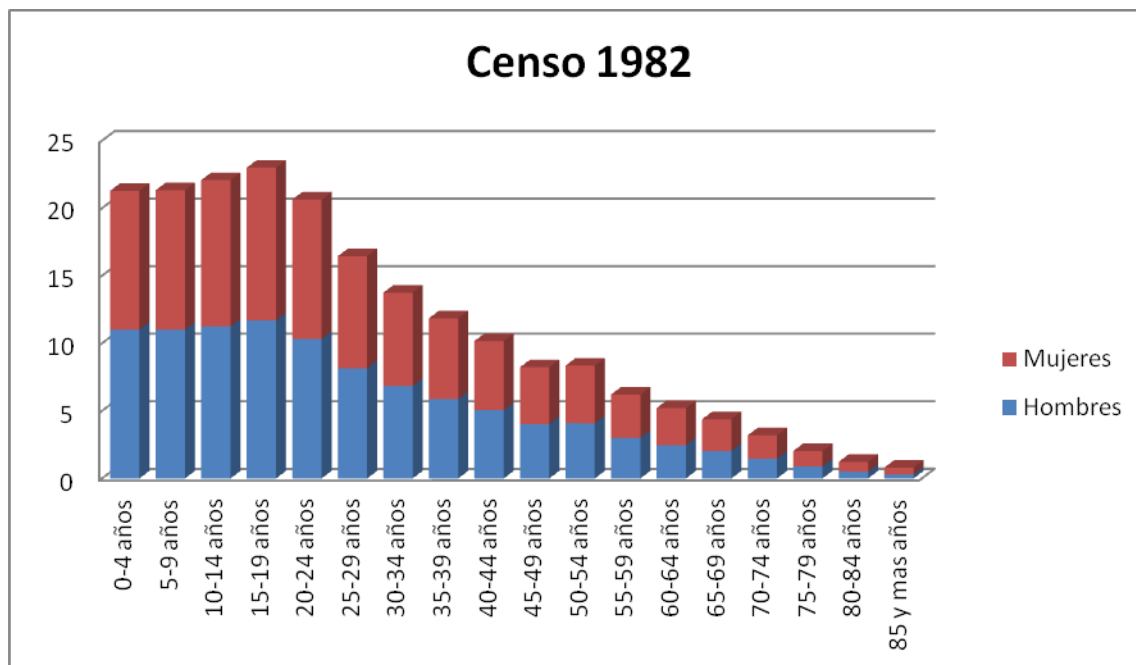
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, *Organización del XV Censo Nacional de población y IV de vivienda*, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), abril 1982.

Cuadro nº2

Composición de la población, por sexo, según grupo de edad, **censo 1970-1982**

Grupo de edad	Composición de la población			
	Censo 1970		Censo 1982	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
0-4 años	13,06	12,23	11,02	10,27
5-9 años	14,38	12,23	11,01	10,32
10-14 años	12,88	13,65	11,25	10,83
15-19 años	10,28	12,22	11,70	11,30
20-24 años	8,53	10,28	10,33	10,31
25-29 años	6,95	8,77	8,15	8,30
30-34 años	5,74	7,14	6,84	6,91
35-39 años	5,70	5,68	5,87	5,98
40-44 años	5,13	5,13	5,06	5,11
45-49 años	3,97	4,06	4,03	4,20
50-54 años	3,44	3,60	4,08	4,27
55-59 años	2,93	3,11	3,00	3,21
60-64 años	2,43	2,59	2,46	2,75
65-69 años	1,83	2,03	2,04	2,34
70-74 años	1,24	1,41	1,47	1,72
75-79 años	0,71	0,85	0,89	1,14
80-84 años	0,39	0,55	0,50	0,73
85 y mas años	0,41	0,61	0,29	0,51





Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, *Organización del XV Censo Nacional de población y IV de vivienda*, Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), abril 1982.

3) DATOS CENSO CHILE 1992

Hombres 6.553.254 49.09 (49.09%)

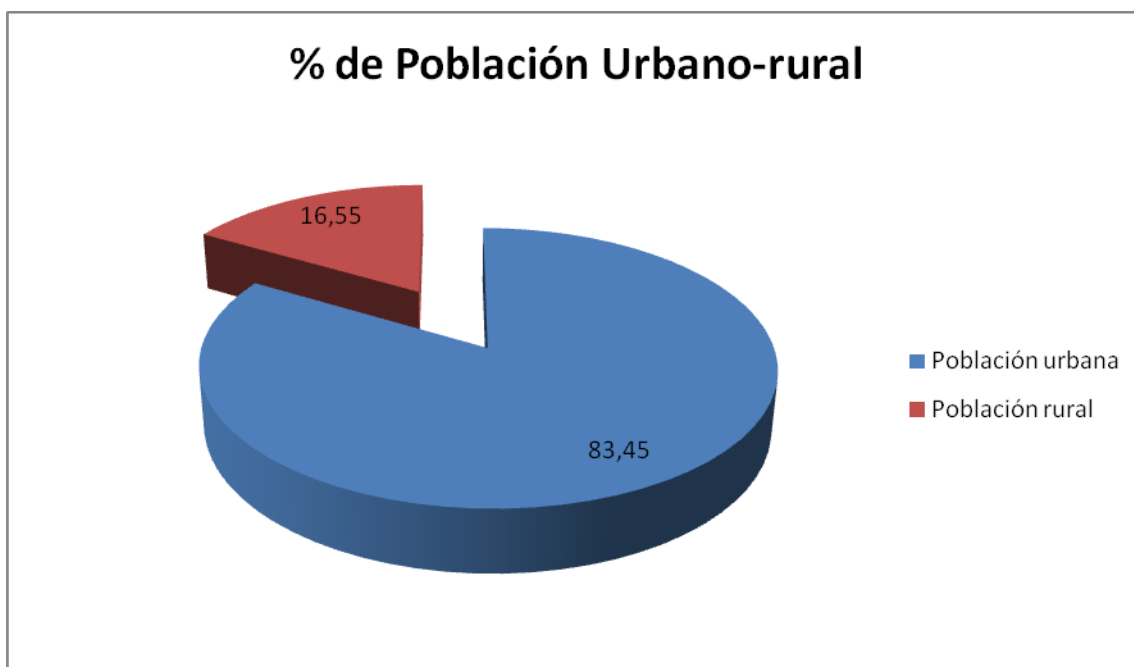
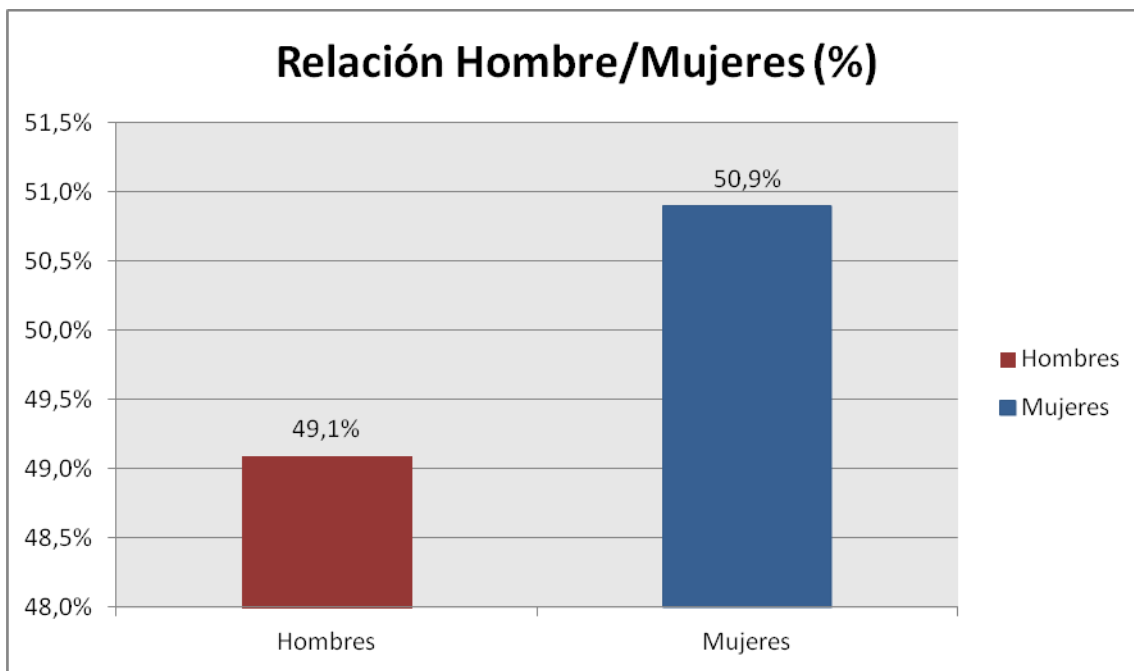
Mujer 6.795.147 (50.9%) 1 100.00

Total 13.348.401 (100.00%)

Población urbana: 11.140.405 (83,45%)

Población rural: 2.207.996 (16,55%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XVI Censo Nacional De Población y V de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadística, abril, 1992.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XVI Censo Nacional De Población y V de Vivienda, Santiago, Instituto Nacional de Estadística, abril, 1992.

MÉTODOS DE TORTURA

Método	Características
Golpizas reiteradas	Golpes de pies y puños
	Golpes con objetos contundentes: culata de las armas (culatazos), palos (palizas), laque (también llamado <i>churro</i> , <i>luma</i> o <i>tonto de goma</i>), apedreamientos, con otros objetos contundentes.
	Golpes con objetos flexibles o no contundentes (también llamados azotes o flagelamiento): látigos, fusta para caballos, baquetas (varillas de coligüe).
	El <i>teléfono</i> , esto es, golpes con mano abierta en ambos oídos (puede provocar lesiones auditivas permanentes).
	Golpes reiterados en los ojos, boca, nariz, testículos, pechos, cuello, rodillas y otras partes sensibles del cuerpo.
	Las denuncias incluyen otras prácticas que implican golpes, tales como: -Callejón oscuro: hacer pasar a los detenidos por entre dos hileras de efectivos que les propinan golpes de pies, puños y culatazos. -Pisar y saltar sobre los detenidos cuando están tendidos en el suelo, boca arriba o boca abajo. -Dejar caer el cuerpo del detenido al suelo escaleras abajo. -Arrastrar al detenido por el suelo o por las escaleras, tomado del pelo, amarrado del cuello o de otro miembro.
Lesiones corporales deliberadas	Extracciones de partes menores del cuerpo (uñas, dientes, etc.).
	Cortes con arma blanca (en las manos, en las piernas, en los genitales, en la espalda, en otras partes del cuerpo).
	Fracturas deliberadas (de brazos, pies, manos, dedos).
	Heridas a bala.
	Lesiones auditivas premeditadas, provocadas por disparo de fusil junto a los oídos o por la exposición a sonidos agudos durante tiempo prolongado, incluso hasta causar sangramiento de oídos, boca y nariz, con pérdida de conciencia en algunos casos.
	Lesiones de diversa consideración resultantes de pasar un vehículo sobre los pies, las manos u otras partes del cuerpo del detenido.
Colgamientos	- Las personas fueron colgadas de una o de ambas muñecas; de uno o de ambos pies en posición invertida; de pies y manos amarrados a un palo puesto en posición horizontal, quedando el resto del cuerpo curvado; o bien de los brazos atados detrás de la espalda -método conocido como <i>la paloma</i> -, que provoca dislocación de los hombros. El tiempo de colgamiento, librado al arbitrio del agente a cargo, podía ir desde unos minutos hasta varios días. Por añadidura, la persona colgada, con bastante frecuencia debía padecer amenazas, insultos, humillaciones, golpes, mientras se hallaba desnuda; en algunos casos, incluso se les aplicó electricidad o se les sometió a algún tipo de agresión sexual. -Mención aparte merece un tipo de colgamiento especial, más sofisticado, llamado <i>pihuelo</i> o <i>pau de arará</i> ("palo volador", en

	portugués). Primero se amarraban las manos, luego éstas a los pies cruzando una barra o un palo en sentido horizontal por entremedio del espacio formado; a continuación, esa barra o palo se colgaba en forma horizontal, con lo cual la víctima quedaba en posición invertida, colgando de manos y pies, amarrados entre sí. En ocasiones la barra se hacía girar, y aumentaban así los dolores. El <i>pau de arará</i> fue utilizado, principalmente, por los organismos de seguridad. A menudo, las personas que sufrieron cualquier modalidad de colgamiento, más tarde si no de inmediato, presentaron algún tipo de lesión en la columna.
Posiciones forzadas	Las formas más usuales, de acuerdo con los registros de esta Comisión, fueron permanecer de pie; tendido en el piso boca abajo; sentado y amarrado a una silla; de pie y con el cuerpo vuelto a la pared; con las manos en alto; o bien de rodillas y con las manos detrás de la nuca, por tiempos que iban desde varias horas hasta varios días y en algunos casos semanas.
Aplicación de electricidad	<p>-En los principales recintos de detención, sea cual fuere su ubicación geográfica, se contó desde el primer momento con implementos apropiados para aplicar este tipo de tortura, que las víctimas describen como un <i>magneto</i> del cual salían los cables que se adherían a los puntos más sensibles del cuerpo del detenido. En muchos casos, los instrumentos disponibles permitían graduar las descargas eléctricas, aumentando o disminuyendo el voltaje a voluntad de los torturadores. En cualquier caso, en recintos de detención menores y peor equipados, también se aplicó electricidad a los interrogados aunque en forma más rudimentaria.</p> <p>-Al momento de aplicar la electricidad, muchas personas declararon que los interrogadores los sentaban en una silla, de preferencia metálica, o bien los tendían sobre una cama o un catre metálico. Se procedía a maniatarlos, inmovilizándolos. Previamente se solía desnudar a las personas; la vista vendada o la cabeza encapuchada agravaba la sensación de indefensión.</p> <p>-En varias ocasiones, los efectivos militares o policiales arrojaban agua al detenido para asegurarse de que la descarga eléctrica se sintiera en todo el cuerpo.</p> <p>-Destaca el procedimiento conocido como <i>la parrilla</i>. Al detenido se le vendaban los ojos o se le encapuchaba. Luego se le desnudaba, acostándole sobre un catre metálico, al cual se le amarraba de pies y manos. Listos los preparativos, se procedía a aplicar descargas eléctricas mediante la colocación de electrodos en diferentes partes del cuerpo, eligiendo de preferencia las zonas más sensibles: axilas, plantas de los pies, sienes, ojos, oídos, boca, encías, lengua, senos o tetillas, pene o vagina, testículos, ano, hasta en heridas abiertas.</p> <p>-Otra modalidad de tortura con electricidad que se informó a la Comisión era la llamada <i>picana eléctrica</i>, una suerte de bastón con el que se aplicaban descargas focalizadas en el cuerpo del detenido. Aunque de uso menos masivo que los métodos anteriores, también cabe referir la colocación del detenido en una bañera con agua fría, a la cual se le aplicaba electricidad.</p> <p>-Debido a los riesgos inherentes a la aplicación de electricidad como método de tortura bajo cualquiera de sus formas, los</p>

	<p>agentes de seguridad se hicieron asesorar por médicos y otros profesionales de la salud, a fin de preservar con vida al detenido. Estos colaboradores realizaban evaluaciones de la resistencia física de la víctima, antes o durante la tortura, para ir graduando la intensidad de las descargas.</p>
Amenazas	<p>-La amenaza grave es considerada un método de tortura causante de agudo sufrimiento psicológico en el detenido.</p> <p>-Se considera como tortura, las amenazas de muerte, de desaparición forzada y de aplicación de algún otro tipo de tortura (por lo general física) en la persona del detenido o en familiares cercanos. La amenaza, como método de tortura, fue ampliamente utilizada durante todo el período que comprende el mandato de la Comisión. Se recurrió al amedrentamiento para mermar la fortaleza del interrogado, bien antes o durante el interrogatorio, llegando al extremo de detener al cónyuge y a los hijos, incluidos los menores de edad, para exhibirlos al detenido mientras se le advertía que serían torturados, muertos o desaparecidos.</p> <p>Se considera como tortura, las amenazas de muerte, de desaparición forzada y de aplicación de algún otro tipo de tortura (por lo general física) en la persona del detenido o en familiares cercanos.</p> <p>-La amenaza, como método de tortura, fue ampliamente utilizada durante todo el período que comprende el mandato de la Comisión.</p> <p>-Se recurrió al amedrentamiento para mermar la fortaleza del interrogado, bien antes o durante el interrogatorio, llegando al extremo de detener al cónyuge y a los hijos, incluidos los menores de edad, para exhibirlos al detenido mientras se le advertía que serían torturados, muertos o desaparecidos.</p>
Simulacro de fusilamiento	<p>-Usualmente, el simulacro de fusilamiento iba acompañado de una puesta en escena que buscaba darle veracidad a la experiencia, impidiendo así que el detenido sospechara del carácter ficticio del procedimiento en curso. La víctima podía ser llevada desde su recinto de reclusión hasta un lugar apartado donde se le maniataba y vendaba o encapuchaba, para luego dar instrucciones al pelotón que en efecto disparaba. En algunos casos se utilizaron balas de salva, aunque en la mayoría de los casos, éstas eran reales. La diferencia consistía en que, en vez de apuntar al cuerpo, se disparaba al aire, a los costados o sobre cabeza de la víctima.</p> <p>-Como daño colateral de este método de tortura cabe mencionar lo ocurrido con las personas retenidas en sus celdas, barracones y habitaciones. Dado que sólo escuchaban los disparos, pensaban que la persona había muerto a causa del fusilamiento, impresión prolongada por la costumbre de no reintegrar de inmediato al presunto fusilado al sitio de su detención.</p> <p>-El tránsito de otros detenidos hacia el simulacro de fusilamiento inducía a los prisioneros rezagados a pensar que su turno de morir se aproximaba inexorablemente.</p>
Humillaciones y vejámenes	<p>Obligar a ingerir desechos orgánicos (excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales), además de líquidos pestilentes, etc., por vía oral o nasal.</p> <p>Arrojar excrementos e inmundicias sobre el detenido.</p>

	Obligar al detenido a besar la bota de un agente militar o policial.
	Obligar al detenido a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes.
	Obligar al detenido a pedir perdón, a renegar de sus ideas políticas, a manifestar lealtad o reconocer la superioridad de los agentes militares o policiales.
	Obligar al detenido a insultarse a sí mismo o a sus compañeros.
	Hacer correr al detenido con la vista vendada en rutas con obstáculos, para que tropiece y caiga al suelo.
	Obligar al detenido a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas.
	Insultos, groserías y burlas graves, constitutivos del delito de injuria.
	Cortar el pelo al rape del detenido y pasearlo por lugares públicos.
Desnudamiento	
Agresiones y violencia sexuales	<p>Miles de personas refirieron haber sido víctimas de agresión verbal con contenido sexual; de amenazas de violación de su persona o de familiares suyos; de coacción para desnudarse con fines de excitación sexual del agente; de simulacro de violación; de haber sido obligadas a oír o presenciar la tortura sexual de otros detenidos o de familiares; de haber sido fotografiados en posiciones obscenas, todo ello en un contexto de extrema vulnerabilidad.</p> <p>Otro número importante de personas denunciaron tocamientos; introducción de objetos en ano o vagina; violación en todas sus variantes (penetración oral, vaginal, anal); violaciones reiteradas, colectivas o sodomíticas; haber sido forzados a desarrollar actividades sexuales con otro detenido o un familiar. Se registran también casos que refieren haber sufrido la introducción de ratas, arañas u otros insectos en boca, ano o vagina. Constan testimonios de personas forzadas a tener sexo con perros especialmente adiestrados para este cometido.</p>
Presenciar torturas de otros	
Ruleta rusa	
Presenciar fusilamientos de otros detenidos	
Confinamiento en condiciones infrahumanas	<p>Confinamiento en celdas en donde se privó al detenido de todo contacto con otra persona, por un período que podía prolongarse -en algunos casos- hasta por meses, provocando afecciones psíquicas propias de la privación sensorial y social. Hay relatos de personas que fueron recluidas en celdas estrechas, sin iluminación, sin ventanas ni ningún otro sistema de ventilación y sin servicios higiénicos, forzadas por tanto a orinar y defecar en el mismo lugar, mientras se les privaba de agua y ocasionalmente, se les suministraban alimentos en estado de descomposición, si es que no se las mantenía, lisa y llanamente, en ayuno forzado.</p> <p>Confinamiento solitario en celdas de tamaño en extremo reducido, verdaderas jaulas que no permitían permanecer de pie ni sentado, obligando a la persona afectada a soportar posiciones forzadas durante el día y la noche por períodos prolongados.</p>

	<p>Confinamientos colectivos en celdas, en bodegas de barcos o en jaulas, debiendo permanecer las personas apiñadas unas sobre otras y sin lugar para hacer sus necesidades fisiológicas.</p> <p>De los primeros meses de la represión política también existen testimonios referentes a situaciones de confinamiento solitario o colectivo en celdas donde había animales e insectos, tales como roedores, arañas, baratas y otros.</p>
Privaciones deliberadas de medios de vida	
Privación o interrupción del sueño	
Asfixias	<p>Sumergir la cabeza del detenido en agua hasta provocar su inminente asfixia por falta de aire, acción repetida todas las veces que los agentes estimaban necesario. Este método ha sido llamado <i>submarino</i> o <i>submarino húmedo</i>. Su aplicación precedió, acompañó y sucedió a los interrogatorios, según fuera el parecer de los efectivos policiales o militares, y se recurría a él indistintamente como forma de <i>ablandamiento</i> preliminar o como técnica para extraer información. Una modalidad todavía más severa de asfixia consistió en colocar a la víctima en posición invertida dentro de un tambor con agua. Hay denuncias que indican que las inmersiones se efectuaban en agua mezclada con otro tipo de sustancias que agravaban el sufrimiento.</p> <p>Colocar la cabeza del detenido dentro de una bolsa plástica amarrada firmemente al cuello para impedir el ingreso de aire, provocando así la asfixia una vez que se agotaba el oxígeno. Denominado <i>submarino seco</i>, este método fue empleado, según los casos registrados por esta Comisión, fundamentalmente en el tiempo inmediatamente posterior al golpe de Estado.</p> <p>Otras denuncias de tortura con efectos de asfixia refieren el suministro de grandes cantidades de agua por vía oral o nasal hasta llenar el estómago; la asfixia se producía durante el suministro continuo o prolongado de agua o bien al momento de llenarse el estómago.</p>
Exposición a temperaturas extremas	
Violencia Sexual contra las mujeres	
La violación es un ataque contra la dignidad personal y constituye una Tortura.	Busca infligir dolores o sufrimientos para intimidar a la víctima, obtener información, denigrarla o castigarla por actos reales o supuestos atribuidos a ella o a miembros de su familia o para proporcionar satisfacción al victimario bajo condiciones de abuso y desprotección absoluta de la víctima.
Situaciones conocidas por la Comisión	Prisión y violencia sexual
	Prisión y violencia sexual de menores de edad
	Prisión y violencia sexual de mujeres embarazadas que fueron violadas durante su detención.
	Prisión de mujeres violadas que quedaron embarazadas
	Prisión de mujeres embarazadas cuyos hijos nacieron en cautiverio

Fuente: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, Santiago, Gobierno de Chile, 2004, cap. VI, pp. 226-257.

Anexo nº 11

LISTADO RECINTOS REGIÓN METROPOLITANA

1.	Academia de Guerra Aérea (AGA)
2.	Academia de Guerra del Ejército
3.	• Academia Politécnica Aeronáutica (APA)
4.	• Anexo Cárcel Capitán Yaber
5.	• Anexo Cárcel Capuchinos
6.	• Arsenales de Guerra
7.	• Base Aérea el Bosque / Escuela de Aviación Capitán Ávalos
8.	• Batallón Blindado Nº 2 / Batallón de Independencia
9.	• Bodega de Vino Quebrada Honda, Curacaví
10.	• Brigada de Homicidios de Investigaciones, General Mackenna
11.	• Campamento de Prisioneras, Pirque
12.	• Campamento de Prisioneros, Cuatro Álamos
13.	• Campamento de Prisioneros, Estadio Chile
14.	• Campamento de Prisioneros, Estadio Nacional
15.	• Campamento de Prisioneros, Tres Álamos
16.	• Cárcel Buen Pastor de Mujeres / Centro de Orientación Femenina (COF), Santiago
17.	• Cárcel de Buin
18.	• Cárcel de Colina
19.	• Cárcel de Médicos, Agustinas Nº 632 (Ex Escuela de Servicio Social Universidad de Chile)
20.	• Cárcel de Melipilla
21.	• Cárcel de Menores Blas Cañas / Centro de Reinserción Abierto Manuel Rodríguez
22.	• Cárcel de Menores, Puente Alto
23.	• Cárcel de Puente Alto
24.	• Cárcel de San Bernardo
25.	• Cárcel de San Miguel
26.	• Cárcel de Santiago
27.	• Cárcel de Santo Domingo
28.	• Cárcel de Talagante
29.	• Casa de la Cultura de Barrancas (actual Municipalidad de Pudahuel)
30.	• Comisaría de Carabineros Nº 6
31.	• Comisaría de Carabineros Nº 10, San Miguel
32.	• Comisaría de Carabineros Nº 1, Santiago
33.	• Comisaría de Carabineros Nº 11, Estación Central (actual Comisaría de Carabinero Nº 21, Estación Central)
34.	Carabineros Nº 21, Estación Central)
35.	• Comisaría de Carabineros Nº 12, San Miguel
36.	• Comisaría de Carabineros Nº 13, Los Guindos (actual Comisaría de
37.	Carabineros Nº 18, Los Guindos)
38.	• Comisaría de Carabineros Nº 14, Providencia (actual Comisaría de Carabineros Nº 19, Providencia)
39.	• Comisaría de Carabineros Nº 15, Buin
40.	• Comisaría de Carabineros Nº 16, La Reina
41.	• Comisaría de Carabineros Nº 2, Santiago
42.	• Comisaría de Carabineros Nº 20, Puente Alto
43.	• Comisaría de Carabineros Nº 21, José María Caro (actual Comisaría de

	Carabineros Nº 11, José María Caro)
44.	• Comisaría de Carabineros Nº 22, Quinta Normal
45.	• Comisaría de Carabineros Nº 23, Talagante
46.	• Comisaría de Carabineros Nº 24, Las Tranqueras (actual Comisaría de Carabineros Nº 17, Las Condes)
47.	• Comisaría de Carabineros Nº 25, Maipú
48.	• Comisaría de Carabineros Nº 26, Lo Prado (actual Comisaría de Carabineros Nº 44, Lo Prado)
49.	• Comisaría de Carabineros Nº 26, Pudahuel
50.	• Comisaría de Carabineros Nº 3, Santiago
51.	• Comisaría de Carabineros Nº 36, La Florida
52.	• Comisaría de Carabineros Nº 4, Melipilla (actual Comisaría de Carabineros Nº 24, Melipilla)
53.	• Comisaría de Carabineros Nº 4, Santiago
54.	• Comisaría de Carabineros Nº 41, La Pintana
55.	• Comisaría de Carabineros Nº 47, Los Domínicos
56.	• Comisaría de Carabineros Nº 49, Quilicura
57.	• Comisaría de Carabineros Nº 5, Recoleta (actual Comisaría de Carabineros Nº 6, Recoleta)
58.	• Comisaría de Carabineros Nº 50, San Joaquín
59.	• Comisaría de Carabineros Nº 6, San Bernardo (actual Comisaría de Carabineros Nº 14, San Bernardo)
60.	• Comisaría de Carabineros Nº 6, San Francisco (actualmente no existe)
61.	• Comisaría de Carabineros Nº 7, Renca
62.	• Comisaría de Carabineros Nº 8, Colina
63.	• Comisaría de Carabineros Nº 9, Independencia
64.	• Comisaría de Carabineros, Avenida España
65.	• Comisaría de Carabineros, calle General Mackenna ex Cuartel San Pablo
66.	• Comisaría de Carabineros, calle Gran Avenida
67.	• Comisaría de Carabineros, El Mirador, camino a Melipilla
68.	• Comisaría de Carabineros, Herrera (actualmente no existe)
69.	• Comisaría de Carabineros, Lo Espejo
70.	• Comisaría de Carabineros, Paradero 14, La Florida
71.	• Comisaría de Carabineros, Salvador Gutiérrez con Walter Martínez
72.	• Comisaría de Carabineros, Villa Macul
73.	• Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros Nº 28
74.	• Comisaría de Menores Masculina Nº 34
75.	• Comisaría de Mujeres Nº 38, Santiago
76.	• Comisaría de Radio Patrullas Nº 30, Independencia
77.	• Comisaría Judicial Nº 6
78.	• Comisaría Judicial Nº 8
79.	• Complejo Químico Militar del Ejército, Talagante / Polvorín de Talagante (actual FAMA E)
80.	• Cuartel de Investigaciones, Buin
81.	• Cuartel de Investigaciones, calle Zañartu
82.	• Cuartel de Investigaciones, José María Caro (actual Brigada de Investigación Criminal, José María Caro)
83.	• Cuartel de Investigaciones, La Cisterna (actual Brigada de Investigación Criminal, La Cisterna)
84.	• Cuartel de Investigaciones, La Florida
85.	• Cuartel de Investigaciones, Macul
86.	• Cuartel de Investigaciones, Maipú

87.	• Cuartel de Investigaciones, Ñuñoa
88.	• Cuartel de Investigaciones, Paradero 12, Gran Avenida
89.	• Cuartel de Investigaciones, Puente Alto
90.	• Cuartel de Investigaciones, Quinta Normal
91.	• Cuartel de Investigaciones, Renca
92.	• Cuartel de Investigaciones, San Bernardo
93.	• Cuartel de Investigaciones, San Miguel
94.	• Cuartel de Investigaciones, Talagante
95.	• Dirección General de Investigaciones
96.	• Escuela de Carabineros
97.	• Escuela de Paracaidismo de Colina
98.	• Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, Peldehue
99.	• Escuela de Suboficiales de Carabineros
100.	• Escuela de Suboficiales del Ejército
101.	• Escuela de Telecomunicaciones, Quinta Normal
102.	• Escuela Militar, Bernardo O'Higgins
103.	• Estadio Maestranza San Eugenio
104.	• Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE)
105.	• Hangar de Cerrillos / Grupo 10 de la Fuerza Aérea / Grupo 7 de la Fuerza Aérea, Cerrillos
106.	• Maestranza, calle Salesianos
107.	• Media Luna, Maipú
108.	• Ministerio de Defensa, subterráneo y otras dependencias
109.	• Parque Cerrillos, FISA (ocupado por Regimiento de Montaña N° 18 Guardia Vieja)
110.	• Penitenciaría de Santiago (Actualmente CDP Santiago Sur)
111.	• Polvorín del Ejército, Batuco
112.	• Prefectura Sur de Investigaciones
113.	• Recinto CNI calle Loyola N° 5.800
114.	• Recinto CNI, Avenida República N° 517
115.	• Recinto CNI, calle Rancagua con José Miguel Infante
116.	• Recinto CNI, Cuartel Central Borgoño
117.	• Recinto Comando Conjunto / DICOMCAR, calle Dieciocho (La Firma)
118.	• Recinto Comando Conjunto, Nido 18
119.	• Recinto Comando Conjunto, Nido 20
120.	• Recinto DINA, calle Belgrado N° 11
121.	• Recinto DINA, calle Irán N° 3.037 / Venda Sexy / La Discothèque
122.	• Recinto DINA, calle Venecia N° 1.722
123.	• Recinto DINA, Clínica Santa Lucía
124.	• Recinto DINA, José Domingo Cañas N° 1.367
125.	• Recinto DINA, Londres 38
126.	• Recinto DINA, Villa Grimaldi
127.	• Recinto Naval, Quinta Normal
128.	• Recinto SICAR, Subterráneo Plaza de la Constitución
129.	• Recinto SIFA Avenida Apoquindo N° 3.182 / Casa Amarilla
130.	• Regimiento de Artillería N° 1, Tacna
131.	• Regimiento de Artillería Antiaérea FACH, Colina (Remo Cero)
132.	• Regimiento de Infantería Motorizada N° 1, Buin
133.	• Regimiento de Infantería, San Bernardo, Escuela Infantería / Cuartel N° 2 Cerro Chena
134.	• Regimiento de Telecomunicaciones, Peñalolén
135.	• Regimiento Ferrocarrileros, Puente Alto (actual Regimiento de Ingenieros de

Montaña Nº 2)	
136.	• Retén de Carabineros, El Paico
137.	• Retén de Carabineros, Cerrillos
138.	• Retén de Carabineros, Cerro Blanco
139.	• Retén de Carabineros, Peñaflor
140.	• Retén de Carabineros, Pirque
141.	• Subcomisaría de Carabineros, Bernal del Mercado
142.	• Subcomisaría de Carabineros, San Cristóbal
143.	• Subcomisaría de Carabineros Eneas Gonel, Conchalí
144.	• Subcomisaría de Carabineros Vista Alegre, Cerrillos
145.	• Subcomisaría de Carabineros, Lo Lillo
146.	• Subcomisaría de Carabineros, Paine
147.	• Subcomisaría de Carabineros, San José de Maipo
148.	• Subcomisaría de Carabineros, Teniente Hernán Merino Correa
149.	• Tenencia de Carabineros Alessandri, Maipú
150.	• Tenencia de Carabineros Central Rapel
151.	• Tenencia de Carabineros Nueva España, Población San Gregorio
152.	• Tenencia de Carabineros, El Monte
153.	• Tenencia de Carabineros, La Castrina
154.	• Tenencia de Carabineros, Malloco
155.	• Tenencia de Carabineros, Roosevelt
156.	• Tenencia de Carabineros, Santa Adriana
157.	• Tenencia de Carabineros, Alhué
158.	• Tenencia de Carabineros, Cerro Navia (actual Comisaría de Carabineros Nº 45, Cerro Navia)
159.	• Tenencia de Carabineros, Curacaví
160.	• Tenencia de Carabineros, Isla de Maipo
161.	• Tenencia de Carabineros, La Victoria
162.	• Tenencia de Carabineros, María Pinto
163.	• Tenencia de Carabineros, Til Til

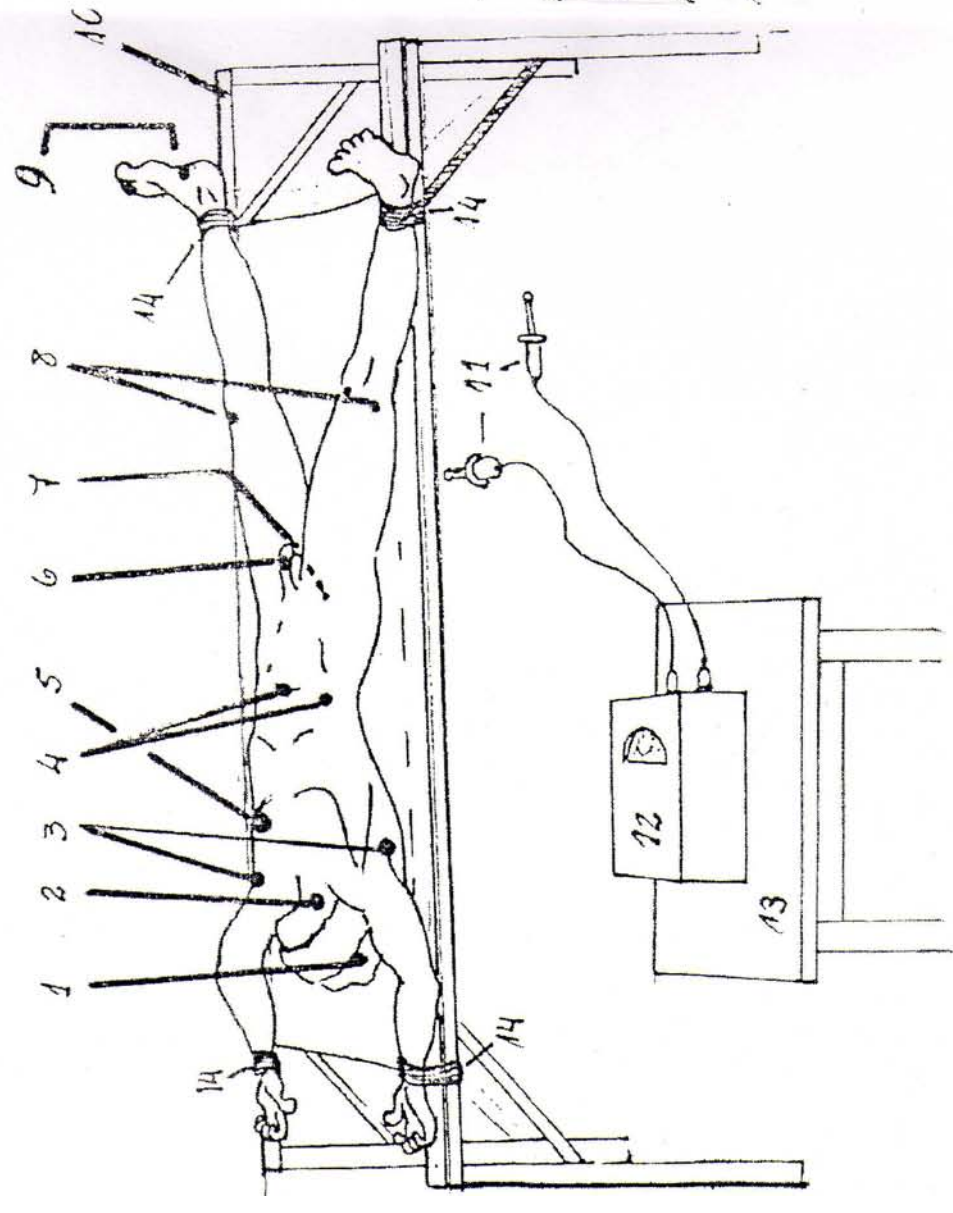
Fuente: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, *Informe Comisión Nacional sobre Política y Tortura*, Santiago, Gobierno de Chile, 2004, cap. VI, pp. 452-456.

Anexo nº 12

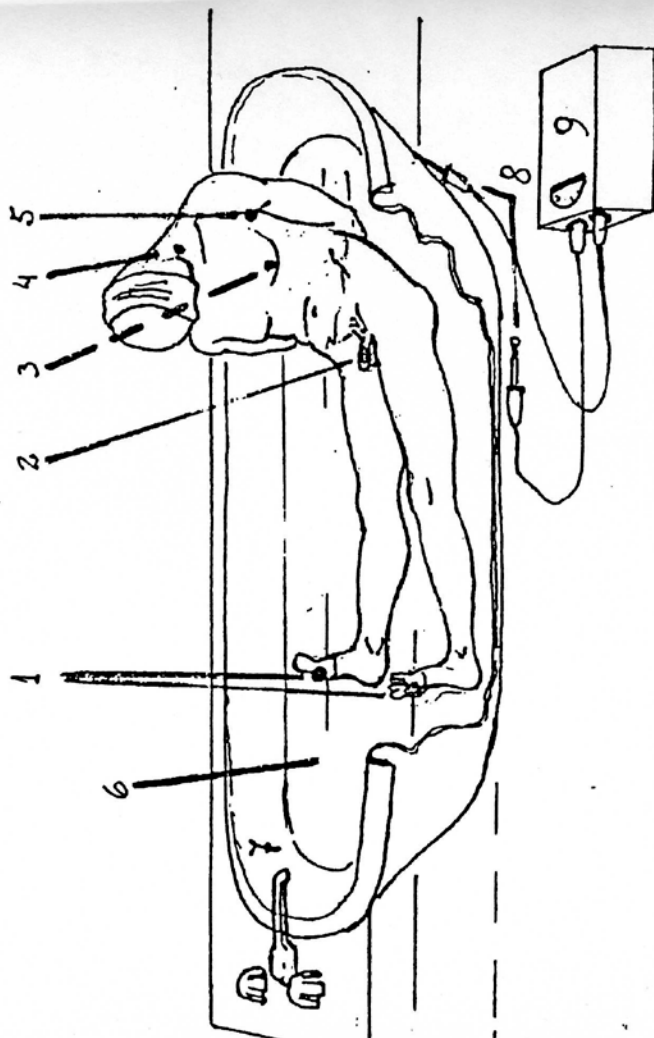
Testimonio de detención en Villa Grimaldi, en Caja nº 1 "Torturas", Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago, Mayo 1974.

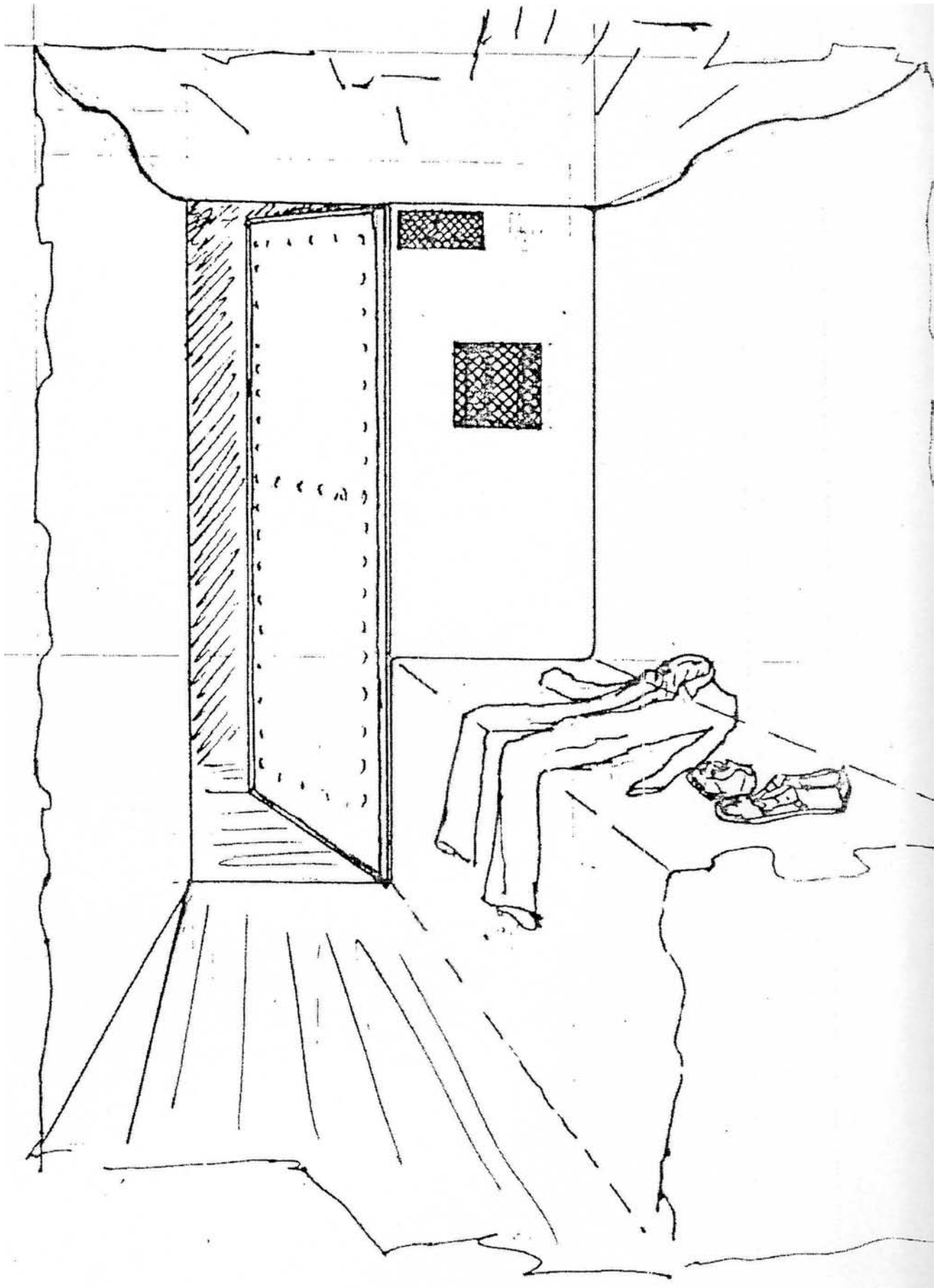


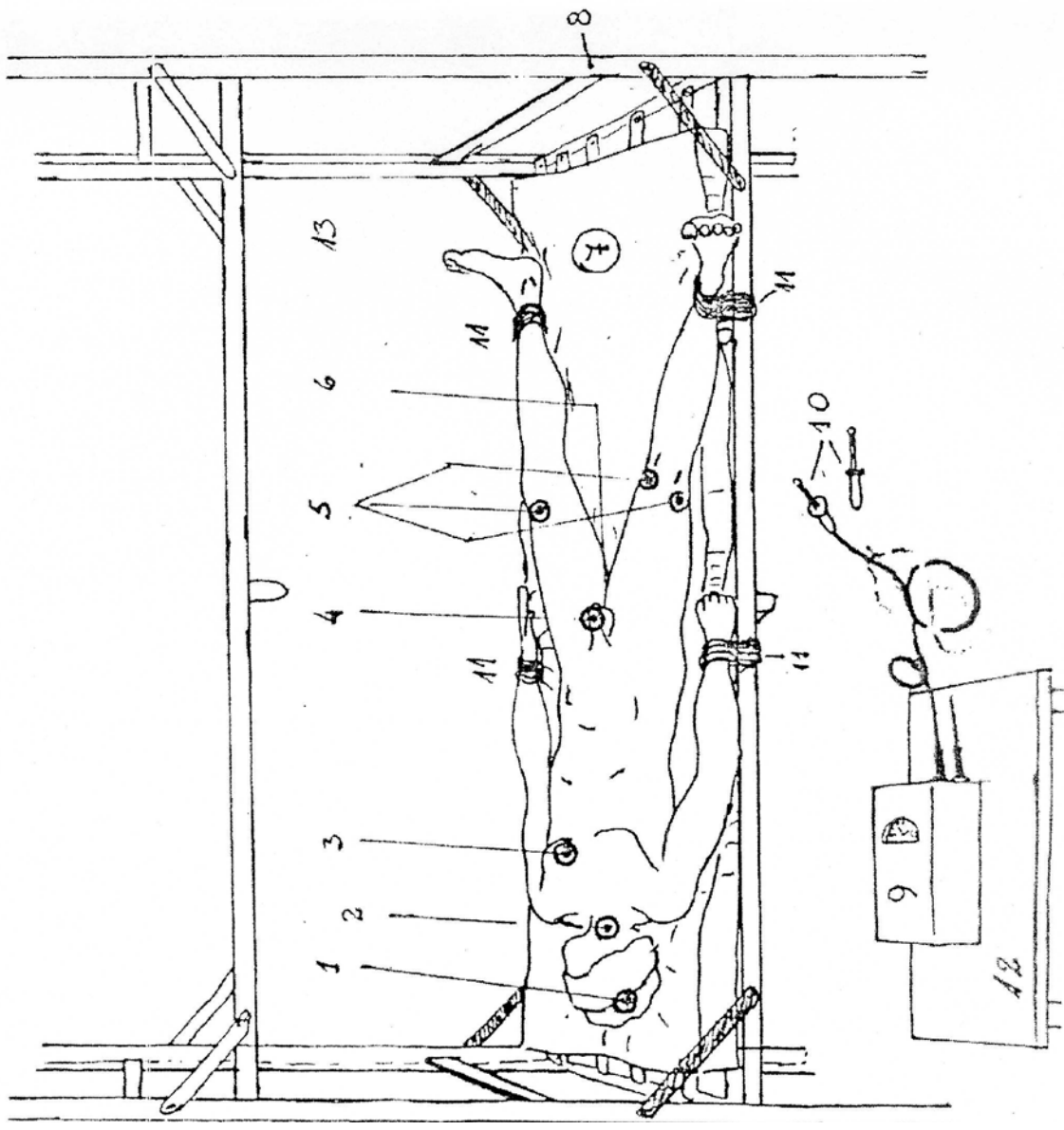
- 1 Zonas de shock : Sienes
- 2 " " Cuello
- 3 " " Axilas
- 4 " " Estómago y vientre
- 5 " " Tetilla
- 6 " " Pene
- 7 " " Ano
- 8 " " Muslos
- 9 " " Pies
- 10 Camilla de enfermería
- 11 Diodos tipo plug (terminales)
- 12 Dinamo o transformador
- 13 Mesa
- 14 Amarraz



- 1.- Zonas de shock: Pies
- 2.- Pene
- 3.- Testicula
- 4.- Cuello
- 5.- Axila
- 6.- Agua
- 7.- Tina de baño
- 8.- Diodos tipo plug (terminales)
- 9.- Dinamo o transformador

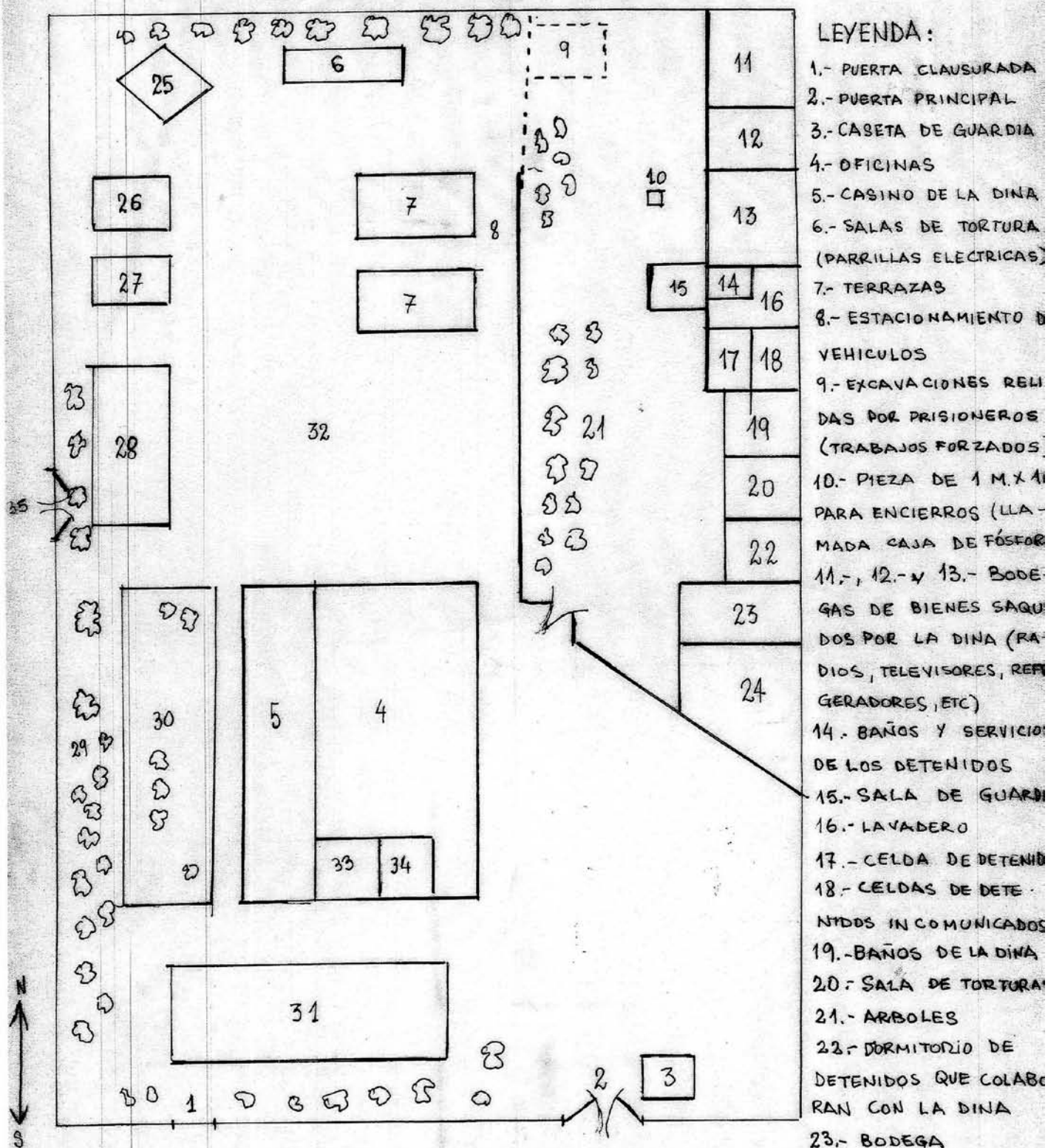






- 1 Zonas de shock : Siemas
- 2 " " Cuello
- 3 " " Tetilla
- 4 " " Pene
- 5 " " Muslos
- 6 " " Ano
- 7 Colchoneta de espuma
- 8 Litra metálica
- 9 Dínamo o transformador
- 10 diodos tipo plug (terminales)
- 11 Amarras al catre
- 12 mesa
- 13 Zona de shock : pies

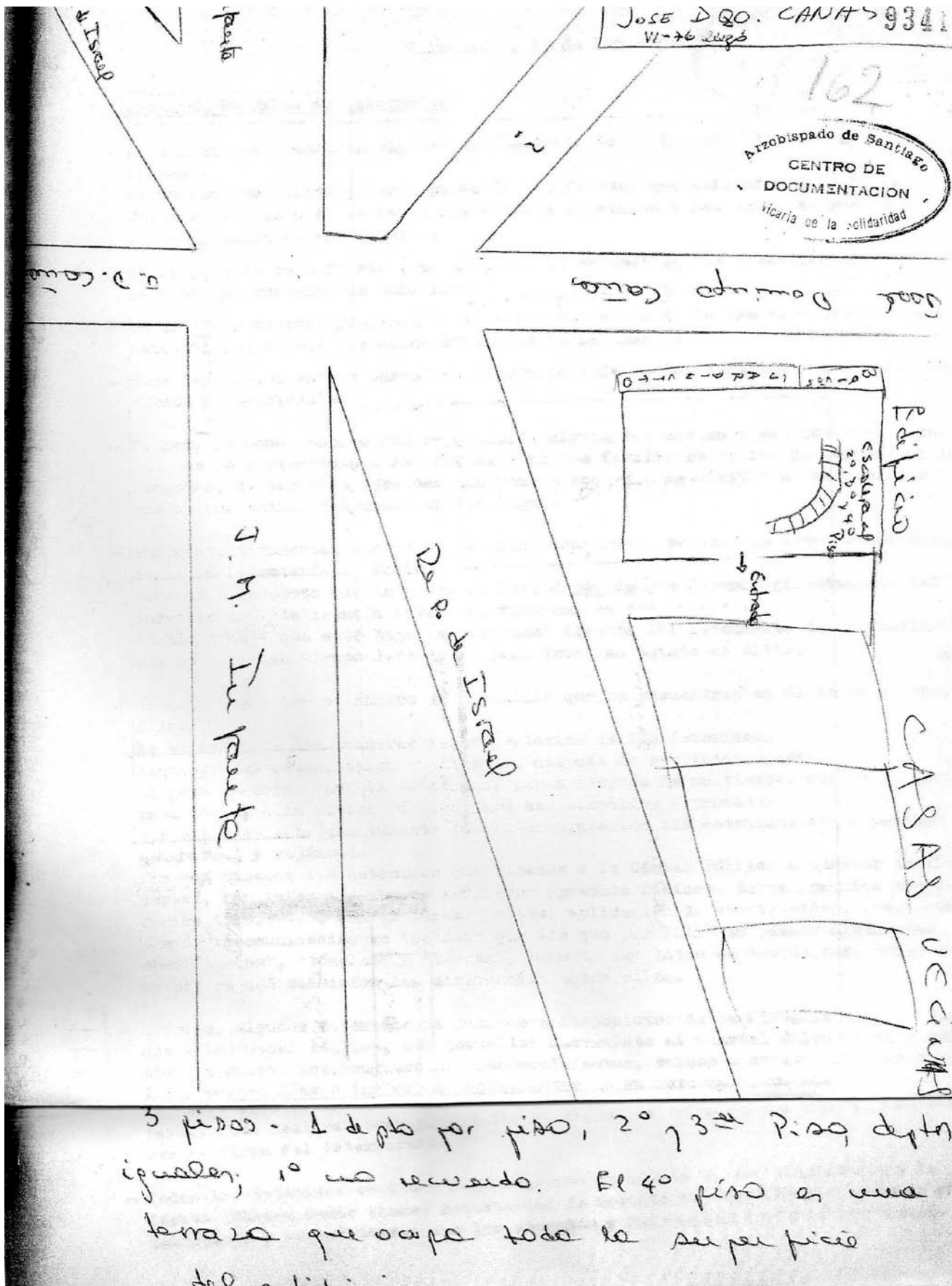
CENTRO DE TORTURAS DE LA DINA.
 AV. ARRIETA Nº 2.800, LA REINA, SANTIAGO, CHILE, 1976
 COMANDANTE ENCARGADO DE LA VILLA: MARCELO MOREN, ALIAS EL DSO



24.- CELDAS DE DETENIDOS , 25.- TORRE CON SALAS DE TORTURA (COLGAMIENTOS, INMERSION, ELECTRICIDAD.) , 26.- TALLER FOTOGRAFICO . 27.- SALA DE MAQUINA
 28.- PISCINA . 29.- ARBOLES , 30.- PRADOS , 31.- TERRAZAS , 32.- ESTACIONAMIENTO , 33.- COMEDOR DINA , 34.- BILLARES , 35.- ENTRADA LATERAL

NOTA: EL PLANO NO ESTA A ESCALA
 SUPERFICIE APROXIMADA 1.5 HECTAREAS

Fuente: Esquema del Cuartel Ollagüe, descripción de sobreviviente, en Caja nº 2 “Torturas”, Centro



Anexo nº 13

VISITA DEL JUEZ SERVANDO JORDÁN AL INMUEBLE DE LONDRES 38

Santiago, a veintidós de junio de mil novecientos setenta y nueve.-

De acuerdo con lo decretado a fs.97 vta. En el expediente por presunta desgracia de Jaime Buzio, rol N° 11.273 del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, se constituyó la Visita en el inmueble de calle Londres N° 38, a objeto de practicar una inspección personal de dicho lugar. Asisten además a la diligencia el Prefecto Raúl Poblete Cornejo, Jefe de las Unidades Especializadas del Servicio de Investigaciones; el fotógrafo del mismo servicio Claudio Marchant Salinas y el planimetrista Alejandro Pardo San Martín; concurren asimismo el jefe de la Brigada de Delitos Económicos, Juan Inostroza y tres funcionarios de esa misma Brigada.-

Se inicia la diligencia aproximadamente a las 19.00 horas.-

Veinte minutos más tarde, como no fuera posible abrir los candados que con una cadena aseguran las dos hojas del portón de entrada, para lo cual se emplean instrumentos adecuados, se procede por el Prefecto señor Poblete a cortar la cadena con un “napoleón”.-

Se penetra en el edificio.-

En la planta baja se advierte, en primer término, un hall embaldosado y, a continuación, unido con esa dependencia, un garaje con un pozo al centro, de aproximadamente un metro y medio de profundidad; en el hall de entrada se observa una cámara de alcantarillado de aproximadamente dos metros de profundidad con una tapa de madera en mal estado y marco de fierro. En el hall se encuentran recibos de contribuciones de bienes raíces, con vencimiento al 30 de junio de 1979, un aviso de la Compañía de consumidores de Gas de 21 de junio en que se lee “y no hemos podido leer su medidor de gas por estar la casa cerrada”, dos boletas o facturas de Chilectra de consumos de abril y mayo de 1979. En ambas en el rubro lectura anterior está el guarismo 0 y en blanco el rubro lectura actual; dos facturas de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) con fechas de vencimiento 26 de abril y 29 de junio del año en curso respectivamente. En la primera se indica un consumo de 0 y

un saldo anterior de \$ 13.298,13 y en la segunda 0 en consumo y un saldo anterior de \$ 14.543,09. En lo que respecta a la contribución de bienes raíces ya mencionada figura como contribuyente María Donoso viuda de Opazo con el número de rol 335-60 y con una cuota de \$ 2.526,61. En el interior del medidor de gas se encuentra una cuenta de cobranza de Chilectra por \$ 2.074,47 por consumo hasta el 26 de julio de 1974. Todos estos documentos se ordenan agregar al expediente de la Visita, junto con una copia autorizada de la presente acta.-

Se continúa examinando la planta del primer piso con linternas, por ausencia de ampolletas y luz eléctrica y se constatan la existencia de cuatro amplias dependencias prácticamente vacías, en una de ellas se examina una silla en donde se lee en la parte externa del asiento "P.C. Chile 223"; otras dos sillas que se arriman en esas dependencias carecen de todo signo distintivo. Se advierte en esas piezas, dos de las cuales miden siete metros de largo por cinco y medio de ancho, que en todos los muros y hasta una altura de cincuenta centímetros sobre el piso, que hay huellas manifiestas de apoyo sobre esos muros, los cuales se presentan en dicho sector ennegrecidos. En los muros se advierten diferentes señales de desconchaduras de pintura y yeso. En dicha planta existe un pasillo que da a la cocina y que se halla contiguo al garage en donde hay un tablero de control de luz eléctrica con 11 circuitos y la puerta que comunica el pasillo con una de las dependencias ya referidas y que da al patio interior, presentan huellas evidentes de golpes dados con pie calzado.-

En la planta del segundo piso se constatan cinco habitaciones y dos baños. Dan acceso al segundo piso dos escaleras: una contigua al hall de entrada y la otra que queda a continuación del pasadizo ya referido en el apartado anterior, ésta última es angosta y sólo permite el paso de una persona, tiene escalones de madera y baranda. En el segundo piso además se observan dos baños, uno que da a la calle Londres y el otro al costado norte de la propiedad. En el primer baño hay una tina rectangular, un bidet que se advierte casi repleto de excrementos humanos secos, sobre el piso hay botado un bidet roto y un lavatorio. Cerca del bidet instalado hay restos de excrementos humanos secos en el suelo. En el interior de la tina se ubican dos pedazos de papel de diario sucio que corresponden a la edición de "La Segunda" de 31 de octubre de 1978, se ordena agregar a la Visita una sección de ese periódico que contiene la fecha. En el segundo baño hay una tina metálica con patas solamente, también con excrementos en su interior. Todas las piezas en el marco exterior de las puertas existe un círculo rojo, confeccionado al parecer con lápiz de plumón. En el

muro de una de las dependencias se lee “NELSON” escrito con lápiz grafito y letra de imprenta, en otra que da a la calle Londres en un rincón se halla sobre el piso una camiseta de color rojo; otra de las piezas que da al patio interior tiene el piso de tablas en mal estado y en donde faltan pedazos de tabla se encuentra en la cavidad papeles sucios. En esta misma pieza se recogen tres boletos de pasajes correspondientes a buses, con fecha 28 de febrero de 1979 estampada. En la pieza que está más próxima a la escala principal de acceso y al cuarto de baño (ilegible) en primer término se aprecia en uno de sus muros desprendimiento de yeso causado por impacto con instrumento contundente.-

También en esta planta hay un tercer baño más pequeño que los anteriores, posee como sanitarios sólo la taza, el estanque del mismo se halla en el piso.-

Se examina a continuación un entrepiso que queda sobre el garaje, en este entrepiso hay dos habitaciones, es un pequeño recinto que queda debajo de la escala de madera que conduce al entrepiso. En la primera habitación próxima a la escala se observa un somier con patas de madera y malla metálica. Dicho somier está cubierto con pedazos de cartón y como varios de ellos presentan vestigios al parecer de sangre humana, se recogen para su examen en el Laboratorio de Policía Técnica.- Se recoge además unas fibras adheridas al somier, también para ser examinadas. En este cuarto que por su ubicación se halla completamente aislado se constata en el muro Sur un cable eléctrico de aproximadamente un metro de largo que se halla conectado a una caja de distribución (de) eléctrica adosada a ese muro; llama la atención dicho cable pues se halla colgando y no corresponde al resto de la instalación de esa pieza que está incorporada en (ilegible) metálicos. En el cuarto siguiente que tiene una ventana que da al garaje se encuentra en el piso un beetle a franjas colores claros y oscuros. Se ordena recogerlo y enviarlo al laboratorio para su examen.-

Sobre el segundo piso hay una gran terraza que da a la calle Londres y en esa terraza hay edificada una pieza en la línea de edificación Sur Poniente. Desde la pieza ya señalada se domina todo el sector, no solo de la calle Londres.-

Se deja constancia además que contiguo al garaje hay un pequeño recinto de baño sin la tapa del W.C. y se advierte a ras del suelo un tubo de unos quince centímetros de diámetro en donde debió estar instalada primitivamente la taza del W.C.-

En las dos hojas del portón de entrada al edificio hay sendos números 38 escritos con tiza y se repite el número escrito en la misma forma en el marco de cemento del costado Sur. La mirilla de la hoja de la puerta del costado Sur como se advierte en la fotografía de fs. 85 de la Visita tiene por el lado interno una puertecilla que encaja con esa mirilla.-

Se deja constancia por último que el prefecto Poblete manifestó que había conversado con una florista que se ubica en la vereda Oriente de la calle Londres, quien le habría manifestado que dos meses antes de la inspección llegaron dos camiones militares a limpiar el recinto de calle Londres 38.-

Se puso término a la diligencia a las 20.50 horas, después que la cadena de la puerta queda asegurada en su lugar con los candados que, con posterioridad a la entrada al edificio se lograron abrir por un funcionario de Investigaciones.-

Santiago, a veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.-

Remítanse los cartones al Laboratorio de Policía Técnica para determinar si tienen sangre humana adherida a ellos, el beatle encontrado para determinar qué sustancias tiene adheridas y la fibra, para determinar de qué sustancia se trata y el uso que se le puede dar.- Ofíciase.-

Visita del Juez Servando Jordán al Inmueble de Londres 38, en Santiago del 22 de junio de 1979. Disponible en, <http://www.londres38.cl/1934/articles-85510_recurso_1.pdf> .[Consultado en septiembre de 2011].

